

# ESTRUCTURA SOCIAL DE ARGENTINA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

# 1

Pablo Dalle (compilador)

Efectos de la doble crisis  
y recomposición social  
en disputa

ediciones  
**IMAGO  
MUNDI**

  
**IIGG**  
CONSEJO FEDERAL  
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

**AGENCIA**  
NACIONAL DE EDUCACIÓN  
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA  






# Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia

VOLUMEN 1



Pablo Dalle (compilador)

Eugenio Actis Di Pasquale, Gonzalo Assusa, Pablo Barbetti, Facundo Barrera Insua, Paula Belloni, Gabriela Benza, Paula Boniolo, Brenda Brown, Ana Capuano, Joaquín Carrascosa, Eduardo Chávez Molina, Pablo Dalle, Rodolfo Elbert, Bárbara Estévez Leston, Mariana Fernández Massi, Silvina Galetto, Marcos Gallo, Maribel Gudiño, Alicia Gutiérrez, Mariano Hermida, Bryam Herrera Jurado, Julieta López, Verónica Maceira, Héctor Mansilla, Alejandra Mascareño, Victoria Matozo, Pablo Molina Derteano, Florencia Morales, Deborah Noguera, Lourdes Paz, Albina Pol, José Pozzer, Julián Rebón, José Rodríguez de la Fuente, Ruth Sautu, Fabio Troncoso.

# Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia

VOLUMEN 1

Efectos de la doble crisis  
y recomposición social en disputa

ediciones  
**IMAGO  
MUNDI**

Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia, vol. 1:  
Efectos de la doble crisis y recomposición social en disputa. 1a ed.  
Buenos Aires: 2022

438 p.; 15.5x23 cm.

ISBN Obra general 978-950-793-409-4

ISBN Volumen 978-950-793-411-4

1. Análisis Sociológico. I. Dalle, Pablo, comp.

Fecha de catalogación: 05/10/2022

© 2022, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de  
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires

© 2022, Ediciones Imago Mundi

Diseño de tapa: Diana Cricelli

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

Los capítulos del presente libro fueron sometidos a un proceso de  
evaluación interna entre investigadores de la red.

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta,  
puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna  
ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de  
grabación o de fotocopia, sin permiso previo por escrito del editor.  
Este libro se terminó de imprimir en el mes de noviembre de 2022  
en San Carlos Impresiones, Virrey Liniers 2203, Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires, República Argentina.



*Director del Instituto*

Dr. Martín Unzué

Comité Académico 2021-2023

*Claustro de Investigadores*

TITULARES

Dr. Pablo Dalle

Dra. Ana Clara Camarotti

Dra. María Carla Rodríguez

Dr. Jorge Daniel Castro Rubel

SUPLENTES

Dra. María Gabriela D'Odorico

Dr. Ricardo Jesús Laleff Ilieff

Dra. Analía Inés Meo

Dr. Marcelo Raffin

*Claustro de Auxiliares*

TITULARES

Mg. Rosana Abrutzky

SUPLENTES

Mg. Vanina Inés Simone

*Claustro de Becarios*

TITULARES

Dr. Martín Hernán Di Marco

Lic. María Victoria Imperatore

Lic. Agustina Trajtemberg

SUPLENTES

Lic. Sebastián Lemos

Lic. Mirna Lucaccini

Lic. Luca Zaidan

Instituto de Investigaciones Gino Germani

Universidad de Buenos Aires

Pte. J. E. Uriburu 950, 6to

(C1114AAD) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

<http://www.iigg.sociales.uba.ar>

PESUP/IIGG/UBA Programa de Estudios Sobre Universidad Pública

<http://pesupiigg.sociales.uba.ar>



Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación

*Presidente del Directorio*

Lic. Fernando Peirano

# Sumario

Prólogo. <b>Atilio A. Boron</b> . . . . .	XIII
El diseño teórico-metodológico del proyecto PIRC-ESA. El análisis de la estructura social para repensar las políticas de desarrollo en Argentina. <b>Pablo Dalle</b> . . . . .	XVII
<b>Parte 1 Efectos de la pandemia desde perspectivas de clases sociales y estratificación social</b>	
<b>1 Gabriela Benza, Pablo Dalle y Verónica Maceira</b>	
Estructura de clases de Argentina (2015-2021): efectos de la doble crisis prepandemia y pandemia en el empleo, los ingresos y los gastos de los hogares . . . . .	3
1.1 Introducción . . . . .	3
1.2 Perspectiva teórica y estrategia metodológica . . . . .	5
1.3 Reconfiguraciones en la estructura de clases en la doble crisis . . . . .	9
1.4 Efectos de la crisis COVID-19 sobre las ocupaciones y las condiciones de trabajo . . . . .	14
1.5 Políticas públicas e ingresos durante la pandemia. . . . .	23
1.6 Transformaciones en los gastos de los hogares. . . . .	28
1.7 La doble crisis en las trayectorias socioocupacionales . . . . .	32
1.8 Reactivación económica y recomposición de la estructura de clases en disputa . . . . .	37
1.9 Conclusiones . . . . .	44
<b>2 Ruth Sautu y Joaquín Carrascosa</b>	
La vulnerabilidad del hogar frente a situaciones de riesgo social . . . . .	53
2.1 Introducción . . . . .	53
2.2 Vulnerabilidad económico-demográfica . . . . .	55
2.3 La construcción de una tipología económico-demográfica de vulnerabilidad del hogar. . . . .	58
2.4 Anexo. . . . .	69
<b>3 Eduardo Chávez Molina y José Rodríguez de la Fuente</b>	
Pobreza en tiempos de pandemia. Un abordaje desde la estructura de clases ocupacionales . . . . .	73
3.1 Introducción: La pobreza en el foco . . . . .	73

3.2	El enfoque de clases ocupacionales basado en la heterogeneidad estructural . . . . .	75
3.3	Metodología . . . . .	78
3.4	De la estructura de clases a las condiciones de pobreza . . . . .	80
3.5	Factores estructurales y coyunturales en la incidencia de la pobreza . . . . .	85
3.6	Comentarios finales . . . . .	91
4	<b>Pablo Dalle, Joaquín Carrascosa y Bryam Herrera Jurado</b> Desigualdad de clase acumulativa e interseccional. Nudos de reproducción intergeneracional de la pobreza y canales de ascenso social . . . . .	95
4.1	Introducción . . . . .	95
4.2	Marco teórico: clases sociales, desigualdad acumulativa e interseccional . . . . .	96
4.3	Metodología y datos utilizados . . . . .	102
4.4	Determinantes de la pobreza . . . . .	105
4.5	¿Un segmento cristalizado? Movilidad y permanencia intergeneracional en la clase obrera no calificada . . . . .	109
4.6	Desigualdad acumulativa . . . . .	113
4.7	Mecanismos de cierre: discriminación por clase social, etnicidad y género . . . . .	114
4.8	Caminos de movilidad social ascendente . . . . .	116
4.9	Conclusiones . . . . .	117
5	<b>Alicia Gutiérrez, Héctor Mansilla y Gonzalo Assusa</b> Estrategias económicas familiares durante la pandemia. Clases sociales, ingresos monetarios, finanzas y consumos . . . . .	127
5.1	Introducción . . . . .	127
5.2	Perspectiva teórico-metodológica . . . . .	129
5.3	El espacio social en Argentina . . . . .	132
5.4	Clases sociales, condiciones laborales e ingresos económicos . . . . .	139
5.5	Las estrategias económicas de los hogares y el impacto de la pandemia . . . . .	143
5.6	Reflexiones finales . . . . .	150
6	<b>Paula Boniolo y Bárbara Estévez Leston</b> Teletrabajo, cargas de cuidado y estrategias sociohabitacionales en la pandemia de COVID-19 . . . . .	157
6.1	Introducción . . . . .	157
6.2	El impacto del COVID-19 en el mundo laboral: el traspaso hacia el teletrabajo . . . . .	158
6.3	Datos y método . . . . .	161
6.4	El teletrabajo en Argentina durante la pandemia del COVID-19 . . . . .	162
6.5	Condicionantes en el traspaso a modalidades de teletrabajo en contexto de COVID-19 . . . . .	166

6.6	Los efectos del COVID en la vida cotidiana: sobrecargas de cuidado teniendo en cuenta el teletrabajo	170
6.7	Los efectos de la pandemia del COVID-19 en la ampliación y modificación de las viviendas teniendo en cuenta el teletrabajo . . . . .	174
6.8	Consideraciones finales. . . . .	178
7	<b>Julián Rebón y Fabio Troncoso</b>	
	La estructura social en la protesta durante la crisis del COVID-19 . . . . .	185
7.1	La participación en la protesta. Principales atributos . . . . .	188
7.2	La estructuración social de la protesta . . . . .	192
7.3	Reflexiones e interpretaciones . . . . .	199
8	<b>Rodolfo Elbert y Florencia Morales</b>	
	Clase social y evaluación de políticas públicas. . . . .	205
8.1	Introducción . . . . .	205
8.2	Análisis de clases sociales y evaluación de políticas públicas . . . . .	206
8.3	Estrategia metodológica . . . . .	208
8.4	Resultados . . . . .	214
8.5	Conclusiones . . . . .	220
9	<b>Julieta C. López y Mariano Hermida</b>	
	¿En qué condiciones continuó la escolarización durante la pandemia por COVID-19 en Argentina? Una mirada según clase social . . . . .	225
9.1	Introducción . . . . .	225
9.2	Población y educación, una imagen de la Argentina entre la pre y pospandemia . . . . .	227
9.3	Educación y clase social en el contexto de la pandemia . . . . .	232
9.4	Reflexiones finales . . . . .	245
10	<b>Pablo Molina Derteano y Victoria Matozo</b>	
	Impacto de la pandemia según nivel educativo ¿había resto? . . . . .	251
10.1	Introducción . . . . .	251
10.2	Metodología, objetivos e hipótesis de trabajo . . . . .	253
10.3	Desigualdades educativas: ¿cómo leerlas y qué se encuentra? . . . . .	254
10.4	Logros educativo e índice de riesgo . . . . .	259
10.5	Conclusiones . . . . .	262
<b>Parte 2 El impacto de la pandemia en el mercado de trabajo: perspectivas de género, regionales y de sectores de actividad</b>		
11	<b>Eugenio Actis Di Pasquale, Marcos Esteban Gallo y Ana Capuano</b>	
	El impacto de la doble crisis prepandemia y pandemia sobre el mercado laboral argentino . . . . .	269
11.1	Introducción . . . . .	269
11.2	El contexto macroeconómico. . . . .	271
11.3	El impacto sobre el mundo del trabajo . . . . .	278
11.4	Reflexión final . . . . .	292

12	<b>María Albina Pol, Lourdes Belén Paz y Silvina Galetto</b> Los efectos de la doble crisis en el perfil de especialización del empleo formal. Un análisis regional comparado para el período 2015-2021. . . . .	295
12.1	Introducción . . . . .	295
12.2	Evolución y composición sectorial del empleo formal . . . . .	299
12.3	Metodología . . . . .	306
12.4	Resultados . . . . .	307
12.5	Tendencias de cambio en los perfiles de especialización regional . . . . .	316
13	<b>Paula Belloni, Brenda Brown y Mariana Fernández Massi</b> Las brechas de género laborales en la Argentina durante la pandemia por COVID-19 . . . . .	327
13.1	Introducción . . . . .	327
13.2	Brechas de desigualdad laboral y crisis . . . . .	329
13.3	La doble crisis y el mercado laboral desde una mirada de género . . . . .	334
13.4	Las asimetrías sectoriales en el mercado de trabajo ante la crisis por COVID-19 . . . . .	340
13.5	Las políticas públicas en tiempos de COVID. Un análisis con perspectiva sectorial y de género . . . . .	344
13.6	Consideraciones finales. . . . .	349
14	<b>Deborah Noguera y Facundo Barrera Insua</b> Pandemia y desigualdad en el universo del empleo registrado privado en Argentina. . . . .	355
14.1	Introducción . . . . .	355
14.2	Marco analítico y estrategia metodológica . . . . .	357
14.3	La desigualdad al interior del universo del trabajo en el sector privado registrado . . . . .	361
14.4	Trayectorias diferenciales y desigualdad salarial: ¿qué hay por detrás? . . . . .	365
14.5	Comentarios finales . . . . .	367
15	<b>Alejandra Mascareño, Pablo Barbetti, Maribel Gudiño y José Pozzer</b> Efectos de la pandemia en lxs trabajadorxs asalariadxs del Norte Grande Argentino. . . . .	373
15.1	Introducción . . . . .	373
15.2	Sobre el concepto de informalidad en el trabajo y el impacto de la Pandemia por COVID en el sector . . . . .	374
15.3	El Norte Grande Argentino: rasgos estructurales . . . . .	376
15.4	La dinámica laboral del mercado laboral del NGA . . . . .	378
15.5	Impactos de la pandemia en asalariadxs registradxs y no registradxs del NGA. . . . .	383
15.6	Reflexiones finales, a modo de síntesis . . . . .	387

# Prólogo

ATILIO A. BORON

Si había un tema en el cual las ciencias sociales se hallaban en falta, era el estudio de las transformaciones experimentadas por la estructura social argentina. Aparte del trabajo pionero de Gino Germani (1955), la tesis doctoral de Ruth Sautu de 1969 y la puesta al día ensayada por Susana Torrado en 1992, el tema había sido prácticamente archivado por los sociólogos y científicos sociales en general, con unas poquísimas excepciones que bien se mencionan en el estudio introductorio de esta obra. Por eso no podemos sino dar una cordial bienvenida a este esfuerzo en donde se pasa revista a algunas de las más importantes mutaciones sufridas por la estructura social de nuestro país. El acento está puesto, por obvias y comprensibles razones, en las modificaciones que tuvieron lugar en lo que, siguiendo la feliz expresión de Frei Betto, podríamos llamar el «pobretariado» argentino, expresión pertinente, dada la creciente precarización e informalización del trabajo en este país. Tal como se explicita en las páginas introductorias de estos notables libros, el énfasis puesto por quienes tuvieron a su cargo la realización de las diversas investigaciones, se situó en los sectores más desventajados que en números crecientes atiborran la base de la pirámide económico-social, víctimas de lo que en la obra correctamente se caracterizan como procesos acumulativos – y multidimensionales – de «vulnerabilización social».

Esta acertada decisión tuvo como telón de fondo tres momentos traumáticos de la vida económica y social de la Argentina. Por una parte, la crisis económica y social previa a la eclosión de la pandemia derivada de la insustentabilidad de las numerosas políticas de promoción social instrumentadas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo en su segundo mandato, que desgraciadamente no pudieron sobrevivir, sin graves recortes, a la

restauración conservadora producida por el gobierno de Mauricio Macri entre el 2015 y el 2019. Si bien la tesis que predica el carácter «irreformable» del capitalismo es en su versión extrema errónea, lo cierto es que las reformas que se practican al interior del sistema solo pueden resistir y desbaratar el impulso restaurador si se construye una enorme acumulación de fuerza política, cosa que no sucedió. El impacto de esas políticas ortodoxas del macrismo se sintió con mucha fuerza en el vasto conglomerado popular, y la pandemia que asolara al mundo en el 2020 – el segundo momento de esta traumática transformación – no hizo sino agravar las desigualdades económico-sociales preexistentes y acrecentar, en algunos sectores sociales de manera exponencial, su vulnerabilidad ante un ambiente económico profundamente perturbado por las consecuencias del COVID-19. Esto está bien lejos de ser un fenómeno idiosincrático de la Argentina sino una tendencia global que afectó a los capitalismo metropolitanos tanto como al convulsionado mundo de la periferia. Fenómenos de vulnerabilización como los que magníficamente se retratan en esta obra se encuentran por doquier. Un informe del Banco Mundial afirma que «la crisis tuvo un impacto dramático en la pobreza y la desigualdad global. La pobreza mundial aumentó por primera vez en una generación, y las pérdidas de ingresos desproporcionadas entre las poblaciones desfavorecidas llevaron a un aumento dramático de la desigualdad dentro y entre países». <sup>[1]</sup>

La recuperación económica y la recomposición social de la pospandemia fue el tercer momento tomado en cuenta, y tuvo una serie de características que no viene al caso marcar en detalle aquí. Señalemos apenas las restricciones impuestas por la equivocada estrategia de negociación del gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional que hizo caso omiso de la ilegalidad de la decisión de ese organismo al otorgar, bajo condiciones contrarias a la propia normativa, el mayor préstamo en la historia del FMI a lo largo de su historia. Esto podría haber dado lugar a un litigio internacional en la Corte Internacional de Justicia de La Haya que habría, sin duda, aliviado enormemente el peso de la deuda sobre la economía argentina. El resultado de las políticas oficiales ha sido paradójal, con un país incapaz de salir de las arenas movedizas de la deuda externa y que pese a los moderadamente positivos índices de crecimiento económico, ha aumentado su vulnerabilidad macroeconómica externa y sobre todo – tema crucial de examen en los libros que estamos prologando – demostrado ser incapaz de promover una política efectiva de redistribución de ingresos, de combate a la pobreza y ataque a la flagrante desigualdad social en una Argentina que, como aseguran

---

[1] <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2022/brief/chapter-1-introduction-the-economic-impacts-of-the-covid-19-crisis>.

muchos analistas, se ha «latinoamericanizado» en el peor sentido de esa palabra, es decir, convertida en una sociedad más desigual, injusta e inequitativa.

La detallada radiografía que la lectora o el lector encontrará en estas páginas arroja un potente haz de luz sobre algunos de los problemas más acuciantes que plantea la regresiva reestructuración de la estructura social de la Argentina – principalmente de sus clases sociales – luego de los tres momentos antes señalados. Y lo hace desde una perspectiva «regional y de género» pero, agregaríamos, desde una que toma también en cuenta el impacto de las políticas públicas y su relativa eficacia en la vida cotidiana de los hogares pobres, la situación de la educación, las novedosas formas de la protesta popular, la creciente precarización del mercado laboral, las brechas de género en el empleo, las organizaciones de la economía popular y sus estrategias de lucha, las empresas recuperadas y una amplia variedad de temas anexos. Problemas, imperdonable sería soslayarlos, que afectan seriamente la vitalidad del sistema democrático en este país, pues a nadie se le puede escapar que la mencionada vulnerabilidad acumulativa que agobia a los estratos más empobrecidos de nuestra sociedad crea una subjetividad política signada por la apatía, el desinterés por la cosa pública y la desconfianza de todo lo que sea político. En otras palabras, esa situación de empobrecimiento, exclusión, precariedad y sentimiento de permanente inseguridad alimenta el caudal de la «antipolítica» y lleva agua para el molino de los demagogos que siendo cómplices o legitimadores de un sistema tan injusto como el capitalismo argentino se presentan, vociferantes, como supuestos transgresores o personas interesadas en modificar, a favor de los pobres, la escandalosamente injusta estructura de distribución del ingreso e, inclusive, para espanto de muchos observadores, injusta también en lo que respecta a la carga tributaria que sostiene el fisco, principalmente sobre la base de impuestos indirectos que afectan a los más pobres y eximen casi por completo al diez por ciento más rico de su contribución al Tesoro Nacional.

Las regresivas transformaciones de la estructura social argentina reflejadas con ejemplar elocuencia en esta obra, con argumentos invariablemente apoyados en rigurosos procesos de investigación sociológica, no solo constituyen un drama humano que el habitante de este país observa día tras día, sino un radical debilitamiento de nuestra vida democrática, abriendo una vía regia para la posible instauración de un régimen de derecha radical sostenido por hasta hace poco tiempo una impensable, por improbable, base de masas. El «bolsonarismo» y el «trumpismo» no están demasiado lejos de la Argentina actual. Es un tema de una enorme importancia a la vez teórica y práctica, y una amenaza que argentinas y argentinos deberíamos conjurar con la mayor contundencia posible.

Termino con una entusiasta recomendación a leer y utilizar estos libros como un arma de combate contra las desigualdades y las injusticias de todo tipo: de clase, de género, educacionales, sanitarias, habitacionales, laborales, etcétera. Sus autoras y autores participan de la saludable convicción de que si las ciencias sociales tienen algún sentido, aquellas deberían servir como instrumentos para el mejor conocimiento del mundo y para diseñar eficaces estrategias para cambiarlo. Y señalo, para concluir, que sería bueno que un estudio tan medular como este se vea acompañado, en fecha próxima, por otros que lo complementen: uno, dedicado a estudiar el amenazante proceso de pauperización de las otrora prósperas capas medias que sienten que un abismo se abre bajo sus pies y que puede inducirlos a ser víctimas indefensas de las políticas del odio y el temor; y otro, enfocado a examinar las mutaciones que tuvieron lugar en el vértice de la estructura de clases, en el núcleo donde se concentra el poder económico de la Argentina, porque también allí se produjeron modificaciones llamadas a ejercer un negativo influjo sobre nuestras vidas.

# El diseño teórico-metodológico del proyecto PIRC-ESA. El análisis de la estructura social para repensar las políticas de desarrollo en Argentina

PABLO DALLE\*

La pandemia de COVID-19 por el virus SARS-CoV-2 constituye un hecho social *holístico, global y disruptivo* que puso en cuestión dimensiones nodales de la reproducción social de los hogares: la salud, el trabajo, la educación de los/as niños/as y adolescentes, la movilidad y el trabajo doméstico y de cuidados, entre otras. Ante la falta de vacunas y medicinas paliativas y la vertiginosidad de la propagación del virus, los estados de todo el mundo, recurrieron a medidas utilizadas durante la edad media para enfrentar las pandemias: el confinamiento de los hogares en sus viviendas, las restricciones a la circulación en el espacio público y limitaciones a la sociabilidad. La irrupción de la pandemia en Argentina en marzo de 2020 implicó la puesta en vigencia de medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) para evitar el contagio masivo y amortiguar la emergencia sociosanitaria. Más allá de las medidas preventivas de restricciones a la movilidad y sociabilidad humana, el autoaislamiento por el miedo a contagiarse, en tiempos en que la propagación de casos y fallecimientos por el virus era muy elevada, actuaba de por sí restringiendo la actividad económica. Este hecho social sin precedentes para las generaciones contemporáneas iba a generar efectos adversos de gran alcance sobre la estructura social de Argentina.

---

\* Investigador del CONICET, Instituto de Investigaciones Gino Germani-UBA.

Desde el ámbito científico numerosas disciplinas buscaron producir conocimiento para contrarrestar el avance del virus y mitigar sus efectos adversos tanto en la salud como en todas las actividades humanas de carácter social, que son todas porque los seres humanos somos ante todo «seres sociales». Estos ecos de la modernidad temprana buscaron contrarrestar también las tendencias posmoderna de sobreinformación sin conocimiento y posverdad (se pretende que «todo puede ser verdad»).

Las ciencias sociales fueron interpeladas para dar cuenta de la «nueva normalidad» (Assusa y Kessler 2020). Dado su carácter de ciencias que *incomodan* – extendiendo la denominación propuesta por Bourdieu (1990) para la sociología – podían revelar los mecanismos sociales ocultos (y muchas veces reprimidos) que producen y reproducen el orden social en un contexto inédito donde los presupuestos del orden social tal como lo conocemos fueron puestos en crisis por la propagación del virus, el aislamiento preventivo y sus implicancias en la reorganización de la vida cotidiana. En el caso de nuestro proyecto, como veremos, nuestro desafío fue indagar en la profundización de desigualdades preexistentes y la emergencia de nuevas problemáticas en la estructura social.

El presente libro es el resultado del trabajo de investigación del proyecto: «Programa de Investigación Regional Comparativa: Cambios recientes en la estructura social argentina: trabajo, ingresos y desigualdad social en tiempos de pandemia y pospandemia» (PIRC-ESA).<sup>[1]</sup> Fue realizado en el marco de la Convocatoria PISAC-COVID-19 *La sociedad argentina en la postpandemia* propuesta por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), junto con la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y el Consejo de Decanas y Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas (Codesoc). Al enmarcarse en el Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina contemporánea (PISAC), la convocatoria apuntaba a continuar la indagación de desigualdades estructurales de la sociedad argentina en sus múltiples manifestaciones (Piovani 2015), fortalecer los aportes de las ciencias sociales para comprender las transformaciones que produjo la pandemia y transferir los resultados a órganos competentes en el diseño e implementación de políticas públicas.

Para su realización, se conformó una red integrada por alrededor de 130 investigadoras e investigadores de todas las regiones del país,

---

[1] El PIRC-ESA constituye una red federal de investigación compuesta por 130 investigadores de 13 Nodos de todas las regiones. Web PIRC-ESA: <http://pircesaiigg.sociales.uba.ar>. En esta página se describen las universidades, instituciones y el equipo de investigadores que la conforman.

de distintas generaciones y de distintas disciplinas: sociólogos/os, antropólogas/os, economistas, trabajadores sociales, etcétera lo cual propició un formidable espacio de intercambio, aprendizaje y una apuesta de construcción y producción colectiva de conocimiento.

Desde un comienzo el equipo de investigación partía del supuesto de que alrededor del 50 % de la población ocupada estaba en condiciones de informalidad laboral (entre asalariados no registrados en la seguridad social y trabajadores por cuenta propia). Por lo tanto, esta población enfrentaba riesgos altos de perder sus empleos o de no poder trabajar en el contexto de las restricciones a la movilidad y la sociabilidad cara a cara que implicaban el cierre de numerosas microempresas, comercios y talleres e impedía el desarrollo de oficios por cuenta propia así como de empleos autónomos de baja calificación que se desempeñan en la vía pública o dependen de la sociabilidad cara a cara y la circulación en las calles.

¿Cuál fue el telón de fondo en el que sobrevino la propagación de la pandemia? En Argentina la crisis provocada por la emergencia sociosanitaria tenía rasgos propios porque se combinó con un período de cierto estancamiento económico, con vaivenes en el ritmo de actividad y escasa expansión del empleo (2012-2015), y una crisis previa producida en el marco de cambios en el modelo de desarrollo económico orientados hacia la liberalización económica y la reinstalación de un patrón de endeudamiento externo y valorización financiera en el período inmediatamente anterior (2015-2019). Esta crisis tuvo epicentro en los años 2018 y 2019, en los cuales la caída del producto bruto fue de 2,6 % y del 2 % respectivamente, produciendo un fuerte deterioro del mercado de trabajo y los ingresos de los hogares.

Frente a este escenario, los primeros interrogantes que guiaron la construcción del proyecto de investigación de la red a mediados de 2020 fueron: ¿qué efectos está produciendo esta doble crisis en el perfil y composición de la estructura de clases? ¿Cuáles son las principales clases afectadas en sus condiciones materiales de vida? ¿Cómo afecta la doble crisis prepandemia y pandemia las dinámicas del mercado de trabajo y la distribución del ingreso? ¿Qué acciones colectivas despliegan los agentes sociales según pertenencia de clase en un marco de restricciones para enfrentar los efectos más adversos de una doble crisis de carácter acumulativo? ¿Cuáles son los sectores de actividad económica más afectados? ¿Qué reconfiguraciones en las desigualdades de clase, de género y regionales cataliza la emergencia sociosanitaria? ¿Qué estrategias despliegan los hogares para enfrentar la doble crisis? ¿Qué procesos de vulnerabilización social de mediano plazo venían produciéndose en la estructura social? ¿Cómo influye la intervención del Estado para amortiguar los efectos más adversos de la misma? Por último, una

motivación de intervención recorría nuestro proyecto: ¿cómo potenciar la creación de empleo y procesos de redistribución del ingreso que permitan mejorar las condiciones de vida de las clases populares y las clases medias? ¿Qué intersticios de oportunidad abría la crisis para repensar el desarrollo en Argentina?

Desde el comienzo consideramos que estas temáticas centrales para indagar la evolución de la desigualdad en el período 2015-2021 podían ser englobadas en un concepto más abarcativo que las contiene: «la estructura social». Esto a su vez nos permitía indagar en las relaciones entre las múltiples dimensiones de análisis con la idea de brindar un diagnóstico «holístico» sobre el impacto de la doble crisis. De este modo, el estudio postuló desde sus inicios un retorno a los estudios clásicos sobre la estructura social de Argentina (Germani 1955; Sautu 1969; Torrado 1992) bajo el desafío de realizarlo en el marco de una red nacional de carácter federal.

### Objetivos del proyecto PIRC-ESA

Desde la red PIRC-ESA nos propusimos abordar las reconfiguraciones recientes de la estructura social argentina resultantes de la doble crisis previa y durante la pandemia de COVID-19, caracterizando a las clases sociales y los grupos socioocupacionales afectados durante el período (2015-2021) desde una perspectiva comparativa regional y de género. Una de las principales metas del proyecto fue construir diagnósticos de rigor que puedan ser insumos para la elaboración de políticas públicas en la pospandemia.

La hipótesis general del proyecto postuló que la crisis sociosanitaria de la pandemia de COVID-19 y las medidas de aislamiento preventivo produjeron la emergencia de nuevas problemáticas y afectaciones específicas propias de un período excepcional más allá de grupos históricamente desventajados y, por el otro, potenciaron desigualdades en la estructura social derivadas de condicionamientos estructurales de mediano y largo plazo, profundizadas por la orientación de las políticas públicas durante el período inmediatamente anterior (2015-2019). En tal sentido, el proyecto debía indagar las particularidades de los efectos de cada crisis y a su vez procesos acumulativos de vulnerabilización social. De ese modo, el proyecto buscó integrar en nuestros análisis tres temporalidades:

- 1) la crisis económica y social previa a la pandemia;
- 2) la emergencia sociosanitaria que tuvo epicentro en 2020;
- 3) el período de recuperación económica y recomposición social iniciado durante la pandemia (2021) actualmente en curso.

La hipótesis de trabajo, asimismo, proponía un esquema de análisis que hace foco en la vinculación entre la configuración de los

procesos de desigualdad de la estructura social y la direccionalidad que asume el modelo de desarrollo económico social en distintos períodos, así como el carácter de las políticas públicas de empleo y seguridad social. Para poder dimensionar el impacto de la doble crisis y dar cuenta de esta relación recursiva entre las transformaciones en la estructura de clases y modelos de desarrollo económico de diferente direccionalidad, el estudio incorpora en varios trabajos una ventana temporal más amplia. El estudio, recupera así la tensión entre dos modelos de desarrollo económico, uno que se basa en la liberalización económica y en el predominio del sector financiero para acoplarse al mercado internacional, y el otro orientado hacia el crecimiento motorizado por el sector manufacturero apoyado en la expansión del mercado interno y la integración regional. Ambos modelos de desarrollo han tenido efectos diferenciales sobre el mercado de trabajo y la estructura de clase y, en un sentido más amplio, sobre las dinámicas de clase.

Con esta orientación general, el proyecto desplegó un conjunto de objetivos específicos:

- 1) Analizar la evolución de la estructura de clases en el período 2015-2019 poniendo el foco sobre las desigualdades entre posiciones de clase en la esfera laboral, los ingresos y el consumo de los hogares.
- 2) Analizar los efectos de la doble crisis en la estabilidad/inestabilidad laboral, las condiciones de trabajo y la continuidad/discontinuidad de ingresos laborales según clases sociales y la articulación de los hogares en programas de intervención estatal desplegados en la coyuntura de la pandemia de COVID-19 o anteriores.
- 3) Indagar las tendencias en la distribución del ingreso a nivel nacional y regional, en relación con la evolución de las posiciones de clase y grupos socioocupacionales, tomando en consideración el papel redistributivo de la intervención estatal de nivel nacional y subnacional durante el período.
- 4) Caracterizar a las posiciones de clase y los grupos socioocupacionales que fueron afectados durante el período considerando:
  - a) una perspectiva diacrónica que permita comprender no sólo su situación en la coyuntura analizada sino las condiciones de su reproducción social, estableciendo patrones de trayectorias socioocupacionales y estrategias que den cuenta de procesos de vulnerabilización en el mediano plazo;
  - b) una mirada sectorial que permita describir reestructuraciones en actividades de relevancia a nivel nacional y regional

y su impacto en el empleo, las condiciones de trabajo y los ingresos.

- 5) Analizar la dinámica de tres sectores estratégicos: i. Economía popular, cooperativa y solidaria, ii. Construcción y logística y iii. Universidad / sistema científico-tecnológico vinculados a tres pisos o niveles en la estructura de clases que podrían traccionar la creación de empleo calificado y registrado, donde podría promoverse la intervención estatal.
  - a) reconstruir a través de actores claves un diagnóstico del impacto de la doble crisis las condiciones de trabajo en el sector y las estrategias para un proceso de reconfiguración del entramado productivo y ocupacional que puedan expandir canales de incorporación y movilidad social ascendente de amplios sectores de la fuerza de trabajo;
  - b) las experiencias laborales, de organización para sostener el trabajo y reproducir las condiciones materiales de vida de trabajadoras y trabajadores de estos sectores durante la pandemia.

### **Propósito de transferencia**

Si bien desde la red de investigación PIRC-ESA consideramos que no somos especialistas en la elaboración de políticas públicas, las investigaciones reunidas en el presente libro constituyen un diagnóstico de las transformaciones recientes en la estructura de clases, el mercado de trabajo y la distribución del ingreso que pueden servir de insumo para la elaboración de políticas de desarrollo económico-social de carácter federal en la pospandemia. El análisis de los tres sectores permitió determinar intersticios de oportunidad donde promover la intervención estatal y favorecer la expansión de empleo de mayor calificación, en condiciones de formalidad y otras vías de integración a la seguridad social de trabajos no reconocidos hasta el momento a través de experiencias de organización cooperativa.

### **Perspectiva teórica general**

El análisis de los procesos de desigualdad en la estructura social se asienta en las teorías sobre el análisis de clases sociales. Los principales enfoques teóricos contemporáneos coinciden en que las clases sociales definen condiciones materiales de existencia y oportunidades de vida similares según el control/exclusión de recursos estratégicos de propiedad de capital, autoridad y calificaciones que definen la posición en relaciones de explotación, dominación y cierre social. Sobre esta plataforma estructural se cimientan experiencias de vida comunes, cierta sociabilidad compartida, la construcción de

una identidad cultural, estilos de vida similares y procesos de organización y acción colectiva (Bourdieu 1986; Germani 1955; Goldthorpe 2012; Hout 2008; Savage 2015; Wright 1979, 2018). Estas perspectivas fueron trabajadas en relación a los aportes de la tradición teórica latinoamericana sobre la relación entre modelos de desarrollo económicos y sus efectos sobre la estructura de clases (Germani 1955, 1963, 2010; Sautu 1969; Torrado 1992) en la cual, ocupan un lugar destacado las indagaciones sobre el carácter de clase de la marginalidad y el empleo informal en formaciones sociales capitalistas periféricas, subdesarrolladas y dependientes (Germani 1980; Nun 1969; Nun *et al.* 1968).

El proyecto PIRC-ESA partía del supuesto de que la clase social es un mecanismo explicativo primordial en la estructuración de la desigualdad de condiciones de vida y de oportunidades (vinculadas con la transmisión intergeneracional de desigualdades) porque genera la acumulación de ventajas y desventajas de recursos económicos, capital cultural, capital social, infraestructura, de acceso a tecnologías, que en el marco de una emergencia sociosanitaria implica una desigual exposición a los riesgos de enfermedad, perder el empleo, los ingresos o impactos sobre las condiciones de trabajo y educativas, entre otras.

El proyecto buscó avanzar en la articulación de la desigualdad de clase con otros clivajes como el género, las diferencias regionales y el origen étnico generando una desigualdad cuantitativamente mayor y cualitativamente diferente porque define una subalternidad de raíces combinadas y más profundas. Si bien hemos iniciado este camino como red y en los trabajos de investigación se pueden observar pautas empíricas que reflejan la profundización de desigualdades históricas y la acumulación de desigualdades, queda mucho recorrido por hacer para avanzar en un programa de investigación que parta de la interseccionalidad como premisa teórica.

El proyecto PIRC-ESA incorporaba a su vez la consideración de sectores de actividad económica y el ámbito socioproductivo, dado que el impacto en el mundo laboral de la crisis desatada por la combinación del deterioro económico previo, la pandemia y las medidas de aislamiento, difieren según ramas de actividad así como por sector formal, informal y en este último por la presencia o no de organizaciones de economía popular, cooperativa y solidaria. Luego, de analizar la dinámica de empleo y de ingresos por rama de actividad económica, nos concentramos en el análisis de los tres sectores estratégicos arriba mencionados.

En este apartado se describieron los supuestos teóricos centrales que sustentaron el proyecto en su conjunto, cabe señalar que los capítulos del libro contienen teoría general y sustantiva referida al tema específico que se aborda en cada uno de ellos.

## Diseño metodológico

El estudio despliega una estrategia metodológica multimétodo que consiste en la utilización articulada de métodos y técnicas cuantitativas y cualitativas en una secuencia no lineal (Patton 2002; Sautu 2019). Para analizar la evolución de la estructura de clase, el mercado de trabajo y la distribución del ingreso, identificando y caracterizando los grupos afectados según sectores de actividad económica durante el período 2015-2021 se analizaron dos fuentes estadísticas secundarias: la Encuesta Permanente de Hogares y el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) proveniente de Registros Administrativos de la Seguridad Social aportados por la Dirección General de Estudios y Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS).

El análisis de la EPH permite obtener una dinámica de conjunto del empleo de la Argentina urbana. La ventaja específica de incorporar la información proveniente del SIPA es que se trata de un registro con cobertura nacional de todo el empleo registrado (tanto dependiente – asalariados – como independiente (cuentapropistas y empleadores), permitiendo mayor desagregación sectorial y territorial. La información del SIPA está acotada al universo de la economía formal quedando fuera de su alcance el conjunto de trabajadores no registrados o informales, cuya evolución fue analizada desde la EPH.

En una publicación colectiva reciente de la red *La evolución del empleo en Argentina en la doble crisis prepandemia y pandemia. Un análisis intra e interregional (2011-2020)* (Actis Di Pasquale y Dalle 2022) se analiza la evolución de las tasas básicas del mercado de trabajo, de las categorías ocupacionales y los ingresos según tres ejes analíticos:

- 1) regiones;
- 2) sectores y ramas de actividad;
- 3) género.

Asimismo y como parte de la columna vertebral del proyecto se diseñó la encuesta nacional sobre la estructura social de Argentina y políticas públicas durante la pandemia por COVID-19 (ESAyPP/PISAC-Covid-19). La encuesta fue elaborada y coordinada por dos Proyectos PISAC-COVID-19: 021 (dirigido por Mercedes Di Virgilio) y 085 (dirigido por Pablo Dalle) con la participación de investigadoras e investigadores de todos los nodos de ambos proyectos. El diseño de la muestra<sup>[2]</sup> fue de carácter probabilístico con tres dominios de estimación: la Argentina urbana (aglomerados de

---

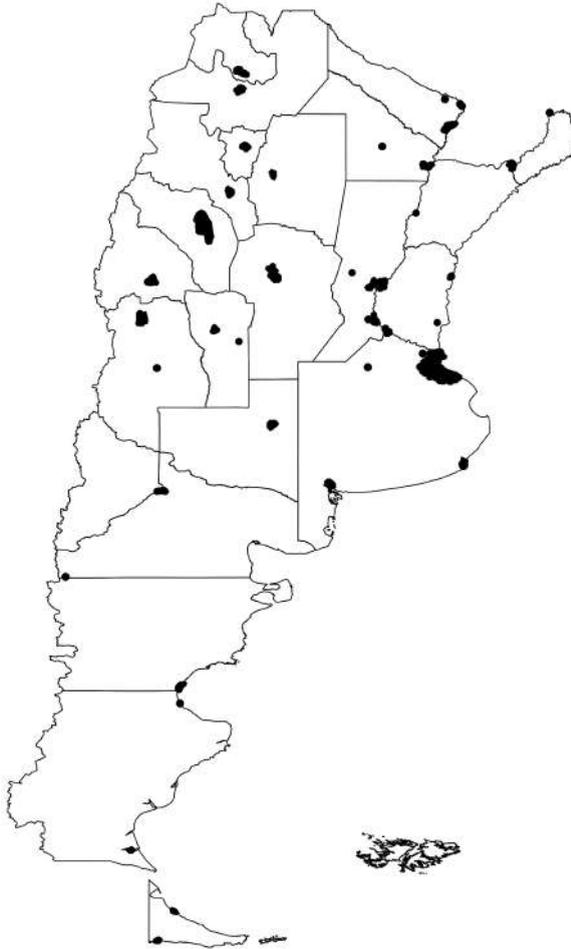
[2] El diseño de la muestra y la realización del trabajo de campo fue realizado por la Fundación de Educación Superior-MFG, una consultora especializada en la investigación social aplicada, dirigida por Isidro Adúriz.

más de 50.000 habitantes), por regiones y tamaño de aglomerados. El trabajo de campo se realizó entre octubre y diciembre de 2021 siendo la muestra final de 5239 casos.

El diseño de la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 presenta las siguientes potencialidades para estudiar los efectos de la pandemia (véase [Dalle y Di Virgilio 2022](#)). En primer lugar, se trata de una herramienta de trabajo que tiene mayor especificidad para indagar los efectos de la emergencia sociosanitaria que las fuentes estadísticas secundarias. Se construyeron indicadores específicos para medir el impacto de la pandemia en varias dimensiones de la vida social: la salud, la educación, las condiciones de reproducción de los hogares, el empleo, los ingresos, la movilidad social intra e intergeneracional, el trabajo doméstico y de cuidado, la identidad de clase y la participación en acciones colectivas de protesta y la evaluación de políticas públicas, entre otras. Estas temáticas se analizaron desde las siguientes claves analíticas: las clases sociales, las regiones, el hábitat socioresidencial, el género y el efecto de las políticas públicas para mitigar los efectos adversos de la pandemia. En relación con estos ejes teóricos nodales de la encuesta, a partir del acervo de investigación de nuestra red se seleccionaron indicadores muy utilizados en los principales campos de investigación, que pueden ser utilizados desde distintos marcos teóricos a partir de la propia jerarquización y articulación de cada investigador. La encuesta condensa un amplio abanico de indicadores que, al estar reunidos en un mismo instrumento, permiten avanzar en el análisis de *patrones de asociación* y *factores causales*, a través de modelos estadísticos multivariados que permiten contrastar hipótesis de trabajo en el campo.

Segundo, la ESAyPP/PISAC-COVID-19 tiene una amplia cobertura cuyo eje central permitió desarrollar una perspectiva comparativa inter-regional. El diseño de la muestra planificó un número muy amplio de casos repartidos en puntos muestra en todas las provincias del país y varios puntos muestra por región (incluso más que los que cubre la EPH), elementos centrales para abarcar la heterogeneidad de la estructura social de Argentina (véase figura 1). Si bien la aplicación de una encuesta propia a una muestra probabilística de gran escala es muy costosa, la decisión del PIRC-ESA de utilizar este método se fundamentó en que se trata de una fuente idónea para una correcta medición de la magnitud del impacto de la pandemia en la estructura social y el acceso de los hogares a las políticas públicas de prevención y mitigación de daños, así como su utilidad simultánea para dos proyectos de gran alcance.

Tercero y último, por su diseño la ESAyPP/PISAC-COVID-19 permite una complementación y comparación con otras fuentes del Sistema Estadístico Nacional y la ENES-PISAC (2014/5), a la vez que



**Figura 1.** Mapa de las localidades relevadas. Encuesta ESyPP/PISAC-COVID-19. 2021. Fuente: elaborado por Bárbara Estévez Leston y Pablo Dalle.

habilita investigar el impacto de un hecho social holístico y de inflexión que puso en cuestión dimensiones nodales de la reproducción de los hogares como fue la pandemia de COVID-19. En relación a la ENES-PISAC, cuyos aspectos centrales del diseño fueron considerados como antecedentes (Hoszowski y Piovani 2018; Maceira 2015), brinda la posibilidad de analizar cambios y continuidades en las condiciones de reproducción social de los hogares en relación con cambios contextuales macroeconómicos y en la orientación de políticas públicas en el período 2015-2021.

Para dar cuenta de en qué medida la muestra probabilística obtenida es representativa del universo: la población de la Argentina urbana, comparamos la distribución de las principales variables sociodemográficas y socioeconómicas entre la ESAyPP/PISAC-COVID-19 y la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondiente al cuarto trimestre de 2021, que al tener mayor cantidad de casos, permite mayor precisión en la estimación de parámetros poblacionales (véase cuadro 1).

**Cuadro 1. Distribución de las principales variables sociodemográficas en la encuesta nacional ESAyPP/PISAC-COVID-19 y la EPH. Argentina urbana, 2021.**

Variable	Fuente	
	ESAyPP/PISAC-COVID-19	EPH
<b>Sexo</b>		
Varón	47,2	48,6
Mujer	52,8	51,4
<b>Grupo de edad</b>		
18 a 29	28,3	25,2
30 a 39	20,2	19,0
40 a 49	16,4	18,9
50 a 59	13,7	14,2
60 a 74	14,4	16,2
75 y más	7,0	6,5
<b>Nivel educativo</b>		
Hasta primario incompleto	4,4	5,4
Primario completo	35,5	31,7
Secundario completo	41,2	42,8
Superior completo	18,9	20,1
<b>Tasas básicas del mercado de trabajo</b>		
Tasa de actividad	65,4	64,6
Tasa de ocupación	59,4	60,1
Tasa de desocupación	9,3	6,9
Tasa de subocupación	14,4	12,8
<b>Tasas de pobreza</b>		
Pobreza_Población total	41,9	35,8
Pobreza_Población mayor de 18 años	29,1	29,7
Pobreza_Hogares	29,3	26,4

Fuente: elaborado por Pablo Dalle y José Rodríguez de la Fuente en base a la encuesta nacional ESAyPP/PISAC-COVID-19 y la Encuesta Permanente de Hogares (Cuarto trimestre de 2021).

Los resultados reflejan que el perfil obtenido en la muestra de la ESAyPP/PISAC-COVID-19 tiene una composición por sexo similar a la EPH, apenas más feminizada; respecto de la edad, una proporción levemente mayor de jóvenes de 18 a 29 años y, en relación al nivel educativo, una proporción un poco mayor en el nivel primario completo. En el análisis de las tasas básicas del mercado de trabajo y de pobreza encontramos también pautas similares: con una pequeña sobrerrepresentación de la desocupación, la pobreza de la población total y por hogares, mientras que el porcentaje de pobreza de personas mayores de 18 años es prácticamente igual. Estos resultados le otorgan fortaleza a la encuesta. Desde una perspectiva de conjunto, consideramos que el perfil sociodemográfico y socioeconómico que permite trazar la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 de la Argentina urbana no difiere sustancialmente de la EPH y, por lo tanto, puede ser utilizada como una fuente complementaria a la misma.

Para profundizar en los efectos de la pandemia en determinados sectores de actividad vinculados a tres segmentos de clase social se realizaron entrevistas semiestructuradas a trabajadoras/es e informantes clave (representantes sindicales, de movimientos sociales, directivos de empresas o cámaras empresariales, funcionarios del Estado) de tres sectores estratégicos:

- 1) el complejo de educación superior y sistema científico-tecnológico;
- 2) la construcción y logística;
- 3) economía popular, social y solidaria.

En el tomo 2 describimos con mayor detalle esta parte de la investigación basada en una metodología cualitativa.

Un punto central a destacar de la estrategia metodológica, es que tanto los instrumentos de producción de evidencia empírica como los análisis fueron trabajados por todas las nodos complementando miradas, perspectivas teóricas, formas de trabajo con los datos, otorgándole al proyecto y a la publicación un carácter federal. El diseño de la encuesta y de las guías de entrevista así como el trabajo de armonización de las fuentes estadísticas secundarias se realizó durante los meses más arduos de la pandemia de ASPO y DISPO, de contagios masivos, angustias por la salud de nuestras familias y en contextos de reorganización de los hogares como ámbitos de trabajo entremezclados con múltiples tareas cotidianas de reproducción de la vida. El cumplimiento de nuestra hoja de ruta inicial en este contexto adverso fue un gran logro colectivo de la red PIRC-ESA.

## Presentación del libro y su estructura

Este libro que sintetiza los principales hallazgos de la investigación desarrollada colectivamente y colaborativamente entre nodos, consta de dos volúmenes: el tomo 1 se denomina: *Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia. Efectos de la doble crisis y recomposición social en disputa* y el tomo 2: *Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia. Respuestas estatales, experiencias de trabajadoras/es y estrategias colectivas de resistencia en tres sectores estratégicos*. La estructura y descripción de capítulos del tomo 2 se realiza en la introducción al mismo.

El libro constituye un rompecabezas de dos caras: de un lado permite reconstruir una fotografía de la estructura social de Argentina a la salida de la pandemia de COVID-19 dimensionando los efectos estructurales de dos crisis consecutivas y acumulativas, y del otro, un registro de las experiencias de organización de trabajadoras y trabajadores para dar respuesta a los efectos negativos de la pandemia. Ambas son caras de una misma moneda, la praxis humana, porque las y los trabajadores no vivieron este acontecimiento traumático de manera pasiva, sino que doblegaron sus esfuerzos en el marco de sus oportunidades de vida para trabajar, sostener sus ingresos y cuidar a sus familias en circunstancias adversas.

Cada capítulo puede leerse en forma independiente, en cada uno es posible identificar la articulación de tres componentes centrales del diseño en toda investigación: marco teórico, objetivos y metodología, y los resultados pueden leerse en la clave de los objetivos de cada estudio. Sin embargo, juntos conforman una unidad mayor, porque las pautas estadísticas y regularidades empíricas del tomo 1 adquieren mayor significación cuando se corporizan en las vivencias de las trabajadoras y trabajadores durante los momentos más arduos de la pandemia en el tomo 2. Asimismo, se trata de una compilación en la cual el recorrido de lecturas por las secciones es un itinerario variable según las preferencias del lector. El orden aquí dado corresponde a la clave de lectura propuesta como compilador: yendo desde la estructura hacia el papel de sectores estratégicas en la búsqueda de recomposición social y de la agencia colectiva como forma de alcanzarla. La apuesta del libro es mostrar el *collage* de investigaciones que combinan el análisis de patrones estructurales, sus continuidades e inflexiones pero también capacidad de resiliencia, organización colectiva, canalización institucional de demandas y acciones directas de los agentes sociales en respuesta a la situación inédita de emergencia sociosanitaria y que, en conjunto, constituyen un registro del impacto profundo y desigual de la pandemia en la sociedad argentina.

## Organización del tomo 1 y descripción de los capítulos

El tomo 1 está organizado en dos partes. En la primera, se analizan problemáticas clásicas y emergentes durante la pandemia desde una perspectiva de clases sociales y otros «clivajes» de estratificación social. La segunda analiza la evolución del mercado de trabajo, los ingresos y la dinámica de sectores y ramas de actividad económica incorporando una perspectiva de análisis interregional y de género.

En el capítulo 1 Benza, Maceira y Dalle reconstruyen una evolución de mediano plazo de la estructura de clase (2003-2021) poniendo el foco sobre el impacto de la doble crisis (2015-2020) en las desigualdades entre posiciones de clase en la esfera laboral, los ingresos y el consumo de los hogares. El artículo muestra que durante la primera crisis enmarcada en políticas macroeconómicas que produjeron desindustrialización, el epicentro de las reconfiguraciones regresivas fue la disminución de la clase trabajadora formal, en particular del segmento de asalariados de la producción y circulación que constituyeron tradicionalmente el núcleo de la clase obrera, y el crecimiento de segmentos de clase de autónomos precarizados en las clases medias bajas y la clase trabajadora informal. En cambio, durante la crisis de la pandemia los segmentos de clase más afectados fueron la clase trabajadora informal y la pequeña burguesía con escaso capital, vinculada a las clases medias bajas. La política laboral y social del Estado se desplegó a lo largo de toda la estructura social pero tuvo un impacto más efectivo en la clase trabajadora formal, donde la retención del empleo fue muy elevada en términos comparativos a nivel internacional. Como resultado de ambas crisis hubo una pérdida absoluta en el bienestar material de los hogares más acentuada en el centro y la parte inferior de la estructura de clases por lo que al mismo tiempo implicó una polarización de los ingresos y el consumo de los hogares. La recuperación económica en curso desde fines de 2020 en el marco de políticas más orientadas hacia el sector industrial implicó que la clase trabajadora formal y los segmentos asalariados de las clases medias volvieran a recuperar dinamismo, sobre todo el núcleo de la clase obrera, sin embargo, las mejoras de ingresos fueron pequeñas hasta fines de 2021 evidenciando que se trata de una recomposición social en disputa con el capital concentrado.

Sautu y Carrascosa recuperan el concepto de vulnerabilidad entendido como exposición a contingencias en situaciones de falta de medios para hacerles frente y proponen analizar sus causas que provienen de la constitución económico-demográfica de los hogares: tamaño, estructura de edad de sus miembros y sostén económico. Los autores distinguen vulnerabilidad de la pobreza, esta última es la mayor causa de vulnerabilidad de los hogares porque los lleva a

afrontar la interacción de riesgos de diverso origen con una capacidad de respuesta y adaptación a la situación muy limitadas; pero en una situación inédita de alto riesgo como la pandemia, la vulnerabilidad puede afectar también a amplios sectores medios. Asimismo, al no igualar la pobreza con la vulnerabilidad social, se evita caer en estereotipos que consideran a los pobres como una masa indiferenciada con escasa o nula capacidad de agencia. Por el contrario, como se puede observar en capítulos del segundo tomo del libro en sectores organizados de las clases populares hubo una canalización más efectiva de recursos que posibilitaron una mejor resolución de contingencias de la pandemia que en sectores informales dispersos de clases medias y clases populares. El estudio propone una tipología económico-demográfica de vulnerabilidad de los hogares que es usada como variable independiente para indagar su incidencia en el impacto de la pandemia en condiciones laborales y los ingresos de los hogares. Los resultados muestran que los sectores más vulnerables tuvieron una alta asociación con ingresos que no alcanzaron a llegar a fin de mes y mayores salidas de la ocupación por despidos o imposibilidad de realizar empleos cuenta propia. Hacia el final, el capítulo discute en el nivel macrosocial la relación entre la tasa de dependencia económica y el desarrollo económico-tecnológico (capítulo 2).

En el capítulo 3 Chávez Molina y Rodríguez de la Fuente reconstruyen la evolución reciente de la pobreza en el marco de la doble crisis económica y analizan sus causas y diferenciaciones según posiciones de clase ancladas en la perspectiva de la estructura productiva de Argentina y otros ejes de estratificación social como el género, grupos de edad y la región de residencia. El análisis incorpora una perspectiva temporal incluyendo los efectos de variables sobre cambios recientes en la situación ocupacional y los ingresos de los hogares en el contexto de pandemia así como políticas de transferencia de ingresos del Estado. Entre los hallazgos se destaca que las clases con mayor propensión a la pobreza son los trabajadores cuenta propia no calificados, los trabajadores manuales de pequeños y grandes establecimientos y los patrones de pequeños establecimientos. También es mayor la probabilidad de experimentar pobreza entre las mujeres, los jóvenes y los residentes en regiones históricamente más postergadas GBA, NEA y NOA incluyendo también a Cuyo. Se destaca que la inserción informal, desprotegida de mecanismos de seguridad laboral, y la desocupación reciente (durante 2020-2021), incrementan considerablemente las chances de transitar una situación de pobreza.

El capítulo 4 de Dalle, Carrascosa y Herrera Jurado analiza los factores causales que llevan a la reproducción intergeneracional de la pobreza en Argentina partiendo de un enfoque teórico relacional de

clases sociales que conceptualiza a la desigualdad como interseccional y acumulativa. Los resultados muestran un mayor peso de la clase social con respecto del origen étnico y del género en la propensión de pertenecer a hogares en situación de pobreza. Sin embargo, los grupos subalternizados (mujeres, descendientes de pueblos originarios y mestizos) tienen una asociación neta significativa con la pobreza. Asimismo, la interacción entre género y origen étnico mostró que las mujeres de pueblos originarios y mestizas tienen mayores probabilidades de experimentar pobreza y de reproducción intergeneracional en la clase trabajadora no calificada sugiriendo que la interseccionalidad genera mecanismos específicos y más profundos de desigualdad anclados en el patriarcado y la racialización de relaciones de clase. El análisis mostró una marcada desigualdad acumulativa entre clases que, para la clase trabajadora no calificada, implica un cúmulo de desventajas que tienden a arrastrarse intergeneracionalmente: mayores tasas de abandono escolar, ingreso más temprano al mercado de trabajo, inserción en empleos precarios, informales e inestables, continuidad en la informalidad en la adultez, hogares con mayores tasas de dependencia, incrementando la propensión hacia la pobreza. ¿Cómo romper este círculo de reproducción intergeneracional en la clase trabajadora no calificada y precarizada en condiciones de pobreza? El desarrollo de oficios y la titulación técnica actúan como «puentes» de acceso hacia ocupaciones obreras calificadas y técnicas en el sector formal. Las pautas halladas permiten pensar políticas públicas orientadas a la movilidad social ascendente desde las clases populares.

El capítulo 5 de Gutiérrez, Mansilla y Assusa analiza la desigualdad, persistencia y transformación de las estrategias económicas: de inserción laboral, financieras, de provisión y consumo en el espacio social desde una perspectiva teórico-metodológica bourdesiana de clases sociales. Esta perspectiva pone el acento en la multidimensionalidad de la distribución del poder en la estructura social, en su abordaje relacional y en los efectos estructurales sobre estrategias familiares de vida como núcleo de indagación, en este caso centrado en las estrategias económicas. Los resultados indican que la pandemia no catalizó una transformación radical en las prácticas de provisión y consumo de los hogares del espacio social argentino, sino que tendió a acelerar desigualdades perennes. El análisis de las inserciones laborales y de los espacios de provisión (compras por internet, supermercados, comercios de cercanía o ferias populares) según clases sociales y, en consecuencia, el acceso a modos de pago y formatos crediticios, no se vio afectada en profundidad por la pandemia, sin embargo, los autores muestran que sí hubo un impacto en la dinámica de gastos y los conflictos en los pagos de bienes y servicios, así como también las trayectorias de endeudamiento de

los hogares según clases sociales. En la medida en que las mayores regulaciones de precios y promociones favorecidos por la política estatal se desarrolló en espacios de provisión hostiles a las clases populares, los autores plantean el desafío de cómo efectivizar mejor políticas de transferencias de ingresos tomando en cuenta sus prácticas de consumo.

Boniolo y Estévez Leston analizan el teletrabajo, las cargas familiares y las estrategias sociohabitacionales según regiones, clases sociales y género. Las estrategias sociohabitacionales que las familias despliegan desde distintas clases sociales fue tensionado durante la crisis sanitaria del COVID 19, por los cuidados de niños y enfermos y por los cambios en las condiciones laborales, entre las que se destaca el teletrabajo, que volvió más porosa la frontera entre trabajo y familia, induciendo modificaciones o ampliaciones en las viviendas. Los resultados muestran que la probabilidad de transiciones hacia el teletrabajo fue mayor en las mujeres, en la clase de servicios y en la clase de empleados de cuello blanco y tendieron a mantenerse a lo largo del tiempo, más allá del período de ASPO. La falta de redes de cuidado comunitarias (tanto familiares como vecinales) impuso un aumento de la sobrecarga en tareas de cuidado en las mujeres de clases medias privilegiadas y clases medias, que previamente tendían a desplegar estrategias de cuidado sostenidas por el trabajo tercerizado. El traspaso hacia modalidades de teletrabajo está asociado con el despliegue de estrategias habitacionales que permitan el acceso a espacios que permitan la división entre la vida cotidiana del hogar y el mundo del trabajo. La posición de clase condicionó las estrategias habitacionales. Mientras que las personas que pertenecen a la clase de servicios tendieron a alquilar casas y quintas en búsqueda de espacios habitacionales más amplios y con espacios verdes; en los segmentos de clase trabajadora y la pequeña burguesía, fue mayor la propensión a construir nuevas habitaciones o subdivisiones en los ambientes, especialmente entre grupos propietarios de viviendas y terrenos; en los grupos inquilinos de estas clases hubo una alta propensión a mudarse (capítulo 6).

El estudio de Rebón y Troncoso parte del diagnóstico de que la pandemia transformó profundamente las condiciones de desarrollo de la protesta social caracterizada en las últimas décadas por su masividad y heterogeneidad. Las políticas protectoras de la salud impusieron restricciones a la circulación, la paralización de actividades junto al temor al contagio y la justificación sanitaria de muchas privaciones, limitaron el contexto de oportunidades para el desarrollo de acciones colectivas de reclamo público. El estudio propone medir el nivel de participación en la protesta social durante la pandemia, caracterizando dicha participación según el tipo de reclamos y formas que asumieron y explorando la incidencia de la

posición social y los posicionamientos políticos sobre la misma. En particular, se destaca el análisis del carácter de clase social del nivel y tipo de protesta social. Los resultados muestran que las principales acciones colectivas fueron virtuales (petitorios, foros, tuitazos) junto con las movilizaciones y concentraciones –forma tradicional de protesta-, seguida de cacerolazos y cortes de calles, dos modalidades de carácter diferente. Los principales motivos de reclamo fueron: problemas laborales (despidos, disminución de sueldo, suspensiones), derechos de las mujeres vinculados a la lucha en torno a la interrupción voluntaria del embarazo, luego demandas de seguridad, justicia y contra la corrupción y medidas contra las políticas sanitarias de restricciones a la movilidad. Se destaca que la población adulta joven, las clases medias asalariadas junto con los grupos de identidad política de izquierda tuvieron el mayor protagonismo en la protesta colectiva. En el tipo de protesta incide el carácter de clase: los técnicos de clases medias y los obreros desarrollaron repertorios clásicos de acción colectiva –movilización y huelga- centrada en reclamos laborales, las asalariadas profesionales un repertorio heterogéneo, los desocupados y trabajadores de la economía popular recurrieron a movilizaciones y cortes y, como temas centrales, al reclamo por trabajo y vivienda; finalmente, las posiciones empresariales se asociaron con medidas anti-cuarentena y demandas de justicia y anti-corrupción (capítulo 7).

El capítulo 8 de Elbert y Morales continúa esta línea de indagación sobre la formación de clases sociales a través de la interrelación entre la dimensión objetiva y subjetiva de las posiciones de clase. Su objetivo es analizar la influencia de la clase social de pertenencia en las evaluaciones de los/as encuestados/as respecto de diferentes políticas públicas implementadas durante la pandemia y medidas de redistribución socioeconómica que se podrían tomar. Específicamente, se analiza el posicionamiento de las clases sociales y fracciones de clase en relación a: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), la doble indemnización, el impuesto extraordinario a las grandes fortunas (IEGF) y el congelamiento de alquileres y tarifas. Y sobre medidas a implementar: disminuir los impuestos a las grandes empresas y a las PyMEs, mayores impuestos a la riqueza y una renta universal para sectores vulnerables. Para reconstruir una lectura de conjunto de las opiniones desde una perspectiva de clases sociales, el estudio plantea la construcción del «Índice de Preferencia Estatismo versus Mercado» (IEM), siguiendo los criterios de las Escalas tipo Likert, lo cual les permite evaluar el poder de discriminación de cada ítem. Los resultados muestran un alto grado de acuerdo con las políticas orientadas a la protección social de la población trabajadora durante la pandemia y medidas de redistribución a futuro que contrasta

con ciertos discursos mediáticos respecto de un supuesto consenso antiestatista. El análisis permite identificar un «bloque progresista» conformado por los segmentos informal y formal de la clase obrera y la clase media profesional, que apoya la intervención del estado y su papel redistributivo. El efecto de la clase objetiva se mantiene incorporando variables sociodemográficas y mediadoras, siendo el de las mujeres jóvenes de clase trabajadora el grupo más estatista. La identificación política con la izquierda y el peronismo también se asocian positivamente con un posicionamiento favorable a la intervención estatal redistributiva.

La suspensión de clases presenciales fue un tema central durante el período de ASPO y DISPO. López y Hermida analizan las condiciones en que continuaron la educación desde sus hogares las niñas, niños y jóvenes de la Argentina según clase social de origen. Los resultados muestran que en el nivel primario se sostuvieron las tasas de continuación de estudios, sin embargo, se observaron diferencias sustantivas en cuanto a la forma en que se sostuvieron los mismos. Los hogares de clase alta y las clases medias, contaron con mayor equipamiento de computadoras, servicios y tecnologías de la comunicación, así como espacios físicos adecuados que permitían mayor autonomía para un mejor desempeño académico. Esto posibilitó que las infancias pertenecientes a hogares de estas clases tuvieran mayores niveles de interacción con docentes y compañeros. En contraste, en las infancias de clases populares la continuación de estudios estuvo más restringida al uso de soportes estáticos como el uso de cuadernillos o por medio de teléfonos de uso compartido por varios miembros del hogar, lo que dificultaba la frecuencia de la comunicación con los docentes y los intercambios con sus compañeras/os. Las pautas de desigualdad tienden a acentuarse en la adolescencia y juventud. Mientras las juventudes de clases alta y medias altas mantienen tasas superiores en casi diez puntos porcentuales en el sistema educativo con respecto a sus pares de clases populares, y de ocho puntos porcentuales trabajando y estudiando; el porcentaje de quienes no estudian ni trabajan («ocio forzoso») es casi el doble en las clases populares y es mayor también la tasa de desocupación. La obligatoriedad al aislamiento preventivo, se presentó como una oportunidad para retomar o finalizar estudios. Se destaca que un porcentaje mayor de población de 15 a 29 años realizó cursos de oficios y ampliación de capacidades técnicas orientadas al trabajo, en relación a quienes retomaron estudios secundarios y de nivel superior (capítulo 9).

Molina Darteano y Matozo indagan la influencia de la educación en la posible mitigación de efectos negativos sobre la actividad productiva causados por la crisis sociosanitaria. Específicamente,

analizan los efectos del nivel educativo sobre las estrategias adaptativas en torno a la conservación o pérdida del empleo, estrategias de teletrabajo y acceso a cobertura de salud. El supuesto del estudio parte de que un mayor logro educativo genera una mejor para encarar estrategias de adaptación frente a la pandemia; dichas estrategias comprenden la disminución del riesgo de ciertos eventos. Los/as autores construyen un índice que sintetiza los principales riesgos de la crisis sociosanitaria, compuesto por una dimensión de salud y una dimensión laboral. Los resultados muestran que el logro educativo en el nivel más alto (nivel superior completo o más) generó mejores mecanismos de adaptación en el nuevo escenario de crisis. En relación al sexo, la situación de las mujeres fue un poco más crítica que la de los varones (especialmente en los niveles educativos más bajos). Por otro lado, en el análisis comparativo entre regiones, la región con mayores valores del índice de riesgo resultó ser GBA, lo que sugiere además que el tamaño del aglomerado influyó en la vulnerabilización por la emergencia socioeconómica (capítulo 10).

El capítulo 11 de Actis Di Pasquale, Gallo y Capuano abre la segunda parte del primer tomo. El objetivo del mismo es analizar la evolución del mercado de trabajo en relación con la dinámica del producto bruto, las políticas macroeconómicas, la emergencia sociosanitaria y las políticas sociales implementadas para morigerar sus efectos adversos. En virtud de ello, el período de análisis abarca desde el segundo trimestre de 2016 hasta el cuarto trimestre de 2021. Se analiza la evolución de las tasas básicas del mercado de trabajo, la composición de la tasa de empleo a partir de las principales categorías ocupacionales (asalariados registrados, asalariados no registrados y cuentapropistas) segmentando la información por sexo para dar cuenta de las posibles desigualdades de género en el contexto de pandemia y la evolución del salario real. Los autores identifican una doble crisis, consecutivas y acumulativas pero de raíces diferentes: la primera por políticas macroeconómicas de endeudamiento externo y fuga de capitales, la segunda por una crisis sociosanitaria y condicionamientos de la política macroeconómica por el peso de la deuda externa. La pandemia actuó como un amplificador de las brechas generadas en el período anterior. El escenario laboral previo a la pandemia se encontraba deteriorado: el salario real se desplomó, cayó la proporción de asalariados registrados, aumentó la desocupación de los/as jefes/as de hogar y aumentó la participación laboral de mujeres en actividades por cuenta propia informales o bien como asalariadas no registradas. La expansión de este tipo de empleo tiene un efecto contracíclico en tiempos de crisis económica y caída del sector formal. El impacto inmediato de la pandemia y el ASPO se concentró mayormente en sectores informales con mayor empleo femenino en su composición. Asimismo, la suspensión de

clases presenciales –dadas las desigualdades de género- implicó un aumento del tiempo dedicado al cuidado por parte de las mujeres. En este contexto, el mecanismo de ajuste del sector informal no funcionó como en la etapa previa. Se destaca que durante la recuperación económica hay una mejora paulatina de los indicadores laborales (crece la proporción de asalariados registrados y cae la de asalariados no registrados), sin embargo, la polarización laboral se mantiene porque el cuentapropismo (de carácter informal) continúa creciendo, posiblemente bajo el efecto de «trabajador(a) adicional» en un contexto en el cual los ingresos de los hogares no se recuperaron sustantivamente.

Pol, Paz y Galetto analizan la evolución sectorial del empleo privado formal en las regiones argentinas durante el período 2015 – 2021, identificando i. el perfil de especialización del empleo formal de las regiones del país y ii. los cambios producidos por la doble crisis económica, de modo tal de identificar los principales sectores que han traccionado la creación o destrucción de ese tipo de empleo y de reconocer las disparidades regionales en esos patrones. El enfoque teórico del estudio parte de conceptualizar las persistentes desigualdades socioeconómicas dentro del país como correlato de un modelo productivo desigual y heterogéneo que se imbrica con factores territoriales para generar una estructura territorialmente desequilibrada. La localización de las actividades económicas en los espacios geográficos juega un papel fundamental en la composición y acceso al mercado de trabajo y en la dinámica de la desigualdad. En períodos de crisis, la especialización productiva regional crece cuando se trata de una actividad del sector primario mientras que en las actividades industriales tiende a caer. Los resultados muestran que a pesar de que la magnitud de la crisis originada por la irrupción de la pandemia fue mayor a la de la etapa previa, los cambios en el patrón de especialización regional fueron menores y en sentido opuesto a lo ocurrido en el período 2015-2019. En estos años se advierte una tendencia mayoritaria a la pérdida de diversificación, combinada con un proceso de reprimarización en las áreas periféricas que se especializan en actividades estrechamente vinculadas a la disponibilidad de recursos naturales. En contraste, en 2020 y 2021 se observó una recuperación de diversificación junto con un retroceso de la reprimarización por el avance de la actividad industrial en un contexto de medidas de protección y promoción de actividades productivas en general y de la industria en particular. Influye también en esta pauta que los sectores más afectados por la emergencia socio sanitaria y la consecuente pérdida de empleos (construcción, hotelería y restaurantes y servicios comunitarios, sociales y personales), son menos relevantes en la definición del perfil de especialización de dichas regiones (capítulo 12).

Belloni, Brown y Fernández Massi analizan el impacto de la pandemia en las brechas de desigualdad laboral de género en la Argentina. La hipótesis de trabajo es que la segmentación laboral horizontal por género es relevante para explicar la forma en la que impactó la crisis provocada por la emergencia sanitaria en el mercado laboral. La masculinización/feminización estructural de las actividades económicas y las heterogéneas dinámicas de recuperación sectorial, resultan clave para comprender la evolución de las brechas de género en el mercado de trabajo. Las principales pautas halladas evidencian que la pandemia y las medidas para evitar la propagación del virus tuvieron un impacto diferencial en el empleo de mujeres y varones en detrimento de las primeras, quienes además se vieron más afectadas en relación al incremento de las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas que realizan al interior de sus hogares o en las comunidades a las que pertenecen. Al comienzo de la crisis sanitaria los varones padecieron un impacto laboral negativo levemente mayor: sus tasas de actividad y de empleo se contrajeron más y la tasa de desocupación aumentó en mayor proporción que el de las mujeres. Sin embargo, tuvieron una recuperación más rápida que les permitió acrecentar su nivel de empleo en 2021 por encima del de prepandemia. Esta evolución se explica en gran medida porque las ramas de actividad en las que están sobrerrepresentados los varones (construcción; industria manufacturera y transporte, almacenamiento y comunicaciones) se vieron más afectadas durante el ASPO pero rápidamente comenzaron un sendero de recuperación. En contraposición, las mujeres tuvieron más pérdidas de puestos de trabajo en los sectores de servicio doméstico, comercio y hoteles y restaurantes y, a medida que se flexibilizaron las restricciones, su recuperación fue más lenta y parcial y los efectos negativos de la crisis sobre su empleo se mantuvieron más tiempo. No obstante, ciertos sectores de actividad de importante participación femenina (servicios sociales y de salud; enseñanza; y administración pública y defensa) continuaron desarrollándose bajo la modalidad de teletrabajo (afectando sus condiciones laborales) o fueron declarados sectores esenciales. El estudio plantea desafíos de política pública con perspectiva de género entre los que se destacan: la provisión de servicios públicos de cuidado; una mayor participación y continuidad laboral de mujeres y diversidades en más sectores de actividad y con mejores condiciones de trabajo; y problematizar el refuerzo de la división sexual del trabajo de algunas políticas públicas (capítulo 13).

El capítulo 14 de Noguera y Barrera Insúa analiza el impacto de la crisis del COVID-19 en la desigualdad salarial del empleo registrado privado desde una perspectiva comparativa sectorial y entre regiones del país. Varios factores destacan la relevancia de estudiar qué ocurrió en el empleo formal privado según sectores de actividad

y regiones durante la pandemia. Primero, el universo del empleo formal en el sector privado representa aproximadamente el 38 % de los/as ocupados/as. Segundo, con el objetivo de amortiguar el impacto de la crisis en este tipo de empleo, el Estado Nacional implementó un conjunto de políticas, entre las que se destacan: el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), reconvertido en el Programa de Recuperación Productiva 2 (REPRO 2), el salario complementario para asalariados privados (50 % a cargo del Estado), prestamos a MiPyMes y créditos a tasa o para autónomos y monotributistas, por lo que cabe esperar un menor impacto en sus ingresos y una mayor brecha con los del sector informal. Tercero, la distribución espacial de los sectores de actividad es un factor relevante a la hora de analizar las disparidades regionales. En tal sentido, dada la evolución de la pandemia y las distintas medidas de política sanitaria tomadas por el gobierno según la región del país, el impacto pudo haber sido diferencial en distintas regiones y por sector de actividad. Para abordar la problemática de la desigualdad al interior del sector formal se utiliza el índice de Theil, que permite determinar la contribución de cada elemento, región o un sector de actividad, a la desigualdad. El estudio evidencia que mientras la desigualdad de ingresos se incrementó en los trimestres de mayor impacto de la pandemia en el mercado de trabajo en general, las disparidades salariales entre trabajadoras y trabajadores asalariados formales se redujeron. Esto se debió a que en el primer momento de la crisis sanitaria y caída de la actividad económica se produjeron suspensiones y disminución del salario de trabajadoras y trabajadores en sectores con salarios más altos, menor precariedad, y con mayor nivel de organización sindical; mientras en sectores con menor organización sindical, menores salarios y mayor precariedad hubo mayores ajustes de empleo. En este contexto, disminuyó la desigualdad salarial entre regiones y sectores de actividad.

Mascareño, Barbetti, Gudiño y Pozzer analizan la dinámica del mercado de trabajo en el Norte Grande Argentino, buscando caracterizar efectos de la pandemia en las/os trabajadoras/es asalariadas/os según el género, la edad y sectores de inserción ocupacional. Las provincias que componen las regiones Noroeste (NOA) y Nordeste (NEA) de la Argentina comparten algunas características comunes en sus mercados de trabajo que permiten analizarlas como una «Gran Región». Entre ellas, se destaca la persistencia de altos niveles de informalidad laboral. El estudio muestra en perspectiva temporal la dinámica del mercado de trabajo en esta región en período 2016-2019 evidenciando un deterioro progresivo de los indicadores laborales: aumento de la desocupación y una disminución del empleo asalariado que tuvo como contracara un incremento sustantivo del cuentapropismo. La crisis derivada de la pandemia claramente profundizó esta

situación. En consonancia con los resultados de estudios previos, el impacto de la pandemia entre los trabajadores/as asalariados/as no registrados/as del norte grande fue mayor: aproximadamente 4 de cada 10 fueron despedidos y, dentro de este grupo, casi el 60 % eran jóvenes de entre 18 y 29 años. Quienes lograron mantener el empleo, igualmente atravesaron otras situaciones críticas como suspensiones con reducción de sueldos y, dentro de este grupo, nuevamente los/as trabajadores/as no registrados/as fueron más afectados. El capítulo contribuye a visibilizar el carácter regional de las desigualdades laborales y plantea la necesidad de colocar en la agenda de gobierno la formalización del empleo, especialmente en una región marginalizada desde la consolidación del capitalismo en el país (capítulo 15).

Para dimensionar los efectos de la pandemia sobre la estructura social de Argentina es necesario considerar el impacto regresivo en la actividad económica y el mercado de trabajo en relación con la gestión sanitaria de la misma y su impacto sobre la mortalidad. En Argentina la tasa de mortalidad durante 2020 fue de 12,6 por ciento más de muertos que en el promedio de los cinco años anteriores -2015 a 2019-, ubicando al país por debajo del exceso de mortalidad mundial que en promedio fue de 14,3 %. En países que tuvieron políticas de Estado mucho más liberales frente al avance del virus, promoviendo la «inmunidad de rebaño» y/o equiparando los efectos del COVID-19 a los de una gripe convencional y con mucha mayor descoordinación en la política sanitaria al interior de sus fronteras, tuvieron más exceso de fallecimientos que la Argentina; entre ellos encontramos a México (50,9 %), Estados Unidos (20,5 %), Brasil (19,8) Chile (16,9), con frecuencia presentado como país modelo. Italia (15,4 %) y España (17,8 %), que sufrieron un colapso del sistema de salud y tienen una población más envejecida, también tuvieron tasas superiores a Argentina (Ritchie *et al.* 2020). En contraposición a discursos antiestadistas vertidos desde medios de comunicación, estas pautas permiten destacar el rol del Estado en su capacidad de organizar en todo el país medidas sanitarias de prevención y vacunación masivas.

Por último, hemos planteado que la temporalidad es una dimensión central en nuestro estudio y que la investigación no se centró exclusivamente en el impacto de la emergencia sociosanitaria sobre el mercado de trabajo y la estructura social, sino que hemos incorporado al análisis la crisis previa y el período de recuperación económica posterior a la pandemia. En los dos tomos del libro hay una tercera temporalidad subyacente. Para comprender las transformaciones recientes en la estructura social de Argentina es necesario interpretarlas en una perspectiva de largo plazo. La estructura social

de Argentina se distinguió en la región y de otras sociedades capitalistas periféricas hasta 1976 aproximadamente por una expansión temprana de las clases medias y la integración de una clase trabajadora urbana con acceso a derechos sociales y salarios relativos altos apoyada en la extensión de la condición asalariada, una mayor presencia de organización sindical y un artesanado cuenta propia calificado – aún con la existencia de bolsones de marginalidad en los grandes centros urbanos y regiones periféricas más polarizadas – (Dalle 2010; Germani 1963; Torre 2010). La transformación del mundo del trabajo ocurrida en Argentina durante la reestructuración capitalista neoliberal estrechó significativamente el amplio sector de los trabajadores asalariados formales de la sociedad de la segunda posguerra, siendo una de las consecuencias más importantes el desplazamiento forzado de amplios contingentes – esta vez urbanos – hacia ocupaciones cuenta propia o asalariadas en la informalidad. En tal sentido, Torre (2010) plantea desde una perspectiva histórica cuatro grandes desafíos de integración en la estructura social de Argentina en relación a sendos cambios demográficos: i. la absorción con relativo éxito de la población extranjera durante la etapa de la inmigración aluvional y la modernización temprana a través de la expansión de oportunidades de movilidad social ascendente; ii. el acceso al bienestar social de la clase trabajadora durante el primer peronismo luego de las grandes migraciones internas; iii. la emergencia y radicalización de la juventud en las décadas de 1960 y 1970; iv. siendo el actual cómo incorporar a la ciudadanía a amplios sectores marginalizados durante el período de reformas neoliberales. Este último requiere repensar el rol del Estado en el desarrollo.

Las investigaciones reunidas en este libro contribuyen a pensar políticas de desarrollo; precisamente la pandemia constituyó un intersticio de oportunidad para repensar esas políticas. En los capítulos del tomo I es posible identificar algunos lineamientos de política pública que pueden favorecer procesos de recomposición e integración de la fuerza de trabajo. Entre ellas, se destacan una estrategia de desarrollo económica centrada en los sectores productivos, diversificada y orientada hacia ramas de actividad económica con mayor valor agregado que traccione la expansión de ocupaciones formales y calificadas, bases de expansión de las clases medias y el núcleo de la clase obrera. Este tipo de desarrollo debe incorporar una mirada federal, promoviendo la expansión de oportunidades ocupacionales estructurales en regiones y zonas geográficas históricamente postergadas, como por ejemplo en los enclaves de marginalidad de las grandes ciudades. Se destaca también la centralidad del rol del Estado en la coordinación con el empresariado y los sindicatos (ampliando este diálogo social a los movimientos sociales) para revitalizar las instituciones laborales como mecanismo central de redistribución

progresiva del ingreso. Para disminuir desigualdades de género en las trayectorias laborales, los ingresos y la doble carga de trabajo, el desarrollo de instituciones públicas de cuidados es una política clave que tuvo muy buenos resultados en otros países o estados (Esping Andersen 2015), como por ejemplo la experiencia de Quebec (Wright 2014), y al mismo tiempo contribuye a la calificación y formalización de estas ocupaciones. Asimismo, se destaca fortalecer el sistema de seguridad social, institución decisiva para responder a las demandas generalizadas de ciudadanía social, basada en el reconocimiento<sup>[3]</sup> del trabajo de sectores de la economía popular.

A lo largo de los capítulos las y los lectores pueden reconstruir un diagnóstico sobre los efectos de la *doble crisis* en la estructura social de Argentina y, a la vez, elementos para pensar el proceso de recuperación económica y recomposición social iniciado en 2021. Ese proceso, actualmente en disputa tanto por la orientación de la estrategia de desarrollo como por la distribución de los frutos del crecimiento, depende en gran medida de la organización y movilización de las clases, de su capacidad de articular demandas hacia el Estado; en definitiva, de constituir una *amplia fuerza social* (centrada en los segmentos de clase trabajadora formal e informal y extensos sectores de clases medias) con gravitación en la dirección del modelo de desarrollo.

## Referencias

ACTIS DI PASQUALE, EUGENIO Y PABLO DALLE

2022 (eds.), *La evolución del empleo en Argentina en la doble crisis pre-pandemia y pandemia. Un análisis intra e interregional (2011-2020)*, Buenos Aires: UNMDP, referencia citada en página XXIV.

ARIAS, ANA Y NOELIA SIERRA

2019 «La accesibilidad en los tiempos actuales. Apuntes para pensar el vínculo entre los sujetos y las instituciones», en *Márgen*, n.º 92, referencia citada en página XLII.

ASSUSA, GONZALO Y GABRIEL KESSLER

2020 «Pandemia y crisis social: activación de repertorios históricos, exploraciones metodológicas e investigación sociológica», en

---

[3] La ampliación de la ciudadanía social requiere, en términos de Arias y Sierra (2019) «el acceso a un lugar como derecho: reconocimiento y hospitalidad». Esto implica repensar las políticas sociales en donde los sujetos destinatarios puedan proponer un modo de habitar la institución alojante, transformada o adecuada a sus necesidades singulares, implica que dichos sujetos sean protagonistas, «hacerse un lugar», visibilizar sus demandas (como se muestra en los capítulos del tomo 2).

*Prácticas de Oficio*, vol. 1, n.º 25, págs. 33-47, referencia citada en página **XVIII**.

BOURDIEU, PIERRE

1986 *La distinción: criterio y bases sociales del gusto*, Madrid: Taurus, referencia citada en página **XXIII**.

1990 *Sociología y Cultura*, Ciudad de México: Grijalbo, págs. 281-309, referencia citada en página **XVIII**.

DALLE, PABLO

2010 «Estratificación social y movilidad en Argentina (1870-2010). Huellas de su conformación socio-histórica y significados de los cambios recientes», en *Revista de Trabajo. 200 años de Trabajo*, n.º 8, referencia citada en página **XLI**.

DALLE, PABLO Y MARÍA MERCEDES DI VIRGILIO

2022 «Estructura social de Argentina y políticas públicas durante la pandemia de COVID-19: el diseño de una encuesta nacional comparativa interregional», en *Revista Latinoamericana de Metodología de la Ciencias Sociales*, vol. 12, n.º 2, referencia citada en página **XXV**.

ESPING ANDERSEN, GØSTA

2015 «Welfare regimes and social stratification», en *Journal of European Social Policy*, vol. 25, n.º 1, págs. 124-134, referencia citada en página **XLII**.

GERMANI, GINO

1955 *Estructura Social de la Argentina*, Buenos Aires: Raigal, referencia citada en páginas **XX**, **XXIII**.

1963 «La movilidad social en Argentina», en *Movilidad social en la sociedad industrial*, Buenos Aires: EUDEBA, págs. 317-365, referencia citada en páginas **XXIII**, **XLI**.

1980 *El concepto de marginalidad*, Buenos Aires: Nueva Visión, referencia citada en página **XXIII**.

2010 *Clases sociales. Introducción en La sociedad en cuestión: antología comentada*, Buenos Aires: CLACSO, referencia citada en página **XXIII**.

GOLDTHORPE, JOHN

2012 «De vuelta a la clase y el estatus: por qué debe reivindicarse una perspectiva sociológica de la desigualdad social», en *Fuente*, n.º 137, referencia citada en página **XXIII**.

HOSZOWSKI, ALEJANDRO Y JUAN IGNACIO PIOVANI

2018 «La Encuesta Nacional sobre la Estructura Social», en *La Argentina en el siglo XXI*, Buenos Aires: Siglo XXI, págs. 27-46, referencia citada en página **XXVI**.

HOUT, MIKE

- 2008 «How Class Works: Objective and Subjective Aspects of Class Since the 1970s», en *Social Class. How Does It Work?*, Nueva York: Russell Sage Foundation, págs. 25-64, referencia citada en página **XXIII**.

MACEIRA, VERÓNICA

- 2015 «Un abordaje teórico-metodológico para la investigación de la estructura, la movilidad social y las condiciones de vida: La propuesta ENES-Pisac», en *Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales*, vol. 5, n.º 2, págs. 1-38, referencia citada en página **XXVI**.

NUN, JOSÉ

- 1969 «Superpoblación relativa, ejército industrial de reserva y masa marginal», en *Revista Latinoamericana de Sociología*, vol. 5, n.º 2, referencia citada en página **XXIII**.

NUN, JOSÉ; MIGUEL MURMIS y JUAN CARLOS MARÍN

- 1968 «La marginalidad en América Latina. Informe preliminar», en *Informe preliminar. Documento de Trabajo*, Buenos Aires: Instituto Torcuato Di Tella, referencia citada en página **XXIII**.

PATTON, MICHAEL

- 2002 *Qualitative Research & Evaluation Methods*, Thousand Oaks: Sage, referencia citada en página **XXIV**.

PIOVANI, JUAN IGNACIO

- 2015 «El Programa de investigación sobre la sociedad argentina contemporánea», en *Sociedad*, n.º 34, págs. 85-105, referencia citada en página **XVIII**.

RITCHIE, HANNAH *et al.*

- 2020 *Coronavirus Pandemic (COVID-19)*, recuperado de <<https://ourworldindata.org/coronavirus>>, referencia citada en página **XL**.

SAUTU, RUTH

- 1969 «Economic Development and Social Stratification in Argentina», en *Ph.D. Dissertation: The London School of Economics and Political Science*, University of London, referencia citada en páginas **XX, XXIII**.
- 2019 *Estrategias teórico-metodológicas en el diseño de la investigación en ciencias sociales*, Buenos Aires: Lumiere, referencia citada en página **XXIV**.

SAVAGE, MIKE

- 2015 *Social Class in the 21st Century*, Londres: Penguin, referencia citada en página **XXIII**.

TORRADO, SUSANA

- 1992 *Estructura social de la Argentina: 1945-1983*, Buenos Aires: De la Flor, referencia citada en páginas [XX](#), [XXIII](#).

TORRE, JUAN CARLOS

- 2010 «Transformaciones de la sociedad argentina», en *Argentina 1910-2010. Balance del siglo*, ed. por Roberto Russell, Buenos Aires: Taurus, referencia citada en página [XLI](#).

WRIGHT, ERIK OLIN

- 1979 *Class structure and income determination*, Academic Press, referencia citada en página [XXIII](#).
- 2014 *Construyendo Utopías reales*, Madrid: Akal, referencia citada en página [XLII](#).
- 2018 *Comprender las clases sociales*, Madrid: Akal, referencia citada en página [XXIII](#).



## Parte 1

Efectos de la pandemia desde perspectivas de  
clases sociales y estratificación social



# CAPÍTULO 1

## Estructura de clases de Argentina (2015-2021): efectos de la doble crisis prepandemia y pandemia en el empleo, los ingresos y los gastos de los hogares

GABRIELA BENZA,<sup>\*</sup> PABLO DALLE<sup>\*\*</sup> y VERÓNICA MACEIRA<sup>\*\*\*</sup>

### 1.1 Introducción

Si en un ejercicio retrospectivo volvemos nuestra mirada sobre el Bicentenario, ¿qué observamos? Que luego de la profunda crisis de 2001, y tras varios años de crecimiento económico y de una reorientación de la acción del Estado hacia la expansión del sector productivo, el fortalecimiento del mercado interno y la ampliación de la protección laboral y social, el país había logrado recomponer la posición social de amplios sectores de las clases medias y de la clase trabajadora. Este proceso de recomposición colectiva, que se extendería aún sobre el siguiente lustro, sin dudas tuvo límites: evidencia de ello fue la persistencia de elevados niveles de desigualdad entre las clases así como de amplios sectores de trabajadores en empleos no regulados u ocupaciones marginales. No obstante, una década después el contraste era claro. El estancamiento posterior de la economía y la *doble crisis* (de la prepandemia y la pandemia) hicieron por momentos recordar el escenario de emergencia social de 2001.

Si bien diversos estudios han dado cuenta de los efectos de ambas crisis sobre el empleo y las condiciones materiales de vida de los

---

\* Investigadora del Centro de Investigación en Políticas Sociales, Universidad Nacional de Tres de Febrero.

\*\* Investigador del CONICET, Instituto de Investigaciones Gino Germani-UBA.

\*\*\* Investigadora Docente Universidad Nacional de General Sarmiento.

hogares (Benza y Kessler 2021; Bertranou y Maurizio 2020; CEPAL 2020; Dalle y Actis Di Pasquale 2021; Poy 2021, entre otros) son menos los que han analizado qué sucedió en estas dimensiones desde una perspectiva de clases sociales (Chávez Molina y Rodríguez de la Fuente 2021; Maceira 2021). En este marco, el presente capítulo propone profundizar el análisis de las reconfiguraciones recientes de la estructura de clases de la Argentina, poniendo el foco sobre las desigualdades entre posiciones de clase en la esfera laboral y en los ingresos y el consumo de los hogares.

La hipótesis general que orientó al estudio postula que la emergencia sociosanitaria COVID-19 catalizó desigualdades en la estructura social de corto, mediano y largo plazo. Postulamos que esta emergencia expresó efectos combinados de distintas temporalidades: las restricciones de la actividad económica propias de la pandemia y de las medidas de aislamiento y prevención, pero también condicionamientos estructurales de larga data profundizados por la orientación de las políticas estatales durante el período inmediatamente anterior (2016-2019). En esta línea, en el trabajo reconstruimos qué sucedió con la estructura de clases en el marco de la *doble crisis* de la prepandemia y la pandemia, y en qué medida los efectos de estas coyunturas críticas se sostienen en la posterior etapa de reactivación económica relativa, definiendo o no una profundización persistente en los procesos de desigualdad social.

La estructura del capítulo es la siguiente. Primero presentamos la mirada conceptual y la estrategia metodológica que guió al estudio; luego reconstruimos la evolución de la estructura de clases desde una perspectiva de mediano plazo, dando cuenta de las tendencias en el peso relativo y en la desigualdad de ingresos entre las distintas posiciones. Seguidamente, profundizamos en los efectos de la pandemia sobre las condiciones de trabajo según la inserción de clase de la población económicamente activa, para luego centrarnos en los cambios en los ingresos y los consumos de los hogares de las distintas posiciones de clase y en el papel que tuvo el Estado en la amortiguación del impacto de la crisis en sus condiciones materiales. En la siguiente sección, adoptamos una perspectiva diacrónica con el fin de evaluar los efectos de la doble crisis sobre las trayectorias socioocupacionales entre 2015 y 2021. Finalmente, examinamos cómo quedó configurada la estructura de clases en el contexto de la reactivación económica que siguió a la coyuntura más crítica de la pandemia, y evaluamos en qué medida sus efectos persisten en esta nueva etapa.

## 1.2 Perspectiva teórica y estrategia metodológica

El enfoque teórico del estudio se centra en el análisis de clases sociales, haciendo foco en los vínculos entre la configuración de la desigualdad en la estructura social y la direccionalidad que asume aquello que desde distintas vertientes se ha identificado como modelo de desarrollo económico (Germani 1955; Sautu 1969, 2016), estilo o estrategias de desarrollo (Basualdo 2011; Torrado 1992) o régimen social de acumulación (Nun 1987). Esta tradición teórica, centrada en la relación entre el tipo de formación social capitalista periférica y dependiente, el tipo de desarrollo, y el perfil y composición de la estructura de clases, tiene un fuerte arraigo en América Latina y particularmente en nuestro país.

En el análisis de la relación entre estructura de clases y modelo de desarrollo incorporamos una dimensión vinculada que ha tenido mayor despliegue en tiempos recientes: la relación entre distintos tipos de regímenes de bienestar y la estratificación social. Siguiendo los planteos iniciales de Esping Andersen (1993), esta perspectiva pone el foco sobre las diversas configuraciones de arreglos institucionales que intervienen en la producción de bienestar protegiendo a la ciudadanía ante eventuales riesgos y contingencias, y en su articulación con las características de las estructuras económicas y sociodemográficas en sociedades concretas. Desde esta perspectiva, el estudio de la estructura de clases es indisoluble de las formas que asume la intervención del Estado – y, en particular, de los distintos modelos de seguridad social – en tanto esta última actúa moldeando los sistemas de estratificación y la transmisión de desigualdad de oportunidades entre generaciones (Esping Andersen 2015; Filgueira 2000).

Al mismo tiempo, modelo de desarrollo, estructura y conflicto de clase asumen para nosotros/as un carácter recursivo a investigar en cada período. El modelo de desarrollo define el perfil y composición que asume la estructura de clases y condiciona su correlación de fuerzas, pero a su vez, la organización y movilización de las clases y su capacidad de articular demandas en el Estado son factores centrales en la direccionalidad del modelo de desarrollo (Gramsci 1984; Wright 2018).

Con esta mirada conceptual, para el análisis empírico de la estructura de clases adoptamos una perspectiva teórica marxista en diálogo con aportes weberianos, que incorpora a su vez los desarrollos propios del análisis desde los países periféricos (Nun 1969, 1999; Nun *et al.* 1968). El esquema de clases utilizado fue especialmente elaborado para este estudio por los/as autores con el objetivo de captar los rasgos específicos de la estructura social de Argentina en

la actualidad, tomando como base estudios previos de Maceira (2018, 2021) y recuperando aportes de Dalle (2012) y Benza (2014).

Desde esta perspectiva, las clases son conjuntos de relaciones que definen posiciones (antagónicas, en la tradición que se funda en Marx) en la estructura social: relaciones de explotación de la fuerza de trabajo (en virtud de la propiedad/exclusión de los medios de producción) y de control, en cuanto función (delegada o no) del capital. Tales relaciones se expresan en las clases fundamentales de nuestro esquema. Por un lado, el capital de gran o mediana escala y los altos directivos y funcionarios estatales (cuadros de mayor jerarquía, que caracterizamos aquí como parte de la propia burguesía). Por otro lado, la clase trabajadora en su conjunto, sin medios, ni cualificaciones especiales que le permitan retener niveles de autonomía en los procesos de producción de lo social ni los ubiquen en posición privilegiada en los procesos de explotación y dominación (Marx 1975; Wright 1994).

Localizamos entre ambas, por un lado, un conjunto de posiciones características del despliegue del capitalismo contemporáneo que, desde una perspectiva de la estratificación social pueden considerarse como clases medias o intermedias y desde sugerencias neomarxistas (Carchedi 1977; Wright 1994) como «posiciones contradictorias de clase» (en tanto expresan intereses de clases distintas). Se trata fundamentalmente de localizaciones que son objeto de relaciones de explotación, pero ocupan posiciones dominantes y/o de mayor autonomía en el proceso de trabajo en base a la autoridad/supervisión o calificaciones de tipo profesional o técnico. Junto con estas, los productores independientes, que no emplean fuerza de trabajo y, por tanto, definen su posición por fuera de las relaciones de explotación, constituyen la llamada pequeña burguesía, tradicionalmente asociada a «las viejas clases medias» de las formaciones capitalistas.

Es central advertir aquí que en América Latina la definición del carácter de clase de buena parte de estas posiciones autónomas ha sido históricamente problemática, dado que las limitaciones propias del proceso de acumulación y asalarización determinan altos niveles de autoempleo de tipo «refugio», con rasgos y dinámicas de reproducción que difieren de los de la pequeña burguesía clásica. Atendiendo a tal heterogeneidad social, en nuestro estudio hemos distinguido cuatro posiciones entre los trabajadores autónomos, ubicados en posiciones intermedias pero también en la clase trabajadora informal, considerando para ello, operativamente, la calificación laboral, la posesión y el tipo de medios propios y la continuidad del empleo.

Por cuestiones que hacen a los rasgos propios de las formaciones sociales donde originalmente se desarrollaron, las tradiciones marxistas y weberianas del análisis de clase han incorporado una

insuficiente problematización sobre la heterogeneidad social de la clase trabajadora, rasgo relevante en países como el nuestro. En nuestro esquema, asumimos este orden de preocupaciones retomando el debate sobre «marginalidad» (Nun 1969), en el marco del cual se sugería vincular tal heterogeneidad con la dinámica de generación de una reserva de fuerza de trabajo (Marx 1975) excesiva para los requerimientos de la acumulación limitada de capital en las formaciones periféricas, con las derivaciones consecuentes en términos de formación de las clases en estos territorios. Con adaptaciones propias, este orden de preocupaciones fue incorporada a un esquema de clases para América Latina por Portes (2003) y en Argentina en estudios anteriores de Elbert (2020), Maceira (2011, 2018, 2021) y Piva (2020). En el esquema de clases utilizado en este capítulo, este abordaje se traduce en la discriminación interna de la clase trabajadora entre un estrato más estable, en relación salarial regulada de acuerdo a la intervención estatal vigente, y otro estrato más heterogéneo conformado tanto por asalariados no regulados como por las distintas formas de autoempleo de escasa o nula calificación y capitalización, y los trabajadores abiertamente supernumerarios de larga data.

El esquema de clases PIRC-ESA buscó discriminar clivajes de diferenciación entre clases y estratos que sean sustantivos en términos de las relaciones sociales que expresan y de la desigualdad entre condiciones materiales y oportunidades de vida que condicionan pero también que resulten significativos para la comprensión del proceso de formación de clases sociales, en aspectos tales como la autopercepción de clase y el nivel de sindicalización, la participación en conflictos laborales y acciones colectivas de protesta.

La operacionalización del esquema de clases se realizó mediante el Clasificador Nacional de Ocupaciones (CNO), elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que clasifica a las ocupaciones teniendo en cuenta la categoría ocupacional, la condición de autoridad, la calificación y el tipo de maquinaria/herramientas utilizado.

En suma, el esquema de clases PIRC-ESA distingue siete posiciones de clase:

- 1) empresarios y directivos/gerentes de nivel superior (que constituye una aproximación a la clase alta);
- 2) pequeña burguesía profesional;
- 3) directivos medios y profesionales (que en términos de estratificación social, constituyen junto con el grupo anterior las capas superiores de las clases medias);
- 4) jefes intermedios y técnicos;
- 5) pequeños propietarios y trabajadores autónomos capitalizados (ubicados, junto con el grupo anterior, como parte de la capa

inferior de las clases medias en términos de estratificación, pero tensionando esta conceptualización veremos más adelante que tienen características que los asemejan al segmento autónomo de la clase trabajadora informal);

- 6) clase trabajadora formal, compuesta por asalariados registrados en la seguridad social de la administración y servicios sociales (tradicionalmente caracterizados como trabajadores no manuales) y de la producción y circulación (asociados a la clase obrera);
- 7) clase trabajadora informal, compuesta a su vez por un segmento asalariado (de baja calificación no registrados y trabajadoras en casas particulares) y otro segmento autónomo (cuentapropistas sin capital y escasa o nula calificación, incluyendo los de carácter eventual, que realizan «changas»), y por desocupados abiertamente excedentarios.

Para abordar los objetivos del capítulo se llevó adelante un estudio basado en dos encuestas de carácter urbano. La reconstrucción de la evolución de la estructura de clases se realizó con base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), relevada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Si bien el foco estuvo puesto en el período 2015-2021, se analizaron datos del período 2003-2021, con el fin de enmarcar las tendencias recientes en una perspectiva de más largo plazo. En la reconstrucción de las tendencias en la estructura de clases se examinaron posibles cambios en el tamaño relativo de las clases y segmentos de clase, así como en sus niveles de ingresos. Para profundizar en los efectos de la pandemia de COVID-19 sobre la situación laboral y sobre la reproducción de los hogares según posición de clase, se utilizaron datos de la Encuesta Estructura social de Argentina y políticas públicas durante la pandemia por COVID-19 (ESAyPP/PISAC-COVID-19). Esta encuesta fue relevada entre octubre y diciembre de 2021, tiene un diseño muestral probabilístico, estratificado y por conglomerados, con un tamaño de muestra de 5239 hogares y personas adultas.<sup>[1]</sup>

Un punto que es preciso advertir es que si bien la perspectiva conceptual adoptada busca brindar una mirada integral sobre el conjunto de la estructura de clases, el análisis basado en encuestas de hogares tiene serias limitaciones para dar cuenta de los hogares de los grandes empresarios y los funcionarios de alto nivel, es decir las posiciones de clase alta, no solo porque son poco propensas a responder encuestas sino también por razones muestrales. Por este motivo, si bien este grupo se incorpora en el análisis, se lo considera como una categoría «residual» (Torrado 1992), y el eje principal de

---

[1] Para poder profundizar en el diseño teórico-metodológico de la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19, véase Dalle y Di Virgilio (2022).

comparación es entre las distintas posiciones intermedias y de clase trabajadora.

### 1.3 Reconfiguraciones en la estructura de clases en la doble crisis

Como han señalado con detenimiento trabajos antecedentes (Benza 2014; Dalle 2012; Maceira 2016; Palomino y Dalle 2016), tras la debacle del 2001 la estructura de clases experimenta cambios con una orientación clara, aunque con alcances y ritmos ciertamente desparejos. Como se observa en el cuadro 1.1, durante el período 2003-2014, se destacó un robustecimiento de la significación relativa del segmento asalariado formal de la clase trabajadora. Esta tendencia, que leemos como un proceso de recomposición del segmento formal de la clase trabajadora, involucró una variación positiva (de 3.3 puntos) para los hogares del estrato asalariado administrativo y de los servicios sociales, y una variación positiva aún mayor (de 6.6 puntos) para los hogares encabezados por trabajadores/as de la producción y la circulación.

Tal recomposición supuso, como contracara, una pérdida de significación de los distintos segmentos del estrato informal de la clase trabajadora, así como de los hogares encabezados por trabajadores/as que no lograban insertarse laboralmente. Esto se expresa en la variación negativa de 2.8 puntos de los hogares del segmento autónomo no capitalizado de bajas calificaciones, de 3.3 puntos de los hogares encabezados por asalariados/as no registrados, así como de 2 puntos de los hogares encabezados por trabajadores/as largamente desocupados. En total, el estrato informal de la clase trabajadora contrajo de manera relevante su significación relativa en más de diez puntos entre 2003 y 2014. De todos modos, valga anotar que, tras la expansión más larga del empleo en la historia reciente y con una intervención estatal protectora de las instituciones del trabajo, tal estrato mantenía hacia el fin de ese período un peso importante en la estructura de los hogares urbanos (27.8%), rasgo que expresa ciertamente los límites del modelo de desarrollo de esos años, y más en general, el carácter periférico de la formación social que la produce.

El proceso de recomposición relativa del estrato formal de la clase trabajadora encuentra su punto de inflexión hacia 2015. En la dirección de la hipótesis general que guía este análisis, se observa aquí una pérdida de significación relativa de la clase trabajadora formal en la estructura social que alcanza 2,1 puntos entre 2016 y 2019 (y de 5,3 puntos si consideramos desde fines de 2014),<sup>[2]</sup> involucrando,

[2] La información correspondiente al segundo semestre del 2015 no ha sido publicada por el INDEC, por este motivo, para la evaluación del período 2016-2019 se hacen estimaciones que abren el período en el IV trimestre del

**Cuadro 1.1. Distribución de los hogares según posición de clase social del jefe/a de hogar. Argentina urbana. Evolución 2003-2019, Años seleccionados.**

Posición de clase del jefe/a de hogar	2003	2006	2010	2014	2016	2019
<b>Empresarios y directivos de nivel alto</b>	<b>2.7</b>	<b>2.7</b>	<b>2.6</b>	<b>2.6</b>	<b>2.8</b>	<b>2.5</b>
<b>Clases medias/ posiciones intermedias o contradictorias</b>						
<i>Capas superiores</i>						
Pequeños empleadores y autónomos profesionales	2.7	2.2	3.1	2.6	3.3	3.5
Directivos medios y asalariados profesionales	5.3	5.3	5.9	6.0	5.8	7.5
<i>Capas inferiores</i>						
Jefes intermedios y asalariados técnicos	12.2	12.2	13.7	12.2	14.2	13.2
Pequeños empleadores no profesionales y autónomos de calificación técnica	5.2	4.9	6.1	6.2	5.4	6.5
Autónomos operativos capitalizados	8.8	9.3	8.3	8.7	9.3	10.4
<b>Clase trabajadora</b>	<b>66.6</b>	<b>65.1</b>	<b>61.9</b>	<b>63.2</b>	<b>60.4</b>	<b>58.7</b>
<b>Clase trabajadora formal</b>	<b>24.1</b>	<b>28.9</b>	<b>32.9</b>	<b>34.0</b>	<b>30.8</b>	<b>26.7</b>
Asalariados formales administrativos y de los servicios sociales, registrados y de bajas calificaciones	6.8	8.5	9.0	10.1	9.9	8.4
Asalariados formales de la producción y la circulación de baja calificación	17.4	20.4	23.8	23.9	21.0	18.4
<b>Clase trabajadora informal o precarizada</b>	<b>38.9</b>	<b>34.6</b>	<b>27.5</b>	<b>27.8</b>	<b>28.2</b>	<b>29.6</b>
Asalariados no formales de baja calificación	15.5	16.0	12.9	12.2	11.9	12.0
Trabajadoras en casas particulares	4.3	5.2	4.8	5.7	6.6	6.2
Autónomos de bajas calificaciones no capitalizados	10.2	10.3	7.7	7.5	8.1	8.3
Trabajadores en programas de empleo	5.4	1.5	0.5	0.8	0.4	0.6
Trabajadores abiertamente excedentes (Desocupados de larga duración)	3.5	1.6	1.6	1.5	1.3	2.4
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC.

en mayor medida, a los hogares del asalariado de la producción y la circulación (-5.5 puntos) seguidos por los hogares del asalariado administrativo y de los servicios sociales básicos (-1.7). Al respecto,

2016 (para una estimación de los cambios de mínima) o en el IV trimestre del 2014 (para una estimación de máxima).

la clave de inteligibilidad refiere a la ralentización general y caída en la absorción de fuerza de trabajo asalariada en su conjunto (con una caída de 2,8 puntos en la tasa de asalarización), cuestión que involucra también el estancamiento del segmento precario de la clase trabajadora (esto es, de los hogares encabezados aquí por asalariados no registrados).

Como contrapartida, en el interior de la clase trabajadora crece la significación de los hogares ubicados en posiciones más desaventajadas de la estructura social. En primer lugar, aquellos que expresaron abiertamente la crisis, cuyos jefes/as se encuentran en situación de desempleo (ya sea desempleo reciente o de larga duración, estos últimos con aumento de 1.1 punto en apenas tres años) y, junto con ellos, los segmentos de la clase trabajadora autónoma más descalificada y precaria, posición sometida a una dinámica contracíclica, en la medida en que se robustece como refugio ante el desempleo abierto en las fases contractivas, como la experimentada en ese período (con crecimiento de 2.8 puntos 2016-2019). Asimismo, y de manera consistente con este proceso, se observa el crecimiento del segmento menos capitalizado y calificado de la pequeña burguesía, lo que en la literatura suele reconocerse como la pequeña burguesía pobre. Los hogares encabezados por este tipo de cuentapropista, que se caracteriza por su limitada acumulación de capital y cuyo carácter social, vista la dinámica de la que es objeto en las últimas décadas, ameritaría quizás una discusión mayor, experimentan un crecimiento de 1.1 o 1.7 puntos (según tomemos como base el IV trimestre de 2016 o de 2014, respectivamente).

Son estas posiciones no asalariadas (esto es, el segmento autónomo de la clase trabajadora más informalizada así como la pequeña burguesía pobre), las que se robustecen en este período y son a su vez, parte de los segmentos que quedarán más fuertemente expuestos a ese riesgo social que significará posteriormente la pandemia COVID-19, frente al cual no tenían ningún aseguramiento social, justamente por su carácter no asalariado e informal.

Por otra parte, aun en el marco de las limitaciones que estadísticas con base a encuesta imponen a nuestra tarea, interesa señalar una pauta clara entre los hogares de las posiciones intermedias o contradictorias, particularmente referida al engrosamiento de aquellos que, desde una perspectiva de la estratificación social, podríamos identificar como sus estratos superiores. El segmento asalariado de este estrato, particularmente el de los hogares de directivos medios y profesionales, experimenta un engrosamiento de 1.5/1.7 puntos en el período, según tomemos como base el IV trimestre del 2014 o del 2016. El segmento autónomo de este estrato superior (esto es, los empleadores o autónomos profesionales) acompaña este crecimiento, si bien en su caso la tendencia es menos definida, experimentando

variaciones de distinto sentido en años próximos. Volviendo al segmento asalariado, si bien en términos cuantitativos su significación es menor, destaca en la medida en que contrasta con lo sucedido en el mismo período con los segmentos asalariados de la clase trabajadora. Una indagación más profunda en base a la misma fuente, indica que específicamente el crecimiento de los directivos medios asalariados se explica por lo sucedido en el ámbito estatal: los directivos estatales pasan del 29.8 % del total de directivos medios al 51.4 % en el 2019. La observación estadística entra en correspondencia con lo señalado por los analistas especializados (Castellani 2019) respecto de la simultaneidad de la multiplicación de los puestos gerenciales en el Estado con el desplazamiento de los asalariados públicos de menor rango durante el período.

La observación de las brechas en los ingresos monetarios de los hogares es una aproximación sintética a la desigualdad en las condiciones materiales que las relaciones sociales de clase determinan. Ciertamente, la magnitud de las brechas de ingreso del hogar no es ajena a la orientación que asume, por su parte, la intervención estatal en cada período y más particularmente, las políticas laborales (respecto de la actualización de los mínimos salariales y la promoción de la negociación salarial), y las políticas de seguridad social, tanto en términos de extensión de cobertura y actualización de montos jubilatorios como de otras transferencias sociales de ingresos.

Justamente, en consistencia con el sentido que asume esta intervención, el período precedente al aquí estudiado se había caracterizado por un proceso de morigeración relativa de estos profundos niveles de desigualdad. Entre el 2003 y el 2014 presenciamos una disminución de las brechas de ingresos *per cápita* familiar entre los hogares del empresariado y altos directivos y los de la clase trabajadora, así como entre las distintas posiciones intermedias o contradictorias y el asalariado formal. Particularmente, al interior de la clase trabajadora formal se destacó oportunamente la disminución de las brechas entre hogares de trabajadores formales de cuello blanco (o administrativos y de los servicios) y los obreros de la producción y la circulación. Sin desmedro de estas tendencias generales hacia una menor desigualdad de ingresos, se observó también que especialmente hacia el final del período (y con la aceleración del proceso inflacionario) volvían a marcarse las brechas entre el segmento formal y el informal de la clase trabajadora.

Interesa enfatizar ahora que la dinámica observada en el primer cuatrienio estudiado aquí (2016-2019) tiene una orientación opuesta en términos generales a la reseñada para el período previo. En estos años vuelve a incrementarse la brecha de ingresos entre los hogares encabezados por obreros registrados de la producción y la circulación (que tomamos como segmento base para la comparación), por un

**Cuadro 1.2. Brechas de ingreso *per cápita* familiar según posición de clase del jefe/a de hogar. Total de hogares, Argentina urbana. Evolución 2003-2021. Años seleccionados.**

Posición del jefe de hogar	2003	2006	2010	2014	2016	2019	2021
<b>Empresarios y directivos de nivel alto</b>	<b>6.50</b>	<b>4.27</b>	<b>2.76</b>	<b>2.25</b>	<b>3.09</b>	<b>2.95</b>	<b>2.94</b>
<b>Clases medias/ posiciones intermedias o contradictorias</b>							
<b>Capas superiores</b>							
Pequeños empleadores y autónomos profesionales	3.17	2.47	2.06	1.95	2.38	2.37	1.84
Directivos medios y asalariados profesionales	3.10	2.84	2.70	2.36	2.38	2.65	2.28
<b>Capas inferiores</b>							
Jefes intermedios y asalariados técnicos	1.81	1.76	1.74	1.52	1.53	1.65	1.62
Pequeños empleadores no profesionales y autónomos de calificación técnica	1.74	1.54	1.50	1.24	1.25	1.37	1.18
Autónomos operativos capitalizados	0.98	1.22	1.01	1.01	0.95	0.93	0.98
<b>Clase trabajadora</b>	<b>0.91</b>	<b>0.91</b>	<b>0.94</b>	<b>0.96</b>	<b>0.95</b>	<b>0.94</b>	<b>0.92</b>
<b>Clase trabajadora formal</b>	<b>1.14</b>	<b>1.13</b>	<b>1.12</b>	<b>1.14</b>	<b>1.16</b>	<b>1.13</b>	<b>1.11</b>
Asalariados formales administrativos y de los servicios sociales, registrados y de bajas calificaciones	1.51	1.44	1.43	1.48	1.54	1.41	1.31
Asalariados formales de la producción y la circulación de baja calificación	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
<b>Clase trabajadora informal o precarizada</b>	<b>0.75</b>	<b>0.71</b>	<b>0.76</b>	<b>0.73</b>	<b>0.68</b>	<b>0.74</b>	<b>0.68</b>
Asalariados no formales de baja calificación	0.79	0.76	0.71	0.73	0.76	0.76	0.71
Trabajadoras en casas particulares	0.86	0.65	0.73	0.69	0.61	0.68	0.62
Autónomos de bajas calificaciones no capitalizados	0.69	0.67	0.70	0.69	0.63	0.66	0.59
Trabajadores en programas de empleo	0.30	0.31	0.58	0.49	0.62	0.55	0.44
<b>Trabajadores abiertamente excedentes (Desocupados de larga duración)</b>	<b>0.68</b>	<b>0.69</b>	<b>0.77</b>	<b>0.55</b>	<b>0.57</b>	<b>0.45</b>	<b>0.44</b>
<b>Total</b>	<b>1.37</b>	<b>1.29</b>	<b>1.27</b>	<b>1.18</b>	<b>1.21</b>	<b>1.26</b>	<b>1.20</b>

Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC.

lado, y los hogares del empresariado, de los altos directivos y de las posiciones intermedias, por otro (véase cuadro 1.2). La magnitud de este incremento supone en pocos años un retroceso de más de una década en términos de las tendencias hacia una menor desigualdad de ingresos entre los hogares de las distintas clases. A su vez, y reforzando lo anterior, el aumento de la desigualdad de ingresos respecto de los hogares de la clase trabajadora formal es mayor

en favor del empresariado y el estrato superior de las posiciones intermedias que del estrato inferior de dichas posiciones.

Por su parte, las brechas entre los hogares del estrato formal y del estrato informal de la clase trabajadora tienden a mantenerse. Esta pauta puede estar asociada con varios factores. En primer lugar, en una etapa contractiva y bajo una intervención estatal de pauta neoliberal como la estudiada, corresponde relacionar este comportamiento con la consecuente menor capacidad sindical para sostener el poder de compra del salario registrado. Asimismo, dentro de este estrato, se repliegan en mayor medida segmentos con inserciones ocupacionales en ramas de la producción, de salarios más altos y mayor capacidad de negociación sindical que el segmento de asalariados de la esfera de la circulación. Valga, sin embargo, nuevamente establecer un matiz referido a la tendencia hacia la ampliación de las brechas de ingresos, leve pero presente, respecto de los grupos abiertamente excluidos de la inserción laboral (aquí representados en los desocupados de larga duración y los perceptores de programas), ensanchamiento que se vinculará a su vez con lo que será el aumento de los niveles de indignancia que se registraron en el cuaternio.

#### **1.4 Efectos de la crisis COVID-19 sobre las ocupaciones y las condiciones de trabajo**

Si a principios de 2020 Argentina estaba inmersa en una situación de estancamiento económico, altos niveles de inflación y deterioro social, la llegada del COVID-19 vino a agudizar este escenario. En los primeros meses de pandemia, en el marco de las primeras medidas de aislamiento para reducir la propagación del virus, la economía se desplomó. En el segundo trimestre de 2020 el PBI cayó un 19 % interanual, el peor desempeño desde que hay registro (CEP, 2020). Si bien en los siguientes meses la economía comenzó a recuperarse, el saldo para el promedio del 2020 fue de una contracción del PBI de 9.9 %, una caída mayor a la observada para el promedio de la región latinoamericana (8 %) y los países desarrollados (5.8 %) (Naciones Unidas 2021).

La caída de la economía tuvo efectos profundos sobre el mercado laboral. En forma similar a lo que ocurrió en otros países de América Latina (Benza y Kessler 2021), la contracción económica se tradujo, en un primer momento, en una pérdida abrupta de puestos de trabajo producto de la suspensión de buena parte de las actividades productivas y una caída inédita de la tasa de actividad derivada del contexto de restricción a la movilidad. Entre el último trimestre de 2019 y el segundo de 2020, cuando se registró el mayor impacto de la crisis, la contracción del empleo se expresó a nivel nacional en una caída de 10 puntos porcentuales en la tasa de ocupación y de

más de 9 puntos de la tasa de actividad. El aumento de la tasa de desocupación, por su parte, fue de 4 puntos. Este panorama comenzaría a mejorar a partir del segundo semestre de 2020. No obstante, al cuarto trimestre de 2020 las tasas de actividad y empleo continuaban en niveles inferiores que los de un año atrás, y aún representaban mínimos históricos para ese trimestre (Dalle y Actis Di Pasquale 2021).

Sin embargo, como han mostrado estudios previos, las tendencias negativas en materia laboral no afectaron a todos los trabajadores por igual (Dalle y Actis Di Pasquale 2021; Maceira 2021; Maldovan Bonelli *et al.* 2021). Las consecuencias fueron mayores en el sector informal que en el formal, debido a que, como veremos más adelante, fueron desigualmente alcanzados por las políticas implementadas por el gobierno nacional para sostener empleo. Asimismo, fueron más afectados aquellos que se desempeñaban en actividades económicas de contacto intensivo y que experimentaron más restricciones por las medidas de prevención, como el comercio, los hoteles y restaurantes, el servicio doméstico y los servicios personales en general. También las mujeres se vieron particularmente perjudicadas, especialmente por su elevada concentración en las actividades informales más golpeadas por la crisis (en ramas como servicio doméstico, comercio al por menor, alojamiento y servicios de comida).

Desde una perspectiva de clases, ¿quiénes fueron los más afectados en sus condiciones de trabajo e ingresos? En la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 se diseñó una sección específica con una batería de indicadores que registró cómo impactó la pandemia de COVID-19 en el empleo y las condiciones de trabajo<sup>[3]</sup> según posiciones de clase, incorporando a su vez, otros clivajes de desigualdad como el género y la región de residencia.

Entre los indicadores construidos, incluimos por un lado cambios que claramente tenían un carácter negativo («despidos», «cierre de negocios», «caída del salario o ingreso», «suspensiones con caída de salario», «disminución de las ventas y los clientes»), y otros cuyo efecto no podía de antemano clasificarse como negativo pero que sí expresan modificaciones en las condiciones de desempeño ocupacional («cambio a modalidad teletrabajo o mixta», «suspensiones

---

[3] En esta sección tomamos como unidad los individuos-encuestados mayores de 18 años económicamente activos en vez de los hogares, debido a dos razones: i. el/la encuestado/a podía reconstruir mejor los efectos de la pandemia en sus condiciones laborales en base a sus propias experiencias que las de el/la principal sostén del hogar; ii. atendiendo a la ya reseñada heterogeneidad con que la crisis ha impactado en la situación laboral de los distintos miembros del hogar, tomando a los individuos mayores de 18 años nos aproximamos al análisis del conjunto de la fuerza de trabajo del hogar.

o reducción de horas sin pérdida de salario», «reconversión del negocio o actividad», «mantuvo el trabajo pero en otro sector», entre otros). Para cada indicador se registraron los cambios experimentados en la pandemia y su persistencia al momento del registro (fines de 2021).

Comenzamos el análisis realizando dos medidas resumen de los efectos de la pandemia en las condiciones laborales: 1) efectos negativos y 2) otros efectos. Cada uno de ellos sintetiza las respuestas positivas en al menos un indicador de la batería de preguntas correspondiente a cada dimensión. Los tabulados realizados permiten observar los efectos agregados como en cada uno de los indicadores en forma independiente.

El cuadro 1.3 presenta los efectos negativos de la pandemia sobre las condiciones de trabajo según posición de clase. En primer lugar, se observa que la pandemia tuvo un mayor impacto negativo sobre los dos segmentos autónomos de las clases medias, tanto la pequeña burguesía profesional (64.9 %) como los trabajadores autónomos con cierto capital (79.2 %) así como sobre la clase trabajadora informal, en particular su segmento autónomo, compuesto por trabajadores cuenta propia de oficio sin equipo propio (75.4 %). La emergencia sociosanitaria y las medidas de prevención disminuyeron la circulación, lo cual implicó un fuerte impacto sobre todas aquellas actividades por cuenta propia que requieren «transitar las calles de las ciudades» y la «sociabilidad cara a cara».

En la clase trabajadora informal, el mayor impacto negativo lo tuvieron los trabajadores de oficio sin capital, pero los trabajadores asalariados sin registro en la seguridad social también se vieron afectados con despidos, pérdida de salario y suspensiones con caída del salario (47.2 %).

Todos los grupos ocupacionales asalariados registrados en la seguridad social tuvieron mayor estabilidad durante la crisis de la pandemia, evidenciando fundamentalmente el impacto de las políticas implementadas por el gobierno nacional hacia el sector (principalmente, prohibición de despidos y el programa ATP). Sin embargo, es posible observar efectos diferenciales según el carácter socioocupacional. Los asalariados formales de la producción y circulación, generalmente vinculados al núcleo de la clase obrera, experimentaron en mayor medida disminución del salario y suspensiones o reducción de horas con reducción de salario (25.3 %) que los trabajadores administrativos y de servicios sociales (10.9 %). Este último grupo, con una amplia inserción en el sector público, destaca por su estabilidad durante la crisis sociosanitaria. El segmento de trabajadores técnicos y jefes intermedios o de rango inferior tuvieron efectos negativos (21.3 %) más cercanos a la clase obrera; en este segmento encontramos docentes y personal de salud de amplia

**Cuadro 1.3. Efectos negativos de la pandemia en las condiciones laborales en 2020 según posición de clase (en %). Población activa mayor de 18 años. Argentina, 2021.**

	Efectos negativos sobre condiciones laborales							Índice resumen efectos negativos
	Posiciones asalariadas			Posiciones autónomas				
Posiciones de clase	Despido/renuncia forzada	Suspendido o reducción de horas c/ reducción salario	Suspendido sin pago de salario	Le redujeron el salario	Cierre negocio, taller, empresa/ dejó de trabajar antes	No cerró, pero bajaron ventas/ pedidos/ci entes	Disminuyó margen de ganancia	
<b>Empresarios</b>	0	0	0	0	17,6	26,5	44,1	44,1
Directivos y gerentes de nivel alto	0	0	0	0	26,1	39,1	65,2	65,2
<b>Clases medias/ Posiciones intermedias o contradictorias</b>								
<b>Capa superior</b>	1,7	4,5	0,7	6,5	8,9	10,7	18,6	34,0
Pequeños empleadores y cuentapropistas profesionales	2,8	7,3	1,1	10,6	27,1	32,0	56,3	57,6
Directivos medios y asalariados profesionales								14,2
<b>Capa inferior</b>	1,7	7,5	1,9	8,3	13,7	13,8	20,6	40,5
Jefes intermedios y asalariados de calificación técnica	3,0	13,4	3,3	15,2	33,0	33,5	49,9	21,9
Pequeños empleadores y ctatrop. de calif. técnica y operativos con capital								65,3
<b>Clase trabajadora</b>								
<b>Clase trabajadora formal</b>	4,6	14,3	2,1	13,4				20,5
Asalariados formales administrativos y de los serviciosoc., baja calificación	2,9	6,3	2,1	6,3				10,9
Asalariados formales de la producción y circulación, baja calificación	5,4	18,5	2,0	17,2				25,6
<b>Clase trabajadora informal</b>	14,1	16,1	12,1	19,1	9,8	5,8	14,9	50,7
Cuentapropistas operativos sin capital					43,8	42,1	60,3	77,4
Asalariados no formales de baja calificación	14,8	16,7	12,9	22,7				47,2
Trabajadores en casas particulares	7,9	16,3	12,2	13,6				36,7
Cuentapropistas de baja calificación y tipo changas					32,4	36,5	55,6	66,0
Perceptores de planes de empleo								12,0
<b>Total</b>	7,6	13,8	5,6	15,4	32,6	34,9	51,9	38,9

Fuente: elaboración propia en base a ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

inserción en el sector público, pero también técnicos industriales y supervisores de empresas privadas.

En el cuadro 1.4, se observa que las clases medias tuvieron mayores cambios en las condiciones laborales sin pérdida del empleo o caída de ingresos. El principal efecto en los grupos ocupacionales asalariados formales fue el paso a la modalidad teletrabajo o mixta. Esta pauta fue más acentuada a mayor jerarquía en la estructura de clases. En los directivos y profesionales fue de 54 %, en los técnicos y docentes de 43 %, y en los empleados administrativos alcanzó un tercio (33 %). En los trabajadores asalariados de la producción y la circulación, asociados generalmente al trabajo manual, este porcentaje apenas alcanza el 12 %. Esto se debe que por el tipo de trabajo que desarrolla, el núcleo de la clase obrera fue considerado «esencial» y por ende su presencia en los lugares de trabajo fue necesaria durante los meses más estrictos de las políticas de ASPO y DISPO.

Entre los grupos ocupacionales autónomos, el principal efecto fue la reconversión del trabajo en el mismo rubro, siendo los de mayor capital quienes tuvieron mayores posibilidades de reconvertir su actividad. Asimismo, fue entre los grupos más calificados de trabajadores autónomos, en particular, la pequeña burguesía profesional, donde fue mayor el porcentaje de pasaje a la modalidad teletrabajo o mixta (36.1 %).

Al analizar la segunda batería de preguntas, referidas a la persistencia de estos cambios al momento del relevamiento (fines de 2021) observamos que en general los efectos negativos sobre las condiciones laborales se habían revertido en más del 75 % para todos los segmentos de clase. En este marco general, sin embargo, para la clase trabajadora informal persistían con mayor peso relativo la disminución del salario, la caída de trabajos/clientes y la falta de empleo. En cambio, en el otro extremo, en la clase alta y las clases medias de nivel superior sobre todo de carácter asalariado, se mantiene la modalidad de teletrabajo o mixta que en varias áreas laborales «parece haber llegado para quedarse», e incluso es una modalidad preferida por jóvenes profesionales y numerosas empresas. Las clases medias autónomas reabrieron en gran medida sus pequeñas empresas (negocios familiares, talleres), aunque muchos tuvieron que reconvertir su actividad y avanzar hacia modalidades de ventas *on line* y teletrabajo. La mitad señaló que la disminución del margen de ganancia se mantenía, sobre todo en el segmento autónomo de escaso capital que tiene una posición pendular entre las clases medias bajas y la clase trabajadora. En la clase trabajadora formal, tanto en los empleados administrativos como en los trabajadores de la producción y la circulación, el principal efecto fue la reducción de horas sin pérdida de salario.

Cuadro 1.4. Otros efectos de la pandemia en las condiciones laborales en 2020 según posición de clase (en %). Población activa mayor de 18 años. Argentina, 2021.

	Otros efectos sobre condiciones laborales						Índice resumen otros efectos
	Posiciones asalariadas			Posiciones autónomas			
Posiciones de clase	Suspendido o reducción de horas y/ pérdida salario	Mantuvo su trabajo pero cambio actividades o áreas	Mantuvo su trabajo pero haciendo teletrabajo	Reconversión del trabajo en el mismo rubro	Mantuvo su trabajo pero haciendo teletrabajo		
<b>Empresarios</b>	<b>2,9</b>	<b>5,9</b>	<b>20,6</b>	<b>2,9</b>	<b>5,9</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
Directivos y gerentes de nivel alto	8,3	16,7	58,3	4,5	30,4	43,5	63,6
<b>Clases medias/Posiciones intermedias o contradictorias</b>							
<b>Capa superior</b>	<b>3,8</b>	<b>16,8</b>	<b>33,3</b>	<b>2,1</b>	<b>7,2</b>	<b>56,0</b>	<b>56,0</b>
Pequeños empleadores y cuentapropistas profesionales	6,1	27,4	54,2	6,2	21,6	45,4	62,3
Directivos medios y asalariados profesionales							
<b>Capa inferior</b>	<b>4,4</b>	<b>11,0</b>	<b>25,1</b>	<b>3,7</b>	<b>9,1</b>	<b>44,6</b>	<b>44,6</b>
Jefes intermedios y asalariados de calificación técnica	7,8	19,5	44,6	9,0	22,1	54,3	31,8
Pequeños empleadores y ctatrop. de calif. técnica y operativos con capital							
<b>Clase trabajadora</b>							
<b>Clase trabajadora formal</b>	<b>17,4</b>	<b>14,2</b>	<b>19,4</b>			<b>39,6</b>	<b>39,6</b>
Asalariados formales administrativos y de los serviciosoc., baja calificación	18,9	12,6	33,2			49,2	
Asalariados formales de la producción y circulación, baja calificación	16,5	14,9	12,0			34,6	
<b>Clase trabajadora informal</b>	<b>12,1</b>	<b>15,2</b>	<b>4,3</b>	<b>2,0</b>	<b>4,5</b>	<b>24,6</b>	<b>24,6</b>
Cuentapropistas operativos sin capital				6,6	23,8	25,0	
Asalariados no formales de baja calificación	9,1	17,7	5,0		3,3	27,7	
Trabajadoras en casas particulares	17,4	8,4	0			23,2	
Cuentapropistas de baja calificación y tipo changas				8,3	11,4	13,8	
Perceptores de planes de empleo	26,9	34,6	23,1			37,5	
Total	<b>11,9</b>	<b>16,9</b>	<b>24,8</b>	<b>7,8</b>	<b>20,4</b>	<b>38,1</b>	<b>38,1</b>

Fuente: elaboración propia en base a ESAyPP/PIBAC-COVID-19 (2021).

Para precisar el efecto neto de la posición de clase social, así como de otros clivajes de desigualdad como el género y la región de residencia, realizamos un análisis de regresión logística binaria multivariada.<sup>[4]</sup>

El cuadro 1.5 muestra que la clase social fue el principal clivaje de desigualdad en los efectos negativos sobre el trabajo. Los resultados permiten observar que los dos segmentos autónomos de clases medias y la clase trabajadora precarizada fueron los que experimentaron mayores efectos laborales negativos: cierre de negocio, comercio o taller; dejar de trabajar; caída de ventas y clientes, o disminución de las ganancias/ingresos. La variable sexo no muestra efectos significativos, ni en el efecto bruto ni neto, y la región de residencia parece tener cierta influencia siendo las regiones Pampeana, Centro y NEA las menos afectadas en términos relativos – con efectos significativos –. No obstante, la ganancia obtenida en el modelo cuando se introduce esta última variable es muy baja, lo que nos lleva a afirmar que los efectos laborales de la crisis sociosanitaria fueron principalmente una cuestión de desigualdad de clase.

Los resultados del segundo modelo de regresión (véase cuadro 1.6) muestran que la clase social también tiene mayor relevancia que las otras variables independientes consideradas cuando se analizan los efectos sobre las condiciones laborales que no implicaron pérdida del empleo o caída del ingreso/salario. Las clases medias asalariadas, principalmente las capas superiores, tuvieron mayores chances relativas del pasaje a teletrabajo, y las clases medias autónomas mayores chances relativas de reconvertir su actividad o negocio, lo que con frecuencia estuvo vinculado al pasaje al teletrabajo y las ventas *on line*.

Asimismo, las diferencias significativas que el género imprime en la estructura socioocupacional determinan efectos significativos: las mujeres experimentaron en mayor medida que los varones, otros cambios en las condiciones de trabajo principalmente el paso a la modalidad teletrabajo o mixta. La región de residencia muestra solo el efecto significativo positivo de NOA (estas pautas serán trabajadas

---

[4] En este modelo, la estimación del coeficiente beta exponenciado permite conocer las chances relativas (odds ratio) de haber experimentado un fenómeno («efectos negativos en el trabajo durante la pandemia» (véase cuadro 1.5) y «otros efectos en el trabajo» (véase cuadro 1.6), entre las distintas categorías de la variable independiente (clase social), controlando por las otras variables independientes introducidas en el modelo (género y lugar de residencia). En la primera columna, incluimos el efecto bruto de cada variable, y en la segunda aplicamos el modelo multivariado para captar efectos netos en la variable dependiente de la clase social, el género y la región de residencia.

**Cuadro 1.5. Regresión logística binaria de efectos negativos en las condiciones laborales según posición de clase, sexo y región de residencia. Población económicamente activa mayor de 18 años. Argentina urbana, 2021 (n=3172).**

Variables independientes	Efectos brutos (Exp B)	Modelo Efectos netos (Exp B)
<b>Clase social y segmento de clase</b>		
<b>Empresarios</b>	1,032	1,098
Directivos/gerentes nivel alto	0,007*	0,006*
<b>Clases medias / Posiciones intermedias/contradictorias</b>		
<i>Capas superiores</i>		
Pequeños empleadores (5-9) y profesionales autónomos	1,122	1,144***
Directivos y profesionales asalariados	0,088***	0,089***
<i>Capas inferiores</i>		
Jefes, supervisores y técnicos asalariados	0,149***	0,148***
Pequeños empleadores (1-4) cuentapropia con escaso capital	0,999	0,992
<b>Clase trabajadora formal</b>		
Empleados/as de rutina formales	0,064***	0,063***
Obreros/as formales	0,183***	0,180***
<b>Clase trabajadora informal</b>		
Obreros/as informales	0,419***	0,428***
Trabajadores cuentaprop. con oficio sin capital y tipo changas	.....	.....
<b>Sexo (Ref. varones)</b>		
Varones	.....	.....
Mujeres	0,891	0,983
<b>Región (Ref. AMBA)</b>		
AMBA	.....	.....
Pampeana	0,685**	0,728*
Centro	0,653***	0,615***
Cuyo	0,932	1,055
NOA	0,877	0,986
NEA	0,614**	0,640*
Patagonia	0,679*	0,913
Chi <sup>2</sup>		574,3
Grados de libertad		16
R cuadrado de Nagelkerke		0,229

\*\*\* p<0,001; \*\* p<0,01; \* p<0,05; ° p<0,1. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

con mayor profundidad en el capítulo 2). Al igual que en el modelo anterior, el género y la región tienen menor influencia sobre la variable dependiente (los valores del pseudo R<sup>2</sup> son sustancialmente menores).

En suma, las pautas observadas sugieren que la clase social de pertenencia es una variable primordial para analizar el tipo de efectos

**Cuadro 1.6. Regresión logística binaria, otros efectos en las condiciones laborales. Población económicamente activa mayor de 18 años. Argentina urbana, 2021 (n=3172).**

VARIABLES INDEPENDIENTES	Efectos brutos (Exp B)	Modelo Efectos netos (Exp B)
<b>Clase social y segmento de clase</b>		
<b>Empresarios</b>	2,815*	2,926*
<b>Directivos/gerentes nivel alto</b>	6,105**	6,230**
<b>Clases medias / Posiciones intermedias/contradictorias</b>		
<i>Capas superiores</i>		
Pequeños empleadores (5-9) y profesionales autónomos	3,175***	3,237***
Directivos y profesionales asalariados	6,189***	5,933***
<i>Capas inferiores</i>		
Jefes, supervisores y técnicos asalariados	4,468***	4,441***
Pequeños empleadores (1-4) cuentapropia con escaso capital	1,749**	1,803**
<b>Clase trabajadora formal</b>		
Empleados/as de rutina formales	3,616***	3,587***
Obreros/as formales	1,988***	2,097***
<b>Clase trabajadora informal</b>		
Obreros/as informales	1,343°	1,318°
Trabajadores cuentaprop. con oficio sin capital y tipo changas	.....	.....
<b>Sexo (Ref. varones)</b>		
Varones	.....	.....
Mujeres	1,372***	1,337***
<b>Región (Ref. AMBA)</b>		
AMBA	.....	.....
Pampeana	1,172	1,101
Centro	0,924	0,916
Cuyo	1,206	1,104
NOA	1,571***	1,566**
NEA	1,293	1,221
Patagonia	1,443*	1,239
Chi²		252,4
Grados de libertad		16
R cuadrado de Nagelkerke		0,106

\*\*\* p<0,001; \*\* p<0,01; \* p<0,05; ° p<0,1. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

sobre las condiciones laborales en tiempos de la emergencia socio-sanitaria. Por un lado, para las clases medias asalariadas el principal efecto fue el pasaje a la modalidad teletrabajo, que en perspectiva comparada expresa una situación más protegida frente a otras consecuencias como los despidos y la disminución del salario; la clase obrera formal, si bien sufrió caída del salario y suspensiones, fue declarada «esencial», y por ende perdió menos el trabajo y el salario,

aunque esto significó, al mismo tiempo, que estuviera más expuesta al contagio de COVID-19.

## 1.5 Políticas públicas e ingresos durante la pandemia

Frente a la crisis desatada por la pandemia, el Estado desplegó un conjunto de medidas destinadas a atenuar su impacto en materia laboral y social. En efecto, durante 2020 el Estado nacional amplió o reforzó políticas ya existentes e implementó otras nuevas. De un lado, diversas medidas buscaron sostener las relaciones laborales formales, entre las que destacan muy especialmente la prohibición de los despidos y los subsidios a las nóminas salariales de empresas privadas a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que llegó a financiar hasta un 50 % de los salarios netos de los trabajadores. De otro, se aplicaron medidas para brindar seguridad económica a los hogares y personas de muy bajos ingresos y de la economía informal, sobre todo bajo la forma de transferencias monetarias y acceso a alimentos. En esta línea, se aplicó un bono extra para jubilaciones y pensiones, y se reforzaron y extendieron programas pre-existentes, como la Asignación Universal por Hijo, la Tarjeta Alimentar y la asistencia alimentaria a través de la distribución directa de productos a los hogares o la provisión de insumos a comedores. Asimismo, a través del llamado Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), se implementaron transferencias a grupos de población no necesariamente alcanzados por los programas anteriores, principalmente a familias con integrantes en la economía informal y desempleados. El programa IFE, si bien acotado en el tiempo, tuvo una magnitud inédita, al alcanzar a alrededor de 9 millones de beneficiarios que recibieron tres subsidios a lo largo de 2020. A estas políticas del gobierno nacional, se sumaron todo un conjunto de medidas implementadas por los gobiernos provinciales, como refuerzos alimentarios para los hogares pobres o la suspensión de ejecuciones hipotecarias y de los pagos de planes de viviendas sociales (Díaz Langou *et al.* 2021; RIPPSSO 2020).

Si bien las políticas desplegadas por el Estado estuvieron lejos de revertir la crisis, permitieron contener la pérdida de puestos de trabajo formales y, en menor medida, atenuar la caída en el bienestar material de los hogares. En relación con los efectos de las políticas laborales, estudios antecedentes para el principal aglomerado urbano (Maceira 2021) estimaron en base a un análisis de panel con datos de la EPH que la retención interanual de empleo para el asalariado registrado entre los cuartos trimestres 2019-2020 fue de 85.6 %, es decir, un porcentaje similar al promedio de retención de este segmento para los cuatro años del período precedente. En cuanto al impacto de la intervención estatal sobre el bienestar, Díaz Langou *et al.* (2021)

estiman que sin las medidas de transferencias de ingresos implementadas, durante el primer semestre de 2020 la tasa de pobreza habría aumentado 2,6 puntos porcentuales más, es decir, 1,2 millones más de personas.

Ahora bien, ¿qué clases y segmentos de clase fueron alcanzados por las políticas estatales? El cuadro 1.7 brinda algunos indicios sobre esto. Los datos, que provienen de la encuesta ESAyPP, ponen el foco sobre las que fueron las dos principales medidas aplicadas por el Estado nacional durante la pandemia: el salario complementario por el programa ATP y el IFE. Como puede observarse, quienes recibieron en mayor proporción salarios complementarios del ATP fueron los dos segmentos de la clase trabajadora formal (12%), y los segmentos de la clase media asalariada, los profesionales (12%) y los técnicos (11%), entre los cuales es alta la proporción que se desempeña bajo relaciones laborales formales. La encuesta indagó por las personas que fueron beneficiarias del ATP al recibir salarios complementarios, pero no por las empresas o actividades beneficiarias: es probable que el complemento del mayor alcance del programa entre trabajadores formales sea una cobertura también más elevada entre los empleadores de sectores medios y, fundamentalmente, de clase alta.

En contraste, el IFE se concentró en los desocupados y en la clase trabajadora informal, alcanzando en los dos casos una cobertura mayor al 40% (42% y 45%, respectivamente). No obstante, el IFE también alcanzó a parte de las clases intermedias: el porcentaje de beneficiarios fue muy elevado entre los trabajadores autónomos con poco nivel de capitalización (39%), que como vimos en la sección anterior, fue uno de los grupos más golpeados en sus condiciones laborales durante la pandemia.

La ampliación de la intervención del Estado en un contexto de pérdida de empleos y caída de los ingresos laborales dio lugar a modificaciones en el peso del mercado y del Estado en la resolución del bienestar material de los hogares. Esto queda reflejado en la evolución de las fuentes de ingresos de los hogares durante la pandemia. De acuerdo con datos de la EPH, en el último trimestre de 2019 alrededor de 80% de los hogares recibía ingresos por fuentes laborales, mientras 15% percibía ingresos por transferencias públicas. En el segundo trimestre de 2020, en el momento de mayor impacto de la pandemia, el porcentaje de hogares con ingresos laborales se redujo a 73%, mientras el que recibía transferencias públicas aumentó a 25%. Esta situación, sin embargo, no se mantuvo en el tiempo; se fue revirtiendo a medida que el mercado laboral comenzó a recomponerse y la ayuda estatal menguó. Como resultado, hacia fines de 2021 el porcentaje de hogares con ingresos laborales y con transferencias públicas volvió a ser similar al de antes de la pandemia (Benza y Arancio 2022).

**Cuadro 1.7. Porcentaje de personas de 18 años y más que recibieron el Ingreso Familiar de Emergencia o el salario complementario por ATP según posición de clase. Argentina urbana, 2021.**

Posición de clase	IFE	ATP
<b>Empresarios y directivos de nivel alto</b>	<b>13.9</b>	<b>0.4</b>
<b>Posiciones de clase media/intermedias o contradictorias</b>	<b>20.7</b>	<b>7.3</b>
<b>Capas superiores</b>	<b>6.4</b>	<b>7.7</b>
Pequeños empleadores y cuentapropistas profesionales	8.0	0.0
Directivos medios y asalariados profesionales	5.5	12.3
<b>Capas inferiores</b>	<b>25</b>	<b>7.2</b>
Jefes intermedios y asalariados de calificación técnica	13.7	11.4
Peq. empleadores y ctaprop. de calif. técnica y operativos con capital	38.9	1.5
<b>Clase trabajadora</b>	<b>31.3</b>	<b>5.6</b>
<b>Clase trabajadora formal</b>	<b>9.3</b>	<b>11.9</b>
Asalariados formales administ. y de los serv. soc., baja calificación	4.0	7.7
Asalariados formales de la prod. y circulación, baja calificación	12.2	14.2
<b>Clase trabajadora informal</b>	<b>44.6</b>	<b>1.8</b>
Cuentapropistas operativos sin capital	40.5	3.6
Asalariados no formales de baja calificación	45.0	1.8
Trabajadoras en casas particulares	42.3	2.8
Cta. propistas de baja calificación y tipo changas	44.9	0.7
Perceptores de planes de empleo	56.7	0.0
<b>Desocupados</b>	<b>41.6</b>	<b>1.2</b>
<b>Inactivos</b>	<b>15.8</b>	<b>0.4</b>

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

Sin embargo, las fuentes de ingresos que aportan al bienestar de los hogares no son las mismas a lo largo de la estructura social. Los datos del cuadro 1.8 muestran el porcentaje de hogares que hacia finales de 2021 recibía ingresos de distintas fuentes según la posición del principal sostén del hogar. Por un lado, y como es de esperar, hay patrones generales según la condición de actividad. Mientras la inmensa mayoría de los hogares con el principal sostén ocupado recibía ingresos provenientes del trabajo (92 % o más), entre los hogares con el principal sostén inactivo ese porcentaje era muy menor (33 %), en tanto la inmensa mayoría – aunque hay que advertir que no todos – percibía jubilaciones y pensiones (89 %). Por su parte, los hogares

**Cuadro 1.8. Fuentes de ingresos de los hogares según posición de clase. Argentina urbana, 2021 (en %).**

	A	B	C	D	E
<b>Empresarios y directivos de nivel alto</b>	<b>97.5</b>	<b>7.9</b>	<b>7.6</b>	<b>3.9</b>	<b>8.1</b>
<b>Posiciones de clase media/intermedias o contradictorias</b>	<b>97.8</b>	<b>13.2</b>	<b>8.8</b>	<b>2.3</b>	<b>4.4</b>
<b>Capas superiores</b>	<b>98.9</b>	<b>11.0</b>	<b>2.8</b>	<b>2.1</b>	<b>1.9</b>
Peq. empleadores y cta. prop. profesionales	100.0	12.8	1.3	1.5	0.0
Directivos medios y asalariados profesionales	98.2	9.9	3.7	2.6	3.2
<b>Capas inferiores</b>	<b>97.5</b>	<b>13.7</b>	<b>10.3</b>	<b>2.3</b>	<b>5.1</b>
Jefes intermedios y asalariados de calif. técnica	97.6	12.5	8.0	2.2	4.6
Peq. empleadores y ctaprop. de calif. técnica y operativos con capital	97.2	15.6	13.9	2.5	5.9
<b>Clase trabajadora</b>	<b>94.7</b>	<b>14.6</b>	<b>24.1</b>	<b>1.0</b>	<b>5.9</b>
<b>Clase trabajadora formal</b>	<b>95.9</b>	<b>14.3</b>	<b>10.0</b>	<b>1.4</b>	<b>4.0</b>
Asalariados formales administ. y de los serv. soc., baja calificación	97.3	13.4	4.1	3.0	7.5
Asalariados formales de la prod. y circulación, baja calificación	95.4	14.6	12.5	0.7	2.5
<b>Clase trabajadora informal</b>	<b>93.6</b>	<b>14.8</b>	<b>36.4</b>	<b>0.7</b>	<b>7.6</b>
Cuentapropistas operativos sin capital	94.1	16.5	35.1	0.5	9.4
Asalariados informales de baja calificación	95.1	9.8	33.3	0.6	7.9
Trabajadoras en casas particulares	93.9	19.2	41.6	1.0	8.7
Cta. propistas de baja calificación y tipo changas	92.2	22.3	38.9	1.0	5.2
Perceptores de planes de empleo	72.3	9.8	44.3	0.0	1.1
<b>Desocupados</b>	<b>46.8</b>	<b>19.2</b>	<b>35.2</b>	<b>1.5</b>	<b>37.7</b>
<b>Inactivos</b>	<b>32.6</b>	<b>89.0</b>	<b>7.1</b>	<b>4.0</b>	<b>5.0</b>

A: ingresos laborales; B: jubilaciones o pensiones; C: transferencias públicas (Programas transferencias monetarias (AUH, AUE), programas de empleo, seguro de desempleo, tarjeta alimentaria); D: rentas (alquileres, rentas financieras, ganancias); E: transferencias privadas (aportes de familiares u otras personas). Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

con el principal sostén desocupado que percibían ingresos laborales eran menos de la mitad (47%), lo que indica que en la mayoría de los casos no contaban con otros miembros en el mercado de trabajo. En estos hogares, era muy importante el porcentaje de perceptores de transferencias públicas (35%), pero también de transferencias privadas (38%), producto de ayudas económicas de familiares y de otras personas que no viven en el hogar.

Más allá de estos patrones generales, hay diferencias destacables en las fuentes de ingresos de los hogares con el principal sostén ocupado, en particular en lo referido a la extensión de las rentas y transferencias públicas. Los hogares que reciben ingresos de rentas como alquileres, inversiones o intereses son muy pocos y su número es más elevado entre las posiciones de clase alta (4%) y clase media (2%). Por su parte, las transferencias públicas se concentran en los

hogares de la clase trabajadora informal. Si bien en los hogares de este segmento – al igual que en el resto con el principal sostén ocupado – son una inmensa mayoría los que reciben ingresos por fuentes laborales (94 %), en este caso también son muchos los que dependen de transferencias del Estado para su bienestar material (36 %). Entre estas transferencias, destaca especialmente la alta incidencia de la Asignación Universal por Hijo (percibida por el 28 % de los hogares del segmento), así como de las ayudas alimentarias mediante la Tarjeta Alimentar (20 %), dos programas que ya tenían una cobertura importante y que como mencionamos fueron ampliados frente a la crisis de la pandemia. En contraste, el peso de las transferencias públicas es reducido en el segmento formal de la clase trabajadora (10 %), así como en las clases medias (9 %), si bien en este último sector hay diferencias internas; en particular, en el segmento autónomo con poco capital hay un porcentaje considerable que también recibe transferencias públicas (14 %).

En suma, durante la pandemia, en un contexto en que la posibilidad de obtener recursos mediante el mercado laboral se vio seriamente afectada, el papel del Estado adquirió más relevancia en la reproducción material de los hogares. Las transferencias estatales estuvieron dirigidas a apuntalar la situación de los hogares de menores recursos afectados por la crisis – los encabezados por desocupados, los de la clase trabajadora informal y también los del segmento autónomo de menor capitalización de la clase media – pero además alcanzaron a otros sectores; en particular, a través del programa ATP la ayuda llegó a los asalariados formales de la clase trabajadora y de la clase media, y a los empresarios que ocupan las posiciones más altas en la estructura social. En otras palabras, la acción del Estado se desplegó a lo largo de la estructura social, alcanzando a distintas posiciones de clase. No obstante, hay que advertir que este mayor peso del Estado en el bienestar material de los hogares no implicó, necesariamente, que la asistencia haya sido de igual magnitud, ni igualmente efectiva. En tanto las políticas estatales fueron distintas en términos de la cantidad y tipo de beneficiarios, los presupuestos involucrados y su continuidad en el tiempo, el volumen de las transferencias estatales recibidas por las distintas clases fueron desiguales, un punto que, sin embargo, queda por profundizar.<sup>[5]</sup>

---

[5] Estimaciones de Salomon (2020) referidas al IFE y el ATP muestran que en los primeros meses de 2020, mientras una pareja con hijas/os que trabajaba en relación de dependencia para un empleador pudo haber percibido hasta un máximo de alrededor \$ 67 500 mensuales por ATP, una pareja con hijas/os que trabaja en la informalidad pudo recibir un máximo de \$ 10 000 mensuales por el IFE.

## 1.6 Transformaciones en los gastos de los hogares

Como mencionamos en la sección anterior, la caída de ingresos que se registró durante la pandemia afectó fuertemente la capacidad de consumo de los hogares. En efecto, un alto porcentaje de los hogares encuestados por la ESAyPP/PISAC-COVID-19, 41 %, manifestó que sus ingresos no alcanzaron para cubrir sus gastos cotidianos durante 2020. Del resto de los hogares, 44 % manifestó que sus ingresos sí alcanzaron para cubrir sus gastos, en tanto 15 % no solo pudo cubrir sus gastos, sino también ahorrar (véase cuadro 1.9).

Como era esperable, la incapacidad para cubrir los gastos cotidianos durante el primer año de la pandemia fue mucho más frecuente entre los hogares en los que el principal sostén se encontraba desocupado: entre ellos, el 71 % manifestó que sus ingresos fueron insuficientes. Sin embargo, también se registró en los hogares con el principal sostén ocupado, aunque con diferencias importantes de acuerdo a la posición de clase. La falta de ingresos para los gastos cotidianos afectó particularmente a los hogares de clase trabajadora informal (60 %). Entre los hogares de la clase trabajadora formal y en los de la clase media inferior, esta limitación estuvo menos presente, pero no ausente: afectó al 35 % y al 32 % de los hogares, respectivamente. Como contraparte, el porcentaje que en 2020 no solo pudo cubrir sus gastos cotidianos sino también ahorrar fue mayor entre los hogares de clase media, y en especial en los del estrato superior (39 %), y mucho menos frecuente entre los de clase trabajadora, en especial informal (7 %).

En este marco, casi la mitad de los hogares del país, 46 %, manifestó que durante la pandemia debió recurrir a ayuda económica extra para poder afrontar sus gastos: principalmente al uso de ahorros propios (26 %) o a la ayuda de familiares (24 %), pero también a la ayuda de amigos (9 %), a créditos de bancos (6 %) o de prestamistas particulares (4 %) (véase cuadro 1.10). La necesidad de recurrir a ayuda económica extra fue más frecuente entre los hogares con el principal sostén desocupado (54 %), entre los de clase trabajadora informal (54 %) y entre los grupos autónomos de clase media: los pequeños empleadores y cuentapropistas con escaso capital (55 %) y profesionales (50 %).

¿Cuáles fueron los principales gastos que se restringieron durante la pandemia? Sin dudas, la expresión más aguda de la falta de recursos que experimentaron los hogares fue la incapacidad para cubrir los gastos de alimentación: en 2020, en 14 % de los hogares del país se comió menos o se dejó de comer en el desayuno, almuerzo o cena por falta de recursos para alimentos, y en 5 % de los hogares esta restricción afectó incluso la alimentación de niños y niñas (véase cuadro 1.11). Estos porcentajes, sin embargo, promedian situaciones

**Cuadro 1.9. Porcentaje de hogares a los que sus ingresos no les alcanzaron en 2020 según posición de clase. Argentina urbana, 2021.**

	Les alcanzaron y pudieron ahorrar	Les alcanzaron, pero no pudieron ahorrar	No les alcanzaron
<b>Empresarios y directivos de nivel alto</b>	<b>31.9</b>	<b>50.6</b>	<b>17.5</b>
<b>Posiciones de clase media / intermedias o contradictorias</b>	<b>20.9</b>	<b>49.6</b>	<b>29.5</b>
<b>Capas superiores</b>	<b>38.6</b>	<b>42.7</b>	<b>18.6</b>
Pequeños empleadores y profesionales autónomos	40.5	37.5	22.0
Directivos medios y asalariados profesionales	37.5	46.0	16.5
<b>Capas inferiores</b>	<b>16.2</b>	<b>51.4</b>	<b>32.3</b>
Jefes intermedios y asalariados de calificación técnica	18.1	51.9	30.0
Pequeños empleadores y cuentapropistas de calificación técnica y operativos con capital	13.3	50.7	36.1
<b>Clase trabajadora</b>	<b>8.4</b>	<b>39.7</b>	<b>51.9</b>
<b>Clase trabajadora formal</b>	<b>12.1</b>	<b>53.0</b>	<b>34.9</b>
Asalariados formales administrativos y de los servicios sociales, registrados y de bajas calificaciones	12.5	55.7	31.9
Asalariados formales de la producción y la circulación de baja calificación	12.0	51.8	36.2
<b>Clase trabajadora informal</b>	<b>6.7</b>	<b>33.8</b>	<b>59.5</b>
Cuentapropistas operativos sin capital	2.3	32.6	65.1
Asalariados no formales de baja calificación	9.2	39.7	51.1
Trabajadoras en casas particulares	8.0	26.3	65.7
Cuentapropistas de baja calificación y tipo changas	2.6	25.3	72.1
Perceptores de planes de empleo	2.9	52.2	44.9
<b>Desocupados</b>	<b>4.4</b>	<b>25.1</b>	<b>70.5</b>
<b>Inactivos</b>	<b>17.4</b>	<b>39.2</b>	<b>43.4</b>
<b>Total</b>	<b>14.8</b>	<b>43.9</b>	<b>41.3</b>

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

heterogéneas. La falta de alimentos se concentró en la parte más baja de la estructura social: el porcentaje que disminuyó sus gastos de alimentación ascendió a 37 % entre los hogares con el principal sostén desocupado, y a 25 % entre aquellos de clase trabajadora informal. También fue en estos hogares en los que la alimentación de niños y niñas se vio más afectada: en estos casos, quienes manifestaron que niños/as comieron menos o dejaron de comer en el desayuno, almuerzo o cena fueron 17 % y 10 %, respectivamente.

Adicionalmente, durante 2020 un 32 % de los hogares debió dejar de pagar o refinanciar gastos de otro tipo, un porcentaje que fue mayor en aquellos con el principal sostén desocupado (39 %) y en los

**Cuadro 1.10. Porcentaje de hogares que debieron recurrir a ayuda económica durante la pandemia según posición de clase. Argentina urbana, 2021.**

	% hogares que debió recurrir a ayuda económica extra de...					% total que recurrió a ayuda económica
	Bancos	Prestamistas particulares	Amigos	Familiares	Uso de ahorros propios	
<b>Empresarios y directivos de nivel alto</b>	<b>4.4</b>	<b>4.6</b>	<b>13.8</b>	<b>7.9</b>	<b>21.2</b>	<b>34.4</b>
<b>Posiciones de clase media / intermedias o contradictorias</b>	<b>7.2</b>	<b>4.0</b>	<b>8.4</b>	<b>20.4</b>	<b>30.3</b>	<b>47.3</b>
<b>Capas superiores</b>	<b>5.4</b>	<b>2.8</b>	<b>5.9</b>	<b>12.6</b>	<b>27.8</b>	<b>39.4</b>
Pequeños empleadores y profesionales autónomos	6.9	0.3	8.8	11.0	40.9	50.4
Directivos medios y asalariados profesionales	4.4	4.4	4.0	13.6	19.6	32.5
<b>Capas inferiores</b>	<b>7.7</b>	<b>4.3</b>	<b>9.0</b>	<b>22.5</b>	<b>30.9</b>	<b>49.3</b>
Jefes intermedios y asalariados de calificación técnica	8.0	3.6	9.8	21.6	28.0	45.5
Pequeños empleadores y cuentapropistas de calif. técnica y operativa con capital	7.1	5.4	7.9	23.9	35.4	55.2
<b>Clase trabajadora</b>	<b>5.4</b>	<b>4.0</b>	<b>10.0</b>	<b>27.8</b>	<b>27.0</b>	<b>49.3</b>
<b>Clase trabajadora formal</b>	<b>6.4</b>	<b>4.1</b>	<b>6.5</b>	<b>19.1</b>	<b>26.7</b>	<b>44.4</b>
Asalariados formales administrativos y de los servicios sociales de bajas calificaciones	9.7	3.2	5.0	22.7	30.6	46.0
Asalariados formales de la producción y la circulación de baja calificación	5.0	4.5	7.2	17.5	24.9	43.7
<b>Clase trabajadora informal</b>	<b>4.4</b>	<b>4.0</b>	<b>13.1</b>	<b>35.6</b>	<b>27.2</b>	<b>53.6</b>
Cuentapropistas operativos sin capital	7.1	5.0	17.4	45.2	21.0	63.7
Asalariados no formales de baja calificación	2.8	4.0	12.6	31.4	30.5	50.4
Trabajadoras en casas particulares	6.3	4.5	9.8	35.9	24.9	49.2
Ctprop. de baja calificación y tipo changas	4.1	2.7	14.7	36.3	22.2	57.0
Perceptores de planes de empleo	7.8	1.4	14.8	54.7	55.5	70.5
<b>Desocupados</b>	<b>8.6</b>	<b>5.3</b>	<b>15.3</b>	<b>40.9</b>	<b>16.6</b>	<b>53.8</b>
<b>Inactivos</b>	<b>6.1</b>	<b>2.1</b>	<b>6.2</b>	<b>21.3</b>	<b>17.2</b>	<b>36.7</b>
<b>Total</b>	<b>6.2</b>	<b>3.7</b>	<b>9.0</b>	<b>24.3</b>	<b>25.7</b>	<b>46.1</b>

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

de la clase trabajadora informal (42 %), en particular en los autónomos: los cuentapropistas sin capital (48 %) y los cuentapropistas sin calificación y que realizan changas (50 %). Sin embargo, en la medida en que los tipos de consumo difieren de acuerdo a la clase social, los gastos que sufrieron más restricciones durante la pandemia no fueron los mismos en todos los hogares. Así, dejar de pagar o refinanciar gastos de servicios básicos y de servicios de Internet o telefonía fue

**Cuadro 1.11. Porcentaje de hogares en los que adultos y/o niñas/os dejaron de comer en el desayuno, almuerzo o cena por falta de recursos y que dejaron de pagar o refinanciaron gastos esenciales durante 2020, según posición de clase. Argentina urbana, 2021.**

	Comieron menos o dejaron de comer por falta de recursos			
	A	B	C	D
<b>Empresarios y directivos de nivel alto</b>	<b>4.3</b>	<b>5.2</b>	<b>5.6</b>	<b>22.7</b>
<b>Posiciones de clase media/intermedias o contradictorias</b>	<b>7.7</b>	<b>2.4</b>	<b>8.0</b>	<b>31.2</b>
<b>Capas superiores</b>	<b>2.8</b>	<b>0.2</b>	<b>2.8</b>	<b>21.5</b>
Peq. empleadores y cta. prop. profesionales	1.5	0.0	1.5	29.8
Directivos medios y asalariados profesionales	3.7	0.4	3.7	16.3
<b>Capas inferiores</b>	<b>8.9</b>	<b>2.9</b>	<b>9.3</b>	<b>33.7</b>
Jefes intermedios y asalariados de calif. técnica	6.4	2.6	6.9	31.0
Peq. empleadores y cta. prop. de calif. técnica y operativos con capital	12.8	3.4	12.9	37.8
<b>Clase trabajadora</b>	<b>17.8</b>	<b>6.6</b>	<b>18.2</b>	<b>38.0</b>
<b>Clase trabajadora formal</b>	<b>10.6</b>	<b>2.7</b>	<b>11.0</b>	<b>33.7</b>
Asalariados formales administ. y de los serv. soc., baja calificación	8.6	2.1	9.4	32.4
Asalariados formales de la prod. y circulación, baja calificación	11.5	2.9	11.7	34.2
<b>Clase trabajadora informal</b>	<b>24.1</b>	<b>10.1</b>	<b>24.5</b>	<b>41.7</b>
Cuentapropistas operativos sin capital	29.2	9.0	29.2	47.9
Asalariados no formales de baja calificación	21.0	7.9	21.2	40.8
Trabajadoras en casas particulares	23.1	10.8	23.5	34.9
Ctapropistas de baja calificación y tipo changas	31.1	15.8	32.0	50.4
Perceptores de planes de empleo	11.6	7.3	16.7	17.7
<b>Desocupados</b>	<b>36.6</b>	<b>17.1</b>	<b>36.6</b>	<b>38.8</b>
<b>Inactivos</b>	<b>11.6</b>	<b>3.5</b>	<b>11.9</b>	<b>20.5</b>
<b>Total</b>	<b>13.8</b>	<b>5.0</b>	<b>14.1</b>	<b>32.2</b>

A: adultos; B: niñas/os; C: total hogares; D: dejaron de pagar o refinanciaron otros gastos esenciales.  
Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

mayor sobre todo entre los hogares de la clase trabajadora informal (28 % y 16 %) y los hogares con el principal sostén desocupado (21 % y 13 %, respectivamente), aunque este problema también estuvo muy

presente en los hogares de la clase trabajadora formal (15 % y 11 %) y entre los pequeños empleadores y cuentapropistas con poco capital de la clase media (19 % y 11 %). La falta de pago o el refinanciamiento de los alquileres se concentraron en los hogares de la clase trabajadora informal (9 %) y en los pequeños empleadores y cuentapropistas con poco capital de la clase media (12 %). La dificultad para continuar el pago de tratamientos médicos fue una problemática más frecuente entre los hogares con el principal sostén del hogar inactivo (9 %) o desocupado (12 %). En contraste, la falta de pago o el refinanciamiento de las tarjetas de crédito se concentró sobre todo en los sectores con mayores recursos o en posiciones más estables: las clases altas (13 %), las clases medias (12 %) y la clase trabajadora formal (15 %). Finalmente, las dificultades para pagar las cuotas de colegios o de servicios médicos privados fueron más acentuadas entre los hogares de clase media (7 %) entre los cuales, ciertamente, se encuentran también gran parte de sus usuarios.

Como mencionamos antes, la falta de ingresos para cubrir los gastos esenciales no afectó a todos los hogares e, incluso, hubo una minoría (15 %) que en esta etapa también pudo ahorrar. Esta situación se expresó en los gastos. Mientras muchos hogares vieron restringidos sus gastos esenciales de consumo, un grupo reducido pudo realizar gastos extras. Entre ellos, está la compra de computadoras de escritorio o notebooks (6 %), lo que puede enmarcarse en las nuevas necesidades que impuso la pandemia frente a la extensión de modalidades virtuales en el trabajo y en la educación, pero también la compra de autos (2 %), la suscripción a plataformas pagas para películas y series (12 %), la compra de viajes o paquetes turísticos (3 %), o gastos vinculados con la decisión de mudarse durante una temporada de la pandemia a una casa (de alquiler o propia) en una quinta o barrio privado (2 %). Todas estas situaciones se concentraron en las clases altas y en las clases medias superiores.

## 1.7 La doble crisis en las trayectorias socioocupacionales

En un apartado anterior observamos el impacto que la pandemia tuvo sobre el empleo y las condiciones de trabajo. Interesa ahora retomar este tópico pero imprimiéndole una perspectiva diacrónica y de mediano plazo que colabore en hacer un balance de los efectos de la doble crisis en la reproducción y cambio de las posiciones socioocupacionales. En esa dirección, el instrumento de la encuesta ESAyPP incluyó el registro de la situación socioocupacional del/la encuestado/a en tres momentos claves:

- 1) la salida del gobierno de Fernández de Kirchner;
- 2) la salida del gobierno de Juntos por el Cambio;

- 3) el momento del registro hacia fines de 2021 (esto es, hacia la salida de las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia COVID-19).

En la medida en que los patrones de participación en el mundo del trabajo son diferenciados según se trate de principales proveedores del hogar o de trabajadores secundarios del mismo, incorporamos aquí al conjunto de la fuerza de trabajo al análisis, ubicando la indagación nuevamente a nivel de los individuos y no de los hogares.

El abordaje tiene fortalezas y limitaciones que conviene explicitar. Entre las primeras, se cuenta la posibilidad de localizar el sentido neto de los trayectos socioocupacionales de los/las encuestados/as en el mediano plazo, un período de tiempo mayor al de las transiciones anuales que permiten reconstruir las fuentes del Sistema Estadístico Nacional, observando la relación entre la orientación que asumen estos trayectos y los cambios macrosociales más amplios que interesa estudiar. Entre sus limitaciones, señalemos que el registro de los cambios netos no da cuenta de la rotación entre posiciones de corto plazo, a la vez que supedita las estimaciones de la movilidad socioocupacional de mediano plazo a la percepción y recordación del encuestado/a, cuestiones ambas que van en la dirección de una probable subestimación de los movimientos en la estructura.

Los datos presentados en el cuadro 1.12 muestran que un 73.5 % de las y los encuestados que estaban ocupados en la salida del período kirchnerista mantuvieron su empleo hasta finalizar el gobierno de Juntos por el Cambio, o bien pasaron a otra ocupación de la misma posición social. Observamos que la estabilidad de las posiciones presenta diferencias entre los grupos socioocupacionales (siendo mayor entre quienes detentan posiciones intermedias que en las propias de los trabajadores sin cualificaciones específicas) pero también aparece ligada al carácter asalariado o dependiente de las ocupaciones. En esa dirección, tomadas globalmente, aquellas posiciones más afectadas durante el macrismo son las asalariadas de bajos niveles de calificación, que logran una permanencia menor que el mencionado promedio, especialmente en su segmento no registrado, con una retención del 49.1 % para quienes trabajan en unidades económicas y del 67.3 % para las trabajadoras en casas particulares, esto es, en conjunto, un 58.7 %. Parte de estas transiciones se dan hacia la formalidad y en menor medida hacia posiciones de mayor jerarquía (sumando el 21.7 % de los cambios entre los asalariados formales). Sin desmedro de ello, adquieren en conjunto pareja significación las salidas desde estas ocupaciones hacia el cuentapropismo de bajas calificaciones y no capitalizado, así como hacia la desocupación y la inactividad (en total, un 19.6 %).

Dentro de los segmentos autónomos, se destacan movimientos divergentes. Por un lado, observamos el desgranamiento que, a nivel

**Cuadro 1.12. Sentido de las trayectorias laborales según posición socioocupacional y período (2015-2019) \* Total encuestados 24 a 65 años \*\*.**

Posición	Misma posición	Cambio de posición pero mantiene calificación ***	Se capitaliza, califica o formaliza****	Subtotal mantiene, recupera o mejora su posición	Se descapitaliza, descalifica o precariza	Segue desocupado o queda desempleado	Pasa a la inactividad	Subtotal pierde posición o pasa a la desocupación o inactividad	Total
Empresarios y directivos de nivel alto	65.4			65.4	34.6			34.6	100.0
Pequeños empleadores y cuentapropistas profesionales	87.4	11.5		98.9	1.1			1.1	100.0
Directivos medios y asalariados profesionales	78.1	2.2	5.1	85.4	11.9		2.7	14.6	100.0
Jefes intermedios y asalariados de calificación técnica	81.8	0.8	1.4	84.0	11.2	2.0	3.6	16.8	100.0
Pequeños empleadores y cuentapropistas de calificación técnica	65.9	3.1	4.7	73.6	20.9	1.6	3.7	26.2	100.0
Autónomos operativos capitalizados	88.6	2.9	1.7	93.2	3.5	1.9	1.4	6.8	100.0
Asalariados formales de baja calificación	73.0	1.2	8.9	83.0	4.4	7.0	5.5	11.5	100.0
Asalariados no formales de baja calificación (incluye trabajadores de casas particulares)	58.7		21.7	80.4	4.0	7.8	7.8	19.6	100.0
Cuentapropistas de baja calificación y trabajadores en programas de empleo	79.4	7.3	8.6	95.2	1.4	1.4	3.4	4.8	100.0
<b>Subtotal ocupados</b>	<b>72.3</b>	<b>2.1</b>	<b>9.1</b>	<b>83.5</b>	<b>7.3</b>	<b>4.4</b>	<b>4.9</b>	<b>16.5</b>	<b>100.0</b>
<b>Desocupados***</b>				<b>43.8</b>		<b>46.6</b>	<b>9.6</b>	<b>56.2</b>	<b>100.0</b>

Fuente: elaboración propia en base a ESAV/PP/PI/SAC-COVID-19. Notas: \* los puntos de referencia temporales de la encuesta fueron marcados de la siguiente manera: i-diciembre del 2015, final del gobierno de Cristina de Kirchner; b-marzo 2020, antes de la pandemia; ii-momento actual (del relevamiento) septiembre-noviembre 2021. \*\* se recorta la población a quienes tenían 18 años al inicio del período y considerando 65 años como edad jubilatoria promedio. \*\*\* se consideraron aquí: 1. Las transiciones entre los segmentos autónomos y asalariados de calificación profesional y entre estos segmentos de calificación técnica; 2. Las que se dan entre autónomos capitalizados y la clase trabajadora formal; económicas 3-las que se dan desde el trabajo en casas particulares hacia el asalariado informal en unidades. \*\*\*\* en el caso de quienes estaban desocupados: se inserta laboralmente.

de trayectorias de mediano plazo, experimentan los pequeños empresarios y los autónomos técnicos, de los cuales solo el 66 % retiene su posición, destacando las salidas tanto hacia las posiciones autónomas de menor capitalización y calificación, como, en mayor medida, hacia el cuentapropismo no calificado. Este comportamiento responde, en términos generales, a lo esperado de este segmento frente a la crisis, sometido como está a una dinámica de desgranamiento dado el módico volumen y el ciclo acotado de su capital.

Por otro lado, y en sentido inverso, los cuentapropistas de menores niveles de capitalización y calificación muestran una dinámica contracíclica, en la medida en que registran los mayores porcentajes de retención, y se robustecen tanto a partir del descenso de escala de productores de mayor porte y/o nivel de calificación como de la expulsión del asalariado registrado y no registrado. En este sentido, aún con medios propios, la dinámica de estas posiciones remite a la característica del empleo refugio de formaciones periféricas sin sistemas de seguridad social extendidos.

Por su parte, el pasaje a la desocupación y la inactividad de quienes se encontraban ocupados al inicio del período es del 9.3 % mientras que 43.8 % de quienes se encontraban desocupados, logran inserción laboral en esos cuatro años, fundamentalmente en posiciones propias de la clase trabajadora informal (véase cuadro 1.12).

Los rasgos generales que asumen los trayectos socioocupacionales entre el inicio de la emergencia sociosanitaria y la reactivación económica 2021, son marcadamente diferentes de los recién reseñados en los párrafos anteriores (véase cuadro 1.13). Observamos que finalizando el 2021, un 94.5 % de quienes estaban ocupados al comenzar la pandemia se encuentran en el mismo empleo o en un empleo de la misma posición que el que tenían en aquel momento. Este nivel de retención en el mediano plazo tiene el mismo orden de magnitud a lo largo de todas las posiciones de la estructura, pero nuevamente muestra porcentajes inferiores para, en primer lugar, el asalariado no registrado (menores, a su vez, entre las trabajadoras en casas particulares que entre las y los trabajadores en unidades económicas) y luego, para los pequeños productores y autónomos de carácter técnico. Por su parte, los trayectos indicativos de procesos de calificación o formalización tienen escasa significación en este período, enfatizándose levemente entre los distintos segmentos de trabajadores precarizados o informales (4.4 % y 2.9 % para asalariados y autónomos, respectivamente).

Asimismo, si bien durante el momento más álgido del ASPO el mundo del trabajo local experimentó una contracción intertrimestral de la tasa de actividad inédita (de 9.3 puntos interanual promedio para el conjunto de aglomerados urbanos hacia el segundo trimestre del 2020) y un aumento relevante de la desocupación (2.5 puntos);

**Cuadro 1.13. Sentido de las trayectorias laborales según posición socioocupacional y período (2020-2021) \* Total de encuestados 20 a 65 años \*\*.**

Posición	Misma posición	Cambio de posición pero mantiene calificación ***	Se capitaliza, califica o formaliza****	Subtotal mantiene, recupera o mejora su posición	Se descapitaliza, descalifica o precariza	Segue desocupado o desempleado	Pasa a la inactividad	Subtotal pierde posición o pasa a la desocupación o inactividad	Total
Empresarios y directivos de nivel alto	89.3	0.0	0.0	89.3	5.5	2.8	2.4	10.7	100.0
Pequeños empleadores y cuentapropistas profesionales	95.8	0.0	0.0	95.8	1.8	0.0	2.3	4.2	100.0
Directivos medios y asalariados profesionales	92.1	0.0	0.0	96.8	2.4	0.0	0.8	3.2	100.0
Jefes intermedios y asalariados de calificación técnica	91.3	0.2	0.5	92.0	3.3	1.0	3.7	8.0	100.0
Pequeños empleadores y cuentapropistas de calificación técnica	89.1	1.1	0.9	91.0	6.8	1.5	0.7	9.0	100.0
Autónomos operativos capitalizados	96.5	2.0	2.0	98.5	1.3	0.0	0.2	1.5	100.0
Asalariados formales de baja calificación	91.5	0.5	1.8	93.7	4.2	0.8	1.3	6.3	100.0
Asalariados no formales de baja calificación	87.8	4.4	4.4	92.2	2.7	1.3	3.8	7.8	100.0
Cuentapropistas de baja calificación y trabajadores en programas de empleo	92.9	5.1	5.1	98.1	0.0	0.0	1.9	1.9	100.0
Subtotal ocupados	94.5	1.2	1.0	96.7	1.7	0.4	1.2	3.3	100.0
Desocupados***	0.0	0.0	0.0	38.7	0.0	46.7	14.6	61.3	100.0

Fuente: Elaboración propia en base a ESA/PP/PI SAC-COVID-19. Notas: ídem cuadro 1.12.

el pasaje a la desocupación y la inactividad neto de todo el período, es también de escasa significación (un 3 %). Por su parte, el inicio de la reactivación pospandemia involucra el pasaje a la ocupación del 38.7 % de quienes se declaran como desocupados al inicio del período (véase cuadro 1.13).

Recordemos que se trata aquí de movimientos entre dos momentos clave, que ciertamente no consideran los efectos drásticos y desiguales sobre el empleo y las condiciones de trabajo durante toda la coyuntura del aislamiento social preventivo obligatorio, que se analizaron en un apartado anterior.

Sin desmedro de ello, es relevante también señalar que aun cuando la crisis COVID-19 tuvo un impacto inmediato ciertamente más dramático que el experimentado en los dos años anteriores, la intervención social protectora de los niveles de empleo que involucró al sector registrado a la que referimos en apartados anteriores y, posteriormente, la reactivación relativa, han operado en el sentido de viabilizar una reanudación también acelerada de las trayectorias sociales observadas.

## **1.8 Reactivación económica y recomposición de la estructura de clases en disputa**

Retomando los hallazgos del apartado anterior, interesa ahora cerrar nuestra aproximación indagando en qué medida el proceso de reanudación de trayectorias sociolaborales observado a través de la Encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 significa una recomposición relativa de la estructura de clases en general.

La observación de la distribución de hogares según la posición de su principal proveedor/a en base a la EPH muestra una suerte de restablecimiento del peso relativo que tenían los hogares de las distintas clases en la estructura social antes de la pandemia, pero con intensidades diferentes y dinámicas específicas que conviene resaltar (véase cuadro 1.14)

Por un lado, respecto de los distintos segmentos asalariados de las posiciones intermedias, interesa destacar que vuelven a presentar hacia la salida de la pandemia comportamientos divergentes entre sí, pero ahora en sentido contrario a lo observado en el período macrista: una pérdida de significación relativa de los hogares de los cuadros directivos y profesionales versus una expansión relativa de los hogares encabezados por el asalariado técnico y con cargos de jefatura (con un -0.8 y +2.3 puntos respectivamente entre los IV trimestres 2019-2021).

Por otro lado, nuevamente la heterogeneidad interna de la pequeña burguesía se expresa en dinámicas diferenciadas entre sus

**Cuadro 1.14. Distribución de los hogares según posición de clase del jefe/a. Argentina urbana. Evolución 2016-2021 (años seleccionados).**

Posición del jefe de hogar	2016	2019	2021
<b>Empresarios y directivos de nivel alto</b>	<b>2.8</b>	<b>2.5</b>	<b>2.5</b>
<b>Clases medias / posiciones intermedias o contradictorias</b>			
<i>Capas superiores</i>			
Pequeños empleadores y autónomos profesionales	3.3	3.5	3.4
Directivos medios y asalariados profesionales	5.8	7.5	6.7
<i>Capas superiores</i>			
Jefes intermedios y asalariados técnicos	14.2	13.2	15.5
Pequeños empleadores no profesionales y autónomos de calificación técnica	5.4	6.5	5.7
Autónomos operativos capitalizados	9.3	10.4	10.5
<b>Clase trabajadora</b>	<b>60.4</b>	<b>58.7</b>	<b>57.9</b>
<b>Clase trabajadora formal</b>			
Asalariados formales administrativos y de los servicios sociales, registrados y de bajas calificaciones	9.9	8.4	9.9
Asalariados formales de la producción y la circulación de baja calificación	21.0	18.4	18.9
<b>Clase trabajadora informal o precarizada</b>			
Asalariados no formales de baja calificación	11.9	12.0	11.6
Trabajadoras en casas particulares	6.6	6.2	5.0
Autónomos de bajas calificaciones no capitalizados	8.1	8.3	7.5
Trabajadores en programas de empleo	0.4	0.6	0.7
<b>Trabajadores abiertamente excedentes (Desocupados de larga duración)</b>	<b>1.3</b>	<b>2.4</b>	<b>2.2</b>
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC.

distintos segmentos. Mientras que el carácter profesional de su estrato superior le aseguró la rápida recuperación de su significación relativa, el segmento de carácter técnico acusa recibo (en sintonía con lo visto respecto de sus patrones de trayectoria individual) de la crisis sociosanitaria transitada. Las inserciones ocupacionales de este segmento fueron más fuertemente golpeadas durante la crisis sociosanitaria y a la salida de la misma muestran una pérdida de significación de -0.7 puntos respecto del 2019. Esto último es consistente con el desgranamiento esperado para los bordes inferiores de la pequeña burguesía tras situaciones contractivas. Finalmente, los autónomos con menores volúmenes de capital y calificaciones

también mantienen su posición prepandemia en la estructura, pero aquí la dinámica es otra que la de los estratos superiores. Recordemos que se trata de lo que la bibliografía refiere como pequeña burguesía pobre, un segmento fuertemente golpeado en sus condiciones de vida pero que viene actuando durante toda la doble crisis como refugio frente a las contracciones y limitaciones en la absorción de empleo asalariado, aumentando su peso relativo durante el cuaternio macrista y ahora manteniendo su significación prepandemia, sin crecimiento significativo.

Las pautas respecto de la clase trabajadora en la salida de la pandemia son, aún con significación mesurada, también muy definidas. Por un lado, la clase trabajadora formal que, como señalamos antes, fue sostenida por una orientación estatal fuertemente protectora del empleo, mantiene y aún amplía en dos puntos su peso en la estructura social. A su interior, se observa la recuperación de ambos estratos, aun cuando en el caso de los asalariados administrativos y de los servicios sociales es más profundo que el de los asalariados de la producción y la circulación (+1.5 puntos y +0.5 puntos respectivamente), y supera el peso que tenía en la prepandemia, acercándose incluso, aunque distante aún, a su significación anterior del macrismo. Este aumento relativo no responde solamente a un «efecto composición» por el derrumbe del resto de las posiciones de clase trabajadora (como se registró en el momento más álgido de la cuarentena) sino que expresa una variación bi anual positiva de los hogares en estas posiciones (de 22.2 % y de 6.6 % entre 2019 y 2021, para el asalariado administrativo y de los servicios sociales y para el de la producción y la circulación, respectivamente).

Como contrapartida, observamos el comportamiento del estrato informal de la clase trabajadora, cuyos jefes de hogar no fueron alcanzados por la regulación protectora del empleo y, por tanto, vieron desmoronarse sus inserciones laborales durante la pandemia. Hacia la salida de la misma, mantienen una caída en su significación en la estructura de 2.6 puntos promedio respecto de fines del 2019. Vale aquí analizar más detenidamente los distintos segmentos comprometidos. En primer lugar, el asalariado no registrado, si bien aumentó desde el momento más álgido de la pandemia, no logra todavía restablecer su significación previa. En segundo lugar, es mayor la pérdida de significación de segmentos más desaventajados dentro de este estrato: el cuentapropismo no calificado ni capitalizado (que suele actuar como refugio último frente a la desocupación) y, especialmente, de los hogares de las trabajadoras en casas particulares (con retracciones de -0.8 y -1.3 puntos respectivamente). Este último segmento, que fue muy golpeado durante la crisis sociosanitaria por las restricciones que afectaron especialmente sus movimientos interurbanos característicos, no ha logrado recuperarse totalmente a

pesar del levantamiento de las restricciones, en un contexto de caída de los ingresos reales que afecta el nivel y los tópicos de gasto de parte de los hogares que son sus unidades empleadoras.

El marco general para la valoración de estos comportamientos dentro de la estructura es también relevante. El mismo involucra, en primer lugar, una activación de la fuerza de trabajo que implicó un nivel de incorporación al mercado laboral similar al de 2019. Sin embargo, aun en el contexto de la expansión del empleo, se mantiene el piso de significación que el estrato de hogares encabezados por desocupados de larga duración alcanzó durante el macrismo. Este porcentaje (2.2 %) es importante tanto por su significación desde una mirada de más largo plazo como por la situación extremadamente crítica del cual es indicador.

En resumen, la coyuntura pospandemia se caracteriza por un restablecimiento del peso relativo de las clases y estratos en la estructura, en particular del segmento superior de la pequeña burguesía y de los segmentos asalariados de las posiciones intermedias inferiores y de la clase trabajadora formal. Junto con ello, se destaca la retracción de los segmentos más desaventajados del proletariado informal (las trabajadoras en casas particulares y el cuentapropismo de bajas calificaciones y de subsistencia) en la clase trabajadora. Si bien la orientación que tomará la intervención social estatal está en disputa y en ese sentido es prematuro definir tendencias con observaciones puntuales, es posible señalar que estos comportamientos muestran al momento la dirección hacia el restablecimiento de las zonas centrales de la estructura social que habían sido las más fuertemente erosionadas durante el macrismo.

La comparación 2019-2021 (véase cuadro 1.15), muestra también un achicamiento de las brechas de ingreso *per cápita* familiar entre las posiciones intermedias, particularmente entre los cuadros profesionales y directivos y la pequeña burguesía respecto de la clase trabajadora formal, así como al interior de esta última, entre los hogares del asalariado de cuello blanco y los hogares del asalariado de la producción y los servicios. Se trata de observaciones puntuales entre coyunturas, cuestión que advierte sobre la pertinencia de una consideración de más largo plazo que permita definir tendencias. Respecto de estas variaciones puntuales, dos dimensiones pueden tener incidencia. La primera es justamente el nivel de aseguramiento de ingresos con que el grueso de los hogares de cada segmento enfrentó la crisis COVID-19, que tiene efectos todavía presentes en la relación de ingresos familiares de los estratos autónomos respecto de los asalariados. La segunda, es la diferente capacidad de mantener el nivel de ingreso de los asalariados públicos y los privados que componen con distinta intensidad los estratos de la clase trabajadora formal.

**Cuadro 1.15. Brechas de ingreso *per cápita* familiar promedio según posición de clase del jefe/a de hogar. Total de hogares, Argentina urbana. Evolución 2016-2021 (años seleccionados).**

Posición del jefe de hogar	2016	2019	2021
<b>Empresarios y directivos de nivel alto</b>	<b>3,09</b>	<b>2,95</b>	<b>2,94</b>
<b>Clases medias / Posiciones intermedias o contradictorias</b>			
<b>Capas superiores</b>	2,38	2,37	1,84
Pequeños empleadores y autónomos profesionales			
Directivos medios y asalariados profesionales	2,38	2,65	2,28
<b>Capas inferiores</b>			
Jefes intermedios y asalariados técnicos	1,53	1,65	1,62
Pequeños empleadores no profesionales y autónomos de calificación técnica	1,25	1,37	1,18
Autónomos operativos capitalizados	0,95	0,93	0,98
<b>Clase trabajadora</b>	<b>0,95</b>	<b>0,94</b>	<b>0,92</b>
<b>Clase trabajadora formal</b>	<b>1,16</b>	<b>1,13</b>	<b>1,11</b>
Asalariados formales administrativos y de los servicios sociales, registrados y de bajas calificaciones	1,54	1,41	1,31
Asalariados formales de la producción y la circulación de baja calificación	1,00	1,00	1,00
<b>Clase trabajadora informal o precarizada</b>	<b>0,68</b>	<b>0,74</b>	<b>0,68</b>
Asalariados no formales de baja calificación	0,76	0,76	0,71
Trabajadoras en casas particulares	0,61	0,68	0,62
Autónomos de bajas calificaciones no capitalizados	0,63	0,66	0,59
<b>Trabajadores abiertamente excedentes (Desocupados de larga duración)</b>	<b>0,57</b>	<b>0,45</b>	<b>0,44</b>
<b>Total</b>	<b>1,21</b>	<b>1,26</b>	<b>1,20</b>

Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC.

A su vez, la información provista por otras fuentes secundarias permite matizar fuertemente la interpretación de estos resultados, al poner como marco general de análisis la relación entre los ingresos de los hogares y el excedente total generado en el período. En efecto, el análisis distributivo en base al sistema de Cuentas Nacionales (Palomino y Dalle 2022) estima que la participación del conjunto de los trabajadores en el valor agregado se redujo en forma significativa durante la primera crisis (de 52 % en 2016 a 46 % en 2019), y volvió a experimentar una nueva reducción tras la salida de la pandemia, durante la recuperación económica de 2021 (43 %). En otras palabras, las posibilidades de apropiación de excedente por parte de las posiciones del capital (cuyos hogares y fuentes de ingreso y riqueza no son captadas por encuestas y requieren otro tipo de metodología) han crecido durante la doble crisis y a la salida de la pandemia.

La recomposición del peso relativo de las distintas posiciones de clase que se observa en la coyuntura pospandemia no fue acompañada, sin embargo, por una recuperación en el bienestar material de los hogares. Así lo evidencian los datos del cuadro 1.16, que presentan la evolución del ingreso *per cápita* familiar en términos reales durante el período 2016-2021. A fines de 2021 los ingresos reales de los hogares del país son, en promedio, 16 % más bajos que en 2016. Esta caída en la capacidad adquisitiva es el resultado de la gran pérdida de ingresos ocurrida durante la crisis de la pandemia, pero también de lo sucedido durante la crisis de la prepandemia.

En efecto, entre 2016 y 2019 los hogares sufrieron, en promedio, una pérdida del 10 % de sus ingresos reales. Si bien esta pérdida fue generalizada, afectó muy especialmente a los asalariados de la clase trabajadora, tanto formales (-17 %) como no formales (-14 %), que como vimos en la primera sección de este capítulo, también se vieron muy afectados en esta etapa por la pérdida de puestos de trabajo. Si bien la caída salarial afecta también los ingresos de los hogares de los trabajadores informales, lo hace con menor intensidad (-6.3). Esto último se vincula a que estos hogares profundizaron en este período la estrategia de aumentar el uso de la fuerza de trabajo, incorporando trabajadores secundarios al mercado, los que compensan en parte el deterioro del ingreso del principal sostén (Maceira 2021). Por su parte, la caída de los ingresos de los trabajadores desocupados de larga duración es crítica durante el macrismo, triplicando la disminución promedio. Entre los hogares en posiciones intermedias, la pérdida de ingresos fue mayor entre los autónomos, tanto profesionales (-14 %) como de calificación operativa con escaso capital (-15 %).

La pandemia se montó sobre este escenario ya crítico agudizando la pérdida de bienestar de los hogares. Entre 2019 y 2020 los ingresos reales de los hogares cayeron, en promedio, 21 %. Esta vez, la pérdida de ingresos se desplegó con similar intensidad en las distintas posiciones de clase captadas por la EPH.<sup>[6]</sup> En esta línea, un punto destacable es que si bien durante la pandemia el segmento formal de la clase trabajadora se vio menos afectado por la pérdida de puestos de trabajo que el segmento informal, esto no evitó que los ingresos de sus hogares experimentaran una importante caída (-27 %). Esta reducción puede vincularse a que, como vimos en otra sección, muchos de los trabajadores formales sostuvieron sus empleos, pero con

[6] Recordemos aquí que los datos de las encuestas de hogares como la EPH tienen serias dificultades para captar a los empresarios y directivos de alto nivel. En este sentido, el análisis de los ingresos mediante esta fuente no permite identificar si, dentro de este sector, hubo fracciones que en el contexto de la crisis lograron mejorar posiciones, tal como indican evidencias para el conjunto de América Latina (Benza y Kessler 2021).

reducciones salariales, así como a lo sucedido con los empleos y los ingresos de otros integrantes del hogar (véase cuadro 1.16).

**Cuadro 1.16. Ingreso *per cápita* familiar promedio en valores reales según posición del jefe/a de hogar. Total de hogares, Argentina urbana. Evolución 2016-2021 (años seleccionados).**

Posición del jefe de hogar	2016	2019	2021
<b>Empresarios y directivos de nivel alto</b>	<b>2.8</b>	<b>2.5</b>	<b>2.5</b>
<b>Clases medias / posiciones intermedias o contradictorias</b>			
<i>Capas superiores</i>			
Pequeños empleadores y autónomos profesionales	3.3	3.5	3.4
Directivos medios y asalariados profesionales	5.8	7.5	6.7
<i>Capas superiores</i>			
Jefes intermedios y asalariados técnicos	14.2	13.2	15.5
Pequeños empleadores no profesionales y autónomos de calificación técnica	5.4	6.5	5.7
Autónomos operativos capitalizados	9.3	10.4	10.5
<b>Clase trabajadora</b>	<b>60.4</b>	<b>58.7</b>	<b>57.9</b>
<b>Clase trabajadora formal</b>			
Asalariados formales administrativos y de los servicios sociales, registrados y de bajas calificaciones	9.9	8.4	9.9
Asalariados formales de la producción y la circulación de baja calificación	21.0	18.4	18.9
<b>Clase trabajadora informal o precarizada</b>	<b>28.2</b>	<b>29.6</b>	<b>27.0</b>
Asalariados no formales de baja calificación	11.9	12.0	11.6
Trabajadoras en casas particulares	6.6	6.2	5.0
Autónomos de bajas calificaciones no capitalizados	8.1	8.3	7.5
Trabajadores en programas de empleo	0.4	0.6	0.7
<b>Trabajadores abiertamente excedentes (Desocupados de larga duración)</b>	<b>1.3</b>	<b>2.4</b>	<b>2.2</b>
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC.

La reactivación de la actividad económica en 2021 fue acompañada por una mejora de los ingresos de los hogares que, sin embargo, fue tenue (6 % en promedio), lo que explica que el saldo de la doble crisis prepandemia y pandemia sea la reducción del 16 % en el poder adquisitivo que mencionamos antes (cuadro 1.16). En este proceso, destaca la heterogeneidad de resultados que se observa dentro de

la clase trabajadora. Los hogares encabezados por los asalariados formales de la producción y la circulación, que entre 2020 y 2021 crecieron más, fueron también uno de los grupos que experimentaron la mayor recuperación en sus ingresos (17%), y junto ellos las trabajadoras en casas particulares (17%). En contraste, en el resto de los segmentos de la clase trabajadora tanto formal como informal, no se registraron mejoras en los ingresos o estas fueron muy leves.

## 1.9 Conclusiones

En la línea de la hipótesis de trabajo presentada, el capítulo reúne evidencia empírica que permite observar cómo la estructura social argentina sufrió efectos combinados y acumulativos de lo que definimos como una doble crisis, de distinto origen y con distinta orientación de la intervención del Estado: la primera durante la gestión de Juntos por el Cambio y la segunda durante la pandemia.

La primera crisis (2016-2019), caracterizada por una reinstalación del patrón de valorización financiera con una orientación estatal neoliberal, impactó especialmente en la clase trabajadora formal, con una pérdida de su significación relativa en la estructura, involucrando especialmente a los hogares del asalariado de la producción y la circulación. En esa dirección, produjo mayor polarización, debilitamiento de las zonas centrales de la estructura social y crecimiento tanto de los hogares con jefes/as desempleados como de los segmentos sin seguridad social de la clase trabajadora y de los sectores intermedios, esto es, los trabajadores informales y la pequeña burguesía pobre. Estos cambios se dieron con un aumento de la desigualdad de ingresos entre los hogares de distinta posición social, especialmente entre aquellos de la clase trabajadora formal y los del empresariado y del estrato superior de los sectores medios, con una magnitud que supuso en pocos años un retroceso de una década en términos de las tendencias anteriores.

La segunda crisis, disparada por la pandemia COVID-19, se caracterizó por una restricción de la actividad económica de niveles inéditos como efecto de políticas sanitarias protectoras de la salud de la población, e intentó ser amortiguada por una intervención estatal orientada a sostener el empleo y mitigar el impacto en las condiciones de vida. La política laboral tuvo efectos positivos para la clase trabajadora formal, cuyos jefes/as de hogar lograron retener sus empleos en niveles similares a períodos anteriores. En esa dirección, los segmentos más impactados por la pandemia fueron los hogares de la clase trabajadora informal, especialmente aquellos con jefes/as asalariados/as no registrados/as (entre ellos/as las trabajadoras en casas particulares) y, entre los sectores medios, los hogares

encabezados por autónomos y/o microempresarios de calificaciones técnicas.

En el mismo sentido, a través de la ESAyPP/PISAC-COVID-19 fue posible localizar que, en términos individuales, quienes experimentaron mayores efectos negativos en sus condiciones laborales tomadas conjuntamente, fueron los trabajadores autónomos en posiciones intermedias (cierre de negocio, comercio o taller; dejar de trabajar; caída de ventas y clientes, o disminución de las ganancias/ingresos) y asalariados sin registro en la seguridad social (despidos, pérdida de salario y suspensiones con caída del salario) de la clase trabajadora informal. Sin desmedro de lo anterior, entre los asalariados registrados se localizaron efectos en las condiciones de trabajo que fueron diferenciales según el carácter socioocupacional y la calificación. Los asalariados formales de la producción y circulación experimentaron en mayor disminución del salario y suspensiones o reducción de horas con reducción de salario en mayor medida que los trabajadores administrativos y de servicios sociales de amplia inserción en el sector público. Considerando los cambios en las condiciones laborales que no implicaron pérdida del empleo o caída del ingreso/salario, el principal efecto en los grupos ocupacionales asalariados formales fue el paso a la modalidad teletrabajo o mixta, efecto que se acentúa en los asalariados de mayor jerarquía tanto en términos de calificación como de autoridad. Mientras que entre los grupos ocupacionales autónomos de clases medias, el efecto más relevante fue la reconversión del trabajo en el mismo rubro, siendo los de mayor capital quienes tuvieron mayores posibilidades al respecto.

Por otro lado, observamos cómo durante la pandemia disminuyó la importancia del mercado y creció la importancia del Estado en la forma en que los hogares buscaron resolver su bienestar material. La elaboración realizada en base a la ESAyPP/PISAC-COVID-19 permitió establecer que la intervención estatal alcanzó a los hogares de distintas posiciones de la estructura social pero con desiguales magnitudes de transferencia. Los hogares de la clase trabajadora formal y de los sectores medios asalariados en general fueron los principales destinatarios del ATP mientras que la percepción del IFE y el reforzamiento de la AUH+Tarjeta Alimentar se concentró en los desocupados y en la clase trabajadora informal así como en los hogares con jefe/a autónomo con poco nivel de capitalización.

A pesar de tales políticas del Estado, muchos hogares debieron restringir gastos, incluso los más esenciales, poniendo en evidencia que lo que se produjo en esta etapa no fue solo un cambio en el peso del mercado y el Estado en la provisión de bienestar, sino también una pérdida absoluta en el bienestar material de los hogares. Aquellos con jefes/as desocupados vieron incluso afectadas necesidades tan básicas como la alimentación de niños y niñas. En particular,

los problemas para afrontar los gastos cotidianos, los recortes en la alimentación de los miembros del hogar incluyendo niños y niñas, así como la necesidad de recurrir a ayuda económica de otros como familiares o amigos, estuvieron muy extendidos entre los hogares pertenecientes a los segmentos de clase más desaventajados, es decir, en la clase trabajadora informal. En contraste, hubo una minoría, concentrada en los grandes empresarios y directivos y en el segmento superior de la clase media, que pudo sostener su capacidad de consumo e, incluso, de ahorro, realizando gastos extraordinarios como la compra de autos o de paquetes turísticos, o alquilando casas en quintas o barrios privados para transitar la pandemia.

¿Cuál es el balance que podemos hacer a la salida de esta doble crisis? En términos de las trayectorias socioocupacionales, observamos que un 83,5 % de los miembros de los hogares encuestados que estaban ocupados al inicio del macrismo mantenían su puesto o un puesto de similares o más favorables características al terminar ese período, mientras que un 96,7 % retuvo el puesto que tenía o retornó a su puesto o pasó a un puesto de similar o mejores características a la salida de la pandemia. Esto es, aun cuando la crisis COVID-19 tuvo un impacto inmediato ciertamente más dramático que el experimentado en el período anterior – del que dimos cuenta en este trabajo – la intervención social protectora de los niveles de empleo que involucró al sector registrado y, posteriormente, la reactivación relativa, han operado en el sentido de viabilizar una reanudación también más acelerada de las trayectorias sociales afectadas.

En términos de las posiciones de clase de los hogares, la coyuntura pospandemia se caracteriza por un restablecimiento del peso relativo de las clases y estratos en la estructura, en particular del segmento superior de la pequeña burguesía y de los segmentos asalariados de las posiciones intermedias inferiores y de la clase trabajadora formal. Junto con ello, se destaca la retracción de los segmentos más desaventajados de la clase trabajadora informal (las trabajadoras en casas particulares, ocupación que al cierre de esta investigación no recuperó aún sus niveles históricos promedio, y el cuentapropismo de bajas calificaciones y de subsistencia). Si bien la orientación que tomará la intervención social estatal está en disputa y en ese sentido es prematuro definir tendencias con observaciones puntuales, es posible señalar que estos comportamientos muestran al momento la dirección hacia el restablecimiento de las zonas centrales de la estructura social que habían sido las más fuertemente erosionadas durante el macrismo.

Sin embargo, esta recomposición del peso relativo de las distintas posiciones de clase y la reducción de la desigualdad de ingresos que se observa en la coyuntura pospandemia no fueron acompañadas por una recuperación en el bienestar material de los hogares: a fines

de 2021 los ingresos reales de los hogares del país eran, en promedio, 16 % más bajos que en 2016. Esta caída en la capacidad adquisitiva es el resultado de la gran pérdida de ingresos ocurrida durante la crisis de la pandemia, pero también de lo sucedido durante la crisis prepandemia y de una tendencia (aún acotada) a la recuperación pospandemia. La tendencia en los ingresos reales de los hogares muestra asimismo pautas distintas en cada uno de los subperíodos, vinculadas nuevamente con la orientación de la intervención estatal:

- 1) en el macrismo, en el sentido de un duro golpe al empleo y los ingresos promedio de los hogares de los trabajadores formales;
- 2) durante la pandemia, la disminución de ingresos en términos reales fue generalizada, y afectó incluso a los segmentos formales de la clase trabajadora, quienes protegidos en cuanto a la continuidad de sus empleos, no pudieron evitar la caída de sus ingresos;
- 3) por último, en la pospandemia se observa una pauta de intervención favorable al sostenimiento del salario (jaqueada a su vez por la aceleración inflacionaria), que se recupera con más fuerza en los segmentos asalariados, con excepción de los asalariados formales administrativos y de los servicios básicos que tienen alta presencia estatal.

En resumen, la fotografía del perfil y composición de la estructura de clases de Argentina actual (2021) es el reflejo de dos fuerzas contrapuestas: por un lado, una tendencia de largo plazo hacia la polarización social y la expansión de la clase trabajadora informal inducida por un modelo de desarrollo económico basado en la liberalización económica, la expansión del sector primario y la valorización financiera y por otro, una tendencia de mediano plazo hacia la recomposición de la clase trabajadora formal y clases medias que constituyen el centro de la estructura de clases sobre la base de un modelo de desarrollo motorizado por el sector productivo apoyado en la redistribución del ingreso y la expansión del mercado interno, en el marco de un fortalecimiento de la dinámica exportadora sostenida, al menos, durante un período prolongado (Schorr *et al.* 2012). Si bien estas tendencias se desarrollan en períodos históricos diferenciados, se reflejan en forma superpuesta en la fisonomía de la estructura social actual. La orientación del modelo de desarrollo está en disputa (respecto del patrón de acumulación dominante pero también respecto de los ritmos y niveles de la distribución), y con ella, el devenir y el carácter que asuma el proceso de recomposición social en curso.

## Referencias

BASUALDO, EDUARDO

- 2011 *Sistema político y modelo de acumulación. Tres ensayos sobre la Argentina actual*, Buenos Aires: Cara o Ceca, referencia citada en página 5.

BENZA, GABRIELA

- 2014 «El estudio de las clases medias desde una perspectiva centrada en las desigualdades en oportunidades de vida», en *Cuadernos de investigación en desarrollo*, n.º 4, referencia citada en página 9.

BENZA, GABRIELA Y MARIEL ARANCIO

- 2022 «La resolución del bienestar en Argentina durante la pandemia. Desigualdades regionales y entre clases sociales en las fuentes de ingresos de los hogares», en *Primer Congreso Argentino de Políticas Sociales*, Buenos Aires, referencia citada en página 24.

BENZA, GABRIELA Y GABRIEL KESSLER

- 2021 *La ¿nueva? Estructura social de América Latina. Cambios y persistencias después de la ola de gobiernos progresistas*, Siglo XXI: Buenos Aires, referencia citada en páginas 4, 14, 42.

BERTRANOU, FABIO Y ROXANA MAURIZIO

- 2020 «The labor market in Latin America at the time of the COVID-19 pandemic: impacts, responses and perspectives», en *Gaceta Médica de Caracas*, vol. 128, n.º 2, págs. 156-171, referencia citada en página 4.

CARCHEDI, GUGLIELMO

- 1977 *On the Economic Identification of Social Classes*, Londres: Routledge & Kegan Paul, referencia citada en página 6.

CASTELLANI, ANA

- 2019 «Macri desplazó a 41 mil empleados del Estado pero multiplicó la línea dirigencial», en *Página 12*, recuperado de <<https://www.pagina12.com.ar/238914-macri-desplazo-a-41-mil-empleados-del-estado-pero-multiplico>>, referencia citada en página 12.

CEPAL

- 2020 *Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación*, referencia citada en página 4.

CHÁVEZ MOLINA, EDUARDO Y JOSÉ RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

- 2021 «Clases sociales y desigualdad en la Argentina contemporánea (2011-2019)», en *Realidad económica*, vol. 51, n.º 339, págs. 9-36, referencia citada en página 4.

DALLE, PABLO

- 2012 «Cambios recientes en la estratificación social en Argentina (2003-2011), Inflexiones y dinámicas emergentes de movilidad social. Argumentos», en *Revista de Crítica Social*, n.º 14, referencia citada en página 9.

DALLE, PABLO Y EUGENIO ACTIS DI PASQUALE

- 2021 «El impacto de la doble crisis de la prepandemia y la pandemia en las tendencias ocupacionales en Argentina (2003-2020)», en *Tramas*, n.º 15, págs. 30-48, referencia citada en páginas 4, 15.

DALLE, PABLO Y MARÍA MERCEDES DI VIRGILIO

- 2022 «Estructura social de Argentina y políticas públicas durante la pandemia de COVID-19: el diseño de una encuesta nacional comparativa interregional», en *Revista Latinoamericana de Metodología de la Ciencias Sociales*, vol. 12, n.º 2, referencia citada en página 8.

DÍAZ LANGOU, G.; C. DELLA PAOLLERA Y J. ECHANDI

- 2021 «El sistema de protección social argentino frente a la pandemia: viejos desafíos y nuevas oportunidades», en *Ciudadanías. Revista de Políticas Sociales*, n.º 8, referencia citada en página 23.

ELBERT, RODOLFO

- 2020 *Uniendo lo que el Capital divide: Clase obrera, fragmentación y solidaridad (Buenos Aires, 2003-2011)*, Buenos Aires: Ediciones Imago Mundi, referencia citada en página 7.

ESPING ANDERSEN, GØSTA

- 1993 *Los tres mundos del Estado del bienestar*, Valencia: Alfons el Magananim, referencia citada en página 5.
- 2015 «Welfare regimes and social stratification», en *Journal of European Social Policy*, vol. 25, n.º 1, págs. 124-134, referencia citada en página 5.

FILGUEIRA, CARLOS

- 2000 *La actualidad de viejas temáticas: sobre los estudios de clase, estratificación y movilidad social en América Latina*, Santiago de Chile: CEPAL, referencia citada en página 5.

GERMANI, GINO

- 1955 *Estructura Social de la Argentina*, Buenos Aires: Raigal, referencia citada en página 5.

GRAMSCI, A.

- 1984 *Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno*, Buenos Aires: Nueva Visión, referencia citada en página 5.

## MACEIRA, VERÓNICA

- 2011 *Trabajadores del conurbano bonaerense. Heterogeneidad social e identidades obreras*, Rosario: Prohistoria, referencia citada en página 7.
- 2016 «Una aproximación a los cambios en la estructura de clases y la diferenciación social de los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires, en la post-convertibilidad», en *Revista ASET*, n.º 52, referencia citada en página 9.
- 2018 «Clases y diferenciación social en la Argentina contemporánea», en *La sociedad argentina en el siglo XXI*, Buenos Aires: Siglo XXI, referencia citada en páginas 6, 7.
- 2021 «Cambios en la estructura socio-ocupacional en Argentina en el período 2016 -2020: entre la restauración neoconservadora y la crisis socio-sanitaria», en *Realidad Económica*, vol. 51, n.º 344, referencia citada en páginas 4, 6, 7, 15, 23, 42.

## MALDOVAN BONELLI, JOHANNA; NICOLÁS DZEBROWSKI y NORA GOREN

- 2021 «Pandemia y mercado de trabajo: los impactos del ASPO en los/as ocupados/as de la provincia de Buenos Aires en el segundo trimestre de 2020», en *Lavboratorio. Revista de Estudios sobre Cambio Estructural y Desigualdad Social*, págs. 34-58, referencia citada en página 15.

## MARX, KARL

- 1975 *El capital*, Madrid: Siglo XXI, referencia citada en páginas 6, 7.

## NUN, JOSÉ

- 1969 «Superpoblación relativa, ejército industrial de reserva y masa marginal», en *Revista Latinoamericana de Sociología*, vol. 5, n.º 2, referencia citada en páginas 5, 7.
- 1987 «Vaivenes de un régimen social de acumulación en decadencia», en *Ensayos sobre la transición democrática en la Argentina*, ed. por Nun José y Juan Carlos Portatiero, Buenos Aires: Puntosur editores, referencia citada en página 5.
- 1999 «El futuro del empleo y la tesis de la masa marginal», en *Desarrollo Económico*, vol. 38, n.º 152, págs. 985-1004, referencia citada en página 5.

## NUN, JOSÉ; MIGUEL MURMIS y JUAN CARLOS MARÍN

- 1968 «La marginalidad en América Latina. Informe preliminar», en *Informe preliminar. Documento de Trabajo*, Buenos Aires: Instituto Torcuato Di Tella, referencia citada en página 5.

## PALOMINO, HÉCTOR y PABLO DALLE

- 2016 «Movilización, cambios en la estructura de clases y convergencia de ingresos en Argentina entre 2003 y 2013», en *Desarrollo Económico*, vol. 56, n.º 218, págs. 59-100, referencia citada en página 9.

- 2022 «Trabajadores en la salida de la pandemia: convergencia a partir de la diversidad», en *Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia. Efectos de la doble crisis y recomposición social en disputa*, comp. por Pablo Dalle, Buenos Aires: Ediciones Imago Mundi, vol. 2, referencia citada en página 41.

## PIVA, ADRIÁN

- 2020 «Clase y estratificación social en Argentina, 1947-2010», en *Papers*, vol. 105, n.º 3, págs. 389-419, referencia citada en página 7.

## PORTES, ALEJANDRO

- 2003 «Latin American Class Structures: Their Composition and Change during the Neoliberal», en *Latin American Research Review*, vol. 38, n.º 1, págs. 41-82, referencia citada en página 7.

## POY, SANTIAGO

- 2021 «Trabajadores/as pobres ante la irrupción de la pandemia de COVID-19 en un mercado laboral segmentado», en *Estudios del Trabajo. Revista de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo*, n.º 62, recuperado de <<https://ojs.aset.org.ar/revista/article/view/105>>, referencia citada en página 4.

## RIPPSO

- 2020 *Relevamiento de intervenciones sociales del Estado frente al COVID 19*, recuperado de <<http://rippso.com.ar/relevamiento-covid-19>>, referencia citada en página 23.

## SALOMON, MARA

- 2020 «La política fiscal en el centro de la escena: análisis del Programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción (ATP) y del Ingreso familiar de emergencia (IFE). Informe institucional», en *Programa de Estudios Tributarios e Impositivos para la Administración Pública*, Buenos Aires: Defensoría del Pueblo, referencia citada en página 27.

## SAUTU, RUTH

- 1969 «Economic Development and Social Stratification in Argentina», en *Ph.D. Dissertation: The London School of Economics and Political Science*, University of London, referencia citada en página 5.
- 2016 *Economía, clases sociales y estilos de vida*, Buenos Aires: Lumiere, referencia citada en página 5.

## SCHORR, MARTÍN; PABLO MANZANELLI Y EDUARDO BASUALDO

- 2012 «Elite empresaria y régimen económico en la Argentina. Las grandes firmas en la posconvertibilidad», en *Documento detrabajo FLACSO*, n.º 46, referencia citada en página 47.

## TORRADO, SUSANA

- 1992 *Estructura social de la Argentina: 1945-1983*, Buenos Aires: De la Flor, referencia citada en páginas 5, 8.

WRIGHT, ERIK OLIN

1994 *Clases*, Madrid: Siglo XXI, referencia citada en página 6.

2018 *Comprender las clases sociales*, Madrid: Akal, referencia citada en página 5.

## CAPÍTULO 2

# La vulnerabilidad del hogar frente a situaciones de riesgo social

RUTH SAUTU<sup>\*</sup> y JOAQUÍN CARRASCOSA<sup>\*\*</sup>

### 2.1 Introducción

Intuitivamente sabemos de los posibles riesgos que enfrentamos junto con nuestras familias. La intuición frente estos riesgos es parte de nuestra herencia biológica y entrenamiento social; su percepción anticipada es adquirida durante el proceso de socialización temprana y a través de las experiencias a lo largo de la vida. Los riesgos a la salud, integridad y bienestar de las personas y sus hogares tienen potencialmente múltiples causas que los afectan diferencialmente según quienes son y dónde viven.

Aunque los riesgos sociales afectan a todos los integrantes de una comunidad, su percepción anticipada y sus consecuencias son distintas según la inserción social y territorial de las personas. Los riesgos ambientales como los climáticos, terremotos, tecnológicos, incendios y las pandemias normalmente no respetan fronteras, no obstante lo cual, pueden existir zonas de menor riesgo y zonas con mayor capacidad para enfrentarlos. La vulnerabilidad de los hogares resulta de la combinación entre las desigualdades socioeconómicas y el grado de exposición/cercanía con las situaciones de riesgo, la cual se incrementa y es de más larga duración en los segmentos/clases sociales de menores ingresos (Linnekamp *et al.* 2011).

No obstante, vulnerabilidad no es lo mismo que pobreza, porque significa *sin defensa, inseguridad y exposición a riesgos, shocks y tensiones*. La diferencia se hace evidente cuando *distinguen* (y comparan) *diferentes dimensiones de la privación* (deprivation), *por ejemplo*,

---

\* Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG-UBA).

\*\* Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG-UBA).

*debilidad física, aislamiento, pobreza y carencia de poder, así como vulnerabilidad* (Chambers 1989); en síntesis, la vulnerabilidad es la exposición a contingencias en situaciones de falta de medios para hacerles frente (Dercon 2006). Aun cuando la pobreza implica vulnerabilidad, la importancia de distinguir entre vulnerabilidad y pobreza evita caer en estereotipos que consideran a los pobres como una masa indiferenciada con escasa o nula capacidad de agencia.

Las disposiciones y comportamientos durante la pandemia del COVID-19 son un ejemplo de como las circunstancias azarosas pueden eventualmente ser abordadas diferentemente por personas y hogares. La rapidez de la difusión y gravedad de sus efectos ha potenciado el interés generalizado por comprender, de manera más amplia, sus consecuencias socioeconómicas y las circunstancias de vulnerabilidad para los hogares.

La vulnerabilidad ha sido definida como la situación que establece probabilidades de resolución de experiencia de riesgos que afectan a toda la sociedad. Tal es el caso de los desastres ecológicos y la pandemia COVID-19. No obstante, las probabilidades del riesgo y posibilidades de resolución son diferentes para los hogares de distintas clases sociales, y etnia, y seguramente según el género de su principal sostén.

La clase social y el hábitat de residencia conforman la matriz principal en la cual se asientan los hogares, ya que ello define su posición en la estructura de desigualdad social, su probabilidad de control y acceso a recursos materiales y simbólicos, lo cual establece sus condiciones básicas de existencia. La clase social, por lo tanto, constituye el punto de partida para analizar las consecuencias de riesgos sociales como es la pandemia COVID-19.

Además de la clase social, existen circunstancias que dan cuenta de la mayor o menor vulnerabilidad de los hogares; las más azarosas son las vinculadas con el empleo y la salud de sus miembros. Entre las muchas causas de vulnerabilidad, el objetivo de este artículo es analizar aquella que proviene de su constitución económico-demográfica: tamaño, estructura de edad de sus miembros y sostén económico del hogar.

La pobreza es la mayor causa de vulnerabilidad de los hogares porque enfrentan la interacción de riesgos de diverso origen con una capacidad de respuesta y adaptación a la situación muy limitadas. Sus condiciones del hábitat son agravadas por la limitación en sus posibilidades de consumo alimentario y de otros bienes y servicios básicos, el acceso a la educación, los riesgos para la salud, y condiciones generales de inseguridad.

## 2.2 Vulnerabilidad económico-demográfica

Tres problemáticas centrales han predominado en la investigación de los procesos de desarrollo económico-social de América Latina. Primero, la magnitud de la inversión y su orientación hacia actividades productivas, su localización espacial y la creación de empleo, la inserción internacional de las economías, y distribución del ingreso. Segundo, las políticas públicas económicas, sociales y poblacionales y sus efectos sobre el crecimiento económico. Y tercero, la dinámica poblacional y su mutua interacción con los procesos económicos. La perspectiva desde cual estos y otros problemas asociados a ellos han sido abordados es la de interseccionalidad de las tramas societales. Es así que la investigación macrosocial del crecimiento económico de largo plazo ha estado acompañada, entre otros temas, por la referida a los cambios en la composición etaria de la población y su incidencia en la orientación de las políticas públicas de educación, salud y jubilaciones.

La problemática de la intersección entre los procesos de desarrollo económico y la dinámica poblacional es basta y compleja; sin detenernos aquí en su análisis es relevante recordar los nexos entre actividades económicas, composición por género y edad de la población y mercado de trabajo. En un análisis macrosocial del empleo, mientras la demanda de trabajo está condicionada por las actividades económicas, su organización y las tecnologías preponderantes, la oferta laboral depende de la estructura por edad y género y los patrones prevalentes de participación económica. La meta es establecer cómo y con qué intensidad la distribución por edad de la población eventualmente afectará el crecimiento económico, ya que sus consecuencias difieren si se trata de una región o país con media/alta natalidad o uno en el cual está creciendo la población anciana (mayor a 65 años). Ambos extremos afectan la magnitud posible de la población económicamente activa.

En Argentina, con diferencias regionales, la tendencia es hacia un mayor envejecimiento de su población activa debido al decrecimiento de la fecundidad y mejores condiciones sanitarias y, por ende, una mayor esperanza de vida; situación está que afecta el nivel de dependencia económica y el ingreso por habitante.

«La dependencia económica definida a un nivel macro, se refiere a la carga que representa para la sociedad del número de personas que necesitan del sustento económico de quienes generan ingresos. Habida cuenta que para la mayoría de las personas la fuente principal de ingresos es su trabajo y que hay edades en que el trabajo remunerado prácticamente no existe (niños y ancianos)» (Bravo 1991).

En los análisis macrosociales de la dependencia demográfica-económica se han utilizado varios índices que tienen entre sí una gran coincidencia; la idea que subyace a todos ellos es establecer cuál es la magnitud de la carga que pesa sobre los que generan ingresos a través de su participación económica y el conjunto de la población. Lógicamente cuanto mayor es el porcentaje de niños y ancianos respecto de la población adulta joven, mayor es la dependencia y también la vulnerabilidad de esa sociedad a cambios bruscos en los niveles de actividad económica y empleo laboral.<sup>[1]</sup> Bravo (1991) propone el índice de dependencia como el cociente entre el número de personas comprendidas en las edades extremas y el tamaño de la población en edad de trabajar. Un índice muy difundido es la relación de dependencia demográfica (RDD) que se calcula relacionando la población potencialmente fuera del mercado laboral (se incluye a todos los menores de 15 años y a todos los mayores de 65 años y más), respecto a la población potencialmente activa (todas las personas que poseen una edad entre 14 y 64 años. Dos índices complementarios, propuestos por Chackiel (2000, pág. 26) son: la relación de dependencia efectiva que en el denominador tiene en cuenta a la población económicamente activa (PEA), es decir ocupados y los no ocupados que buscan trabajo, y el segundo, la relación de dependencia «real» (la población activa son solo las personas ocupadas, considerando a toda la población restante como dependientes, inactivos o desocupados.

«El primer índice mencionado resulta superador al índice clásico, mediante la incorporación de información sobre la intensidad de participación de la población en la actividad económica, por tanto, las personas potencialmente activas corresponden al grupo poblacional de 14 años y más, inserto en el mercado laboral (ocupados o desocupados). Y el segundo índice, establece a la población proveedora como las personas de 14 años y más, que se encuentran ocupadas, mientras que toda la población restante pertenece al grupo de los dependientes. Ambos índices representan un avance en términos de expresar una estimación un tanto más realista de la carga de dependencia demográfica, en relación a la RDD “clásica”» (Manzano y Velázquez 2016b).

La dependencia demográfica, principalmente usada en su perspectiva macrosocial, es el resultado agregado de los hogares de todo tipo que conforman un colectivo social; abordada desde una perspectiva micro-social incluye situaciones dispares, desde los hogares unipersonales a los hogares completos e incompletos y grupos de

---

[1] En los períodos de crisis y desempleo, por ejemplo, en la década de los noventa, ha crecido la tasa de participación económica femenina, merece destacarse el cambio de comportamiento económico de las mujeres con compañero desempleado y de las madres de familia.

convivencia, incluyendo los institucionalizados. La ventaja de la perspectiva microsocial es que muestra un aspecto de la vulnerabilidad social, la que, si bien nunca reemplaza la vulnerabilidad que se origina en la clase social, la etnia o el género, contribuye a comprender más plenamente las posibles consecuencias sobre los hogares de situaciones de riesgo generalizado, como es el caso de las pandemias.

A nivel microsocial el índice de dependencia demográfica representa la carga del tamaño y composición del hogar sobre las personas que constituyen su sostén económico. La relevancia de abordar una investigación de la vulnerabilidad desde una perspectiva microsocial se explica en primer lugar por la distribución desigual de recursos en la población y por ende sus probabilidades de riesgo, segundo, porque el nivel de dependencia demográfica depende del momento en el ciclo de vida del hogar, y tercero porque existen diferencias entre los hogares en su movilización agéntica para enfrentar y resolver situaciones de riesgo.

El mayor riesgo afecta a los hogares pobres, a aquellos en los cuales el número de menores es grande, o que están compuestos por mayoría de personas ancianas o migrantes recientes o con mujeres de baja educación como sostén del hogar. Las características de la comunidad o barrio en el cual residen y los recursos sociales disponibles son factores que potencialmente pueden atemperar las consecuencias adversas de los riesgos sociales (Morrow 1999). Pueden asimismo constituir factores que potencian la exclusión y afectan negativamente las posibilidades de acceder a trabajos remunerados estables y de mayores salarios (Bonio 2020; Carrascosa y Estéves-Leston 2020).

La pobreza afecta comparativamente de manera más dura a los hogares que tienen más niños, ancianos o personas discapacitadas, ya que consumo alimentario, cuidado de la salud y educación, son mayores en este tipo de hogares, especialmente durante el ciclo de vida en que el número de miembros activos es reducido. Ellos son hogares

«más vulnerables o con mayores riesgos de caer y mantenerse en la pobreza. Un estudio reciente, que considera un análisis diacrónico con datos de la Encuesta nacional sobre Medición de Niveles de Vida (ENMNV) de 1998 y del 2001, encontró que los hogares con menos educación y con más niños tenían menos probabilidades de salir de la pobreza y más probabilidades de entrar en ella en ese lapso» (Barahona 2006, cita el estudio de Andersen 2003, en Nicaragua).

La influencia de la dependencia demográfica en los hogares pobres y no pobres tiene lugar en sus capacidades de consumo, pero también en su probabilidad de ahorrar. La presencia de niños y personas ancianas en relación a los aportantes diluye las posibilidades

de avance económico que requiere poseer capacidad de ahorro y acumulación, de allí que en los hogares pobres incida negativamente en sus posibilidades de salir de la pobreza. En el mediano y largo plazo la tasa de ahorro de un hogar depende del empleo remunerado, el acceso al crédito, la existencia de rentas y transferencias, en combinación con las variables demográficas que caracterizan los hogares, entre ellas la tasa de dependencia (Mosquera 2017).<sup>[2]</sup>

Como en el caso del índice macrosocial existen varias formas de computarlo dependiendo de las características de la sociedad estudiada. En países con una baja tasa de desempleo y un período corto de espera, es posible usar en el denominador todos los económicamente activos en el hogar (ocupados más desocupados buscando trabajo); diferente es la situación en países y regiones con desocupación alta y con frecuencia de largo plazo, y mercados laborales no formales. Lo más prudente es calcular la tasa usando los económicamente ocupados.

Las críticas al índice macrosocial de dependencia demográfica son aplicables al computado a nivel de los hogares, la más importante en países como el nuestro es la existencia de trabajos temporarios informales, ingresos generados por fuera de las relaciones laborales como son las rentas y transferencias financieras entre hogares, seguros y jubilaciones (Manzano y Velázquez 2016a).

### 2.3 La construcción de una tipología económico-demográfica de vulnerabilidad del hogar

El propósito de esta sección es describir la construcción de una tipología que refleje situaciones de vulnerabilidad de los hogares, más allá de las condiciones básicas de existencia establecidas por las clases sociales. Sin desconocer la importancia clave de la pertenencia a una clase social, nuestro deseo es conocer la influencia de otros rasgos de los hogares que aporten a una mayor comprensión de las consecuencias económicas de la pandemia del COVID-19.

Los datos provienen de la Encuesta nacional sobre la Estructura Social de Argentina y Políticas Públicas durante la pandemia por COVID-19 (ESAyPP/PISAC-COVID-19) relevada en la Argentina urbana entre octubre y diciembre de 2021. El universo de estudio de la ESAyPP/PISAC-COVID-19 es doble: los hogares y la población adulta residente en localidades de Argentina mayores a 50 mil habitantes.

---

[2] El aumento de la participación económica femenina y el reemplazo de los proveedores masculinos durante la crisis de empleo de los noventa en Argentina mostró una estrategia para la preservación del nivel de consumo y eventualmente de la capacidad de ahorro de los hogares (Sautu *et al.* 2000, los varios estudios cubren distintas regiones del país).

El diseño muestral probabilístico, estratificado y por conglomerados permite tres dominios de estimación: a nivel nacional, por regiones y por tamaño de los aglomerados. El tamaño de la muestra relevada es de 5239 hogares y personas adultas, combinando amplia escala y cobertura.<sup>[3]</sup>

La encuesta cuyos datos utilizaremos en la construcción de la tipología es de cobertura nacional y su diseño aleatorio permite estimaciones a nivel de las regiones e incorporar información sobre la persona encuestada, su hogar y miembros del mismo, y de la persona sostén principal del hogar (PSH). En el presente análisis la unidad de análisis son los hogares y las variables construidas tenidas en cuenta son los ingresos *per cápita* del hogar y la tasa de dependencia demográfica.

La tasa de dependencia ha sido calculada como el cociente entre el número de miembros del hogar de todas las edades dividido por el de los ocupados y personas con ingresos propios. Así, la tasa indica cuántas personas en el hogar, incluyendo los proveedores de ingresos, dependen de cada proveedor. Cuando la tasa es alta, la pérdida de empleo o fuente de ingresos afecta a un número mayor de personas. Lamentablemente, no tenemos idea del patrimonio de los hogares, ni su capacidad de ahorro efectiva. En el presente análisis no diferenciaremos las edades de las personas dependientes, menores y ancianos, porque necesitaríamos abordar primero el análisis de la composición de los hogares. Aunque normativamente los menores no deben trabajar y los mayores de 65 años deberían estar jubilados, sería necesario constatarlo empíricamente en nuestros datos.

Teniendo en cuenta que las tasas de dependencia forman una larga serie de valores continuos, calculamos los quintiles de la distribución de frecuencias para establecer los valores en las cinco categorías de intervalo desde las tasas más bajas a las más altas (véase cuadro 2.1).

En la construcción de la tipología de vulnerabilidad incluimos el nivel de ingreso *per cápita* del hogar para dimensionar el significado de la tasa de dependencia entre distintos tipos de hogares. El supuesto que subyace a esta decisión es que su situación económico-financiera constituye el sustrato de la vulnerabilidad de un hogar. Esta variable, ingresos *per cápita*, es una consecuencia de la pertenencia a clase asociada a las condiciones de empleo y posición ocupacional.<sup>[4]</sup> Podríamos haber decidido usar exclusivamente la tasa de dependencia demográfica, pero como veremos, teniendo en

[3] Para poder profundizar en el diseño teórico-metodológico de la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 elaborado por los equipos de investigación de los proyectos PISAC-COVID-19 085 y 021, véase [Dalle y Di Virgilio \(2022\)](#).

[4] En las encuestas, las variables y sus indicadores seleccionan elementos claves de una situación, rasgos de colectivos o atributos de personas. Se asume

**Cuadro 2.1. Distribución de los hogares según los quintiles de tasa de dependencia demográfica por ingreso *per cápita* del hogar. Argentina urbana, 2021.**

	1 (más bajo)	2	3	4	5 (más alto)	Total
1 (más bajo)	80	109	168	293	410	1 061
2	218	159	245	193	180	995
3	534	158	183	98	83	1 055
4	604	102	174	53	41	974
5 (más alto)	780	50	73	22	31	956
Total	2 217	578	842	659	745	5 041

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

cuenta que nuestras variables dependientes son pérdida de empleo y condiciones económico-financieras consecuencias de la pandemia, nos pareció necesario distinguir los hogares que seguramente viven al día de aquellos con posibles reservas.

La variable Ingreso *per cápita* ha sido estandarizada usando la distribución por quintiles dentro de cada región, lo cual en los análisis regionales permite respetar las distribuciones de ingresos de las distintas regiones. Esta decisión tiene en cuenta que la relación ingresos del hogar-costo de vida depende de las condiciones económico-sociales de las diversas regiones. En este capítulo hemos an\$ cuadro 2.7 en el anexo.

Para la construcción de una tipología de la magnitud de vulnerabilidad demográfica del hogar partimos de la distribución de frecuencias del cuadro 2.1 en el que se cruzó el quintil de ingreso per cápita por la tasa de dependencia. Si bien, como ya dijimos, nuestro interés se centra en la carga que significa el tamaño del hogar en relación con los proveedores de ingresos, esta relación debe ser contextualizada por la magnitud de la capacidad de generar ingresos de los distintos hogares. Tomamos el ingreso per-cápita porque incorpora el tamaño del hogar.

La construcción de la tipología se realizó por etapas; nuestra meta fue armar un sistema de categorías que reflejara la intensidad de la

---

que esa variable y su indicador conforman un complejo del cual son un emergente visible. Siempre son simplificaciones pragmáticas.

vulnerabilidad del hogar teniendo en cuenta su situación económica y la dependencia demográfica.<sup>[5]</sup>

En la primera etapa, a partir de las celdas del cuadro 2.1, formamos conjuntos agregados de la combinación ingreso/dependencia. A tal efecto, calculamos para cada celda el porcentaje del principal sostén del hogar (PSH) que realizaba changas y/o recibía planes de empleo. La inestabilidad laboral es un factor determinante de la mayor vulnerabilidad de los hogares que incide sobre sus condiciones básicas de existencia. A partir del quintil de ingreso *per cápita* más alto como eje, se establecieron los puntos de corte de la variable dependencia, según fuera el porcentaje de changas y/o planes de empleo del PSH en cada una de estas categorías. Mientras en los dos quintiles más altos de ingreso el corte se dio entre las categorías hasta 3 y 3.1 personas de tasa de dependencia, en los tres de ingresos más bajo el punto de corte fue hasta 1.8 y 1.9 personas de tasa de dependencia. La combinación de las categorías de las dos variables permitió construir diez tipos, véase cuadro 2.8 en el anexo.

En la siguiente etapa, se computó para cada una de las diez tipologías, para las personas principal sostén del hogar (PSH) el porcentaje femenino, el porcentaje de empleo permanente o contrato y el porcentaje de changas, y el porcentaje de menores de 15 años entre los miembros del hogar (véase cuadro 2.2).

Los 10 tipos construidos en el cuadro 2.2 sin llegar a conformar completamente una escala ordenada, mantienen un cierto orden que proviene de las categorías de la variable ingreso *per cápita* que es una escala de ratio cuantitativa; el cruce con la variable tasa de dependencia, que también es una escala cuantitativa, se obtienen los tipos para los cuales podemos asumir que representan intensidades de vulnerabilidad.

### 2.3.1 La vulnerabilidad económico-demográfica en tiempos de pandemia

El presente análisis no tiene objetivos causales, tampoco asume un efecto directo entre la vulnerabilidad económico-demográfica del hogar y las consecuencias de la pandemia sobre el empleo y la capacidad de ahorro de los hogares. El contexto estructural social, en este caso las condiciones sanitarias y de aislamiento, han afectado a

---

[5] Se trata de construir una escala ordenada en la cual podemos postular que la vulnerabilidad es mayor o menor, pero no cuantificarla. Una posible estrategia sería cuantificar las variables ingreso *per cápita* y tasa de dependencia usando un patrón de medida igual para ambas, y a partir de allí construir un índice numérico. El problema es la justificación teórica del patrón común de medida.

**Cuadro 2.2. Situación de empleo de principal sostén del hogar, porcentaje de jefatura femenina, empleo estable, changas, y de menores de 15 años en el hogar según la tipología del nivel de vulnerabilidad económico-demográfica. Argentina urbana, 2021.**

Vulnerabilidad	A	B	C	D
Ingresos altos, dependencia moderada	99.3	0.2	36.0	2.4
Ingresos altos, alta dependencia	92.2	7.8	19.4	1.5
Ingresos semialtos dependencia moderada	94.6	4.2	38.4	8.2
Ingresos semialtos, alta dependencia	82.7	17.3	32.7	18.8
Ingresos medios, dependencia baja	91.5	7.4	46.9	3.8
Ingresos medios dependencia media y alta	94.1	5.1	47.4	27.5
Ingresos semibajos, dependencia baja	80.0	18.4	42.4	5.9
Ingresos semibajos dependencia media y alta	90.3	8.0	54.9	31.8
Ingresos bajos dependencia baja	70.8	26.2	58.3	10.9
Ingresos bajos dependencia media y alta	71.9	26.6	63.4	40.1
Total	88.7	10.1	45.7	16.1

A: trabajo permanente o contrato (%); B: hace changas (%); C: jefatura del hogar femenina (%); D: % de menores de 15 años en el hogar (sobre total de integrantes). Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

los hogares y sus miembros de manera diferente. Desde los requerimientos metodológicos, los hogares constituyen cajas negras en las cuales se intersectan distintos procesos que son intermediarios entre esos factores estructurales sociales del contexto y las consecuencias observables en los comportamientos y situaciones de los distintos tipos de hogares y sus miembros. Así, los efectos de un proceso o situación dada influyen sobre en los distintos tipos de hogar según sean sus atributos y las influencias de otros procesos que puedan afectarlos<sup>[6]</sup>

En el presente capítulo tenemos en cuenta los posibles efectos de las condiciones en la cuales transcurrió la pandemia y las posibles

[6] Toda investigación científica en ciencias sociales o en las físico-naturales implica la construcción de un modelo de análisis en el cual se postula las variables y sus relaciones, algunos incorporan variables intermedias en la secuencia de relaciones. En cambio, en otros modelos esas variables intermedias son latentes, no se hacen explícitas, pero se tienen en cuenta, de alguna manera en la etapa explicativa. En los análisis de procesos económicos que son muy complejos no se pueden incorporar explícitamente todas las variables que teóricamente se asume están presentes (Kendall y Muirchearthaigh 1977).

consecuencias en la situación laboral del principal sostén del hogar (PSH) y los efectos sobre la capacidad de ahorro del hogar. En ambos casos, la pandemia transformó el funcionamiento de los mercados laborales, los ingresos, así como los consumos y gastos de los hogares; estos constituyeron los procesos intermediarios entre el contexto – la pandemia – y los hogares. Más aún, consecuencias de dichos procesos dependieron de la zona de residencia, la composición del hogar, su estructura de edad, y el género, nivel de educación y lo más importante, la ocupación de su PSH.

La encuesta cuyos datos analizamos nos permiten abordar los posibles efectos de la pandemia sobre la situación laboral del PSH (asalariados o independientes) y sobre la capacidad de ahorro de hogares los cuales se diferencian según la carga que implica su tasa de dependencia, es decir según el número de miembros del hogar que son sostenidos económicamente por los proveedores económicos. Como describimos en el punto anterior la tasa de dependencia tiene distinto significado según la magnitud de los ingresos promedio del hogar.

**Cuadro 2.3. Distribución de los efectos de la pandemia sobre la situación de empleo del principal sostén del hogar (asalariados), según la tipología del nivel de vulnerabilidad económico-demográfica. Argentina urbana, 2021.**

Vulnerabilidad	A	B	C	D	E	n
Ingresos altos, dependencia moderada	1.2	1.8	17.6	1.4	78.2	584
Ingresos altos, alta dependencia	0.0	0.0	68.2	0.0	31.9	29
Ingresos semialtos dependencia moderada	1.5	0.6	22.4	4.1	71.4	609
Ingresos semialtos, alta dependencia	0.0	17.9	7.1	18.1	56.9	15
Ingresos medios, dependencia baja	1.6	0.8	12.7	4.2	80.7	367
Ingresos medios dependencia media y alta	0.8	1.6	20.3	4.1	73.2	159
Ingresos semibajos, dependencia baja	2.6	4.3	15.1	7.7	70.4	158
Ingresos semibajos dependencia media y alta	3.1	1.8	24.1	2.5	68.4	264
Ingresos bajos dependencia baja	3.8	4.5	10.7	7.5	73.6	84
Ingresos bajos dependencia media y alta	2.2	9.9	22.3	7.0	58.7	355
Total	2	4	20	4	70	2624

A: despedido recuperó el trabajo (%); B: despedido no recuperó el trabajo (%); C: susp. o red. de salario y lo recuperó (%); D: susp. o red. de salario y no lo recuperó (%); E: mantuvo su situación (%). Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

El cuadro 2.3 consigna la distribución porcentual de la situación del empleo (asalariados, contratados y similares) de los PSH de los

hogares comprendidos en cada uno de los 10 tipos de nivel de vulnerabilidad económico-demográfica. Con la excepción del tipo n.º 3 que incluye solo 31 hogares, en los tipos 1, 3, y 5, tres cuartos de los hogares mantuvieron su empleo remunerado durante la pandemia. Solo un porcentaje pequeño entre los que fueron despedidos o suspendidos no recuperó su situación laboral previa a la pandemia (menos del 5 %) Estos son hogares de ingresos medios o altos en los cuales es también pequeño el porcentaje de menores de 15 años (menos del 8 %).

El tipo n.º 4 incluye 41 hogares de ingresos *per cápita* medio-altos y con una alta tasa de dependencia (3.1 y más miembros por cada proveedor), un tercio de PSH femenina, y un número alto de menores de 15 años (18.8 %) lo cual explica la tasa alta de dependencia. El 57 % de estos hogares el PSH mantuvo su empleo, pero un tercio fue despedido o suspendido y no recuperó su situación laboral anterior.

Casi la mitad de los hogares del tipo n.º 6 (ingresos medios y media y alta dependencia) tiene una PSH femenina y un alto porcentaje (27.5 %) de menores de 15 años, pero también es alto el porcentaje con empleo permanente o contrato (94.1 %). Solo el 6 % no recuperó su situación laboral anterior a la pandemia.

El tipo n.º 7 se caracteriza por tener ingresos *per cápita* medio-bajos y tiene un porcentaje de menores bajo (5 %) y tasa de dependencia baja; el 11 % de los hogares habiendo sido despedido o suspendido el PSH no recuperó su situación anterior. En el tipo n.º 8, también de ingresos per-capita medio-bajos, más de la mitad de los PSH son mujeres y un tercio (31.8 %) son menores, pero solo un pequeño porcentaje no recuperó su situación anterior.

Los tipos de ingresos bajos (9 y 10) son hogares en los cuales más del cincuenta por ciento tiene una PSH mujer, y más de un cuarto de los casos realiza changas para obtener ingresos; en el caso de baja tasa de dependencia (tipo 9) el porcentaje de menores es bajo; por el contrario, en los hogares de media y alta dependencia el 40.1 % de sus miembros son menores de 15 años. En ambos tipos de hogares, respectivamente 12 % y 17 %, no recuperó su nivel de empleo, fuera este estable o inestable.

La mitad de los hogares cuyo PSH es empleador o cuenta propia no sufrieron dificultades insalvables en sus actividades durante la pandemia; la excepción son los hogares de ingresos bajos aun cuando la tasa de dependencia también es baja (véase cuadro 2.4). Los hogares menos afectados comparativamente fueron los de mayores ingresos *per cápita*, y los de ingresos semibajos pero baja dependencia. Mirados en conjunto los datos indicarían que los problemas en los negocios, sean de empleadores o cuenta propia, dependieron del tipo de actividad desarrollada.

**Cuadro 2.4. Distribución de los efectos de la pandemia sobre la situación de empleo del principal sostén del hogar (cuenta propia y empleadores), según la tipología del nivel de vulnerabilidad económico-demográfica. Argentina urbana, 2021.**

Vulnerabilidad	A	B	C	D	Total
Ingresos altos, dependencia moderada	24.3 (0.3)	13.7	27.5	34.5	196
Ingresos altos, alta dependencia	0.0	100.0	0.0	0.0	1
Ingresos semialtos dependencia moderada	37.1 (5.9)	18.4	19.5	24.9	122
Ingresos semialtos, alta dependencia	98.2 (25.9)	0.0	0.0	1.8	8
Ingresos medios, dependencia baja	40.5 (5.3)	10.4	19.9	29.3	124
Ingresos medios dependencia media y alta	47.66 (23.5)	11.4	4.8	36.2	51
Ingresos semibajos, dependencia baja	25.1 (7.0)	16.1	13.7	45.0	77
Ingresos semibajos dependencia media	43.0 (3.8)	7.9	28.1	21.0	79
Ingresos bajos dependencia baja	50.9 (17,0)	20.8	2.4	26.0	36
Ingresos bajos dependencia media y alta	35.5 (6.1)	17.2	22.4	24.9	114
Total	35.53 (6.2)	14.2	20.3	30.0	807

A: cerró (no recuperó entre paréntesis); B: caída de ventas o cambio de rubro no recuperó; C: caída de ventas o cambio de rubro recuperó; D: no lo afectó. Fuente: encuesta PISAC 2021-2022.

La vulnerabilidad del hogar económico-demográfica establece condiciones en donde ocurren sucesos, se dan situaciones, cuyas consecuencias laborales no son iguales para todo tipo de hogar. También difiere el posible impacto sobre la capacidad de ahorro de la familia; el cuadro 2.5 para cada tipo de hogar consigna si sus ingresos les permiten ahorrar, si son solo suficientes y si no les alcanza para cubrir sus necesidades.

Los únicos hogares que pueden ahorrar un parte importante de sus ingresos son aquellos de altos ingresos y baja dependencia demográfica. En el tipo n.º 2, teniendo altos ingresos, pero alta dependencia, no pueden ahorrar y el 25 % informa que sus ingresos no son suficientes. Los tipos 3 y 4, de ingresos medio-altos, tienen una situación semejante; aunque el 16 % puede ahorrar, cerca de un tercio no tiene ingresos suficientes.

A partir de los ingresos *per cápita* medios, con algunas diferencias en la carga que significa la dependencia demográfica, todos los tipos de hogares, algunos en proporciones muy altas no generan ingresos suficientes para cubrir sus necesidades. La situación es particularmente difícil en los hogares tipo 9 y 10 en los cuales respectivamente el 68 % y el 77 % no alcanza a cubrir sus necesidades; recordemos que son hogares en los cuales una alta proporción de PSH son mujeres,

**Cuadro 2.5. Distribución de los efectos de la pandemia sobre la capacidad de ahorro de los hogares según la tipología del nivel de vulnerabilidad económico-demográfica. Argentina urbana, 2021.**

Vulnerabilidad	A	B	C	D	n
Ingresos altos, dependencia moderada	42	48	10	0	935
Ingresos altos, alta dependencia	0	75	25	0	34
Ingresos semialtos, dependencia moderada	16	56	28	0	952
Ingresos semialtos, alta dependencia	16	52	29	4	41
Ingresos medios, dependencia baja	8	46	46	0	688
Ingresos medios dependencia media y alta	14	53	32	0	362
Ingresos semibajos, dependencia baja	5	37	58	0	375
Ingresos semibajos, dependencia media	7	46	47	0	617
Ingresos bajos dependencia baja	5	27	68	0	190
Ingresos bajos dependencia media y alta	2	21	77	0	849
Total	15	43	42	0	5 043

A: les alcanza y pueden ahorrar (%); B: alcanza, pero no pueden ahorrar (%); C: no les alcanza (%); D: ns/nc (%). Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

más de un cuarto de las mismas tiene una ocupación inestable de changas.

Analizados en conjunto la situación de empleo, las ocupaciones independientes y la capacidad de ahorro, en los tres primeros tipos que tienen ingresos altos y medio-altos, la dependencia demográfica afecta menos que la magnitud del ingreso *per cápita*. Su peso es mayor en los pocos hogares del tipo n.º 4, aun cuando sus ingresos son medio- altos, seguramente debido al peso de la presencia de menores.

En los ingresos medios y más bajos, la tasa de dependencia significa una desventaja, particularmente en los hogares en los cuales el PSH es femenina y con presencia significativa de menores. El impacto de la pandemia ha sido más serio en los hogares de ingresos bajos y alta dependencia, particularmente en aquellos con PSH femenina que en una alta proporción su ocupación remunerada son changas.

Los modelos de regresión muestran que los hogares en los que no alcanzan los ingresos son, en mayor medida, de ingresos *per cápita* bajos o medios (cuartiles 1, 2 y 3) (OR =4,3), hogares en donde el jefe tiene trabajo tipo changas (OR = 2,8) y en los que hay jefatura femenina (OR = 1,29). Los efectos de la tasa de dependencia o de que haya menores de 15 años en el hogar no son significativos, pero esto se explica porque la variable de ingreso es *per cápita*, lo que hace que

**Cuadro 2.6. Regresiones logísticas binarias de probabilidades de tener ingresos del hogar insuficientes y de haber sido afectado por la pandemia y no haberse recuperado. Argentina urbana, 2021.**

	Modelo 1 (odds ratio)   Modelo 2 (odds ratio)	
	A	B
Dependencia		
Dependencia media o alta (ref)	-	-
Dependencia baja o medio-baja	0.905	0.744
Ingresos		
Ingresos medios y altos (Q 4 y 5) (ref)	-	-
Ingresos bajos y medios (Q 1, 2 y 3)	4.387***	2.119***
Menores de 15 años		
Hogares sin menores de 15 años (ref)	-	-
Hogares con menores de 15 años	1.014	0.828
Empleo jefe del hogar		
No hace changas (ref)	-	-
Hace changas	2.872***	1.707*
Sexo del jefe de hogar		
Hombre (ref)	-	-
Mujer	1.291***	0.868
n	4902	2391

\*\*\* p<0.01, \*\* p<0.05, \* p<0.1. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

la composición del hogar ya esté siendo tomada en cuenta por dicha variable. Además, se observa que los jefes de hogares (asalariados) con ingresos medios y bajos (cuartiles 1, 2 y 3) y quienes hacen changas fueron afectados en mayor medida por la pandemia en tanto perdieron el trabajo o se redujeron sus ingresos y no lograron recuperarse.

### 2.3.2 Vulnerabilidad, género y trabajo inestable

El desarrollo económico-tecnológico es un proceso en el cual se intersectan a lo largo del tiempo la economía, la política, la sociedad y su cultura con la dinámica poblacional. Como con el huevo y la gallina es un proceso circular de múltiples interconexiones en cuya investigación es indispensable abstraer solo una parte de ese proceso,

implícitamente asumiendo la presencia de las otras partes y del todo en su conjunto. Dos temas claves, sin duda, son la tasa de crecimiento económico y la distribución del ingreso, ambos entretreídos con la composición de su población, presente aun cuando no se la trate de manera explícita.

En la Argentina de fines del siglo XIX y principios del XX, la inmigración extranjera de personas en edad económicamente activa es considerada como uno de los factores que contribuyó a la alta tasa de crecimiento económico. Asimismo, las migraciones internas de la década del mil novecientos cuarenta contribuyeron al desarrollo manufacturero del Gran Buenos Aires. Mientras una estructura por edad con predominio de adultos jóvenes es un activo, una alta proporción de menores o de personas ancianas en relación a los adultos jóvenes son considerados un pasivo. El propósito de este capítulo ha sido discutir esta problemática ubicándolo en la perspectiva microsocial de los hogares.

En el contexto histórico de la pandemia COVID-19, en base a la encuesta aleatoria realizada en 2021-2022 construimos situaciones posibles de hogares teniendo en cuenta la relación entre número de miembros en el hogar dividido por el número de proveedores de ingreso. En la construcción de la tipología de hogares hemos tenido en cuenta el ingreso *per cápita* del hogar porque la relación población-economía depende tanto en el nivel macro como en el microsocial del volumen total de ingresos del país o del hogar.

En los países ricos ha decrecido el peso de los menores debido a la baja en la fecundidad, pero ha ido creciendo el peso de la población anciana. En los países menos ricos o más pobres, aunque la natalidad ha decrecido, el peso de los menores es mayor. De allí que en la tipología hayamos usado también como criterio clasificatorio el ingreso *per cápita* del hogar. El análisis pormenorizado de los tipos de hogares mostró diferencias entre ellos, pero también algunas regularidades. Nuestro análisis es limitado, solo hemos tenido en cuenta un elemento definitorio de la composición de los hogares, su tasa de dependencia económico-demográfica; otros análisis profundizan el tema de la consecuencia de la pandemia sobre los hogares. No obstante, creemos que más allá de la situación coyuntural por la que está atravesando nuestro país, nuestro análisis ayuda a poner los hogares en el centro del debate. A veces nos olvidamos (existen honrosas excepciones), que en los procesos sociales-económicos los protagonistas son los hogares.; no es lo mismo el desempleo en un hogar con un solo PSH, o el aprovechamiento de las oportunidades de educación de un hogar con pocos o muchos niños en edad escolar.

Una conclusión general parece de perogrullo; sin embargo, no lo es tan así; el peso de la tasa de dependencia depende del nivel económico del hogar. Una familia rica está en condiciones de sostener una

familia numerosa, de menores o de ancianos, la situación se pone difícil para los hogares con menos recursos. Los proveedores que sostienen el hogar seguramente tienen mayor educación y desempeñan ocupaciones mejor remuneradas, lo cual les permite (puede haber excepciones) ahorrar y acumular riqueza. Y viceversa.

Si por analogía pensamos en el nivel macrosocial, mirado retrospectivamente recordamos la discusión hace muchas décadas sobre el peso de los menores como un lastre en el crecimiento económico de sus países. La relación es: con el desarrollo económico-tecnológico una proporción menor de proveedores puede sostener mejor a menores o ancianos. Esta sencilla conclusión ha sido analizada en muchos estudios económicos y sociológicos.

Con COVID o sin COVID, el quid de la cuestión, en perspectiva macro o micro-social pasa por crecer económicamente e impulsar el desarrollo social y cultural de una población. La cuestión pasa por la reducción/desaparición de los trabajos inestables mal remunerados, y fundamentalmente por la reducción/desaparición del servicio doméstico como principal alternativa de trabajo femenino.

## 2.4 Anexo

En la encuesta, primero se pregunta a los encuestados sobre el ingreso total familiar sin opciones de respuesta, es decir el valor numérico exacto de pesos por mes que ingresan en el hogar; luego, a quienes optan por no responder esta pregunta se les pide que ubiquen a su hogar de entre distintas opciones de rangos de ingresos. Para la construcción de la variable de quintiles de ingresos *per cápita* del hogar se utilizaron los datos de quienes respondieron un valor numérico exacto sumando también los de quienes respondieron sobre un rango de ingresos, tomando como valor de referencia para cada rango al punto medio. Luego, para estandarizar según los distintos costos de vida de cada región, se calcularon los quintiles de ingresos *per cápita* por separado para cada región del país. Finalmente, se creó una variable para todos los encuestados en la que a cada encuestado le corresponde el valor del quintil de ingreso al que pertenece en su región.

**Cuadro 2.7. Total del país. 2021-2022. Ingresos *per cápita* del hogar por región.**

Región	Q1 (%20)	Q2 (%40)	Q3 (%60)	Q4 (%80)	Media	Mediana
CENTRO	\$3 333	\$0 000	\$0 000	\$6 500	\$1 490	\$4 000
CUYO	\$2 500	\$7 500	\$5 000	\$5 000	\$6 877	\$0 000
GBA	\$1 667	\$7 500	\$6 250	\$7 500	\$8 156	\$2 000
NEA	\$9 000	\$3 333	\$0 000	\$0 000	\$2 013	\$6 250
NOA	\$0 000	\$5 000	\$3 333	\$3 750	\$3 709	\$8 750
PAMPEANA	\$5 000	\$2 500	\$0 000	\$5 000	\$2 270	\$5 000
PATAGONICA	\$6 667	\$5 000	\$6 667	\$5 000	\$8 456	\$2 500

Fuente: Encuesta PISAC 2021-2022.

**Cuadro 2.8. Total del país. 2021-2022. Construcción de tipología de vulnerabilidad de los hogares.**

Vulnerabilidad	Quintiles de ingresos	Quintiles de dependencia	n
Tipo 1	Ingresos altos (5)	Dependencia hasta 3 (código 1,2,3 y 4)	925
Tipo 2	Ingresos altos (5)	Dependencia alta más de 3.1 (código 5)	31
Tipo 3	Ingresos medio altos (4)	Dependencia hasta 3 (códigos 1,2,3,4)	933
Tipo 4	Ingresos medio altos (4)	Dependencia alta más de 3.1 (5)	41
Tipo 5	Ingresos medios (3)	Dependencia hasta 1.8 (código 1 y 2)	692
Tipo 6	Ingresos medios (3)	Dependencia 1.9 y más (códigos 3,4,5)	364
Tipo 7	Ingresos medio-bajos (2)	Dependencia hasta 1.8 (código 1 y 2)	377
Tipo 8	Ingresos medio-bajos (2)	Dependencia de 1.9 y más (código 3.4.5)	618
Tipo 9	Ingresos bajos (1)	Dependencia hasta 1.8 (código 1, 2)	189
Tipo 10	Ingresos bajos (1)	Dependencia 1.9 y más (3.4.5)	871
Total			5 041

Fuente: Encuesta PISAC 2021-2022.

## Referencias

ANDERSEN, L.

2003 «Population and poverty projections for Nicaragua 1995-2015», en *Development Research Working Paper*, referencia citada en página 57.

BARAHONA, M.

- 2006 «Familias, hogares, dinámica demográfica, vulnerabilidad y pobreza en Nicaragua», en *Población y desarrollo*, n.º 69, referencia citada en página 57.

BONIOLO, PAULA

- 2020 «El efecto de la residencia en la movilidad social intergeneracional», en *El análisis de clases sociales: Pensando la movilidad social, la residencia, los lazos sociales, la identidad y la agencia*, Buenos Aires: UBA y CLACSO, referencia citada en página 57.

BRAVO, J.

- 1991 «Cambios en el empleo, la edad de jubilación y la fecundidad: sus repercusiones sobre la dependencia económica y el ingreso per cápita», en *Notas de Población*, CEPAL, referencia citada en páginas 55, 56.

CARRASCOSA, JOAQUÍN Y BÁRBARA ESTÉVES-LESTON

- 2020 «Mecanismos de acceso al empleo al comienzo de la trayectoria laboral: Desigualdades de clase, territoriales y educativas», en *El análisis de clases sociales: Pensando la movilidad social, la residencia, los lazos sociales, la identidad y la agencia*, Buenos Aires: UBA y CLACSO, págs. 219-248, referencia citada en página 57.

CHACKIEL, JUAN

- 2000 «El envejecimiento de la población latinoamericana: ¿hacia una relación de dependencia favorable», en *Encuentro Latinoamericano y Caribeño sobre las Personas de Edad*, págs. 291-312, referencia citada en página 56.

CHAMBERS, R.

- 1989 «Editorial Introduction: Vulnerability, Coping and Policy», en *IDS Bulletin*, vol. 20, n.º 2, págs. 1-7, DOI: [10.1111/j.1759-5436.1989.mp20002001.x](https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.1989.mp20002001.x), referencia citada en página 54.

DALLE, PABLO Y MARÍA MERCEDES DI VIRGILIO

- 2022 «Estructura social de Argentina y políticas públicas durante la pandemia de COVID-19: el diseño de una encuesta nacional comparativa interregional», en *Revista Latinoamericana de Metodología de la Ciencias Sociales*, vol. 12, n.º 2, referencia citada en página 59.

DERCON, S.

- 2006 «Vulnerability: a micro perspective», en *Securing development in an unstable world*, vol. 30, págs. 117-146, referencia citada en página 54.

KENDALL, M. Y C. MUIRCHEARTAIGH

- 1977 «Análisis de trayectoria y construcción de modelos», en *Notas de Población*, referencia citada en página 62.

LINNEKAMP, F.; A. KOEDAM e I. BAUD

- 2011 «Household vulnerability to climate change: Examining perceptions of households of flood risks in Georgetown and Paramaribo», en *Habitat International*, vol. 35, n.º 3, págs. 447-456, DOI: [10.1016/j.habitatint.2010.12.003](https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2010.12.003), referencia citada en página 53.

MANZANO, F. Y G. VELÁZQUEZ

- 2016a «Propuesta de un índice de dependencia económica mediante datos censales», en *VII Congreso ALAP (Asociación Latinoamericana de Población)*, referencia citada en página 58.
- 2016b «La inexactitud de la relación de dependencia demográfica. Análisis del caso argentino (2001-2010)», en *Cuadernos Geográficos*, vol. 55, n.º 2, págs. 107-126, referencia citada en página 56.

MORROW, B.

- 1999 «Identifying and Mapping Community Vulnerability», en *Disasters*, vol. 23, n.º 1, págs. 1-18, DOI: [10.1111/1467-7717.00102](https://doi.org/10.1111/1467-7717.00102), referencia citada en página 57.

MOSQUERA, ANDRÉS

- 2017 «Los determinantes a largo plazo y su contribución a la tasa de ahorro de los hogares españoles en el período 1985-2016», en *Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa*, vol. 24, págs. 292-339, referencia citada en página 58.

SAUTU, RUTH; AMALIA EGUÍA Y SUSANA ORTALE

- 2000 (comps.), *Las mujeres hablan: Consecuencias del ajuste económico en familias de sectores pobres y medios en la Argentina*, Buenos Aires: Editorial de la Universidad Nacional de La Plata y Editorial Al Margen, referencia citada en página 58.

## CAPÍTULO 3

# Pobreza en tiempos de pandemia. Un abordaje desde la estructura de clases ocupacionales

EDUARDO CHÁVEZ MOLINA\* y JOSÉ RODRÍGUEZ DE LA FUENTE\*\*

### 3.1 Introducción: La pobreza en el foco

La discusión acerca de la medición de la pobreza es un tema en continuo debate en las ciencias sociales, pero también en la política nacional (Arakaki 2018; Born 2014; Chávez Molina y Rodríguez de la Fuente 2018; Salvia *et al.* 2017; Zack *et al.* 2020). Necesidades básicas insatisfechas, canasta básica, índice de precios al consumidor, pobreza relativa o multidimensional, son conceptos que continuamente son referidos para acercarnos, en forma más precisa, a un número que ilustra a la proporción de personas que más sufren en esta sociedad. Independientemente del cálculo que se realice, hay un hecho que es insoslayable: en los últimos años la pobreza ha ido en aumento y la pandemia no ha hecho más que profundizar una tendencia que había comenzado años antes.

Los cambios en la política económica acontecidos a partir de 2016, y profundizados por la crisis financiera de 2018, produjeron un primer incremento en el número de pobres. Específicamente, la caída del salario mínimo, vital y móvil y de los ingresos reales, el aumento de la desocupación, el estancamiento del trabajo registrado y la escalada inflacionaria potenciada, entre otras causas, por el incremento de las tarifas a los servicios públicos, son algunas de las pistas que permiten comprender el hecho de que la pobreza en personas haya pasado del 30.3 % en 2016 al 35.5 % en 2019, a pesar

---

\* Investigador y docente, Instituto de Investigaciones Gino Germani-UBA / Departamento de Sociología - Universidad Nacional de Mar del Plata.

\*\* Becario posdoctoral CONICET, Instituto de Investigaciones Gino Germani-UBA.

de los cambios metodológicos introducidos por la nueva gestión del INDEC entre 2015-2016.

Por su parte, la pandemia del COVID-19 generó nuevas condiciones para que, en el corto plazo, el bienestar de los hogares continúe en un camino descendente. Las medidas de aislamiento-distanciamiento social preventivo y obligatorio (ASPO y DISPO) impulsadas por el gobierno permitieron un amesetamiento en la curva de contagios hasta octubre del 2020, aunque afectaron inevitablemente a la economía, principalmente en el segundo trimestre. Los sectores más castigados fueron los de hotelería y gastronomía, los servicios comunitarios y sociales, la construcción, el transporte y las comunicaciones y el servicio doméstico (Manzanelli *et al.* 2020, págs. 2-3). En lo que respecta al mercado laboral, tanto la tasa de actividad como la de empleo descendieron drásticamente al 38.4 % y 33.8 % en el segundo trimestre (INDEC 2021). La desocupación alcanzó el 13.1 % en el segundo trimestre, descendiendo al 8.2 % en el segundo del 2021. Asimismo, el tránsito hacia la desocupación o inactividad fue desigual según categoría ocupacional, nivel de registro y clase social (González y Garriga 2020; Jacovkis *et al.* 2021; Rodríguez de la Fuente 2021). Los efectos de la pandemia y las medidas sanitarias dispuestas también profundizaron el deterioro en el nivel de ingresos de los hogares. Los salarios de los trabajadores registrados privados tuvieron su peor caída en mayo de 2020 ubicándose un 17.7 % por debajo de lo que representaban en noviembre de 2015 (Manzanelli *et al.* 2020, pág. 10). Por su parte, el salario mínimo, vital y móvil continuó su fuerte caída iniciada en 2016, teniendo hacia fines de 2020 una capacidad de compra del 38 % de la canasta básica total de un hogar tipo. Ante esta situación se implementaron una serie de medidas para atenuar los efectos de la pandemia en la economía de los hogares: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE); los bonos para jubilados o pensionados; los bonos para los trabajadores de la salud o fuerzas de seguridad y el cobro de salario a través de ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción). De este modo, si bien se logró una desaceleración del impacto de la pandemia, la pobreza trepó al 42 % en el segundo semestre del 2020 y hasta el momento de escritura de este capítulo sus valores no han retornado a los de fines de 2019.<sup>[1]</sup>

En este capítulo trataremos de desentrañar el número de pobreza, pero moviéndonos al estudio de sus causas y diferenciaciones. Partiendo desde un enfoque que intenta dar cuenta del carácter heterogéneo que asume la estructura socioeconómica argentina, nos centraremos en el interrogante sobre cómo operan las desigualdades

---

[1] La pobreza en el segundo semestre de 2021 fue del 37.3 % (INDEC 2022).

de clase en las oportunidades de ser o no pobre. Por otro lado, nos preguntamos si estas desigualdades se diferencian en función del género y la región de residencia de las personas. Por último, recuperando las experiencias divergentes que pueden transitar los individuos más allá de su posición de clase, nos resulta central evaluar el impacto que tuvieron los cambios recientes en la situación ocupacional y en los ingresos familiares en un contexto de pandemia.

### 3.2 El enfoque de clases ocupacionales basado en la heterogeneidad estructural

Para este capítulo partimos desde un esquema de clases que aborda las condiciones de vida de las personas, incorporando en su clasificación el doble fenómeno de las relaciones laborales en las sociedades modernas capitalistas en la segunda década de este siglo: aumento y disminución de determinadas calificaciones. Aunque son procesos de más larga data, el desarrollo tecnológico, y su puesta en escena por aumentos de la productividad, generan procesos de incremento de las calificaciones en ciertos segmentos de las actividades manuales, en desmedro de otras alejadas de los procesos de modernización productiva. Pero dicho fenómeno no es propiedad exclusiva de las actividades manuales, sino que también ocurre en los empleos de servicios, caracterizados por empleos no manuales, y con el mismo fenómeno, actividades que requieren mayor calificación y otras que se rezagan por los propios procesos colectivos y generacionales de adaptación de saberes laborales.

Este doble movimiento, mayor calificación en sector manual y no manual, y descalificación de ocupaciones en ambos sectores, es posible observarlo con mayor precisión incorporando la idea de la heterogeneidad estructural dentro del esquema de análisis de clase, lo cual permite apreciar dos dimensiones; modernidad y rezago productivo, como dos elementos cruciales del tipo de inserción laboral de las personas, en Argentina en particular, tomando en cuenta las altas brechas productivas por sector, ya analizadas en otros trabajos anteriormente (Marqués Perales y Chávez Molina 2019; Solís *et al.* 2019).

El concepto de heterogeneidad estructural surge en el marco de los debates por el desarrollo económico en América Latina iniciados en década de 1950 y reactualizados a comienzos del presente siglo. La particularidad que se observa en América Latina es un desequilibrio estructural, en donde los sectores productivos crecen de manera desigual: los factores productivos, los modos de producción y la distribución de los ingresos se desarrollan con grandes diferencias según el sector (Chena 2010).

Dentro del enfoque estructuralista clásico, uno de sus principales exponentes, **Prebisch (1949)**, elaboró una explicación de la heterogeneidad estructural, desde una perspectiva ligada al desarrollo económico, afirmando que esta era producto de un doble proceso: escasez de capital y desigual incorporación de progreso técnico. Respecto al primer punto, si bien este autor compartía con los teóricos clásicos y neoclásicos los principios de la ley de Say y la acumulación de capital como acumulación de ahorro, agregaba otras variables que se ponían en juego en los países periféricos y lo distancian de esos autores. Uno de los postulados más importantes, fue el de la tendencia a la caída en los términos de intercambio, por medio del cual explicaba que en los países periféricos la capacidad de importar iba tendencialmente a la baja, a partir de que los precios de los productos de exportación de estos países (bienes primarios) tendían a bajar mientras los importados (bienes manufacturados) a subir. Además, la heterogeneidad estructural de los países periféricos se iba profundizando por factores como la dependencia tecnológica, la concentración del ingreso, la menor productividad laboral, el consumo imitativo y el excedente de mano de obra. Celso Furtado, otro importante teórico de esta corriente, agregó que el principal problema de la heterogeneidad estructural eran las grandes diferencias de productividades sectoriales, con lo cual, analizar cómo aumentar la productividad se volvía esencial para el desarrollo económico de los países periféricos (**Chena 2010**).

A fines de la década de 1980 y comienzos de la del noventa, se desarrolla en la CEPAL un proceso de revisión de algunos de sus postulados, entre ellos, el de heterogeneidad estructural. En esta revisión, las causas de la heterogeneidad estructural de los países periféricos se concentran en el progreso técnico: debido a la deficiente especialización productiva, estos países tienen escasas posibilidades de generar y propagar progreso técnico. Diversos autores, bajo la influencia inicial de **Fajnzylber (1983, 1989)**, comenzaron a hacer énfasis en que, para homogeneizar la estructura, los países de la periferia debían centrar su desarrollo productivo en sectores capaces de acercarse a los nuevos paradigmas tecnológicos mundiales y a la demanda global. Influidos por los postulados schumpeterianos, enfatizaban en la difusión de cambio tecnológico para el cambio estructural, a partir de identificar tres sectores en la estructura productiva: un sector intensivo en mano de obra, un sector intensivo en recursos naturales y un sector difusor de conocimiento. A diferencia del estructuralismo clásico que entendía que homogeneización de la estructura, desarrollo y mejor distribución del ingreso iban a darse a partir de una reasignación de factores productivos desde los sectores atrasados hacia los modernos, el neoestructuralismo consideraba

que estos procesos solo eran posibles aumentando la capacidad tecnológica en el sector industrial (Chena 2010). Según Cimoli y otros, «el aumento simultáneo de la participación de los sectores difusores de conocimiento en la industria y de su productividad se encuentra en la base de un proceso virtuoso de generación y difusión del conocimiento» (Cimoli *et al.* 2005, pág. 17).

En los postulados actuales de la CEPAL, encontramos una continuidad de la caracterización de las causas del subdesarrollo de los países periféricos, que se manifiesta desde los inicios. Esto se debe a que, según esta corriente, la situación no se ha modificado, incluso a pesar de importantes mejoras económicas y sociales (Bielschowsky y Torres 2018). Entre las causas del atraso que se mantienen vigentes, se encuentra el de la heterogeneidad estructural:

«de acuerdo con el neoestructuralismo no se ha eliminado la heterogeneidad productiva estructural y subsiste una oferta abundante de mano de obra, con bajos ingresos medios y precariedad en las relaciones sociales del mercado laboral, que preservan la mala distribución del ingreso, es decir, la heterogeneidad social» (Bielschowsky y Torres 2018, pág. 29).

A partir del documento del período de sesiones de 2010, «La hora de la igualdad» (CEPAL 2010), la corriente cepalina sintetizó sus principales aportes históricos en dos conceptos: brecha interna y brecha externa. La brecha interna es la distancia de productividad entre sectores, es decir, la heterogeneidad estructural, y brecha externa son las asimetrías en las capacidades tecnológicas y de productividad respecto a las economías desarrolladas. Reafirmando que la heterogeneidad estructural es un rasgo distintivo, en sus trabajos del último decenio, los teóricos de la CEPAL la definen como: «las notorias diferencias de productividad que existen entre los distintos sectores y dentro de cada uno de ellos, así como entre las empresas de cada país, que son muy superiores a las que se observan en los países desarrollados» (CEPAL 2010, pág. 91). En este sentido, destacan que la brecha en la estructura productiva debe analizarse en relación con la brecha en la estructura del empleo, ya que, en la medida en que los sectores de mayor productividad no absorban empleo proporcionalmente, la heterogeneidad se reforzará, en tanto la gran mayoría de los trabajadores seguirán ocupados en sectores donde tanto la productividad como los salarios son menores (CEPAL 2010). Considerando la profunda desigualdad que se presenta en las sociedades latinoamericanas, la heterogeneidad productiva es un reflejo de ella, así como también la existencia de diversos sectores en el mercado laboral según productividad media y alta y un conjunto de segmentos de productividad muy baja (Marqués Perales y Chávez Molina 2019).

### 3.3 Metodología

Para llevar adelante la propuesta se utilizará de manera principal la encuesta ESAyPP/PISAC COVID-19, descrita en capítulos anteriores. El universo de estudio serán las personas mayores de 18 años residentes en aglomerados de más de 50 mil habitantes. El enfoque de clases presentado en la sección anterior será operacionalizado a partir de las siguientes variables: carácter ocupacional, calificación ocupacional, tecnología ocupacional, categoría ocupacional y tamaño del establecimiento. El mismo se compone de 10 clases (Chávez Molina 2019; Chávez Molina y Sacco 2015).

**Cuadro 3.1. Clasificador ocupacional basado en la heterogeneidad estructural.**

Esquema desagregado	Criterio clasificatorio
Propietarios y/o directivos de grandes establecimientos	Empleadores o directivos que trabajan en establecimientos de más de cinco ocupados
Propietarios y/o directivos de pequeños establecimientos	Empleadores o directivos que trabajan en establecimientos de cinco o menos ocupados
Cuenta propia profesionales/calificados	Trabajadores por cuenta propia con calificación profesional, técnica y/o operativa (no exclusivamente)
Trabajadores no manuales de grandes establecimientos (> 5)	Trabajadores no manuales que trabajan en establecimientos de más de cinco ocupados
Trabajadores manuales de grandes establecimientos (> 5)	Trabajadores manuales que trabajan en establecimientos de más de cinco ocupados
Trabajadores no manuales de pequeños establecimientos (<= 5)	Trabajadores no manuales que trabajan en establecimientos de cinco o menos ocupados
Trabajadores manuales de pequeños establecimientos (<= 5)	Trabajadores manuales que trabajan en establecimientos de cinco o menos ocupados
Cuenta propia no calificados	Trabajadores por cuenta propia no calificados y/o calificación operativa (no exclusivamente)
Inactivos-desocupados	Desocupados o inactivos (no jubilados)
Inactivos jubilados	Inactivos con jubilación

Fuente: elaboración propia.

La variable dependiente que recorrerá todo el capítulo será la pertenencia o no a un hogar en situación de pobreza. En este sentido, abordamos al concepto desde la idea de línea de pobreza que «consiste en establecer, a partir de los ingresos de los hogares, si estos tienen capacidad de satisfacer – por medio de la compra de bienes y servicios – un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales» (INDEC 2022, pág. 22). En

forma simplificada, entonces, para identificar a una persona que reside en un hogar bajo la línea de pobreza es necesario contar con distintos indicadores:

- 1) los *ingresos totales familiares*,<sup>[2]</sup> que representan el cúmulo de los ingresos monetarios que recibe el hogar en el mes de referencia tanto de fuentes laborales como no laborales;
- 2) el *número de miembros del hogar según edad y sexo*, para conocer, en forma aproximada, las necesidades kilocalóricas y proteicas de esa población, bajo la medida de adulto equivalente;<sup>[3]</sup>
- 3) el valor de la *canasta básica alimentaria (CBA)*, que se modifica en el tiempo y hace referencia a una canasta capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas y
- 4) el valor de la inversa del *coeficiente de Engel (CdE)*, que sintetiza de forma indirecta el valor de aquellos bienes y servicios necesarios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etcétera).<sup>[4]</sup>

De este modo, los ingresos totales familiares son comparados hogar por hogar sobre una *canasta básica total (CBT)*, que se calcula como el producto de cada uno de los siguientes componentes:

$$CBT = CBA * inversa\ CdE * N.^{\circ}\ de\ adultos\ equivalente$$

Por otra parte, además de la posición de clase ocupacional, el género, el grupo etario, la región y el nivel educativo alcanzado, se utilizarán una serie de variables como control, a los fines de comprender el impacto que ha tenido la pandemia en las probabilidades de acceder a la pobreza:

- 1) Desocupación de más de 2 meses durante 2020 y 2022.
- 2) Formalidad de la ocupación.

[2] Los ingresos totales familiares faltantes fueron imputados mediante la técnica de *random hot deck*, cuando se contaba con información de ingresos en rangos (17.6 % de los casos), y cuando dicha información no se encontraba disponible (4.6 %), se realizó a partir de la combinación de las técnicas de árboles de regresión, para la construcción de grupos homogéneos en función de la información de ingresos disponible, y, posteriormente, de *random hot deck*.

[3] Esta medida hace referencia a un promedio de varón adulto, de 30 a 60 años, con actividad física moderada. A partir de dicha referencia, que equivale a 1, se derivan el resto de los valores que asumen los miembros del hogar según el sexo y la edad, utilizando para ello una estandarización provista por el INDEC.

[4] Estos dos últimos valores (CBA y CdE) son brindados periódicamente por el INDEC en forma estandarizada bajo la unidad de referencia de «adulto equivalente».

- 3) Percepción de programas o transferencias: IFE, Potenciar trabajo, ATP.
- 4) Impactos asalariados: haber pasado por suspensiones, renunciaciones, reducción de horas, reducción salarial, cese de pago, cambio de actividad.
- 5) Impactos para independientes: cierre de negocio, cambio de rubro, baja de ventas, reconversión de trabajo, disminución de ingresos.
- 6) Realización de teletrabajo o modalidad mixta.

### 3.4 De la estructura de clases a las condiciones de pobreza

#### 3.4.1 Primeras aproximaciones al problema

En una primera aproximación a la problemática de la pobreza en el contexto de pandemia, presentamos un abordaje descriptivo sobre las variables que consideramos de interés en la explicación (véase cuadro 3.2).

Como puede observarse, el porcentaje de personas mayores de 18 años que se encontraban en situación de pobreza por ingresos para octubre y noviembre de 2021, era del 29.1 %. En la figura 3.1, presentamos la serie de pobreza, calculada en forma trimestral a partir de EPH, a modo de comprender el derrotero que alcanzó dicho indicador en los últimos 6 años. El impacto de la crisis financiera, que tuvo su epicentro con el retorno del FMI en el control de las cuentas de la economía argentina, se observa en el crecimiento que tuvo la pobreza hacia fines de 2018, pasando a representar a casi el 30 % de la población mayor de 18 años. Posteriormente, con la irrupción de la pandemia y la aplicación de las medidas de ASPO, la pobreza en el segundo trimestre de 2020 trepó a casi el 43 %, para luego descender hasta el 29.7 % hacia fines de 2021.

Al enfocarnos en la estructura de clases puede identificarse a la clase de trabajadores no manuales de grandes establecimientos como aquella con mayor peso en la sociedad, en la medida en que el 21 % de los encuestados pueden ser posicionados en la misma. A continuación, se sitúa la clase de trabajadores manuales de pequeños establecimientos (13.5 %), representando a ocupaciones asalariadas de baja calificación e inserta en unidades de baja productividad. Por su parte, la población desocupada, inactiva y jubilada explica a un 26 % de la población. Respecto al nivel de formalidad, aproximadamente a un 55 % de la población se le han realizado descuentos jubilatorios o han aportado mediante el pago del régimen de monotributo u autónomo.

En lo que refiere a los indicadores específicos sobre la situación de pandemia encontramos que un 25 % de los encuestados declararon

**Cuadro 3.2. Estadísticos descriptivos. Personas mayores de 18 años Argentina urbana, 2021. N expandido al universo total. n = 5239.**

Variables	N= 28.439.779 *
Pobreza	8.280.067 (29,1 %)
Ingreso total familiar	78.084 (0,800.000)
Sexo	
Varón	13.421.266 (47,2 %)
Mujer	15.018.513 (52,8 %)
Grupo etario	
18-29	8.038.887 (28,3 %)
30-39	5.750.368 (20,2 %)
40-65	10.536.176 (37,0 %)
>66	4.114.348 (14,5 %)
Tamaño hogar	2,68 (1, 12)
Región	
Cuyo	2.336.107 (8,2 %)
GBA	9.930.883 (34,9 %)
NEA	2.036.368 (7,2 %)
NOA	3.437.464 (12,1 %)
Patagonia	1.585.721 (5,6 %)

*Continúa en la página siguiente*

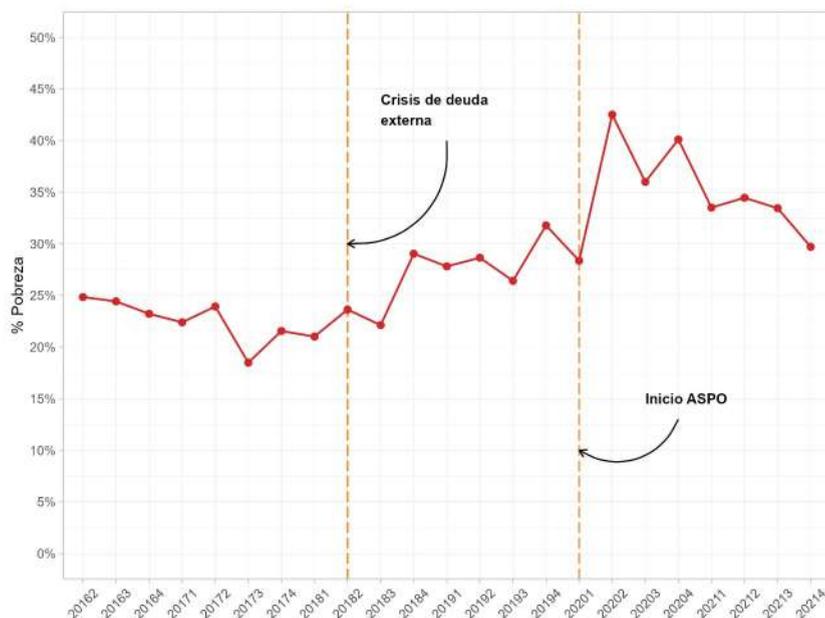
haber estado desocupados o inactivos por un período mayor de dos meses entre 2020 y fines del 2021.<sup>[5]</sup> Los siguientes indicadores del cuadro 3.2 dan cuenta de las principales políticas públicas llevadas adelante, en tanto transferencias monetarias directas e indirectas, para atenuar los impactos producidos por la pandemia. En este sentido, un 23 % declaró haber recibido el IFE y un 4 % de los asalariados el ATP. Asimismo, cerca de 1 % de la población relevada señaló encontrarse bajo el programa Potenciar Trabajo, ligado al desarrollo de proyectos socioprodutivos, sociocomunitarios y sociolaborales. Por último, se listan una serie de variables que intentan medir los cambios a nivel laboral que ocurrieron en la vida de las personas

[5] No debe confundirse dicho porcentaje con el promedio de desocupación del período o con la tasa de desocupación que frecuentemente comunica INDEC cada trimestre, y que osciló entre el 7 % y el 13,1 % (fuente: [https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/cuadros\\_eph\\_informe\\_03\\_22.xls](https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/cuadros_eph_informe_03_22.xls)).

<i>Viene de la página anterior</i>	
<b>VARIABLES</b>	<b>N= 28.439.779 *</b>
Nivel educativo	
Primario	5.908.141 (20,8 %)
Secundario	12.945.647 (45,5 %)
Superior	9.585.991 (33,7 %)
Clase social	
Propietarios y directivos >5	310.874 (1,1 %)
Propietarios y directivos <5	412.690 (1,5 %)
Cuenta propia profesionales/calificados	2.391.637 (8,8 %)
Trabajadores no manuales > 5	5.757.228 (21,3 %)
Trabajadores manuales > 5	3.032.424 (11,2 %)
Trabajadores no manuales <5	2.072.838 (7,7 %)
Trabajadores manuales <5	3.661.033 (13,5 %)
Cuenta propia no calificados	2.253.727 (8,3 %)
Desocupados/inactivos	2.224.986 (8,2 %)
Inactivos jubilados	4.926.670 (18,2 %)
Formalidad	15.709.993 (55,2 %)
Desocupados 2020-2021 (período > 2 meses)	7.168.847 (25,2 %)
IFE	6.656.419 (23,4 %)
Potenciar trabajo	246.378 (0,9 %)
ATP	1.157.333 (4,1 %)
Teletrabajo	4.180.648 (14,7 %)
Cierre/despido/renuncia	4.351.286 (15,3 %)
Baja salarios/ingresos/ventas	6.256.751 (22,0 %)
Cambio actividad/rubro	3.782.491 (13,3 %)

\* N (%); Media (Rango). N expandido al universo total. n = 5239. Fuente: elaboración propia en base a encuesta ESAyPP/PISAC COVID-19 (2021).

en la pandemia. Un 15 % de la población ocupada señaló haber experimentado un cambio hacia la modalidad de teletrabajo o trabajo mixto como modo de adaptación a las medidas de aislamiento y distanciamiento social. Como consecuencias negativas, casi un 15 % indicó haber sido despedido, haber renunciado o haber tenido que cerrar su negocio (en el caso de los trabajadores independientes), mientras que casi 2 de cada 10 encuestados señaló haber sufrido bajas en los ingresos o ventas en sus negocios o empleos. Por último,



**Figura 3.1.** Evolución del porcentaje de personas mayores de 18 años bajo la línea de pobreza. Argentina urbana, 2016-2021. Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC.

un 13 % expresó la necesidad de cambiar actividad o rubro de trabajo para afrontar la crisis de la pandemia.

Ahora bien, enfocándonos en el posicionamiento de clase, el sexo y el lugar de residencia, ¿en qué medida la pertenencia a estos grupos puede dar algún indicio sobre la incidencia en la pobreza? En el cuadro 3.3, presentamos una primera aproximación a este interrogante.

En primer lugar, el sexo de las personas se muestra como un condicionante sobre la situación económica, ya que un 35 % de las mujeres de la muestra vive en hogares bajo condición de pobreza, mientras que, en el caso de los varones, dicha situación disminuye al 22.5 %. Por otro lado, las regiones con mayores niveles de vulneración son el NEA (36 %) y el GBA (33 %), mientras que la pampeana y patagónica muestran una menor proporción de población en situación de pobreza (23 % aproximadamente). Por último, desde la estructura de clases observamos que, más allá de la situación de los inactivos y los desocupados en donde la pobreza alcanza a casi la mitad de dicha población, los trabajadores manuales de pequeños establecimientos junto con la clase cuenta propia no calificada se mostrarían como los más expuestos a esta situación. En contraposición, más allá de la

**Cuadro 3.3. Condición de pobreza en mayores de 18 años según sexo, región y clase social. Argentina urbana, 2021.**

Variables	No pobre, N = 20.159.712 *	Pobre, N = 8.280.067 *	p-valor **
Sexo			<0,001
Varón	10.406.935 (77,5 %)	3.014.331 (22,5 %)	
Mujer	9.752.777 (64,9 %)	5.265.736 (35,1 %)	
Región			<0,001
Cuyo	1.599.243 (68,5 %)	736.864 (31,5 %)	
GBA	6.617.378 (66,6 %)	3.313.505 (33,4 %)	
NEA	1.307.428 (64,2 %)	728.940 (35,8 %)	
NOA	2.369.404 (68,9 %)	1.068.060 (31,1 %)	
Pampeana	7.048.238 (77,3 %)	2.064.998 (22,7 %)	
Patagonia	1.218.022 (76,8 %)	367.700 (23,2 %)	
Clase social			<0,001
Propietarios y directivos >5	310.874 (100,0 %)	0 (0,0 %)	
Propietarios y directivos <5	300.110 (72,7 %)	112.580 (27,3 %)	
Cuenta propia profesionales/calificados	1.706.738 (71,4 %)	684.899 (28,6 %)	
Trabajadores no manuales > 5	5.038.508 (87,5 %)	718.720 (12,5 %)	
Trabajadores manuales > 5	1.934.414 (63,8 %)	1.098.010 (36,2 %)	
Trabajadores no manuales <5	1.480.099 (71,4 %)	592.739 (28,6 %)	
Trabajadores manuales <5	1.856.971 (50,7 %)	1.804.062 (49,3 %)	
Cuenta propia no calificados	1.377.107 (61,1 %)	876.620 (38,9 %)	
Desocupados/inactivos	1.114.445 (50,1 %)	1.110.541 (49,9 %)	
Inactivos jubilados	4.279.770 (86,9 %)	646.900 (13,1 %)	

\* N (%). N expandido al universo total. n = 5239. \*\* Prueba de chi cuadrado con corrección de segundo orden de Rao y Scott. Fuente: elaboración propia en base a encuesta ESAyPP/PISAC COVID-19 (2021).

clase superior en la que no se identifican individuos bajo situación de pobreza, son los trabajadores no manuales de grandes establecimientos aquellos que presentan un menor porcentaje de incidencia en la pobreza (12.5 %).

### 3.5 Factores estructurales y coyunturales en la incidencia de la pobreza

Hasta aquí hemos observado que la pobreza, en tanto situación de incumplimiento en las necesidades básicas para la subsistencia, presenta hacia 2021 diferenciaciones en función del género, del lugar de residencia y de la clase social de las personas. Cada uno de estos factores sociales contribuye, en forma independiente y complementaria, a la generación y el sostenimiento de las desigualdades económicas. Sin embargo, no operan en forma abstracta.

En esta sección proponemos analizar el potencial explicativo que estos factores tienen sobre las probabilidades de *estar en situación de pobreza*, pero controlando la relación por otros aspectos centrales, sobre todo vinculados al impacto que la pandemia ha tenido en las personas y en los hogares.

Para ello hemos construido cuatro modelos estadísticos, a través de regresiones logísticas binomiales, en donde se evalúan las oportunidades relativas de que una persona sea o no pobre. El primer modelo intenta captar nuestra principal dimensión de interés, el posicionamiento de clase, sin considerar ningún otro factor explicativo. El segundo modelo, suma como factores al sexo, el grupo etario, el tamaño promedio del hogar, la región de residencia y el nivel educativo alcanzado, de modo de captar algunos aspectos demográficos centrales. El tercer modelo agrega dos variables que miden algunas características de la inserción laboral, tales como la informalidad y la desocupación reciente. Por último, el cuarto modelo, específicamente se centra en el agregado de variables que miden algunos eventos vinculados a la pandemia, tales como el acceso a programas sociales y transferencias específicas<sup>[6]</sup> y cambios sobre la vida laboral.

El primer modelo presenta resultados similares a los observados en el apartado anterior. En este caso, los coeficientes, presentados en razones de momios (*odds ratio*), comparan las probabilidades de estar en un hogar pobre teniendo como categoría de referencia a la clase de inactivos y desocupados. Valores más altos de 1 marcarían que las oportunidades relativas para ese grupo son más altas que para el grupo de contraste, mientras que valores entre 0 y 1 señalarían lo opuesto. De este modo, todas las clases tienen menos oportunidades relativas, comparado con la clase de inactivos y desocupados, de acceder a la pobreza. Los trabajadores no manuales de grandes establecimientos y los inactivos jubilados serían aquellas clases con

---

[6] Es necesario aclarar que el programa Potenciar Trabajo implica la unificación de programas anteriores como Hacemos Futuro y Salario Social Complementario, por lo que no es una transferencia específica implementada en el contexto de la pandemia y debe diferenciarse del IFE.

**Cuadro 3.4. Oportunidades relativas de estar en una situación de pobreza. Modelos de regresión logística (coeficientes en razones de momios, errores estándar en paréntesis). Mayores de 18 años. Argentina urbana, 2021.**

	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3	Modelo 4
Constante	1.00 (0.10)	0.18 *** (0.19)	0.07 *** (0.22)	0.06 *** (0.22)
Clase social (ref: Desocupados/inactivos) †				
Propietarios y directivos <= 5	0.38 *** (0.28)	0.43 ** (0.33)	0.51 ** (0.33)	0.56 * (0.34)
Cuenta propia profesionales/calificados	0.40 *** (0.14)	0.38 *** (0.18)	0.39 *** (0.18)	0.41 *** (0.18)
Trabajadores no manuales > 5	0.14 *** (0.14)	0.13 *** (0.17)	0.21 *** (0.17)	0.24 *** (0.18)
Trabajadores manuales > 5	0.57 *** (0.13)	0.36 *** (0.17)	0.52 *** (0.17)	0.51 *** (0.17)
Trabajadores no manuales <= 5	0.40 *** (0.15)	0.34 *** (0.19)	0.41 *** (0.19)	0.43 *** (0.19)
Trabajadores manuales <= 5	0.97 (0.13)	0.64 *** (0.15)	0.62 *** (0.16)	0.59 *** (0.16)
Cuenta propia no calificados	0.64 *** (0.14)	0.54 *** (0.18)	0.46 *** (0.18)	0.46 *** (0.18)
Inactivos jubilados	0.15 *** (0.14)	0.32 *** (0.22)	0.45 *** (0.22)	0.47 *** (0.22)
Mujer (ref.: varón)		1.90 *** (0.08)	1.75 *** (0.09)	1.65 *** (0.09)
Grupo de edad (ref.: 18-29)				
30-39		1.01 (0.11)	1.14 (0.12)	1.26 * (0.12)
40-65		0.95 (0.10)	1.19 * (0.10)	1.38 *** (0.11)
>66		0.42 *** (0.23)	0.52 *** (0.23)	0.64 * (0.23)
Región (ref.: GBA)				
Cuyo		1.25 (0.15)	1.24 (0.16)	1.22 (0.16)
NEA		1.18 (0.16)	1.19 (0.16)	1.16 (0.16)
NOA		0.91 (0.13)	0.86 (0.13)	0.86 (0.13)
Pampeana		0.73 *** (0.10)	0.74 *** (0.10)	0.76 *** (0.10)
Patagonia		0.73 (0.20)	0.80 (0.20)	0.86 (0.20)

*Continúa en la página siguiente*

menores oportunidades de experimentar dicha vulnerabilidad. En contraposición, la clase de cuenta propia no calificados y de trabajadores manuales de grandes y pequeños establecimientos, mostrarían una mayor propensión a experimentar situaciones de pobreza.

En el modelo 2, al controlarse la relación clase social / pobreza, a partir de los factores sociodemográficos, se mantiene el peso de los coeficientes, aunque reduciéndose levemente. Sin embargo, es significativo el aumento en las oportunidades relativas de acceder

*Viene de la página anterior*

	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3	Modelo 4
Nivel educativo (ref: primario)				
Secundario		0.47 *** (0.10)	0.52 *** (0.10)	0.53 *** (0.11)
Superior		0.20 *** (0.13)	0.25 *** (0.13)	0.27 *** (0.13)
Tamaño hogar		2.30 *** (0.03)	2.33 *** (0.03)	2.34 *** (0.03)
Informalidad			2.16 *** (0.10)	1.92 *** (0.10)
Desocupados 2020-2021 (período > 2 meses)			1.54 *** (0.09)	1.73 *** (0.12)
IFE				1.87 *** (0.10)
Potenciar trabajo				2.93 *** (0.40)
ATP				0.74 (0.23)
Teletrabajo				0.76 * (0.16)
Cierre/despido/renuncia				0.86 (0.13)
Baja salarios/ingresos/ventas				0.87 (0.11)
Cambio actividad/rubro				0.82 (0.14)
N	4871	4871	4871	4871
AIC	5077.43	3743.02	3666.17	3618.60
BIC	5135.85	3879.33	3815.46	3813.33
Pseudo R2 (McFadden - ajustado)	0.08	0.33	0.34	0.35

\*\*\* p < 0,01; \*\* p < 0,05; \* p < 0,1. † Se ha excluido del análisis a la clase de propietarios y directivos de grandes establecimientos ya que el 100 % de los casos es *no pobre*. Fuente: elaboración propia en base a encuesta ESAyPP/PISAC COVID-19 (2021).

a la pobreza de 0.38 a 0.43 para la clase propietaria de pequeños establecimientos. Esto nos da un indicio acerca del vínculo que existe entre el posicionamiento de clase, el sexo, la edad, la región de residencia, el tamaño del hogar (principalmente) y el nivel educativo alcanzado. Los coeficientes de dichas variables señalan aspectos sobre las condiciones de vida en línea con los presentados periódicamente en el Sistema Estadístico Nacional: la pobreza golpea más entre las mujeres, los jóvenes y las regiones del GBA, Cuyo, NEA y NOA (INDEC 2022). En el caso de las mujeres, al compararse con los varones, las oportunidades relativas de acceder a la pobreza aumentan un 90 %. Por otro lado, el nivel educativo del encuestado muestra un vínculo esperado: a mayor nivel educativo alcanzado, menores probabilidades de alcanzar la pobreza. Otra variable demográfica central, en este caso, es el tamaño del hogar del encuestado, ya que

podemos observar el peso que este factor presenta: cada miembro adicional incrementa en un 130 % las oportunidades de transitar la pobreza en el hogar.

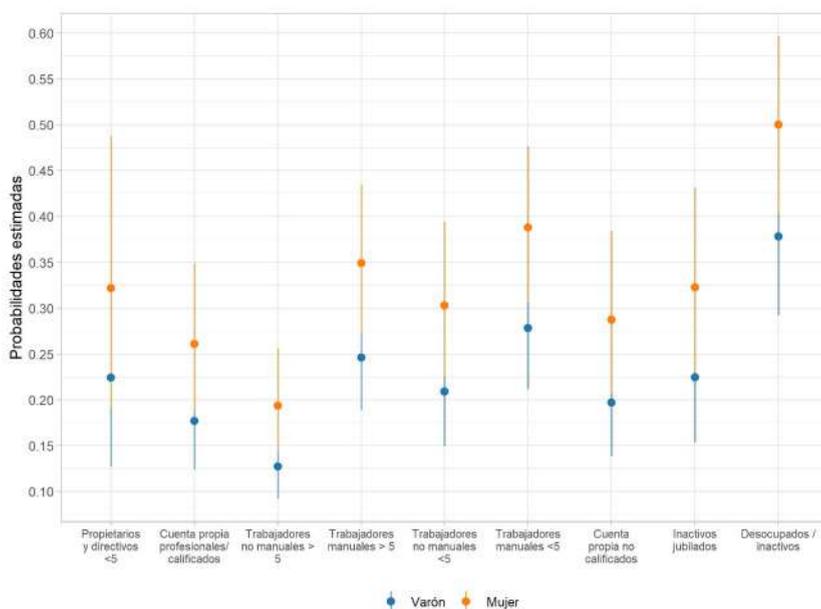
El tercer modelo agrega las variables de inserción en el mercado de trabajo. En este sentido, la inserción informal en el mercado de trabajo se torna un importante factor explicativo, transversal a la posición ocupada en la estructura de clases: independientemente de los demás factores, estar en situación de informalidad laboral duplica la exposición a la pobreza, frente aquellos que se encuentran en una situación de protección laboral. Del mismo modo, aquellos que experimentaron la desocupación durante los dos últimos años en algún período, presentan un 54 % más de chances de estar en un hogar pobre.

El modelo 4 contiene dentro de los predictores a todas las variables independientes consideradas en este estudio, al agregar aquellas específicas que permiten dar cuenta de algunos de los impactos del COVID-19. En primer lugar, al observar las variables sobre los programas específicos que se desplegaron durante el primer año de la pandemia, es necesario aclarar que, en este análisis de regresión, no se mide el impacto que tuvieron los mismos en la disminución de la pobreza, sino que permite identificar si las personas que han recibido dichas transferencias son más probables que se encuentran en una situación de pobreza comparado con aquellas que no han sido destinatarias. Así es que, las personas que accedieron al IFE presentan un 84 % más de probabilidades de encontrarse en la pobreza, mientras que en aquellos inscriptos en el programa Potenciar Trabajo, vinculados al sector de la economía popular, dichas probabilidades se triplican. Apuntado a otro segmento poblacional, el programa ATP resulta estadísticamente no significativo, por lo cual no podemos marcar diferencias respecto a la población que lo recibió y aquella que no.

Finalmente, luego de controlar por el resto de las variables, el hecho de haber tenido una baja en los salarios / ingresos / ventas o haber experimentado un cambio de rubro o actividad, no brindaría una mayor desventaja sobre el pasaje a la pobreza. Por su lado, el hecho de haber realizado teletrabajo en la pandemia otorgó a dichos trabajadores un 25 % menos de chances de transitar la pobreza respecto a los que no pudieron ingresar en dicha modalidad.

Observando las medidas de bondad de ajuste global puede observarse que el modelo que mejor ajuste presenta es el último, con un pseudo  $R^2$  de 0.35 y un BIC de 3813.13. Esto señalaría que la incorporación de factores sociodemográficos, laborales y de impacto del COVID-19, mejoran y completan la explicación sobre los diferenciales de clase en el pasaje a la pobreza.

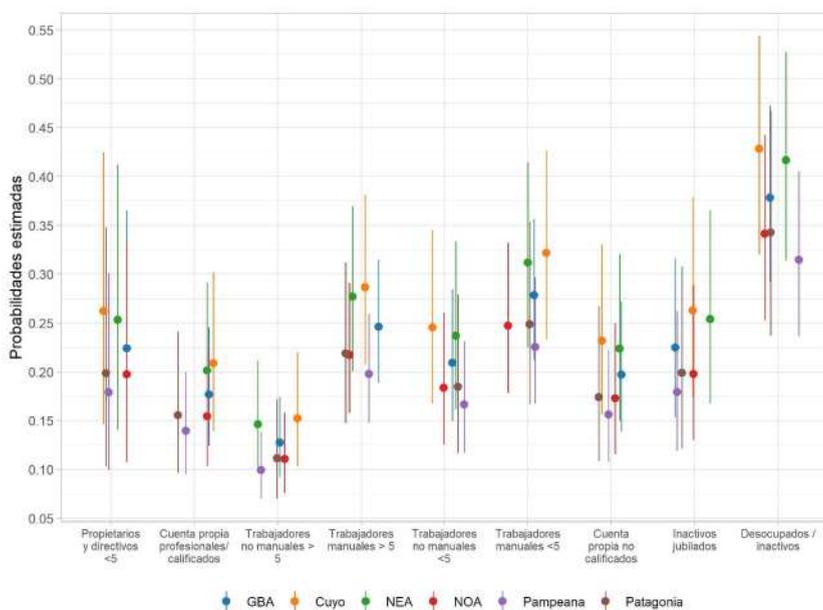
Finalmente, considerando todos los controles realizados en el modelo 4, calculamos las probabilidades estimadas de pasaje a la pobreza por clase y sexo (véase figura 3.2) y por clase y región (véase figura 3.3). Esta forma de presentar los coeficientes permite una lectura más simple de los resultados, a la vez que permite focalizarnos en los distintos factores de interés, manteniendo constante las demás variables en su valor promedio.



**Figura 3.2.** Probabilidades estimadas e intervalos de confianza de estar en situación de pobreza por clase social y sexo. Mayores de 18 años. Argentina urbana, 2021. Fuente: elaboración propia en base a encuesta ESAyPP/PISAC COVID-19 (2021).

La figura 3.2 nos permite observar que el esquema propuesto no presenta una lógica jerárquica, al menos en la dimensión estudiada, ya que las clases no se ordenan en función de sus probabilidades de experimentar situaciones de pobreza. Esto no implica que el esquema no presente un ordenamiento jerárquico en otras dimensiones como puede ser la distribución de los ingresos laborales o familiares (Chávez Molina y Sacco 2015). Las características propias de los hogares, unidad de análisis sobre la que se calcula la pobreza, tales como la cantidad de miembros por edad y sexo, se presentan en forma diferenciada a lo largo de la estructura de clases. Es por esto que, por ejemplo, más allá de que la clase de trabajadores manuales de grandes establecimientos en términos de ingresos familiares se

encuentra cercano al promedio general (Chávez Molina y Rodríguez de la Fuente 2021; Solís *et al.* 2019), en este caso, al analizarse las oportunidades de pasaje a la pobreza, muestran valores altos, siendo las probabilidades estimadas del 30 %. En una situación similar, se encuentran la clase de trabajadores manuales de pequeños establecimientos y los desocupados / inactivos. El segundo hecho a señalar es que, en cada clase social, las desigualdades de género son marcadas, con una clara ventaja en favor de los varones, siendo el caso más extremo el de las trabajadoras manuales en pequeños establecimientos y las desocupadas-inactivas que presentan probabilidades estimadas del orden del 40 % y el 50 %, respectivamente.



**Figura 3.3.** Probabilidades estimadas e intervalos de confianza de estar en situación de pobreza por clase social y región. Mayores de 18 años. Argentina urbana. Octubre-noviembre 2021. Fuente: elaboración propia en base a encuesta ESAYPP/PISAC COVID-19 (2021).

La figura 3.3 nos presenta una ilustración de la problemática en forma similar, pero a partir de la relación clase social-región. De este modo, puede comprobarse que las personas residentes en las regiones de GBA, NEA y Cuyo son las que presentan mayores probabilidades estimadas de pasaje a la pobreza, independientemente de la clase social a la que pertenezcan. Tomando como ejemplo nuevamente a la clase de trabajadores manuales de grandes establecimientos observamos la heterogeneidad en las probabilidades de acceder a la

pobreza entre aquellos que residen en Cuyo frente a los que lo hacen en la región Pampeana.

### 3.6 Comentarios finales

En este trabajo se ha hecho un recorrido sobre diferentes aspectos y dimensiones que pueden estar relacionados con las probabilidades de pobreza en tiempos de COVID-19, usando para ello varias herramientas metodológicas y estadísticas para dar cuenta de este fenómeno: la incidencia de multiplicidad de factores en las situaciones de pobreza, en una forma multidimensional y jerarquizada.

Por un lado, al observar la medición de la pobreza absoluta a partir de una base de datos propia, con aglomerados urbanos que no están relevados en las encuestas públicas y con diseños muestrales distintos, como en la EPH, los resultados arribados son similares a los presentados en la estadística oficial: 3 de cada 10 personas mayores de 18 años reside en un hogar pobre. Por otro lado, al observar la heterogeneidad estructural expresada en los esquemas de clases, nos permitió encontrar allí dispersiones de resultados y logros económicos muy disímiles, que actúan como factores relevantes a la hora pensar un camino coyuntural basado en condiciones de pobreza.

Una primera aproximación descriptiva a la problemática nos permitió precisar, para fines de 2021, algunos vínculos fuertes que son reconocidos en gran parte de la literatura de referencia: la pobreza alcanza mayores niveles entre las mujeres, los residentes del noreste argentino y aquellos que se posicionan en las clases manuales de pequeños establecimientos, de cuenta propia no calificados o directamente aquellos que se encuentran en la desocupación o inactividad.

Ahora bien, ¿qué sucede si observamos las oportunidades que tienen las personas de encontrarse en una situación de pobreza tomando en forma conjunta a los factores de clase, sociodemográficos, laborales y de impacto del COVID-19? Las principales conclusiones que alcanzamos con los modelos estadísticos propuestos indicarían que:

- 1) Las clases sociales de la población económicamente activa (PEA) tienen menos oportunidades relativas, comparado con la clase de inactivos y desocupados, de acceder a la pobreza.
- 2) Con respecto a la PEA, la clase de cuenta propia no calificados y de trabajadores manuales de grandes y pequeños establecimientos, tienen mayores probabilidades de situaciones de pobreza. Asimismo, los patrones de pequeños establecimientos también se muestran como una clase con una importante exposición a la pobreza.
- 3) Por otro lado, las mujeres, los jóvenes, los residentes en regiones del GBA, Cuyo, NEA y NOA, así como los individuos con menor

nivel educativo alcanzado, tienen mayor propensión a situación de pobreza.

- 4) Asimismo, la inserción informal, desprotegida de mecanismos de seguridad laboral, y la desocupación reciente (durante 2020-2021), incrementan considerablemente las chances de transitar una situación de pobreza.
- 5) Respecto al efecto de la pandemia y el ASPO en la situación de pobreza en la población, se aprecia que las mayores probabilidades se observan en aquellos hogares que han el IFE. Por otro lado, no se observan evidencias concluyentes en el modelo de que situaciones de cierres, renunciadas y baja de salarios e ingresos repercuten en mayores probabilidades de alcanzar la pobreza. Al mismo tiempo, los individuos que han podido continuar su trabajo en la pandemia mediante modalidad mixta o virtual, presentarían mayores ventajas frente a dicha condición.

Finalmente, el presente capítulo ha demostrado el papel preponderante que tiene la posición de clase, y que se especifica con otras variables de mayor contenido categorial como el sexo y la región de residencia, en las probabilidades de acceder a la pobreza. Al observar y abordar esta problemática en el marco de una mirada dinámica e interseccional, damos cuenta de las importantes distancias, traducidas en desigualdades, que encontramos al interior de cada una de las posiciones de clase y que permiten dar cuenta de ciertas heterogeneidades existentes.

## Referencias

ARAKAKI, AGUSTÍN

- 2018 «Hacia una serie de pobreza por ingresos de largo plazo. El problema de la canasta», en *Realidad Económica*, n.º 316, referencia citada en página 73.

BIELSCHOWSKY, RICARDO Y MIGUEL TORRES

- 2018 *Desarrollo e igualdad: El pensamiento de la CEPAL en su séptimo decenio. Textos seleccionados del período 2008-2018*, CEPAL, referencia citada en página 77.

BORN, DIEGO

- 2014 *Medición de la pobreza: ¿debate técnico o político?*, referencia citada en página 73.

CEPAL

- 2010 *La hora de la igualdad: Brechas por cerrar, caminos por abrir. Trigésimo Tercer Período de Sesiones de la CEPAL*, CEPAL, referencia citada en página 77.

CHÁVEZ MOLINA, EDUARDO

- 2019 (ed.), *La llamada de la Gran Urbe. Las desigualdades y las movi-  
dades sociales en la Ciudad de Buenos Aires*, Buenos Aires: IIGG  
y CLACSO, referencia citada en página 78.

CHÁVEZ MOLINA, EDUARDO y JOSÉ RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

- 2018 «La pobreza de las mediciones para medir la pobreza», en *Revista  
Espoiler*, referencia citada en página 73.
- 2021 «Clases sociales y desigualdad en la Argentina contemporánea  
(2011-2019)», en *Realidad económica*, vol. 51, n.º 339, págs. 9-36,  
referencia citada en página 90.

CHÁVEZ MOLINA, EDUARDO y NICOLÁS SACCO

- 2015 «Reconfiguraciones en la estructura social: Dos décadas de cam-  
bios en los procesos distributivos», en *Hora de Balance: Proceso de  
acumulación, mercado de trabajo y bienestar. Argentina, 2002-2014*,  
Buenos Aires: EUDEBA, referencia citada en páginas 78, 89.

CHENA, PABLO

- 2010 «La heterogeneidad estructural vista desde tres teorías alterna-  
tivas: El caso de Argentina», en *Comercio exterior*, vol. 60, n.º 2,  
referencia citada en páginas 75-77.

CIMOLI, MARIO *et al.*

- 2005 «Cambio estructural, heterogeneidad productiva y tecnología  
en América Latina», en *Heterogeneidad estructural, asimetrías  
tecnológicas y crecimiento en América Latina*, págs. 9-39, referen-  
cia citada en página 77.

FAJNZYLBER, FERNANDO

- 1983 *La industrialización trunca de América Latina*, Nueva imagen,  
referencia citada en página 76.
- 1989 «Sobre la impostergable transformación productiva de América  
Latina», en *Pensamiento iberoamericano*, n.º 16, págs. 85-130, re-  
ferencia citada en página 76.

GONZÁLEZ, MARIANA y CECILIA GARRIGA

- 2020 *Informe sobre empleo y salarios registrados*, Buenos Aires: CIFRA,  
referencia citada en página 74.

INDEC

- 2021 «Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados  
urbanos. Segundo semestre de 2020», en *Informes Técnicos*, vol. 5,  
n.º 4, recuperado de <[https://www.indec.gov.ar/uploads/  
informesdeprensa/eph\\_pobreza\\_03\\_22F5E124A94B.pdf](https://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_03_22F5E124A94B.pdf)>, refe-  
rencia citada en página 74.

## INDEC

- 2022 «Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos. Segundo semestre de 2021», en *Informes Técnicos*, vol. 6, n.º 4, recuperado de <[https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph\\_pobreza\\_03\\_22F5E124A94B.pdf](https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_03_22F5E124A94B.pdf)>, referencia citada en páginas 74, 78, 87.

JACOVKIS, PABLO *et al.*

- 2021 «La pandemia desnuda nuestros problemas más estructurales», en *Trabajo y sociedad*, vol. 21, n.º 36, págs. 9-28, referencia citada en página 74.

## MANZANELLI, PABLO; DANIELA CALVO Y CECILIA GARRIGA

- 2020 *Informe de coyuntura*, Buenos Aires: CIFRA, vol. 54, referencia citada en página 74.

## MARQUÉS PERALES, I. Y EDUARDO CHÁVEZ MOLINA

- 2019 «Relevancia de la heterogeneidad socioeconómica. Estudio comparativo entre América Latina y Europa basado en la adaptación del esquema EGP», en *Papers. Revista de Sociología*, vol. 104, n.º 2, págs. 225-245, referencia citada en páginas 75, 77.

## PREBISCH, RAÚL

- 1949 «El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas», en *El trimestre económico*, págs. 347-431, referencia citada en página 76.

## RODRÍGUEZ DE LA FUENTE, JOSÉ

- 2021 «¿El virus afecta por igual a las clases sociales? Exploraciones sobre las desigualdades laborales y económicas en un contexto de pandemia», en *Revista Sociedad*, n.º 42, págs. 30-44, referencia citada en página 74.

## SALVIA, AGUSTÍN; JUAN IGNACIO BONFIGLIO Y JULIETA VERA

- 2017 «La pobreza multidimensional en la Argentina urbana 2010-2016. Un ejercicio de aplicación de los métodos de la OPHI y CONEVAL al caso argentino», en *Observatorio de la Deuda Social. UCA*, referencia citada en página 73.

## SOLÍS, PATRICIO; EDUARDO CHÁVEZ MOLINA Y DANIEL COBOS

- 2019 «Class Structure, Labor Market Heterogeneity, and Living Conditions in Latin America», en *Latin American Research Review*, vol. 54, n.º 4, referencia citada en páginas 75, 90.

## ZACK, GUIDO; DANIEL SCHTEINGART Y FEDERICO FAVATA

- 2020 «Pobreza e indigencia en Argentina: Construcción de una serie completa y metodológicamente homogénea», en *Sociedad y Economía*, referencia citada en página 73.

## CAPÍTULO 4

# Desigualdad de clase acumulativa e interseccional. Nudos de reproducción intergeneracional de la pobreza y canales de ascenso social

PABLO DALLE,<sup>\*</sup> JOAQUÍN CARRASCOSA<sup>\*\*</sup>  
y BRYAM HERRERA JURADO<sup>\*\*\*</sup>

### 4.1 Introducción

La doble crisis producto de la pandemia y prepandemia que atravesó Argentina entre 2018 y 2020 volvió a colocar a la pobreza como una problemática central de la estructura social. Este estudio analiza los factores causales que llevan a la reproducción intergeneracional de la pobreza partiendo de un enfoque teórico relacional de clases sociales que conceptualiza a la desigualdad como acumulativa e interseccional. Desigualdad acumulativa porque las ventajas y desventajas de los orígenes de clase social se acumulan en el tiempo y a través de generaciones; e interseccional porque la desigualdad de clase se entreteteje con otros clivajes como el género y el origen étnico, generando una desigualdad mayor en términos cuantitativos y cualitativos, definiendo una subalternidad en varias dimensiones simultáneas y teniendo mecanismos de raíces más profundas.

Los estudios recientes sobre pobreza en Argentina se han centrado en la distinción entre pobreza por necesidades básicas insatisfechas y pobreza por ingresos, así como en el estudio de la relación

---

\* Investigador del CONICET, Instituto de Investigaciones Gino Germani-UBA.

\*\* Becario doctoral de la Universidad de Buenos, Instituto de Investigaciones Gino Germani-UBA.

\*\*\* Becario doctoral del CONICET, Instituto de Investigaciones Gino Germani-UBA.

entre los niveles de pobreza con la orientación de políticas macroeconómicas, la evolución de la actividad económica, la segmentación del mercado de trabajo y las políticas de protección social (Arakaki 2011; INDEC 2021; Lindenboim *et al.* 2010; Poy 2021). Otra destacada línea de estudio pone el acento en las principales variables vinculadas al hogar de origen que influyen en la transmisión intergeneracional de la pobreza (Golovanevsky 2007; Torrado 1995). Y, más recientemente, ha retornado una tradición investigativa que aborda a la pobreza desde el análisis de las clases sociales (Chávez Molina y Rodríguez de la Fuente 2021; Dalle *et al.* 2017; Pla *et al.* 2022).

El objetivo del presente capítulo es analizar factores estructurales vinculados a la pobreza en Argentina en la pospandemia de COVID-19 (2021) desde un enfoque de clases sociales en perspectiva interseccional e intergeneracional. Específicamente, las interrogantes que guían el estudio son: ¿qué fracciones de clase tienen mayores probabilidades de experimentar pobreza? ¿Qué perfil tienen estos trabajadores? ¿En qué medida clase social, género y origen étnico se vinculan para incrementar las probabilidades de experimentar y permanecer intergeneracionalmente en la pobreza? ¿Los segmentos de clase vinculados con situaciones de pobreza se encuentran «cristalizados»? ¿Qué desventajas transmitidas intergeneracionalmente contribuyen a reproducir la pobreza y qué obstáculos dificultan salir de esta situación? E inversamente, ¿Qué canales de ascenso social permiten romper el círculo de reproducción en las capas precarizadas y pobres de la clase trabajadora?

## 4.2 Marco teórico: clases sociales, desigualdad acumulativa e interseccional

### 4.2.1 Un enfoque relacional

Desde las ciencias económicas, las perspectivas denominadas *mainstream* estudian la pobreza y desigualdad según aspectos atributivos de los individuos: la renta, la riqueza y la educación. En contraste, el énfasis en los aspectos relacionales de la desigualdad (y no solo en los atributivos) hace distintivo al enfoque sociológico (Goldthorpe 2012; Wright 2005).

Los enfoques teóricos de clases sociales, de raíz tanto weberiana como marxista, postulan, desde una perspectiva relacional al análisis de la desigualdad en las condiciones materiales y oportunidades de vida. La posición en la estructura de clases se deriva de las relaciones de control/exclusión de recursos económicos estratégicos como propiedad de capital, autoridad y calificación laboral, los cuales son determinantes en la obtención de ingresos. Mientras los enfoques

neomarxistas los vinculan a la explotación (Wright 1997), los neo-weberianos los conciben como bases de mecanismos de cierre social (Parkin 1984).

En este capítulo nos centraremos en el concepto de *mecanismos de cierre social*. Los cuales, siguiendo a Parkin (1978), se dividen en mecanismos de «exclusión» y de «usurpación». A través de los primeros, la clase alta y las clases medias privilegiadas obtienen mejoras en las condiciones y oportunidades de vida a partir de la monopolización de recursos, a la vez que excluyen a otros grupos de su acceso. En las sociedades capitalistas contemporáneas, los recursos monopolizados se fundan, no solo en la propiedad de capital, la autoridad en la organización del trabajo, en la posesión de credenciales educativas y la calificación laboral, sino también en la condición legal (formal/informal) del empleo.

La estructuración de la desigualdad no es unidimensional. El *prestigio étnico* es también un mecanismo de exclusión relacional, en tanto depende de la valoración social hegemónica diferencial a grupos de distinta ascendencia por parte de una sociedad en un momento histórico determinado, e influye, por lo tanto, sobre las condiciones y oportunidades de vida de los grupos racializados (Dalle 2014; Parkin 1978).

Mientras en los enfoques atributivos las desventajas son presentadas como el resultado de condiciones individuales en una jerarquía que no se pone en relación con los grupos sociales, las perspectivas relacionales de la pobreza consideran que las desventajas económicas de los pobres se hallan causalmente conectadas a las ventajas de otras clases sociales que los desfavorecen. En este sentido, «eliminar la pobreza gracias a la mejora de los atributos pertinentes de los pobres (su educación, su nivel cultural, su capital humano) no perjudicaría a los ricos»; en cambio, desde un enfoque centrado en las relaciones de clase «eliminar la pobreza mediante la supresión de los mecanismos de exclusión erosionaría potencialmente las ventajas de los acaudalados» (Wright 2010, pág. 210).

#### 4.2.2 La intersección de clivajes de desigualdad

Si bien se pueden hallar ciertas perspectivas previas similares en Latinoamérica (Viveros Vigoya 2016), el concepto de interseccionalidad fue acuñado por Crenshaw (1988) en su búsqueda de crear una categoría jurídica que permitiera poner en relieve las múltiples formas de opresión de las que era objeto un grupo de trabajadoras afroestadounidenses de la compañía General Motors. Concepto que permitía entender la forma de desigualdad específica que enfrentaba este grupo en tanto mujeres, afrodescendientes y obreras.

Décadas después, la interseccionalidad se ha retomado y nutrido de forma amplia, dando lugar a numerosos y variados trabajos, especialmente desde las teorías feminista y la investigación cualitativa en raza y género. En cambio, los estudios de estratificación social, centrados por lo general en las clases sociales, no han hecho eco en igual medida de los aportes generados por estos debates (Gómez Rojas 2018; Kleidermacher y Seid 2021).

Como criticaba Hall (2017) al marxismo de su época, aún se observa cierta tendencia en el campo de la estratificación social, no a ignorar el rol de la raza/etnia y el género, pero sí a pensarlos como elementos subsidiarios que solo se pueden explicar y resolver en última instancia mediante la clase social.

El estudio de estos clivajes, en este sentido, debe ser situado. No basta con sumar un clivaje a otro duplicando las categorías o posiciones de desigualdad, como si los estudios de desigualdad social tuviesen por objeto determinar cuántos peldaños tiene una escalera. Lo central, como afirma Wright (1997), es ordenar para abordajes específicos las distintas formas de interacción entre clase social y género como dos fenómenos causales. Afirmación a la que nosotros agregamos origen étnico. Es decir, nos proponemos abordar la pobreza haciendo foco en la intersección entre género, origen étnico y clase social, no queriendo con ello decir que estos clivajes forman relaciones paralelas o subsumibles unas a otras. Por el contrario, queremos acercarnos a un tipo de desigualdad específica, acaso más profunda, de aspectos múltiples a la vez que entrelazados, cualitativamente distinta a la suma de desigualdades.

#### 4.2.3 Desigualdad de clase acumulativa

En el estudio fundacional que avanzó en el análisis de los factores intermediarios entre origen y destino social, Blau y Duncan (1967) propusieron el *modelo de logro de estatus*. A diferencia de enfoques previos, que se centraban en el análisis bivariado de la *tabla de movilidad* de clase, Blau y Duncan examinaron el proceso de logro ocupacional a través de la descomposición de los efectos de factores adscriptos y adquiridos. Para estos autores, las principales variables, «el esqueleto» que determina el proceso de estratificación social son: el estatus ocupacional y la escolaridad de los padres (factores heredados por el sujeto) y la escolaridad y la primera ocupación del encuestado (como factores adquiridos). Uno de los principales hallazgos de este estudio es que las desigualdades en el proceso de estratificación social se acumulan a través de generaciones.

Las ventajas acumulativas son un mecanismo de la reproducción de las desigualdades a lo largo del tiempo (en los cursos de vida o intergeneracionalmente) en los que una posición favorable se vuelve

un recurso que permite aumentar los beneficios en el futuro. Estos mecanismos funcionan a lo largo de los cursos de vida en distintas áreas, como la educación, las familias, los barrios y las trayectorias laborales (Di Prete y Eirich 2006).

En Argentina, esta línea de investigación centrada en la desigualdad de clase acumulativa ha ganado terreno en los últimos años. Partiendo de estudios que analizan el proceso de estratificación social siguiendo el modelo de Blau y Duncan (Jorrat 2016), estudios recientes han avanzado en indagar: el peso de las ventajas y desventajas vinculadas al origen migratorio familiar en la movilidad social intergeneracional (Dalle 2020); los condicionamiento de la primera ocupación (Carrascosa y Estéves-Leston 2020); el efecto del barrio de socialización en la adolescencia y los cambios residenciales (Boniolo 2020); el papel de los lazos sociales (Carrascosa 2020); la influencia de completar estudios de nivel superior (terciarios o universitarios) (Jorrat *et al.* 2021); y el tipo de ocupaciones que generan puentes hacia las clases medias y el entramado de factores que constituyen nudos de reproducción en las capas precarizadas de las clases populares (Dalle 2016; Sautu y Carrascosa 2020), temas que abordaremos en el presente capítulo.

#### 4.2.4 Desarrollo desequilibrado, marginalidad y desigualdad étnica

A partir de la década de 1950, la sociología latinoamericana buscó explicar la proliferación de enclaves de pobreza, los cuales empezaron a formarse en los márgenes y posteriormente también en los centros de las crecientes urbes de la región.

Germani, en un trabajo pionero, conceptualizó a la marginalidad como aquella instancia en donde grupos poblacionales quedan al margen de participar de las esferas en las que normativamente les corresponde hacerlo. Y, enmarcado en la teoría de la modernización, señaló que la misma era el producto de la asincronía que asumió nuestro tránsito hacia la modernidad en sus diversas esferas sociales, generando así la coexistencia de estructuras parciales correspondientes a diferentes etapas de desarrollo (Germani 1962). Así concebido, el problema de la marginalidad era transitorio, puesto que desarrollo que traería consigo la modernización iba a integrar a estas poblaciones.

Esta concepción, que vista en el contexto actual parece un tanto lejana, se debe a la diferencia que existía en aquella época entre la situación argentina y la del resto de la región. En Latinoamérica grandes sectores eran definidos como marginales o semimarginales, tomando en consideración tanto su actividad económica como sus patrones de consumo, su participación política y otras dimensiones

culturales. Su inserción en el sistema productivo, asimismo, se manifestaba a través de la expansión del sector «seudoterciario»: servicios domésticos/personales, trabajo cuenta propia artesanal de baja productividad, empleo asalariado informal y desempleados con escasos niveles educativos. Esta población carecía de organización sindical y poseía baja cualificación laboral, llevando un nivel de vida por debajo del subconsumo y habitando usualmente en asentamientos precarios (Germani 1976; Graciarena 1972).

En Argentina, en cambio, hasta la década de 1960 no había grandes contingentes de fuerza de trabajo excedente. Los trabajadores formaban parte en gran medida de la clase trabajadora «consolidada», fruto de un proceso más expansivo de industrialización y del empleo asalariado formal. Circunscribiendo su análisis al AMBA, Germani (1973, pág. 109) observaba que en 1961 el 37.4 % de los hogares pertenecía al estrato obrero establecido, mientras que apenas el 4.2 % era marginal/pobre.

En aquella estructura social de Argentina de mediados del siglo XX, la aún escasa «marginalidad urbana» se complementaba con la marginalidad periférica de las regiones que habían quedado postergadas durante el modelo de desarrollo agroexportador y la industrialización por sustitución de importaciones. En estas regiones, la estructura social tenía un perfil claramente más polarizado pero el volumen de la población pobre no era tan elevado como en otros países de América Latina donde había una gran masa campesina.

Distinta fue la postura de otros autores (Nun 2003; Quijano 2014) que dejaron de entender a esta población marginal como un fenómeno transitorio y señalaron que la misma no está excluida de las economías nacionales, así como tampoco es un grupo al cual aún no llegaron los frutos del «desarrollo». Dicha marginalidad era consecuencia de la forma específica del desarrollo del capitalismo en la región. De estructuras económicas nacionales heterogéneas en las que conviven sectores económicos capitalistas con otros sectores económicos no típicamente capitalistas, en los cuales se desenvuelve la mano de obra «marginal» no asalariada. Dos sectores económicos cuyo crecimiento es simultáneo e imbricado, no inversamente proporcional.

Germani (1980), haciendo eco de estos debates, propone un enfoque multicausal basado en un análisis más integral del fenómeno de la marginalidad, que usa cinco factores: económico-sociales: la estructuración de modelos de desarrollo económico que generan tasas de crecimiento económico insuficientes y limitaciones a la absorción de la totalidad de la población activa dentro del sistema económico del país. Político-sociales: los mecanismos integrados al régimen político o a su orientación económica que contribuyen a crear o mantener la marginalidad, como pueden ser los planes de ajuste y de

achicamiento del Estado. Factores demográficos: tasas de crecimiento poblacional elevadas en relación a los países desarrollados, que exceden la posibilidad de absorción de población en el sector moderno determinadas por las tasas de crecimiento económico. Factores de orden psicosocial: ligados a la falta de una plena participación en la sociedad moderna, por un retraso en la incorporación de valores y comportamientos ligados a procesos de modernización. Factores culturales: más allá de la igualdad formal, la cultura dominante fue europea/europeizada mientras que los sectores autóctonos fueron situados mayormente en áreas rurales y en los estratos bajos del proletariado urbano.

Otros autores hacen mayor énfasis en el vínculo entre la clase social y lo étnico/racial. Porque desde la conquista en América el racismo sirve a las clases poseedoras para justificar la sobreexplotación de ciertas poblaciones y para dividir a la clase trabajadora (Cox 1948) a partir de identidades étnico-raciales que delimitan las fronteras de la división del trabajo: «blancos», «negros», «indios» y «mestizos» (Quijano 2017). Proceso que Margulis denominó racialización de las relaciones de clase, la cual en base al imaginario eurocéntrico tiende a situar en segmentos precarizados de la clase trabajadora a los sujetos que poseen rasgos corporales y formas culturales que remiten a los pueblos originarios, mestizos y afrodescendientes (Margulis 1999b).

#### 4.2.5 Neoliberalismo, desarrollo trunco y nuevos pobres

La situación económico-social argentina cambia de forma drástica a partir de 1976, especialmente en la década de 1990, cuando se profundiza el modelo neoliberal introducido por el golpe de estado. La apertura económica, la desindustrialización, el descenso de los salarios, la pérdida de derechos laborales y la expulsión de trabajadores del sector industrial hacia el sector terciario y el cuentapropismo pasaron a ser el telón de fondo del aumento de la pobreza estructural y del surgimiento de una «nueva pobreza» que afectaba a amplios sectores que antaño eran de clase obrera «establecida» y clases medias (Svampa 2005).

Si volviéramos nuestra mirada sobre la estructura social en la Argentina en 1974 nos encontraríamos con un perfil diferente al actual. En aquella época, la pobreza era menor (27.8 % de la población) y principalmente de tipo estructural vinculada a la falta de infraestructura en las áreas con menor desarrollo económico (el Norte Grande) y a ciertos bolsones de marginalidad en los grandes centros urbanos (Arakaki 2011, pág. 47). La pobreza por ingresos era muy baja (4.6 %) porque era baja la desocupación (2.7 %) y el porcentaje de población en el segmento obrero informal; y además el salario real

era alto en términos históricos. Tener empleo era entonces sinónimo de formalidad, la llave de acceso a derechos sociales y condición suficiente para vivir por encima de la línea de pobreza. En la clase trabajadora primaba una posición «establecida» o «consolidada» y el nivel de desigualdad entre las clases era menor (Dalle *et al.* 2017).

Debido al cambio de signo en políticas económicas traído por el neoliberalismo, dentro de la población en situación de pobreza hoy hallamos, no solo a sectores «marginales», sino también tanto al segmento precarizado de la clase trabajadora como a ciertos sectores de la clase trabajadora formal. Situación que, sumada al estancamiento económico entre 2012 y 2017, la honda crisis abierta en 2018 con el endeudamiento externo y la pandemia de COVID-19, llevaron a que Argentina en el segundo semestre de 2020 registre los mayores índices de pobreza de los últimos 15 años; hallándose el 31.6 % de los hogares y el 42 % de la población de los principales conglomerados del país bajo la línea de pobreza (INDEC 2021). Estos porcentajes, si bien han disminuido levemente gracias a la recuperación económica a la salida de la pandemia, siguen siendo muy altos en perspectiva histórica: el 27.9 % de los hogares y el 37.3 % de la población era pobre en el segundo semestre de 2021 (INDEC 2022).

### 4.3 Metodología y datos utilizados

El estudio utiliza una metodología cuantitativa basada en el análisis estadístico de la Encuesta nacional sobre la Estructura social de Argentina y Políticas públicas durante la pandemia por COVID-19 (ESAyPP/PISAC-COVID-19) relevada en la Argentina urbana entre octubre y diciembre de 2021. El universo de estudio de la ESAyPP/PISAC-COVID-19 es doble: los hogares y la población adulta residente en localidades de Argentina mayores a 50 mil habitantes. El diseño muestral probabilístico, estratificado y por conglomerados permite tres dominios de estimación: a nivel nacional, por regiones y por tamaño de los aglomerados. El tamaño de la muestra relevada es de 5 239 hogares y personas adultas, combinando amplia escala y cobertura. En este capítulo tomamos por unidad de análisis al hogar, ámbito central donde se reproducen las condiciones materiales de vida.

La ESAyPP/PISAC-COVID-19 cuenta con datos sobre la ocupación principal de los encuestados, la del principal sostén del hogar (PSH) actual (ambas al momento de la encuesta) y la del PSH (padre o madre) cuando el encuestado tenía 15 años. La clase social actual

de los hogares se reconstruye a partir de la posición ocupacional del PSH.<sup>[1]</sup>

La estrategia de análisis estadístico combina técnicas descriptivas basadas en la lectura de tablas bivariadas y técnicas inferenciales a través de modelos de regresión logística multivariados. En el cuadro 4.1 del anexo se presentan las variables utilizadas, su distribución en la población de la Argentina urbana en 2021 y la probabilidad de experimentar pobreza (variable dependiente) según las variables independientes.

Empleamos las variables *clase de origen* y *clase actual* para acercarnos al conocimiento de la desigualdad intergeneracional, puesto que la relación entre estas dos variables nos permite analizar las pautas de reproducción de la pobreza a través de dos generaciones. Para definir las posiciones de clase social se utilizará el esquema CASMIN (EGP), desarrollado por Erikson *et al.* (1979). Este esquema es empleado tanto a nivel internacional en trabajos sobre estratificación y movilidad social intergeneracional como en análisis específicos de desigualdades ligadas al capital social. Se utilizará una versión del esquema original adaptada para un trabajo comparativo en América Latina por Solís y Boado (2016) para dar cuenta de las particularidades de la estructura de clases de la región. El principal cambio del esquema consistió en remover de la categoría pequeña burguesía a los trabajadores manuales cuentapropistas de baja calificación, típicos del sector informal (por ejemplo, vendedores ambulantes, trabajadores domésticos o trabajadores en servicios personales no calificados), reagrupándolos en la clase de trabajadores manuales no calificados. En el cuadro 4.8 del anexo se presenta el esquema de clases EGP y algunos indicadores de la desigualdad de condiciones de vida entre las clases: ingresos, nivel educativo y condición de registro del empleo.

La variable *Sexo* sirve de proxy para estudiar las relaciones de género, especialmente la opresión patriarcal contra la mujer. *Origen étnico* se construyó en base a la pregunta múltiple de autopercepción: *en nuestro país viven personas de múltiples orígenes étnicos debido a sus antepasados, ¿cuál es su origen étnico?*, la cual daba un abanico amplio de categorías y la posibilidad de elegir hasta dos opciones. En base a la combinación de respuestas, y siguiendo las identidades étnicas antes descritas (Quijano 2017), se construyó una variable con tres categorías conforme al prestigio social y al lugar en la

---

[1] La comparación se realiza entre la clase social de los hogares de origen y la de los hogares destino. Esto implica que en un porcentaje pequeño de jóvenes que viven con sus padres, la posición de clase del hogar de origen y la posición de clase del hogar de destino refieren, con una alta probabilidad, a la misma persona, aunque en distintos momentos en el tiempo.

división del trabajo en los que la estructura social argentina tiende a ubicar a la población según un imaginario eurocéntrico. El criterio de clasificación en las categorías fue el siguiente:

- 1) La categoría «pueblos originarios y/o afrodescendientes» está conformada por los PSH que dijeron, sin mencionar ninguna otra categoría, tener orígenes en «pueblos originarios» y/o «afrodescendientes».<sup>[2]</sup>
- 2) «Mestizos» está conformada por los casos con orígenes «mestizos», «criollos» y/o «mulatos» y también por los casos con orígenes mixtos, es decir por aquellos que contestaron tener tanto orígenes en «pueblos originarios» o «afrodescendientes» como orígenes en alguna otra categoría (por ejemplo: europeo o mestizo).
- 3) «Europeo, asiático y/o de medio oriente» está conformada por los PSH que señalaron, sin mencionar ninguna otra opción, tener orígenes étnicos de una o más de las siguientes categorías: «europeo», «árabe», «judío», «oriental», «armenio».

La variable *Condición de registro de la ocupación* divide a los segmentos «Formal» e «Informal» según el empleador le realice aportes jubilatorios al trabajador asalariado o el trabajador autónomo o cuenta propia esté registrado como contribuyente fiscal, permitiendo acercarnos al conocimiento de la precariedad en la estructura social. La variable *Pobreza*, que establece si el PSH pertenece o no a un hogar en condición de pobreza, es retomada del estudio de [Chávez Molina y Rodríguez de la Fuente \(2022\)](#) de este mismo libro, basado en la metodología del INDEC. La misma tiene en cuenta los ingresos totales familiares, el número de miembros del hogar según edad y sexo, el valor de la canasta básica alimentaria y el valor de la inversa del coeficiente de Engel (el cual se aproxima al valor de los bienes y servicios necesarios no alimentarios); calculando de este modo una canasta básica total, de cuyo acceso depende el ser o no pobre.

*Discriminación y Motivos de discriminación* se basaron en dos preguntas. La primera pregunta contiene 5 indicadores con respuesta dicotómica (sí/no) que refieren a si el encuestado experimentó situaciones de discriminación por la policía o en la justicia, en el trabajo de parte de sus empleadores o jefes, en el trabajo de parte de sus compañeros, en la escuela y en la vida cotidiana. A partir de

[2] Originalmente se quiso dividir a esta población en dos categorías, pero la baja cantidad de casos en «afrodescendientes» (25) en comparación con los casos de «de pueblos originarios» (485) y ciertas tendencias educativas y laborales similares halladas en ambos grupos nos hicieron unirlos en una sola categoría.

estos indicadores, se construyó un índice resumen sobre si el encuestado fue o no discriminado en al menos un tipo de situación. La segunda pregunta era de respuesta múltiple sobre las causas por las cuales el encuestado fue discriminado/menospreciado. Los motivos fueron agrupados de forma temática en las siguientes categorías: «Por origen étnico, migratorio o color de piel», «por clase social», «por identidad de género u orientación sexual» y «por otro motivo».

#### 4.4 Determinantes de la pobreza

En esta sección analizaremos las principales variables que inciden como determinantes de las chances de ser pobre para los principales sostenes del hogar, específicamente observamos los efectos de la clase social, el origen étnico, el género, la formalidad/informalidad del trabajo y la región de residencia.<sup>[3]</sup>

Los efectos brutos muestran que las chances de encontrarse en un hogar pobre, aumentan marcadamente al descender en la estructura de clases (véase cuadro 4.1). Son particularmente altas las chances de encontrarse en un hogar pobre para la clase obrera no calificada (OR = 14), la clase obrera calificada (OR = 6,8) y trabajadores cuenta propia con un pequeño capital (comerciantes, talleristas, trabajadores de oficio) (OR = 6,4), en comparación con el estrato alto de la clase de servicios. Además, la población que se auto reconoce como descendiente de pueblos originarios (OR = 2,7) o con origen étnico mestizo (OR = 1,6), tienen más chances de encontrarse en hogares en situación de pobreza y las mujeres tienen casi dos veces más chances de experimentar pobreza que los varones (OR = 1,9). Los trabajadores en condiciones de informalidad laboral tienen una propensión sustancialmente mayor a caer en la pobreza que los trabajadores formales (OR = 3,3). Por último, los hogares que residen en las regiones del AMBA (en particular el Conurbano Bonaerense), Cuyo, el NOA y sobre todo el NEA presentan mayores chances de experimentar pobreza en relación con la Patagonia, Centro y Pampeana, lo que evidencia el desarrollo desigual del país. Las oportunidades ocupacionales y educativas se concentran en la ciudad de Buenos Aires y la región pampeana, que ha sido desde fines del siglo XIX el epicentro de la producción agropecuaria y agroindustrial del país y en la Patagonia donde se asientan enclaves industriales.

---

[3] En el capítulo 4 del presente libro se realiza un análisis que hace uso de otros predictores, varios de ellos vinculados con eventos recientes en las trayectorias socioocupacionales y con los efectos amortiguadores de políticas públicas (Chávez Molina y Rodríguez de la Fuente 2022), por lo cual pueden leerse como capítulos complementarios.

**Cuadro 4.1. Modelos de regresión logística binaria con variable dependiente a vivir en un hogar pobre. Principal sostén del hogar. Argentina urbana, 2021.**

Variables independientes	Probabilidades de pertenecer a un hogar pobre (PSH)				
	Efectos brutos	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3	Modelo 4
Clase social (Ref. I. Clase de servicios alta)					
I. Clase de servicios alta	-	-	-	-	-
II. Clase de servicios baja	2.514 ***	2.296 ***	2.311 ***	2.233 ***	2.196 ***
IIIa+V. Clase de empleados de cuello blanco	4.044 ***	3.800 ***	3.824 ***	3.710 ***	3.635 ***
IVa+b+c. Pequeños empleadores y trabajadores autónomos con capital	6.405 ***	6.227 ***	6.229 ***	4.107 ***	4.320 ***
VI+IIIb. Clase obrera calificada	6.868 ***	7.201 ***	7.251 ***	5.871 ***	5.859 ***
VIIa+b. Clase obrera no calificada	13.95 ***	12.61 ***	12.61 ***	8.996 ***	9.103 ***
Origen étnico (Ref. Europeo, asiático o de medio oriente)					
Europeo, asiático o de medio oriente	-	-	-	-	-
Pueblos originarios o afrodescendientes	2.713 ***	1.873 ***	1,456 **	1.400 *	1.233
Mestizo	1.591 ***	1.339 ***	1	1.060	1
Sexo (Ref. Varón)					
Varón	-	-	-	-	-
Mujer	1.880 ***	1.970 ***	1,704 ***	1.627 ***	1.626 ***

*Continúa en la página siguiente*

Estos resultados muestran que cada uno de los clivajes que generan desigualdad en las sociedades contemporáneas (clase social, género y origen étnico) tiene un efecto sobre las chances de tener condiciones de pobreza. A continuación, realizaremos un análisis multivariado para captar los efectos netos de cada variable y probar la hipótesis de interseccionalidad entre los clivajes de desigualdad (véase cuadro 4.1). En el primer modelo, que incluye las variables clase social y origen étnico, se mantiene la tendencia anterior, con una disminución de los efectos del origen étnico (a OR = 1.9 para quienes se reconocen descendientes de pueblos originarios o afrodescendientes y OR = 1.3 para quienes se reconocen mestizos) pero

Viene de la página anterior

Probabilidades de pertenecer a un hogar pobre (PSH)					
Variables independientes	Efectos brutos	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3	Modelo 4
Interacciones					
Mujer pueblos originarios/afro			1,530 *	1.407	1.423
Mujer y mestiza			1,281 *	1.382 **	1.388 **
Formalidad (Ref. Formal)					
Formal	-			-	-
Informal	3.342 ***			2.284 ***	2.254 ***
Región (Ref. AMBA)					
AMBA	-				-
Centro	0.652 ***				0.637 ***
Cuyo	1.022				1.112
NEA	1.250 *				1.154
NOA	1.033				0.904
Pampeana	0.558 ***				0.548 ***
Patagónica	0.656 ***				0.629 ***
Pseudo R2		0,110	0,111	0,132	0,142
Lr test			4,81 *	369,0 ***	53,0***
			(M1 vs M2)	(M2 vs M3)	(M3 vs M4)
N	5239	4.828	4.828	4.603	4.603

\*\*\* p<0.01, \*\* p<0.05, \* p<0.1. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

manteniéndose significativos. Al incluir el control por género (modelo 2)<sup>[4]</sup> vemos que los hogares con PS mujeres tienen mayores chances de estar en situación de pobreza (OR = 1.7); además, los efectos de la clase social se mantienen similares, pero disminuyen los efectos para los hogares cuyo PS desciende de pueblos originarios o afrodescendientes (OR = 1.4) y pierden significancia los efectos para los hogares con PS mestizos. Además, las interacciones entre

[4] El *Lr test* permite contrastar a cada modelo incorporado con el anterior, las diferencias estadísticamente significativas en todos los casos dan la pauta de que es relevante la incorporación sucesiva de la interacción entre sexo y origen étnico, la condición de formalidad y la región como determinantes de la pobreza.

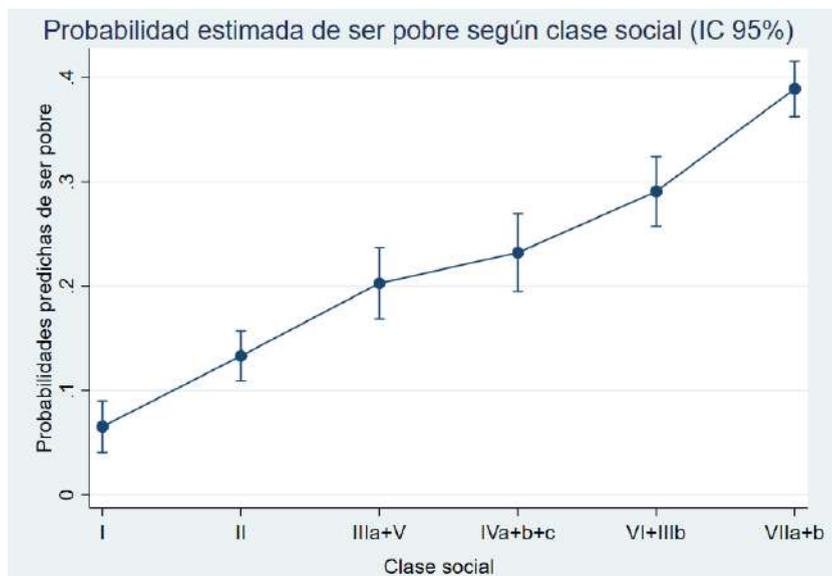
el sexo y el origen étnico son significativas (1.5 para las mujeres de pueblos originarios y 1.3 para las mujeres mestizas).

En el modelo 3, incorporamos la variable condición de la ocupación (formal/informal) como una variable mediadora entre la clase social de pertenencia y la situación de pobreza. Los resultados permiten observar que, al introducir esta variable, los valores de los coeficientes de clase social disminuyen, pero todos se mantienen significativos. En el modelo 4, la introducción de la región muestra que la población que reside en las regiones de mayor desarrollo relativo (Pampeana, Patagonia y Centro) tienen menores chances de estar en situaciones de pobreza, controlando por las otras variables independientes utilizadas.

En suma, los resultados en conjunto muestran que la clase social tiene mayor influjo en la explicación de la pobreza. Siguiendo a Wright (1995), la clase social permite explicar la desigualdad y la pobreza con mayor claridad que otros conceptos porque postula mecanismos específicos como la explotación, la dominación y el acaparamiento de oportunidades, y asimismo porque tiene un *efecto pervasivo* sobre otras variables independientes (convirtiéndolas en mediadoras) como las condiciones laborales (registro en la seguridad social, nivel de ingresos, acceso a derechos sociales, etcétera), el tamaño del hogar, las oportunidades educativas, la localización socioresidencial, entre otras variables, que a su vez tienen efectos en las probabilidades de caer en situación de pobreza.

Para analizar con más detalle la magnitud de las diferencias resultantes del análisis de regresión, aplicamos la técnica de *probabilidades predichas* sobre el modelo que arrojó el mejor ajuste. La misma consiste en estimar las probabilidades de estar en situación de pobreza según una variable independiente o más de una – en nuestro caso seleccionamos la principal que como vimos es la posición de clase social – definiendo un valor constante (la media) para las variables de control (figura 4.1).

El gráfico permite observar que la probabilidad de los hogares de estar en situación de pobreza es significativamente mayor en el segmento no calificado de la clase trabajadora (alcanzando casi el 40%). En el segmento calificado de la clase trabajadora esta probabilidad desciende a 30% y en los pequeños propietarios y trabajadores autónomos con capital al 24%, pero ambas posiciones de clase presentan valores altos en términos históricos y los intervalos de confianza muestran que no tienen diferencias significativas entre sí (pautas similares se observan con otros esquemas de clase, veáse [Chávez Molina y Rodríguez de la Fuente 2021](#); [Pla et al. 2022](#)).



**Figura 4.1.** Probabilidades estimadas de estar en situación de pobreza según clase social, controlando por origen étnico, sexo, formalidad y región. Intervalos de confianza de 95 %. Principal sostén del hogar. Argentina urbana, 2021. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

#### 4.5 ¿Un segmento cristalizado? Movilidad y permanencia intergeneracional en la clase obrera no calificada

Una cuestión central en el análisis de la pobreza desde un enfoque de clase lo constituye, en general, el examen de la transmisión intergeneracional de oportunidades desiguales. Y, en particular, el examen de las probabilidades de trascender el origen de clase que tienen aquellas personas provenientes de hogares de clase trabajadora no calificada, las cuales, como vimos, conforman el segmento de clase más asociado con la pobreza. En esta sección se presentan los resultados del *índice de Glass* entre orígenes y destinos de clase (que contrasta las frecuencias observadas sobre las esperadas en cada celda de la tabla de movilidad y en tal sentido brinda una idea intuitiva de la asociación entre variables porque muestra las regiones de la tabla donde se observan «excesos» de casos – rigideces – y «menos» casos, como expresión de la movilidad entre clases más infrecuente). El cálculo de este índice nos permitirá explorar la hipótesis de cristalización del segmento no calificado las clases populares que tiene una mayor propensión hacia la precariedad laboral y condiciones de pobreza (véase cuadro 4.2).

**Cuadro 4.2. Cociente entre las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas de la tabulación cruzada entre clase social de origen y clase social de destino. Principal sostén del hogar, Argentina urbana, 2021.**

Clase de origen	Clases de destino					
	I	II	IIIa+V	IVa+b+c	VI+IIIb	VIIa+b
I Clase de servicios alta	2,43	1,99	0,99	0,96	0,42	0,38
II Clase de servicios baja	1,28	1,62	1,43	0,71	1,17	0,45
IIIa+V. Clase de empleados de cuello blanco	1,06	1,55	1,32	0,46	0,69	0,93
IVa+b+c. Pequeños empleadores y trabajadores autónomos con capital	1,43	0,92	0,88	1,76	1,00	0,69
VI+IIIb. Clase obrera calificada	0,90	0,91	0,97	0,97	1,39	0,90
VIIa+b. Clase obrera no calificada	0,42	0,59	0,91	0,81	0,99	1,48

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

Los valores más altos se encuentran en la diagonal de herencia intergeneracional de clase, encontrando el más alto en la cúspide de la estructura de clases. Asimismo, se destacan los movimientos de corta distancia en las clases medias y en la clase trabajadora. Los resultados muestran tres rasgos centrales de la estructura de estratificación social: cierto cierre social en la clase de servicios generalmente asociada a las clases medias altas, rigideces en la clase obrera no calificada similares a otras clases y, a su vez, cierta probabilidad de movilidad ascendente al segmento obrero consolidado (que implica diferencias significativas de ingresos, oportunidades de vida y menores riesgos de pobreza). Estos resultados sugieren que la idea de una «cristalización» de la clase trabajadora no calificada que tiene como corolario una segmentación de la clase trabajadora es «excesiva».

Al analizar la inmovilidad social intergeneracional en el segmento de clase trabajadora no calificada según origen étnico y género (véase cuadro 4.3), observamos que los grupos subalternizados tienen mayores probabilidades de permanecer en esta posición de clase. Las PSH mujeres descendientes de pueblos originarios (59 %), los varones descendientes de pueblos originarios (55.7 %), las mujeres que se reconocen mestizas (40 %) y los varones que se perciben mestizos (30 %) superan en varios puntos porcentuales la reproducción intergeneracional en la base de la estructura de clases a la población que se autoidentificó con origen étnico europeo (o asiático y de medio oriente).

**Cuadro 4.3. Porcentaje de reproducción intergeneracional en el segmento no calificado y precarizado de la clase obrera. Principal sostén del hogar. Argentina urbana, 2021 (en %).**

Origen étnico	Varón	Mujer
Descendiente de población originaria o Afrodescendiente	55,7	58,8
Mestizos	30,0	40,1
Descendiente europeo, asiático y de medio oriente	19,9	18,0

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

Para examinar con mayor detalle el efecto neto de las variables origen étnico y género en las chances de reproducción en el segmento no calificado y precarizado de las clases populares, desarrollamos una regresión logística multivariada (véase cuadro 4.4).

En la primera columna observamos los efectos brutos de las variables. En principio, todas las variables tienen efectos significativos. Las PSH mujeres tienen levemente mayores chances de tener una trayectoria de reproducción en la clase trabajadora no calificada que los varones (OR = 1.16). Los descendientes de pueblos originarios o afrodescendientes tienen el triple de chances (OR = 2.97) de tener esta trayectoria que quienes tienen origen europeo y las personas de origen mestizo casi el doble (OR = 1.8). Además, no haber completado el secundario aumenta las posibilidades de tener reproducción en la clase trabajadora no calificada (OR = 4.89), también están en desventaja quienes comienzan a trabajar antes de los 18 años (OR = 2.44) o lo hacen en trabajos informales (OR = 2.61).

En el modelo 1, controlando entre variables, no se observan diferencias entre los sexos ni para las personas de origen mestizo y se mantiene el efecto para la población de pueblos originarios o afrodescendientes. Además, es significativa (OR = 1.77) la interacción entre ser mujer y mestiza, es decir que se encuentran en desventaja con los varones de origen europeo. Además, controlando por los otros factores, siguen siendo significativos los efectos del nivel educativo y del comienzo de la trayectoria laboral temprano y con una inserción informal.

Estas pautas reflejan que el origen étnico tiene un efecto neto mayor que el género en la reproducción intergeneracional en clase trabajadora no calificada y precarizada. Es posible que mecanismos propios vinculados con la discriminación étnico-racial desempeñen un papel de cierre social excluyente para los grupos étnicos subalternizados. Dimensión que analizaremos en el apartado 7. Los resultados también sugieren que la interacción entre género y origen

**Cuadro 4.4. Modelos de regresión logística binaria con variable dependiente a la posibilidad de tener trayectoria de movilidad social intergeneracional de herencia en la clase obrera no calificada. Principal sostén del hogar. Argentina urbana, 2021.**

Variables independientes	Efectos brutos	Modelo 1
Género (Ref. Varón)		
Varón	-	-
Mujer	1,161 **	1,054
Origen étnico (Ref. Europeo, asiático o de medio oriente)		
Europeo, asiático o de medio oriente	-	-
Pueblos originarios o afrodescendientes	2,970 ***	1,807 *
Mestizo	1,836 ***	1,160
Interacciones		
Mujer y Pueblos originarios/afro		1,234
Mujer y mestiza		1,758 ***
Nivel educativo (Ref. Secundario completo)		
Secundario completo	-	-
Secundario incompleto	4,89 ***	4,177 ***
Edad al momento del primer empleo (Ref. A los 18 años o más)		
A los 18 años o más	-	-
Antes de los 18 años	2,446 ***	1,474 ***
Formalidad primer empleo (Ref. Formal)		
Formal	-	-
Informal	2,611 ***	1,810 ***
Pseudo R2		0,132
N	4.562	3526

\*\*\* p<0.01, \*\* p<0.05, \* p<0.1. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

étnico genera un tipo de desigualdad mayor y diferente, si las mujeres en general no tienen desventajas en relación con los varones de reproducirse en el segmento no calificado/precarizado de las clases populares, son las mujeres mestizas las que tienen esta desventaja. Estas mujeres trabajadoras son en términos generales migrantes internas o de países limítrofes que se insertan en ocupaciones manuales de baja calificación e informales que son desdeñadas por la

población nativa de las ciudades y experimentan discriminación étnico-racial.

#### 4.6 Desigualdad acumulativa

Con el objetivo de profundizar en el análisis de la desigualdad de oportunidades vinculada al origen de clase social y en qué medida las trayectorias de clase se bifurcan, calculamos los porcentajes de variables mediadoras entre la clase social del hogar de origen y la clase social del hogar de destino. Los estudios clásicos utilizan ecuaciones estructurales basados en la técnica de *path analysis* que permite dar cuenta de la asociación entre variables adscriptas y adquiridas en el logro de estatus (Blau y Duncan 1967; Featherman y Hauser 1977) utilizando para ello variables cuantitativas. En este estudio trabajamos con una clasificación de clases categórica, centrada en mecanismos relacionales de desigualdad. Si bien existen modelos estadísticos que permiten observar los efectos secuenciales de variables mediadoras con variables categóricas, es muy compleja la incorporación de varias variables mediadoras. Por tal razón, aquí nos planteamos un primer análisis descriptivo que puede servir de base para plantear hipótesis y probarlas a través de modelos estadísticos más complejos.

El cuadro 4.5 brinda una mirada desde una perspectiva intergeneracional a los procesos de acumulación de desigualdades. En las primeras dos columnas se observan las desigualdades en el logro educativo según el origen de clase social; menos de la mitad (41 %) de las personas con origen en la clase trabajadora no calificada alcanzaron a completar el nivel secundario y apenas una de cada diez (11 %) el nivel superior (terciario o universitario). A su vez, las dificultades para completar el nivel secundario se vinculan a un ingreso más temprano al mercado laboral, en la clase obrera no calificada el promedio es anterior a los 18 años (17.7%). Además, los trabajos con los que se insertan en el mercado laboral las personas con origen en la clase trabajadora no calificada están marcados por la precarización, dos tercios comienzan su trayectoria laboral en un trabajo informal (67 %) y más de un tercio haciendo un trabajo tipo changas (36 %). Esa transmisión intergeneracional de desigualdad de oportunidades en el logro educativo y los comienzos de la trayectoria laboral es acumulativa; los PSH con origen en la clase obrera no calificada trabajan de manera informal en mayor proporción (45 %) que el resto de los PSH y más de la mitad (56 %) se mantiene en esa misma posición de clase. Esta acumulación de desigualdades lleva a que las personas con origen en la clase trabajadora no calificada se encuentren en una situación económica mucho peor que el resto, puesto que más de un tercio de sus hogares son pobres (34 %) y la

mitad (48 %) actualmente tiene ingresos bajos (se encuentran en el 1er o 2do quintil de ingresos).

**Cuadro 4.5. Cuadro resumen con variables de desigualdad acumulativa según clase social de origen. Principal sostén del hogar. Argentina urbana, 2021 (%)**

Clase social de origen	Desigualdad acumulativa (PSH)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
I	89,8	46,7	19,7	39,8	17,6	23,4	3,3	1,68	16,2	9,6
II	77,3	33,2	19,5	45,7	16,0	33,9	3,5	1,75	24,4	11,7
IIIa+V	69,5	29,2	19,2	49,8	20,7	29,3	8,4	1,86	28,8	17,5
IVa+b+c	65,4	25,1	18,6	50,5	18,7	32,9	13,5	1,85	26,1	16,0
VI+IIIb	64,3	23,6	18,2	56,4	20,4	32,6	15,6	2,01	37,3	26,9
VIIa+b	41,1	11,4	17,7	67,3	36,2	44,9	55,7	2,13	47,8	34,1
Total	59,4	22,5	18,4	56,6	25,4	36,3	33,0	1,97	35,6	24,0

A: % secundario completo o más; B: % superior completo o más; C: edad promedio de ingreso al primer trabajo; D: % informalidad primera ocupación; E: % empleo tipo changas primera ocupación; F: % empleo actual informal; G: % de destino en la clase obrera no calificada; H: promedio de tasa de dependencia; I: ingresos bajos actuales (1ro y 2do quintil); J: % pobre (actualmente); Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

En conjunto, estas tendencias muestran cómo se acumula la desigualdad de oportunidades a partir de los orígenes de clase social. Las personas con origen en la clase obrera no calificada tienen menores oportunidades para el logro educativo, particularmente para la finalización del nivel secundario. Dicho abandono escolar se vincula a la necesidad de salir a trabajar para sostener un hogar, pero con una inserción en empleos precarios, informales e inestables. Al avanzar en sus trayectorias laborales, sus ocupaciones continúan estando marcadas por la informalidad y más de la mitad no puede ascender de clase social. Acumulación de desventajas que desemboca en situaciones de pobreza y bajos ingresos.

#### 4.7 Mecanismos de cierre: discriminación por clase social, etnicidad y género

A continuación, exploraremos la influencia de distintos tipos de discriminación como posibles mecanismos de cierre social, es decir de relaciones mediante las cuales se restringe el acceso de ciertos grupos a determinadas oportunidades de vida.

Según el cuadro 4.6, el 15.9 % del total de los encuestados dice haber sufrido por lo menos un hecho de discriminación. Por su parte, sobre el total de los encuestados, se destaca la discriminación por clase social y origen étnico. Lo cual es sumamente significativo en la medida en que, como observa Margulis (1999a), en nuestra sociedad las personas discriminadas por su situación de clase y condición étnico-racial tienden a negar haberlo sido, disimulando dichos mecanismos de cierre. Se advierte un bajo porcentaje igualmente destacable respecto a «otros motivos» (categoría que comprende sobre todo casos de discriminación por motivos físicos, entre los que se destaca el sobrepeso y la obesidad, y en, menor medida, motivos ideológicos) y uno relativamente más bajo en la discriminación por género u orientación sexual.

**Cuadro 4.6. Discriminación y motivos de discriminación según clase social, origen étnico y género. Personas de ambos sexos mayor de 18 años. Argentina urbana, 2021 (%).**

		A	B	C	D	E	F
Sexo	Varón	17,0	8,0	6,3	1,4	5,3	100
	Mujer	15,0	4,9	4,5	3,1	5,8	100
Origen Étnico	Pueblos originarios o afrodescendientes	23,5	12,0	16,4	1,0	2,1	100
	Mestizo	17,2	7,9	5,3	2,3	5,9	100
	Europeos, asiáticos o de medio oriente	13,7	4,5	3,7	2,2	5,9	100
Clase social	I+II. Clase de servicios	18,0	4,9	4,8	3,3	7,8	100
	IIIa+V+IVa+b+c. Clase intermedia	15,4	4,7	4,7	2,7	6,7	100
	VI+IIIb. Clase obrera calificada	15,9	9,0	7,3	0,9	3,4	100
	VIIa+b. Clase obrera no calificada	15,9	8,5	5,4	1,8	4,4	100
Total		15,9	6,4	5,3	2,3	5,6	100

A: dice haber sido discriminado; B: por clase social; C: por origen étnico, migratorio o color de piel; D: por identidad de género u orientación sexual; E: por otro motivo; F: total. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

Cuando analizamos por *sexo*, la probabilidad de sufrir discriminación es algo mayor en varones (17 %) que en mujeres (15 %). Diferencia que se mantiene en los varones y las mujeres discriminados por su origen étnico, migratorio o color de piel (6.3 % *vis a vis* 4.5 %) y que crece en los discriminados por su clase social (8 % *vis a vis* 4.9 %). En cambio, la probabilidad de haber sido discriminada por identidad de género u orientación sexual es mayor en mujeres (3.1 %) que en varones (1.4 %).

Si tenemos en cuenta el *origen étnico*, la discriminación es mayor en los grupos étnicos subalternos: descendientes de pueblos originarios o afrodescendientes (24 %) y mestizos (17 %), en comparación con los descendientes de europeos, de medio oriente o asiáticos (14 %). Respecto a los motivos de la discriminación, esta diferencia crece en quienes dicen haber sido discriminados por su origen étnico, migratorio o color de piel (16 %, 5 % y 4 %, respectivamente) y se mantiene en quienes dicen haber sido discriminados por su clase social (12 %, 8 % y 5 %). Disminuyendo y haciéndose menos significativa la diferencia entre quienes dicen haber sido discriminados por su identidad de género u orientación sexual.

Por último, los encuestados de la clase obrera calificada (9 %) y los de la no calificada (8.5 %) dicen haber sido discriminados por su clase social en mayor proporción que la clase de servicios (4.9 %) y la clase intermedia (4.7 %). En el mismo sentido, aunque disminuyendo levemente la diferencia, dicen haber sido discriminados por su origen étnico los encuestados de la clase obrera calificada (7.3 %) y no calificada (5.4 %) que los de la clase de servicios (4.8 %) y de la clase intermedia (4.7 %). Relación que se invierte en el caso de los discriminados «otros motivos» y por identidad de género u orientación sexual, la cual además disminuye considerablemente.

Estos resultados marcan que entre los varones, los descendientes de pueblos originarios y la clase obrera hay una mayor atribución al motivo de discriminación por clase social y origen étnico, migratorio o color de piel; mientras que en las encuestadas mujeres, en los de descendencia europea, asiática o de medio oriente y en la clase de servicios hay mayores probabilidades de sentirse discriminado por la identidad de género u orientación sexual y otros motivos vinculados a cualidades físicas o posiciones ideológicas.

#### 4.8 Caminos de movilidad social ascendente

Hemos visto que quienes nacen en hogares de clase trabajadora no calificada experimentan desventajas acumulativas a lo largo de su vida, veamos ahora su contracara: ¿qué canales favorecen la movilidad social ascendente desde el segmento no calificado de la clase obrera y de tal modo sirven para desatar los nudos de reproducción intergeneracional de la pobreza? El cuadro 4.7 muestra el porcentaje de variables nivel educativo y tipo de formación según el tipo de trayectoria intergeneracional de clase del principal sostén del hogar con origen en la clase obrera no calificada y precarizada.

Los resultados ponen de manifiesto la relevancia de la educación como canal de ascenso social desde las capas más precarizadas de la clase trabajadora. Específicamente se destacan dos vías de movilidad

**Cuadro 4.7. Estudios secundarios y de nivel superior para personas con origen en la clase obrera no calificada con distintas trayectorias de movilidad social intergeneracional. Principal sostén del hogar. Argentina urbana, 2021 (%).**

Tipo de Trayectoria	Secundario completo (%)	Se graduó de esc. técnica o industrial (% sobre graduados)	Oficio en los últimos 5 años (%)	Tipo de cursos que predominan	Superior completo (%)	Títulos que predominan
Reproducción clase obrera no calificada	25,7	12,4	4,9		1,3	
Ascenso a clase obrera calificada	41,5	22,7	4,2	Peluquería, gastronomía, salud, oficios (corte y confección, reparación, soldador, plomería)	3,8	
Ascenso a clase media o de servicios	61,6	25,0	7,3		27,9	Profesorados y tecnicaturas de salud

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

ascendente: la graduación en escuelas secundarias de formación técnica o industrial (Jacinto 2016; Lemos 2020) y el logro de credenciales de nivel terciario como profesorados y tecnicaturas de salud entre las carreras típicas. No se trata de una apelación genérica al «capital humano», sino del acceso a títulos y oficios factibles que logran valorizarse y habilitar trayectorias de ascenso de clase social. En este sentido, la expansión de la educación secundaria y de nivel superior y la mejora sustantiva en la calidad de la formación pueden estimular la movilidad social ascendente a través de incentivar procesos de innovación y mejorar las habilidades de la fuerza de trabajo. Ahora bien, la apertura de este canal de ascenso social requiere en paralelo de la «expansión estructural» de ocupaciones técnicas y operativas vinculadas a la clase obrera calificada.

## 4.9 Conclusiones

A lo largo del capítulo hemos planteado la importancia de reposicionar al análisis de la pobreza desde una perspectiva relacional de la desigualdad centrada en el concepto de clases sociales. Esto implicó identificar, tanto los principales mecanismos que producen la pobreza y la desigualdad entre las clases sociales, como las vías actuales de ascenso social. Reconstruiremos ahora las principales pautas halladas buscando reflexionar las implicaciones que estas tienen para el desarrollo de políticas públicas y sociales.

Se observa que, actualmente la pobreza en Argentina incluye a un tercio de los hogares (un porcentaje alto en perspectiva histórica) y

que no se trata solo de un fenómeno vinculado a la marginalidad de regiones periféricas y de enclaves urbanos, como en la década de 1960, sino que afecta a amplias capas de la clase trabajadora y un sector de las clases medias, principalmente la pequeña burguesía con escaso capital. En relación con las clases privilegiadas, en estas posiciones de clase impera la sobreexplotación ligada a la precarización laboral, la baja productividad del pequeño capital y bajos salarios relativos.

Desde esta perspectiva, la disminución de la pobreza implica la implementación de políticas públicas de redistribución de recursos que necesariamente confronta con los intereses de las clases privilegiadas. El volumen de las capas pobres en la estructura social depende del tipo de desarrollo económico-social, en cuya direccionalidad influye la capacidad de organización y movilización de las clases subalternas.

A partir del análisis multivariado interseccional se observa un mayor peso de la clase social con respecto del origen étnico y del género en la propensión de pertenecer a hogares en situación de pobreza. La clase social es el principal clivaje de desigualdad y tiene un efecto *pervasivo* sobre otras variables convirtiéndolas en factores mediadores (cómo formalidad/informalidad) que también tiene efectos sobre la pobreza.

Sin embargo, los grupos subalternizados (mujeres, descendientes de pueblos originarios y mestizos) tienen una asociación neta significativa con la pobreza (controlando por clase social). Asimismo, la interacción entre género y origen étnico mostró mayores desventajas de las mujeres mestizas y de pueblos originarios. Estas pautas sugieren que en ciertos grupos la intersección de clivajes genera mecanismos específicos de desigualdad.

La región de residencia también es un factor relevante: la población que reside en las regiones de menor desarrollo relativo o mayor heterogeneidad (AMBA – en particular el GBA – Cuyo, NOA y principalmente NEA) tiene mayores chances de estar en la pobreza. Al incluir la variable región de residencia, disminuye el efecto del origen étnico porque hay una asociación entre la población que reside en dichas regiones y la mayor presencia de grupos étnicos subalternos. Esta pauta sugiere que uno de los ejes centrales del problema actual de la pobreza sigue siendo el desarrollo desequilibrado de nuestra economía.

El análisis de movilidad y reproducción intergeneracional de clase mostró que las «rigideces» en la clase trabajadora no calificada no son mayores que en otras clases y que hay cierta probabilidad de ascenso a la clase trabajadora calificada, lo cual pone en cuestión la idea de que la estructura de clases está «cristalizada» en su base.

Al examinar la permanencia intergeneracional en la clase trabajadora no calificada, se observó que los grupos subalternizados

tienen mayores probabilidades de reproducción en esta posición de clase (que tiene mayor propensión hacia una situación de pobreza). El origen étnico muestra un efecto neto mayor que el género en la reproducción intergeneracional en clase trabajadora no calificada y precarizada pero el resultado de la interacción entre origen étnico y género es sugerente: en relación con los varones, las mujeres en general no tienen mayores chances de mantenerse en el segmento no calificado/precarizado de las clases populares, pero las mujeres mestizas sí tienen desventajas. Lo cual nos induce a profundizar en el análisis teórico de la interseccionalidad de la desigualdad.

El análisis sobre discriminación, mostró cierta relación entre la clase trabajadora y los grupos étnicos subalternos, con la percepción de haberse sentido discriminados o vulnerados en sus derechos por su origen étnico y su clase social, lo cual brinda indicios de que la discriminación pone barreras a los procesos de integración y ascenso social. Estos resultados sugieren que además de avanzar hacia políticas de igualación de condiciones entre las clases y fracciones de clase, es necesario seguir cuestionando el imaginario sociocultural eurocéntrico e implementar políticas públicas que tiendan a eliminar la racialización de las relaciones de clase.

El análisis de variables mediadoras entre el origen y destino de clase social mostró una marcada desigualdad acumulativa que, para la clase trabajadora no calificada, implica en mayor medida un cúmulo de desventajas que tienden a arrastrarse intergeneracionalmente: mayores tasas de abandono escolar, salida más temprana a trabajar para sostener el hogar, una inserción en empleos precarios, informales e inestables y las ocupaciones en la adultez continúan estando marcadas por la informalidad, incrementando la propensión hacia una situación de pobreza.

¿Cómo romper entonces el círculo de reproducción intergeneracional de la desigualdad de clase que lleva a algunos grupos a permanecer en una situación de pobreza estructural? En el último apartado hallamos que los caminos de movilidad social ascendente desde la clase trabajadora no calificada están marcados por el desarrollo de oficios (formación profesional) y la titulación técnica (estudios terciarios), los cuales actúan como «puentes» de acceso hacia ocupaciones obreras calificadas y técnicas en el sector formal. Puentes que, entendemos, deben ser fomentados mediante políticas públicas dirigidas a expandir instituciones educativas de formación profesional y superior junto a la expansión estructural de ocupaciones calificadas-formales vinculadas a la «clase trabajadora consolidada».

## Anexo

**Cuadro 4.8. Clase social y variables dependientes seleccionadas. Principal sostén del hogar, Argentina urbana (2021).**

Clase social	A	B	C	D
I. Clase de servicios alta	75531	55750	86,1	92,8
II. Clase de servicios baja	50908	40000	85,5	85,6
IIIa+V. Clase de empleados de cuello blanco	41020	33333	68,8	88,1
IVa+b+c. Peq. empleadores y trabajadores autónomos con capital	36693	26250	59,2	59,8
VI+IIIb. Clase obrera calificada	35457	25000	56,2	67,0
VIIa+b. Clase obrera no calificada	24765	20000	38,7	49,5
Total	39146	30000	60,1	68,8

A: promedio de ingresos *per cápita* del hogar; B: mediana de ingresos *per cápita* del hogar; C: % de secundario completo o más; D: % de trabajo formal. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAYPP/PISAC-COVID-19 (2021).

**Cuadro 4.9. Porcentaje de hogares en situación de pobreza según variables independientes utilizadas. Principal sostén del hogar, Argentina urbana (2021). Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAYPP/PISAC-COVID-19 (2021).**

	n	%	Pobreza (%)
Clase origen			
I. Clase de servicios alta	325	9,0	9,5
II. Clase de servicios baja	273	7,5	11,7
IIIa+V. Clase de empleados de cuello blanco	323	8,9	17,4
IVa+b+c. Pequeños empleadores y trabajadores autónomos con capital	705	19,5	16,0
VI+IIIb. Clase obrera calificada	621	17,1	26,9
VIIa+b. Clase obrera no calificada	1378	38,0	34,1
Clase actual PSH			
I. Clase de servicios alta	325	9,0	4,5
II. Clase de servicios baja	273	7,5	11,2
IIIa+V. Clase de empleados de cuello blanco	323	8,9	17,8
IVa+b+c. Pequeños empleadores y trabajadores autónomos con capital	705	19,5	24,5

*Continúa en la página siguiente*

*Viene de la página anterior*

	n	%	Pobreza (%)
VI+IIIb. Clase obrera calificada	621	17,1	21,3
VIIa+b. Clase obrera no calificada	1378	38,0	39,1
<b>Sexo</b>			
Varón	2051	53,9	19,8
Mujer	1753	46	28,9
<b>Origen étnico</b>			
Pueblos originarios y/o afrodescendientes	312	8,3	36,5
Mestizo	1319	35,04	25,5
Europeo, asiático y/o de medio oriente	2132	56,66	20,8
<b>Formalidad</b>			
Informal	1516	30,8	45,9
Formal	3408	69,2	20,3
<b>Región</b>			
Centro	1009	19,3	24,1
Cuyo	418	8,0	33,2
AMBA	1741	33,2	32,8
NEA	367	7,0	37,8
NOA	566	10,8	33,5
Pampeana	819	15,6	21,4
Patagónica	320	6,1	24,2

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

## Referencias

ARAKAKI, AGUSTÍN

2011 *La pobreza en Argentina 1974-2006: Construcción y análisis de la información*, CEPED, referencia citada en páginas 96, 101.

BLAU, PETER Y OTIS DUNCAN

1967 *The American occupational structure*, Wiley, referencia citada en páginas 98, 113.

BONIOLO, PAULA

2020 «El efecto de la residencia en la movilidad social intergeneracional», en *El análisis de clases sociales: Pensando la movilidad social*,

*la residencia, los lazos sociales, la identidad y la agencia*, Buenos Aires: UBA y CLACSO, referencia citada en página 99.

CARRASCOSA, JOAQUÍN

- 2020 «Redes de relaciones sociales en el Área Metropolitana de Buenos Aires: Lazos familiares y amistades», en *Redes. Revista hispana para el análisis de redes sociales*, vol. 31, n.º 2, DOI: [10.5565/rev/redes.884](https://doi.org/10.5565/rev/redes.884), referencia citada en página 99.

CARRASCOSA, JOAQUÍN y BÁRBARA ESTÉVES-LESTON

- 2020 «Mecanismos de acceso al empleo al comienzo de la trayectoria laboral: Desigualdades de clase, territoriales y educativas», en *El análisis de clases sociales: Pensando la movilidad social, la residencia, los lazos sociales, la identidad y la agencia*, Buenos Aires: UBA y CLACSO, págs. 219-248, referencia citada en página 99.

CHÁVEZ MOLINA, EDUARDO y JOSÉ RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

- 2021 «Clases sociales y desigualdad en la Argentina contemporánea (2011-2019)», en *Realidad económica*, vol. 51, n.º 339, págs. 9-36, referencia citada en páginas 96, 108.
- 2022 «Pobreza según clases socio-ocupacionales en base a la heterogeneidad estructural», en *Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia*, vol. 1: *Efectos de la doble crisis y recomposición social en disputa*, comp. por Pablo Dalle, Buenos Aires: UBA, referencia citada en páginas 104, 105.

COX, OLIVER

- 1948 *Caste, class and race: A study in social dynamics*, Londres: Doubleday, referencia citada en página 101.

CRENSHAW, KIMBERLÉ

- 1988 «Race, reform, and retrenchment: Transformation and legitimation in antidiscrimination law», en *Harvard Law Review*, vol. 101, n.º 7, referencia citada en página 97.

DALLE, PABLO

- 2014 «Aproximación al origen étnico y movilidad social intergeneracional en Argentina», en *Boletín Científico Sapiens Research*, vol. 4, n.º 1, págs. 32-39, referencia citada en página 97.
- 2016 *Movilidad social desde las clases populares*, Buenos Aires: IIGG y CLACSO, referencia citada en página 99.
- 2020 «Movilidad social a través de tres generaciones: Huellas de distintas corrientes migratorias», en *El análisis de clases sociales pensando la movilidad social, la residencia, los lazos sociales, la identidad y la agencia*, Buenos Aires: IIGG y CLACSO, págs. 91-134, referencia citada en página 99.

DALLE, PABLO; JOAQUÍN CARRASCOSA y LAUTARO LAZARTE

- 2017 «Análisis de clase de la pobreza en la Argentina. Un enfoque centrado en la transmisión intergeneracional de oportunidades desiguales», en *Revista Sociedad*, n.º 37, recuperado de <<https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/revistasociedad/article/view/2979>>, referencia citada en páginas 96, 102.

DI PRETE, THOMAS y GREGORY EIRICH

- 2006 «Cumulative Advantage as a Mechanism for Inequality: A Review of Theoretical and Empirical Developments», en *Annual Review of Sociology*, vol. 32, n.º 1, págs. 271-297, DOI: [10.1146/annurev.soc.32.061604.123127](https://doi.org/10.1146/annurev.soc.32.061604.123127), referencia citada en página 99.

ERIKSON, ROBERT; JOHN GOLDTHORPE y LUCIENNE PORTOCARRERO

- 1979 «Intergenerational class mobility in three Western European societies: England, France and Sweden», en *British Journal of Sociology*, vol. 30, n.º 4, págs. 415-441, recuperado de <<https://doi.org/10.2307/589632>>, referencia citada en página 103.

FEATHERMAN, DAVID y ROBERT MASON HAUSER

- 1977 *The process of stratification: Trends and analyses*, Cambridge: Academic Press, referencia citada en página 113.

GERMANI, GINO

- 1962 *La inmigración masiva y su papel en la modernización del país*, Buenos Aires: Paidós, referencia citada en página 99.
- 1973 *El concepto de marginalidad. Significado, raíces históricas y cuestiones teóricas, con particular referencia a la marginalidad urbana*, Buenos Aires: Nueva Visión, referencia citada en página 100.
- 1976 *Urbanización, desarrollo y modernización: Un enfoque histórico y comparativo*, Buenos Aires: Paidós, referencia citada en página 100.
- 1980 *El concepto de marginalidad*, Buenos Aires: Nueva Visión, referencia citada en página 100.

GOLDTHORPE, JOHN

- 2012 «De vuelta a la clase y el estatus: por qué debe reivindicarse una perspectiva sociológica de la desigualdad social», en *Fuente*, n.º 137, referencia citada en página 96.

GOLOVANEVSKY, LAURA

- 2007 «Vulnerabilidad Social: Una Propuesta para su Medición en Argentina», en *Revista de Economía y Estadística*, vol. 45, n.º 2, págs. 53-94, recuperado de <<https://doi.org/10.55444/2451.7321.2007.v45.n2.3840>>, referencia citada en página 96.

GÓMEZ ROJAS, GABRIELA

- 2018 «Las mujeres y el análisis de clases en la Argentina: Una aproximación a su abordaje», en *Laboratorio*, n.º 28, referencia citada en página 98.

## GRACIARENA, JORGE

- 1972 *Poder y clases sociales en el desarrollo de América Latina*, Buenos Aires: Paidós, referencia citada en página 100.

## HALL, STUART

- 2017 *Estudios Culturales 1983. Una historia teórica*, Buenos Aires: Paidós, referencia citada en página 98.

## INDEC

- 2021 «Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos. Segundo semestre de 2020», en *Informes Técnicos*, vol. 5, n.º 4, recuperado de <[https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph\\_pobreza\\_03\\_22F5E124A94B.pdf](https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_03_22F5E124A94B.pdf)>, referencia citada en páginas 96, 102.
- 2022 «Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos. Segundo semestre de 2021», en *Informes Técnicos*, vol. 6, n.º 4, recuperado de <[https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph\\_pobreza\\_03\\_22F5E124A94B.pdf](https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_03_22F5E124A94B.pdf)>, referencia citada en página 102.

## JACINTO, CLAUDIA

- 2016 «Educación y trabajo en tiempos de transiciones inciertas», en *Páginas de Educación*, n.º 9, recuperado de <<https://doi.org/10.22235/pe.v9i2.1299>>, referencia citada en página 117.

## JORRAT, JORGE

- 2016 *De tal padre, ¿tal hijo?: Estudios sobre movilidad social y educativa en Argentina*, Buenos Aires: Dunken, referencia citada en página 99.

## JORRAT, JORGE; PABLO DALLE Y MANUEL RIVEIRO

- 2021 «Intergenerational Class Mobility in Urban Argentina over Birth Cohorts and Educational Levels. Power, violence, and justice: Reflections, responses and responsibilities», en *XIX ISA World Congress of Sociology*, Porto Alegre, referencia citada en página 99.

## KLEIDERMACHER, GISELE Y GONZALO SEID

- 2021 «Etnia/raza y clase: Articulaciones en la antropología y la sociología argentinas», en *Temas Sociales*, n.º 48, págs. 154-181, referencia citada en página 98.

## LEMONS, SEBASTIÁN

- 2020 «¿La educación técnica sirve? Una mirada a las trayectorias educativas de ex-estudiantes de educación técnico profesional en Argentina desde una perspectiva de clases sociales (2009-2017)», en *Espacio Abierto*, vol. 29, n.º 4, págs. 268-293, referencia citada en página 117.

LINDENBOIM, JAVIER; DAMIÁN KENNEDY y JUAN GRAÑA

- 2010 «La relevancia del debate sobre la distribución funcional del ingreso», en *Desarrollo Económico*, n.º 49, págs. 541-571, recuperado de <<https://doi.org/10.2307/25790409>>, referencia citada en página 96.

MARGULIS, MARIO

- 1999a «Cultura y discriminación social en la época de la globalización», en *La segregación negada. Cultura y discriminación social*, Buenos Aires: Biblos, págs. 135-151, referencia citada en página 115.
- 1999b «La “racialización” de las relaciones de clase», en *La segregación negada. Cultura y discriminación social*, Buenos Aires: Biblos, págs. 37-62, referencia citada en página 101.

NUN, JOSÉ

- 2003 *Marginalidad y exclusión social*, Buenos Aires: FCE, referencia citada en página 100.

PARKIN, FRANK

- 1978 *Orden político y desigualdades de clase: Estratificación social de las sociedades capitalista y comunista*, Madrid: Editorial Debate, referencia citada en página 97.
- 1984 *Marxismo y teoría de clases: Una crítica burguesa*, Madrid: Espasa-Calpe, referencia citada en página 97.

PLA, JÉSICA LORENA; SANTIAGO POY PIÑEIRO y AGUSTÍN SALVIA

- 2022 «Structural informality and occupational classes in a peripheral country: precariousness and in-work poverty in argentina 2003-2020», en *Revista de Economía Mundial*, n.º 60, referencia citada en páginas 96, 108.

POY, SANTIAGO

- 2021 «Trabajadores/as pobres ante la irrupción de la pandemia de COVID-19 en un mercado laboral segmentado», en *Estudios del Trabajo. Revista de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo*, n.º 62, recuperado de <<https://ojs.aset.org.ar/revista/article/view/105>>, referencia citada en página 96.

QUIJANO, ANÍBAL

- 2014 «“Polo marginal” y “mano de obra marginal”», en *Cuestiones y horizontes: De la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder*, Buenos Aires: CLACSO, págs. 125-169, referencia citada en página 100.
- 2017 «Raza, etnia y nación en Mariátegui: Cuestiones abiertas», en *Textos fundamentales*, Buenos Aires: Ediciones del Signo, referencia citada en páginas 101, 103.

SAUTU, RUTH y JOAQUÍN CARRASCOSA

- 2020 «Trayectorias ocupacionales al inicio de la vida laboral», en *Laboratorio*, n.º 30, págs. 186-208, referencia citada en página 99.

SOLÍS, PATRICIO Y MARCELO BOADO

- 2016 (coords.), *Y sin embargo se mueve... : estratificación social y movilidad intergeneracional de clase en América Latina*, recuperado de <<http://libros.colmex.mx/index.php/novedades-editoriales/item/y-sin-embargo-de-mueve>>, referencia citada en página 103.

SVAMPA, MARISTELLA

- 2005 *La sociedad excluyente: La Argentina bajo el signo del neoliberalismo*, Buenos Aires: Taurus, referencia citada en página 101.

TORRADO, SUSANA

- 1995 «Vivir apurado para morir se joven: Reflexiones sobre la transferencia intergeneracional de la pobreza», en *Revista Sociedad*, n.º 7, págs. 31-56, referencia citada en página 96.

VIVEROS VIGOYA, MARA

- 2016 «La interseccionalidad: Una aproximación situada a la dominación», en *Debate Feminista*, n.º 52, págs. 1-17, referencia citada en página 97.

WRIGHT, ERIK OLIN

- 1997 *Class counts: Comparative studies in class analysis*, Cambridge University Press, referencia citada en páginas 97, 98.
- 2005 *Foundations of a neo-Marxist class analysis*, Cambridge: Cambridge University Press, referencia citada en página 96.
- 2010 «Comprender la clase. Hacia un planteamiento analítico integrado», en *New Left Review*, n.º 60, págs. 98-112, referencia citada en página 97.

## CAPÍTULO 5

# Estrategias económicas familiares durante la pandemia. Clases sociales, ingresos monetarios, finanzas y consumos

ALICIA GUTIÉRREZ,<sup>\*</sup> HÉCTOR MANSILLA<sup>\*\*</sup> y GONZALO ASSUSA<sup>\*\*\*</sup>

### 5.1 Introducción

La pandemia COVID-19 disparó – y aceleró – en muchos sentidos, una crisis de magnitudes totales y globales (Benza y Kessler 2021). Totales, porque la pandemia trastocó la dinámica cotidiana de todas y cada una de las escenas de la vida social. Globales, no solo por su alcance planetario, sino también porque involucró a la población en su totalidad, en cada una de las posiciones de la estructura social. Sin embargo, el modo en el que los hogares y sus integrantes fueron afectados por la crisis está muy lejos de ser homogéneo. La transversalidad de los procesos sociales vividos durante 2020 y 2021 marchó por las vías de un espacio social profundamente jerarquizado y fragmentado y condujo a acelerar la desigualdad de acceso a recursos y derechos sociales, impactando fundamentalmente sobre las posiciones más críticas de la estructura social Argentina.

Como sostiene Wilkis (2021), si el mercado de trabajo es el principal generador de movilidad social (de todo tipo), los mercados de consumo y crédito son cruciales para la apropiación simbólica de los (nuevos) lugares en la estructura social.

En el presente capítulo abordamos la desigualdad, persistencia y transformación de las estrategias económicas, financieras, de provisión y consumo en el espacio de las clases sociales de la pospandemia

---

\* Investigadora IDH, CONICET, Universidad Nacional de Córdoba.

\*\* Docente Investigador, FCC, FCS - Universidad Nacional de Córdoba.

\*\*\* Investigador IDH, CONICET, Universidad Nacional de Córdoba.

argentina ¿la pandemia afectó la articulación de las estrategias económicas en los hogares? ¿De qué manera? ¿Cómo impactó la crisis sobre cada posición de clase? Para hacerlo, asumimos una perspectiva teórica que habilita nuestra caracterización del contexto pandémico como un escenario de crisis total: la teoría de la práctica de Pierre Bourdieu y sus herramientas para la reconstrucción y análisis del espacio social, las clases sociales y sus prácticas. Esta perspectiva teórico-metodológica pone el acento en la multidimensionalidad de lo social, en su abordaje relacional y en los efectos estructurales como núcleo de indagación. En el mismo sentido, emprendemos este análisis a partir de un procesamiento estadístico<sup>[1]</sup> con técnicas afines a la filosofía social de la teoría de la práctica: análisis de correspondencias múltiples (ACM) combinado con clasificación jerárquica ascendente (CJA) (Baranger 2004; Bourdieu 1988; Gutiérrez *et al.* 2021).

Las implicancias de esta apuesta teórico-metodológica no son menores. Reconstruir los efectos de una crisis de magnitudes globales requiere de herramientas analíticas que, justamente, permitan hacer foco en la *homología* entre escenas sociales (es decir, entre el espacio de las clases sociales y el espacio de las prácticas financieras, de provisión y consumo), en los repertorios de prácticas fenomenológicamente diversas de las familias de cada clase (lo que aquí llamamos estrategias de reproducción social) y en la estructura y volumen de capitales con los que los hogares cuentan para transitar este período de crisis y gestionar su reproducción social. Al mismo tiempo, esta reconstrucción permite poner en tensión la idea de «crisis global»: como mostraremos en las próximas páginas, se trata de una crisis que impactó de forma profundamente diferencial y selectiva, distribuida a través de circuitos encastrados en una estructura social desigual y persistente.

Así, el capítulo comienza delineando las principales coordenadas teórico-metodológicas para la construcción del espacio de las clases

---

[1] Los datos para este procesamiento provienen de la Encuesta nacional sobre la Estructura social de Argentina y Políticas públicas durante la pandemia por COVID-19 (ESAyPP/PISAC-COVID-19) relevada en la Argentina urbana entre octubre y diciembre de 2021. El universo de estudio de la ESAyPP/PISAC-COVID-19 es doble: los hogares y la población adulta residente en localidades de Argentina mayores a 50 mil habitantes. El diseño muestral probabilístico, estratificado y por conglomerados permite tres dominios de estimación: a nivel nacional, por regiones y por tamaño de los aglomerados. El tamaño de la muestra relevada es de 5239 hogares y personas adultas, combinando amplia escala y cobertura. Para profundizar en el diseño teórico-metodológico de la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 elaborado por los equipos de investigación de los proyectos PISAC-COVID-19 085 y 021, véase Dalle y Di Virgilio (2022).

sociales desde una perspectiva multidimensional y relacional, a partir de los aportes de la sociología de Pierre Bourdieu. A continuación, analizamos los principales factores que configuran el espacio de relaciones de la estructura social argentina y caracterizamos cada una de sus posiciones de clase. Luego, mostramos las diferencias en cuanto a estrategias económicas, financieras, de provisión de recursos y bienes y de consumo de las familias de cada posición de clase y sus transformaciones en el contexto de la pandemia COVID-19. Finalmente, planteamos algunas conclusiones y núcleos problemáticos para la política pública en materia de consumos, provisión y desigualdad en nuestro país.

## 5.2 Perspectiva teórico-metodológica

### 5.2.1 Herramientas conceptuales

El «espacio social» en el sentido de Bourdieu (1991) es resultado de un abordaje estructural y constructivista del sistema de relaciones entre las clases sociales. Es una construcción teórica («en el papel»), una herramienta analítica que toma en cuenta el efecto estructural y simultáneo de un conjunto de variables relativas a recursos económicos y culturales, y a condiciones laborales, de sexo y edad. La construcción del espacio social apela a métodos específicos para caracterizar las diferentes posiciones de las unidades de análisis (hogares o familias, en nuestro caso), sus relaciones, e identificar (recortar) en él distintas clases sociales.

Con Bourdieu, entendemos que la trama social se presenta en forma de un espacio – una *topología* social – de varias dimensiones. Así, la realidad social es comprendida como un conjunto de relaciones no necesariamente visibles, un espacio de posiciones definidas unas en relación a otras.

La perspectiva ontológica bourdieusiana hace desaparecer el problema de la existencia de las clases sociales, concentrándose en la existencia real del *espacio de relaciones* – y conservando, en este sentido, la noción marxiana de relaciones objetivas, independientes de las conciencias y voluntades individuales – pero sin renunciar a la idea de *clase* en tanto resultante de procesos de diferenciación social de los agentes que ocupan distintas posiciones en aquel espacio. De este modo, no se trata de dar cuenta de clases sociales predefinidas según criterios relativamente unidimensionales (como la situación ocupacional), sino de reconstruir la estructura del espacio social para identificar en él a conjuntos de agentes que ocupan posiciones semejantes – condiciones de existencia homogéneas –.

En base a una trayectoria de investigaciones, no solo del propio Bourdieu (1988), sino también de importantes apuestas de trabajo

empírico en la línea de reconstruir el espacio de las clases sociales (Atkinson 2017; Gutiérrez *et al.* 2021; Savage *et al.* 2013; Savage 2015) y a nuestra propia experiencia en este tipo de estudios (Gutiérrez y Mansilla 2015), proponemos un acceso analítico a estas condiciones homogéneas de existencia de las clases sociales a partir del volumen y estructura del capital de las familias, distinguiendo cuadros de disponibilidad de recursos diferenciados (Gutiérrez 2004) y caracterizando sistemas de estrategias diferentes, que rescatan la desigualdad y heterogeneidad de las distintas posiciones sociales, buscando sus principales elementos explicativos en la estructura que conforman y en las trayectorias del espacio y de las familias (entendidas operativamente como hogares). Por ello, y a diferencia del tipo de trabajo analítico que busca aislar el efecto de las «variables independientes», aquí cada una de las características o propiedades son consideradas dentro del sistema completo de relaciones en el interior del cual actúan, a fin de dar cuenta de la *eficacia estructural* de ese sistema de relaciones (Baranger 2004).

Si bien la apuesta teórica de Bourdieu implica un intento de superación, tanto de los problemas del objetivismo, como de los del sustancialismo y el economismo (Bourdieu 1990), esto no implica bajo ningún punto de vista bajarle el precio a la dimensión ni a las prácticas económicas, propiamente dichas. Antes bien, se trata de analizarlas bajo la mirada de la *economía de las prácticas* (Bourdieu 1991, 2012), escudriñadas en el condicionamiento que les impone cada posición en el espacio social, pero también por su arreglo, homología y reemplazo funcional con otro tipo de prácticas (de cuidado, de inversión cultural, de inserción laboral, etcétera). Desde esta perspectiva, las tendencias en las estrategias de consumo de los hogares solo resultan comprensibles en un sistema de estrategias más amplio, que incluye sus estrategias de inserción laboral, sus estrategias de provisión, su acceso a servicios bancarios y financieros, su estabilidad de ingresos económicos corrientes, el peso de su economía de cuidados familiar, entre otras dimensiones. Este conjunto de prácticas, por ello, necesariamente debe observarse anclado en un espacio de clases sociales que se constituye, también, de manera relacional y multidimensional.

Siguiendo esta pista conceptual, volvemos sobre la categoría de *estrategias de reproducción social* para referirnos a las formas singulares – insertas a la vez en las posibilidades que otorga un determinado desarrollo de los *instrumentos* de reproducción (las leyes de sucesión, el sistema escolar, el mercado de trabajo, el mercado de políticas sociales, etcétera) y en las posibilidades desiguales inscriptas en cada posición de clase de la estructura social – en que los sistemas coordinados de estrategias (laborales, financieras, de ahorro, de consumo) son configurados por el capital *dominante* a reproducir; es decir, por

la estructura patrimonial de las familias y su trayectoria (Bourdieu 2011; Mauger 2013).

Por ello, la noción de estrategias de reproducción social (Bourdieu 2011) nos permite conectar diferentes dimensiones en orden a proponer hipótesis interpretativas sobre las diversas articulaciones familiares entre prácticas laborales, financieras, de ahorro y de consumo, y sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en dicha articulación.

### 5.2.2 Técnicas y fuente: su adecuación a la perspectiva teórico-metodológica

Para el procesamiento y análisis de nuestra principal fuente de datos nos valemos de dos softwares específicos: el SPSS y el SPAD. En consecuencia, recurrimos a la información relevada tanto de los hogares como la de sus componentes, entre ellos el principal sostén del hogar (PSH) y el respondente de cada caso.

Teniendo en cuenta que el hogar funciona como unidad de análisis y agente colectivo de las estrategias de reproducción social, consideramos necesario distinguir las características del hogar que fueron seleccionadas como indicadores de recursos colectivos familiares, de aquellas características individuales que, como tales, refieren a cada uno de sus miembros pero que también conforman los recursos del grupo familiar en la medida en que pertenecen al PSH.

Por otra parte, nuestro análisis implica la elección de variables pertinentes y sus indicadores, sin olvidar que estos adquieren su propio valor en la estructura que conforman.

En consecuencia, componer la estructura del espacio social consiste, en un primer momento, en poner en juego simultáneamente, a través del ACM, un conjunto de variables activas e identificar sus múltiples relaciones.<sup>[2]</sup> Para este caso tomamos el ingreso *per cápita* familiar por ser un indicador de capital económico, el nivel educativo del PSH en tanto indicador del capital cultural institucionalizado o capital escolar, la jerarquía y la calificación laboral del PSH como indicadores de autoridad y poder en las relaciones de producción, y además por su efecto de rendimiento de capital cultural en el ámbito

---

[2] Se consideran variables «activas» a las características cuyas modalidades participan efectivamente en la conformación de los factores que, a modo de dimensiones, estructuran el espacio social. Mientras que el resto de las variables, llamadas ilustrativas o suplementarias, no participan directamente de aquella conformación, aunque sí manifiestan su desigual distribución sobre el espacio construido; lo que permite una mejor caracterización de sus regiones y las clases recortadas en él.

laboral y, por último, el sexo y la edad del PSH como condicionantes del tipo de estrategias que se despliegan desde los hogares.

En un segundo momento, a través de la aplicación de métodos de clasificación (CJA), es posible distinguir diferentes clases sociales, sobre la base de las clases estadísticas diferenciadas por estos métodos, e identificar las relaciones que existen entre posiciones próximas y las propiedades que las caracterizan.

La técnica del ACM, desarrollada por la escuela francesa de *Analyse des données*, permite efectivamente observar la desigualdad en términos de los *efectos estructurales* del sistema de relaciones entre las variables y sus respectivas modalidades. El ACM, además, no es un método de carácter demostrativo, explicativo o predictivo que sirva para «determinar causalidad» (en un sentido lineal), sino que, dentro del conjunto de métodos multivariados que analizan relaciones de interdependencia, forma parte de los análisis factoriales que permiten clasificar unidades de análisis y variables (Baranger 2004; Mansilla 2011). Se concibe como un «instrumento para pensar», una herramienta que, ordenando y clasificando datos, sirve para crear tipologías (López-Roldán 1996), plantear hipótesis y construir interpretaciones, que solo podrán avanzar por medio de la complementariedad con otros métodos y técnicas (Baranger 2004; Gutiérrez y Mansilla 2015). En este caso, su combinación con la CJA nos permite la construcción y visualización de clases sociales en tanto conjuntos de posiciones próximas, asociadas a propiedades semejantes.

### 5.3 El espacio social en Argentina

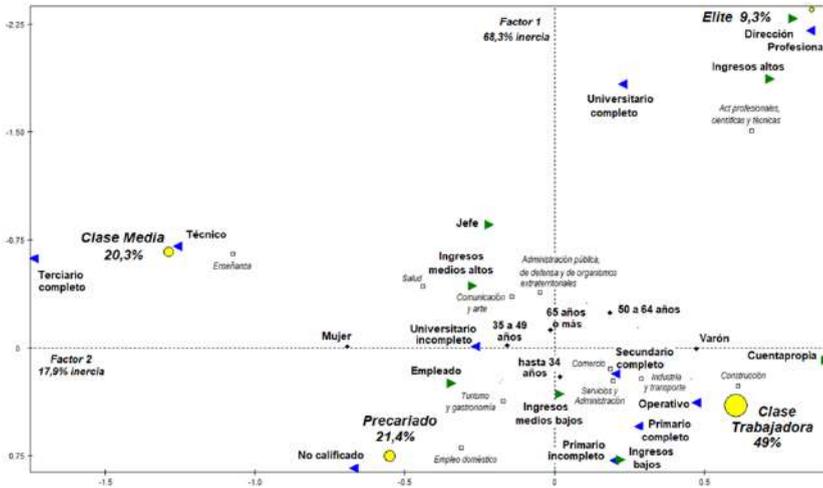
En una primera aproximación, construimos el espacio social para Argentina con un corte óptimo de 4 clases con homogeneidad interna y sentido sociológico para su interpretación.<sup>[3]</sup>

Las figuras 5.1 y 5.2 representan gráficamente aquel espacio.<sup>[4]</sup> En el primer caso se proyectan las modalidades de las principales

[3] Para esta construcción se consideraron los tres primeros factores que dan cuenta del 96.73 % de la inercia de la nube de puntos (porcentaje final luego de la corrección de los valores propios de los primeros factores a partir de la fórmula de Benzecrí). A su vez, las clases recortadas fueron nombradas conforme la siguiente clasificación: elite (9.34 % de los hogares), clase media (20.33 % de los hogares), clase trabajadora (48.95 % de los hogares) y precariado (21.38 % de los hogares).

[4] En la figura 5.1, las modalidades de las variables activas se identifican con diferentes formas y colores: los baricentros de clases se representan con un círculo amarillo y la rama de actividad económica del PSH (variable ilustrativa) se representó con cuadrados con bordes y letras en grises. En tanto en la figura 5.2 los hogares se proyectan con una letra identificatoria

variables caracterizantes de las clases sociales (de hogares) y los baricentros de cada una, lo que permite observar su ubicación relativa y sus principales características asociadas. La figura 5.2 muestra la distribución de los hogares según su enclasmiento. Ambas figuras remiten al mismo espacio pero muestran solo sus dos primeras dimensiones, es decir, los dos primeros factores que representan el 86.22 % de la inercia total.<sup>[5]</sup> Sin embargo, para la construcción de las clases sociales se tomó el 96.73 % de aquella inercia.



**Figura 5.1.** Espacio social de Argentina urbana 2021, baricentro de las clases y principales variables caracterizantes (plano de los factores 1 y 2, 86,22 % de inercia y 27 modalidades activas). Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

En ambas figuras el primer factor, representado en sentido vertical, opone las familias mejor provistas en volumen global de capital a aquellas con una menor provisión de recursos. Expresa el 68,28 % de la inercia total y se encuentra conformado principalmente por las contribuciones de la calificación ocupacional del PSH (34,8),<sup>[6]</sup> el nivel educativo del PSH (27,9) el nivel de ingreso per cápita familiar (20,5) y la jerarquía ocupacional del PSH (15,5). Este eje diferencia en la región superior del plano a las posiciones sociales que tienen

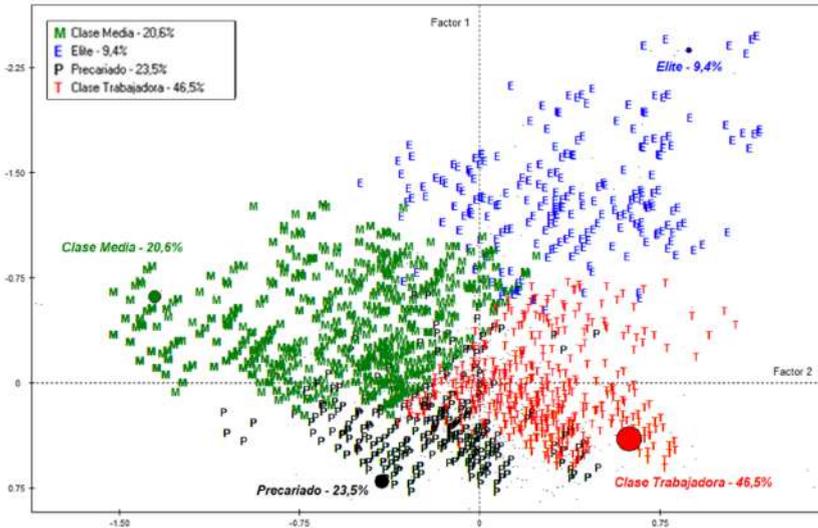
de su enclasmiento: E (elite), M (clase media), T (clase trabajadora) y P (precariado)

[5] Se entiende por inercia total de la nube de puntos a la medida de dispersión de los perfiles que, como indicador de esta dispersión, permite medir la relación entre las variables.

[6] Para la caracterización de los factores el número entre paréntesis expresa la contribución acumulada de la variable a su conformación.

un máximo de recursos económicos y culturales – hogares cuyos PSH ocupan puestos directivos con calificación profesional, estudios universitarios y participación en el tramo más alto del nivel de ingresos – de aquellas posiciones que, ubicadas en la región inferior del espacio, presentan el menor volumen global de capital – familias con un nivel bajo de IPCF y PSH con trabajos no calificados y un bajo nivel educativo –.

Por su parte, el segundo factor, representado en sentido horizontal, distingue las regiones medias y bajas del espacio social. En esta dimensión se encuentran desplazadas hacia el cuadrante superior izquierdo aquellas posiciones que disponen de un volumen global medio de capital. Asociadas a hogares con PSH insertos principalmente en las ramas de la educación y la salud, con calificaciones laborales técnicas y estudios terciarios. A su vez, en la región baja del espacio, este segundo factor permite diferenciar las posiciones asociadas a hogares con PSH insertos en las ramas de la industria, el comercio y la construcción, con calificaciones laborales operativas y estudios secundarios (desplazadas hacia la derecha de la figura) de las posiciones asociadas significativamente a PSH sin calificación laboral, bajos ingresos e inserciones laborales en la rama del empleo doméstico y el turismo y gastronomía.



**Figura 5.2.** Distribución de los hogares en el espacio social de Argentina urbana 2021 (plano de los factores 1 y 2, 86.22 % de inercia y 27 modalidades activas). Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAYPP/PISAC-COVID-19 (2021).

### 5.3.1 Las clases sociales en Argentina

Obtenida la distribución de los hogares por volumen y estructura de sus capitales, la aplicación de una CJA sobre la inercia contenida por los tres primeros factores permitió recortar clases y mostrar todas las características asociadas a cada agrupamiento.<sup>[7]</sup>

Así, el cuadro 5.1 expresa la caracterización completa de la clase social que, conformada por las posiciones con mayor volumen de capitales, hemos denominado *élite*.<sup>[8]</sup> Con un 9,34 % de los hogares, esta se caracteriza por presentar una PSH con asociaciones estadísticamente significativas a inserciones laborales con alta calificación, jerarquías directivas y estudios universitarios completos. Asociada a ingresos altos y actividades profesionales, esta clase se caracteriza también, aunque en menor grado (ver valores test), por edades superiores a los 50 años, ingresos medios altos y características laborales que los vinculan a actividades profesionales, científicas y técnicas, servicios sociales, gestión presupuestaria contable y financiera, salud y administración pública, de defensa y de organismos extraterritoriales, en cargos de jefatura.

Desplazadas hacia la región superior izquierda de la figura se encuentran un conjunto de posiciones asociadas significativamente a características que permiten definirlas como *clase media*.<sup>[9]</sup> Este agrupamiento se caracteriza por poseer PSH asociados a una calificación laboral técnica, con educación completa de nivel terciario, en el ejercicio de tareas de servicios sociales, en puestos de jefaturas (si bien esta jerarquía laboral presenta asociaciones con la Élite, en

---

[7] Cada modalidad asociada a la clase se acompaña de su porcentaje en la clase, su porcentaje global y su valor-test. Este último «mide el desvío entre la proporción en la clase y la proporción general en número de desvíos estándar de una ley normal. El valor test para una modalidad de una variable nominal es entonces un criterio estadístico asociado a la comparación de los efectivos en el marco de una ley hipergeométrica» (Moscoloni 2005, pág. 188). En este sentido y si bien mostramos dichas proporciones como porcentajes, utilizamos los valores test más importantes (siempre mayores a 2) para exponer los elementos más característicos de cada clase ordenados según el grado en que se encuentren asociados.

[8] Como sostienen Benza (2016), la categoría de *élite* sintetiza en los estudios de la estratificación social, tanto la acumulación económica, como la producción de redes sociales y el ejercicio de poder o influencia.

[9] Como hemos sostenido en otros análisis (Gutiérrez et al. 2021), denominamos a este agrupamiento como *clase media* por tratarse de hogares que desarrollan sus estrategias económicas aprovechando a su favor ciertos mecanismos de objetivación de su capital escolar (nivel educativo del PSH) y sus instancias de legitimación en el mercado laboral.

**Cuadro 5.1. Principales características asociadas a la élite (9,34%). Hogares, Argentina urbana, 2021.**

Variable	Categoría asociada	Porcentaje		
		Global	en Clase	Valor-Test
Calificación ocupacional PSH	Profesional	9.8	92.4	49.4
Nivel Educativo del PSH	Universitario Completo	12.4	77.3	36.3
Jerarquía ocupacional PSH	Dirección	4.5	34.1	24.0
Carácter ocupacional PSH	Dirección	4.5	34.1	24.0
Nivel de IPCF	Ingresos altos	6.4	34.7	20.6
Rama de actividad	Actividades profesionales, científicas y técnicas	3.9	24.6	18.3
Carácter ocupacional PSH	Servicios sociales	18.9	35.9	9.3
Tecnología ocupacional PSH	Operación de sistemas y equipos informatizados	19.9	35.7	8.6
Carácter ocupacional PSH	Gestión presupuestaria, contable y financiera	2.9	7.9	6.0
Edad del PSH	65 o más años	16.4	24.9	5.1
Rama de actividad	Salud	7.6	13.6	4.9
Nivel de IPCF	Ingresos medios altos	35.9	44.8	4.6
Edad del PSH	50 a 64 años	19.5	26.9	4.2
Rama de actividad	Administración pública, de defensa y de organismos extraterritoriales	6.1	9.6	3.2
Jerarquía ocupacional PSH	Jefe	8.6	12.4	3.0

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

esta clase se dan con mayor intensidad: ver valores test) principalmente en la rama de la enseñanza. Son mayoritariamente hogares con PSH mujeres (58.85%) que presentan ingresos de nivel medio alto. A su vez, aunque con menores niveles de intensidad, se asocian a funciones en el campo de la salud, estudios universitarios completos (e incompletos) y edades de 35 a 49 años. Sus PSH se asocian a inserciones en actividades de servicios de comunicación y arte, en puestos de gestión jurídico-administrativa y en la administración pública, de defensa y de organismos extraterritoriales.

Así, como resultado de este tipo de construcción y análisis y de manera consistente con nuestros estudios previos (Gutiérrez *et al.* 2021), mientras la conformación de la élite se muestra asociada a edades superiores a los 50 años, el recorte propuesto como clase

media se caracteriza por la prevalencia de PSH más jóvenes que se distinguen, además, por asociarse al sexo mujer. Estos hallazgos constituyen una de las potencialidades analíticas de esta perspectiva multidimensional. En ella, sexo y edad de los PSH no aparecen como epifenómenos, sino como propiedades constitutivas de la construcción del espacio social, que habilitan y condicionan estrategias de inversión de tiempo y capital económico, de ahorro, empequeñecimiento o acumulación, radicalmente diferentes y, por ende, de maneras diferentes y diferenciadas de transitar la pandemia.

El cuadro 5.2 presenta una caracterización completa de esta clase conformada por un 20,33 % de los hogares.

**Cuadro 5.2. Características asociadas a la clase media (20.33 %). Hogares, Argentina urbana, 2021.**

Variable	Categoría asociada	Porcentaje		
		Global	en Clase	Valor-Test
Calificación ocupacional PSH	Técnico	18.1	75.9	51.6
Nivel educativo PSH	Terciario Completo	9.7	43.9	37.6
Carácter ocupacional PSH	Servicios sociales	18.9	57.2	32.7
Rama de actividad	Enseñanza	9.6	31.1	23.6
Nivel de IPCF	Ingresos medios altos	35.9	62.7	20.0
Sexo PSH	Mujer	40.9	58.9	13.2
Jerarquía ocupacional PSH	Jefe	8.6	19.3	12.9
Tecnología ocupacional PSH	Operación de sistemas y equipos informatizados	19.9	32.1	10.7
Rama de actividad	Salud	7.6	15.1	9.6
Nivel educativo PSH	Universitario Completo	10.4	18.8	9.3
Edad del PSH	De 35 a 49 años	26.5	36.0	7.7
Rama de actividad	Comunicación y arte	2.7	5.6	5.8
Nivel educativo PSH	Universitario Incompleto	7.7	11.1	4.4
Carácter ocupacional PSH	Gestión jurídico-administrativa	9.9	12.5	3.0
Rama de actividad	Administración pública, de defensa y de organismos extraterritoriales	6.1	7.9	2.7

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

La región inferior del espacio agrupa posiciones que se diferencian de las dos anteriores por su bajo volumen de recursos. Son dos claros agrupamientos que, a su vez, presentan diferencias significativas entre ellos. El más numeroso de estos, con un 48.95 % de los

hogares, presenta asociaciones significativas con características que permiten nominarlo como *clase trabajadora*.<sup>[10]</sup> Son hogares donde prevalecen PSH con calificaciones laborales operativas y categoría de cuantapropistas, varones en su mayoría (80.34 %) que se insertan en actividades de producción extractiva, energética, de construcción e infraestructura, de comercialización y en producción artesanal, industrial y reparación de bienes; y lo hacen tanto en el sector de la construcción como en la industria, el transporte, el comercio y la rama de servicios y administración. Cuentan con niveles educativos que van del primario al secundario completos e ingresos de nivel medio bajo. Así también, se encuentran asociados en mayor medida a edades de hasta 34 años y con menor nivel de significación a tramos etarios de 50 a 64 años. El cuadro 5.3 muestra en detalle el conjunto de estas características asociadas.

El último agrupamiento, ubicado en la región inferior izquierda de la figura plano, se encuentra asociado significativamente a características que lo definen como *precariado*.<sup>[11]</sup> Hogares donde la inserción laboral de su PSH se encuentra asociada a puestos no calificados, cumpliendo tareas de servicios, principalmente en la rama del empleo doméstico y con una menor asociación a la rama del turismo y gastronomía. Empleos que no implican operación de tecnología y los ubican en tramos de ingreso bajos o medios bajos. Con niveles de instrucción asociados a estudios que van del primario al secundario incompletos, estos PSH son en su mayoría mujeres (73.98 %) con edades en el rango de 65 años o más. El cuadro 5.4 muestra las características asociadas significativamente y las diferencias porcentuales que definen estas asociaciones.

---

[10] Si bien podría señalarse que la idea de «clase trabajadora» remite a una práctica (trabajo) que está distribuida en todo el espacio social, hemos optado por esta nominación ya que desde una perspectiva disciplinar e histórica, aquello que denominamos «working class» constituye un lenguaje común en los estudios de estratificación, como así también aquello que denominamos «clase media» en Argentina.

[11] Nuestra perspectiva, con un horizonte analítico de multidimensionalidad, recupera la idea de precariedad con el objetivo de caracterizar las condiciones de vida de estos hogares en un sentido total, cercano al uso de *Savage et al.* (2013). De ese modo, nombramos lo que puede considerarse una clase con estructuras patrimoniales y posibilidades estratégicas bastante diferentes (peores) a la (clásica) clase obrera o clase trabajadora. Un mayor desarrollo de esta elección, como la de las demás clases – elite, clase media y clase trabajadora – puede verse en *Gutiérrez et al.* (2021).

**Cuadro 5.3. Principales características asociadas a la clase trabajadora (48.95 %). Hogares, Argentina urbana, 2021.**

Variable	Categoría asociada	Porcentaje		
		Global	en Clase	Valor-Test
Calificación ocupacional PSH	Operativo	53.60	93.03	60.01
Sexo PSH	Varón	59.11	80.34	31.14
Jerarquía ocupacional PSH	Cuentapropia	22.15	36.27	24.70
Tecnología ocupacional PSH	Operación de maquinaria y equipos electromecánicos	14.25	23.91	20.14
Carácter ocupacional PSH	Producción extractiva, energética, de construcción e infraestructura	10.82	18.58	18.29
Carácter ocupacional PSH	Comercialización	9.85	16.08	15.16
Nivel educativo PSH	Secundario Completo	25.49	34.68	15.06
Carácter ocupacional PSH	Producción artesanal, industrial y reparación de bienes	12.65	19.21	14.20
Nivel educativo PSH	Secundario Incompleto	20.09	28.04	14.11
Rama de actividad	Construcción	7.73	11.75	10.77
Rama de actividad	Industria y transporte	15.09	20.15	10.08
Rama de actividad	Comercio	15.20	18.79	7.08
Nivel educativo PSH	Primario Completo	16.80	20.28	6.57
Nivel de IPCF	Ingresos medios bajos	19.92	23.33	5.45
Edad del PSH	Hasta 34 años	37.64	41.24	5.25
Rama de actividad	Servicios y administración	6.50	8.32	5.19
Edad del PSH	De 50 a 64 años	19.48	22.00	4.48

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

## 5.4 Clases sociales, condiciones laborales e ingresos económicos

Para formarnos una idea más acabada del tipo de inserciones laborales de los PSH de cada posición en la estructura social, presentamos algunos datos adicionales, como el sector en el que se insertan (estatal o privado), la estabilidad del vínculo, el tipo de relación laboral, la sindicalización de los trabajadores y la afectación de los puestos en contexto de pandemia. Este cuadro más completo nos permite reconstruir un marco más amplio de habilitación y condicionamiento de estrategias económicas en cada una de estas posiciones de clase.

**Cuadro 5.4. Principales características asociadas a la clase trabajadora (48.95%). Hogares, Argentina urbana, 2021.**

Variable	Categoría asociada	Porcentaje		
		Global	en Clase	Valor-Test
Calificación ocupacional PSH	No calificado	16.1	71.7	53.3
Carácter ocupacional PSH	Servicios varios	17.5	52.3	31.6
Tecnología ocupacional PSH	Sin operación de máquina	50.3	83.1	25.6
Sexo PSH	Mujer	40.9	74.0	25.4
Jerarquía ocupacional PSH	Empleado	62.3	91.2	24.5
Rama de actividad	Empleo doméstico	10.5	31.1	22.8
Nivel educativo PSH	Primario Incompleto	5.3	14.8	14.4
Nivel de IPCF	Ingresos bajos	19.9	35.1	13.7
Edad del PSH	65 o más años	16.4	30.1	13.2
Nivel educativo PSH	Primario Completo	16.8	29.8	12.4
Nivel de IPCF	Ingresos medios bajos	37.8	46.2	6.5
Rama de actividad	Turismo y gastronomía	4.9	8.6	6.0
Nivel educativo PSH	Secundario Incompleto	20.1	24.0	3.6

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

Un primer punto a destacar es el sector. Como podemos observar en el cuadro 5.5, el empleo público está particularmente asociado a la región superior del espacio social, más específicamente a los PSH de familias de clase media. Algo similar sucede con el nivel de sindicalización, mucho mayor en la región superior del espacio social y particularmente alto para la clase media. Esto se combina, también, con un considerable nivel de tercerización (el más alto de toda la estructura social). En un punto, hablamos de inserciones ocupacionales que, incluso con ciertos marcos de inestabilidad o afectadas por relaciones de empleo «indirectas», cuentan con puestos calificados y con la protección que provee la presencia de herramientas de organización colectiva como los sindicatos.

Como contracara, la región inferior del espacio social presenta niveles mucho más bajos de empleo permanente, no tanto a manos de los contratos temporarios como por la considerable afectación en empleos con formato de «changa». En el caso del precariado, 2 de cada 10 PSH presentan esta modalidad de inserción laboral y más de la mitad se encuentra en condiciones plenas de informalidad. Recordemos, nuevamente, que la importancia del cuentapropismo

**Cuadro 5.5. Principales características asociadas a la clase trabajadora (48.95 %). Hogares, Argentina urbana, 2021.**

Condiciones laborales	Posición de clase social (%)				Total
	Élite	Clase Media	Clase Trabajadora	Precariado	
Sector público	31.3	41.0	12.4	12.3	20.2
Sector privado	68.0	58.1	86.7	85.3	78.6
Estabilidad Permanente	83.6	83.4	76.1	67.7	76.6
Estabilidad Temporario	12.4	11.4	6.1	9.7	8.6
Estabilidad Changas	2.3	4.1	16.5	20.4	13.4
Empleo informal	7.9	9.2	37.5	52.4	32.4
Empleo tercerizado	6.1	11.7	8.4	8.3	9.0
Trabajador sindicalizado	41.9	43.4	29.6	24.0	32.4
Estuvo desocupado por lo menos 2 meses en pandemia	22.4	26.9	45.7	49.5	39.6

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

como propiedad caracterizante en estas posiciones de clase (particularmente de la clase trabajadora) delinea, con esta información, una imagen o paisaje más completo. En gran medida para estos sectores el cuentapropismo aparece como una estrategia de inserción disponible ante dinámicas de clausura o ante situaciones de contracción del mercado de trabajo (tal como la crisis disparada por la pandemia COVID-19), pero cuyo costo son las importantes cuotas de informalidad e inestabilidad de ingresos asociadas a estas condiciones. El efecto estructural de estos condicionamientos (cuentapropismo, informalidad e inestabilidad) se desarrolló de manera crítica durante la pandemia y el período de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO). Un indicador del efecto multidimensional es que, en plena crisis, prácticamente la mitad de los PSH en los hogares de la clase trabajadora y el precariado hayan estado desocupados por lo menos 2 meses.

En conjunto, estas características son fundamentales para comprender de modo más amplio las condiciones de provisión de ingresos económicos, su estabilidad y su mediación para el acceso a servicios financieros y bancarios. Como sabemos, el ámbito laboral es el *locus* privilegiado de generación de ingresos corrientes en el espacio social, aunque no el único.

En arreglo con la descripción previa, como podemos observar en el cuadro 5.6, los ingresos por salario u honorarios se asocian particularmente a la clase media, aunque también a la élite, mientras

que los ingresos por negocios propios se asocian sobre todo a la clase trabajadora (recordemos su singular caracterización en relación a la condición de cuentapropismo). Los hogares de la élite, por su parte, perciben – en mayor medida que todo el resto de posiciones en el espacio social – ingresos por alquileres, rentas, inversiones e intereses, mientras que los hogares del precariado se caracterizan por percibir ingresos de políticas de transferencia (como la AUH), jubilaciones o pensiones y aportes de familiares o personas que no viven en el hogar.

**Cuadro 5.6. Ingresos económicos según clase social. Hogares, Argentina urbana, 2021.**

(% de respuestas positivas)*	Posición de clase social (%)				Total	
	Élite	Clase Media	Clase Trab.	Precariado		
En el último mes ¿Usted o algún miembro de su hogar cobró ingresos por...	... sueldos, salarios u honorarios?	74.4	82.3	67.6	55.4	68.6
	... negocio propio o familiar, trabajo independiente o	23.5	17.9	29.4	15.2	23.5
	... jubilación o pensión?	34.4	24.5	25.5	41.5	29.5
	... asignación universal por hijo (AUH)?	1.0	3.4	13.9	22.4	12.4
	... tarjeta Alimentar?	0.6	0.8	9.5	13.4	7.7
	... alquileres, rentas, inversiones o intereses?	9.8	1.6	1.4	0.3	2.0
	... aporte de familiares u otras personas que NO	2.2	3.8	5.0	11.2	5.8
Los ingresos monetarios que perciben no les alcanzan	11.2	26.0	46.3	59.4	41.7	
Desde que comenzó la pandemia ¿Fue beneficiario...	... del IFE?	6.5	16.0	27.1	29.7	23.4
	... del ATP	1.8	7.8	3.4	2.6	4

\* Las diferencias entre clases son significativas con una confianza del 95 %. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

Si evaluamos lo sucedido en el contexto de pandemia, encontramos fuertes continuidades. Mientras que las posiciones de la región inferior del espacio social (casi en igual proporción, clase trabajadora y precariado) son las que en mayor medida se vieron beneficiadas por una política de transferencia como el Ingreso Familiar de Emergencia, fueron las familias de clase media las que en mayor medida se beneficiaron con una política como el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (duplicando o triplicando la afectación de las otras posiciones de clase), algo esperable para un programa que tiene como objetivo la protección de empleos registrados.

Como mostraremos a continuación, las diferentes composiciones de estos ingresos monetarios (que no son ni exclusivamente laborales ni de origen «estrictamente» económico en su conjunto) constituyeron repertorios muy distintos para enfrentar la crisis desatada por la llegada y la gestión pública de la pandemia COVID-19. Los procesos de monetización, financiarización y endeudamiento son fuentes principales de la cuestión social contemporánea: la *infraestructura monetaria de bienestar* constituye un nuevo lugar de articulación e interpenetración de esferas sociales (Estado, familia y mercado), vitales para comprender la dinámica de la desigualdad en este tiempo de crisis (Wilkis 2021).

## 5.5 Las estrategias económicas de los hogares y el impacto de la pandemia

Como señalaron Luzzi y Sánchez (2021, pág. 273), «La cuarentena apagó motores, bajó persianas y secó literalmente las fuentes de ingresos de muchas actividades, grandes y pequeñas. Al mismo tiempo, dio un impulso nuevo a transformaciones que ya estaban en marcha, aunque a un paso lento, en los modos de pagar y cobrar: el reemplazo del efectivo por los medios de pago digitales, la realización de transacciones en línea, el recurso a las billeteras electrónicas. El hacer todo esto, contribuyó a visibilizar dimensiones de la desigualdad social que, si bien no eran desconocidas, estaban muy débilmente tematizadas, como las enormes brechas existentes en el acceso de los hogares al sistema financiero formal, y las dificultades de las pequeñas y medianas empresas para obtener el financiamiento necesario para su subsistencia. Por ello, las medidas de aislamiento social preventivo también supusieron un desafío inédito para el Estado, no solo en términos sanitarios sino también económicos».

Una de las preguntas fundamentales de este capítulo es de qué manera la pandemia afectó el arreglo funcional y la articulación de las estrategias económicas (laborales, de generación de ingresos, de provisión, financieras y de consumo) en los hogares de Argentina,

pero también cuáles son las diferencias que podemos encontrar en estas transformaciones según la posición de clase de dichos hogares.

**Cuadro 5.7. Espacios de compras cotidianas de alimentos según clase social. Hogares, Argentina urbana, 2021.**

(% de respuestas positivas)*	Posición de clase social (%)				Total
	Élite	Clase Media	Clase Trabajadora	Precariado	
Actualmente, ¿realiza sus compras cotidianas de alimentos en plataformas virtuales o telefónicas?	9	9	2.1	0.6	3.8
¿Y antes del inicio de la pandemia?...	5.3	6.2	2.3	0.9	3.1
Actualmente, ¿realiza sus compras cotidianas de alimentos en pequeños comercios de cercanía en el barrio?	62.0	62.9	74.0	72.2	70.3
¿Y antes del inicio de la pandemia?...	57.1	64.8	72.2	72.6	69.4
Actualmente, ¿realiza sus compras cotidianas de alimentos en supermercados?	78.0	77.2	67.0	59.7	68.5
¿Y antes del inicio de la pandemia?...	84.5	77.6	69.3	60.1	70.4
Actualmente, ¿realiza sus compras cotidianas de alimentos en ferias barriales?	3.5	5.4	7.7	9.4	7.2
¿Y antes del inicio de la pandemia?...	2.2	5.4	7.8	8.6	7.0
Actualmente, ¿realiza sus compras cotidianas de alimentos en ferias de economía social?	1.2	1.4	1.2	1.8	1.4
¿Y antes del inicio de la pandemia?...	2.0	0.2	0.7	1.1	0.8

\* Las diferencias entre clases son significativas con una confianza del 95 %. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

Los alimentos constituyen tanto un ítem transversal a todos los presupuestos como un componente con pesos profundamente diferentes en la estructura de gastos de cada hogar (Gutiérrez y Mansilla 2018). En el contexto de pandemia COVID-19, particularmente en el período de ASPO, la provisión de alimentos constituyó una práctica bastante más compleja y problemática que lo que solía ser para las familias previo a la pandemia (MINCYT 2020). En relación a esta dimensión, los datos (véase cuadro 5.7) muestran una fuerte asociación de las familias de la clase trabajadora y el precariado a espacios de provisión de cercanía (incluso cuando los porcentajes son altos también para élite y clase media). Como hemos señalado en otros trabajos (Assusa *et al.* 2019), este tipo de negocios habilita la movilización de capital social en formato de confianza económica

en redes vecinales para adquirir bienes de consumo cotidiano apelando al «fiado» (crédito informal o personalizado) en comercios barriales. Esta estrategia responde a las condiciones de familias con ingresos inestables, pero con necesidades de gasto constante. Uno de los problemas con esta práctica es que encarece los costos unitarios de los bienes consumidos. El sobrecosto se manifiesta como el precio pagado para paliar la inestabilidad de los ingresos y la financiación del consumo. La asociación de estas posiciones de clase a espacios de consumo feriales, mientras tanto, es más marcada que en las otras clases, aunque marginal en términos globales.

Con una dinámica en espejo, tanto las familias de clase media como las posicionadas en la élite presentan mayores asociaciones a espacios claramente mercantiles y formales de provisión, como plataformas virtuales o grandes superficies (supermercados) (Del Cueto y Luzzi 2016), aun cuando los porcentajes son altos también para clase trabajadora y precariado. Esto, por su parte, produce un acceso desigual a las regulaciones estatales de los precios de mercado: como ya señalamos, la región baja del espacio social, signada por la informalidad en sus inserciones laborales y por la inestabilidad de sus ingresos, necesita acceder a ciertos consumos a crédito (particularmente en el caso de alimentos), aunque pagando precios más altos por su carácter informal («fiado») (Figueiro 2013). Es, en cambio, la región alta de la estructura social (élite y clase media) la que en mayor medida accede a aquellos espacios de provisión en los que programas como Precios Cuidados, e incluso las promociones más coyunturales ofrecidas por entidades bancarias, brindan mejores condiciones de consumo (o bien, de valorización del capital económico destinado al consumo). En otras palabras, existe un sólido arreglo entre mejores condiciones de provisión de recursos económicos y mejores y más favorables condiciones de consumo (y, en consecuencia, también de ahorro) (Assusa *et al.* 2019). Esto pone en perspectiva que, según los datos del relevamiento de PISAC-PIRC, entre las familias de la Élite, apenas 1 de cada 10 perciba que sus ingresos monetarios no le alcancen, mientras que esta proporción llega a 6 de cada 10 en las familias del Precariado: la clave de esta percepción no está solamente en los ingresos, sino también en las condiciones sociales de sus prácticas de consumo.

Un dato fundamental al respecto de estas prácticas es que la pandemia, en términos generales, no parece haber generado ningún tipo de ruptura o reconfiguración de las estrategias de consumo alimenticio en lo que refiere a espacios de provisión. Como hemos sostenido en otros trabajos, la crisis COVID-19, antes bien, actuó sobre, visibilizó y hasta aceleró una estructura de desigualdades preexistente y persistente (Kessler y Assusa 2020).

**Cuadro 5.8. Servicios del hogar y dificultades de pago según clase social. Hogares, Argentina urbana, 2021.**

(% de respuestas positivas)	Posición de clase social (%)				Total
	Élite	Clase Media	Clase Trabajadora	Precariado	
¿En este hogar tienen servicio de internet? (*)	97.8	94.2	80.3	65.5	81.6
Desde que comenzó la pandemia, ¿han tenido que dejar de pagar servicio de internet o línea del celular? (*)	3.5	7.6	13.0	11.3	10.6
¿Siguen teniendo problemas para pagar el servicio de internet o línea del celular? (*)	43.8	31.3	47.1	38.6	42.8
Desde que comenzó la pandemia, ¿han tenido que dejar de pagar cuotas de tarjeta? (*)	7.8	12.0	10.7	6.4	9.8
¿Siguen teniendo problemas para pagar cuotas de tarjeta?	47.4	50.0	58.5	61.1	55.9
Desde que comenzó la pandemia, ¿han tenido que dejar de pagar cuotas de colegios privados? (*)	4.3	3.0	3.5	0.8	2.9
¿Siguen teniendo problemas para pagar cuotas de colegios privados? (*)	4.8	46.9	43.3	80.0	41.2
Desde que comenzó la pandemia, ¿han tenido que dejar de pagar créditos o deudas?	8.0	10.6	10.6	10.9	10.4
¿Siguen teniendo problemas para pagar créditos o deudas?	69.2	58.4	61.5	69.7	63.3
Desde que comenzó la pandemia, ¿han tenido que dejar de pagar servicios (luz, agua, gas o telefonía)? (*)	5.1	11.4	21.1	17.5	16.9
¿Siguen teniendo problemas para pagar servicios (luz, agua, gas o telefonía)? (*)	32.0	39.7	54.7	56.1	52.3

\* Las diferencias entre clases son significativas con una confianza del 95 %. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

Por su parte, el impacto de la pandemia en los gastos de servicios del hogar es, en cambio, mucho más visible (véase cuadro 5.8). Al menos 1 de cada 10 hogares en Argentina tuvo problemas y debió dejar de pagar servicios de Internet, telefonía fija o celular, cuotas

de tarjeta, créditos, deudas y servicios públicos durante la pandemia. Pero, como es de esperar, esta afectación no fue homogénea.

El pago de cuotas de tarjetas de crédito impactó en mayor medida a familias de clase media y clase trabajadora (con una buena proporción de inserciones formales, aunque con ingresos muy afectados por la inflación en estos años). Como planteamos previamente, esta estrategia de consumo (pago con tarjeta de crédito) está asociada en menor medida al precariado, justamente por la falta de acceso a este tipo de servicios bancarios. Según los datos de la encuesta ENES-PISAC del año 2015, casi 4 de cada 10 hogares en el precariado no tenía tarjeta de débito ni de crédito, contra menos de 1 de cada 10 en hogares de la élite (*Assusa et al. 2019*). Como sostienen *Luzzi y Sánchez (2021)*, la inclusión financiera de los grupos vulnerables llega a raíz de la emergencia de la crisis y de las demandas hacia el Estado por atender necesidades en esa población, y no de la mano de la expansión del mercado en la búsqueda por nuevos clientes.

El pago de créditos o deudas de las familias, se vio afectado de manera bastante homogénea en todo el espacio social, aunque sabemos que se trata de distintos tipos de créditos (prestamistas versus instituciones bancarias) y deudas (formales versus informales o familiares) de acuerdo a la posición de clase de la que se hable. A esto habría que agregar que, como señalan *Wilkis et al. (2021)*, las trayectorias de endeudamiento de las familias son previas a la pandemia, y responden a una estructura desigual persistente. Estos autores indican, también, que la experiencia subjetiva del endeudamiento se manifestó de formas diferentes en arreglo a las condiciones sociales de vida de las familias: los sectores medios codificaron la experiencia de endeudamiento frecuentemente como «deudas de empobrecimiento», de pérdida de estatus (disminución del consumo) y miedo al desclasamiento, mientras que los sectores vulnerables, habituados a prácticas de endeudamiento que no se destinan al mejoramiento de sus condiciones materiales de vida, vivieron este proceso con «angustia» y manifestaciones de desmejoramiento corporal (agotamiento y enfermedad).

Solo en el caso del pago de cuotas de colegios o escuelas privadas los problemas de pago han tendido a aparecer en familias de la élite, tanto como en la clase media y la clase trabajadora, una distribución comprensible por la estructura desigual de acceso a la educación de gestión privada (*Jiménez Zunino 2019*). Sin embargo, la continuidad del conflicto es mucho más desigual: mientras que las familias de la Élite solo marginalmente continúan teniendo problemas para pagar esas cuotas en 2021, las de clase media y clase trabajadora (y más aún las del precariado, aunque también muy marginalmente afectadas por esta problemática) siguen en una gran proporción con dificultades para sostener este tipo de gastos.

Finalmente, en cuanto a gastos de servicios públicos (luz, gas, agua, etcétera) y de servicios de conectividad, el cese de pagos se concentra en las posiciones más bajas del espacio social, particularmente en las familias de clase trabajadora. El mencionado estudio de *Wilkis et al. (2021)* señala que la dinámica de endeudamiento fue más generalizada en los sectores más vulnerables y que estas familias incorporaron el cese de pago de servicios del hogar como una fuente más de financiamiento de los consumos ordinarios. Sobre esto es necesario remarcar que, mientras que el acceso a servicio de Internet es prácticamente universal en los hogares de la élite, más de 3 de cada 10 hogares en el precariado y 2 de cada 10 en la clase trabajadora carece actualmente de conexión a Internet en sus viviendas según los datos de esta encuesta. Esto significa que el impacto de la pandemia en las posibilidades de pago de servicios de conectividad fue más importante en aquellos hogares que ya sufrían problemas de acceso, situación que agravó su posibilidad de resolver – en contexto de aislamiento estricto – otras escenas de reproducción social, particularmente la escolar, y en algunos casos la laboral (*Kessler y Assusa 2020*).

Ante los problemas para afrontar los gastos del hogar en el contexto de la pandemia COVID-19, encontramos distintos tipos de estrategias de resolución financiera, tramados en arreglo tanto a la caracterización del volumen y estructura de capital de las familias de cada una de las clases, como a la estructura y estrategias de gasto, y a la disposición social de los hogares a determinados espacios de provisión de bienes y servicios para el consumo familiar.

Tal como muestra el cuadro 5.9, las familias de todas las posiciones de clase recurrieron de manera bastante homogénea a ahorros propios para resolver gastos corrientes del hogar durante la pandemia, aunque, como sabemos, el volumen de dichos ahorros (en arreglo con el volumen y configuración de la riqueza, los ingresos económicos y los repertorios financieros de los hogares) es profundamente diferente entre las familias de las distintas regiones del espacio social. De hecho, y volviendo sobre el factor de persistencia de la crisis, los datos de la EPH 2019 ya mostraban que 1 de cada 4 familias en nuestro país usaba ahorros, pedía préstamos o vendía bienes para llegar a fin de mes (*Wilkis et al. 2021*). En nuestra investigación sobre la estructura social cordobesa (*Gutiérrez et al. 2021*) señalamos de qué manera este tipo de estrategias en los hogares aparecía cíclicamente en familias de clase trabajadora para resolver situaciones de crisis, y desaparecía en momentos de estabilización y expansión del mercado de trabajo (como sucedió aproximadamente entre 2010 y 2013). En cambio, en familias posicionadas en el precariado, esta estrategia aparece como una constante de su repertorio de acción económica.

**Cuadro 5.9. Necesidad de ayuda económica y reducción de gastos del hogar según clase social. Hogares, Argentina urbana, 2021.**

Desde que comenzó la pandemia... (% de respuestas positivas)*	Posición de clase social (%)				Total
	Élite	Clase Media	Clase Trabajadora	Precariado	
... ¿Necesitaron recurrir a ayuda económica o financiera de Bancos?	4.3	7.4	6.2	4.3	5.8
... ¿Necesitaron recurrir a ayuda económica o financiera de prestamistas particulares?	2.2	1.7	4.6	3.4	3.5
... ¿Necesitaron recurrir a ayuda económica o financiera de familiares?	8.6	19.0	25.6	32.4	24.1
... ¿Necesitaron recurrir a ahorros propios para sostener sus gastos corrientes?	27.8	29.8	27.0	19.6	26.0
... ¿Se redujeron los gastos del hogar?	30.1	37.0	42.8	46.2	41.2
... ¿Usted u otros adultos en su casa comieron menos o dejaron de comer en el desayuno, en el almuerzo o en la cena porque no tuvieron recursos para obtener alimentos?	2.2	7.2	16.6	23.3	14.8
... ¿Le sirvió menos comida a los niños/as en el desayuno, almuerzo o cena porque no tuvieron recursos para obtener alimentos?	0.4	1.5	5.6	9.9	5.2

\* Las diferencias entre clases son significativas con una confianza del 95 %. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

En este sentido, la estrategia de búsqueda de ayuda económica de familiares, se distribuye de manera escalonada en cada posición de clase: la presencia de esta práctica durante la pandemia es 4 veces más alta en el precariado que en la élite, lo cual es consistente con otros estudios actuales (*Wilkis et al. 2021*). La búsqueda de ayuda financiera en bancos es más importante en los hogares de clase media y clase trabajadora, mientras que el recurso a prestamistas privados tiene algo más de presencia en la región baja de la estructura social (clase trabajadora y precariado). Esto también es consistente con lo que muestran investigaciones previas en nuestro país (*Assusa et al. 2019*; *Del Cueto y Luzzi 2016*).

En términos esquemáticos, lo que observamos son distintas resoluciones para los problemas que surgieron en la estructura de gastos de los hogares durante la pandemia. Estas estrategias de resolución son comprensibles solo en la medida en la que conocemos el carácter multidimensional de sus patrimonios, los condicionamientos que

implican cada una de estas posiciones de clase, su acceso a recursos financieros, la estabilidad de sus ingresos y su disposición a distintos espacios de provisión. Por ello, presenta cierto sentido práctico que las élites logren resolver estos conflictos sobre todo basadas en ahorros propios (esperablemente de gran volumen y con altas cuotas de liquidez), la clase media y la clase trabajadora a partir de una combinación de ahorros y préstamos por mecanismos formales – aunque experimentados subjetivamente de formas muy diversas – y el Precariado por una combinación de ahorros, préstamos informales y redes familiares (siempre con la característica de un mayor peso del capital social en el volumen y estructura de capital de estas familias) (Gutiérrez 2004).

De manera complementaria, si 4 de cada 10 familias en Argentina redujeron los gastos de sus hogares como estrategia de resolución de los conflictos que antes describimos en sus prácticas de consumo y reproducción social, esto sucedió de manera mucho más marcada en los hogares del precariado y la clase trabajadora. Como hemos podido observar en otras investigaciones propias y con aproximaciones cualitativas (fundamentalmente Gutiérrez *et al.* 2021), el ascetismo popular y la autorepresión como complemento de la activación de redes de ayuda mutua (Gutiérrez 2004) significan importantes estrategias de reemplazo para posiciones con presupuestos y patrimonios al límite de las posibilidades y con márgenes de adaptación a contextos de crisis que no permiten evitar el sufrimiento de fuertes carencias. Esto, de hecho, se confirma en la declaración de disminución de la cantidad de comidas diarias para los integrantes de estas familias (precariado y clase trabajadora), fundamentalmente para los adultos, pero también en muchos casos para los niños o menores de edad. En otras palabras: el hambre de los integrantes de estos hogares forma parte de las prácticas y padecimientos que se despliegan en un contexto de crisis tan profunda como la disparada por la pandemia COVID-19 en Argentina para sostener (al límite) los procesos de reproducción social en estas familias.

## 5.6 Reflexiones finales

La apuesta por abordar las prácticas de inserción laboral, de provisión, bancarias, financieras y de consumo bajo la categoría genérica de *estrategias económicas* resulta afín a una teoría de la acción con acento en las articulaciones y el carácter práctico-sistémico de la reproducción social desde el punto de vista de las familias, agentes colectivos de este proceso social. Pero, además, a nivel empírico, el uso que hemos propuesto de la categoría de estrategias económicas implica una apuesta en dos niveles:

- 1) es necesaria una categoría de orden holístico para poner en tensión el diagnóstico de la pandemia COVID-19 como una crisis de orden total y global;
- 2) su uso funciona bajo el supuesto de una búsqueda de regularidad y homología entre prácticas de distinto orden.

Por ello, y a propósito del carácter *total* de la crisis, nuestros hallazgos confirman la intuición de una fuerte articulación entre esferas. Esta recurrencia y homología de prácticas – que de ninguna manera debe confundirse con un efectivo arreglo empírico, sino que existe a nivel analítico – entre los ámbitos laboral, financiero, de provisión y consumo, es la llave de acceso al carácter *total* del deteni-miento abrupto que implicó la pandemia y sus medidas colectivas de contención en la vida cotidiana de nuestro país. La crisis afectó – en nuestro caso – la totalidad de las esferas económicas y sus prácticas, justamente porque cada una de estas escenas sociales, están atadas por mecanismos de articulación y arreglos funcionales en la lógica de acción de las familias.

Sin pensar en términos de una mecánica de sobredeterminación, la «relativa autonomía» de esferas como la del consumo puede ponerse en tensión a partir de los datos que mostramos en este capítulo. El condicionamiento que imponen dialécticamente los ámbitos laboral, financiero y de provisión resultan vitales para comprender el complejo funcionamiento de las prácticas de consumo en contextos de crisis como el que abordamos.

Una buena parte de los datos que hemos analizado en este capítulo indican que la pandemia no disparó una transformación radical en las prácticas de provisión y consumo de los hogares del espacio social argentino, sino que tendió a *acelerar* desigualdades perennes. Nuestros análisis ganarían en consistencia de contar con información cualitativa sobre lógicas prácticas y hábitos de consumo (una línea de investigación que buscaremos desarrollar a futuro), pero la coincidencia de estos hallazgos con distintos estudios previos en nuestro país afirmaría la existencia de estrategias económicas familiares cuya estructura desigual distingue, fundamentalmente, la región superior y la región inferior del espacio social o, en otras palabras, el bloque de poder y el mundo popular de la estructura social argentina. Si bien esto no sucede en todos y cada uno de los ámbitos que analizamos, la conformación de una distribución relativamente *dual y polarizada* es también una hipótesis a seguir explorando en futuros estudios.

La persistencia de las desigualdades y la dinámica de aceleración impresa por la pandemia agregan relevancia a las exploraciones en torno a la hipótesis de la «doble crisis». La estructura distributiva dual que delineamos en las páginas previas ganaría en complejidad de incorporar la dimensión temporal, fundamentalmente para

tener parámetros históricos recientes sobre la dinámica de las estrategias económicas familiares en los últimos años previos a la crisis disparada por la pandemia COVID-19.

En un arreglo similar al que se observa en sus inserciones laborales, la región superior del espacio social tiende a acceder a espacios de provisión formales, sujetos a regulaciones estatales y articulados con beneficios, descuentos y promociones financieras para el consumo. Por oposición, las familias del mundo popular presentan una tendencia mucho más marcada hacia espacios de provisión de cercanía, cuyos mecanismos de crédito (aún más necesarios en el contexto pandémico) se rigen por lógicas informales o personalizadas, mecanismos que imponen sobrepuestos sobre presupuestos siempre signados por la escasez. Si bien no constituye un objetivo central de este capítulo, sí parece un hallazgo de relevancia: que los beneficios de las regulaciones estatales – como el programa Precios Cuidados – se distribuyan según una estructura desigual subyacente, dada la homología práctica en las estrategias económicas de las familias de distintas posiciones de la estructura social, es un problema de peso tanto a nivel de capacidades estatales como a nivel de justicia distributiva.

Si las «preferencias» por determinados espacios de provisión – y, en consecuencia, el acceso a modos de pago y formatos crediticios – no se vieron afectadas en profundidad por la pandemia, sí lo hizo la dinámica de gastos y los conflictos en los pagos de bienes y servicios, así como también las trayectorias de endeudamiento de los hogares. Si bien existe evidencia de experiencias subjetivas diversas de endeudamiento durante la pandemia, el acceso a créditos informales, por medio de prestamistas personales o el endeudamiento en el medio familiar entre hogares del mundo popular, indican que la situación de crisis ha tendido a persistir más allá de 2020, muy particularmente en las familias del precariado.

A esto se suman prácticas de gestión de la crisis como la suspensión de pago de servicios esenciales del hogar e incluso la restricción del consumo alimenticio como parte del repertorio de estrategias económicas en las posiciones de clase más desfavorecidas del espacio social. Esta caracterización da cuenta en un sentido más amplio de un marco de interpretación, tanto sobre el impacto efectivo de los dispositivos de transferencias de ingresos que dispuso el Estado nacional para paliar los efectos de la crisis, como también sobre los usos y significaciones que las familias construyeron en torno al IFE y al ATP en el marco más amplio de sus infraestructuras monetarias de bienestar. Enfrentar este tipo de emergencias en clave de recomendación para políticas públicas es uno de los principales desafíos a futuro: ¿cómo podemos lograr que los esfuerzos estatales se dirijan a los sectores con menos y más inestables ingresos, si las

regulaciones transitan los espacios de provisión más hostiles a estos sectores? Una de las claves de un abordaje multidimensional de la desigualdad es la comprensión de que la estructura distributiva no se juega solamente en la generación de ingresos, sino también en las condiciones sociales de valorización del capital económico en las prácticas de consumo.

## Referencias

ASSUSA, GONZALO; MARÍA LAURA FREYRE Y FRANCISCO MERINO

- 2019 «Estrategias económicas y desigualdad social. Dinámicas de consumo, ahorro y finanzas de familias cordobesas en el final de la postconvertibilidad», en *Población y Sociedad*, vol. 26, n.º 2, págs. 1-33, referencia citada en páginas 144, 145, 147, 149.

ATKINSON, WILLIAM

- 2017 *Class in the new millenium. The estructure, homologies and experience of British Social Space*, Londres: Routledge, referencia citada en página 130.

BARANGER, DENIS

- 2004 *Epistemología y metodología en Pierre Bourdieu*, Prometeo: Buenos Aires, referencia citada en páginas 128, 130, 132.

BENZA, GABRIELA

- 2016 «Las clases sociales en la investigación social de la Argentina», en *Estudios sobre la estructura social y el mundo del trabajo en los últimos años (2003-2014)*, Buenos Aires: CLACSO, págs. 143-214, referencia citada en página 135.

BENZA, GABRIELA Y GABRIEL KESSLER

- 2021 *La ¿nueva? Estructura social de América Latina. Cambios y persistencias después de la ola de gobiernos progresistas*, Siglo XXI: Buenos Aires, referencia citada en página 127.

BOURDIEU, PIERRE

- 1988 *La Distinción: Criterios y bases sociales del gusto*, Madrid: Taurus, referencia citada en páginas 128, 129.
- 1990 *Sociología y Cultura*, Ciudad de México: Grijalbo, págs. 281-309, referencia citada en página 130.
- 1991 *El sentido práctico*, Madrid: Taurus, referencia citada en páginas 129, 130.
- 2011 *Las estrategias de reproducción social*, Buenos Aires: Siglo XXI, referencia citada en página 131.
- 2012 *Bosquejo de una teoría de la práctica*, Buenos Aires: Prometeo, referencia citada en página 130.

DALLE, PABLO y MARÍA MERCEDES DI VIRGILIO

- 2022 «Estructura social de Argentina y políticas públicas durante la pandemia de COVID-19: el diseño de una encuesta nacional comparativa interregional», en *Revista Latinoamericana de Metodología de la Ciencias Sociales*, vol. 12, n.º 2, referencia citada en página 128.

DEL CUETO, CARLA y MARIANA LUZZI

- 2016 «“Salir de compras”. El consumo y la estructura social en la Argentina reciente», en *La sociedad argentina hoy. Radiografía de una nueva estructura*, Buenos Aires: Siglo XXI, referencia citada en páginas 145, 149.

FIGUEIRO, PABLO

- 2013 *Lógicas sociales del consumo. El gasto improductivo en un asentamiento bonaerense*, Buenos Aires: UNSAM Edita, referencia citada en página 145.

GUTIÉRREZ, ALICIA

- 2004 *Pobre' como siempre... Estrategias de reproducción social en la pobreza*, Córdoba: Ferreyra Editor, referencia citada en páginas 130, 150.

GUTIÉRREZ, ALICIA y HÉCTOR MANSILLA

- 2015 «Clases y reproducción social: el espacio social cordobés en la primera década del siglo XXI», en *Política y Sociedad*, vol. 52, n.º 2, págs. 409-442, referencia citada en páginas 130, 132.
- 2018 «Consumo, desigualdad y reproducción social en Gran Córdoba», en *X Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de la Plata*, Buenos Aires, referencia citada en página 144.

GUTIÉRREZ, ALICIA; HÉCTOR MANSILLA y GONZALO ASSUSA

- 2021 *De la grieta a las brechas. Pistas para estudiar las desigualdades en nuestras sociedades contemporáneas*, Villa María: Eduvim, referencia citada en páginas 128, 130, 135, 136, 138, 148, 150.

JIMÉNEZ ZUNINO, CECILIA

- 2019 «Modo de reproducción escolar en las clases sociales cordobesas. Un análisis desde las transmisiones intergeneracionales», en *Revista Temas Sociológicos*, n.º 25, págs. 291-327, referencia citada en página 147.

KESSLER, GABRIEL y GONZALO ASSUSA

- 2020 «Reactivación de desigualdades y vulneración de derechos en tiempos de pandemia», en *COVID-19 y derechos humanos: la pandemia de la desigualdad*, Buenos Aires: Biblos, referencia citada en páginas 145, 148.

LÓPEZ-ROLDÁN, PEDRO

- 1996 «La construcción de una tipología de segmentación del mercado de trabajo», en *Papers*, n.º 48, págs. 41-58, referencia citada en página 132.

LUZZI, MARIANA Y MARÍA SOLEDAD SÁNCHEZ

- 2021 «Cobrar, pagar, transferir en un contexto de aislamiento. Estrategias públicas y privadas sobre el dinero frente a la crisis», en *Pandemia y crisis: el COVID-19 en América Latina*, Guadalajara: Editorial Universidad de Guadalajara, págs. 272-295, referencia citada en páginas 143, 147.

MANSILLA, HÉCTOR

- 2011 *Nuevos Consumos Culturales. Tecnologías y bienes simbólicos. Aportes teórico-metodológicos*, Villa María: Eduvim, referencia citada en página 132.

MAUGER, GERARD

- 2013 «“Modos de generación” de las “generaciones sociales”», en *Sociología Histórica*, n.º 2, págs. 131-151, referencia citada en página 131.

MINCYT

- 2020 *Relevamiento del impacto social de las medidas del Aislamiento dispuestas por el PEN*, Buenos Aires, referencia citada en página 144.

MOSCOLONI, NORA

- 2005 *La nube de datos*, Rosario: UNR Editora, referencia citada en página 135.

SAVAGE, MIKE *et al.*

- 2013 «A New Model of Social Class? Findings from the BBC’s Great British Class Survey Experiment», en *Sociology*, vol. 47, n.º 2, págs. 219-250, referencia citada en páginas 130, 138.

SAVAGE, MIKE

- 2015 *Social Class in the 21st Century*, Londres: Penguin, referencia citada en página 130.

WILKIS, ARIEL *et al.*

- 2021 *Estudio Panel cualitativo sobre endeudamiento de hogares en contexto de pandemia (región AMBA y Santa Fe, 2020-2021)*, Buenos Aires: IDAES y UNSAM, referencia citada en páginas 147-149.

WILKIS, ARIEL

- 2021 «Introducción. Las formas elementales del endeudamiento», en *Las formas elementales del endeudamiento Consumo y crédito en las clases populares y medias de Buenos Aires y Santa Fe (2010-2019)*, Santa Fé: Ediciones UNL, págs. 9-24, referencia citada en páginas 127, 143.



## CAPÍTULO 6

# Teletrabajo, cargas de cuidado y estrategias sociohabitacionales en la pandemia de COVID-19

PAULA BONIOLO<sup>\*</sup> y BÁRBARA ESTÉVEZ LESTON<sup>\*\*</sup>

### 6.1 Introducción

En el marco de la crisis económica que sufría Argentina a finales de 2019, la pandemia del COVID-19 afectó las modalidades de trabajo y sus condiciones diferencialmente según las clases sociales a lo largo del territorio argentino durante 2020-2021. Con el fin de sostener las actividades económicas, reducir la circulación y proteger a la población de masivos contagios del COVID-19 y continuar con las actividades de trabajo se dispuso el teletrabajo como modalidad de empleo. Si bien, esta modalidad de trabajo es utilizada desde antes de la pandemia en el mundo, en Argentina toma fuerza a partir de las medidas aplicadas por la crisis sanitaria, el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) que tiene lugar a partir del 20 de marzo en Argentina. No obstante, esta modalidad trae consecuencias en las condiciones de trabajo, que deben conjugarse con el cuidado de niños y la convivencia por largas horas en las viviendas. En este contexto, el objetivo del capítulo es indagar sobre el teletrabajo, las cargas familiares y las estrategias sociohabitacionales durante la pandemia de COVID-19 en 2020 en Argentina. Centrándonos en las diferencias según regiones, clases sociales y género.

Consideramos que estudiar el teletrabajo en pandemia visibiliza la crisis habitacional que muchas familias tienen actualmente y

---

\* Investigadora del CONICET, Instituto de Investigaciones Gino Germani-UBA.

\*\* Instituto de Investigaciones Gino Germani-UBA.

que la vivienda del trabajador/a está íntimamente vinculada a las dinámicas familiares de cargas de cuidado, especialmente cuando los niños/as son pequeños/as. La frontera entre trabajo y familia se vuelve aún más porosa compartiendo el espacio de la vivienda para un uso laboral. Asimismo, las estrategias sociohabitacionales que las familias despliegan desde distintas clases sociales están condicionadas por la pandemia del COVID-19, y nos interesa estudiar en este capítulo en qué medida hubo modificaciones o ampliaciones en las viviendas durante la pandemia, ya que el espacio sociohabitacional fue tensionado durante una crisis sanitaria del COVID-19.

El traspaso al teletrabajo permitió conservar fuentes de empleo, continuar con las tareas y mantener el ingreso de dinero en los hogares, bajando la tasa de contagios y muertes. Encontramos que esta modalidad, en un contexto de crisis económica, trajo aparejados cambios en las condiciones de empleo impactando desigualmente en las regiones. Asimismo, estas consecuencias del COVID-19 y la transformación de la modalidad de empleo a teletrabajo fueron desdibujando la esfera laboral y el ámbito doméstico, reforzando la desigualdad de clases sociales y género. En el marco de estructuras sociales como la de Argentina, con altos puestos de informalidad, la mirada atenta sobre las clases sociales es fundamental para conocer en qué medida la pandemia del COVID-19 afectó las desigualdades preexistentes de género y clase.

En este contexto buscamos conocer a nivel nacional: ¿en qué medida tuvo lugar el teletrabajo durante la pandemia y cómo afectó a las distintas clases sociales, el género y cada una de las regiones? ¿Hubo cambios en la manera en que el COVID impactó en el teletrabajo según las clases sociales y el género en cada una de las regiones del país? Teniendo en cuenta que los ámbitos laborales y domésticos se fusionaron o al menos se trastocaron ¿qué sucedió con las cargas de cuidado durante la crisis sanitaria? ¿En qué clases sociales tuvo lugar la ampliación y/o modificación de la vivienda durante la pandemia?

## **6.2 El impacto del COVID-19 en el mundo laboral: el traspaso hacia el teletrabajo**

El teletrabajo es una forma de organizar y realizar el trabajo a distancia mediante la utilización de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS). Los primeros trabajos sobre estas dinámicas laborales vinculadas al trabajo remoto buscaron dar cuenta del impacto de los entornos de trabajo en esta modalidad, haciendo foco en las distintas modalidades de teletrabajo adoptadas y el tipo de tecnologías de apoyo utilizadas (Olson 1987). En este contexto, algunas investigaciones mencionan que el trabajo remoto provee de

una mayor flexibilidad espacio-temporal sin quebrar enteramente las formas tradicionales de espacios de trabajo y promoviendo mayores niveles de productividad y eficiencia (Belzunegui Eraso 2002) y promoviendo la reducción de los costos de operación a partir de la implementación de estas modalidades de trabajo, dado que el trabajo se desplaza hacia trabajadores y no al revés. Con el desarrollo de la pandemia COVID-19, la informatización del empleo se acrecienta (Schteingart *et al.* 2021) y el desplazamiento del trabajo hacia los trabajadores permitió, en contexto de pandemia, mantener y resguardar las fuentes de trabajo, sin necesariamente imponer reducciones en ingresos y salarios (De la Vega 2021). En el marco del COVID-19 se realizaron varios estudios sobre los efectos derivados de la propia crisis pandémica y de las medidas restrictivas de aislamiento y distanciamiento implementadas para disminuir la escala de contagios. Los estudios dentro de esta área temática reconocen concentraciones del fenómeno del teletrabajo en las economías desarrolladas y no tanto en aquellas cuyos trabajadores perciben menores ingresos (Dingel y Neiman 2020; Hatayama *et al.* 2020).

En Estados Unidos, varios trabajos han marcado el potencial del teletrabajo para generar menores impactos del COVID-19 en la economía, tanto desde una perspectiva de análisis de las cualidades en las ocupaciones potencialmente teletrabajables y los niveles de ingreso que concentran (Avdiu y Nayyar 2020; Dingel y Neiman 2020). Mientras que otros estudios suelen focalizarse en las potencialidades y cualidades de las dinámicas laborales y sus trabajadores para reconocer habilidades que permitan su transformación al teletrabajo (Hatayama *et al.* 2020). A raíz de las medidas dispuestas por los gobiernos, los trabajos realizados en el campo académico podrían agruparse en su mayoría en el análisis de las medidas de aislamiento y distanciamiento social y en los efectos económicos de esas medidas y propuestas de políticas alternativas mirando la potencialidad del teletrabajo. Como así también los efectos que el teletrabajo trae en el resguardo y protección a trabajadores de las suspensiones en la jornada laboral y a las empresas de los efectos de la crisis, como así también, los riesgos de infección (Alipour *et al.* 2020).

¿Qué sucedía con el teletrabajo antes de la pandemia en Argentina? En el contexto prepandemia Albrieu (2020) analiza en base a la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) de 2017, la reducida implementación de prácticas asociadas al teletrabajo en distintas empresas (7.8% de trabajadores y el 3% de empresas), sobre todo en grupos jóvenes de entre 26 y 35 años y mujeres (29%). Con el desarrollo de medidas de distanciamiento social, distintos estudios muestran que el sistema económico argentino no estaba en condiciones de trasladar todas las tareas a modalidades de trabajo a

distancia, principalmente en sectores feminizados, de trabajo informal y cuentapropista, de baja calificación y salarios y con falta de acceso a TICS (Bonavida Foschiatti y Gasparini 2020). En contraposición, las ocupaciones administrativas y educativas en todos sus niveles fueron trasladadas al teletrabajo (Albrieu *et al.* 2021). De esta manera, mucho se ha trabajado sobre los efectos de la pandemia en el mercado laboral y, sobre todo, en la necesidad de traspaso a dinámicas de teletrabajo y los efectos en la economía y población, sin embargo, todavía no se ha abordado en profundidad los efectos que el COVID-19 ha tenido sobre la vida cotidiana y, sobre todo, frente al traspaso del teletrabajo. Nuestro estudio se propone medir el impacto del Covid en la vida cotidiana, específicamente frente el traspaso a modalidades de teletrabajo y el cambio en las estrategias de cuidado y sociohabitacionales. En este sentido, De la Vega (2021) analiza el uso de modalidades de teletrabajo como mitigadores de los impactos del shock del COVID-19 en el mercado laboral argentino, utilizando la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). El autor observa que el potencial de teletrabajo para trabajadores no esenciales está positivamente correlacionado con la probabilidad de estar activo u ocupado, y con más horas trabajadas.

Nuestra perspectiva teórica desde las clases sociales y la desigualdad social plantea que la crisis del COVID-19 afectó de manera diferencial a la sociedad. En este sentido, la pertenencia individual a múltiples categorías sociales (género, clase, edad, habitar distintas regiones, etcétera) que se relacionan y crean oportunidades y limitaciones diferenciales desde una perspectiva de interseccionalidad. Las personas pueden presentar elementos que los potencian y limitan al mismo tiempo tanto en la concreción de distintos logros (Meier *et al.* 2015), como los efectos de distintos condicionamientos a lo largo de la vida (Estévez Leston 2021) y, específicamente, frente a situaciones político-sociales o de salud, como la pandemia COVID-19.

En esta perspectiva, Schteingart *et al.* (2021) si bien reconocen que la reconversión al teletrabajo se dió a lo largo del territorio nacional, reconocen crecimientos dispares entre las regiones del país y, sobre todo, impactos diferenciales del teletrabajo en la brecha de género según el sector económico donde se encuentran empleadas las personas. Finalmente, se reconocen impactos desiguales en la reconversión al teletrabajo según los niveles educativos formales. Mientras que otros estudios han trabajado sobre la percepción y la valoración del teletrabajo durante la pandemia por parte de mujeres y hombres residentes en varios países iberoamericanos, desde una perspectiva de género (Actis Di Pasquale *et al.* 2021, pág. 56).

La discusión del teletrabajo expone algunos interrogantes sobre las condiciones de trabajo. Si bien el paso al teletrabajo hizo que se conservarán las fuentes de trabajo y el ingreso, también trajo ciertos

cambios en las condiciones que afectaron la vida cotidiana de las personas, no solo a través del traspaso a nuevas modalidades de trabajo, sino en las estrategias de cuidado y sociohabitacionales desplegadas en contexto de pandemia. En este sentido en este capítulo nos centramos en conocer: ¿qué sucedió con el teletrabajo en pandemia según las regiones del país, el género y su impacto en la clase social? ¿Qué sucedió con las cargas de cuidado en la pandemia? Y, finalmente, ¿Hubo distintas estrategias sociohabitacionales? ¿Quiénes tuvieron que modificar o ampliar la vivienda en la pandemia? ¿El traspaso hacia modalidades de teletrabajo en las distintas clases sociales funcionó como catalizador del cambio de las estrategias de cuidado y sociohabitacionales?

### 6.3 Datos y método

Para desarrollar estos interrogantes el capítulo analiza los datos de la Encuesta nacional sobre la Estructura Social de Argentina y Políticas Públicas durante la pandemia por COVID-19 (ESAyPP/PISAC-COVID-19) relevada en la Argentina urbana entre octubre y diciembre de 2021. El universo de estudio de la ESAyPP/PISAC-COVID-19 es doble: los hogares y la población adulta residente en localidades de Argentina mayores a 50 mil habitantes (Dalle y Di Virgilio 2022). El diseño muestral probabilístico, estratificado y por conglomerados permite tres dominios de estimación: a nivel nacional, por regiones y por tamaño de los aglomerados. El tamaño de la muestra relevada es de 5 239 hogares y personas adultas, combinando amplia escala y cobertura. Para este estudio, nuestra unidad de análisis son personas de 18 años y más que hubieran estado trabajando al comienzo de la pandemia, en 2020 ( $n=3523$ ).

Nuestra estrategia de análisis será secuencial comenzando con análisis estadísticos descriptivos basados en la lectura de gráficos y luego, desarrollaremos un análisis inferencial basado en la lectura de modelos de regresión logística binaria con interacciones y modelos logísticos multinomiales. Los modelos de regresión logística binaria analizan la relación entre variables dependientes dicotómicas y variables independientes, pudiendo establecer el efecto de cada variable, una vez se controla por el resto; mientras que el modelo de regresión multinomial permitirá analizar los efectos de variables independientes sobre una variable dependiente categórica politómica, permitiendo comparar los efectos de cada variable independiente entre las distintas categorías de la variable dependiente.

Para definir el traspaso a la modalidad de teletrabajo, la encuesta cuenta con dos preguntas que preguntan por los impactos del COVID-19 en el ámbito laboral, una múltiple que analiza distintos

efectos, entre ellos la mantención del empleo en modalidades de teletrabajo o mixta y otra que consulta si estos impactos se mantienen al momento de la encuesta realizada a finales de 2021. Con ello, se construyó una tipología que pudiera medir impactos diferenciales en la transición hacia modalidades de teletrabajo, algunas reducidas durante el período de ASPO y DISPO y otras más permanentes. Para definir las posiciones de clase social se utilizará el esquema CASMIN (EGP), desarrollado por Erikson *et al.* (1979). Este esquema es de amplio uso a nivel internacional en trabajos sobre estratificación y movilidad social. Se utilizará una versión del esquema original adaptada para un trabajo comparativo en América Latina por Solís y Boado (2016) para dar cuenta de las particularidades de la estructura de clases de la región.<sup>[1]</sup>

A su vez, construimos una variable que permita caracterizar la experiencia en la sobrecarga de tareas de cuidado en el contexto de pandemia. Al respecto, la encuesta presenta una pregunta de respuesta múltiple que consulta por las tareas del hogar que, durante la pandemia, implicaron sobrecarga de trabajo. En base a las respuestas caracterizamos a las personas con sobrecarga en tareas de cuidado a aquellas que hubieran elegido tareas de cuidado de niños/as/es, acompañamiento en tareas escolares y cuidado de adultos mayores, discapacitados y/o enfermos. Por último, construimos una tipología que permitiera caracterizar las estrategias habitacionales durante la pandemia. En ella en base a distintas preguntas de la encuesta pudimos identificar a personas que hubieran hecho modificaciones de construcción de nuevos ambientes, cerramientos o subdivisiones de espacio; aquellas que hubieran alquilado casas o quintas durante la pandemia y las personas que mencionaron que habían tenido que realizar mudanzas forzosas en este período.

## 6.4 El teletrabajo en Argentina durante la pandemia del COVID-19

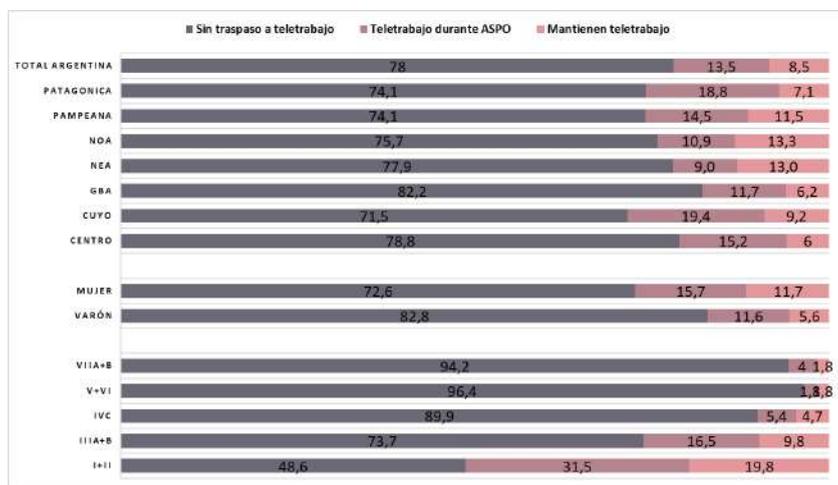
Las medidas de aislamiento y distanciamiento social fueron acompañadas por una medida de traspaso de ocupaciones administrativas y educativas al teletrabajo. Esta modalidad se implementó en Argentina para tratar de movilizar en el transporte público a la menor cantidad de personas y evitar el contagio masivo en los medios de transporte. Para ello se dispuso, a partir de políticas gubernamentales, incentivar el pasaje hacia el teletrabajo de todas las personas

---

[1] El principal cambio del esquema consistió en remover de la categoría pequeña burguesía a los trabajadores cuenta propia manuales de baja calificación típicas del sector informal (por ejemplo, vendedores ambulantes, trabajadores domésticos o trabajadores en servicios personales no calificados), reagrupándolos en la clase de trabajadores manuales no calificados.

que pudieran llevarlo adelante tanto de la administración pública como privada.

A partir del análisis de la Encuesta del Pirc-PISA-ESA, observamos que la pandemia generó impactos en la modalidad de trabajo en la población. En términos generales, casi el 22 % de la población argentina mantuvo su trabajo durante la pandemia en una modalidad de teletrabajo o mixta. Si bien el pasaje a la modalidad del teletrabajo venía teniendo lugar con anterioridad, la pandemia funcionó de catalizador, acelerando los cambios en la modalidad de trabajo en sectores donde el tipo de actividades y los bajos costos permitieron la rápida reconversión (Schteingart *et al.* 2021).



**Figura 6.1.** Traspaso a modalidades de teletrabajo en pandemia según región, clase y género. Población ocupada en 2020. Argentina urbana, 2021. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

Durante la pandemia, y ante la necesidad de generar nuevas dinámicas laborales que permitieran la continuación de la producción, el cambio hacia modalidades de teletrabajo o mixtas tuvo un impacto mayor en regiones del país donde la estructura productiva pudiera modificarse, lo que permitió sostener una gran proporción de ocupaciones y disminuir los impactos en el desempleo. Mientras que las regiones en donde el teletrabajo fue desarrollado de manera previa a la pandemia continuaron con el proceso de cambio hacia modalidades de teletrabajo; en otras regiones donde el teletrabajo no era tan común, pero presentaban estructuras productivas factibles de modificarse, se desarrollaron transiciones más rápidas hacia el teletrabajo.

La región de Cuyo encabeza estas pautas con un 28,52 % de cambios hacia modalidades de teletrabajo, siguiendo con las regiones pampeana y patagónica, regiones en las que el cambio ronda en el 26 % de la población. Estos cambios se dieron mayoritariamente tanto en ocupaciones directivas y de profesionales, como en ocupaciones del ámbito de la educación o trabajos que incorporan en sus actividades capacitaciones dictadas bajo esta modalidad, por lo que en su mayoría fueron cambios que solo tuvieron lugar durante los momentos donde las restricciones de movilidad fueron más limitadas. Por el contrario, encontramos menores pasajes al teletrabajo en el Gran Buenos Aires (17,85 %), región que ya había empezado con la dinámica del teletrabajo previo a la pandemia. En el resto de las regiones del país, la estructura productiva no permitió un dinamismo tan veloz, por lo que los cambios acompañaron los patrones nacionales.

La mayoría de las transiciones hacia el teletrabajo estuvieron concentradas en las etapas de ASPO, y perdieron relevancia con el desarrollo de las campañas de vacunación y la caída de los casos de internación y fallecimientos. El 60 % de las personas que desarrollaron transiciones hacia dinámicas de teletrabajo a partir de la pandemia, lo hicieron entre 2020 y 2021. Para conocer la especificidad del impacto de la pandemia en las transiciones hacia el teletrabajo presentamos el mapa 1, una tipología de impactos, según la articulación de casos que solo transicionaron hacia el teletrabajo durante los momentos de mayor restricción de la pandemia y aquellos casos donde los cambios parecieran ser permanentes.

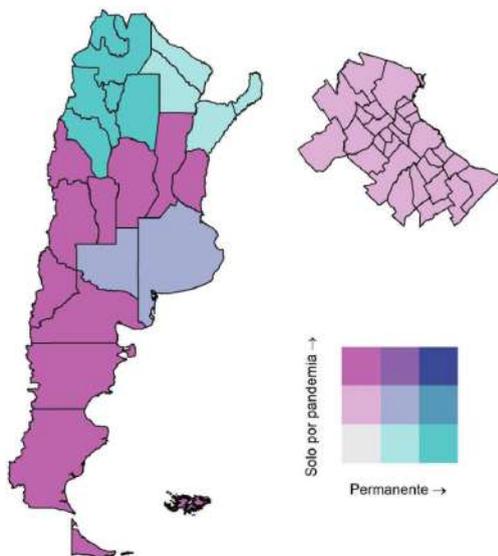
Este mapa divide en terciles la proporción de cambios hacia la modalidad de teletrabajo según si fueron cambios permanentes o solo durante las etapas donde la movilidad fue restrictiva (ASPO y DISPO). La combinación de ambas variables genera un cuadro donde se muestran tonalidades violetas para caracterizar la incidencia de la pandemia en las transiciones hacia el teletrabajo durante los períodos de ASPO y DISPO y en tonalidades azuladas para caracterizar las transiciones más permanentes. Así, los grisados más claros mostrarán bajos niveles de transición general y los más oscuros podrán mostrar mayores preeminencias de transiciones permanentes (en turquesa) o transiciones contextuales (en tonos violetas).

En la región del Centro, solo el 6 % de la población ocupada en 2020 incorporó en su trabajo modalidades de teletrabajo y las mantuvo luego de las aperturas a la movilidad. Estos cambios reflejan la distribución geográfica de áreas y sectores de producción capaces de incorporar el teletrabajo en sus dinámicas, más centradas en regiones donde exista un desarrollo del sector terciario, sobre todo cuando se considera la permanencia de estos cambios. Las regiones coloreadas de violeta muestran una transición hacia el teletrabajo

durante los períodos de mayores restricciones, mientras que las zonas más azuladas muestran regiones donde la permanencia del impacto fue mayor. Por ejemplo, el NOA (13.34 %) y NEA (13.03 %) marcan una pauta donde los trabajadores profesionales y directivos mantuvieron las dinámicas de teletrabajo hasta el momento de la encuesta, con bajos niveles de transiciones esporádicas. El área pampeana y del Gran Buenos Aires, por su parte, muestran niveles intermedios de transición esporádica y permanente hacia la modalidad de teletrabajo, ya que las pautas de estos cambios tuvieron lugar en momentos anteriores a la pandemia.

Más allá de la distribución geográfica, los impactos del cambio de la modalidad de trabajo reflejan los patrones de segregación ocupacional del país. Encontramos principalmente mayores impactos para la población femenina (27.41 %) que presenta transiciones hacia modalidades de teletrabajo en más de 10 pp, respecto de los varones (17.17 %). Estas pautas reflejan los patrones de segregación ocupacional por género que presenta la estructura poblacional argentina. En ella, las mujeres suelen desarrollar principalmente tareas en el sector educativo y terciario, sectores afectados por la pandemia que tuvieron que reconvertir las modalidades de trabajo y dar paso a la virtualidad de la enseñanza educativa. En este punto es necesario comentar que en las ramas de actividad mayormente masculinizadas, pertenecientes al sector primario y secundario, las mujeres suelen ocuparse de tareas administrativas, factibles en mayor medida de pasar a modalidades de teletrabajo (Schteingart *et al.* 2021). En contraposición, la mayoría de los empleos manuales no pudieron traspasar hacia lógicas de teletrabajo afectando principalmente a varones en actividades primarias y secundarias y a mujeres que se desarrollaban tareas de servicio doméstico.

En definitiva, vemos que la mayoría de las reconversiones hacia dinámicas de teletrabajo se concentraron en el sector terciario, en ocupaciones administrativas, profesionales y de dirección y en el sector educativo. Estas pautas, se confirman al analizar los efectos de las reconversiones del teletrabajo según clase social. En la figura 6.1 vemos que las personas pertenecientes a clase de servicios fueron las que tuvieron mayores probabilidades de incorporar el teletrabajo a sus ocupaciones. Más de la mitad de las personas de clase de servicios (51,36 %) incorporaron el teletrabajo a sus ocupaciones, tendencia que disminuye a la mitad para las personas que pertenecen a clases no manuales de rutina (IIIa+b) y prácticamente desaparecen para las posiciones de clase manuales calificadas (V y VI) y no calificadas (VIIa+b). Estas pautas del impacto según la clase social permiten pensar en la articulación de las posiciones ocupacionales, sectores de actividad y nivel educativo de las personas.



**Figura 6.2.** Modalidad de teletrabajo a partir de 2020 según regiones. Población ocupada en 2020. Argentina urbana, 2021. Fuente: elaboración propia PIRC-ESA 2021.

## 6.5 Condicionantes en el traspaso a modalidades de teletrabajo en contexto de COVID-19

Los efectos de la crisis sanitaria del COVID-19, afectaron a todos los países del globo en mayor o menor medida. En el caso de Argentina si bien este efecto atravesó a toda la sociedad, no lo hizo del mismo modo. Las crisis económicas, en este caso derivadas del efecto del COVID-19, no afectan a todas las clases sociales por igual, tampoco afectan a todas edades del mismo modo, o al género. Es por ello, que nos interesa conocer cómo impactó el traspaso del teletrabajo a las clases sociales y al género.

Nuestro enfoque está centrado en una perspectiva de clases sociales, medido a través del EGP (Erikson *et al.* 1979). Se utilizará una versión del esquema original adaptada para un trabajo comparativo en América Latina por Solís y Boado (2016) para dar cuenta de las particularidades de la estructura de clases de la región. Las categorías de las clases las llamaremos:

- 1) clase de servicios (profesional, gerencial y propietaria de capital);
- 2) clase no manual de rutina (técnica, comercial y administrativa);
- 3) pequeña burguesía;
- 4) clase trabajadora semi y calificada);

- 5) clase trabajadora no calificada. En la práctica, esta tarea conlleva el agrupamiento de ocupaciones que presentan semejanzas, desde el punto de vista de la situación del trabajo y de mercado, lo cual implica oportunidades de vida similares para las familias y sus descendientes (Goldthorpe 1993).

El traspaso hacia el teletrabajo funcionó para proteger el empleo de la población de una manera particular, brindando mayores resguardos a grupos más privilegiados y/o cercanos a ramas de actividad donde la reconversión muchas veces estaba desarrollándose con anterioridad en otras regiones del globo. En el cuadro 6.1 mostramos las oportunidades relativas de la población de acceder a las modalidades de teletrabajo en pandemia según un conjunto de variables

**Cuadro 6.1. Regresión logística binaria en las chances de desarrollar teletrabajo durante la pandemia según variables independientes. Personas ocupadas en 2020. Argentina urbana, 2021.**

	Modelo 1	Modelo 2
REGIONES (Ref.: CENTRO)		
CUYO	1.26	1.26
GBA	0.82	0.82
NEA	1.20	1.20
NOA	1.42°	1.43°
PAMPEANA	1.12	1.12
PATAGÓNICA	1.42	1.43
CLASE SOCIAL (Ref.: Clase manuales no calificadas - VIIa+b)		
Clase de servicios - I+II	8.53***	8.50***
Clase no manual de rutina - IIIa+b	3.60***	3.59***
Pequeña Burguesía - IVabc	1.37	1.37
Manuales calificados y semi calificados - V+VI	0.66	0.66
CLASE SOCIAL (Ref.: Clase manuales no calificadas - VIIa+b) Género (Ref.: HOMBRE)		
Mujer	1.67***	
GRUPO DE EDAD (Ref.: 60 años y más)		
18 a 29	1.28	1.27
30 a 49	1.74**	1.74**
50 a 59	1.00	1.01

*Continúa en la página siguiente*

<i>Viene de la página anterior</i>		
	<b>Modelo 1</b>	<b>Modelo 2</b>
Nivel educativo (Ref.: Hasta Secundario incompleto)		
Universitario completo	1.51*	1.52**
Terciario completo	2.52***	2.53***
Universitario incompleto	2.13***	2.14***
Terciario incompleto	1.16	1.18
Secundario completo	1.15	1.15
Nivel educativo (Tenencia de hijxs (Ref.: Sin hijxs)		
Hijxs convivientes de hasta 12 años	0.68**	
Hixs convivientes de 13 años o más	0.97	
Nivel educativo (Tenencia computadora (Ref.: No tiene computadora)		
Tiene computadora	5.50***	5.48***
Nivel educativo (Interacción Género x Tenencia de hijxs (Ref.: Varones sin hijxs)		
Varones con hijxs convivientes de hasta 12 años		0.67*
Varones con hijxs convivientes de 13 años o más		1.12
Mujeres sin hijxs		1.78***
Mujeres con hijxs convivientes de hasta 12 años		1.01
Mujeres con hijxs convivientes de 13 años o más		0.76
Pseudo R2	0.2672	0.2676
n		3.523

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021). \*\*\*  $p < 0.01$ , \*\*  $p < 0.05$ , \*  $p < 0.1$ .

independientes. Al analizar las chances de acceder a la modalidad de trabajo vemos que, una vez controlado por el resto de las variables independientes, la posición de clase condiciona significativamente el modelo. Así, las personas pertenecientes a la clase de servicios tienen 8.53 veces más chances de transicionar hacia modalidades de teletrabajo en la pandemia que las personas en posiciones de clase manuales no calificadas (VIIa + b) y se reducen fuertemente para las personas de clase no manual de rutina (III a +b) (3.60 odds ratio). Mientras que, la calificación de las posiciones de clase no manuales no genera diferencias significativas en las chances de acceso a la modalidad de teletrabajo.

Por otro lado, vemos que los atributos personales también condicionan las chances del traspaso hacia modalidades de teletrabajo. Específicamente mientras las mujeres tienen más de una vez y media más chances de traspasar al teletrabajo que los varones, por las ramas de actividad y las posiciones ocupacionales en las que se desempeñan, tendencias que se refuerzan cuando no se tiene hijos. Al incorporar interacciones entre género y tenencia de hijxs, vemos que las mujeres sin hijxs presentan casi dos veces más chances de transicionar hacia modalidades de teletrabajo o mixtas que los varones sin hijxs. La tenencia de hijxs pequeños hace que los varones tengan menos chances de transicionar hacia modalidades de teletrabajo que los varones que no tienen hijxs; mientras que la tenencia de hijxs para las mujeres, si bien reduce las chances de traspaso a estas modalidades, las asemeja a las que presentan los varones sin hijxs.

La edad, a nivel mundial y en Argentina, condiciona el traspaso al teletrabajo, seguramente ser nativo digital o manejar las herramientas digitales posibilita con más frecuencia este tipo de modalidad. En este sentido, el teletrabajo es más habitual entre personas de 30 a 49 años y aquellas personas con niveles educativos de superior completo y universitario incompleto. En nuestro análisis, podemos especificar el efecto que la educación superior tiene en las probabilidades de acceso a modalidades de trabajo. A mayor nivel educativo más posibilidades de realizar trabajos a distancia. Específicamente vemos que quienes cuentan con educación de nivel terciario completo presentan 2.52 veces más chances de acceder a una modalidad de teletrabajo que quienes cuentan con bajos niveles educativos de hasta secundario incompleto. Estas pautas pueden comprenderse por la estrecha vinculación de la educación terciaria con el sector educativo y con ocupaciones administrativas y de gestión educativa.

Estas tendencias continúan entre quienes cuentan con niveles de universitario incompleto, muchas veces vinculados a trabajos no manuales rutinarios y técnicos que presentan 2,13 veces más chances de transicionar hacia la modalidad de teletrabajo que quienes cuentan con hasta secundario incompleto. Si bien las personas con universitario completo presentan menores chances de traspaso hacia la modalidad de trabajo que el resto de los niveles educativos analizados (1,51 odds ratio), el menor efecto de estos niveles educativos tiende a vincularse a un traspaso anterior hacia la modalidad de teletrabajo, incrementándose durante la pandemia (Schteingart *et al.* 2021). La tendencia hacia esquemas mixtos de teletrabajo y presencial se viene desarrollándose en distintas metrópolis del mundo para las personas con mayores niveles educativos, esto les permitió una mayor flexibilidad de la extensión jornada de trabajo y del espacio en donde lo realizan.

Por último, la tenencia de computadora en el hogar también incrementó las chances de traspaso hacia la modalidad de teletrabajo. Las personas que contaban con computadora en el hogar pasaron hacia modalidades de teletrabajo en cinco veces y media más que quienes no contaban con computadoras en el hogar. Estas pautas nos permiten hipotetizar sobre la necesidad de transicionar hacia modelos de teletrabajo en reconversiones de ocupaciones que hoy son no teletrabajables. Durante la pandemia, los docentes, trabajadores administrativos y técnicos fueron quienes traicionaron hacia modalidades obligadas de teletrabajo que no podrán mantenerse luego de la apertura de actividades no esenciales.

A lo largo de este apartado hemos visto que la posibilidad de acceder a modalidades de teletrabajo no estuvo igualmente distribuida en toda la sociedad, afectando principalmente a personas pertenecientes a la clase de servicios, de altos niveles educativos, mujeres y rangos de edad que abarcan desde los nativos digitales hasta la franja de 30 años. Si bien estas pautas muchas veces se interpretan como privilegios para la población, específicamente por la posibilidad del resguardo del empleo y del salario, suponen también cambios en las dinámicas familiares y los modos de vida en los hogares. En los próximos apartados nos centraremos en analizar los impactos que estos cambios tuvieron en la vida cotidiana de las personas.

## 6.6 Los efectos del COVID en la vida cotidiana: sobrecargas de cuidado teniendo en cuenta el teletrabajo

A lo largo de la pandemia, se desarrollaron discursos en relación a las personas que lograron hacer la transición hacia modalidades de teletrabajo como privilegiadas. Sin embargo, las pautas de estudios en distintos países muestran que «la superposición de tiempos y espacios de las actividades cotidianas ha constituido una fuente de tensión en el desarrollo del trabajo remunerado tanto para los hombres como para las mujeres y, coincidiendo con lo observado en otra encuesta (Eurofound 2020), un deterioro general de la conciliación de la vida laboral y familiar para las madres y padres con niños, niñas en edad escolar» (Actis Di Pasquale *et al.* 2021, pág. 56). Asimismo, estas complicaciones y superposición de la vida familiar y laboral están atravesadas por la desigualdad de género.

Las pautas que se desprenden de algunas investigaciones (Farré *et al.* 2020; Feng y Savani 2020; Qian y Fuller 2020) muestran cómo las mujeres en la pandemia del COVID-19 son las que se han visto más afectadas y han sobrellevado las cargas domésticas y de cuidado de niños/as y personas mayores. Estas desigualdades, Vinculadas a una distribución desigual del trabajo doméstico y de cuidados del hogar (Prieto y Pérez de Guzmán 2013), no son nuevas, pero se reforzaron y

visibilizaron durante la pandemia. Por la dinámica de la enfermedad y sus efectos en los contagios y muertes el paso al teletrabajo se realizó de forma contundente, por las premuras de la situación mundial lo que hizo que la vida familiar y laboral sufriera modificaciones derivadas de la falta de la institución escolar. Asimismo, los efectos de la transición al teletrabajo repentina tuvieron su impacto también en la vivienda y las formas en que los espacios fueron habitados, producto también de la superposición de las esferas laborales y familiares.

Por ello, nos interesa abordar algunos efectos del teletrabajo en la vida cotidiana respecto de la sobrecarga de tareas de cuidado y la necesidad de realizar modificaciones en la vivienda para adaptarla al trabajo, a través de dos regresiones binarias. En estas regresiones analizaremos el efecto del teletrabajo y su articulación con la clase social, el género, las regiones de residencia y la composición familiar. Presentaremos dos regresiones hechas por modelos anidados que permitirán analizar los efectos y variaciones de cada uno al incorporar distintos bloques teóricos.

En el cuadro 6.2 analizamos las probabilidades de haber alcanzado sobrecarga en las tareas de cuidado durante la pandemia por bloques anidados. Al incorporar todos los bloques teóricos, encontramos que las personas que habitan las regiones de NEA (2.43), Pampeana (2.31), Cuyo (2.16) y GBA (1.80) prácticamente duplican las probabilidades de desarrollar una sobrecarga de cuidado que las personas que viven en la región de centro; mientras que en el NOA (2.80) las probabilidades se triplican.

En el modelo introducimos la interacción entre posición de clase y teletrabajo. Aquí vemos que las personas de clase manual no calificada que hubieran incorporado la modalidad de teletrabajo durante la pandemia tienen poco más de siete veces más chances de experimentar sobrecarga en las tareas de cuidado que las personas de clase de servicios que no teletrabajan. Tendencias similares, aunque más reducidas, se presentan en las personas que clase no manual de rutina que teletrabajaban. Este grupo presenta dos veces más chances de desarrollar sobrecarga en las tareas de cuidado que las personas que pertenecen a la clase de servicios y no teletrabajan. Las familias despliegan estrategias diferenciales para abordar las responsabilidades de cuidado intrafamiliar según la posición de clase y la modalidad de trabajo que presentan. Así, trabajar desde el hogar en una dinámica de teletrabajo suele aumentar las probabilidades de experimentar sobrecargas en las tareas de cuidado cuando se pertenece a posiciones de clase que relegan las responsabilidades de las tareas de cuidado a miembros del hogar. Aquí notamos que es la posibilidad de delegar las tareas de cuidado en otros miembros del hogar o trabajadoras de servicio doméstico lo que serviría como

**Cuadro 6.2. Regresión logística binaria en las chances de desarrollar sobrecarga de tareas de cuidado durante la pandemia según variables independientes. Personas ocupadas en 2020. Argentina urbana, 2021.**

	Modelo 1
REGIONES (Ref.: CENTRO)	
CUYO	2.16***
GBA	1.81***
NEA	2.43***
NOA	2.80***
PAMPEANA	2.31***
PATAGÓNICA	1.18
CLASE SOCIAL (Ref.: Clase de servicios - sin teletrabajo)	
Clase no manual de rutina sin teletrabajo	0.93
Pequeña burguesía sin teletrabajo	0.70*
Manuales calificados y semicalificados sin teletrabajo	0.82
Clase manuales no calificadas – sin teletrabajo	0.60**
Clase de servicios con teletrabajo	0.52***
Clase no manual de rutina con teletrabajo	2.05*
Pequeña burguesía con teletrabajo	1.20
Manuales calificados y semicalificados con teletrabajo	0.65
Clase manuales no calificadas con teletrabajo	7.25***
Género (REF.: HOMBRE)	
Mujer	1.30**
Grupo de edad (Ref.: 60 y más)	
18-29	0.84
30-49	1.09
50-59	0.91
Nivel educativo (Ref.: Hasta Secundario incompleto)	
Universitario completo	1.50*
Terciario completo	1.02
Universitario incompleto	1.53*

*Continúa en la página siguiente*

<i>Viene de la página anterior</i>	
	<b>Modelo 1</b>
Terciario incompleto	1.16
Secundario completo	1.20
Familia (Ref.: Unipersonal)	
Parejas sin hijos	0.11***
Monoparental con hijos	0.61**
Nuclear completa	0.85
Familia extendida	0.49***
No familiar	0.19*
Presencia de niños/as menores de 12 años	8.35***
Pseudo R2	0.2240
n	3.523

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021). \*\*\*  $p < 0.01$ , \*\*  $p < 0.05$ , \*  $p < 0.1$ .

resguardo ante la posibilidad de alcanzar una sobrecarga de tareas de cuidado en la pandemia.

Por otra parte, encontramos que las personas que tienen un nivel educativo universitario (completo e incompleto) se vieron más expuestas a la sobrecarga de tareas de cuidado, principalmente en la época de ASPO, al verse obligadas a salir a trabajar por fuera del hogar y no contar con redes de cuidado comunitarias, como suelen desarrollarse cuando se tienen menos niveles educativos (Estévez Leston y Morán 2020). La pandemia y el traspaso al teletrabajo se presentan como un arma de doble filo que expone a las personas a una mayor sobrecarga de cuidado ya sea por la falta de redes comunitarias de cuidado o bien por la imposición a la realización de trabajo en contextos familiares que demandan la realización de tareas de cuidado.

La literatura sobre el análisis de los efectos de la pandemia ha demostrado pautas sólidas en distintos países respecto a la sobrecarga de cuidado que las mujeres han tenido durante la pandemia tanto en Argentina (Actis Di Pasquale *et al.* 2021) como en el resto del mundo (Farré *et al.* 2020; Feng y Savani 2020; Qian y Fuller 2020). Las mujeres fueron las que más cargaron con los cuidados de personas adultas e infancias en el hogar, así como las cargas domésticas y su articulación con las responsabilidades laborales y el traspaso hacia otras modalidades de trabajo. En el modelo de regresión presentado,

vemos que las mujeres tienen 1.30 veces más chances de desarrollar una sobrecarga en las tareas de cuidado que los varones.

Por último, la composición familiar es la variable que afecta en mayor medida las chances de desarrollar una sobrecarga de cuidado. Mientras que la presencia de infantes en el hogar aumenta más de ocho veces las chances de experimentar sobrecarga tareas de cuidado durante la pandemia, el tipo de familia permitiría aliviar esta sobrecarga al brindar la posibilidad de compartir las responsabilidades con otros miembros. Así, las personas que pertenecen a familias extendidas, es decir, que cuentan con más miembros adultos por fuera del núcleo familiar, reducen las chances de desarrollar sobrecargas en las tareas de cuidado. En contraposición, las familias monoxarentales tienden a mantener sobrecargas similares a las experimentadas previamente a la pandemia. La presencia de hijos/as y familiares es un determinante de la posibilidad de desarrollar una sobrecarga en tareas de cuidado, al generar posibilidades de desplegar distintas estrategias de cuidado intrafamiliar.

## **6.7 Los efectos de la pandemia del COVID-19 en la ampliación y modificación de las viviendas teniendo en cuenta el teletrabajo**

Las medidas sanitarias adoptadas durante el principio de la pandemia COVID-19 reestructuraron las modalidades de trabajo y, con ello, las dinámicas familiares al interior de los hogares. En este punto, nos interesa conocer la manera en la que los cambios en el mundo del trabajo que supuso la pandemia hacia modalidades de teletrabajo o mixtas condicionaron distintas estrategias habitacionales durante la pandemia. Más específicamente, identificar la manera en la que el traspaso hacia el teletrabajo, articuladamente con otras dimensiones, promueven diferencialmente modificaciones en las viviendas en base a la construcción y/o subdivisión de espacios; alquileres de casas y quintas y mudanzas forzosas.

Para ello, incorporamos un modelo de regresión multinomial que analice la relación de riesgos relativos que el traspaso hacia modalidades de teletrabajo impone en el desarrollo de distintas estrategias habitacionales y su articulación con otras variables independientes. La relación de riesgos relativos (RRR) analiza la relación entre la incidencia de una categoría de una variable independiente dentro de un grupo específico y la incidencia dentro del grupo de control. Esto permitirá analizar los efectos diferenciales de cada variable independiente en dos categorías de la variable dependiente, pudiendo establecer qué factores aumentan las probabilidades de acceder a cada una de estas categorías. De esta manera, puede diferenciarse el efecto que cada categoría de las variables independientes tienen, sin

por ello suponer que los riesgos que cada variable deben superponerse entre sí. Dos variables independientes pueden aumentar riesgos relativos de manera separada y/o articulada entre sí.

En nuestro modelo, consideraremos como categoría de control a la falta de cambios en la vivienda durante la pandemia y compararemos los efectos de un conjunto de variables independientes sobre la posibilidad de aumentar (o disminuir) los riesgos de desarrollar otras estrategias habitacionales durante la pandemia de manera comparativa. El cuadro 6.3 muestra los distintos modelos para cada estrategia habitacional mostrando la especificidad de la articulación de la región, clase social, régimen de tenencia de la vivienda, conformación familiar, atributos individuales y características de la modalidad de trabajo empleada durante la pandemia. Los valores mayores a uno mostrarán un aumento de los riesgos de desarrollar cada estrategia habitacional respecto de la de control, mientras que los valores menores a uno mostrarán un menor riesgo relativo.

En nuestro modelo vemos que la región de residencia condiciona las estrategias habitacionales demarcadas durante la pandemia. Encontramos específicamente que vivir en la región patagónica prácticamente cuadruplica las oportunidades de construir nuevas habitaciones o subdivisiones en las viviendas habitadas; mientras que habitar en el GBA o en el NEA promueve el alquiler de casas y quintas en búsqueda de viviendas más grandes y con mayores espacios verdes. En contraposición, habitar la región NOA, GBA o Pampeana reduce los riesgos de desarrollar mudanzas forzosas, cuando se lo compara con la mantención de la vivienda sin cambios.

Por otra parte, encontramos que la posición de clase condiciona el despliegue de estrategias habitacionales durante la pandemia. Mientras que las personas que pertenecen a la clase de servicios tendieron a alquilar casas y quintas en búsqueda de espacios habitacionales más amplios y con espacios verdes; las clases manuales, sin importar su calificación, por la condición de inquilinxs se vieron forzadas a mudarse a nuevas viviendas. Las posibilidades de construcción de nuevas habitaciones o subdivisiones en los ambientes tienden a verse relegadas hacia personas de clase manual no calificada y, en menor medida, a la pequeña burguesía; especialmente entre grupos propietarios de viviendas y terrenos.

En tanto las características sociodemográficas de las personas, encontramos que no hay diferencias significativas en el despliegue de estrategias habitacionales según género, sino más bien por el momento del curso de vida en que cada persona y su familia se emplazan. Así, vemos que las personas jóvenes (18-29 años) quintuplican las probabilidades de realizar construcciones durante la pandemia; mientras que las personas que se encuentran en el final de su trayectoria

laboral, tuvieron mayores posibilidades de alquilar casas y quintas para pasar los tiempos de distanciamiento y aislamiento social.

De este modo, las pautas indican que son los jóvenes adultos, en proceso de conformación de unidades familiares propias quienes tienen mayores chances de modificar sus viviendas para adaptarlas al uso cotidiano de las familias. El momento del curso de vida que transitan les vuelve más propensos a realizar modificaciones y construcción de vivienda, aún en contexto de pandemia y no necesariamente a causa de ella. Una pauta que no continúa para personas con trayectorias ocupacionales y familiares ya estabilizadas, que les dan acceso a mayores ingresos, y menores exigencias familiares, que promueven el desarrollo de estrategias habitacionales que permitan acceso y la búsqueda de viviendas más amplias y con espacios verdes.

Estas tendencias son congruentes con la incorporación del tipo de familia en el modelo. Ante esto, vemos que las unidades familiares y, sobre todo, cuando se tienen hijos u otros miembros de la familia conviviendo promueven fuertemente el desarrollo de construcciones y subdivisiones en la vivienda, en búsqueda de mejoras habitacionales que aseguren espacios privados para las familias. La significancia de esta variable desaparece para el resto de las estrategias habitacionales, desplegadas por sujetos en otro momento del curso de vida o con otra posición respecto de la tenencia de las viviendas. En este sentido es interesante remarcar que, a diferencia de los efectos en las tareas de cuidado, en el despliegue de estrategias habitacionales, no será la presencia de niños/as/es el determinante, sino la conformación familiar en general y la búsqueda de espacios privados al interior de las viviendas. Por último, respecto del nivel educativo encontramos que las personas que acceden a la educación superior tienden a tener más oportunidades de desplegar cambios habitacionales (forzados o deseados) durante la pandemia.

Para finalizar, incorporamos en el modelo la caracterización de las modalidades de trabajo durante la pandemia. Aquí vemos que, una vez controlado por el resto de las variables, el traspaso hacia modalidades de teletrabajo causa la búsqueda de estrategias habitacionales que alivianen la dilución de las fronteras entre el mundo de la vida privada y el mundo laboral. La necesidad de traer el trabajo al hogar, promueve el despliegue de estrategias habitacionales que permitan acceso a espacios de trabajo específicos y separados de la vida cotidiana, aunque de manera diferencial según el momento del curso de vida que cada familia transite. En contraposición, compartir los dispositivos electrónicos con otros miembros del hogar, solo obstruye la posibilidad de alquilar casas o quintas, un aspecto más vinculado al nivel de ingresos por familiares que a un determinante del despliegue de estrategias habitacionales durante la pandemia.

**Cuadro 6.3. Regresión logística multinomial en las chances de desarrollar cambios en la vivienda durante la pandemia según variables independientes. Personas ocupadas en 2020. Argentina urbana, 2021.**

	Construcción	Alquiler casa/quinta	Mudanza forzosa
REGIONES (Ref.: CENTRO)			
CUYO	1.50	4.78	0.91
GBA	0.89	14.06*	0.46***
NEA	1.07	13.54*	0.78
NOA	1.82	7.06°	0.50**
PAMPEANA	1.25	1.12	0.51**
PATAGONICA	3.80**	4.68	0.81
CLASE SOCIAL (Ref.: Clase de servicios - I + II)			
Clase no manuales de rutina - IIIa+b	0.87	0.11**	1.55°
Pequeña Burguesía - IVa+b+c	1.85°	0.11**	1.91*
Clase manual calificada y semicalificada - V+VI	2.18°	7.73e-08	2.72***
Clase manual no calificada VIIa+b	2.91**	0.04**	2.59***
Régimen tenencia (Ref.: Ocupante)			
Propietarix vivienda y terreno	2.11*	0.86	1.08
Propietarix vivienda	1.69	1.15	0.62
Inquilinx	0.75	0.59	2.40***
Género (Ref.: HOMBRE)			
Mujer	0.93	0.95	0.86
GRUPO DE EDAD (Ref.: 60 años y más)			
18-29	4.51*	3.27°	0.95
30-49	2.95°	0.91	1.20
50-59	2.59	3.67*	0.93
Nivel educativo (Ref.: Hasta Secundario incompleto)			
Universitario completo	1.76	2.40	2.66***
Terciario completo	2.13*	0.85	1.60°
Universitario incompleto	2.46*	3.14	3.93***
Terciario incompleto	1.72	4.77e-07	1.31
Secundario completo	1.37	1.21	1.31
<i>Continúa en la página siguiente</i>			

*Viene de la página anterior*

	Construcción	Alquiler casa/quinta	Mudanza forzosa
Familia (Ref.: Unipersonal)			
Parejas sin hijos	7.75**	0.94	1.84*
Monoparental con hijos	7.28**	0.06*	1.53°
Nuclear completa	8.34***	0.39°	1.00
Familia extendida	5.43**	0.89	1.16
No familiar	6.60e-70	1.87e-07	1.20
Tenencia hijxs convivientes (Ref.: No tiene)			
Hijos convivientes de hasta 12 años	1.11	0.83	1.07
Teletrabajo (Ref.: Sin teletrabajo)			
Con teletrabajo	2.39**	2.53*	1.16
Compartir dispositivos con otros miembros (Ref.: No)			
Sí	1.42	0.13°	1.31

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021). \*\*\*  $p < 0.01$ , \*\*  $p < 0.05$ , \*  $p < 0.1$ .

## 6.8 Consideraciones finales

En este capítulo nos interrogamos sobre la manera en la que el traspaso al teletrabajo en contextos de COVID-19 influyó en la vida cotidiana de las personas. Si bien este pasaje se interpreta como privilegios para la población, específicamente por la posibilidad del resguardo del empleo y del salario, suponen también cambios en la modalidad y las condiciones de trabajo, así como estrés en el aprendizaje de nuevos programas o herramientas para desempeñar la tarea. El pasaje a teletrabajo trae muchas veces cambios en las dinámicas familiares y los modos de vida en los hogares. En este capítulo nos interesó conocer cómo el COVID-19 impactó en las dinámicas laborales, favoreciendo el traspaso hacia el teletrabajo y las consecuencias que esto trajo en la vida cotidiana de las personas.

Comenzamos identificando pautas en la distribución de las probabilidades de traspasar hacia modalidades de teletrabajo según regiones del país y las características sociodemográficas de la población. En base a un análisis descriptivo identificamos diferencias en la transición hacia modalidades de teletrabajo, algunas que se mantuvieron hasta la actualidad y otras temporales, surgidas como respuesta a las políticas de aislamiento social.

Encontramos mayores efectos permanentes en la región Norte del país y en la región Pampeana. En Cuyo, Centro y Patagonia, los cambios tendieron a darse principalmente durante los períodos

donde la movilidad fue más restrictiva y las políticas de aislamiento social, más fuertes. Por otra parte, las mujeres y las clases más altas (de servicios e intermedias) tendieron a desplegar en mayor medida transiciones hacia el teletrabajo y, sobre todo, en dinámicas que tendieron a mantenerse a lo largo del tiempo. Estas tendencias fueron reafirmadas a través de la lectura de modelos de regresión logística que permitieron diferenciar los efectos propios de cada una de estas variables al condicionar la probabilidad de desarrollar teletrabajo a partir de la pandemia.

En este punto y frente a la idea de que la presencia del trabajo en el hogar tendió a diluir las fronteras entre la vida laboral y doméstica durante la pandemia, quisimos conocer qué efectos tuvo este en la vida cotidiana de la población, centrándonos en dos dimensiones principales, la sobrecarga en tareas de cuidado y las estrategias habitacionales. Para ello, presentamos modelos de regresión que permitieron ver el efecto que el teletrabajo tenía, articulado con las regiones de residencia, el género, la clase, características de la conformación familiar, etcétera, en las chances de percibir sobrecargas en las tareas de cuidado y en los riesgos relativos de desarrollar estrategias habitacionales diferenciales en contexto de pandemia.

La obligación de restringir la movilidad y la interacción entre personas, junto con el cierre de instituciones obligó a las familias a hacerse cargo en mayor medida de las tareas de cuidado de sus familiares. Sin embargo, estas tareas no fueron igualmente distribuidas en toda la sociedad, ni al interior de las familias. Del análisis de los datos, encontramos que vivir en el Centro y la Patagonia reduce las chances de experimentar sobrecargas en las tareas de cuidado.

Al interior de las posiciones de clase social, encontramos que la situación de teletrabajo impone condicionamientos diferenciales en las chances de desarrollar sobrecarga en las tareas de cuidado. Encontramos que el teletrabajo afecta diferencialmente a las clases sociales al modificar las estrategias de cuidado familiar, especialmente por la falta de instituciones que puedan sostener parte de las tareas de cuidado (OIT sin fecha).

El traspaso al teletrabajo afecta de manera principal a personas de clase manual no calificada y en clase no manual de rutina, aumentando las chances de experimentar sobrecargas en las tareas de cuidado; mientras que, cuando no se teletrabaja, suele haber mayores probabilidades de sobrecarga en clase de servicios, por la falta de acceso a la terciarización de estas tareas. Estas tendencias se reforzaron con la incorporación del nivel educativo en el modelo, mostrando mayores chances de sobrecarga en tareas de cuidado en personas nivel educativo universitario. En este contexto, la falta de redes de cuidado comunitarias (tanto familiares como vecinales) impuso un aumento de la sobrecarga en tareas de cuidado en sectores que, previamente,

tendían a desplegar estrategias de cuidado sostenidas por el trabajo tercerizado (Estévez Leston y Morán, 2020). La terciarización de las tareas de cuidado que, por la distancia y el ASPO, no era posible, por lo que aumentan las chances de experimentar sobrecarga en estas tareas.

Al mismo tiempo, como se observa en otros trabajos, las tareas de cuidado y crianza recaen en las mujeres, propiciando la sobrecarga ante las nuevas dinámicas familiares desarrolladas durante la pandemia. Las estrategias de cuidado varían según la conformación familiar, incrementando las probabilidades de sobrecarga en familias con niñxs pequeñxs y pudiendo reducirse según el tipo de familia, cuando pueden redistribuir las tareas con otros miembros.

Finalmente, las cuestiones importantes de este capítulo nos permitieron profundizar en qué medida las personas, durante el impacto de la pandemia, tuvieron que desplegar nuevas estrategias habitacionales para poder transitar la situación que estaban viviendo. Así encontramos que la posición de clase y los atributos individuales de las personas tienen a condicionar el despliegue de distintas estrategias habitacionales durante pandemia (construcción de nuevas habitaciones, mudanzas forzosas y alquileres de casas y quintas) según el momento del curso de vida y las características de la familia con quien se comparta la vivienda. En este contexto, el traspaso hacia modalidades de teletrabajo favorece el despliegue de estrategias habitacionales que permitan el acceso a espacios que permitan la división de la cotidianeidad y el mundo del trabajo; como así también, ambientes privados para los distintos miembros del hogar.

La pandemia del COVID-19 modificó las dinámicas de la vida cotidiana de la población. La virtualización de parte del mercado laboral y la escolarización diluyeron las fronteras entre la vida familiar y laboral, tensionando modelos familiares al generar sobrecarga en las tareas de cuidado y obligando a desarrollar estrategias habitacionales particulares que faciliten el contexto de vida. Así, pueden identificarse impactos directos del COVID-19 tanto en el mercado laboral, como en las dinámicas de trabajo e indirectos, a través de las consecuencias que estos impactos tuvieron en la vida cotidiana de las personas. Lograr una completa comprensión de los efectos e impactos del COVID-19 en la población supone un desafío enorme para investigadores que exige diferenciar efectos directos de las consecuencias que estos tienen en la vida cotidiana. El trabajo sobre esta diferenciación permite abrir interrogantes para pensar políticas públicas que tengan en cuenta y alerten sobre estas cuestiones en pos de mejorar la vida de las personas y generar mejores condiciones de vida.

## Referencias

- ACTIS DI PASQUALE, EUGENIO; M. IGLESIAS-ONOFRIO y S. PÉREZ DE GUZMÁN  
2021 «Teletrabajo, vida cotidiana, desigualdades de género en Iberoamérica. La experiencia del confinamiento originado por la pandemia COVID-19 como laboratorio», en *Revista de Economía Crítica*, n.º 31, págs. 44-61, referencia citada en páginas 160, 170, 173.
- ALBRIEU, RAMIRO  
2020 *Evaluando las oportunidades y los límites del teletrabajo en Argentina en tiempos del COVID-19*, Buenos Aires: CIPPEC, referencia citada en página 159.
- ALBRIEU, RAMIRO; MATEO ALLERAND y PABLO DE LA VEGA  
2021 «El teletrabajo en Argentina. Pandemia y después», en *Documento de Trabajo CIPPEC*, n.º 203, referencia citada en página 160.
- ALIPOUR, JEAN-VICTO; HARALD FADINGER y JAN SCHYMIK  
2020 «My Home Is my Castle. The Benefits of Working from Home during a Pandemic Crisis», en *IFO Working Papers*, Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich, vol. 329, referencia citada en página 159.
- AVDIU, BESART y GAURAV NAYYAR  
2020 *When Face-to-Face Interactions Become an Occupational Hazard. Jobs in the Time of COVID-19*, World Bank, referencia citada en página 159.
- BELZUNEGUI ERASO, ÁNGEL  
2002 *Teletrabajo, estrategias de flexibilidad*, Consejo Económico y Social de España, referencia citada en página 159.
- BONAVIDA FOSCHIATTI, CRISTIAN y LEONARDO CARLOS GASPARINI  
2020 «Asimetrías en la viabilidad del trabajo remoto: estimaciones e implicancias en tiempos de cuarentena», en *Económica*, n.º 66, referencia citada en página 160.
- DALLE, PABLO y MARÍA MERCEDES DI VIRGILIO  
2022 «Estructura social de Argentina y políticas públicas durante la pandemia de COVID-19: el diseño de una encuesta nacional comparativa interregional», en *Revista Latinoamericana de Metodología de la Ciencias Sociales*, vol. 12, n.º 2, referencia citada en página 161.
- DE LA VEGA, PABLO  
2021 «El teletrabajo como mitigador de los impactos económicos de la pandemia de COVID-19 en Argentina», en *Documento de Trabajo Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS)*, n.º 282, referencia citada en páginas 159, 160.

DINGEL, JONATHAN y BRENT NEIMAN

- 2020 *How Many Jobs Can Be Done at Home?*, Becker Friedman Institute, referencia citada en página 159.

ERIKSON, ROBERT; JOHN GOLDTHORPE y LUCIENNE PORTOCARRERO

- 1979 «Intergenerational class mobility in three Western European societies: England, France and Sweden», en *British Journal of Sociology*, vol. 30, n.º 4, págs. 415-441, recuperado de <<https://doi.org/10.2307/589632>>, referencia citada en páginas 162, 166.

ESTÉVEZ LESTON, BÁRBARA

- 2021 *El impacto territorial en los logros ocupacionales: diferenciaciones en el ingreso al mercado laboral*, Tesis de Maestría, Universidad de Buenos Aires, referencia citada en página 160.

ESTÉVEZ LESTON, BÁRBARA y SABRINA MORÁN

- 2020 *Trabajo y tareas de cuidado de cara al fin del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Tejiendo el Barrio*, recuperado de <<https://tejiendoelbarrio.org.ar/trabajo-y-tareas-de-cuidado-aspo>>, referencia citada en página 173.

EUROFOUND

- 2020 *Living, working and COVID-19*, Luxembourg: Office of the European Union, referencia citada en página 170.

FARRÉ, LIDIA *et al.*

- 2020 «How the COVID-19 Lockdown Affected Gender Inequality in Paid and Unpaid Work in Spain», en *Discussion Paper IZA*, n.º 13.434, referencia citada en páginas 170, 173.

FENG, ZHIYU y KRISHNA SAVANI

- 2020 «COVID-19 created a gender gap in perceived work productivity and job satisfaction: implications for dual-career parents working from home», en *Gender in Management*, referencia citada en páginas 170, 173.

GOLDTHORPE, JOHN

- 1993 «Sobre la clase de servicio: su formación y su futuro», en *Teorías contemporáneas de clases sociales*, Madrid: Fundación Pablo Iglesias, págs. 229-263, referencia citada en página 167.

HATAYAMA, MAHO; MARIANA VIOLLAZ y HERNAN WINKLER

- 2020 *Jobs' Amenability to Working from Home: Evidence from Skills Surveys for 53 Countries*, World Bank, referencia citada en página 159.

MEIER, PETRA *et al.*

- 2015 «Intersecting Inequalities in the Life of Young Adults: A Reflection on Intersectional Policies», en *DiGeSt. Journal of Diversity and Gender Studies*, vol. 2, n.º 1, págs. 57-74, recuperado de <<https://doi.org/10.11116/jdivegendstud.2.1-2.0057>>, referencia citada en página 160.

OIT

- sin fecha *Economía del Cuidado. Factores sociales que determinan en la demanda del cuidado a nivel nacional*, Buenos Aires: OIT, en prensa, referencia citada en página 179.

OLSON, MARGRETHE

- 1987 *An Investigation of the Impacts of Remote Work Environments and Supporting Technology*, Nueva York: Stern School of Business, referencia citada en página 158.

PRIETO, CARLOS y SÓFÍA PÉREZ DE GUZMÁN

- 2013 «Desigualdades laborales de género, disponibilidad temporal y normatividad social», en *Reis. Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, n.º 141, págs. 113-121, referencia citada en página 170.

QIAN, YUE y SYLVIA FULLER

- 2020 «COVID-19 and the Gender Employment Gap among Parents of Young Children», en *Canadian Public Policy*, vol. 2, n.º 46, págs. 89-101, referencia citada en páginas 170, 173.

SCHTEINGART, DANIEL; IGAL KEJSEFMAN y FACUNDO PESCE

- 2021 «Evolución del trabajo remoto en Argentina desde la pandemia», en *Documentos de Trabajo del CEP*, vol. XXI, n.º 5, referencia citada en páginas 159, 160, 163, 165, 169.

SOLÍS, PATRICIO y MARCELO BOADO

- 2016 (coords.), *Y sin embargo se mueve... : estratificación social y movilidad intergeneracional de clase en América Latina*, recuperado de <<http://libros.colmex.mx/index.php/novedades-editoriales/item/y-sin-embargo-de-mueve>>, referencia citada en páginas 162, 166.



## CAPÍTULO 7

# La estructura social en la protesta durante la crisis del COVID-19

JULIÁN REBÓN\* y FABIO TRONCOSO\*\*

En la Argentina del siglo XXI la protesta social se destaca como un recurso político de carácter informal que canaliza demandas a las autoridades, bloquea acciones de gobierno e incorpora temas en la agenda pública. El marco de la pandemia del COVID-19 transformó profundamente las condiciones de desarrollo de esta dinámica política caracterizada en las últimas décadas por su masividad y heterogeneidad. La pandemia representó una crisis general, entendida esta como un proceso de perturbación o ruptura del equilibrio social de forma súbita y caotizante que tiende a afectar al conjunto del sistema político, económico y social. Dicha crisis se estructuró a partir de la interacción de las medidas sanitarias de restricción y control de población, la crisis económico-social preexistente y la inestabilidad y restricción global por el marco de la pandemia. A semejanza de otras crisis, se potenciaron privaciones relativas y situaciones percibidas como agraviantes que diversas teorías sociales suelen marcar como promotoras de esta forma de acción colectiva (Coser 1970; Thompson 1979). Como puede leerse en otros capítulos del presente libro, la pandemia representó un retroceso social para diversos sectores de la población y en tanto la protesta ha operado en dichos contextos como estrategia colectiva de enfrentar las privaciones relativas podríamos esperar un incremento de dicha actividad. Sin embargo, a diferencia de otras crisis, las condiciones de restricción y paralización de actividades, heterogéneas en su desarrollo temporal y espacial, junto al temor al contagio y la justificación sanitaria de muchas privaciones,

---

\* Investigador principal del CONICET, Instituto de Investigaciones Gino Germani-UBA,

\*\* Auxiliar de Investigación, Instituto de Investigaciones Gino Germani-UBA.

limitaron las condiciones de la protesta. Las medidas de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) al restringir la circulación en el espacio público obstaculizaron claramente la estructura de oportunidad (Tilly 2008) de las acciones colectivas en el mismo. Al mismo tiempo, el temor al contagio cumplió también un papel disuasorio. Simultáneamente, el ASPO al restringir actividades productivas y provocar un aumento de suspensiones y el desempleo, implicó un debilitamiento del poder estructural de los trabajadores (Silver 2005; Wright 2000), y con este, un obstáculo al uso de la huelga como herramienta de reclamo.

Los estudios disponibles muestran, que, en el marco de las condiciones de restricción sanitaria y la latencia del contagio, se desarrollaron un conjunto de transformaciones, pero también diversas continuidades con la etapa previa. Investigaciones ejecutadas con base en catálogos de eventos afirman una disminución de la protesta durante su etapa inicial (Nava y Grigera 2020; Soto Pimentel *et al.* 2021), recuperando el nivel de la misma con la flexibilización de las medidas de aislamiento una vez establecido el distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO) en julio de 2020 (Soto Pimentel *et al.* 2021). Pero la crisis del COVID-19 no solo afectó a la magnitud de la protesta sino también sus atributos. Se evidenciaron nuevas formas de canalización de la disconformidad, más espontáneas y menos organizadas (por ejemplo, cacerolazos) (Soto Pimentel *et al.* 2021) y una mayor recurrencia a reclamos virtuales. Organizaciones tales como los sindicatos apelaron a «solicitudes y conferencias de prensa» como principal canal de reclamo, disminuyendo el uso del instrumento de huelga. Particularmente, las organizaciones de trabajadores «no esenciales» plantearon sus demandas a través de las redes sociales, como elemento innovador en el repertorio de acciones (Ferrero y Natalucci 2020).

Con relación a los actores de la protesta, varios trabajos coinciden en que los actores con mayor participación en la protesta social durante el mencionado período fueron las organizaciones sindicales (Nava y Grigera 2020). Si bien prima el carácter defensivo del conflicto laboral, Basualdo y Peláez (2020), identifican diferentes momentos dentro del ASPO. Se produce un tránsito desde una instancia de disputa en torno a qué trabajos se consideraban esenciales y cuáles no, a una instancia en la cual se disputó el cumplimiento de las debidas condiciones sanitarias para aquellas actividades definidas como esenciales. Posteriormente, la estrategia sindical se focalizó en la preservación de los puestos de trabajo y contra las suspensiones, y en reclamos por una mayor regulación y garantía de derechos laborales en modalidades de teletrabajo. Puntualizando en los grupos sociales y políticos que han participado en la protesta social durante la etapa, Ferrero y Natalucci (2020) destacan la

participación de sectores empresarios en hechos de protesta social durante el ASPO. El empresariado demandó la aplicación de recortes salariales y suspensiones de trabajadores como mecanismo para afrontar el cese de las actividades productivas. En el caso de los pequeños propietarios, reclamaron la recepción del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), así como la reapertura de las actividades económicas. Por otra parte, sectores pertenecientes a las clases medias lograron manifestarse abiertamente contra las decisiones políticas y la gestión de la pandemia por parte del Gobierno Nacional. A través de mecanismos virtuales y/o a través de la presencia en las calles, estos grupos supieron canalizar su descontento contra la política sanitaria y el devenir de las disposiciones de confinamiento, las restricciones a la movilidad y a las actividades productivas, y el pedido manifiesto de una vuelta a la presencialidad escolar. Junto a estos sectores, se movilizaron actores de la política nacional opositora al Gobierno Nacional, así como grupos políticos identificables ideológicamente con la derecha, autodefinidos como «libertarios» o movimientos «anticuarentena», quienes plegaron sus consignas a estos hechos de protesta. Estas guardan relación con un componente de la protesta reciente en la Argentina desarrollado en la movilización de rechazo a la política de los gobiernos denominados kirchneristas, a través de una identificación como «ciudadanos independientes» (Morresi *et al.* 2021; Rebón 2013). En este sentido, las derechas ganaron en las calles una amplia visibilidad, y protagonizaron la oposición contra las medidas de aislamiento obligatorio, la política sanitaria y las decisiones del Gobierno Nacional con respecto a la gestión de la pandemia.

Las distintas investigaciones nos aportan un conjunto de descripciones y cuantificaciones de hechos de protestas. No obstante, por su propia metodología no pueden identificar cuál fue el nivel de participación en la protesta, ni ponderar en términos poblacionales sus componentes. Tampoco más allá de referencias muy generales, no logran identificar con nitidez la composición social de las mismas. Este marco promueve un conjunto de interrogantes: ¿cuál fue el nivel de participación en la protesta social y acción colectiva durante la denominada pandemia del COVID-19? ¿Cuáles fueron los principales asuntos que fueron puestos en cuestión por esta forma de estrategia colectiva? ¿Cuáles fueron las herramientas más experimentadas? ¿Qué nivel alcanza la experimentación de la acción colectiva virtual? ¿Qué grupos sociales y políticos participaron en mayor proporción? ¿Cómo incide la estructura de clases en los niveles y tipos de participación?

El presente trabajo se propone medir el nivel de participación en la protesta social durante la pandemia, caracterizando dicha participación y explorando la incidencia de las posiciones sociales y

políticas sobre la misma. Particularmente, nos interesa avanzar en el carácter de clase de dicha participación, procurando identificar los sectores sociales que han tendido a un mayor uso de la misma y las formas que la misma ha asumido.

A los fines de este trabajo, entendemos a la protesta social como episodio de acción colectiva contenciosa de reclamo público a las autoridades. La metodología a desarrollar es la investigación por encuesta. Los datos analizados provienen de la Encuesta nacional sobre la Estructura Social de Argentina y Políticas Públicas durante la pandemia por COVID-19 (ESAyPP/PISAC-COVID-19) relevada en localidades de Argentina mayores a 50 mil habitantes entre octubre y diciembre de 2021. Para desarrollar una perspectiva analítica comparativa interregional, se diseñó un tipo de muestra probabilística, estratificada y por conglomerados, representativa de este universo con tres dominios de estimación: a nivel nacional, por regiones y por tamaño de los aglomerados. El tamaño de la muestra relevada es de 5 239 hogares combinando una gran escala y amplia cobertura.<sup>[1]</sup>

Nuestra hipótesis plantea que la crisis impactó significativamente en la magnitud y atributos de la protesta. Lejos de una relación directa entre privación y protesta, los distintos modos en que se estructura el campo social y el ordenamiento político inciden en la acción colectiva contenciosa.

El texto se organiza del siguiente modo. En primer lugar, abordamos el nivel de participación de la protesta y los principales atributos de la protesta experimentada por la población. En segundo lugar, analizamos los niveles de participación en la protesta según diferentes agrupamientos considerados significativos por la teoría y estudios previos: región, edad, condición de actividad y posición de clase y autoidentificación política. Finalmente, concluimos identificando hallazgos y planteando futuros interrogantes.

## 7.1 La participación en la protesta. Principales atributos

Durante la pandemia, el 11 % de la población urbana del país, aproximadamente 3 130 000 habitantes, reconoce haber participado en reclamos colectivos. Así, algo más de uno de cada 10 habitantes canalizó sus demandas por esta vía. Si bien carecemos de estadísticas disponibles que sean estrictamente comparables, estos números como era previsible por las condiciones representan, muy probablemente, una significativa disminución respecto a la etapa previa. La Encuesta nacional sobre Relaciones Sociales (ENRS) del PISAC

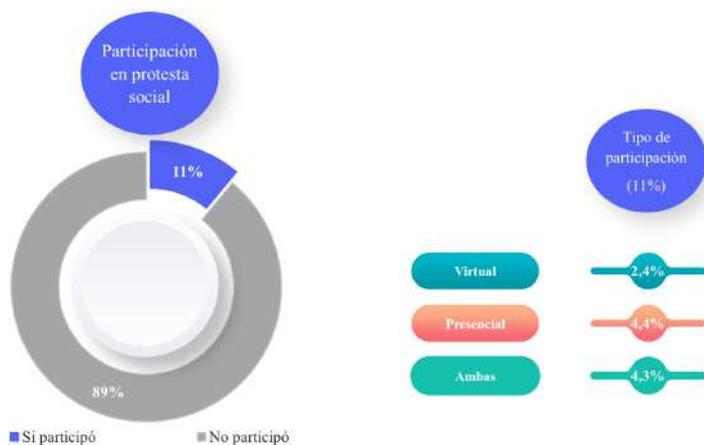
[1] Para poder profundizar en el diseño teórico-metodológico de la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 elaborado por los equipos de investigación de los proyectos PISAC-COVID-19 085 y 021, véase [Dalle y Di Virgilio \(2022\)](#).

realizada el año anterior al inicio de la pandemia registraba la participación anual en acciones colectivas de reclamo en alrededor del 17 % para la población urbana del país. Esta disminución está en línea con el registro de los cambios señalados por otros autores para el inicio de la pandemia, y marca que el recupero de la conflictividad a partir de la relajación de los controles se encuentra lejos de haber recuperado los niveles antecedentes (Nava y Grigera 2020; Soto Pimentel *et al.* 2021). Cabe aclarar que la participación en la acción colectiva, incluso en un país con alta participación históricamente ha sido minoritaria. Los escasos estudios disponibles en diferentes momentos del siglo XXI (Gómez 2008; Rebón 2013), limitados al Área Metropolitana de Buenos Aires, muestran que alrededor de un tercio de la población reconoce haber participado alguna vez en su vida en una protesta social.

Uno de los datos destacados por distintos analistas durante la pandemia es la expansión del uso de herramientas virtuales como parte de diferentes formas de vida social (educativa, laboral, recreativa, etcétera) en la procura de su continuidad en las condiciones de restricción y aislamiento (Harari 2021). La protesta no ha sido ajena a esta tendencia. Durante el período, se expanden formatos de reclamos virtuales preexistentes (petitorios, twitazos) y emergen otros (pañuelazos virtuales, actos virtuales). Las redes en tanto forma de disminuir los costos organizativos de las acciones presenciales, ya tenían amplia difusión como espacio de convocatoria a las mismas (Annunziata y Gold 2018; Pleyers 2017). Con la pandemia las redes se convierten también en un significativo espacio de realización. Del 11 % que participó durante la pandemia, el 2.4 % declara haberlo hecho solo en acciones colectivas virtuales y el 4.3 % tanto en acciones virtuales como presenciales. En total el 60 % de los movilizados participó de alguna medida virtual. Sin embargo, corresponde destacar que aún en condiciones restrictivas, la acción colectiva presencial fue experimentada por más individuos, el 4.4 % participa solo en actividades presenciales, lo que sumado a quienes lo hacen en ambas, da un 79 % del total de los participantes.

Con respecto a las modalidades de la acción colectiva, destaca la movilización. La concentración y desplazamiento en el espacio público es la forma más convencional y masiva de la protesta en nuestro país y en el mundo. Aún en condiciones en las cuales se desarrollaron restricciones en diferentes tiempos y lugares, y con el miedo social existente al contagio, continuó siendo una de las protagonistas, siendo practicada por la mayoría de quienes declaran participar en acciones (60 %). Esta forma, equivale en proporción al conjunto de los repertorios virtuales anteriormente referidos.

En segundo lugar, con porcentajes relativamente semejantes (31 % de quienes protestan), se ubican el cacerolazo y los cortes de calle



**Figura 7.1.** Participación de población urbana en protesta social y tipo de participación. Argentina urbana, 2021. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021). 5 239 casos.

o vías de tránsito. La primera refiere a una modalidad, hacer ruido de manera colectiva, que contó con amplia difusión en la pandemia en Argentina y la región. El cacerolazo, por su modularidad y descentralización, cualquiera desde cualquier lugar puede desarrollarlo, permitió en las condiciones de la pandemia expresar el malestar de sectores de la población frente al Estado sin siquiera necesidad de desplazarse de las casas. La segunda, se corresponde a un esquema de acción caracterizado por su dinámica disruptiva y el desborde de los canales convencionales de la protesta: el corte de vía de tránsito (31 %). Este es un formato habitual de la protesta en la Argentina del siglo XXI, que integra el repertorio de acción de distintos sectores sociales. En su mayoría, por su carácter extrainstitucional y caotizante del espacio institucional, y por ende sujeto a riesgo de judicialización o represión, tiende a ser desarrollado para agravios o reclamos considerados muy relevantes y/o por quienes no encuentran otros medios de canalizar su disconformidad.

Finalmente, la huelga (24 %), el no cooperar en la producción, es una actividad clásica de la acción colectiva de los trabajadores que en las condiciones de la pandemia se vio afectada por la paralización parcial de la producción por el ASPO y el aumento del desempleo y suspensiones, o por cambios o alteraciones del proceso de trabajo, como el *home office*, todo lo cual debilitó la posibilidad de su uso por los asalariados a pesar del contexto de privaciones laborales.

Con relación a los reclamos, estos escenifican distintas demandas y malestares, en su mayoría vinculados, ya sea directamente



**Figura 7.2.** Principales modalidades de protesta social de la población mayor a 18 años. Argentina urbana, 2021 \*. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021). N: 5239 casos. \* Porcentajes calculados en base al total de casos registrados. Respuesta múltiple. Se muestran en el gráfico las demandas con un porcentaje mayor al 10%.

o indirectamente – como contexto que agrava la situación – a las condiciones de crisis general.

El conflicto laboral destaca como la principal fuente del conflicto, el 42 % de los manifestantes demandó en este campo. Este componente habitualmente, se encuentra entre las fuentes principales del conflicto. Como se desprende de otros capítulos del presente libro, la pandemia afectó heterogénea y negativamente las condiciones de trabajo de gran parte de la población y muchas de estas privaciones fueron enfrentadas por distintos grupos sociales a través de estrategias de acción colectiva.

Por otra parte, los derechos de las mujeres representan el segundo componente con el 31 % de los casos. Este componente representa en la Argentina previa a la pandemia uno de los principales ejes de la protesta (Rebón y Gamallo 2021). Más allá de que distintos análisis señalan que durante la pandemia se agravó la violencia de género y otras problemáticas vinculadas al cuidado (Maffía 2020; Oberti y Bacci 2020), el principal componente muy probablemente se encuentra vinculado a la lucha en torno a la interrupción voluntaria del embarazo. Durante la pandemia se aprobó y promulgó la ley que establece el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Durante los meses previos a dicha sanción, se realizó una intensa campaña con acciones virtuales y presenciales, y se desarrollaron multitudinarias movilizaciones los días de su tratamiento parlamentario.

Con menor presencia, le siguen un conjunto de temas diversos. Algunos se encuentran más vinculados por sus temáticas a las

movilizaciones y cacerolazos contra el gobierno. Estos, con sus particularidades, representaron principalmente la expresión durante la etapa del componente antipopulista de la protesta con anclajes en los sectores medios y altos de la población presente de modo recurrente en la Argentina reciente (Morresi *et al.* 2021; Rebón 2018). Entre estos encontramos demandas por seguridad (18 %), contra las medidas asociadas a la cuarentena (15 %) y por el regreso de las clases presenciales (10 %).<sup>[2]</sup> Otros temas, en cambio, ponen en la arena pública reclamos referentes a las condiciones de vida que atraviesan distintos grupos de los sectores populares en temas tales como asistencia social (15 %) o vivienda (14 %). La demanda vinculada a salud, tema clave en el marco de una crisis sanitaria, solo abarca al 13 % de los participantes, lo cual nos está indicando que, a pesar del contexto, el sistema de salud brindó una respuesta relativamente adecuada de forma tal que no se transformó un eje de las protestas.

¿Cuáles son los elementos que nos permiten dar cuenta de esta participación en la protesta? ¿Son aquellos más afectados por la crisis quienes más protestan? Los datos disponibles no avalan esta hipótesis. Aquellos que sufrieron privaciones laborales como pérdida de empleo e ingresos, no presentan mayor conflictividad en general (ambos se sitúan en el 11 %) y tampoco de modo significativo en lo específicamente laboral. Pero, si no hay una relación directa entre privación y conflictividad ¿Qué elementos tienden a estructurar la participación? A continuación, abordamos distintos agrupamientos sociales y políticos que nos puedan dar cuenta de diversas dimensiones que ordenan las respuestas a esta pregunta.

## 7.2 La estructuración social de la protesta

Establecidos los niveles de participación y sus principales características avancemos en explorar cómo diferentes dimensiones que estructuran la sociedad inciden en la protesta social.

En primer lugar, en un país caracterizado por la desigualdad regional (Kessler 2014) y una organización política federal corresponde realizar un acercamiento a la incidencia geográfica de esta forma

[2] Es llamativo que, a pesar de la relevancia mediática, la movilización contra la cuarentena abarcó a una pequeña minoría de los movilizados. Por otra parte, la protesta por las clases presenciales es también muy minoritaria, sin embargo, corresponde destacar que es muy superior al 2 % que protestó en contra de las clases presenciales. Este conflicto adquirió mayor visibilidad cuando el Gobierno de la Ciudad, contra lo establecido por el gobierno nacional, no suspendió el dictado de clases presenciales en abril de 2001. Al conflicto específico se le adiciona una disputa política entre el gobierno y la principal fuerza de oposición.



**Figura 7.3.** Principales motivos de participación de población urbana mayor a 18 años. en protesta social. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021). 5 239 casos. \*Porcentajes calculados en base al total de casos registrados. Respuesta múltiple. Se muestran en el gráfico las demandas con un porcentaje mayor al 10 %.

de conflicto. Este tipo de análisis es clave en el caso de la etapa que estamos analizando dado que la evolución de la pandemia, y de las medidas sanitarias de aislamiento y distanciamiento difirieron en extensión y características entre diferentes distritos y aglomerados urbanos. Con el objeto de avanzar en esta línea de análisis, realizamos un análisis geográfico al mayor nivel que las características muestrales del relevamiento nos permite: las regiones. Entre las regiones más destacadas en cuanto a niveles de participación se registra Cuyo (20 %), Centro (20 %) y la región Patagónica (19 %). Es particularmente llamativo que el Área Metropolitana de Buenos Aires, epicentro histórico de grandes protestas sociales y la región que mostraba los niveles de participación más alto en 2019 según la encuesta ENRS-PISAC, es aquella en la cual durante la pandemia registra menor participación (5 %). En nuestra hipótesis, la fuerte prevalencia del COVID-19 en este aglomerado urbano y la extensión de las medidas de distanciamiento social, en un área urbana de gran extensión y dependiente del transporte público para la movilidad, incidieron significativamente en esta transformación.

En segundo lugar, la estructura etaria es una variable que incide en la participación. Esto puede deberse al factor generacional, diferentes generaciones por sus trayectorias específicas pueden mostrar diferentes propensiones a la acción colectiva. También la disponibilidad biográfica, la existencia de más tiempo libre y más flexibilidad

**Cuadro 7.1. Participación de población urbana mayor a 18 años en la protesta social según región. Argentina urbana, 2021.**

Participación en protesta social	Región							Total
	GBA	Pampeana	NOA	Centro	NEA	Patagónica	Cuyo	
Sí participó	4.7	7.5	14.1	19.7	6.1	18.8	20.2	11
No participó	95.3	92.5	85.9	80.3	93.9	81.2	79.8	89
Total	100	100	100	100	100	100	100	100

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021). 5 239 casos.

en el uso general del tiempo, representa otro modo de incidencia. Particularmente, es relevante para explicar la participación en los jóvenes y estudiantes, pero puede ser incluso encontrada en el campo de estudios para otros grupos como los jubilados o categorías no correlacionadas etariamente como los desocupados (Almeida 2020). Los resultados de nuestra encuesta muestran una correlación significativa y negativa entre participación y edad. A mayor edad disminuye la participación representando el nivel del grupo más joven (16 %) más de tres veces el nivel del grupo de más edad (4.6 %). Probablemente, más que la disponibilidad biográfica, aquí este incidiendo la «disponibilidad sanitaria» en tanto el riesgo de padecer gravemente COVID-19 está correlacionado positivamente con la edad, siendo el grupo de más de 60 años el más expuesto a dicho riesgo, y teniendo por lo tanto menor propensión a participar en actividades consideradas riesgosas en términos sanitarios.

**Cuadro 7.2. Participación de población urbana mayor a 18 años en la protesta social según grupo etario. Argentina urbana, 2021.**

Participación en protesta social	Edad agrupada				Total
	18-29	30-49	50-59	60 y más	
Sí participó	16.4	11.4	8.9	4.6	11
No participó	83.6	88.6	91.1	95.4	89
Total	100	100	100	100	100

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021). 5 239 casos.

En tercer lugar, analizamos la incidencia del género en la participación en la protesta social. Los datos nos permiten inferir que en términos generales la incidencia del género es significativa pero leve. A pesar de la potencia de la movilización feminista durante la

pandemia, son los varones quienes alcanzan mayores niveles de participación en la protesta (12 %) que las mujeres (10 %). Sin embargo, la incidencia del género no se da en una sola dirección, difiere en intensidad y dirección entre las distintas demandas. Esta incidencia diferencial se refleja en la composición de género de los principales componentes del conflicto. Mientras los varones predominan marcadamente en las protestas en torno a la seguridad y la justicia (64 %), las «anticuarentena» (63 %), y las de carácter laboral (59 %), las movilizadas predominan muy nítidamente en las acciones vinculadas a los derechos de las mujeres (65 %) y en las vinculadas a la asistencia social estatal se registra una relativa paridad de género.

### Cuadro 7.3. Participación de población urbana en protesta social según género

Participación en protesta social	Género		
	Varón	Mujer	Total
Sí participó	12	10	11
No participó	88	90	89
Total	100	100	100

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021). 5 239 casos.

En cuarto lugar, el campo de las orientaciones político-ideológicas, encontramos otra dimensión relevante para el abordaje de la participación colectiva. Las configuraciones culturales permiten diferentes claves de entendimiento de la realidad y proveen patrones de acción frente a los mismos, entre ellos la acción colectiva (Almeida 2020). En la Argentina reciente, la protesta es una de las modalidades en las cuales se expresa la disputa política por la direccionalidad del cambio (Rebón 2013). En esta dirección, el análisis de la autoidentificación en los principales posicionamientos del campo político, nos aporta datos significativos. En primer lugar, quienes se autoidentifican con partidos y tradiciones políticas tienen una participación muy superior (17 %) a quienes no lo realizan (6 %), de esta forma, la «politización» de los ciudadanos, incide en el nivel de movilización. Los movilizadas no son la mera expresión de la indignación ciudadana frente a la «política», quienes tienen posicionamientos identitarios positivos con relación a alguno de los agrupamientos partidarios tienen más probabilidad de participación. En segundo lugar, la participación colectiva es transversal a todos los espacios políticos. No obstante, se registran diferencias. Los principales polos del campo político «peronismo y kirchnerismo» y «Juntos por el cambio y derecha» no presentan diferencias significativas. Cabe destacar, que durante la pandemia el gobierno del Frente de Todos (coalición que expresa

la mayoría del peronismo) convocó reiteradamente por razones de salud pública a no movilizarse. En este sentido, a pesar de la tradición movimientista de este posicionamiento político, en el período sus referentes no participaron ni tendieron a participar de grandes movilizaciones, tal vez con excepción de las relativas a la sanción del aborto. En cambio, las posiciones orientadas a la derecha del espectro político del país, protagonizaron diversos episodios de movilización. Siguiendo la dinámica política de la protesta de las últimas décadas (Rebón 2013), los sectores sociales y políticos derrotados en la competencia electoral protagonizaron en las calles la oposición al gobierno convocando con base en diferentes significantes y precipitantes, como la oposición a las medidas de cuarentena, contra la liberación de presos, por la presencialidad de las clases, contra estatizaciones, reducción de sueldos de políticos o la supuesta restricción de la democracia (Morresi *et al.* 2021). A pesar del amplio espectro cubierto y el impacto público de los cacerolazos y movilizaciones, la base social de este sector no presenta un nivel de movilización superior al peronismo. En cambio, la población identificada con los partidos de izquierda, muestra un nivel muy superior de movilización, siendo el único grupo donde los movilizadores representan la mayoría. Esta tradición política posee históricamente una predisposición a la movilización que aún en la crisis de la pandemia incide fuertemente en la práctica de la protesta.

**Cuadro 7.4. Participación de población urbana mayor a 18 años en la protesta social según autoidentificación política. Argentina urbana, 2021.**

Participación en protesta social	Identidad política					Total
	1	2	3	4	Otra	
Sí participó	9.6	9.3	56	6	8.3	11
No participó	90.4	90.7	44	94	91.7	89
Total	100	100	100	100	100	100

Nota: 1: Peronistas y/o Kirchneristas; 2: Juntos por el cambio y derecha; 3: Partidos de izquierda; 4: Sin identificación. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021). 5 239 casos.

En quinto lugar, encontramos relevante indagar cómo la participación en la estructura productiva del país incide en la participación en la protesta. Con este objeto indagamos entre aquellos quienes revisitan la categoría laboral de ocupados la participación según grupo ocupacional, entendido aquí como proxy de la posición de clase, y para los restantes encuestados la condición de actividad.

**Cuadro 7.5. Participación de población urbana mayor a 18 años. en protesta social según condición de actividad y posición de clase para ocupados. Argentina urbana, 2021.**

Participación en protesta social	Activos								Total
	Ocupados								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Sí participó	13.3	27.5	18.4	11.7	9.8	11.2	15.1	6	11
No participó	86.7	72.5	81.6	88.3	90.2	88.8	84.9	94	89
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Nota: 1: empresarios y cuenta propias profesionales; 2: asalariados profesionales; 3: asalariados de calificación técnica y jefes; 4: pequeños propietarios y técnicos autónomos; 5: asalariados formales de baja calificación; 6: trabajadores informales de baja calificación; 7: desocupados; 8: inactivos. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021). 5 239 casos.

Los resultados muestran una distribución heterogénea entre la condición de actividad y estructura de clases.<sup>[3]</sup>

No son los grupos que sufrieron en mayor medida las privaciones laborales más graves durante la crisis – pérdida de empleo y, especialmente, fuente laboral – y con políticas públicas paliativas de menor alcance, cómo los pequeños propietarios y los trabajadores informales, quienes más se movilizaron. Ambos, muestran niveles de acción colectiva por debajo de la mayoría de los ocupados (12 y 11 % respectivamente). Con heterogéneos repertorios de acción, los pequeños propietarios son los más virtualizados en el campo de la acción colectiva y los trabajadores informales con una fuerte recurrencia a la movilización y los cortes, ambos concentran nítidamente su lucha en las demandas laborales, que en el caso del último grupo se combina con la demanda de asistencia social. Tampoco tuvieron mayor participación los asalariados formales de baja calificación, sector clave para la organización gremial, vale destacar que este es el único grupo en el cual la afiliación sindical alcanza a la mitad de los encuestados. En un contexto laboral negativo, pero con protecciones sociales y políticas paliativas de sostenimiento del ingreso mayores a la de los grupos precedentes, representaron el conjunto ocupacional con menor participación (10 %) concentrando su accionar en el reclamo laboral a través de un repertorio caracterizado por movilización y huelga. En cambio, los asalariados profesionales y directores medios (28 %) y los asalariados de calificación técnica y de jefatura (18 %) destacan como quienes más participación registraron. Los primeros

[3] Para la construcción de la variable posición de clase se siguió el trabajo del presente libro de Benza, Dalle y Maceira (2022).

refieren a un grupo de asalariados que poseen credenciales de educación validadas por el mercado y/o posiciones de autoridad. Por su posición en el proceso productivo, y también por estilo y condiciones de vida, forman parte de las capas medias y, al menos una parte de ellos, de las media-altas de la sociedad. Es de destacar que representan el único grupo en el cual el empleo público es mayoritario y registran relevante presencia sindical (38 %). Los segundos, «los técnicos», refieren a capas medias asalariadas, que presentan una menor, aunque significativa presencia del empleo público (46 %) y una mayor tasa de afiliación sindical (47 %). La referencia al empleo público y la tasa de afiliación son pertinentes, al menos en lo referente al conflicto laboral, dado que los empleados públicos han tendido en las últimas décadas a una mayor conflictividad laboral, dada sus condiciones de mayor estabilidad laboral – condición que se ha mantenido a pesar de la crisis del COVID-19 – y creciente agremiación sindical. Sin embargo, corresponde hacer una distinción entre ambos grupos. Mientras los asalariados técnicos poseen un repertorio sindical relativamente clásico – movilización y huelga – y concentran su acción en lo laboral, los asalariados profesionales tienen un repertorio y un temario de reclamo heterogéneo. A pesar de ser el grupo que reporta en mayor proporción haber padecido reducción de ingresos, no se destaca en el conflicto laboral. En este grupo, el más feminizado de todos (60 % mujeres) los reclamos por las clases presenciales y los derechos de las mujeres encabezan la movilización. Le siguen, la seguridad y recién después, el tema laboral. El grupo de empresarios, presenta una conflictividad que coincide con el promedio de los ocupados, caracterizada por la movilización, y demandas vinculadas a la protesta antipopulista como por la seguridad y contra la cuarentena. No obstante, lo reducido del grupo no nos permite otorgarles un carácter representativo a estas descripciones.

Finalmente, revisemos a las otras categorías de la condición de actividad. Los desocupados alcanzan un importante nivel de participación (15 %). Es de destacar que entre quienes permanecen en esta condición desde larga duración el nivel de participación se duplica. En su repertorio de acción se destaca la movilización y el corte, repertorio clásico de las organizaciones de desocupados y la economía popular, y como temas centrales, el reclamo por trabajo y vivienda. Finalmente, los inactivos registran una muy menor participación, probablemente vinculado a los bajos valores de las personas de mayor edad. Es en este sector donde el cacerolazo como forma de acción presenta mayor uso y también el reclamo «anticuarentena».

En suma, la posición en la estructura de clase y el sistema productivo en general incide no solo en la participación, sino también en el tipo de conflicto que se participa. Dicho de otro modo, la posición

de clase incide – al menos en lo atinente a su composición social – en el carácter de clase del conflicto.

**Cuadro 7.6. Principales modalidades de protesta social y principales motivos de participación de la población urbana según condición de actividad y posición de clase para ocupados. Argentina urbana, 2021.**

	Empresarios y cuentapropios profesionales	Asalariados profesionales	Asalariados de calificación técnica y jefes	Pequeños propietarios y técnicos autónomos	Asalariados formales de baja calificación	Trabajadores informales de baja calificación	Desocupados	Inactivos
<b>Principales modalidades de protesta social</b>	Movilización (75%) Virtuales (66%) Cortes (34%)	Virtuales (67%) Movilización (55%) Cacerolazos (27%)	Virtuales (66%) Movilización (58%) Paros (30%)	Virtuales (30%) Movilización (47%) Cortes (24%)	Virtuales (70%) Movilización (67%) Paros (49%)	Movilización (77%) Virtuales (59%) Cortes (53%)	Movilización (70%) Virtual (38%) Cortes (33%)	Virtual (48%) Cacerolazo (47%) Movilización (42%)
<b>Principales motivos de participación en protesta social</b>	Seguridad/Corrupción (58%) Anticarentena (29%) Laborales (18%)	Derechos de las mujeres (35%) Clases presenciales (35%) Seguridad/Corrupción (19%)	Laborales (42%) Derechos de las mujeres (28%) Seguridad/Corrupción (17%)	Laborales (56%) Derechos de las mujeres (36%) Vivienda (21%)	Laborales (56%) Derechos de las mujeres (29%) Seguridad/Corrupción (20%)	Laborales (50%) Derecho de las mujeres (39%) Asistencia social (31%)	Laborales (47%) Vivienda (30%) Derechos de las mujeres (23%)	Anticarentena (33%) Derecho de las mujeres (29%) Seguridad/Corrupción (25%)

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021). 5 239 casos.

### 7.3 Reflexiones e interpretaciones

La protesta social formó parte de la dinámica de confrontación política y social durante la crisis del COVID-19. Sin embargo, como toda crisis de carácter general, esta promovió cambios en magnitudes y atributos. Los datos disponibles nos permiten hipotetizar, en primer lugar, un marcado descenso de su magnitud, especialmente en el AMBA lugar donde la restricción fue mayor. De este modo, a diferencia de otras crisis, esta se caracteriza por una disminución del conflicto. La misma se explica por un componente específico de esta crisis, las restricciones sanitarias, que guarda una relación significativa e inversa con la protesta. En segundo lugar, destacan cambios en los repertorios de la protesta. Centralmente, se registra una mayor virtualización de la misma, y el mayor uso – muchas veces combinada con la convocatoria a través de las redes – de formatos que por su descentralización presentan menores costos organizativos, como los cacerolazos, así como un descenso de la actividad huelguística. Corresponde destacar que una parte importante de los movilizadados apela tanto a formatos virtuales como presenciales. En tercer lugar, la protesta expresó estrategias colectivas para enfrentar el conjunto de elementos marcados directa o indirectamente por la pandemia. En continuidad, pero claramente afectado por la crisis, destaca la conflictividad laboral como principal tema de la protesta en un marco de despidos, suspensiones, trabajo no presencial y afectación del ingreso. En esta misma línea, temas presentes previamente como

«asistencia social» o «justicia» asumen un contexto particular, por ejemplo, en este último tema uno de los grandes cacerolazos fue, en torno a la supuesta liberación de presos por la pandemia. En continuidad, pero sin tanta afectación por la crisis, destaca la persistencia del movimiento de las mujeres, el cual obtiene la ley de interrupción voluntaria del embarazo durante la etapa. En cambio, emergen temas específicos de la pandemia (con bastante menor nivel) como el reclamo «anticuarentena» o en torno a la presencialidad de las clases. Finalmente, el tema salud, aún en el marco de una crisis sanitaria, no logra ubicarse entre los más convocantes.

Como la literatura sobre la acción colectiva, y nuestros datos confirman, no existe una relación directa entre protesta y privación. Los distintos modos en que se estructura el campo social y el ordenamiento político inciden en la misma. Por una parte, en el período, dada las condiciones de la pandemia, encontramos que existe una disponibilidad a la acción colectiva debida a razones sanitarias diferencial entre grupos etarios, a mayor edad menor participación, siendo entre los denominados grupos de riesgo marcadamente menor. Por otra parte, encontramos que la condición de actividad y la posición de clase inciden significativamente, planteando niveles de participación, agenda de reclamos y repertorios de confrontación diferenciales por grupo social. En este marco histórico social concreto, el «tener» – posición en torno a la propiedad – y el hacer – posición en las relaciones de producción en el sentido amplio – (Wright 2015) condiciona lo que se hace en el terreno de la acción colectiva. En esta relación, intervienen las preferencias de los grupos sociales ante las situaciones atravesadas, condicionadas en el paso a la acción por distintos elementos como los recursos de poder y tradiciones de lucha que cada grupo dispone (Hernández *et al.* 2020). No obstante, necesitamos a futuro tener datos de mayor precisión para ciertos grupos que el diseño muestral presente no nos habilita a profundizar. Tampoco dicho diseño nos permite profundizar la interacción con otras dimensiones. En esta última dirección, es clave entender que la protesta, en tanto dinámica específica de contienda política, es transversal a los distintos agrupamientos políticos, aunque tenga un comportamiento diferente. Los dos principales agrupamientos asumidos en este trabajo «peronismo-kirchnerismo» y «Juntos por el Cambio- libertarios» comportan niveles de movilización relativamente semejantes a pesar de la convocatoria a no movilizar durante buena parte del período de los referentes de los primeros, y en contraparte, a movilizar de referentes de los segundos. Por otra parte, destaca la izquierda como el grupo político con mayor movilización. Dicho de otro modo, la cultura y posicionamiento político importa, ahondar en cómo se articula con la posición de clase y etaria en el

condicionamiento de la acción colectiva es un análisis pendiente que merece ser desarrollado.

Lo presentado aquí demuestra la utilidad de una estrategia de investigación con poco uso en nuestro país. Consideramos que el presente estudio complementa a estrategias metodológicas más habituales de abordaje de la conflictividad al proporcionar mediciones en términos poblacionales del stock de los movilizadados y de sus principales atributos. También entendemos que proporciona un significativo insumo a los convencionales estudios de estructura de clase, donde estas últimas suelen quedar reducidas a agrupamientos estadísticos vinculados a condiciones ocupacionales y sus efectos sobre las condiciones de vida. Esto es particularmente relevante, para aquellas conceptualizaciones de clase «realistas» (clases como existencia sociológica real) y que postulan la importancia en términos políticos de dichos agrupamientos. Estudios en la perspectiva desarrollada en el presente trabajo deben ser replicados a futuro, con el objeto de profundizar en temas aquí apenas esbozados. También para entender cuánto de estas características y condicionalidades de la protesta, tienen un carácter meramente coyuntural a la crisis abordada o, por el contrario, poseen mayor persistencia en el tiempo y hace referencia a atributos de más larga duración. Finalmente, la asociación aquí encontrada, entre posición de clase y participación en el conflicto social, requiere de una mayor profundización. Con base en la combinación de distintas estrategias metodológicas, necesitamos avanzar en identificar con mayor nitidez los vínculos entre las «posiciones» y los procesos de «lucha» y «formación» de las clases. Como siempre la investigación convoca interrogantes, pero también una certeza: necesitamos saber más.

## Referencias

ALMEIDA, PAUL

- 2020 *Movimientos sociales: la estructura de la acción colectiva*, Buenos Aires: CLACSO, referencia citada en páginas 194, 195.

ANNUNZIATA, ROCIO y TOMÁS GOLD

- 2018 «Manifestaciones ciudadanas en la era digital. El ciclo de cacerolazos (2012-2013) y la movilización #NiUnaMenos (2015)», en *Desarrollo económico*, vol. 57, n.º 223, págs. 461-485, referencia citada en página 189.

BASUALDO, VICTORIA y PABLO PELÁEZ

- 2020 «Procesos de conflictividad laboral en el marco de la pandemia del COVID-19 en Argentina (marzo-mayo 2020)», en *Documento de Trabajo. Estudios del trabajo, movimiento sindical y organización industrial*, Buenos Aires: FLACSO, referencia citada en página 186.

COSER, LEWIS

- 1970 *Nuevos aportes a la teoría del conflicto social*, Buenos Aires: Amorrortu, referencia citada en página 185.

DALLE, PABLO y MARÍA MERCEDES DI VIRGILIO

- 2022 «Estructura social de Argentina y políticas públicas durante la pandemia de COVID-19: el diseño de una encuesta nacional comparativa interregional», en *Revista Latinoamericana de Metodología de la Ciencias Sociales*, vol. 12, n.º 2, referencia citada en página 188.

FERRERO, JUAN PABLO y ANA NATALUCCI

- 2020 «COVID-19 Pandemic and Social Unrest: The Social Protest by Other Means. Reflections on the Argentinian Case», en *Bulletin of Latin American Research*, vol. 39, n.º 51, págs. 67-70, referencia citada en página 186.

GÓMEZ, MARCELO

- 2008 «Una caracterización de la predisposición a la acción colectiva y la participación pos 2001 en la Argentina. Resultados de una encuesta», en *Los movimientos sociales en América Latina. Pasado, presente y perspectivas*, vol. 1, págs. 640-655, referencia citada en página 189.

HARARI, YUVAL

- 2021 «Lessons from a year of COVID», en *Financial Times*, referencia citada en página 189.

HERNÁNDEZ, CANDELA; JULIÁN REBÓN y AGUSTINA SÚNICO

- 2020 «Experiencia y poder. Una hipótesis acerca de la configuración de repertorios de acción colectiva en sistemas socioeconómicos», en *Revista del Programa de Investigaciones sobre Conflicto Social, Instituto de Investigaciones Gino Germani*, referencia citada en página 200.

KESSLER, GABRIEL

- 2014 *Controversias sobre la desigualdad: Argentina, 2003-2013*, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, referencia citada en página 192.

MAFFÍA, DIANA

- 2020 «Violencia de género: ¿La otra pandemia?», en *El futuro después del COVID-19*, págs. 182-186, recuperado de <[https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/el\\_futuro\\_despues\\_del\\_covid-19\\_0.pdf](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/el_futuro_despues_del_covid-19_0.pdf)>, referencia citada en página 191.

MORRESI, SERGIO; EZEQUIEL SAFERSTEIN y MARTÍN VICENTE

- 2021 *Ganar la calle. Repertorios, memorias y convergencias de las manifestaciones derechistas Argentina*, Clespidra, referencia citada en páginas 187, 192, 196.

NAVA, AGUSTÍN y JUAN FERNANDO GRIGERA

- 2020 *Pandemia y protesta social: Tendencias de la conflictividad social y laboral en Argentina 2019-2020*, Jacobin Press, referencia citada en páginas 186, 189.

OBERTI, ALEJANDRA y CLAUDIA BACCI

- 2020 «Los feminismos contra todas las violencias: desde las redes y las calles», en *Bordes. Revista de política, derecho y sociedad*, págs. 53-59, referencia citada en página 191.

PLEYERS, GEOFFREY

- 2017 «Entre las redes sociales y las plazas». *Protesta e indignación global. Los movimientos sociales en el nuevo orden mundial*, Buenos Aires: CLACSO, referencia citada en página 189.

REBÓN, JULIÁN

- 2013 «La legitimidad social de las formas de lucha. Una aproximación a partir de la investigación por encuesta», en *Observatorio Social de América Latina*, n.º 36, págs. 193-214, referencia citada en páginas 187, 189, 195, 196.
- 2018 «La política en las calles. Aproximaciones desde la Argentina reciente», en *Revista de Ciencias Sociales*, vol. 32, n.º 44, págs. 15-42, referencia citada en página 192.

REBÓN, JULIÁN y LEANDRO ANIBAL GAMALLO

- 2021 «Las bases sociales de la protesta en torno al aborto en la Argentina reciente», en *Sociedad y religión*, referencia citada en página 191.

SILVER, BEVERLY

- 2005 *Fuerzas del trabajo. Los movimientos obreros y la globalización desde 1880*, Madrid: Akal, referencia citada en página 186.

SOTO PIMENTEL, VERÓNICA; AGUSTINA GRADIN y MATÍAS REIRI

- 2021 «La conflictividad social en Argentina durante el 2020. Conflictividad social de Argentina en el año 2020. Un análisis de los hechos de protesta durante la pandemia del COVID-19», en *Informe n.º 20 del Observatorio sobre Políticas Públicas y Reforma Estructural*, Buenos Aires: FLACSO, referencia citada en páginas 186, 189.

THOMPSON, EDWARD

- 1979 *Tradición, revuelta y consciencia de clase*, Barcelona: Crítica, referencia citada en página 185.

TILLY, CHARLES

- 2008 *Contentious performances*, Nueva York: Cambridge University Press, referencia citada en página 186.

WRIGHT, ERIK OLIN

- 2000 «Workers power, Capitalist Interests and class compromise», en *American Journal of Sociology*, n.º 105, págs. 957-1002, referencia citada en página 186.
- 2015 *Understanding Class*, Londres, referencia citada en página 200.

## CAPÍTULO 8

# Clase social y evaluación de políticas públicas

RODOLFO ELBERT\* y FLORENCIA MORALES\*\*

### 8.1 Introducción

El presente capítulo analiza las evaluaciones de los/as encuestados/as respecto de diferentes políticas públicas llevadas adelante durante la pandemia de COVID-19 en la Argentina y su opinión sobre una serie de medidas de redistribución socioeconómica que se podrían tomar a futuro. En la primera sección del capítulo, realizamos un análisis descriptivo del grado de acuerdo/desacuerdo de los/as encuestados/as con diferentes políticas implementadas durante la pandemia y con una serie de medidas futuras que se podrían implementar para lograr una redistribución del ingreso en la sociedad argentina. Con respecto al primer grupo de medidas, indagamos las opiniones de los encuestados/as sobre el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), la doble indemnización, el impuesto extraordinario a las grandes fortunas (IEGF) y el congelamiento de alquileres y tarifas. En segundo lugar, esta sección indaga en sus evaluaciones respecto de ciertas medidas de redistribución socioeconómica a futuro, como disminuir los impuestos a las grandes empresas y a las PyMEs, mayores impuestos a la riqueza y una renta universal para sectores vulnerables. Todo el análisis descriptivo se realiza teniendo en cuenta la pertenencia de clase social de los/as encuestados, con el objetivo de observar cuáles son las posiciones de clase en las cuales se dan los mayores grados de acuerdo con las medidas evaluadas.

En la segunda sección del capítulo presentamos un análisis global de las opiniones de los encuestados/as sobre estas políticas, lo cual

---

\* Investigador de CONICET Instituto de Investigaciones Gino Germani-UBA.

\*\* Becaria doctoral del CONICET, Instituto de Investigaciones Gino Germani-UBA.

nos permite evaluar su grado de acuerdo general con la intervención del estado en la economía. Para ello, construimos en base a los diferentes ítems un «índice de preferencia estatismo versus mercado» (IEM), que se propone evaluar la ubicación de los encuestados/as en un continuo que va desde miradas absolutamente pro mercado (desacuerdo con todas las políticas de intervención y redistribución progresiva) y miradas absolutamente pro Estado (acuerdo con todas las políticas de este signo). En particular, el análisis del IEM nos permitirá evaluar el efecto de diferentes variables explicativas de relevancia. Un primer análisis de regresión lineal multivariada se focaliza en una mirada microsocial acerca del efecto de la pertenencia de clase social objetiva sobre la Preferencia de Estatismo versus Mercado, controlando por una serie de variables sociodemográficas y actitudinales relevantes. En segundo lugar, realizamos un análisis de tipo macrosocial sobre qué coalición de clase que podría protagonizar una política «estatista» en la Argentina contemporánea. Este análisis se basa en la construcción de intervalos de confianza para el IEM según clase social, con el objetivo de evaluar qué grupos de clases tienen diferencias estadísticamente significativas entre sí en su mirada promedio acerca de la intervención del estado en la economía.

## 8.2 Análisis de clases sociales y evaluación de políticas públicas

Las opiniones de los encuestados/as sobre las diferentes políticas públicas llevadas adelante durante la pandemia de COVID-19 en la Argentina se pueden comprender como parte del concepto más amplio de cultura política, que «comprende los valores, creencias y pautas de conducta relevantes para el proceso político que prevalece entre los individuos y grupos de la sociedad» (Jorge 2015, pág. 372). En la actualidad, los análisis de cultura política en la Argentina identifican miradas polarizadas alrededor de diferentes ejes, conocidas en la terminología popular como «la grieta». Esto no es de por sí una novedad en la historia argentina, aunque en la última década esta idea ganó una centralidad sin precedentes en el análisis político y mediático (Casullo y Ramírez 2021).

El análisis de las miradas polarizadas de los ciudadanos sobre la política, la economía y la sociedad tiene un carácter marcadamente ideológico que expresa las distintas visiones del mundo que tienen las personas (Casullo y Ramírez 2021). Uno de los ejes identificados como relevante a la hora de caracterizar al electorado es la consideración sobre el rol del estado, a partir de preferencia sobre la intervención estatal en la economía y la caracterización en torno a la iniciativa privada. En su análisis sobre la opinión pública argentina, el analista Mora y Araujo (2011) señala que las preferencias

«estadistas» de la sociedad han experimentado una transformación a raíz de la experiencia neoliberal. A diferencia del *estatismo clásico*, caracterizado por la preferencia de una economía con fuerte intervención estatal, el estatismo del presente o *nuevo estatismo* espera una función reguladora del Estado, no como prestador de servicios o dueño de empresas, sino más bien orientado a arbitrar.

Según el estudio la cultura política de la democracia en Argentina realizado por **Lodola y Seligson (2011)** que analizan los resultados de la encuesta de opinión pública del Latinobarómetro de 2010, las y los argentinos tienden en promedio a ser más estadistas en la mayor parte de las dimensiones que sus conciudadanos americanos. Que el Estado sea el principal actor en la política económica, que tenga el rol de proveedor de servicios de salud, de seguridad social y se oriente a la reducción de la desigualdad, son algunos de los aspectos que expresan los niveles elevados de estatismo de la población. Una posible explicación de este amplio acuerdo con la intervención estatal remite, según los autores, a los intensos procesos de privatizaciones de los años noventa atravesados por distintos Estados, entre ellos el caso argentino. Esta explicación también es compartida por **Capistrano y Castro (2010)** en el análisis comparado sobre Estado y opinión pública en Argentina y Brasil, en el cual la creciente legitimación de la acción estatal es asociada a las crisis y reformas económicas producidas durante los años ochenta y noventa, sumado a una tradición de la cultura política latinoamericana de matriz estatista, comparada con otras partes del mundo.

En resumen, la dimensión estatista de la cultura política se halla asociada a la imagen del Estado como una fuente generadora de bienestar vinculada a la satisfacción de necesidades concretas, como la generación de empleo, la accesibilidad de servicios públicos y a la vivienda y el control de precios (**Catterberg 1989**). Sobre la base de esta dimensión construimos un «índice de preferencia de estatismo versus mercado» (IEM) mediante el cual buscamos identificar los grados de acuerdo/desacuerdo de las personas sobre la ejecución de diversas políticas públicas, que implican desde la implementación de rentas, ingresos o subsidios por parte del estado hasta la implementación o reducción de impuestos a diferentes sectores de la economía.

El comportamiento del IEM nos permitirá indagar sobre los grados de aprobación de la población argentina en torno a las políticas gubernamentales implementadas en la pandemia y sobre la implementación a futuro de medidas redistributivas. Este análisis lo haremos teniendo en cuenta principalmente el efecto de la pertenencia de clase social de los/as encuestados, al considerar esta variable como fundamental en la concepción de las personas sobre la intervención estatal. La pregunta sobre el vínculo entre la posición de

clase objetiva y la orientación político-ideológica de las personas se sostiene en la expectativa teórica de que la clase social objetiva es un mecanismo fundamental para explicar diversos fenómenos sociales (Wright 1997). En particular, sostenemos que la posición de clase objetiva y las experiencias biográficas asociadas a la clase tienen un efecto decisivo sobre diferentes aspectos de la subjetividad de las personas, incluyendo su identidad de clase y su orientación político-ideológica (Sautu 2001).

En términos operacionales, la clase social es una variable independiente o explicativa fundamental para comprender otros fenómenos sociales, como pueden ser el voto, las relaciones de amistad o las percepciones sobre la desigualdad social. No siempre la clase explica estas variables dependientes, pero siempre se parte del supuesto de que esta es la variable explicativa con el objetivo de comprobarlo en el análisis empírico (Hout 2008; Wright 1997). En particular, el presente capítulo se propone estudiar la relación entre posición objetiva de clase social y la ubicación de las personas en el «índice de preferencia estatismo versus mercado», lo cual nos dará información respecto de las posiciones de clase más y menos favorables a la intervención del estado en la economía y la sociedad en un contexto de pandemia. En la siguiente sección se explica en detalle la operacionalización de las principales variables utilizadas.

### 8.3 Estrategia metodológica

El análisis estadístico presentado en este capítulo se compone de una selección de preguntas de la Encuesta nacional sobre la Estructura social de Argentina y Políticas públicas durante la pandemia por COVID-19 (ESAyPP/PISAC-COVID-19) relevada en la Argentina urbana entre octubre y diciembre de 2021. El universo de estudio de la ESAyPP/PISAC-COVID-19 es doble: los hogares y la población adulta residente en localidades de Argentina mayores a 50 mil habitantes. El diseño muestral probabilístico, estratificado y por conglomerados permite tres dominios de estimación: a nivel nacional, por regiones y por tamaño de los aglomerados. El tamaño de la muestra relevada es de 5 239 hogares y personas adultas, combinando amplia escala y cobertura.<sup>[1]</sup> A continuación, se presentan las principales variables incluidas en el estudio.

---

[1] Para profundizar en el diseño teórico-metodológico de la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 elaborado por los equipos de investigación de los proyectos PISAC-COVID-19 085 y 021, véase Dalle y Di Virgilio (2022).

### 8.3.1 Variable dependiente: índice de preferencia estatismo versus mercado (IEM)

El análisis de las evaluaciones de los/as encuestados/as sobre las políticas públicas se centró en las preguntas cerradas 4 y 5 de la sección 11 del cuestionario, que indagaron en el grado de acuerdo/desacuerdo con una serie de políticas gubernamentales implementadas durante la pandemia en nuestro país; y con la implementación de medidas a futuro orientadas a la redistribución socioeconómica. Para ello se empleó una escala del 1 a 3, siendo la opción 1 «de acuerdo», 2 «ni de acuerdo, ni desacuerdo» y la opción 3 «desacuerdo». También se incluyó la opción 4 «no sabe, no contesta». Con respecto a la evaluación de medidas de política pública durante la pandemia se incluyeron las siguientes:

- 1) Ingreso Familiar de Emergencia (IFE);<sup>[2]</sup>
- 2) Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP);<sup>[3]</sup>
- 3) Doble Indemnización;
- 4) Impuesto Extraordinario a las Grandes Fortunas (IEGF);
- 5) Congelamiento de Alquileres y Tarifas.

En segundo lugar, el cuestionario incluyó una batería de preguntas sobre el grado de acuerdo/desacuerdo del encuestado/a con una serie de medidas políticas orientadas a la redistribución socioeconómica:

- 1) Disminuir impuestos a las grandes empresas;
- 2) Disminuir impuestos a las PyMEs;
- 3) Mayores impuestos a la riqueza;
- 4) Renta Universal que garantice un ingreso para todas las familias vulnerables.

En la primera sección de análisis del capítulo presentamos un análisis descriptivo de las distribuciones de estas evaluaciones para cada una de las medidas según clase social objetiva y condición de informalidad. Luego, avanzamos en una segunda sección con la construcción de un índice sumatorio de las evaluaciones con el objetivo de desplegar un análisis de regresión lineal para evaluar cuál es el

---

[2] El IFE consistió en transferencia directa de \$ 10 000 para trabajadores informales y monotributistas con menores ingresos, de la cual se realizaron 3 pagos durante 2020.

[3] El programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), fue el pago de una asignación complementaria del salario (desde 1.25 hasta 2 salarios mínimos vitales y móviles por empleado y empleada, aunque es importante señalar que son montos que fueron cambiando con el tiempo) a las empresas que realizaban actividades consideradas críticas y cuya facturación haya registrado una caída respecto al 2019.

efecto de la clase social una vez que controlamos por otras variables relevantes como ser la afiliación sindical, orientación política y variables sociodemográficas como el género y la edad. El índice que construimos, denominado «índice de preferencia estatismo versus mercado» (IEM) se propone captar la orientación ideológica de los encuestados/as respecto de la intervención del estado en la economía durante la pandemia y a futuro.

La construcción IEM se realizó siguiendo los criterios de análisis estándar para escalas tipo Likert. Esto se debe a que los ítems incluidos en el cuestionario para la evaluación de opiniones sobre políticas públicas brindaron a los encuestados/as las opciones de respuestas gradacionales características de este tipo de escalas: acuerdo, ni acuerdo/ni desacuerdo, desacuerdo. El primer paso para la construcción del índice fue un análisis de correlaciones múltiples para observar si cada ítem individual se comportaba en relación con los otros ítems de manera coherente con la orientación ideológica que se esperaba capturar con el mismo. Por ejemplo, el acuerdo con el ítem «impuesto a las grandes fortunas» intenta capturar una orientación proestado; mientras que el acuerdo con el ítem «disminuir impuestos a las grandes empresas» capturaría una orientación promercado. Por lo tanto, la correlación entre ambos ítems debería ser negativa. Los valores de las categorías para la correlación se determinaron como 1-acuerdo, 2-ni acuerdo ni desacuerdo, 3-desacuerdo. El cuadro 8.1 presenta los resultados.

**Cuadro 8.1. Correlaciones múltiples en la evaluación de políticas públicas durante la pandemia. Población económicamente activa mayor de 18 años. Argentina urbana, 2021.**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
IFE	1,00								
ATP	0,36	1,00							
Doble I.	0,32	0,26	1,00						
IGF	0,35	0,24	0,48	1,00					
Congelamiento alquileres y tarifas	0,28	0,22	0,45	0,42	1,00				
Impuesto riqueza	0,23	0,05	0,29	0,45	0,28	1,00			
Renta universal	0,36	0,14	0,27	0,30	0,31	0,36	1,00		
Bajar impuestos grandes empresas	-0,13	0,00	-0,19	-0,30	-0,16	-0,18	-0,09	1,00	
Bajar impuestos a PyMEs	-0,02	0,07	0,05	-0,02	0,06	0,17	0,09	0,22	1,00

A: IFE; B: ATP; C: Doble I.; D: IGF; E: cong. alquileres y tarifas; F: imp. riqueza; G: renta universal; H: bajar impuestos grandes empresas; I: bajar impuestos a PyMEs. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

Lo primero que observamos es que el ítem «Bajar impuestos a las grandes empresas» tiene correlaciones negativas con el resto de los ítems, salvo con el ATP (correlación 0) y con «Bajar impuesto a las PyMEs» con el cual tiene una correlación positiva (0,22). De todas maneras, el valor de las correlaciones de este ítem con el resto es menor al promedio, por lo cual decidimos excluirlo del índice. Los otros dos ítems que fueron excluidos del índice son justamente el «ATP», que tiene un rendimiento bajo en correlaciones, y el «Bajar impuestos a las PyMEs», ya que tiene correlaciones positivas con algunos ítems pro Estado y también correlación positiva con el ítem promercado. El resto de los ítems presentan correlaciones moderadas y fuertes entre sí, mostrando coherencia en la medición de actitudes pro Estado (y por su contrario, el desacuerdo con estos ítems expresa una actitud promercado).

En resumen, el listado final de ítems incluidos en el índice es el siguiente: I. IFE; II. ATP; III. Doble indemnización; IV. Impuesto a las Grandes Fortunas; V. Congelamiento de alquileres y tarifas; VI. Impuesto permanente a la riqueza; VII. Renta universal. El índice resultante, tiene un rango que va desde, 6 para las miradas promercado y +6 para las miradas pro Estado. Una vez definidos los ítems del índice, se procedió a evaluar el poder de discriminación de cada ítem para las orientaciones ideológicas y el grado de coherencia total del índice.

Para evaluar la capacidad de cada ítem por distinguir entre orientaciones promercado y orientaciones pro Estado, se identificaron los 2 cuartiles extremos en la distribución del IEM y a partir de ello se conformaron 2 grupos. El primer grupo compuesto por el primer cuartil de la distribución, es decir por el cuarto de encuestados/as con miradas más promercado. El segundo grupo incluyó a los encuestados/as del último cuartil, que expresaron las miradas más pro Estado de la muestra. Luego de ello, se realizó un t-test para evaluar la diferencia promedio en los puntajes de cada grupo y en todos los casos las diferencias resultaron estadísticamente significativas. Siguiendo la bibliografía del tema, también se evaluaron los ítems con una medida no-paramétrica (Wilcoxon Mann Withney), lo cual también confirmó diferencias significativas. Finalmente, se analizó el coeficiente Alpha de Cronbach para diversas combinaciones de ítems. La combinación que mejor rankeó, con un Alpha de 0,7478 fue la seleccionada para el capítulo. Según la literatura, un valor de 0,7 es suficiente para aceptar la confiabilidad y validez del índice.

### 8.3.2 Variable explicativa: posición de clase objetiva

El esquema de clases utilizado se basa en la operacionalización del concepto marxista de clase social desplegada por Wright (1997)

que despliega una serie de dimensiones para la categorización de los individuos en posiciones de clase, incluyendo la posesión/no posesión de los medios de producción y para el caso de los asalariados/as, la posesión/no posesión de calificaciones escasas y autoridad en el proceso de trabajo. El punto de partida del esquema de Wright es la distinción entre las categorías de autoempleados y la de empleados, basada en las opciones de la variable «categoría ocupacional». La categoría de autoempleados incluye a los capitalistas (que son autoempleados y contratan a 10 o más trabajadores/as), pequeños empleadores (autoempleados que contratan entre 1 y 10) y la pequeña burguesía (que no contratan trabajadores/as). Para el caso de nuestra encuesta, las primeras dos categorías se incluyeron en una categoría genérica de «empleadores», ya que los estudios por encuesta no capturan a la clase de los grandes capitalistas, para la cual tendría sentido mantener una categoría separada. En segundo lugar, se incluye en la pequeña burguesía a los autoempleados con cierto nivel de calificación, lo cual incluye centralmente a profesionales y técnicos autoempleados.

Posición de clase y condición de informalidad		Clivaje de clase			Clivaje de segmento
		Posesión MP	Autoridad	Calificaciones	Tipo de remuneración
Clases propietarias	Empleadores	++	++	No corresponde	Ganancias
	Pequeña burguesía formal	+	-	++	Ganancias
Clase media	Gerentes	-	++	++	Salarios y bonos
	Supervisores	-	+	-	Salarios
	Profesionales asalariados	-	-	++	Salarios
	Proletariado formal	-	-	-/+	Salarios protegidos
Clase trabajadora	Proletariado informal	-	-	-	Salarios irregulares/ingresos de subsistencia
	Cuentapropismo informal	-	-	-	Ganancias irregulares y de subsistencia

**Figura 8.1.** Clases y segmentos de clase en América Latina. Fuente: **Elbert (2020)** en base a **Wright (1997)**; **Portes (2003)**.

A continuación, el esquema incluye a diferentes posiciones objetivas que pueden ser agrupadas bajo el concepto wrightiano de «posiciones contradictorias de clase», incluyendo a los gerentes y

supervisores (por posesión de autoridad) y a los profesionales asalariados (por posesión de calificaciones). Estos grupos, sumados a la pequeña burguesía calificada (también denominada formal), componen lo que desde otras perspectivas se denomina como «clase media», ya que no son parte de la clase capitalista debido a que no emplean fuerza de trabajo, pero se diferencian de la clase trabajadora por posesión de calificaciones y/o autoridad.

Finalmente, el esquema incluye a una clase trabajadora ampliada, que contiene 3 segmentos según su inserción en el proceso de producción y su condición de informalidad. El primer segmento que denominamos «proletariado formal», que incluye a aquellos asalariados/as que no tienen altas calificaciones y tampoco posiciones de autoridad en el proceso de producción y cuyo modo de remuneración es regulado por el Estado – tomando como indicador el aporte jubilatorio por parte de la patronal – (Gasparini y Tornarolli 2007, pág. 2).

Los otros dos segmentos del esquema intentan capturar la heterogeneidad del mundo informal de la clase trabajadora en la Argentina. Es importante señalar que, desde nuestra perspectiva, la informalidad es un clivaje teóricamente subordinado en la estructura de clases. Es decir, las diferencias socioeconómicas entre trabajadores formales e informales se pueden considerar como generando segmentos significativos al interior de la clase trabajadora, pero no deben ser consideradas como clivajes de clase social. En términos de operacionalización, definimos a las actividades económicas informales como procesos de generación de ingresos que no están regulados por las instituciones de la sociedad (Portes y Castells 1989, pág. 12). Esta definición podría aplicarse a todas las posiciones de clase, porque un trabajo informal se define como todo trabajo que no está regulado por el estado, independientemente de sus características de clase. Por ejemplo, podría haber posiciones de clase media afectadas por la informalidad. Sin embargo, en esta investigación se aplica el criterio de informalidad solo a dos posiciones de clase: el cuentapropismo no calificado y la clase obrera, debido a que son los sectores sociales en los cuales la informalidad está asociada a situaciones de precariedad y pobreza (Beccaria y Groisman 2009; Chávez Molina 2010; Salvia 2012).

El «proletariado informal» incluye a asalariados/as en similares inserciones ocupacionales al proletariado formal, pero cuya relación de dependencia no se encuentra registrada en la seguridad social (los empleadores no les pagan el aporte jubilatorio). La última posición del esquema es la del cuentapropismo no calificado (también denominado informal), que incluye a aquellos autoempleados que no cuentan con estudios superiores completos. El criterio estándar en las investigaciones sobre informalidad es que, debido a la ausencia

de una medición de la formalidad o informalidad de sus prácticas económicas en este tipo de estudios, esta posición de clase se define como cuentapropistas de baja calificación (Gasparini y Tornarolli 2007, pág. 2).<sup>[4]</sup>

## 8.4 Resultados

### 8.4.1 Análisis descriptivo de la relación entre clase social objetiva y evaluación de políticas públicas

Un primer dato que se desprende del análisis es que hubo un amplio nivel de aprobación de las políticas gubernamentales implementadas en la pandemia por parte del conjunto de la sociedad argentina. La gran mayoría de las políticas cuentan con un piso del 50 % de acuerdo, habiendo casos que superan el 80 %. La política que mayor aprobación obtuvo ha sido el Congelamiento de Alquileres y Tarifas, donde hallamos que 8 de cada 10 personas encuestadas acordó con la medida. Por otra parte, el IEGF fue, entre los distintos segmentos de clase, la medida que menos grado de acuerdo obtuvo, con un promedio del 60 % considerando toda la muestra.<sup>[5]</sup>

Al observar los grados de acuerdo según los segmentos de clase identificamos dos grupos con tendencias similares. Por un lado, empleadores/as, pequeña burguesía formal y gerentes/as constituyen los segmentos que menos niveles de acuerdo manifestaron tener con las medidas implementadas. Entre estos segmentos, políticas como la doble indemnización, el IEGF y el congelamiento de alquileres y tarifas concentran los índices de acuerdo más bajos. En cambio, en el caso de la ATP, entre las y los empleadores/as y la pequeña burguesía formal se expresaron grados de acuerdo mayor, lo cual puede explicarse al ser una medida que apuntaba al sostenimiento del empleo privado de empresas nacionales donde el Estado se hacía cargo de una parte del salario de las y los trabajadores. Por otro lado,

---

[4] La encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021) incluyó la pregunta sobre aportes al monotributo por parte de los cuentapropistas, por lo cual se podría distinguir entre formales e informales independientemente de la calificación. En el presente trabajo tomamos la decisión de mantener la división entre cuentapropistas según calificación para reflejar las inserciones ocupacionales de cada categoría.

[5] Esto resulta consistente con los resultados el Informe Especial COVID-19 (2020) realizado por la Universidad de San Andrés, que relevó un nivel de aprobación del 84 % con las medidas temporales implementadas por el Gobierno (51 % respondieron «muy de acuerdo» y 33 % «algo de acuerdo»). Véase el informe completo *Informe Especial*. Universidad de San Andrés (abril 2020). Recuperado el 1 de junio de 2022 de: <https://udesa.edu.ar/espop/informes-especiales>.

**Cuadro 8.2. Grado de acuerdo de los segmentos de clase con las políticas públicas gubernamentales durante la pandemia de COVID-19 Población económicamente activa mayor de 18 años. Argentina urbana, 2021 (en %).**

Segmentos de clase	Políticas públicas implementadas					
	A	B	C	D	E	N
Empleadores/as	69,5	68,9	47,9	55,7	70,1	113
PB Formal	67,7	71	61,1	53,1	73,1	297
Gerentes/as	57,7	62,1	51,6	41,5	61,6	161
Supervisores/as	69,1	66,6	71,1	62,4	83	325
Expertos/as	75,1	69,6	74,4	61,4	85,8	742
Proletariado Formal	68,9	69,2	70,9	60	78,9	1.194
Proletariado Informal	83,7	66,4	71,9	61,8	83,4	1.163
Cuentapropismo Informal	70,4	65	66,8	60,8	76,7	829
Total (acuerdo)	73,3	67,6	69,2	59,8	79,8	4.823

A: IFE; B: ATP; C: doble indemnización; D: IEGF; E: congelamiento de alquileres y tarifas. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

los segmentos de supervisores/as, expertos/as, proletariado informal y cuentapropismo Informal conforman otro grupo, que manifestaron un acuerdo mayor con las políticas implementadas durante la pandemia. Esto se ve expresado en los grados de acuerdo con congelamiento de alquileres y tarifas, que ronda entre el 77 % y 86 % de aprobación aproximado. También en el caso del IEGF, donde mostraron niveles más elevados de acuerdo que el grupo anterior, rondando entre 60 % y 62 % y, la doble indemnización que entre los segmentos asalariados ronda entre el 71 % y 74 % de acuerdo aproximado.

Por último, queremos señalar el análisis de algunos segmentos de clase que resultaron significativos. Dentro del primer grupo, el caso de las y los gerentes/as ha sido el segmento más conservador en sus respuestas, presentando en la gran mayoría de los casos el menor grado de acuerdo con las medidas implementadas. Entre ellas, el IEGF fue con la que menos acordaron (41,5 %) y a la vez, en comparación al total de la muestra, el nivel de acuerdo más bajo expresado para una política. Esto puede estar asociado a que la implementación de esta política podría afectar directamente su patrimonio. Un caso similar puede ser el de las y los empleadores, que han tenido el grado de acuerdo más bajo en la «doble indemnización», con un 47,9 %, siendo este el segundo nivel de acuerdo más bajo después del señalado más arriba respecto al segmento de gerentes/as. Cabe

destacar también que las y los empleadores y la pequeña burguesía formal han expresado niveles similares de aprobación del ife que el proletariado formal. Por otra parte, dentro del segundo grupo, a pesar de sus diferencias, las y los expertos y el proletariado informal fueron los segmentos que mayores niveles de aprobación han expresado respecto al conjunto de medidas implementadas. En relación al IFE, el proletariado informal ha sido el segmento que mostró un grado de apoyo significativamente mayor al resto de todos los segmentos (83.7 %), lo cual podría explicarse por haber sido la principal población beneficiaria de la media (D'Alessandro *et al.* 2020).<sup>[6]</sup>

En el análisis de los grados de acuerdo con la implementación de medidas futuras hemos observado por ejemplo que la Renta Universal ha sido una de las medidas con mayor aprobación, principalmente dentro del segundo grupo de segmentos identificados más arriba, encabezado por el proletariado informal (70.8 %). Por el contrario, y siguiendo la tendencia anterior sobre los acuerdos con las medidas implementadas durante la pandemia, el segmento de las y los gerentes fue el que manifestó el menor nivel de acuerdo con esta (37.2 %), muy por debajo del segmento de empleadores/as (55.4 %) y de la pequeña burguesía formal (57.9 %).

La disminución de impuestos a las PyMEs muestra un nivel de acuerdo elevado entre los segmentos del primer grupo, acompañado por el amplio acuerdo de las y los Supervisores y las y los Expertos, que expresan los índices más altos de acuerdo entre todas las medidas (entre un 70 % a un 83 % aproximadamente). Otro dato relevante ha sido la diferencia significativa en los niveles de acuerdo con la medida de disminución de Impuestos a las grandes empresas, que representó un promedio general del 23 % aproximado entre toda la muestra. En este caso, se puede observar que el primer grupo de segmentos son los que mayores niveles de acuerdo expresaron. Sin embargo, en líneas generales, podemos afirmar que la sociedad argentina no considera que los beneficios a las grandes empresas sea una medida necesaria a implementar a futuro. En relación con esto, el aumento del Impuesto a las riquezas ha sido considerado como medida necesaria para implementarse a futuro mayormente por segmentos de clases medias y en menor medida por el proletariado

---

[6] Cabe destacar que, en el marco de la profunda crisis social y económica desatada por la pandemia, más de 11 millones de personas solicitaron el IFE. Sin embargo, su implementación estuvo muy por debajo de esa cifra. Según un informe elaborado por el Ministerio de Economía, 7 854 316 personas lo recibieron en dos etapas (D'Alessandro *et al.* 2020). En este punto, la encuesta no ha llegado a indagar además del nivel de aprobación con las medidas efectivamente implementadas si se hubiese estado de acuerdo con la necesidad de la aplicación de medidas complementarias.

**Cuadro 8.3. Grado de acuerdo de los segmentos de clase con la implementación de políticas públicas a futuro en la Argentina. Población económicamente activa mayor de 18 años. Argentina urbana, 2021 (en %).**

Segmentos de clase	Políticas públicas para implementar a futuro				N
	A	B	C	D	
Empleadores/as	27,9	80,7	43,8	54,9	113
PB Formal	34	73,3	46,3	57,9	297
Gerentes/as	29,2	70,1	42,1	37,2	161
Supervisores/as	25	83,3	60,3	60,9	325
Expertos/as	22,8	78,4	59,9	66,6	742
Proletariado Formal	24,1	65,3	56,5	59,8	1.194
Proletariado Informal	19,8	55,7	53,2	70,8	1.163
Cuentapropismo Informal	20,8	65,3	53,5	65,2	829
Total (acuerdo)	23,2	67,2	54,6	63,5	4.823

A: disminuir impuestos a las grandes empresas; B: disminuir impuestos a las PyMEs; C: mayores impuestos a la riqueza; D: renta universal. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

formal. Los grados de consenso sobre esta medida a nivel general (54.6 %) encuentran relación con lo expresado sobre el IEGF implementado durante la pandemia (59.8 %). Sin embargo, la diferencia entre ambas puede leerse como un mayor consenso sobre este tipo de medidas en momentos de crisis.

En líneas generales podemos decir hasta aquí que en un contexto signado por discursos que sostienen la necesidad de la reducción del gasto público y de los impuestos, como así también del cuestionamiento de la intervención estatal en la economía, hemos hallado un amplio consenso de la sociedad argentina acerca de la implementación de políticas para mitigar las consecuencias de la pandemia, como así también un consenso sobre el que trabajar para el diseño e implementación de medidas futuras orientadas a la redistribución socioeconómica. Tal es el caso del debate sobre una renta universal, propuesta que hace unos años podría haber resultado excéntrica, y actualmente se ha convertido en una discusión en la agenda política.

### 8.4.2 Análisis de regresión del efecto de la clase social sobre el índice de preferencia estatismo versus mercado

Una vez realizado el análisis descriptivo sobre la relación entre clase social objetiva y evaluación de las políticas públicas, es momento de incorporar otras variables al análisis con el objetivo de determinar si se trata de una relación estadísticamente significativa. Para ello, realizamos en esta sección un análisis de regresión lineal multivariado, que incorpora las dos variables principales de nuestro estudio (variable explicativa: clase social; variable explicada: IEM), además de otras variables de control significativas, incluyendo un grupo de variables sociodemográficas (género, edad, sector de inserción ocupacional); variables actitudinales (identificación político-ideológica) y la región de residencia. El cuadro 8.4 presenta los resultados del análisis de regresión.

Como se observa en el cuadro anterior, el efecto de la clase social objetiva sobre el índice IEM se mantiene significativo, incluso luego de controlar por una serie de variables relevantes para el análisis. Poniendo el foco en el efecto de la clase, podemos observar que existe un «bloque promercado» compuesto por las posiciones de clase de gerentes y empleadores. Es decir, no existen diferencias estadísticamente significativas al interior de este bloque, que es el que tiene los valores más bajos en el IEM. En un punto intermedio podemos encontrar a la pequeña burguesía formal, que no tiene diferencias significativas con las posiciones más promercado, pero tampoco con el pro-Estado. Finalmente, podemos identificar un «bloque progresista», que tiene como la posición de clase más favorable a la intervención del estado al proletariado informal, seguidos de los expertos sin autoridad y el proletariado formal. Las posiciones cuentapropias no calificadas también se suman a este bloque, aunque con un nivel de significancia estadística menor que el resto de las posiciones.

Otro dato interesante que surge del análisis de regresión es la importancia de las variables actitudinales para explicar las variaciones en el IEM. En primer lugar, la variable orientación política tiene un efecto positivo fuerte sobre las preferencias favorables hacia la intervención estatal. Esta variable se codificó de manera tal que las posiciones más hacia la derecha (PRO, libertarios) tienen un puntaje de -2, seguidas por el radicalismo (-1); luego los/as encuestados/as que dijeron no tener identificación partidaria tienen un 0; y finalmente, aquellos identificados con el peronismo tuvieron un 1 y los identificados con la izquierda un 2. En resumen, la variable de orientación política es una variable cuantitativa que varía entre -2 para las opciones más hacia la derecha y +2 para las opciones más hacia la izquierda. Tomada individualmente, es la variable que mayor efecto

**Cuadro 8.4. Regresión lineal, evaluación de políticas públicas según posición de clase, variables actitudinales, sociodemográficas y región de residencia. Población económicamente activa mayor de 18 años, Argentina urbana, 2021.**

	Efectos brutos	Modelo Efectos netos
	B	B
Constante		2,17
Posición de clase (Ref. Gerentes)		
Empleadores	0,06	0,68
Pequeña burguesía formal	0,74 **	0,65 *
Supervisores	1,49 ***	1,09 ***
Expertos sin autoridad	1,82 ***	1,31 ***
Proletariado formal	1,54 ***	1,27 ***
Proletariado informal	2,03 ***	1,46 ***
Cuentapropismo informal	1,40 ***	1,20 ***
Controles sociodemográficos		
Género (Ref. varones)		
Varones	-	-
Mujeres	1,98 **	0,23 ***
Edad		
Años+	-0,02 ***	-0,02 ***
Sector de empleo (Ref. privado)		
Privado	-	-
Público	0,1	-0,01
Afiliación sindical (Ref. No afiliados)		
No afiliados	-	-
Afiliados	0,22 *	0,29 **

*Continúa en la página siguiente*

tiene sobre las variaciones en el IEM, siendo que las posiciones más hacia la izquierda tienen valores más estadísticas en el índice.

Con respecto al grupo de variables sociodemográficas, se observa un efecto significativo del género y la edad, siendo que las mujeres son más estadísticas que los varones; y a medida que aumenta la edad disminuye el apoyo al estatismo. Sorprendentemente, el sector de empleo no tiene un efecto significativo sobre el IEM. Siguiendo la bibliografía sobre el tema, hubiéramos esperado un efecto positivo

<i>Viene de la página anterior</i>		
	Efectos brutos	Modelo Efectos netos
Variables actitudinales		
Orientación político-ideológica (Ref. Derecha)		
Derecha	-	-
Izquierda/Centro-izquierda	1,24 ***	1,18 ***
Región (Ref. AMBA)		
AMBA	-	-
Pampeana	-0,10	-0,07
Centro	-0,22	-0,26 *
Cuyo	0,19	-0,09
NOA	-0,22	-0,28
NEA	-0,22	-0,14
Patagonia	-0,27	-0,20
R cuadrado		0,20

\*\*\*  $p < 0.01$ , \*\*  $p < 0.05$ , \*  $p < 0.1$  (indican los niveles de significancia). Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

del empleo público sobre el IEM, pero ello no se constata en nuestros datos. El efecto de la afiliación sindical es significativo y tiene la dirección esperada (aquellos/as afiliados al sindicato muestran mayor apoyo a la intervención estatal). Por último, cabe señalar que no hay diferencias significativas entre regiones. Tomando como referencia al GBA, todas las regiones tienen coeficientes negativos respecto de la región de referencia. De todas maneras, descartamos que las diferencias sean significativas luego de controlar por otras variables.

## 8.5 Conclusiones

El presente capítulo analizó las evaluaciones de los/as encuestados/as respecto de diferentes políticas públicas llevadas adelante durante la pandemia de COVID-19 en la Argentina. En términos generales, encontramos un alto grado de acuerdo con las políticas orientadas a una protección social de la población trabajadora durante la pandemia. Más allá de ciertos discursos mediáticos respecto de un supuesto consenso antiestadista en la Argentina actual, nuestros datos confirman que las miradas favorables a la intervención del estado durante la pandemia fueron abrumadoramente mayoritarias. En particular, personas pertenecientes a determinadas clases sociales

como el proletariado formal, informal y los Expertos fueron los que más apoyo brindaron a este tipo de medidas.

El análisis de regresión nos permitió identificar el efecto de otras variables relevantes, como las sociodemográficas y actitudinales sobre la preferencia estatismo versus mercado en pandemia. A modo de conclusión podemos decir que el efecto de la clase objetiva se mantiene incorporando estas diferentes variables, y que el efecto individual de las variables nos indica que el grupo más estatista está compuesto por mujeres jóvenes y de clase trabajadora. Otra variable relevante para explicar variaciones en el IEM es la orientación política de la persona, siendo que las personas identificadas con el peronismo o la izquierda mostraron un apoyo significativamente mayor a la intervención del estado.

## Referencias

BECCARIA, LUIS y FERNANDO GROISMAN

- 2009 «Informalidad y pobreza: una relación compleja», en *Argentina desigual*, Buenos Aires: UNGS, págs. 93-156, referencia citada en página 213.

CAPISTRANO, DANIEL y HENRIQUE CASTRO

- 2010 «O papel do Estado e cultura política na Argentina e no Brasil», en *Opinião Pública*, n.º 16, págs. 338-365, referencia citada en página 207.

CASULLO, MARÍA ESPERANZA e IGNACIO RAMÍREZ

- 2021 «Anatomía de la polarización política argentina», en *Polarizados ¿Por qué preferimos la grieta? (Aunque digamos lo contrario)*, Buenos Aires: Capital Intelectual, referencia citada en página 206.

CATTERBERG, EDUARDO

- 1989 *Los argentinos frente a la política: Cultura política y opinión pública en la transición argentina a la democracia*, Buenos Aires: Planeta, referencia citada en página 207.

CHÁVEZ MOLINA, EDUARDO

- 2010 *La construcción social de la confianza en el mercado informal. El caso de los feriantes de Francisco Solano*, Buenos Aires: Nueva Trilce, referencia citada en página 213.

D'ALESSANDRO, MERCEDES *et al.*

- 2020 *Ingreso familiar de emergencia. Análisis y desafíos para la transferencia de ingresos a trabajadores/as precarios/as*, Buenos Aires: Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, referencia citada en página 216.

DALLE, PABLO y MARÍA MERCEDES DI VIRGILIO

- 2022 «Estructura social de Argentina y políticas públicas durante la pandemia de COVID-19: el diseño de una encuesta nacional comparativa interregional», en *Revista Latinoamericana de Metodología de la Ciencias Sociales*, vol. 12, n.º 2, referencia citada en página 208.

ELBERT, RODOLFO

- 2020 *Uniendo lo que el Capital divide: Clase obrera, fragmentación y solidaridad (Buenos Aires, 2003-2011)*, Buenos Aires: Ediciones Imago Mundi, referencia citada en página 212.

GASPARINI, LEONARDO y LEOPOLDO TORNAROLLI

- 2007 «Labor informality in Latin America and the Caribbean», en *Working paper, CEDLAS*, referencia citada en páginas 213, 214.

HOUT, MIKE

- 2008 «How Class Works: Objective and Subjective Aspects of Class Since the 1970s», en *Social Class. How Does It Work?*, Nueva York: Russell Sage Foundation, págs. 25-64, referencia citada en página 208.

JORGE, EDUARDO

- 2015 «La cultura política argentina: una radiografía», en *Question*, recuperado de <<http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/50808>>, referencia citada en página 206.

LODOLA, GERMÁN, y MITCHELL SELIGSON

- 2011 *Cultura política de la democracia en Argentina, 2010: Consolidación democrática en las Américas en tiempos difíciles*, Universidad de Vanderbilt, referencia citada en página 207.

MORA Y ARAUJO, MANUEL

- 2011 *La Argentina Bipolar: Los vaivenes de la opinión pública (1983-2011)*, Buenos Aires: Sudamericana, referencia citada en página 206.

PORTES, ALEJANDRO

- 2003 «Latin American Class Structures: Their Composition and Change during the Neoliberal», en *Latin American Research Review*, vol. 38, n.º 1, págs. 41-82, referencia citada en página 212.

PORTES, ALEJANDRO y MANUEL CASTELLS

- 1989 «World underneath: The origins, dynamics, and effects of the informal economy», en *The informal economy: Studies in advanced and less developed countries*, Maryland: The Johns Hopkins University Press, págs. 11-40, referencia citada en página 213.

SALVIA, AGUSTÍN

- 2012 *La trampa neoliberal. Un estudio sobre los cambios en la heterogeneidad estructural y la distribución del ingreso en la Argentina: 1990-2003*, Buenos Aires: EUDEBA, referencia citada en página 213.

SAUTU, RUTH

- 2001 *La gente sabe. Interpretaciones de la clase media acerca de la libertad, la igualdad, el éxito y la justicia*, Buenos Aires: Lumiere, referencia citada en página 208.

WRIGHT, ERIK OLIN

- 1997 *Class counts: Comparative studies in class analysis*, Cambridge University Press, referencia citada en páginas 208, 211, 212.



## CAPÍTULO 9

# ¿En qué condiciones continuó la escolarización durante la pandemia por COVID-19 en Argentina? Una mirada según clase social

JULIETA C. LÓPEZ\* y MARIANO HERMIDA\*\*

### 9.1 Introducción

En el marco de la pandemia por COVID-19, y de acuerdo con las medidas preventivas de distanciamiento físico para detener la transmisión del virus, la mayor parte de los gobiernos del mundo suspendieron el dictado de clases presenciales temporalmente en las instituciones educativas. Argentina no fue ajena a estas medidas, lo que significó la mayor interrupción simultánea de servicios educativos de la historia reciente a nivel global, y ha afectado a más del 90 % de la población mundial de estudiantes, desde la educación preescolar hasta la superior (OREALC y UNESCO 2020).

Argentina fue uno de los países más afectados junto con Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Perú, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana por la interrupción de clases, debido a que las medidas se adoptaron a pocas semanas del inicio del año escolar 2020. La aplicación de medidas de suspensión educativa, como las restantes medidas de aislamiento y distanciamiento que se aplicaron en Argentina, fueron fijadas por el gobierno nacional, y los gobiernos provinciales las adoptaron de acuerdo a su situación epidemiológica. Como resultado, en gran parte del año 2020 hubo una continuidad

---

\* Docente investigadora del Instituto de la Educación y el Conocimiento de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.

\*\* Docente investigador del Instituto de Cultura Sociedad y Estado de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.

en la suspensión generalizada de la asistencia a clases presenciales (OREALC y UNESCO 2020). En este contexto, cobra relevancia el análisis de la dimensión educativa.

En el presente trabajo describimos en que condiciones continuaron con las tareas educativas desde sus hogares las niñas, niños y jóvenes de la Argentina, según clase social de origen durante la pandemia por COVID-19. En segunda instancia, identificamos los factores que condicionan la continuidad en el sistema educativo de las y los jóvenes, ya que es a partir de los 15 años de edad que se observa el descenso de la asistencia escolar.

Para ello se analizaron los datos provenientes de la Encuesta nacional sobre la Estructura Social de Argentina y Políticas Públicas durante la pandemia por COVID-19 (ESAyPP/PISAC-COVID-19) relevada en la Argentina urbana entre octubre y diciembre de 2021. El universo de estudio de la encuesta es doble: los hogares y la población adulta residente en localidades de Argentina mayores a 50 000 habitantes. El diseño muestral probabilístico, estratificado y por conglomerados permite tres dominios de estimación: a nivel nacional, por regiones y por tamaño de los aglomerados. El tamaño de la muestra relevada es de 5 239 hogares y personas adultas, combinando amplia escala y cobertura.<sup>[1]</sup> De forma complementaria, procesamos información provista por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la principal encuesta a hogares del país relevada regularmente por el INDEC y datos del operativo de Evaluación del Proceso de Continuidad Pedagógica (EPCP) realizado por la Secretaría de Evaluación e Información Educativa (SEIE) del Ministerio de Educación de la Nación

La información vinculada con la ocupación principal del principal sostén del hogar se clasificó conforme al Clasificador Nacional de Ocupaciones (CNO) y se elaboraron las distintas agrupaciones socio-ocupacionales de acuerdo a la posición, jerarquía y calificación de la ocupación. El diseño metodológico articula técnicas cuantitativas de análisis de datos estadísticos: análisis de frecuencias, tablas de contingencia bivariadas y trivariadas, cálculo de tasas e indicadores estadísticos.

El capítulo se encuentra organizado en dos apartados. En primer lugar, se caracteriza a la población bajo estudio en relación con el acceso al sistema educativo. En una segunda instancia, se analizan los diferenciales por clase social, con énfasis en los recursos con los que cuentan los hogares para la educación remota efectiva y los factores asociados a la discontinuidad de los estudios. Finalmente,

---

[1] Para poder profundizar en el diseño teórico-metodológico de la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 elaborado por los equipos de investigación de los proyectos PISAC-COVID-19 085 y 021, véase Dalle y Di Virgilio (2022).

se presentan una serie de comentarios y reflexiones originadas en el marco de las relaciones de clase, el acceso y permanencia en el sistema educativo en el contexto generado por la pandemia por COVID-19, teniendo en cuenta las transformaciones por las que atraviesa el sistema educativo.

## 9.2 Población y educación, una imagen de la Argentina entre la pre y pospandemia

Desde la década del noventa se evidenció una ampliación del acceso al sistema educativo en Latinoamérica (Tenti Fanfani 2007). Argentina, en las últimas décadas mostró grandes progresos en la ampliación de la cobertura. De hecho fueron, junto con Chile y Uruguay, los países de América Latina que más temprano masificaron el acceso a la educación primaria (Pinto 2020, pág. 3).

En la región Latinoamericana las tasas de asistencia escolar de la población de 5 a 17 años evidencian una cobertura prácticamente universal: hacia el 2000 el promedio de la región se encontraba en torno al 90 %, en 2018 ascendió al 95 % (Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina [SITEAL] IPEE-UNESCO). En Argentina, este indicador alcanzó el 93,8 % en el 2000 y ascendió al 97 % en 2018. A su vez, la tasa neta ajustada de asistencia escolar secundaria, es decir, la proporción de la población que por su edad se espera que esté asistiendo a este nivel educativo, es también la más elevada de la región: 81,6 % en el 2000 y ascendió al 88,7 % en 2018 (SITEAL, IPEE-UNESCO). La sanción de la ley de Educación Nacional en 2006, que estableció la obligatoriedad de la educación secundaria, explica en parte este avance.

Aún así, con la ampliación del acceso al sistema educativo hacia 2019 persistían dificultades ligadas a la finalización de los estudios secundarios y al acceso a la educación superior «solo el 65 % de los jóvenes entre 18 y 23 años habían completado el nivel secundario» (Pinto 2020, pág. 6).

La asistencia neta por estrato social, muestra disparidades importantes en el acceso al sistema educativo «del total de jóvenes de entre 12 y 17 años provenientes de estratos sociales más bajos, solo el 85,7 % asiste a la secundaria, comparado con un 98,3 % para aquellos de hogares de mayores recursos. Esta brecha de casi 13 puntos porcentuales es, no obstante, parte de una tendencia a la baja, dado que la brecha ascendía a 28 puntos porcentuales a principios de los 2000» (Pinto 2020, pág. 4).

Por lo tanto, esta ampliación del sistema educativo no alcanzó por igual a toda la población, aún persisten diferenciales por clase social de origen que colaboran en la reproducción de los mecanismos de desigualdad social (Boniole y Najmías 2018; Solís y Dalle

2019), asociados a la desigual oportunidad de acceso a credenciales educativas, en un marco de deterioro de las mismas.

### 9.2.1 Acceso al sistema educativo durante la pandemia por COVID-19

En primera instancia, nos interesa generar conocimiento en torno a las repercusiones observables de la pandemia en cuanto al acceso de la población a la educación, a los fines evaluar diferenciales vinculados con la edad, la región del país y el nivel educativo. Para avanzar luego en la descripción de las condiciones en las que tuvo lugar la escolarización en los hogares y cuál es la magnitud de los diferenciales por clase social.

La región de Latinoamérica y el Caribe fue uno de los lugares del mundo con los cierres más prolongados de escuelas, con un promedio de 158 días sin clases presenciales en 2020. En este marco, se observó una caída en la asistencia escolar, pero muy lejos del éxodo del sistema educativo que se esperaba (Acevedo *et al.* 2020).

En esta línea, analizamos las tasas de asistencia escolar para dimensionar el efecto de la interrupción de clases presenciales. Argentina era uno de los países con mayores tasas de asistencia escolar en la región hasta el inicio de la pandemia. En relación con la situación antes y durante la pandemia registrada por la EPH, durante la fase más restrictiva del aislamiento, la asistencia escolar disminuyó en todos los grupos de edad excepto entre los 13 a 17 años, – el incremento es de apenas 0,8 puntos porcentuales –. Y, la asistencia en jóvenes de 18 a 29 años de edad disminuyó un 11.1 %, durante la fase más restrictiva del ASPO respecto del último dato previo a la pandemia.

**Cuadro 9.1. Tasas de asistencia por grupos de edad. Población de 4 años y más. Total de aglomerados urbanos. 4° trimestre 2019 y 2020. Fuente: elaboración propia en base a INDEC, EPH, 4° trimestres de 2019 y 2020.**

Grupos de edad	EPH 4° trim. 2019	EPH 4° trim. 2020
4 a 12	97.5	95.9
13 a 17	94.2	95.0
18 a 29	37.8	33.6
30 y más	3.6	3.2
Total	31.0	32.0

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, EPH, 4° trimestres de 2019 y 2020.

La ESA y PP PISAC COVID-19 se relevó hacia el segundo semestre de 2021, en un contexto menos restrictivo en lo que refiere a la circulación en la vía pública así como en las escuelas, ya que en muchas provincias se retomó la presencialidad de manera alternada con actividades no presenciales. La asistencia en los grupos de edad correspondientes a la escolarización obligatoria (4 a 17 años) es indicativa de que aún un 0.7% de las y los niños de 4 a 12 años y un 2.9% de las y los jóvenes de 13 a 17 años están por fuera del sistema educativo. En este último grupo de edades, la inasistencia se eleva a partir de los 15 años de edad. Esto último no constituye una particularidad del contexto, sino una continuidad del comportamiento observado en la inserción educativa de este grupo de jóvenes y es coincidente con el ingreso temprano al mercado laboral en algunos casos y el inicio de una maternidad o paternidad adolescentes.<sup>[2]</sup>

Este descenso de la asistencia escolar en torno a los 15, 16 años se acentúa hacia los 18 años y se evidencia en un fuerte descenso de la cobertura del sistema educativo en el grupo de edad de 18 a 29 años, edad teórica en la que se espera que los jóvenes transiten el nivel superior.

#### **Cuadro 9.2. Tasas de asistencia por grupos de edad. Población de 4 años y más. Argentina urbana, diciembre de 2021.**

Grupos de edad	Tasa de asistencia
4 a 12	99.3
13 a 17	97.1
18 a 29	32.6
30 y más	4.3
Total	34.0

Fuente: elaboración propia en base a los datos de la ESAyPP/PISAC-COVID-19.

El desarrollo económico y social de nuestro país encierra todavía grandes disparidades regionales. Los indicadores a nivel nacional pueden ser pensados como promedios ponderados por el peso poblacional de cada región (Torrado 1993, pág. 30). En esta línea, nos interesa dar cuenta de la magnitud de las disparidades regionales vinculadas con la cobertura y acceso al sistema educativo de la población. Cabe destacar que en la población en edad de escolarización obligatoria – 4 a 17 años – no se observan diferencias significativas

[2] Hacia el final del capítulo vamos a profundizar la mirada acerca de los factores que inciden en la interrupción de las trayectorias escolares de las y los jóvenes.

en las tasas de asistencia. Las regiones con mayor nivel de cobertura son Gran Buenos Aires, Patagonia y Noroeste. Si bien se trata de niveles de cobertura muy elevados, aún no logran alcanzar el *ideal estadístico*<sup>[3]</sup> (Ritchey 2006, pág. 5) que es alcanzar la universalización de la educación obligatoria. Las diferencias en la asistencia de las y los jóvenes de 18 a 29 años de edad son más notorias: la región Centro presenta la menor tasa de asistencia, 11,6 puntos porcentuales debajo de la región Pampeana, que presenta la tasa de asistencia más elevada, seguida por la región del Noroeste y de Cuyo.

**Cuadro 9.3. Tasas de asistencia por región por grupos de edades. Población de 4 años y más. Argentina urbana, diciembre de 2021.**

Región	4 a 17 años	18 a 29 años
Centro	98.2	27.8
Cuyo	97.8	36.2
AMBA	98.9	29.5
NEA	97.7	30.5
NOA	98.8	38.5
Pampeana	98.5	39.4
Patagónica	98.9	30.7

Fuente: elaboración propia en base a los datos de la ESAyPP/PISAC-COVID-19.

De la comparación de las tasas por región antes y durante el aislamiento social por la pandemia (véase cuadro 9.4) valen destacar los siguientes aspectos: la suspensión de clases presenciales no se tradujo en una caída brusca de la asistencia en ninguna de las regiones para el grupo de edades de 4 a 17 años. El Noreste que tenía inicialmente la menor tasa de asistencia, aumenta en años posteriores, acercándose al resto de las regiones y disminuyendo la brecha entre regiones.

En los jóvenes de 18 a 29 años, en 2019 el rango entre regiones es de 7.7 puntos porcentuales y hacia 2021, disminuye a 6 puntos porcentuales. Resulta llamativo que en 2020, el año en el que las restricciones de circulación fueron mayores, las tasas de asistencia aumentaron levemente en casi todas las regiones excepto en Gran Buenos Aires, con una caída abrupta de un poco más del 20 %. Por el contrario, en la región Patagónica la asistencia para este grupo aumentó un poco más del 10 % y en 2021 continúa esta tendencia.

[3] Refiere a la tasa de ocurrencia socialmente deseada de un fenómeno, una tasa óptima que se quiere alcanzar.

**Cuadro 9.4. Tasas de asistencia por región por grupos de edades. Población de 4 a 29 años. Total de aglomerados urbanos. 4° trimestres de 2019, 2020 y 2021.**

Región	4 a 17 años			18 a 29 años		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Cuyo	96.2	96.4	97.2	36.9	35.6	36.6
AMBA	96.9	95.3	96.6	36.1	27.5	39.0
NEA	92.8	94.0	95.6	37.9	41.0	35.3
NOA	95.0	94.5	95.1	39.9	42.7	40.9
Pampeana	96.3	97.1	96.2	41.6	42.2	41.3
Patagónica	95.9	95.4	96.7	33.9	37.5	39.7

Fuente: elaboración propia en base a INDEC, EPH 2019, 2020, 2021 4° trimestre.

Un indicador más refinado para dimensionar la cobertura del sistema educativo en el nivel esperado de acuerdo a la edad, es la tasa de asistencia neta por nivel.<sup>[4]</sup> Desde principios del siglo XXI, se han evidenciado avances en la cobertura del sistema educativo. Para el año 2000, la tasa neta de asistencia al nivel primario era del 94.7 %, hacia 2010 ascendió al 97.1 % (SITEAL, IPE-UNESCO) y se mantuvo estable. En el nivel secundario, pasó de alcanzar el 81.6 % de los jóvenes en la edad teórica esperada al 88.7 % en 2018 (SITEAL, IPE-UNESCO).<sup>[5]</sup>

Las tasas netas por nivel estimadas con datos de la ESAyPP/PISAC-COVID-19, dan cuenta de cierto desajuste entre la edad teórica y la edad real en la que se transitan los niveles educativos, ya que estas resultan menores para todos los niveles educativos que las tasas de asistencia brutas por edad, en las que no se considera el nivel al que se asiste.

Las brechas de las tasas netas de asistencia por sexo, son favorables a las mujeres, con una tasa de casi 5 puntos porcentuales mayor a la de los varones en el nivel secundario y 5.5 puntos porcentuales

[4] Las tasas de asistencia neta expresan en qué medida la población que por su edad debiera estar asistiendo al nivel educativo correspondiente efectivamente está escolarizada en ese nivel o niveles superiores.

[5] Los datos de IPE-UNESCO elaborados en base a la EPH, se incluyeron a los fines de presentar datos que permitan mostrar la tendencia que venían mostrando estos indicadores. No resultaría adecuado comparar las tasas provenientes de las distintas fuentes (EPH y ESA PIRC-PISAC COVID-19), elaboradas sobre distintos marcos muestrales y criterios de representatividad.

en el nivel superior. Lo que supone que el desajuste entre la edad teórica y la real a la que se asiste al nivel es menor, respecto de los varones.

**Cuadro 9.5. Tasa de asistencia neta por sexo. Población escolarizada de 4 años y más. Argentina urbana, diciembre de 2021.**

Nivel educativo	Varón	Mujer	Total
Inicial	96.4	97.7	97.0
Primario	95.4	95.7	95.6
Secundario	90.1	94.9	92.1
Superior	28.6	34.1	31.2

Fuente: elaboración propia en base a los datos de la ESAyPP/PISAC-COVID-19.

Al desagregar las tasas de asistencia neta por región, en el nivel primario casi todas las regiones excepto Gran Buenos Aires y Pampeana experimentan tasas mayores a la media nacional. En el nivel secundario, la región del Noreste tiene la menor tasa de asistencia neta (86.8 %) y junto con las regiones Centro y Patagonia son las regiones con tasas por debajo del promedio nacional. En el nivel superior, solo la región del Noroeste y Pampeana tienen tasas netas por encima de la media nacional (31.2 %). En cuanto a las brechas entre regiones, en el nivel primario y secundario es de 8 y 7 puntos porcentuales. En el nivel superior se observa la mayor brecha de 22 puntos porcentuales, entre el Noroeste (46.1 %) y Centro (24.5 %) seguida de la Patagónica (24.9 %).

Hasta aquí, las tasas de asistencia y de asistencia neta por sexo y a nivel de regiones, muestran que no hubo un éxodo del sistema educativo como se anticipaba (Acevedo *et al.* 2021). Las disparidades entre regiones y sexos son atribuibles a desigualdades pre-existentes antes que a la interrupción de clases con motivo del aislamiento social en el marco de la pandemia.

Sin embargo, los indicadores mencionados no aportan información respecto de ¿cuáles fueron las condiciones materiales en las que la mayor parte de las y los estudiantes continuaron los estudios, desde sus hogares?, ¿con qué equipamiento contaban y que diferencias se observan por clase social? En este sentido, cobra relevancia realizar una lectura de las desigualdades según clases sociales, desde una perspectiva relacional.

### 9.3 Educación y clase social en el contexto de la pandemia

El abordaje de la desigualdad social desde una perspectiva de clase social supone un distanciamiento de las explicaciones monádicas que

entienden que la pobreza o la distribución desigual de algún atributo responde únicamente a decisiones individuales (Wright 2018). El análisis de clase social incorpora una mirada relacional de estos procesos, que pone el acento en los mecanismos que generan una apropiación desigual del producto social. En este sentido, las clases sociales son expresión de procesos de explotación y opresión que tienen su raíz en el sistema de producción y acumulación capitalista.

En Argentina, Germani (2010) elaboró una primera clasificación de la población según grupos ocupacionales, advirtiendo que las clases sociales no constituyen un mero agregado clasificatorio sino un objeto de existencia sociológica real. En este sentido, expresan condiciones objetivas similares de existencia, pero también formas comunes de vivir. Palomino y Dalle (2012) elaboraron una clasificación socioocupacional que retoma este esquema de Germani en su estudio clásico Estructura social de la Argentina (1955), con algunas modificaciones para captar mejor los rasgos de la estructura ocupacional actual. Las principales variables que intervienen en la construcción de los grupos socioocupacionales son: la posición ocupada en las relaciones de producción, el nivel de autoridad, el tipo de calificación y la rama de actividad. Estos grupos socioocupacionales son la base sobre la que se constituyen las clases sociales, en tanto condiciones similares de existencia, vinculadas con niveles de ingresos, educativos y de prestigio social. Desde esta perspectiva, la organización jerárquica de estos agrupamientos permite identificar el acceso diferencial a los recursos económicos, oportunidades de vida y poder.

Dado el tamaño y características de la muestra presentamos una versión simplificada del esquema de clases sociales seguido por Palomino y Dalle (2012), en tres grandes grupos.<sup>[6]</sup> Un primer agrupamiento que contiene a la clase alta y media superior, integradas principalmente por patrones, directivos, profesionales asalariados o cuenta propia, jefes, técnicos y trabajadores con local y vehículo. El segundo gran agrupamiento, la clase media inferior incluye a los patrones de pequeñas unidades productivas, técnicos asalariados, administrativos de calificación operativa y no calificada en ramas del sector terciario, trabajadores asalariados de la educación, salud de calificación operativa. Y, un tercer gran agrupamiento integrado por la clase obrera calificada y la clase obrera en puestos de trabajo semicalificados y operativos. Nuclea a trabajadores asalariados de los sectores de servicios, transporte, comunicación, extractivas, producción industrial, producción del sector primario, construcción.

---

[6] La clase social a la que pertenecen los hogares se determinó de acuerdo a la inserción ocupacional del principal sostén del hogar.

También incluye a trabajadores, cuentapropistas sin local, trabajadores asalariados sin calificación de las distintas ramas, servicio doméstico y cuentapropistas sin calificación.

### 9.3.1 Origen de clase, trayectorias educativas y posibilidades futuras de promoción social

En línea con lo desarrollado anteriormente, la pertenencia a una clase social supone el acceso diferencial no solo a bienes sino también a oportunidades y capitales sociales y culturales. A continuación presentamos algunas herramientas conceptuales y estudios recientes que han abordado el vínculo entre el origen de clase, las trayectorias educativas y el rol de la educación en los procesos de movilidad social.

Wright (2018, pág. 18), recuperando el concepto de Tilly (2000), analiza el sentido de «acaparamiento de oportunidades» que permite tomar una perspectiva relacional entre la clase social y la educación. Este concepto, íntimamente ligado también a la teoría weberiana, atiende a que, en la portación de credenciales educativas, especialmente los títulos académicos que detentan las clases intermedias y altas, se presenta la posibilidad de un cierre social, es decir, al obtener niveles superiores en la educación las clases intermedias y dominantes obtienen situaciones ventajosas en el mercado de trabajo. Esto se traduce, aunque no de forma lineal, en una mejor accesibilidad a ingresos medios altos.

En este sentido, y especialmente para las experiencias personales, «la educación tiende a expresar y a reafirmar desigualdades ya existentes, en mucho mayor medida de lo que contribuye a cambiarlas» (Giddens 1997 pág. 465, citado en Tenti Fanfani 2007, pág. 97). Es decir, las clases sociales tienden a estos cierres que les permiten mantener los recursos obtenidos, primordialmente por las generaciones anteriores.

Otra característica que se relaciona a la titulación y a la accesibilidad de los niveles educativos, es la que refiere a la obtención de un «capital social», que muchas veces resulta transmisible de generación en generación, justamente gracias al «acaparamiento de oportunidades». Estas relaciones entre los niveles educativos y las clases sociales fueron originalmente recuperadas por Bourdieu y Passeron (2003), quienes evidenciaron que los logros educativos estaban fuertemente asociados a la clase social de origen. En estudios previos dieron cuenta de cómo las correcciones marginales de los maestros sobre los trabajos de los estudiantes eran calificativos fuertemente asociados a su origen social.

Más recientemente, varias autoras y autores del campo de sociología de la educación (Dubet y Martuccelli 1998; Kaplan 1992)

retomaron y profundizaron estos trabajos canónicos y mostraron la vigencia y persistencia de la estrecha relación entre trayectorias educativas completas, terminalidad, logros educativos y origen social. Un trabajo reciente, con una mirada de la desigualdad de oportunidades de clase, observa si «la escolaridad es un canal privilegiado de nivelación de oportunidades o, por el contrario, contribuye a reproducir desigualdades sociales de origen» (Solís y Dalle 2019, pág. 13).

Uno de los hallazgos más relevantes de esta investigación, es que, en Argentina, para los varones «la asociación entre orígenes y destinos de clase, lejos de atenuarse, crece con la escolaridad». Así los autores observan un *efecto compensatorio* vinculado con la menor desigualdad de oportunidades educativas y mayores retornos a la escolaridad, vinculado con la asociación entre nivel educativo y destino ocupacional. Sin embargo, quienes provienen de clases desfavorecidas y logran altos niveles de escolaridad, se insertan en el mercado de trabajo en ocupaciones de menor calidad. En síntesis, los autores demuestran que las explicaciones simplistas que establecen una relación mecánica entre escolaridad y movilidad social ascendente no son válidas y se abre una nueva línea de indagación en relación con los rasgos y atributos que contribuyen a mantener la desigualdad de oportunidades entre quienes logran niveles elevados de escolaridad (Solís y Dalle 2019, pág. 15).

Estas investigaciones exhiben cómo la educación juega un papel central en la asociación entre orígenes y destinos de clase de padres a hijos. Si bien nuestro trabajo no intenta analizar los cambios intergeneracionales en la movilidad social, creemos que las condiciones educativas de los niños y niñas fueron diferenciales entre los hogares de clases alta y media superior y los sectores populares durante la pandemia.

Con estas herramientas analíticas intentaremos responder: ¿cuáles fueron los hogares más afectados por la interrupción de clases presenciales?

Las tasas de asistencia según clase social, comienzan a mostrar algunas diferencias por clase a partir del grupo de edades de 13 a 17 años de edad, correspondiente al nivel secundario, y se acentúan hacia el siguiente grupo de edades de 18 a 29 años de edad. En este último, la diferencia relativa entre la clase social alta y media alta y las clases populares es del 50 %. Estas diferencias expresan notorias desigualdades en relación con la moratoria social de la que disponen los jóvenes de distintas clases sociales (Margulis y Urresti 1998).

En este marco, surge el interés por conocer las condiciones familiares y habitacionales en las que sostuvieron esa asistencia y por los recursos con los que contaban las familias de cada clase social para afrontar las tareas escolares en el hogar.

**Cuadro 9.6. Tasa de asistencia escolar según clase social y grupo de edad. Población de 4 años y más. Argentina urbana, diciembre de 2021 (en porcentaje).**

Clases sociales	4 a 12	13 a 17	18 a 29	30 y más
Clase alta y media superior	99.0	100.0	40.1	4.1
Clase media inferior	99.7	94.9	33.1	3.7
Clases populares	99.6	97.0	20.3	4.0
Total	99.5	96.7	27.0	3.9

Fuente: elaboración propia en base a los datos de la ESAyPP/PISAC-COVID-19.

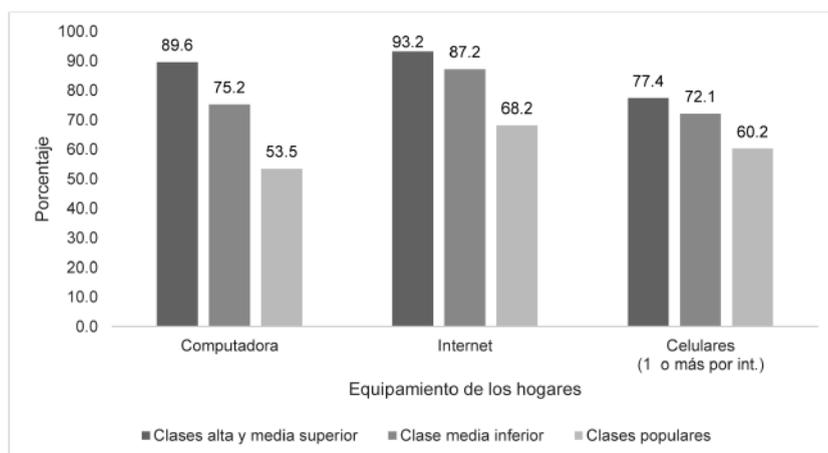
### 9.3.2 Equipamiento de los hogares para realizar actividades escolares remotas

Tal como observamos anteriormente, las tasas de asistencia educativa presentan diferencias relativas entre las tres grandes clases sociales que analizamos. Sin embargo, la pandemia por COVID-19 dejó entrever que la sostenibilidad de las actividades educativas representaba diferencias significativas según el equipamiento tecnológico del hogar.

Es así que nos preguntamos ¿cuál es el equipamiento del que disponían los hogares?, ¿en qué condiciones se sostuvo la asistencia?, ¿estaban preparados los hogares para sostener clases virtuales?, ¿qué diferenciales por clase social se observan? En este sentido el apartado pretende exhibir los recursos con los que contaban los hogares para garantizar la asistencia efectiva a las clases remotas.

Para ello exploramos el módulo de la encuesta que relevó el equipamiento de los hogares necesario para poder continuar vinculados con las tareas educativas. Complementamos esta información con datos del operativo de Evaluación del Proceso de Continuidad Pedagógica (EPCP) realizado por la Secretaría de Evaluación e Información Educativa (SEIE) del Ministerio de Educación de la Nación. Esta evaluación estuvo destinada a generar información detallada sobre la respuesta del sistema educativo argentino en el contexto del ASPO por COVID-19 ([Ministerio de Educación de la Nación 2020](#), pág. 1). En este marco, realizaron encuestas en línea a los equipos directivos, docentes y hogares de todo el país.

En primer lugar, en el 67.6 % de los hogares encuestados contaban con al menos una computadora y se observan diferencias significativas por clase social: en 9 de cada 10 hogares de clases alta y media superior cuentan con al menos una computadora, mientras que en los hogares de clases populares desciende a 5 de cada 10. En relación con la cantidad de computadoras, el 26.1 % de los hogares de clases



**Figura 9.1.** Hogares con acceso a computadora, Internet y celulares (por integrante del hogar) según clase social (en porcentaje) Argentina urbana, diciembre de 2021. Fuente: elaboración propia en base a los datos de la ESAyPP/PISAC-COVID-19.

alta y media superior tienen 2 o más computadoras, mientras que en los hogares de clases populares solo el 5.8%.

En el acceso a Internet también observamos diferencias: en casi la totalidad (93.2 %) de los hogares de clases alta y media superior disponen de este servicio, mientras que en los de clases populares desciende al 68.2 %. Si bien no contamos con datos vinculados con la calidad del servicio – como por ejemplo ancho de banda, estabilidad de la conexión, etcétera – es probable que la calidad del servicio a la que acceden sea menor en estas últimas. Según datos de la EPCP «solo 46 % de los hogares del país cuentan con acceso fijo de buena calidad en la señal, mientras que el 30 % no tiene acceso fijo (27 % accede desde el celular y 3 % no accede a Internet de ningún modo)» (Ministerio de Educación de la Nación 2020, pág. 22). Con respecto al acceso a celulares en los hogares por clase social, no se observan grandes diferencias, dado que su utilización es muy extendida, pero sí en la cantidad de celulares por integrante del hogar. En la mayoría de los hogares de clases alta y media superior e inferior hay un celular o más por persona (77.4 % y 72.1 % respectivamente), mientras que en los hogares de clases populares el 60.2 % está en esta situación.

En este marco, no contar con computadora e Internet en el hogar supone que la continuidad de la escolarización se sostuvo mediante los cuadernillos *Seguimos Educando* y/o por redes sociales como whatsapp o mensajes de texto, por lo que las interacciones en estos

casos entre docentes y estudiantes fueron mucho más débiles y menos interactivas.

Según la EPCP,

«el medio de comunicación más utilizado en nivel inicial y primario fue el teléfono celular, ya sea para enviar mensajes de texto vía SMS o WhatsApp (81 % y 89 %) como para realizar llamadas (50 % y 65 %). En el nivel secundario, el celular también fue el medio más usado, pero solo para mensajes de texto o WhatsApp (75 %), mientras que el segundo medio más usado fue el correo electrónico, cuestión que puede asociarse a la edad de los y las estudiantes y al manejo autónomo de este tipo de herramientas. En el mismo nivel, se destaca el uso de plataformas educativas como Google Classroom o Moodle, señalado por el 59 % de los y las docentes» (Ministerio de Educación de la Nación 2021, pág. 4).

En algunos hogares, fue necesario contar con mayor equipamiento para afrontar las tareas laborales y escolares durante el aislamiento preventivo. En este sentido, la encuesta indaga por la compra de alguna computadora de escritorio o notebook, desde que empezó la pandemia. El 5.5 % de los hogares respondieron afirmativamente, de los cuales las tres cuartas partes corresponden a hogares de clases alta y media superior.

Los hogares de clases populares contaban con menores recursos técnicos para el sostenimiento efectivo de la escolarización no presencial. En esta misma línea, según los resultados de la EPCP:

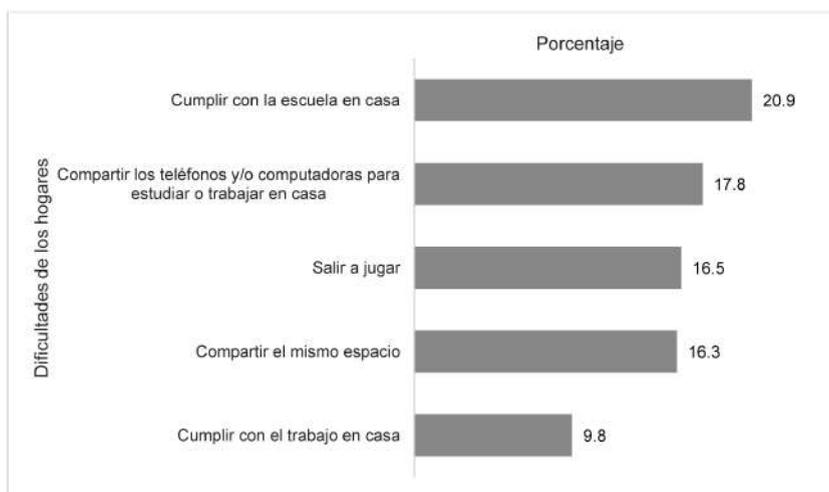
«las y los docentes ubicaron en primer lugar la conectividad y el equipamiento tecnológico como principales dificultades de sus estudiantes para seguir la propuesta educativa en el período del cierre de escuelas. Asimismo, en tercer lugar, se destacó la poca experiencia en el uso de recursos electrónicos y digitales y casi en la misma proporción las dificultades socioeconómicas» (Ministerio de Educación de la Nación 2020, pág. 16).

En la encuesta de ESA/PP Pisac se preguntó específicamente a los hogares por la continuidad de la escolarización de los miembros en edad escolar – 4 a 17 años –. El 4.1 % expresó que las y los niñas, niños y adolescentes del hogar tuvieron que dejar la escuela, más de la mitad de estos hogares pertenecen a las clases populares. Se estima que los efectos más profundos de la interrupción de estas trayectorias se pondrán de manifiesto a mediano y largo plazo.

Por otro lado, en el 7 % de los hogares con integrantes en edad de escolarización obligatoria fue necesario contratar a profesores particulares para ayudar a las y los niños y adolescentes con sus estudios. Se trató mayormente de hogares de clases alta, media superior e inferior (35.7 % y 40.7 %). Los costos de la pandemia en términos del

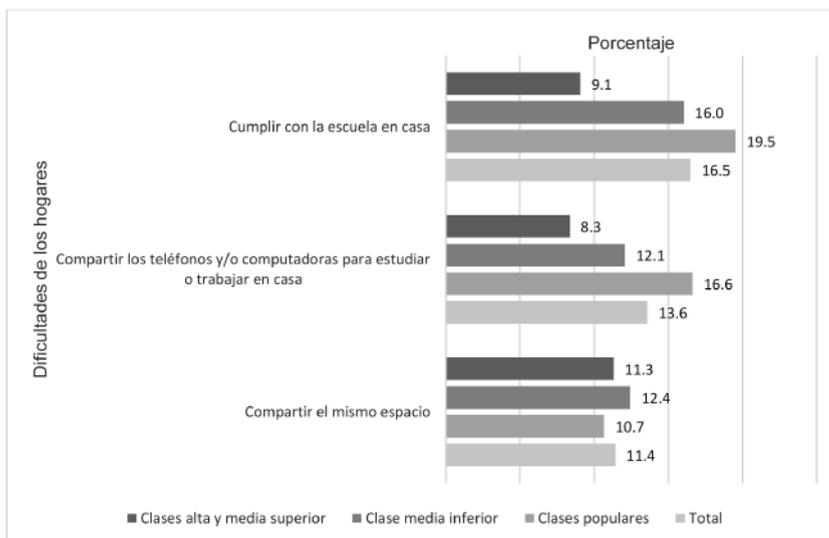
sostenimiento de las trayectorias educativas parecieran ser mayores para los hogares de clases populares.

En relación con las dificultades atravesadas por los hogares en los momentos más estrictos de la pandemia, cumplir con la escuela es la que mayor porcentaje de respuestas positivas tuvo seguida de compartir teléfonos y computadoras para estudiar o trabajar, salir a jugar y compartir el espacio.



**Figura 9.2.** Dificultades de los hogares durante los momentos más estrictos de la pandemia (marzo a septiembre 2020). Argentina urbana, diciembre de 2021. Fuente: elaboración propia en base a los datos de la ESAyPP/PISAC-COVID-19.

Si vinculamos las dificultades de los hogares por clase social, vemos que en las clases populares asumen una proporción mayor que en las clases alta, media superior e inferior. Es decir, a medida que descendemos en la clase social, aumenta la proporción de hogares que manifiestan haber tenido estas dificultades, entre las que cumplir con la escuela en casa es la que tiene la mayor proporción. En el 19.5 % de los hogares de clases populares manifestaron haber tenido esta dificultad, mientras que en las clases altas esta proporción es la mitad, el 9.1 %. En relación a la dificultad de compartir los teléfonos, la brecha entre clases es similar, la proporción de hogares de clases populares que manifestaron atravesar esta dificultad es un 50 % mayor respecto al 8.3 % de los hogares de clase alta. Por último, no se observan diferencias tan marcadas en relación a la dificultad de compartir el mismo espacio-la brecha es menor a un punto porcentual- y en los hogares de clases alta y media superior la proporción es similar a los hogares de clases populares.



**Figura 9.3.** Dificultades de los hogares durante los momentos más estrictos de la pandemia por clase social (marzo a septiembre 2020). Argentina urbana, diciembre de 2021. Fuente: elaboración propia en base a los datos de la ESAyPP/PISAC-COVID-19.

En relación con las tareas que implicaron mayor sobrecarga de trabajo durante la pandemia, el cuidado de los niños fue señalado como una de ellas en el 25.8% de los hogares con presencia de menores de 18 años y, en torno al 27.2% de estos hogares ayudar a las niñas y niños con las tareas escolares. En este aspecto no se observan grandes diferencias por clase social, incluso llama la atención que en los hogares de clases alta y media superior e inferior, la proporción de hogares que manifiestan que la ayuda en las tareas escolares constituyó una de las tareas que implicaron sobrecarga de trabajo, es mayor que en los de clases populares. Una posible hipótesis para explicar esta menor declaración en los hogares de clase media, inferior y popular de sobrecarga ligada a la realización de tareas escolares, podría estar vinculada con que se trata de los hogares con condiciones menos propicias para el estudio remoto. Según datos de la Evaluación del Proceso de Continuidad Pedagógica, hay una relación entre la dedicación de horas de estudio por parte de los estudiantes y la calidad de la conectividad del hogar:

«La asociación entre duración de la jornada escolar y la conectividad de la que disponen en los hogares es evidente al observar cómo asciende el porcentaje de baja dedicación horaria (hasta 10 horas) cuando desciende la calidad de la conectividad en el hogar: en hogares con mejor conectividad la jornada escolar

de hasta 10 hs incluye al 53 % de encuestados/as y al 68 % en hogares sin acceso a Internet» (Ministerio de Educación de la Nación 2020, pág. 45).

En relación a la realización de tareas escolares por parte de los estudiantes, en más del 90 % de los hogares afirmaron que las niñas, niños y adolescentes realizaron la mayoría o todas las tareas escolares. Sin embargo, al observar qué proporción cumple con todas las tareas se evidencian grandes diferencias por nivel educativo: en el nivel secundario en escuelas de gestión estatal solo un 49 % cumplió con todas las tareas, y en las de gestión privada un 67 % (Ministerio de Educación de la Nación 2020, pág. 41).

En línea con lo anterior, las y los docentes señalaron que la dificultad más frecuente fue el logro de la participación activa por parte de sus estudiantes en las actividades propuestas. En segundo lugar, se señaló como dificultad el contacto con las y los estudiantes/familias por falta de datos y/o por la lejanía de sus hogares (Ministerio de Educación de la Nación 2020).

Nos interesa destacar algunos datos relevantes de la Evaluación realizada por la Secretaría de Evaluación e Información Educativa, que permiten caracterizar el vínculo entre docentes y estudiantes durante la pandemia según nivel educativo. Las horas de estudio dedicadas por las y los estudiantes, las retroalimentaciones docentes y las instancias de evaluación.

En cuanto a las horas de estudio, en promedio las niñas, niños y adolescentes de todo el país dedicaron 10 horas semanales a la tarea escolar (Ministerio de Educación de la Nación 2020, pág. 44). Este promedio se desagrega de la siguiente manera: cerca de la mitad de las niñas, niños y adolescentes trabajó de 4 a 10 hs. en sus tareas escolares durante el período de ASPO, 3 de cada 10 dedicaron de 11 a 15 horas semanales y solo 14 % dedicó más tiempo (16 hs o más). Por lo tanto, durante el aislamiento, el tiempo dedicado a las tareas educativas disminuyó considerablemente en relación con el tiempo dedicado en condiciones normales, en las que la jornada escolar implica al menos 20 horas semanales.

Por otro lado, las actividades propuestas por los docentes, es otro de los aspectos que permiten caracterizar la calidad del vínculo que se logró mantener en estas condiciones. Los datos obtenidos por la citada *Evaluación*, arrojaron que:

«Tres de cada cuatro niñas, niños y adolescentes recibieron actividades preparadas por maestros/as y profesores/as. Alrededor de la mitad de estudiantes recibió clases o videos grabados por sus docentes (54 %), audios explicativos (53 %) o videos disponibles en Internet (48 %). Las clases en vivo fueron menos frecuentes (33 % tuvo alguna)» (Ministerio de Educación de la Nación 2020, pág. 38).

Por lo que, si bien la mayoría de las y los estudiantes de niveles primario y secundario, desarrollaron actividades escolares durante la pandemia propuestas por sus docentes, el tipo de recursos más utilizados suponen una interacción mucho menor que la de las clases presenciales habituales.

A su vez, las retroalimentaciones de los docentes constituyen una parte importante de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que permiten a las y los estudiantes conocer sus errores, revisar los trabajos y ejercicios, conocer su situación en relación a los contenidos vistos. Y, a los docentes les permite tener una aproximación a la apropiación de los contenidos, así como al desarrollo de las habilidades que esperan en los estudiantes a través de la resolución de las actividades propuestas. Fueron bajos los porcentajes de niños, niñas y adolescentes que no recibieron retroalimentación de los docentes de las tareas enviadas. Sin embargo, en el nivel primario más de la mitad de los docentes (63 %) declararon no haber realizado ninguna instancia de evaluación, y en el nivel secundario solo la mitad de los docentes declaró haber realizado alguna evaluación con calificación. El otro 50 % que sí llevó a cabo instancias de evaluación con calificación «se compone de un 28 % que realizó una o dos instancias de estas características, y de un 22 % que hizo tres o más» (Ministerio de Educación de la Nación 2020, pág. 153).<sup>[7]</sup>

De esta manera, una mirada de conjunto de las condiciones materiales de los hogares para poder sostener la asistencia remota a clases, las condiciones de los docentes para poder trabajar y continuar el vínculo con los estudiantes, las características de las interacciones a través de medios no interactivos en su mayoría, las horas dedicadas al estudio por parte de las y los estudiantes, sumado a la menor frecuencia de la realización de evaluaciones de los procesos de aprendizaje, dan cuenta de que si bien se sostuvo la asistencia escolar, el vínculo y la calidad de las interacciones sufrió un deterioro, que afectó en mayor medida a los hogares de clases populares.

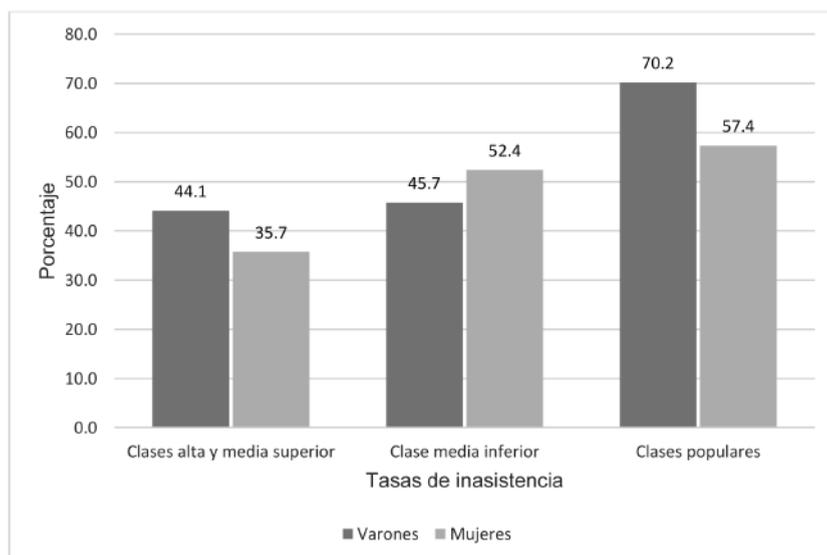
### 9.3.3 Una mirada de los factores que condicionan la continuidad en el sistema educativo de las y los jóvenes

Finalmente, nos interesa generar conocimiento en torno a las dificultades para acceder al nivel superior del sistema educativo por parte de los jóvenes. Según un estudio reciente de reconstrucción

[7] Cabe aclarar que, en el marco del ASPO, el Consejo Federal de Educación resolvió para esta etapa, el uso de evaluaciones de tipo formativas y desalentó el uso de escalas numéricas y de calificación para valorar los logros de aprendizaje de los y las estudiantes (Ministerio de Educación de la Nación 2020).

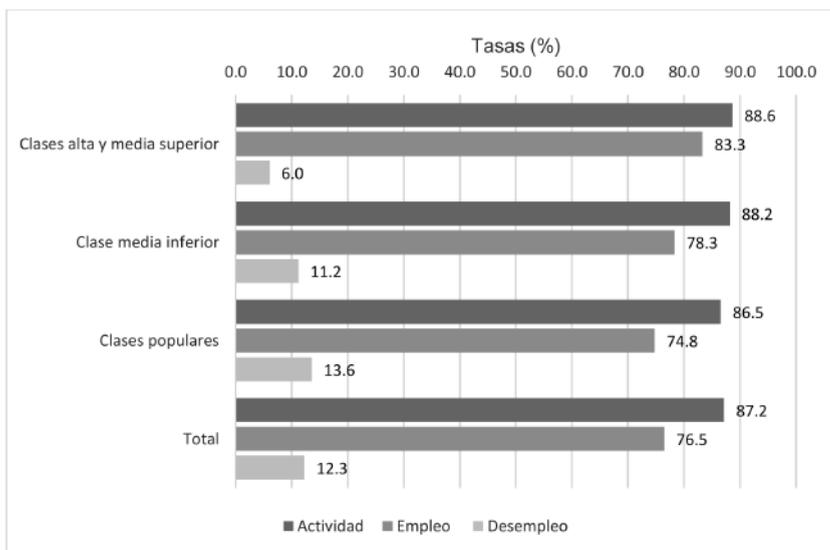
de cohortes teóricas el 50 % de los estudiantes que ingresaron a la secundaria en 2018 no lograrán finalizarla, solo el 27 % egresará en el tiempo esperado, mientras que el restante 23 % terminará el nivel pero habiendo repetido uno o más años (Cardini y D'Alessandre 2019, citado en Pinto 2020, pág. 6). Uno de los factores que más inciden en la deserción escolar están vinculados con la entrada temprana al mercado de trabajo por parte de las y los jóvenes de clases populares (Pérez 2008). En el análisis previo, las tasas de asistencia comenzaban a descender a partir de los 15 años, en los varones en mayor medida. A continuación presentamos las tasas de inasistencia escolar de las y los jóvenes de 15 a 29 años con hasta nivel superior incompleto (terciario o universitario) y las principales tasas del mercado de trabajo por clase social. Luego, analizamos conjuntamente ambas inserciones: la educativa y vía mercado de trabajo por clase social.

En primer lugar, presentamos las proporciones de jóvenes de hasta nivel superior incompleto que no asisten a ninguna institución educativa por clase social (véase figura 9.4). La diferencia relativa entre las y los jóvenes de clases alta y media superior respecto de las clases populares es del 59 %, algo mayor para las mujeres. Y, si bien hay una menor proporción de mujeres que no asisten a ninguna institución educativa en las clases alta y media superior y populares, la brecha entre clases sociales es muy superior a la de género.



**Figura 9.4.** Jóvenes de 15 a 29 años, hasta nivel superior incompleto que no asisten a ninguna institución educativa por sexo y clase social. Argentina urbana, diciembre de 2021. Fuente: elaboración propia en base a los datos de la ESAyPP/PISAC-COVID-19.

Las principales tasas del mercado de trabajo para este grupo poblacional, también muestran diferencias importantes en la inserción laboral por clase social. Las y los jóvenes de clases alta, media superior e inferior presentan tasas de actividad apenas unos puntos porcentuales más elevados que las y los jóvenes de clases populares. Las diferencias más significativas se expresan en las menores tasas de empleo de las clases populares – 8,5 puntos porcentuales por debajo de las clases alta y media superior – y en las de desocupación. Esta última, entre las y los jóvenes de clases populares duplica la de los y las jóvenes de clases alta y media superior. Lo que da cuenta que tanto los jóvenes de clases alta y media superior como populares están participando en el mercado de trabajo, pero mientras los primeros logran una inserción efectiva que se refleja en las mayores tasas de empleo y menor desempleo, las y los jóvenes de clases media inferior y populares lo hacen en mucho menor medida, lo que se evidencia en las elevadas tasas de desempleo.



**Figura 9.5.** Tasas de actividad, empleo y desempleo por clase social. Jóvenes de 15 a 29 años hasta nivel superior incompleto que no asisten a ninguna institución educativa. Argentina urbana, diciembre 2021. Fuente: elaboración propia en base a los datos de la ESAyPP/PISAC-COVID-19.

Por último, al analizar conjuntamente la inserción en el sistema educativo y en el mercado de trabajo, vemos que persiste la llamada moratoria social en los jóvenes de clases altas y el ocio forzoso en sus pares de clases populares (Rodríguez 2009). Este mismo análisis fue realizado por Pérez (2008) en el contexto de desempleo masivo de los

años noventa, y persisten las tendencias allí observadas. Las mayores diferencias entre clases se observan en las situaciones polares: la proporción de jóvenes que estudian y trabajan en las clases alta y media superior es el doble respecto de los jóvenes de clases populares y, entre estos últimos quienes no estudian ni trabajan son casi el doble que los de clase alta y media superior. Asimismo, mientras que entre los jóvenes de clases populares el 47.6 % solo trabaja, un 26.4 % solo estudia. En las clases alta y media superior esa relación es inversa, el 33.5 % solo trabaja, y el 42.3 % solo estudia.

**Cuadro 9.7. Jóvenes de 15 a 29 años que trabajan y estudian según clase social. Argentina urbana, diciembre 2021.**

Clases	Trabaja y estudia	Solo trabaja	Solo estudia	No trabaja ni estudia	Desocupado	Total
Clases alta y media superior	15.8	33.5	42.3	4.6	3.9	100.0
Clase media inferior	10.4	37.9	39.9	5.7	5.7	99.6
Clases populares	7.4	47.6	26.4	8.6	9.4	99.4
Total	9.4	42.8	32.6	7.2	7.6	99.5

Fuente: elaboración propia en base a los datos de la ESAyPP/PISAC-COVID-19.

Este último cuadro refleja claramente las desigualdades presentadas al inicio de este apartado, la posición de clase determina una diferencia en la accesibilidad y sostenibilidad de los estudios de los y las jóvenes de entre 15 y 29 años. Mientras las clases alta y media superior mantuvieron sus estudios, también encontraron una mayor inserción laboral. Las mayores posibilidades de obtención de credenciales educativas, actividad habitual en las clases altas, permite el juego del cierre social en el marco del acaparamiento de oportunidades que hemos recuperado anteriormente. La pandemia por COVID-19 no fue una excepción a la dinámica que asumen los procesos de exclusión social que se manifiestan en el desarrollo capitalista.

## 9.4 Reflexiones finales

El proceso de ampliación en la accesibilidad del sistema educativo, especialmente en lo que refiere a los niveles primarios y secundarios se vino desarrollando desde inicios de la década del noventa. Sin embargo, la terminalidad de los estudios, especialmente los de nivel medio que tuvieran continuidad en el nivel superior, no encuentran tasas universales.

En el marco de la pandemia por COVID-19, se sostuvieron las tasas de asistencia escolar especialmente en los grupos más jóvenes.

Si bien el 99,3 % de las niñas y niños de entre 4 a 12 años continuaron asistiendo al sistema educativo. A partir de los 15 años de edad se observó un descenso en la asistencia escolar que se acentúa hacia los 18 años y se evidencia en un fuerte descenso de la cobertura del sistema educativo en el grupo de edad de 18 a 29 años, edad teórica en la que se espera que los jóvenes transiten el nivel superior. Este descenso de las tasas de asistencia escolar en los jóvenes no está ligado a la suspensión de la presencialidad, sino que se trata de un comportamiento observado previamente.

En cuanto al análisis regional no se observaron diferencias significativas en la asistencia escolar entre la población urbana distribuida en las regiones geográficas de Argentina que se tuvieron en cuenta para el análisis, aunque se aprecia cierta tendencia a la desigualdad en la región Centro y el Área Metropolitana de Buenos Aires, especialmente en las juventudes. Cabe destacar que, la suspensión de clases presenciales no se tradujo en una caída brusca de la asistencia en ninguna de las regiones para el grupo de edades de 4 a 17 años.

Por otro lado, la continuidad de la escolarización encontró diferencias significativas en las distintas clases sociales, cuando la clase alta y media superior lo hacía con equipamiento, servicios y tecnologías de la comunicación y, espacios físicos adecuados, las clases populares lo realizaban por medio de cuadernillos o del uso de un teléfono inteligente de uso compartido en el hogar. De manera que, la desigualdad además de traducirse en la accesibilidad a una computadora de uso personal y el acceso a Internet, también se manifestó en las dificultades que debieron afrontar los hogares de las distintas clases sociales. La dificultad para cumplir con la escuela en casa fue significativamente más elevada para las clases populares que para las clases altas. Así el proceso de enseñanza y aprendizaje fue desigual, mientras que las y los niños de las clases populares se veían restringidos al uso de soportes estáticos, las infancias de clases altas gozaron de buenos niveles de interacción con docentes y compañeros.

Estas cuestiones tienden a profundizarse en las y los jóvenes de 15 a 29 años. Además de las diferencias observadas en las tasas de inasistencia educativa, las desigualdades se hacen más significativas al analizar la permanencia en el sistema educativo y en el mercado laboral. Mientras las juventudes de clases altas mantienen porcentajes superiores en casi dieciséis puntos porcentuales en el sistema educativo exclusivamente con respecto a sus pares de clases populares, y de ocho puntos porcentuales trabajando y estudiando, cerca del nueve por ciento de las y los jóvenes de clases populares se ven impulsados al ocio forzoso, sumado a que un poco más del nueve por ciento se encuentra desocupado, la posibilidad de realización en

lo inmediato, o en el futuro con la adquisición de las credenciales educativas, les resulta lejano.

Así la pandemia por COVID-19, y el aislamiento social preventivo implementado, a pesar del gran esfuerzo de la docencia en el sostenimiento del sistema educativo, lejos representar una oportunidad para la reducción de las desigualdades sociales, se tradujo en una continuidad de las mismas. Los hogares de clases altas y medias pudieron sostener de formas muy distintas su inserción y reproducción educativa, mientras que la accesibilidad al sistema educativo de las clases populares se sostuvo en inferiores condiciones, especialmente en lo que respecta a la calidad de los equipamientos y los servicios, que se tradujeron directamente a la calidad de la comunicación e interacciones entre estudiantes y docentes.

Por lo tanto, se abren nuevos interrogantes vinculados a la repercusión que tendrán a futuro estas desigualdades en las condiciones de escolarización que tuvieron lugar al interior de los hogares según clase social.

## Referencias

ACEVEDO, IVONNE *et al.*

- 2020 *Los costos educativos de la crisis sanitaria en América Latina y el Caribe*, Nota Técnica IDB-TNo2043, Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo, referencia citada en página 228.
- 2021 *Informalidad en los tiempos del COVID-19 en América Latina: implicaciones y opciones de amortiguamiento*, BID, referencia citada en página 232.

BONIOLO, PAULA y CAROLINA NAJMÍAS

- 2018 «Abandono y rezago escolar en Argentina Una mirada desde las clases sociales», en *Tempo Social*, vol. 30, n.º 3, págs. 217-247, DOI: [10.11606/0103-2070.ts.2018.121349](https://doi.org/10.11606/0103-2070.ts.2018.121349), referencia citada en página 227.

BOURDIEU, PIERRE y JEAN CLAUDE PASSERON

- 2003 *Los herederos: los estudiantes y la cultura*, Buenos Aires: Siglo XXI, referencia citada en página 234.

DALLE, PABLO y MARÍA MERCEDES DI VIRGILIO

- 2022 «Estructura social de Argentina y políticas públicas durante la pandemia de COVID-19: el diseño de una encuesta nacional comparativa interregional», en *Revista Latinoamericana de Metodología de la Ciencias Sociales*, vol. 12, n.º 2, referencia citada en página 226.

DUBET, FRANÇOIS y DANILO MARTUCELLI

- 1998 *En la escuela. Sociología de la experiencia escolar*, Buenos Aires: Losada, referencia citada en página 234.

GERMANI, GINO

- 2010 *Clases sociales. Introducción en La sociedad en cuestión: antología comentada*, Buenos Aires: CLACSO, referencia citada en página 233.

KAPLAN, CARINA

- 1992 *Buenos y malos alumnos. Descripciones que predicen*, Buenos Aires: Aique, referencia citada en página 234.

MARGULIS, MARIO y MARCELO URRESTI

- 1998 «La construcción social de la condición de juventud», en «*Viviendo a toda*». *Jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades*, Bogotá: Siglo del Hombre, págs. 3-21, referencia citada en página 235.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN

- 2020 *Informe preliminar: encuesta a docentes*, Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación, referencia citada en páginas 236-238, 241, 242.
- 2021 *Informe preliminar: encuesta a docentes*, Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación, referencia citada en página 238.

OREALC y UNESCO

- 2020 *Reabrir las escuelas en América Latina y el Caribe. Claves, desafíos y dilemas para planificar el retorno seguro a las clases presenciales*, Banco Interamericano de Desarrollo, referencia citada en páginas 225, 226.

PALOMINO, HÉCTOR y PABLO DALLE

- 2012 «El impacto de los cambios ocupacionales en la estructura social de Argentina (2003-2011)», en *Revista de Trabajo*, vol. 8, págs. 205-223, referencia citada en página 233.

PÉREZ, PABLO

- 2008 *La inserción ocupacional de los jóvenes en un contexto de desempleo masivo. El caso argentino entre 1995 y 2003*, Buenos Aires: Miño y Dávila editores, referencia citada en páginas 243, 244.

PINTO, MARÍA FLORENCIA

- 2020 *Pobreza y educación: desafíos y políticas*, Buenos Aires: Universidad Nacional de La Plata, vol. Documentos de Trabajo del CEDLAS, referencia citada en páginas 227, 243.

RITCHEY, FERRIS

- 2006 *Estadística para las ciencias sociales*, Mc Graw-Hill, referencia citada en página 230.

RODRÍGUEZ, ESTEBAN

- 2009 «(In)seguridad y estigma. Los procesos de estigmatización a los jóvenes de barrios marginales. Algunas herramientas teóricas para explorar en el campo», en *I Encuentro sobre juventud. Medios de comunicación e industrias culturales (JUMIC)*, Buenos Aires: Universidad Nacional de La Plata, referencia citada en página 244.

SOLÍS, PATRICIO Y PABLO DALLE

- 2019 «La pesada mochila del origen de clase. Escolaridad y movilidad intergeneracional de clase en Argentina, Chile y México», en *Revista Internacional de Sociología*, vol. 77, n.º 1, DOI: [10.3989/ris.2019.77.1.17.102](https://doi.org/10.3989/ris.2019.77.1.17.102), referencia citada en páginas 227, 235.

TENTI FANFANI, EMILIO

- 2007 *La escuela y la cuestión social. Ensayos de sociología de la educación*, Buenos Aires: Siglo XXI, referencia citada en páginas 227, 234.

TILLY, CHARLES

- 2000 *La desigualdad persistente*, Buenos Aires: Manantial, referencia citada en página 234.

TORRADO, SUSANA

- 1993 *Procreación en la Argentina. Hechos e Ideas*, Buenos Aires: Ediciones de la Flor, referencia citada en página 229.

WRIGHT, ERIK OLIN

- 2018 *Comprender las clases sociales*, Madrid: Akal, referencia citada en páginas 233, 234.



## CAPÍTULO 10

# Impacto de la pandemia según nivel educativo ¿había resto?

PABLO MOLINA DERTEANO\* y VICTORIA MATOZO\*\*

«Miráis la realidad a través de lentes  
que lo deforman todo».

Tetsuo Shima<sup>[1]</sup>

### 10.1 Introducción

Durante las epidemias de pestes, cólera y otras enfermedades infectocontagiosas entre los siglos I DC hasta el siglo XIX, los historiadores dan cuenta de cómo las élites abandonaban los centros urbanos y se movían a «sus propiedades en la campiña», recurso que no estaba disponible para las amplias mayorías (Moreno-Sánchez *et al.* 2018; Ruis I Gibert 2019). Lo urbano es sinónimo de peligro. El proceso puede incluso ser anterior a la fecha mencionada. Estas desigualdades sociales también incidieron durante la pandemia SarsCOVID-19 tanto a los aspectos vinculados a la salud pública como a los derivados del impacto social y económico de las cuarentenas (Ahmed *et al.* 2020; Fantin *et al.* 2021). Pero en lugar de la

\* Investigador Adjunto CONICET, Instituto de Investigaciones Gino Germani-UBA.

\*\* Becaria posdoctoral CONICET, Instituto de Investigaciones Gino Germani, UBA.

[1] Personaje ficticio del manga *Akira*, con guion y dibujo de Otomo (1992), en su versión española editada por Ediciones B, bajo el sello Glénat. Originalmente fue serializado en Japón entre 1982 y 1990, bajo editorial Kodansha. También hay una película animada (1988).

migración temporaria a entornos menos urbanos, las formas de evitar el contacto físico se tradujeron en la reducción de la circulación (decreto 297/2020) afectando principalmente

- 1) las actividades socioproductivas;
- 2) la escolarización presencial de niños, niñas y adolescentes.

Si bien este artículo analiza las relaciones entre pandemia y educación, la escolarización no será un punto abordado en este capítulo.<sup>[2]</sup> En un movimiento contrario, el foco de los siguientes análisis se centra en indagar la influencia de la educación en la posible mitigación de efectos negativos sobre la actividad productiva causados por la crisis sociosanitaria. Resulta de especial interés para este objetivo utilizar el máximo nivel educativo alcanzado como variable de corte para el análisis de las percepciones en torno a 1) la identidad de clase y 2) las estrategias adaptativas en torno a la conservación o pérdida del empleo; 3) estrategias de teletrabajo y; 4) acceso a cobertura de salud, derivado en parte del punto 3.

En este sentido las preguntas que guían este trabajo son: ¿en qué medida mayores logros educativos suponen una mejor posición subjetiva en torno a la identidad de clase y la satisfacción de los ingresos? ¿En qué medida, una mejor posición relativa derivada de un mayor logro educativo dejó a las personas (y los hogares) en mejores condiciones de afrontar el aislamiento social preventivo y obligatorio con todas sus implicancias en la participación socioproductiva?

Para encarar este interrogante, se realizarán análisis descriptivos utilizando datos de la Encuesta nacional sobre la Estructura Social de Argentina y Políticas Públicas durante la pandemia por COVID-19 (ESAyPP/PISAC-COVID-19)<sup>[3]</sup>

---

[2] Véanse solo para empezar el debate sobre este punto [Anderete Schwal \(2022\)](#) y [Puiggrós \(2020\)](#).

[3] Los datos provienen de la Encuesta nacional sobre la Estructura social de Argentina y Políticas públicas durante la pandemia por COVID-19 (ESAyPP/PISAC-COVID-19) relevada en la Argentina urbana entre octubre y diciembre de 2021. El universo de estudio de la ESAyPP/PISAC-COVID-19 es doble: los hogares y la población adulta residente en localidades de Argentina mayores a 50 mil habitantes. El diseño muestral probabilístico, estratificado y por conglomerados permite tres dominios de estimación: a nivel nacional, por regiones y por tamaño de los aglomerados. El tamaño de la muestra relevada es de 5 239 hogares y personas adultas, combinando amplia escala y cobertura.

## 10.2 Metodología, objetivos e hipótesis de trabajo

El interrogante que recorre este capítulo se centra en responder cómo las ventajas comparativas derivadas del logro educativo permiten que quienes cuentan con mayor stock educativo estén en mejores condiciones de enfrentar los desafíos que supuso la pandemia. En este sentido, el presente artículo se propone:

- 1) Describir la acumulación de stock educativo a través de la variable máximo nivel educativo alcanzado y utilizarla como coordenada de estratificación;
- 2) Describir la movilidad educativa intergeneracional, para poder dar cuenta analíticamente de cómo se estructuran las desigualdades intra e intergeneracionales;
- 3) Explorar las relaciones entre logro educativo, grupos ocupacionales e identidad de clase;
- 4) Analizar la incidencia del logro educativo, en las coordenadas antes descritas en los mecanismos de resistencia frente a las medidas de ASPO.

Los puntos 1 a 3 incluyen al posicionamiento de los sujetos en la estructura social tanto objetiva como subjetivamente, y constituyen efectos de primer orden. Es decir, que, puede esperarse su impacto tanto en situaciones extraordinarias como la de COVID, así como en otras más ordinarias. Se trata de un efecto diagnóstico, complementario a otros trabajos contenidos en el presente volumen. «Esto resulta de enorme importancia para explicar cómo mayores niveles de educación generan una mejor posición para encarar estrategias de adaptación frente a la pandemia» (Molina Derteano 2021). Dichas estrategias comprenden la disminución del riesgo de ciertos eventos que pueden ser amenazantes para los individuos; en este sentido, una estratificación preexistente basada en el máximo nivel educativo alcanzado podría estar incidiendo. Esta hipótesis guía el presente trabajo.

La metodología empleada es de tipo cuantitativa, para objetivos descriptivos por lo que la estrategia de análisis será la asociación bivariada (López Roldán y Fachelli 2015) tanto en herramientas típicas de los estudios de movilidad social como las tasas *inflow*, así como los análisis porcentuales y/o razones de riesgo. Todos los análisis realizados utilizan la mencionada base de datos.

Se aplicó un filtro considerando solamente los casos de individuos ocupados mayores de 25 años, de manera que se pueda incluir a quienes hayan completado el ciclo superior. Asimismo, se excluyó un 5 % de los casos para todos los análisis realizados, en donde no se pudo reconstruir la movilidad educativa.

Asimismo, se construyó un índice (Frankfort-Nachmias y Nachmias 1992; Lazarsfeld 1973), que sintetiza los principales riesgos de la

crisis sociosanitaria. El mismo está compuesto por una dimensión de salud con un peso del 40 %, y una dimensión laboral que representa el 60 % del mismo. Esta última, diferencia a trabajadores en relación de dependencia de aquellos que son independientes y empleadores, utilizando diferentes indicadores para cada tipo de actividad. La construcción del índice tiene una finalidad operativa (Rodríguez Jaume 2002) que representa los principales intereses de investigación plasmados en los objetivos de este trabajo. El proceso de construcción del mismo será desarrollado en las siguientes páginas.

### 10.3 Desigualdades educativas: ¿cómo leerlas y qué se encuentra?

Si bien el logro educativo es tomado como una medida de estratificación, considerando que permite retratar una serie de condiciones de origen y destino de clase, y como medida de movilidad intergeneracional, existe también una tradición de tomar la movilidad educativa en sí misma (logro educativo de una cohorte contra los de sus padres o madres). En este trabajo no se hará una revisión extensa, sino que se considerará

- 1) el valor de estratificación del logro educativo;
- 2) la necesidad de interpelar la movilidad intergeneracional.

Respecto a lo primero, se recogen los aportes de Breen y Karlson (2014) y Goldthorpe (2020) en el sentido que el logro educativo no es un mero resultado individual, sino que es un efecto creciente de la presión intergeneracional por ampliar las oportunidades de acceso a mejores posiciones. La estratificación social descansa en las reglas que legitiman las desigualdades, siendo el logro educativo desigual producto de una noción engañosa de «mérito» fundamental en las sociedades modernas. En todo caso, esa legitimación se esconde detrás de la hipótesis, *a priori*, de que diferentes logros educativos entrañaran ventajas comparativas para quienes tengan los niveles de mayor grado, así como mayor vulnerabilidad para quienes no logren alcanzar el nivel mínimo.

Un análisis descriptivo de los stocks educativos está considerablemente incompleto si no se puede indagar el camino intergeneracional. Dicha indagación depende de la disponibilidad de los datos (Breen y Karlson 2014). Pero lo que interesa observar es la tensión entre movilidad absoluta y movilidad relativa; o en términos de movilidad educativa, la preeminencia de la expansión educativo o del mantenimiento de las desigualdades. La primera es una fuerza igualadora en donde cada cohorte generacional va ampliando su acceso a mayores niveles educativos en el marco de una modernización capitalista, mientras que la segunda, al considerar la movilidad relativa, se concentra en la forma en que ciertas barreras son levantadas y se

logra que, quienes provienen de orígenes con bajo stock educativo, continúen en ellos (Goldthorpe 2020; Hout 2020).

En el presente trabajo se tomó el logro educativo de los entrevistados como destino y el clima educativo como origen. Esta variable se construye como el máximo logro educativo del/la principal sostén de hogar (en adelante PSH) o del/la cónyuge. Se aplica el criterio de dominancia, por el cual el/la que tenga el nivel más alto prevalecerá. A su vez, este criterio de dominancia permite subsanar los faltantes así como equiparar los hogares con núcleo conyugal con los de un solo sostén, lo cual permitió reducir la pérdida. A continuación, se muestra la tabla de movilidad con los resultados.

**Cuadro 10.1. Tasas *inflow* de la movilidad educativa. Población ocupada mayor de 25 años. Argentina urbana, 2021.**

Grupo Ocupacional	Máximo nivel educativo alcanzado			Total
	A	B	C	
Hasta secundario incompleto	6.103.316	3.254.780	1.675.185	11.033.281
%	55,3	29,5	15,2	100,0
Secundario completo y superior completo	1.093.265	2.297.253	1.347.045	4.737.563
%	23,1	48,5	28,4	100,0
Superior completo y más	237.701	588.642	1.351.834	2.178.177
%	10,9	27,0	62,1	100,0
Total	7.434.282	6.140.675	4.374.064	17.949.021
%	41,4	34,2	24,4	100,0

A: hasta secundario incompleto; B: secundario completo; C: superior completo y más. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

Las tasas *inflow*, como medida resumen, muestran los destinos de los efectivos a partir de cada clima educativo de origen. Si se toma en cuenta las celdas coloreadas, están representan la diagonal de reproducción. En todos los casos, la mayor proporción de salientes se ubica reproduciendo el clima educativo de origen. El caso con mayor peso es el de clima superior completo y más, con un 62.1 %, seguido por la reproductividad del clima de hasta secundario incompleto con un 55.3 % (véase cuadro 10.1).

La reproductividad alcanza el 54.3 %, lo que indica que un poco más de la mitad de los móviles, reproduce el clima de origen. Considerando el efecto de expansión educativa al amparo de la tesis FJH, resulta llamativo tal nivel de reproductividad y se alerta sobre el peso importante del nivel más alto. En consonancia con la hipótesis anteriormente formulada, las esquinas son las que tienen el mayor peso,

tanto las que indican mayor reproductividad de superior completo como las de secundario incompleto.

La movilidad descendente se ubica en un 10.7 %, lo cual está en consonancia con la expansión educativa, indicando que es muy baja la proporción de casos cuyo logro educativo sea menor que el del clima de origen (véase cuadro 10.1).

Finalmente, la movilidad ascendente se ubica en un 35 %, o sea que, un poco por encima de la tercera parte que experimenta esa movilidad, siendo, como era esperable el componente de movilidad de larga distancia, el menor componente (véase cuadro 10.1).

Lo antes expuesto puede leerse en relación con una hipótesis que recorre este trabajo y postula un doble movimiento en la estructura social argentina (al igual que ocurre en Uruguay y especialmente en Chile) bajo la cual se dan procesos de crecimiento y movilidad social ascendente, pero persistencia de núcleos marginales (Molina Derteano 2019). En el caso de la educación, existe una tendencia hacia la expansión educativa, a mejorar y alcanzar como piso el nivel de secundaria completa pero aún persisten problemas de stock educativo (el peso generacional de individuos con secundario incompleto) y limitaciones a la movilidad. En otras palabras, si observamos los indicadores de mayor acceso a la educación superior vemos el movimiento ascendente, así como mayor cantidad de cohortes generacionales que terminan el secundario; pero sigue habiendo un importante porcentaje que no la completa en tiempo y forma, o siquiera la completa.

A su vez, un aspecto interesante es ver la articulación entre nivel educativo y ocupación en la población estudiada. Las diferencias entre varones y mujeres dan cuenta de las desigualdades de género en las posiciones ocupacionales en donde el logro educativo puede mitigar dichas desventajas pero, en posiciones menos desprivilegiadas, aumentarlas.

En los varones los encuestados de mayor nivel educativo dan cuenta de ocupaciones de mayor status como directivos y profesionales (28.4 %) y en mayor medida técnicos y pequeños propietarios (48.1 %). Los asalariados registrados obtienen resultados similares en los niveles educativos medio (29.2 %) y bajo (24.6 %). Sin embargo, para los encuestados de menor nivel educativo la categoría de asalariados no registrados (35.6 %) es la que mayores porcentajes exhibe dentro de quienes tienen hasta secundario incompleto. Por último, los cuenta propia sin calificación ni capital suman un 20.5 % dentro de este nivel educativo, dando cuenta la mayor cantidad de asalariados y cuenta propia (45.1 %) que trabajadores no registrados entre los varones con secundario incompleto.

**Cuadro 10.2. Grupos ocupacionales según máximo nivel educativo alcanzado. Varones ocupados mayores de 25 años. Argentina urbana, 2021.**

Grupo Ocupacional	(% ) Máximo nivel educativo alcanzado			Total
	A	B	C	
Directivos y profesionales	2,00	4,40	28,40	9,20
Técnicos y pequeños propietarios	15,00	26,80	48,10	26,90
Asalariados registrados	24,60	29,20	12,40	23,20
Asalariados no registrados y trabajadores en hogares	35,60	21,30	5,00	23,40
Cuenta propia sin calificación ni capital	20,50	14,50	4,40	14,60
Otros	2,30	3,70	1,70	2,70
Totales	100,00	100,00	100,00	100,00

A: hasta secundario incompleto; B: secundario completo; C: superior completo y más. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

Por otro lado, las mujeres con mayores credenciales educativas replican los resultados obtenidos en el análisis sobre varones, incluso superando levemente el porcentaje de técnicas y pequeñas propietarias (53.5 %) en un 5.4 %.

La principal diferencia entre varones y mujeres se encuentra en los niveles educativos más bajos, en donde se evidencia que las asalariadas no registradas de hasta secundario incompleto son casi la mitad (49.1 %) de las encuestadas en contraste de los varones del mismo nivel educativo que ocupan posiciones mayoritarias en trabajos asalariados registrados o son cuenta propia sin calificación o capital (45.1 %). Estas diferencias dan cuenta de la persistencia de las desigualdades de género en los estratos educativos más bajos y la mayor tendencia hacia el trabajo informal de las mujeres en posiciones más desfavorecidas.

Finalmente, se realizó un análisis relacionando el logro educativo y la identificación con una determinada clase social, cómo se observa en el cuadro 10.4.

Cómo se señaló anteriormente, y con apoyo sobre todo en la escuela francesa de las desigualdades educativas (Bourdieu, Passeron, Boudón y Van Zanten, entre otros), es esperable que aquellos y aquellas con menor logro educativo se identifiquen más con la clase trabajadora lo que se cumple en un 70 % para el nivel de secundario incompleto; es decir, los y las que no han completado siquiera el mínimo nivel obligatorio. Sin embargo, para los dos restantes niveles, la identificación con la clase trabajadora es considerablemente alta

**Cuadro 10.3. Grupos ocupacionales según máximo nivel educativo alcanzado. Mujeres ocupadas mayores de 25 años. Argentina urbana, 2021.**

Grupo Ocupacional	(% ) Máximo nivel educativo alcanzado			Total
	A	B	C	
Directivos y profesionales	1,20	5,20	22,90	8,30
Técnicos y pequeños propietarios	14,40	27,80	53,50	29,20
Asalariados registrados	16,70	23,80	13,30	17,90
Asalariados no registrados y trabajadores en hogares	49,10	28,90	5,20	31,00
Cuenta propia sin calificación ni capital	16,50	11,10	4,00	11,40
Otros	2,10	3,20	1,10	2,20
Totales	100,00	100,00	100,00	100,00

A: hasta secundario incompleto; B: secundario completo; C: superior completo y más. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

**Cuadro 10.4. Identificación de clase según máximo nivel educativo alcanzado. Población ocupada mayor de 25 años. Argentina urbana, 2021.**

Clase social	(% ) Máximo nivel educativo alcanzado			Total
	A	B	C	
La clase alta y media alta	0,40	1,40	5,90	2,00
La clase media y media baja	29,60	44,60	55,60	40,00
La clase trabajadora y clase baja	70,00	54,00	38,50	58,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00

A: hasta secundario incompleto; B: secundario completo; C: superior completo y más. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

trepando hasta un 54 % en quienes terminaron el secundario y que también resulta el valor más alto dentro de ese logro educativo. Y, aunque no es el valor más alto para el nivel de superior completo, quienes se identifican con la clase trabajado alcanzan un valor, nada despreciable del 35.5 % (véase cuadro 10.4).

La identificación con la clase media alta y clase alta es generalmente baja y, ello se puede apreciar en el cuadro 10.4. Aunque el nivel de superior completo es el que más la reclama, no lo hace con un porcentaje mayor al 5.9 %. En cambio, se identifica con la clase media y media baja en un 55 % (véase cuadro 10.4).

Los análisis y consideraciones tanto teóricas como empíricas permiten avanzar con la utilización de máximo nivel educativo como variable de estratificación analítica y, operativamente, como variable independiente. Esto puede hacerse, no sin antes considerar las implicancias que se derivan de la hipótesis de doble movimiento y de las características de la movilidad intergeneracional (véase cuadro 10.1)

Finalmente, debe considerarse que mientras que, el nivel de superior completo parece tener una fuerte asociación con los empleos mejores remunerados, la diferencia entre secundario incompleto y secundario completo no parece ser tan pronunciada.

#### 10.4 Logros educativo e índice de riesgo

Cómo se mencionó anteriormente, el logro educativo como medida de estratificación supuso que aquellos hogares donde su PSH, pudieron hacer frente mejor a ciertas contingencias resultantes de la ASPO.

Por sus características, es evidente que la prueba más fuerte para personas y hogares, la supuso la cobertura de salud. Si se observa el cuadro 10.5, puede verse la cobertura con obra social es bastante amplia, siendo la categoría de mayor frecuencia, alcanzando a ser casi 3 de cada 4 en el caso de quienes son PSH y tienen superior completo. La proporción en aquellos que tienen secundario incompleto con obra social alcanza el 36.6 % (casi un tercio de los de superior completo) y se ubica por después de quienes asisten al hospital público con 42.2 %. Entre ambas una diferencia de 5,6 pp, lo cual puede considerarse como mínimo.

Finalmente, y, en forma llamativa, la proporción con secundario completo que asiste al hospital público trepa hasta el 30.5 %. Es un valor considerable, a pesar de que poco más de la mitad que tiene obra social. Finalmente, debe destacarse que la cobertura prepaga tiene muy poca incidencia; incluso entre los de superior completo y más apenas si llega al 10.3 % (véase cuadro 10.5).

En un ejercicio posterior, se aisló a quienes tenían cobertura de obra social o prepaga y se les preguntó si se había interrumpido la prestación durante la pandemia; pero todas las proporciones en sentido positivo no llegaban al 10 %; 7.8 % en el caso de los hogares con PSH hasta secundario incompleto.

Estas dos variables son parte de un índice ad hoc, que ha sido construido para ver la influencia entre el logro educativo y el mayor riesgo de sufrir las consecuencias sanitarias y socioeconómicas resultantes del ASPO. Este índice de riesgo se compone de 6 dimensiones (véase cuadro 10.6).

El INDEX tiene un rango entre 0 y 1; donde 0 es la ausencia total de riesgo, mientras que 1 es la totalidad del riesgo. Las dimensiones

**Cuadro 10.5. Tipo de cobertura de salud según máximo nivel educativo alcanzado. Población ocupada mayor de 25 años. Argentina urbana, 2021.**

Tipo de cobertura de salud	(% Máximo nivel educativo alcanzado)			Total
	A	B	C	
Obra social	36,6	54,3	76,7	52,4
Prepaga	2,7	8,0	10,3	6,4
PAMI	18,5	7,1	3,7	10,9
Hospital público o centros de salud	42,2	30,5	9,1	30,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0

A: hasta secundario incompleto; B: secundario completo; C: superior completo y más. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

**Cuadro 10.6. Composición del índice de riesgo.**

Dimensión	Variable
D1 - Cobertura de salud	Tipo de cobertura de salud actual.
D2 - Pérdida de cobertura de salud	Durante la pandemia ¿dejó de contar con las prestaciones de salud habituales?
D3 - Grupo de riesgo	Pertenencia a los grupos de riesgo COVID.
D4 - Riesgo laboral	Variables que indagan acerca de situaciones de despido, pérdida de horas de trabajo, de márgenes de ganancia, etcétera derivadas de la ASPO.
D5 - Riesgo económico	Aumento de deudas, interrupción de pagos, necesidad de préstamos, recorte de consumos, etcétera.
D6 - Riesgos en el hogar	Dificultades para cumplir con el teletrabajo, con las tareas escolares virtuales, etcétera.

Fuente: elaboración propia.

D2 y D3 tienen mayor peso relativo que las demás por interpelar directamente el riesgo sanitario y tienen un valor de 0.20. No tienen rango en la medida de que suman 0.20 o 0. En cambio, las restantes tienen un valor 0.15, pudiendo haber un rango más amplio en su interior.

Respecto a la D4, que refiere a los efectos negativos en el ámbito laboral, la misma tiene dos formatos:

- 1) un formato que toma como indicadores efectos negativos que pueden darse en el ámbito laboral asalariado al que denominaremos  $D_{41}$ ;

- 2) un formato que toma como indicadores efectos negativos que pueden darse para trabajadores cuenta propia y pequeños empleadores y que denominaremos  $D_{42}$ .

No hay diferencia en el peso de ambos, pero se aplican para diferentes tipos de trabajadores. El cuadro 10.7, presenta los valores de cada índice para varones y mujeres, según su nivel educativo alcanzado.

**Cuadro 10.7. Valores del INDEX de Riesgo por sexo. Población ocupada mayor de 25 años. Argentina urbana, 2021.**

Sexo	Máximo nivel educativo alcanzado			Total
	A	B	C	
Varones	0,41	0,38	0,30	0,43
Mujeres	0,46	0,42	0,28	0,42

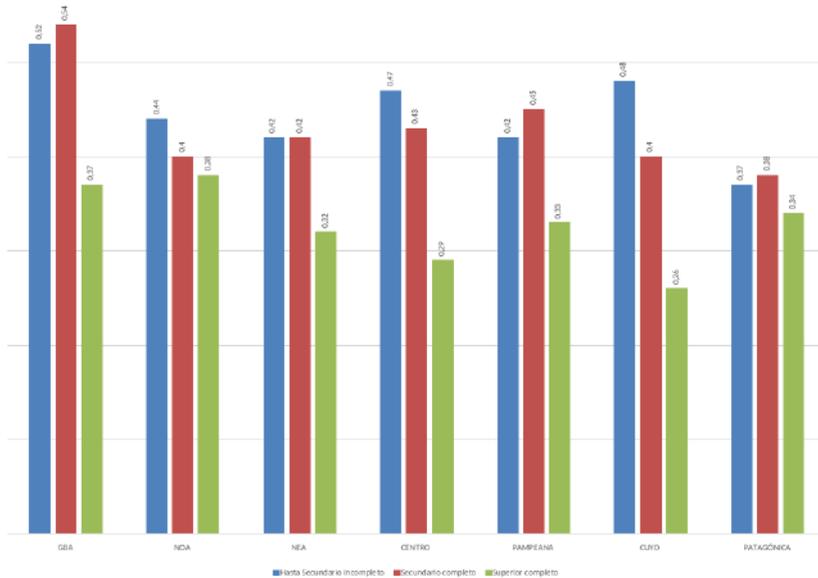
A: hasta secundario incompleto; B: secundario completo; C: superior completo y más. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

Si se considera que el INDEX puede tener un valor mínimo de 0 (sin riesgo) y trepar hasta 1 (máximo riesgo), los valores promedios para varones y mujeres se ubican por debajo de la media de 0,50 lo que indica que el valor del INDEX ha sido entre bajo y moderado para los casos que componen la muestra. En coordenadas de sexo puede verse cómo en todos los niveles alcanzados, la situación de las mujeres es levemente más riesgosa que, en el caso de los varones (véase cuadro 10.7).

Asimismo, las mujeres con nivel educativo de secundario incompleto alcanzan el valor de 0.46, siendo el valor más alto de todas las celdas. Inclusive puede destacarse que las mujeres con secundario completo alcanzan un index de riesgo de 0.42, levemente superior que los varones con secundario incompleto con un valor de 0.41. El menor riesgo, sin embargo, los tienen las mujeres con superior completo llegando a 0.28 puntos.

La figura 10.1 permite una comparación de los diferentes niveles educativos y sus valores en el INDEX de riesgo a escala nacional. Compara las diferentes regiones y permite varias lecturas. Los principales resultados a nivel nacional pueden sintetizarse en los siguientes puntos.

- Los valores más altos del INDEX se encuentran en la región de GBA, muy probablemente más influenciados por los partidos del conurbano bonaerense, en donde se estima el impacto de la pandemia fue muy sostenido y profundo. Inversamente, los



**Figura 10.1.** Valores del INDEX de Riesgo según nivel educativo alcanzado por regiones. Población ocupada mayor de 25 años. Argentina urbana, 2021. Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

valores más bajos se encuentran en la región patagónica. Cuyo presenta el mayor rango de valores.

- En algunas regiones como GBA, Pampeana o Patagónica se observa que los valores más altos del INDEX se corresponden por escaso margen al nivel de secundario completo, poniendo en leve tensión el principio de asociación entre menor nivel alcanzado y mayor riesgo;
- Sin embargo, en lo que refiere a la asociación entre el menor riesgo y mayor logro educativo en todas las regiones esta asociación se puede observar, siendo los valores más bajos del INDEX los que se encuentran en las regiones Centro y Cuyo.

## 10.5 Conclusiones

Las conclusiones de este trabajo pueden englobarse en dos partes, así como el artículo en sí mismo. La primera parte revisó los valores e implicancias del logro educativo en los PSH de los hogares a partir de la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19. Las consideraciones sobre los resultados, la movilidad intergeneracional así como la interacción con los grupos ocupacionales, ofrecen coordenadas de estratificación.

Más allá de los resultados particulares, se puede observar que la frontera entre el nivel más bajo (hasta secundario incompleto) y el nivel intermedio (secundario completo) es cada vez menos relevante; el valor diferenciador más importante en la consecución del nivel superior completo.

A su vez, la segunda parte se centró en la construcción de un INDEX de riesgo con dimensiones sociales, económicas y las fluctuaciones de sus valores medios para las coordenadas de estratificación por logro educativo, sexo y región. En términos generales, el INDEX de riesgo no alcanza valores muy pronunciados, lo que implica que los riesgos sanitarios y socioeconómicos fueron más bien moderados, o, en todo caso, son una profundización más de la crisis macrista. Cabe preguntarse si el deterioro socioeconómico se manifiesta mayoritariamente en deterioro de los ingresos, variable no analizada en el presente trabajo.

La hipótesis planteada comprueba que el logro educativo en el nivel más alto (nivel superior completo o más) genera mejores posiciones y mecanismos de adaptación en el nuevo escenario de crisis. En relación al sexo del encuestado, la situación de las mujeres es levemente más comprometida que la de los varones (especialmente en los niveles educativos más bajos). Por otro lado, en el análisis comparativo entre regiones a nivel país, la región con mayores valores del índice de riesgo resultó ser GBA.

Finalmente, si bien la pandemia y sus efectos se extendieron en el tiempo profundizando las desigualdades aquí analizadas, este estudio establece coordenadas para futuras investigaciones que aborden los efectos del logro educativo en la mitigación de la misma. Los efectos de la crisis deberán también ser analizados en el largo plazo, por lo que este aporte limita su alcance al período analizado, pero subraya la importancia de generar evidencia y estudios longitudinales en el análisis de un fenómeno particular como es la pandemia de COVID-19.

## Referencias

AHMED, FAHEEM *et al.*

- 2020 «Why inequality could spread COVID-19», en *The Lancet Public Health*, vol. 5, n.º 5, referencia citada en página 251.

ANDERETE SCHWAL, MARIANO

- 2022 «El confinamiento y la vuelta a clases en Argentina: relatos de docentes sobre la desigualdad en pandemia», en *Texto livre*, n.º 15, referencia citada en página 252.

BREEN, RICHARD y KRISTIAN KARLSON

- 2014 «Education and social mobility: New analytical approaches», en *European Sociological Review*, vol. 30, n.º 1, págs. 107-118, referencia citada en página 254.

FANTIN, ROMIAN; GILBERT BRENES-CAMACHO y CRISTINA BARBOZA-SOLÍS

- 2021 «Defunciones por COVID-19: distribución por edad y universalidad de la cobertura médica en 22 países», en *Revista Panamericana de Salud Pública*, n.º 45, referencia citada en página 251.

FRANKFORT-NACHMIAS, CHAVA y DAVID NACHMIAS

- 1992 «Index construction and Scaling Methods», en *Research Methods in the Social Sciences*, referencia citada en página 253.

GOLDTHORPE, JOHN

- 2020 «El rol de la educación en la movilidad social intergeneracional: Problemas de la investigación empírica en sociología y algunas propuestas teóricas desde la economía», en *Perspectivas y fronteras en el estudio de la desigualdad social: Movilidad social y clases sociales en tiempos de cambio*, coord. por Sandra Fachelli y Salidos Oga, Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), referencia citada en páginas 254, 255.

HOUT, MICHAEL

- 2020 «Los efectos igualadores de la educación como “selección negativa”: Las dos caras de un mismo efecto de interacción», en *Perspectivas y fronteras en el estudio de la desigualdad social: Movilidad social y clases sociales en tiempos de cambio*, coord. por Sandra Fachelli y Salidos Oga, Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), referencia citada en página 255.

LAZARSFELD, PAUL

- 1973 «De los conceptos a los índices empíricos», en *Metodología de Bibliografía las Ciencias Sociales. Conceptos e índices*, Barcelona: Editorial Laia, referencia citada en página 253.

LÓPEZ ROLDÁN, PEDRO y SANDRA FACHELLI

- 2015 *Metodología de la investigación social cuantitativa*, Universitat Autònoma de Barcelona, recuperado de <<https://ddd.uab.cat/record/129382>>, referencia citada en página 253.

MOLINA DERTEANO, PABLO

- 2019 «El doctor del siglo XXI. Logros educativos y condiciones de origen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», en *La llamada de la gran urbe: las desigualdades y las movilidades sociales en la Ciudad de Buenos Aires*, comp. por Eduardo Chavez Molina, Buenos Aires: CLACSO, págs. 147-173, referencia citada en página 256.

- 2021 «Home office y venta online en primera persona: impactos del COVID en las condiciones de vida, trabajo e identidad de clase en Argentina. Estudios de caso», en *VI Seminario Internacional Desigual y Movilidad Social*, Ciudad de México, referencia citada en página 253.

MORENO-SÁNCHEZ, FRANCISCO *et al.*

- 2018 «Las grandes epidemias que cambiaron al mundo», en *Anales Médicos de la Asociación Médica del Centro Médico ABC*, vol. 63, n.º 2, págs. 151-156, referencia citada en página 251.

OTOMO, KATSUHIRO

- 1992 *Akira*, Barcelona: Ediciones B, referencia citada en página 251.

PUIGGRÓS, ADRIANA

- 2020 *Balance del estado de la educación, en época de pandemia en América Latina: el caso de Argentina*, recuperado de <<https://www.maestromasmaestro.com.ar/wp-content/uploads/2020/09/Balance-del-estado-de-la-educaci%C3%B3n...Puiggros-1.pdf>>, referencia citada en página 252.

RODRÍGUEZ JAUME, MARÍA JOSÉ

- 2002 *Modelos Socio-demográficos: Atlas Social de la Ciudad de Alicante*, Tesis de Doctorado, Universidad de Alicante, referencia citada en página 254.

RUIS I GIBERT, CRISTINA

- 2019 «La peste a lo largo de la historia», en *Revista Enfermedades Emergentes*, vol. 18, n.º 3, págs. 119-127, referencia citada en página 251.



## Parte 2

El impacto de la pandemia en el mercado de trabajo: perspectivas de género, regionales y de sectores de actividad



## CAPÍTULO 11

# El impacto de la doble crisis prepandemia y pandemia sobre el mercado laboral argentino

EUGENIO ACTIS DI PASQUALE,<sup>\*</sup> MARCOS ESTEBAN GALLO<sup>\*\*</sup>  
y ANA CAPUANO<sup>\*\*\*</sup>

### 11.1 Introducción<sup>+</sup>

El objetivo de este capítulo es analizar el impacto de la doble crisis sobre el mercado de trabajo argentino, habida cuenta la situación laboral, los condicionantes y el contexto macroeconómico que acaecían en nuestra sociedad antes de la declaración de la pandemia, debido a las políticas macroeconómicas implementadas entre 2016 y 2019. En virtud de ello, el período de análisis abarca desde el segundo trimestre de 2016 hasta el cuarto trimestre de 2021.

Al momento de la irrupción de la pandemia, la economía argentina estaba en crisis y el mercado de trabajo ya se encontraba deteriorado, debido a las políticas macroeconómicas implementadas entre 2016 y 2019 (Barrera 2019; Grasso y Pérez Almansí 2017). La recesión iniciada a mediados de 2018, generó una mayor caída del salario real y junto con el aumento de la desocupación de los jefes

---

\* Director del Grupo Estudios del Trabajo, Centro de Investigaciones Económicas y Sociales, Universidad Nacional de Mar del Plata.

\*\* Integrante del Grupo Estudios del Trabajo, Centro de Investigaciones Económicas y Sociales, Universidad Nacional de Mar del Plata.

\*\*\* Integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad, Sede Andina Universidad Nacional de Río Negro.

+ Una versión preliminar de este trabajo se presentó en el XV Congreso Nacional de Estudios del Trabajo bajo el título de «El impacto de la pandemia sobre la participación e inserción laboral de mujeres y varones en Mar del Plata y Argentina». El presente capítulo está enfocado únicamente en la situación a nivel nacional, con un período temporal más amplio e incluye una mayor cantidad de fuentes de datos.

de hogar, operó el efecto trabajador(a) adicional. En este sentido, se dio una dinámica contracíclica del sector informal, al absorber a los trabajadores expulsados de empleos formales o que son incapaces de ingresar a ellos (Beccaria y Mauricio 2020). Por ende, a inicios de 2020 el mercado de trabajo se encontraba deteriorado y segmentado, con un elevado porcentaje de informalidad laboral (Beccaria y Mauricio 2020; Ernst y López Mourelo 2020; GrET 2020).

En este escenario laboral se estableció el ASPO como medida de política sanitaria frente a la pandemia de la COVID-19 y, en conjunto, una serie de medidas de política pública para morigerar los efectos negativos de la crisis por la pandemia (Ingreso Familiar de Emergencia DNU 310/20, Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción DNU 332/20, Fondo de Afectación Específica DNU 326/20).

Los primeros estudios realizados con datos de 2020 dan cuenta del deterioro laboral registrado en nuestro país como también en algunos aglomerados en particular (Actis Di Pasquale *et al.* 2020; Arias *et al.* 2020; Beccaria y Mauricio 2020; Dalle y Actis Di Pasquale 2021; Maceira 2020; Montes Cató y Spinosa 2020). Sin embargo, aún resta conocer como se dio la recuperación durante 2021: ¿operaron los tradicionales mecanismos de ajuste del sector informal? ¿El impacto fue diferente entre mujeres y varones? ¿Y el sector formal?

El abordaje se realiza a partir de la evolución de: las tasas básicas del mercado de trabajo, la composición de la tasa de empleo a partir de las principales categorías ocupacionales (asalariados registrados, asalariados no registrados y cuentapropistas), la cantidad de trabajadores registrados, segmentando la información por sexo para dar cuenta de las posibles diferencias por motivos de género que se pueden haber generado en el contexto de pandemia.

Las fuentes de datos son secundarias e incluyen informes del Ministerio de Economía de la Nación, el Informe Monetario Mensual, el Informe Monetario Diario y el Balance Cambiario publicados por el BCRA, los informes de prensa del INDEC correspondientes a nivel general de precios y nivel de actividad económica, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y la información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Asimismo, se incluye como fuente primaria a la Encuesta nacional sobre la Estructura social de Argentina y Políticas públicas durante la pandemia por COVID-19 (ESAyPP/PISAC-COVID-19).

El capítulo está organizado en tres secciones. En la primera, se introduce un análisis de las políticas macroeconómicas durante la prepandemia y pandemia. En la segunda, se estudian efectos sobre el mercado de trabajo en ambos períodos. En la tercera se presenta una reflexión final.

## 11.2 El contexto macroeconómico

Esta sección la dividimos en dos partes. Por un lado, el análisis del período que va desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2019. Por otra parte, a partir de esa última fecha hasta el último dato disponible al momento de redactar este capítulo, diciembre de 2021.

### 11.2.1 Las políticas de desregulación con endeudamiento (2015-2019)

El cambio de administración acaecido en diciembre de 2015 implicó una serie de cambios significativos en la política económica de la Argentina. En efecto, a poco de asumir el nuevo gobierno, implementó un conjunto de medidas que modificaron en forma significativa el funcionamiento de aspectos relevantes de la macroeconomía del país. Algunas medidas se implementaron en el sistema financiero y otras en la economía real. La combinación de estas medidas impactó negativamente en el mercado de trabajo nacional.

En tal sentido, una de las primeras y más importantes decisiones adoptadas fue la derogación de las restricciones a la compra de divisas y la unificación del mercado cambiario. Ello trajo consigo una devaluación del tipo de cambio nominal del 57.4 % en los primeros tres meses de gestión. La unificación del mercado cambiario fue acompañada por la desregulación de los movimientos de los capitales financieros. Al respecto, se eliminó el requisito de inmovilizar un 30 % de los fondos financieros ingresados al país y se redujo el plazo de permanencia mínimo de los mismos de un año a cuatro meses en un primer momento. Posteriormente, a inicios de 2017 dicho plazo fue reducido a cero.

Por otra parte, en enero de 2016 el gobierno canceló la deuda con los llamados fondos buitres – fondos de inversión que se rehusaban a aceptar las condiciones acordadas en las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010 – por valor de USD 9 300 millones. Esta decisión posibilitó el acceso del país a los mercados internacionales de crédito privado, iniciando un acelerado ciclo de endeudamiento externo.

En el plano comercial, se eliminaron las retenciones a las exportaciones de la mayoría de los productos primarios, con excepción de la soja, cuya alícuota fue reducida del 35 % al 30 %. Asimismo, se derogaron los Registros de Operaciones de Exportación (ROEs), límites cuantitativos a las exportaciones de algunos productos cuyo precio internacional impacta fuertemente en el costo de la canasta básica alimentaria. En lo que respecta a las importaciones, se derogó el Régimen de Declaraciones Juradas Anticipadas de Exportaciones (DJAI) y se flexibilizó el ingreso de una amplia gama de artículos,

lo que implicó que gran parte del entramado productivo local viera intensificada la competencia con productos extranjeros.

En cuanto a los servicios públicos, bajo el pretexto explícito de reducir los subsidios que se otorgaban a las empresas prestadoras, desde los primeros meses de 2016 se dispusieron incrementos significativos en las tarifas de energía eléctrica, gas natural, transporte, agua corriente y cloacas, con impacto disímil según el tipo de consumidor (CIFRA 2016).

En el plano financiero, una de las principales medidas adoptadas por el nuevo gobierno fue la desregulación de las tasas de interés. En tal sentido, bajo la administración anterior las tasas activas y pasivas se encontraban vinculadas a la tasas de interés que rendían las LEBACs, instrumentos de deuda emitidos por el Banco Central (BCRA) con el objetivo de influir sobre los niveles de liquidez. Con la nueva reglamentación las tasas de interés de los depósitos y los créditos pasaron a determinarse en forma desregulada, lo cual implicó un alza relativa de las tasas activas y un incremento de los *spreads* bancarios. A continuación, se analizan los efectos sobre la economía real de medidas mencionado dividiendo el período en dos partes: 2016-2017 y 2018-2019.

### Del impacto negativo en 2016 a la aparente recuperación en 2017

En líneas generales, el conjunto de medidas mencionado configuró una agresión al mercado interno desde varios frentes. En primer lugar, la convergencia de la devaluación, la quita de retenciones, la eliminación de los ROEs y los aumentos de tarifas provocó una aceleración de la inflación, que pasó de un 26.9 % en 2015 a un 41 % en 2016, para descender luego al 24.8 % en 2017. El alza en el ritmo de aumento de los precios afectó los ingresos reales de amplios sectores sociales, lo cual se tradujo en una menor demanda efectiva. En efecto, el consumo privado cayó un 0.8 % en 2016, en tanto que el producto bruto interno (PBI) disminuyó en un 2.1 %. Estas variables se recuperaron levemente en 2017 como consecuencia, entre otras cosas, de la contención de las tarifas y del tipo de cambio nominal, el cual aumentó un 11.9 % en dicho año. Así, el consumo privado y el PBI crecieron en 2017 un 2.8 % y un 4.2 %.

Por otra parte, el alza de tarifas afectó los costos de producción de numerosas empresas, erosionando así las posibles ganancias de competitividad derivadas de la devaluación. De esta manera, las empresas que tienen su producción orientada al mercado interno se vieron perjudicadas tanto por la caída de la demanda como por el incremento de los costos operativos. A ello cabe agregar el alza de las tasas de interés, lo cual encareció el acceso al crédito, tanto el destinado consumo como el orientado al financiamiento del capital

de trabajo, fundamental para el funcionamiento de gran parte del entramado comercial y productivo.

La convergencia de una contracción del consumo junto con mayores costos operativos y financieros derivó en una reducción de la inversión – formación bruta de capital (FBC) – la cual disminuyó un 5.8 % en 2016. En 2017 dicha variable tuvo una recuperación transitoria, con un crecimiento del 13.4 %, tendencia que se revertiría profundamente en los años siguientes.

En lo que respecta al frente externo, la recesión acontecida en 2016 permitió obtener una leve reducción en el déficit de comercio exterior, el cual pasó de USD 6 600 millones en 2015 a USD 4 035 millones en 2016. Este último resultado se explica por un superávit de USD 4 416 millones en el comercio de bienes y un déficit de USD 8 452 millones en el comercio de servicios. Sin embargo, ante la recuperación económica de 2017 las cifras del comercio exterior se tornaron fuertemente deficitarias, acusando las consecuencias de la apertura comercial implementada por el nuevo gobierno. Así, en 2017 el déficit del comercio de bienes fue de USD 5 447 millones y el saldo del comercio de servicios fue negativo por USD 9 695, totalizando un déficit de comercio exterior de USD 15 143 millones. Por su parte, la cuenta corriente del balance de pagos en 2016 y 2017 fue deficitaria en USD 15 105 millones y USD 31 151 respectivamente.

Por otra parte, la desregulación de los movimientos de capitales financieros, el alza de las tasas de interés internas y el acceso a los mercados de crédito externo privado, recrearon las condiciones para la puesta en marcha del mecanismo de valorización financiera o *carry trade*. El mismo consiste en un ciclo de especulación financiera que se inicia con la toma de deuda en moneda extranjera en los mercados internacionales, para luego ingresar al país los recursos obtenidos de esa forma e invertirlos en un activo financiero local nominado en pesos. La rentabilidad de la operación se fundamenta en el hecho de que, en un país periférico como la Argentina, la tasa de interés interna se encuentra generalmente varios puntos por encima de la tasa a la que un particular solvente puede endeudarse en los mercados internacionales. Al cabo de un tiempo usualmente breve – en general unos pocos meses – se realiza la operación inversa: el activo local es vendido y los recursos obtenidos son convertidos nuevamente a dólares, para luego retirarlos del país. Dicho proceso da lugar a un crecimiento acelerado del endeudamiento en moneda extranjera que tiene como contrapartida la formación de activos externos del sector privado, variable conocida coloquialmente como «fuga de capitales».

En tal sentido, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2017 la deuda pública en moneda extranjera se incrementó en USD 78 520 millones, a lo que debe agregarse USD 11 067 millones de deuda en

moneda extranjera emitida por el sector privado (ODE 2017). En el mismo lapso el déficit acumulado de cuenta corriente del balance de pagos ascendió a USD 46 256 millones, de los cuales USD 19 178 millones se deben al saldo negativo de comercio exterior y el resto se explica principalmente por la remisión al exterior de rentas de la inversión. Por su parte, la formación de activos externos del sector privado fue de USD 34 120 millones. Es decir, en los dos primeros años de gestión de la Alianza Cambiemos el desequilibrio externo acumulado totalizó USD 80 120 millones, de los cuales USD 61 200 millones representan pérdida de divisas por canales financieros y solo USD 19 180 millones se deben al déficit de comercio exterior. En consecuencia, prácticamente la totalidad de la deuda en moneda extranjera contraída por el país en dicha etapa se destinó a financiar una salida de divisas del país motivada por factores mayormente financieros.

Como la historia económica argentina demostró en repetidas oportunidades, la emisión de endeudamiento externo para financiar déficit de cuenta corriente y fuga de capitales es un mecanismo insustentable a largo plazo y deja a la economía local expuesta a los vaivenes internacionales. En efecto, tarde o temprano el flujo de crédito externo se ralentiza o se interrumpe, a lo cual sobreviene generalmente una crisis económica y social de magnitud.

### De la recesión de 2018 a la crisis prepandemia durante 2019

A comienzos de 2018 se produjo el agotamiento del flujo de crédito externo privado. A partir de ese momento las reservas internacionales del BCRA iniciaron una tendencia descendente que se precipitó en una brusca caída hacia fines de abril. De esta manera, entre principios de enero y mediados de junio el BCRA perdió cerca de USD 16 000 millones.

Ante la falta de acceso al crédito externo, solo la asistencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) podía evitar la profundización de la crisis financiera. Así, el 22 de junio de 2018 ingresan a las reservas del BCRA USD 15 000 millones correspondientes al primer desembolso de un crédito de USD 57 000 millones acordados con el organismo. Prácticamente, la totalidad de esa primera entrega se perdería en solo tres meses para atender una demanda ingente de dólares que tenía como principal destino la formación de activos externos. Dicha dinámica de endeudamiento y fuga de capitales se repetiría tras cada desembolso sucesivo del FMI. En efecto, entre junio de 2018 y julio de 2019 el endeudamiento con el FMI ascendió a USD 44 500 millones. El día inmediatamente anterior al primer desembolso del FMI las reservas internacionales del BCRA ascendían a USD 48 480 millones, mientras a comienzos de noviembre de 2019

las mismas estaban en un nivel próximo a los USD 43 300 millones. Es decir que hacia fines de 2019 las reservas internacionales del BCRA se ubicaban por debajo del monto registrado antes de contraer la deuda con el FMI. A su vez, entre junio de 2018 y noviembre de 2019 la formación de activos externos ascendió a USD 40 700 millones de dólares. Es decir que casi la totalidad del crédito contraído con el FMI se destinó a financiar una fuga de capitales que fue llevada a cabo en su mayor parte por un reducido conjunto de personas y empresas (BCRA 2020).

El cierre del crédito externo privado que tuvo lugar a comienzos de 2018 marcó un punto de inflexión a partir del cual todos los indicadores económicos iniciaron un profundo deterioro. Así, entre enero de 2018 y noviembre de 2019 el tipo de cambio nominal se devaluó un 223 %, pasando de \$ 18.5 a \$ 59.9. En el mismo lapso el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 119 %. En lo que respecta a la evolución del producto, la contracción del PBI en 2018 y 2019 fue del 2.6 % y del 2 % respectivamente. Por su parte, el consumo privado disminuyó en los años mencionados un 2.2 % y un 7.3 %, mientras que la formación bruta de capital (FBC) retrocedió 5.7 % y un 15.9 % respectivamente.

En líneas generales, el modelo económico implementado por el gobierno de la Alianza Cambiemos repitió los procesos de endeudamiento externo y valorización financiera que están en la raíz de las crisis más graves que experimentó la sociedad argentina en las últimas décadas. En tal sentido, es posible verificar que entre el primer trimestre de 2016 y el cuarto trimestre de 2019 el déficit de cuenta corriente de balanza de pagos acumulado alcanzó los USD 77 050 millones, mientras que la formación de activos externos del sector privado no financiero entre diciembre de 2015 y noviembre de 2019 fue de USD 88 376 millones, lo que totaliza un desequilibrio externo USD 165 426 millones. De dicho desequilibrio, solo USD 15 500 millones se deben al déficit de comercio exterior, mientras que el resto – casi USD 150 000 millones – representan una sangría de recursos sin contrapartida operada a través de diversos canales financieros. Paralelamente, entre diciembre de 2015 y julio de 2019 – mes en que se percibe el último desembolso del préstamo dado por el FMI – el endeudamiento en moneda extranjera del Estado argentino aumentó en USD 145 300 millones, es decir, una cifra muy próxima al total de los recursos transferidos al exterior por canales financieros (ODE, 2019).

Finalmente, ante la negativa del FMI de continuar con los desembolsos del crédito acordado en 2018 y el resultado electoral adverso, hacia fines de 2019 el gobierno saliente reimplantó las regulaciones a la compra de divisas, en un reconocimiento tácito del fracaso de la política de liberalización cambiaria y financiera.

### 11.2.2 Las políticas económicas y sociales condicionadas por el escenario previo y el contexto actual (2020-2021)

El gobierno del Frente de Todos que comenzó en diciembre de 2019 se vio desde el inicio fuertemente condicionado por dos factores: el elevado nivel de endeudamiento en moneda extranjera generado por la gestión anterior y la pandemia ocasionada por la repentina aparición del COVID-19, que en pocas semanas alcanzó una magnitud global y cuyos primeros casos en Argentina se detectaron en marzo de 2020.

En lo inmediato, el impacto económico y social de la pandemia fue de una magnitud difícil de exagerar. A fin de contener la situación de emergencia social generada por la pandemia el gobierno nacional implementó una amplia gama de programas de asistencia a familias y empresas, entre los que se destacan el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), bonos complementarios para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y para beneficiarios de la AUH, postergación y reducción de las contribuciones patronales, así como una serie de créditos subsidiados destinados al sostenimiento de pequeñas y medianas empresas ante la inevitable caída en la facturación.

Estas políticas implicaron un considerable esfuerzo para las cuentas públicas que llevaron al resultado fiscal primario de un déficit negativo del 0.4 % del producto en 2019 a un déficit del 6.4 % del PBI en 2020. Esta evolución estuvo explicada principalmente por el incremento de las prestaciones sociales, las cuales pasaron del 11.2 % al 14.9 % del PBI entre 2019 y 2020, así como por los subsidios económicos, los cuales crecieron desde el 1.6 % al 2.5 % del producto entre los años mencionados. Por su parte, el déficit financiero – que incluye los intereses de la deuda pública – fue de un 8.3 % del PBI.

Como consecuencia de las restricciones al movimiento de personas y a la realización de numerosas actividades económicas, el PBI en el año 2020 se retrajo un 9.9 %, en tanto que el consumo privado y la FBC disminuyeron un 13.8 % y un 12.9 % respectivamente.

En lo que respecta al desempeño de las cuentas externas, durante 2020 se alcanzó un superávit de comercio exterior de USD 12 391 millones y un superávit de cuenta corriente del balance de pagos de USD 3 313 millones, mientras que en 2019 este concepto arrojó un déficit de US\$ 3 710 millones. La reversión de este resultado fue consecuencia de una menor remisión al exterior de las rentas de la inversión, las cuales pasaron de USD 17 800 millones en 2019 a USD 10 101 millones en 2020. Esta variación en parte estuvo influida por la reestructuración de la deuda bajo legislación extranjera tomada con acreedores privados lograda en agosto de 2020. Como

consecuencia de la misma se obtuvo una reducción de USD 37 800 millones sobre una deuda total – capital más intereses – de USD 127 300 millones, además de un período de tres años de gracia (Manzanelli *et al.* 2020). Sin embargo, a pesar de estos resultados favorables, en 2020 las reservas internacionales del BCRA disminuyeron en USD 5 460 millones como consecuencia principalmente de los pagos de deuda en moneda extranjera, tanto pública como privada. Entre otros factores, esto generó una presión sobre el tipo de cambio que llevó una devaluación del 40.5 % del dólar oficial y del 90.7 % del dólar contado con liquidación. Cabe señalar que en Argentina las presiones devaluatorias están entre las principales causas de la inflación, de manera que el incremento del índice de precios al consumidor acumulado durante 2020 fue del 36.1 % (INDEC 2021).

Durante el año 2021 la economía recuperó los signos de normalidad que habían quedado suspendidos ante la emergencia de la pandemia. En tal sentido, el rápido y amplio proceso de vacunación hizo posible la normalización gradual de prácticamente todas las actividades económicas y sociales, de manera que la economía del país pudo revertir con relativa celeridad la situación recesiva que había caracterizado el año anterior. Así, el PBI aumentó un 10.3 % y el consumo privado un 10.2 %. Por su parte, la inversión expresada en la FBC creció un 32.9 %.

Ante el escenario de recuperación, parte de las ayudas sociales y económicas fueron recortadas lo que permitió reducir el déficit primario al 2.1 % del PBI, mientras que la reestructuración de la deuda con acreedores privados acordada el año anterior repercutió en una disminución de los intereses de la deuda pública, lo que posibilitó la reducción del déficit financiero que se ubicó en el 3.6 %.

En lo que respecta al frente externo, el saldo de comercio exterior arrojó un superávit de USD 15 220 millones y la cuenta corriente del balance de pagos registró un resultado favorable de USD 6 800 millones. Sin embargo, durante 2021 las reservas internacionales del BCRA se incrementaron en solo USD 275 millones. Esta disociación entre la evolución de las reservas de divisas del BCRA y el desempeño de las cuentas externas se debe principalmente, al igual que en 2020, al peso de los servicios de deuda en moneda extranjera. De esta forma, las presiones cambiarias, si bien fueron menores a las del año anterior, conllevaron una devaluación del dólar oficial del 22.1 % y del dólar CCL del 44.1 %. En un contexto de reactivación de la economía y de incremento de la demanda agregada las presiones inflacionarias fueron mayores, de manera que en 2021 el aumento del IPC alcanzó al 50.9 %.

Estos niveles inflacionarios, derivados en gran medida de los desequilibrios cambiarios originados en el endeudamiento externo contraído durante el gobierno anterior, se constituyen en uno de los

principales obstáculos para que la recuperación económica se refleje en un incremento de los salarios reales y en mejoras de los niveles de vida de los sectores más postergados de la población.

### 11.3 El impacto sobre el mundo del trabajo

Como expusimos anteriormente, los años previos a la pandemia se caracterizaron en un primer momento (2016 y 2017), por oscilaciones en el nivel de actividad económica y de poder de compra de los salarios, y luego (2018 y 2019) recesión y crisis económica. Luego, a partir de la pandemia se produjo un fuerte deterioro en la economía (2020) y una posterior recuperación (2021). Esta coyuntura generó un impacto en el mercado de trabajo y en la composición de la población ocupada, tanto por sexo como categoría ocupacional. Tal cómo analizamos a continuación, la dinámica laboral fue diferente en cada una de esas etapas.

En este sentido, de acuerdo a los cambios en las tendencias de las tasas básicas de mercado de trabajo y de la composición del empleo ocurridas durante los seis años bajo análisis, se pueden diferenciar las siguientes etapas:

- 1) por un lado, la crisis prepandemia se divide en tres partes:
  - a) desde el 2do. trimestre de 2016 hasta el 2do. trimestre de 2017: caracterizada por un deterioro cualitativo y cambios en la composición por sexo del empleo;
  - b) desde el 3er. trimestre de 2017 hasta el 2do. trimestre de 2018: crecimiento de mayor proporción del empleo informal – por efecto trabajador(a) adicional – que del empleo formal;
  - c) desde el 3er. trimestre de 2018 hasta 4to. trimestre de 2019: caída del empleo y aumento de la desocupación.
- 2) por otro lado, la crisis de la pandemia se divide en dos partes:
  - a) desde el 1er. trimestre de 2020 hasta el 1er. Trimestre de 2021: caída del empleo a mínimo histórico y aumento de la desocupación.
  - b) desde el 2do. trimestre de 2021 hasta el 4to. trimestre de 2021: recuperación y reconfiguración.

#### 11.3.1 La crisis prepandemia: la reconfiguración del mercado de trabajo

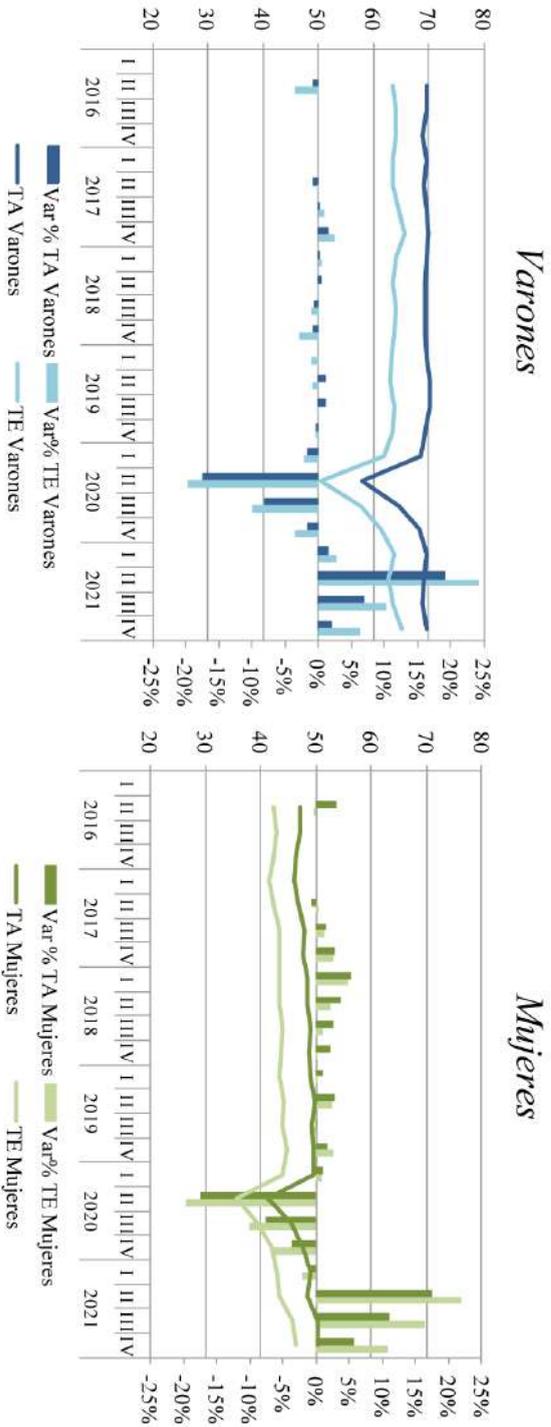
En la primera parte del período prepandemia (desde 2-2016 hasta 2-2017), las tasas de actividad y empleo se ubicaron por debajo de los valores históricos promedio, principalmente entre los varones. La comparación con año 2015 resulta limitada por no tener los datos

del tercer y cuarto trimestre de 2015 y del primer trimestre 2016.<sup>[1]</sup> No obstante, si nos centramos en el único trimestre que permite una comparación interanual (segundo de 2016), frente a una aparente estabilidad la participación laboral se producen cambios en la composición por sexo. En el caso de los varones disminuyó la tasa de empleo (del 66 % al 63.7 %), acompañado de una leve caída de la tasa de actividad (70 % al 69.7 %), es decir, los primeros indicios del efecto trabajador desalentado,<sup>[2]</sup> dado que parte de la pérdida de empleo se traduce aumento de la inactividad (véase figura 11.1). Esa disminución en la cantidad de ocupados, se encuentra explicada principalmente por la caída de asalariados registrados, pasando de representar el 34 % al 32 % de la población de 14 y más años (véase figura 11.2 y figura 11.3).

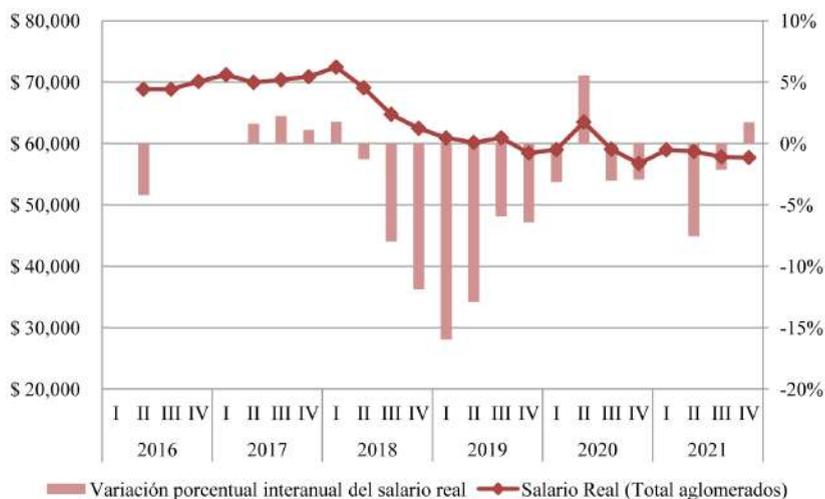
En el caso de las mujeres, aumentó la tasa de actividad (del 45.8 % al 47.2 %) como consecuencia del aumento en la cantidad de desocupados. Este aumento de la participación femenina es conocido como efecto trabajadora adicional<sup>[3]</sup> que opera como una respuesta de los hogares frente a la caída del salario real que se produjo en los primeros meses del 2016 (véase figura 11.2). De hecho, la inserción laboral de las mujeres se dio únicamente en trabajos por cuenta propia, en un contexto de disminución del trabajo asalariado.

En la segunda parte (desde 3-2017 hasta 2-2018), el salario real se fue recuperando (véase figura 11.2), pero sin llegar al máximo alcanzado a fines de 2015. En este contexto, entre las mujeres se produce un significativo incremento interanual en las tasas de actividad (llegó al 48.5 %) y de empleo (43.3 %), lo que estaría dando mayores indicios sobre la presencia del efecto trabajador(a) adicional. No obstante, la inserción laboral es eminentemente precaria y/o informal, habida cuenta del crecimiento de trabajadoras por cuenta propia (a tasas de crecimiento interanual promedio del 10 %) y en menor medida de trabajadoras no registradas. En cambio, entre los varones, al segundo trimestre de 2018 las tasas de actividad (69.5 %) y de empleo fueron similares a las de igual trimestre de 2016. Esta

- 
- [1] Cabe recordar que el INDEC no publicó, o bien no relevó, la información entre el tercer trimestre de 2015 y el primer trimestre de 2016 inclusive. La única excepción es el tercer trimestre de 2015 para las tasas básicas, puesto que esos valores se encuentran publicados en el informe de prensa del INDEC.
  - [2] El efecto trabajador desalentado, se genera por aquel integrante (generalmente varón) que se queda sin trabajo, busca un nuevo empleo y al no encontrarlo, abandona la búsqueda.
  - [3] El efecto trabajador adicional significa que frente a la caída de los ingresos familiares, un miembro del hogar (por lo general mujer) que no trabaja ni buscaba trabajo se integra al mercado laboral, ya sea como ocupado o desocupado.



**Figura 11.1.** Tasas básicas de mercado de trabajo (en porcentaje, eje izquierdo) y variación porcentual interanual de las tasas básicas (en porcentaje, eje derecho) por sexo. Población de 14 y más años (I trimestre 2016-IV trimestre 2021). Varones Mujeres. Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC.

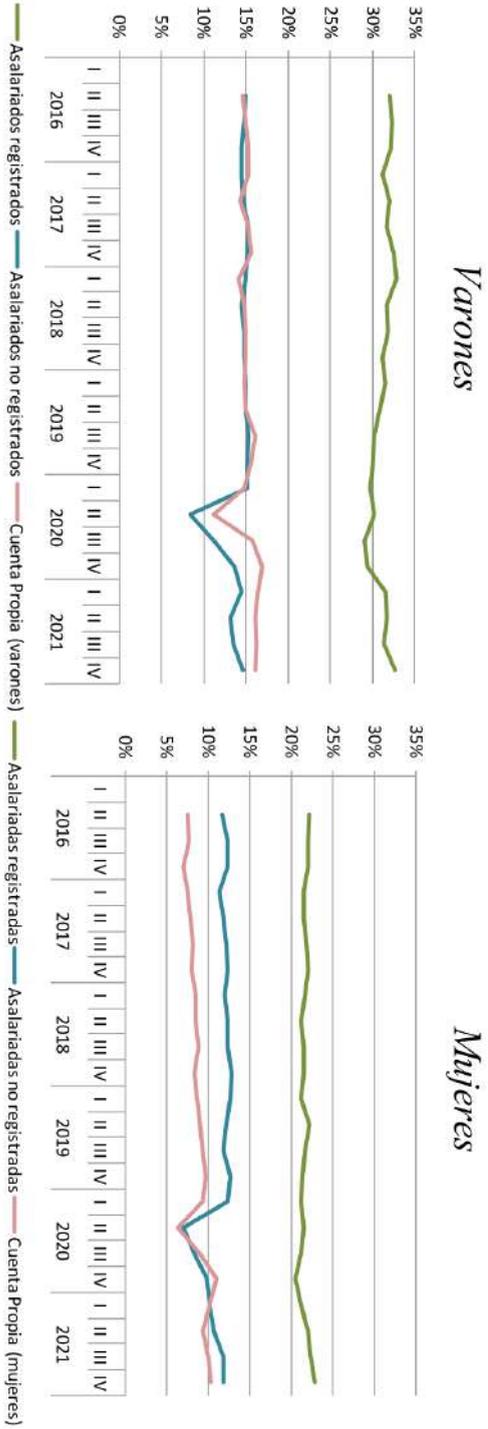


**Figura 11.2.** Salario real promedio del total aglomerados. Valores a precios de diciembre de 2021 (eje izquierdo) y variación porcentual interanual (eje derecho). I trimestre 2016-IV trimestre 2021. Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC.

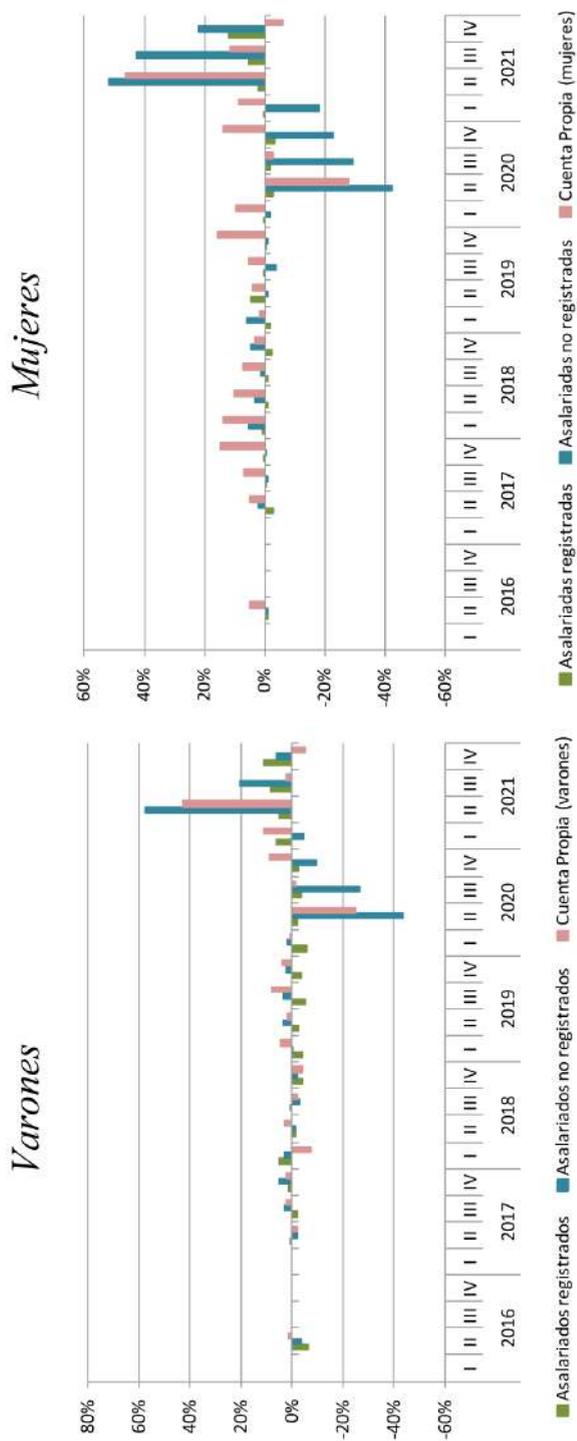
aparente estabilidad oculta el hecho que se redujo la participación de asalariados registrados y no registrados en similar proporción al aumento de cuentapropistas (véase figura 11.3 y figura 11.4).

Como mencionamos en la sección anterior, en la tercera parte (desde 3-2018 hasta 4-2019), la Argentina entró en recesión y tal como se puede observar en la figura 11.2, se produjo una caída del salario real. La inmediata caída del empleo tuvo como contrapartida un aumento de la desocupación (llegó al 10.6%), que se vio alimentada por el incremento de la participación de las mujeres (vía efecto trabajadora adicional), tal como analizamos a continuación.

En el caso de los varones, se produce una caída de la tasa empleo que perduró durante cinco trimestres. En 2018 disminuyeron todas las categorías ocupacionales, pero a partir de 2019 comenzó a crecer la cantidad de trabajadores por cuenta propia y luego los asalariados no registrados, al mismo tiempo que continuaba descendiendo el empleo no registrado. En cambio, entre las mujeres el primer año de recesión impactó disminuyendo la tasa de crecimiento del trabajo por cuenta propia (es decir, que siguió creciendo pero a una tasa más baja), al mismo tiempo que otra proporción de mujeres ingresaba al mercado de trabajo como desocupada (véase figura 11.4). En 2019 volvió a acelerarse la proporción de cuentapropistas, llegando en el cuarto trimestre de ese año a su valor histórico más alto (10% sobre 44% del valor de la tasa de empleo), junto con un elevado nivel de



**Figura 11-3.** Evolución de las principales categorías ocupacionales (calculadas como componentes de la tasa de empleo) por sexo. Población de 14 y más años. Total Aglomerados (I trimestre 2016-IV trimestre 2021). Varones Mujeres. Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC.



**Figura 11.4.** Variación porcentual interanual de las principales categorías ocupacionales (calculadas como componentes de la tasa de empleo) por sexo. Población de 14 y más años. Total Aglomerados (1 trimestre 2016-IV trimestre 2021). Varones Mujeres. Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC.

asalariadas no registradas (13 % sobre 44 %) y uno de los valores más bajos de asalariadas registradas (21 % sobre 44 %) (véase figura 11.3).

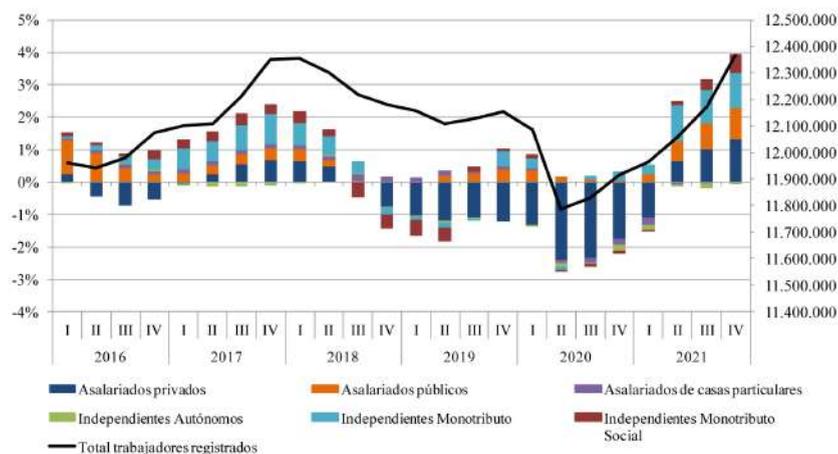
Si comparamos los valores promedio de las tasas básicas de 2019 con la de 2016, encontramos que aumentaron las tasas de actividad y empleo de las mujeres. Respecto a la composición del empleo, disminuyen las asalariadas registradas y aumentan en mayor proporción las asalariadas no registradas y, principalmente, cuentapropistas. Por su parte, disminuyeron levemente las tasas de actividad y empleo de varones, esta última debido a que la caída de asalariados registrados superó al incremento de cuentapropistas y de asalariados no registrados. Por ende, la situación del mercado de trabajo prepandemia evidenciaba un fuerte deterioro con una mayor segmentación en la composición del empleo por categorías ocupacionales y con un mayor porcentaje de informalidad. Y este escenario fue la consecuencia de las políticas implementadas desde diciembre de 2015 que provocaron:

- 1) el aumento de la participación femenina, principalmente de edades centrales, por efecto trabajador(a) adicional, que se insertaron en actividades en informales con la finalidad de cubrir o complementar los ingresos del hogar;
- 2) la reducción de la cantidad de trabajadores registrados, algunos de los cuales pasaron a una actividad informal.

De hecho, al analizar los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), se puede observar que a partir del primer trimestre de 2016 se revierte la tendencia de creación de trabajo asalariado registrado. Los cambios en las políticas macroeconómicas provocaron en 2016 una destrucción de puestos de trabajo del sector privado. Luego, a partir de 2017 se producen aumentos que estuvieron dominados por modalidades propias del sector informal urbano, o bien precarias en cuanto a su duración y a la regularidad de los ingresos. En promedio, entre el primer trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 2018, un 64 % del incremento del trabajo registrado estuvo explicado por las modalidades monotributo, monotributo social y asalariadas en casas particulares. Esto generó que se incremente la participación de estas categorías en el total. Finalmente, con la recesión instalada a mediados de 2018, se inicia un proceso de destrucción neta de puestos de trabajo que incluyó a casi todas las modalidades (véase figura 11.5).

El resultado que se produjo fue que al cuarto trimestre de 2019 el nivel de trabajo registrado resultó similar al del cuarto trimestre de 2015, aunque con un cambio en la composición. Es decir, la participación de los asalariados privados cayó de forma significativa en 2.4 puntos porcentuales (pp), quedando en 49.6 % y la de independientes autónomos en 0.1 pp. En contraposición, la participación conjunta

de todos los monotributistas y de asalariadas de casas particulares aumentó en 1,9 pp, y la de asalariados públicos creció en 0,7 pp más que hace cuatro años, quedando en 26.6 %.



**Figura 11.5.** Total de trabajadores registrados (eje derecho) y composición de la variación porcentual interanual según incidencia de modalidad de ocupación (eje izquierdo). Argentina (2016-2021). Fuente: elaboración propia en base a datos del SIPA

### 11.3.2 La crisis sobre la crisis: el trabajo durante la pandemia

A partir de la declaración de la pandemia, en marzo de 2020, ya se comenzaron a sentir los primeros efectos negativos sobre el mercado de trabajo. No obstante, fue durante el segundo trimestre de 2020 en el contexto del ASPO cuando se produjo el mayor deterioro de todos los indicadores. La tasa de desocupación creció del 10.6 % al 13.1 % (1 437 000 personas).<sup>[4]</sup> Por su parte, la tasa de actividad

[4] La explicación de este incremento menor en el total país puede encontrarse en aspectos metodológicos de la medición. En rigor, para que una persona sea considerada desocupada, no solo no debe haber trabajado ni una hora en la semana de referencia, sino que debe haber buscado trabajo activamente durante el último mes. Por consiguiente, dadas las restricciones de movilidad durante las fases 1 y 2 del ASPO en gran parte del país y particularmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires, es lógico que la mayor parte de personas que se quedaron sin trabajo, no hayan podido salir a buscar uno nuevo, y por consiguiente, no cumplen con la condición para ser considerados desocupados. Luego, pueden operar factores de desaliento en la búsqueda junto con la imposibilidad económica de desplazarse para realizar la búsqueda de empleo. Por otra parte, las técnicas de recolección de datos se

de mujeres cayó al 41.2 % (-8,7 pp interanual) y la de varones al 58 % (-12,2 pp) llegando a mínimos históricos. Asimismo, la tasa de empleo para mujeres descendió al 35.6 % (-8,7 pp) y para varones al 50.6 % (-12,4 pp). Esto representó la peor disminución del empleo de la historia y, los valores alcanzados, mínimos históricos (véase figura 11.1). No obstante, tanto para mujeres como para varones, el mayor impacto negativo se dio entre asalariados no registrados (-40 %) y cuentapropistas (alrededor de -25 %) y en menor medida en asalariados registrados (-2.5 %). Esto fue lo que provocó el incremento del salario real promedio de manera temporal, dado que la proporción de población que no trabajó en el segundo trimestre de 2020 fue aquella con menores ingresos laborales.

Al respecto podemos realizar dos observaciones la dinámica mencionada. Por un lado, la leve caída del empleo registrado se debe a las políticas de protección al empleo implementadas, tales como el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), la prohibición de despidos y los acuerdos por suspensiones con acuerdo del tope de reducción de haberes (Pastrana y Trajtenberg 2020). De hecho, Argentina encabeza el *ranking* mundial de UNI Global Union (2021) en cuanto al apoyo otorgado a los trabajadores registrados durante la pandemia. Por otro lado, como sostienen Beccaria y Mauricio (2020) si bien lo frecuente es que en contextos de caída del empleo asalariado el cuentapropismo tenga un rol contracíclico, en esta coyuntura este mecanismo de ajuste se debilita o desaparece. Esto se debe a que gran parte de las actividades que realizan estos trabajadores quedó enmarcada como no esencial durante el ASPO y, a su vez, resulta imposible realizarla desde el hogar.

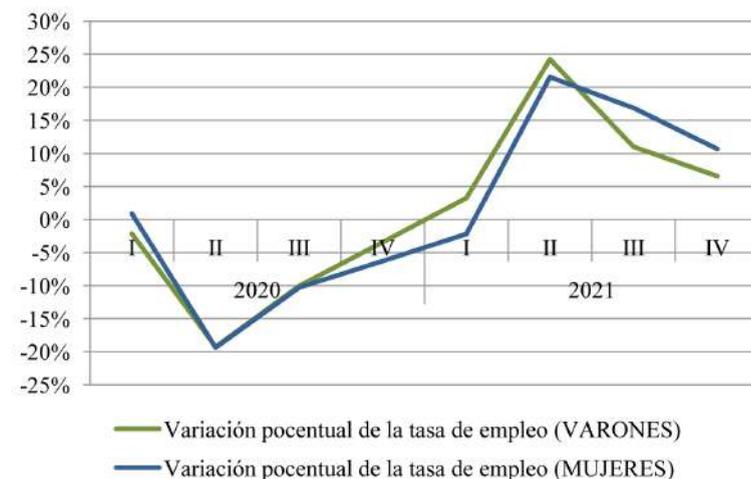
A partir del tercer trimestre de 2020, a medida que se fueron levantando las distintas restricciones ligadas al ASPO comenzó una recuperación interanual de todos los indicadores de mercado de trabajo. ¿Y cómo fue esa recuperación por sexo y categorías ocupacionales? Al igual que lo ocurrido en otros países (Acevedo *et al.* 2021), en Argentina la recuperación del empleo por parte de las mujeres ha sido más lenta que para los varones, en particular a partir del cuarto trimestre de 2020 (véase figura 11.6).

Las razones detrás de este fenómeno pueden ser tanto desde el lado de la oferta como de la demanda de trabajo. Por un lado, la suspensión de clases presenciales implicó un aumento del tiempo dedicado al cuidado por parte de las mujeres, quienes ya poseían una mayor carga en la distribución intrahogar. Esto podría haber generado que una proporción de ellas no pueda reincorporarse en

---

vieron modificadas durante este período, dado que las entrevistas se hicieron por vía telefónica, obteniendo una reducción de la tasa de respuesta y la disminución de la precisión de las estimaciones.

las actividades laborales. Por otro lado, y sumado a lo anterior, las pérdidas de empleo se concentraron mayormente en sectores de alta empleabilidad femenina, como hoteles y restaurantes, comercio y servicio doméstico. Estas ramas, en especial la primera, aún permanecen golpeadas por la crisis de la pandemia y, por ende, la demanda de empleo continúa en niveles menores a los prepandemia.

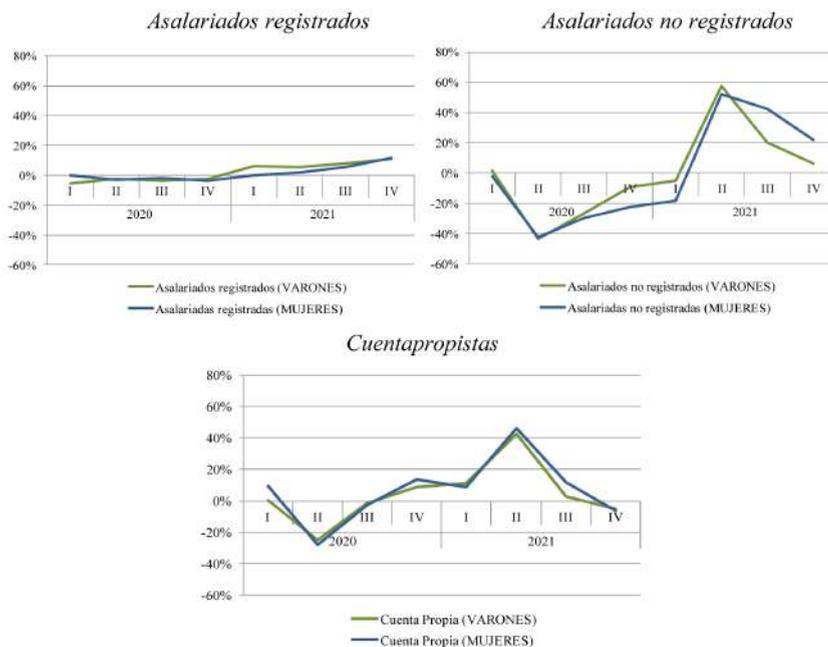


**Figura 11.6.** Variación porcentual trimestral interanual de la tasa de empleo de la población de 14 y más años por sexo (2019-2021). Total aglomerados. Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC

Al analizar diferencias entre mujeres y varones en las variaciones de la cantidad de trabajadores en cada una de las tres categorías ocupacionales analizadas (asalariados registrados, asalariados no registrados y cuentapropias), encontramos dinámicas particulares:

El impacto negativo más bajo se dio entre la población asalariada registrada con mínimos cercanos a -5 % (véase figura 11.7)

Sin embargo, los resultados difieren dependiendo de la fuente de datos utilizada. De acuerdo a la EPH, el impacto durante el 2020 fue similar entre mujeres y varones y recién a partir del primer trimestre de 2021 se observa una recuperación del nivel de empleo de varones (+8.1 %) que supera al de mujeres (+5.6 %). En cambio, los resultados del SIPA (asalariados del sector privado, público y de casas particulares) tienen una diferencia sustantiva en cuanto a la evolución del empleo registrado por sexo. A partir de esta fuente de datos los varones tuvieron el mayor impacto negativo durante el segundo y tercer trimestre de 2020. Luego se fue dando una paulatina desacereleración y en 2021, si bien también se observa que la recuperación

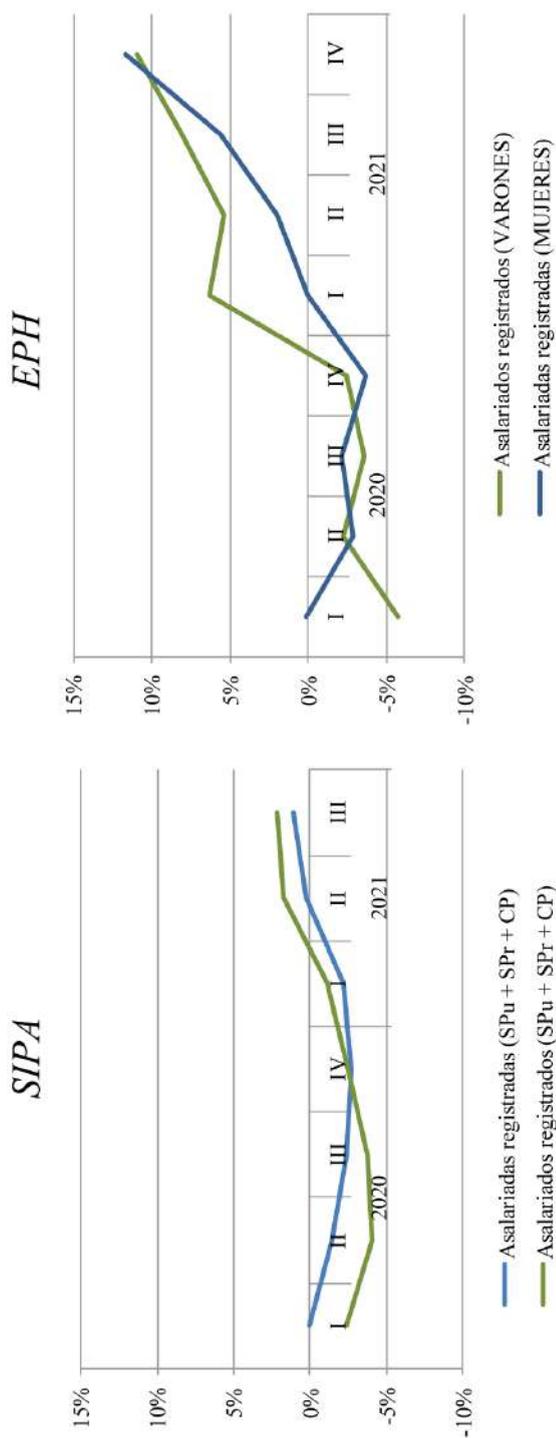


**Figura 11.7.** Variación porcentual interanual de la composición de la tasa de empleo por categoría ocupacional y sexo. Población de 14 y más años. Argentina, 2019-2021. Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC.

de varones superó a la de mujeres, se dio a un ritmo menor al 2 % (véase cuadro 11.8).

Los asalariados no registrados tuvieron una evolución similar a los del conjunto de ocupados, aunque tanto la magnitud de las pérdidas de empleo como las brechas entre mujeres y varones fueron más pronunciadas en esta categoría que en el conjunto de ocupados. La mayor disminución se dio en el segundo trimestre, tanto para mujeres como para varones, siendo en ambos casos de similar magnitud (-45%). Luego se desacelera, aunque a un ritmo más lento para las mujeres, en particular durante el cuarto trimestre de 2020 (-30%) y el primer trimestre de 2021 (-22%). En esta categoría ocupacional, queda reflejada la situación de aquellas mujeres que tuvieron que abandonar el mercado de trabajo para ocuparse de tareas se cuidados. A partir del segundo trimestre de 2021 se genera un aumento sustantivo de la población asalariada no registrada, siendo superior el crecimiento para las mujeres en las dos últimas mediciones.

Por último, respecto a quienes son cuentapropistas, el impacto sobre las mujeres fue similar al de varones: hubo una caída del 30% en el segundo trimestre de 2020, una desaceleración en el tercero



**Figura 11.8.** Variación porcentual interanual de la cantidad de asalariados registrados por sexo según fuente de datos. Argentina, 2019-2020. Fuente: elaboración propia en base a SIPA (Dirección de Programación Económica del MTEySS) y EPH-INDEC. Nota: para que ambas fuentes de datos sean comparables, en el caso del SIPA se agregaron las siguientes modalidades, Spu: sector público; SPr: sector privado; CP: casas particulares.

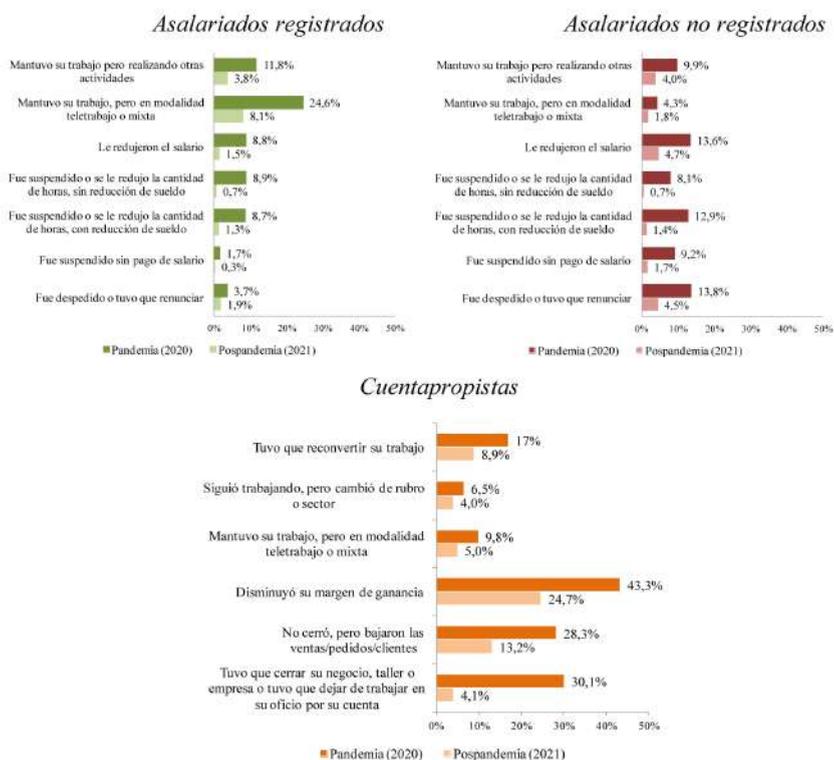
y desde el cuarto trimestre comenzó una recuperación mayor para las mujeres. Es probable que en este caso se estuviera verificando la hipótesis del trabajador(a) adicional, habida cuenta del mayor crecimiento en la tasa de empleo femenina (véase figura 11.1), que el salario real continúa en niveles muy bajos con una leve tendencia a la baja (véase figura 11.2) y que la cantidad de cuentapropistas mujeres y varones se encuentra en un récord histórico (véase figura 11.3).

Es decir, a diferencia de lo ocurrido durante 2020, es probable que los cambios ocurridos en 2021, con mayor cantidad de cuentapropistas tengan una doble fundamentación. Por un lado, parte de la población asalariada que perdió su empleo en pandemia y comenzó a realizar una actividad independiente. Por otro lado, otros integrantes del hogar que responden contracíclicamente a un salario real deprimido, que alcanzó su nivel más bajo en 2019 y como estrategia de supervivencia comienzan una actividad laboral independiente informal. De hecho, algunas familias durante 2020 tuvieron alternancia o inexistencia de ingresos por trabajo.

Esta dinámica se puede validar a través de otra fuente de datos, la Encuesta nacional sobre la Estructura social de Argentina y Políticas públicas durante la pandemia por COVID-19 (ESAyPP/PISAC-COVID-19), mediante la cual se indagó sobre la situación que vivieron las personas ocupadas en plena pandemia en 2020 y la recuperación en los meses de octubre y noviembre de 2021 (véase cuadro 11.9). En este sentido, son evidentes las diferencias entre categorías ocupacionales (asalariados registrados, asalariados no registrados e independientes).

Respecto a quienes mantuvieron su trabajo, los asalariados registrados fueron quienes tuvieron los porcentajes más elevados, ya sea al hacerlo en otras actividades (11.8 %) o en teletrabajo o modalidad mixta (24.6 %). Esos porcentajes fueron menores para los asalariados no registrados (9.9 % y 4.3 %), mientras que los trabajadores por cuenta propia tuvieron situaciones de reconversión de su trabajo (17 %), siguió trabajando en otro rubro (6.5 %) o bien a través del teletrabajo (9.8 %), lo cual está relacionado con las características propias del tipo de ocupación y, en algunos casos, la imposibilidad de realizar trabajo remoto. En 2021, en todas las categorías se redujeron esos porcentajes, lo que implica una mayor estabilidad laboral o bien, el regreso a la presencialidad.

Asimismo, entre quienes mantuvieron el trabajo, en 2020 hubo asalariados que padecieron situaciones de reducción salarial, principalmente entre los no registrados (13.6 % frente al 8.8 % de los registrados). En el caso de los cuentapropistas, la disminución del margen de ganancia afectó a casi la mitad de los trabajadores (43.3 %) y hubo quienes no cerraron sus puertas pero tuvieron disminución



**Figura 11.9.** Impacto de la pandemia en la continuidad del trabajo por categoría ocupacional (2020 y 2021). Total país. Asalariados registrados Asalariados no registrados Cuentapropistas. Fuente: elaboración propia en base a ESAyPP/PISAC-COVID-19.

de ventas o clientes (28.3 %). Estas dos últimas situaciones persistieron en 2021 aunque en la mitad de esos porcentajes (24.7 % y 13.2 % respectivamente).

En cuanto a quienes fueron suspendidos sin reducción de sueldo, se observan porcentajes similares entre asalariados registrados y no registrados (entre el 8 % y el 9 %). Sin embargo, las suspensiones con reducción de salario fueron inferiores para los primeros (8.7 % y 12.9 %, respectivamente). En ambos grupos, durante 2021 todas estas situaciones se redujeron a valores cercanos al 1 %.

Por último, los peores cambios en las situaciones laborales las padecieron en mayor porcentaje los cuentapropistas y asalariados no registrados: el 30.1 % de los cuentapropistas tuvo que cerrar su negocio, el 9.2 % de los asalariados no registrados fue suspendido sin pago de salario (frente al 1.7 % de los registrados) y el 13.8 % de esta misma categoría fue despedido o tuvo que renunciar (y solo el 3.7 %

de los registrados). En 2021 estas situaciones mejoraron aunque aún persistían las diferencias entre las tres categorías.

#### 11.4 Reflexión final

A través de este análisis ya se puede observar que la pandemia por COVID-19 actuó como un amplificador de las brechas generadas en el período anterior. El escenario laboral previo a la pandemia se encontraba deteriorado: el salario real se desplomó, cayó la proporción de asalariados registrados y aumentó la participación laboral de mujeres en actividades por cuenta propia o bien como asalariadas no registradas. Como expresan **Beccaria y Mauricio (2020)** este resultó ser un tradicional mecanismo de ajuste del empleo informal.

El impacto inmediato de la pandemia y el ASPO se dio en mayor medida sobre los grupos poblacionales que habían ganado participación en la etapa anterior, debido a que son los más desprotegidos. Al mismo tiempo, la suspensión de clases presenciales implicó un aumento del tiempo dedicado al cuidado por parte de las mujeres y las pérdidas de empleo se concentraron mayormente en sectores de alta empleabilidad femenina. Por todo ello, en este contexto el mecanismo de ajuste del sector informal no funcionó como en la etapa previa.

En 2021 la economía argentina experimentó un proceso de recuperación que ha logrado revertir en gran medida la situación recesiva ocasionada por la pandemia. En igual sentido, los indicadores laborales vienen registrando una paulatina mejora. Sin embargo, la polarización laboral aún continúa creciendo, dado que si bien ha mejorado la proporción de asalariados registrados y ha caído la cantidad de asalariados no registrados, el cuentapropismo continúa creciendo.

En suma, a medida que se van superando los efectos sobre la economía y el mercado de trabajo de la pandemia por COVID-19, irá continuando la recuperación de la actividad productiva y el empleo. En este proceso se requiere una fuerte presencia del Estado, con medidas que favorezcan la creación de puestos de trabajo formal, acompañadas de políticas de cuidado y un fuerte apoyo a todos los sectores productivos afectados. Sin estas condiciones, resulta poco probable que se recupere el nivel de vida prepandemia y menos aún, conseguir un nivel de vida digno para todo el conjunto de la población.

No obstante, hay que tener presente que este escenario está signado además por los condicionantes heredados de la gestión anterior, entre los que sobresale la abultada deuda externa, tanto con el FMI como con acreedores privados. Si bien, se llevó a cabo una reestructuración de ambos componentes, que dio como resultado un alivio significativo en los intereses y en el cronograma de pagos, la deuda

con el FMI representa un fuerte condicionante para el manejo de la economía argentina, no solo por la magnitud de los vencimientos que se deberán afrontar, sino también por el limitado margen de maniobra que el monitoreo permanente del organismo sobre la política económica.

## Referencias

ACEVEDO, IVONNE *et al.*

- 2021 *Informalidad en los tiempos del COVID-19 en América Latina: implicaciones y opciones de amortiguamiento*, BID, referencia citada en página 286.

ACTIS DI PASQUALE, EUGENIO *et al.*

- 2020 «El impacto del aislamiento social preventivo y obligatorio por COVID-19 sobre el trabajo, los ingresos y el cuidado en la ciudad de Mar del Plata», en *Trabajo y Sociedad*, vol. 21, n.º 35, págs. 83-108, referencia citada en página 270.

ARIAS, CORA CECILIA *et al.*

- 2020 «Trabajo en Cuarentena. Encuesta realizada en el marco del Proyecto Monitor Laboral COVID-19», en *CITRA*, n.º 4, referencia citada en página 270.

BARRERA, MARIANO

- 2019 «El incremento de las tarifas en servicios públicos y su peso sobre los salarios», en *CIFRA*, referencia citada en página 269.

BCRA

- 2020 *Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019*, recuperado de <<http://bcra.gov.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/Informe-Mercado-cambios-deuda-%20formacion-de-activos%20externo-%202015-2019.pdf>>, referencia citada en página 275.

BECCARIA, LUIS y ROXANA MAURICIO

- 2020 «Los impactos inmediatos de la pandemia: cuando la diferencia es entre quienes continúan percibiendo ingresos y quienes lo perdieron», en *Alquimias Económicas*, referencia citada en páginas 270, 286, 292.

CIFRA

- 2016 «Informe temático. Aumentos en las tarifas de servicios públicos», en *Centro de Investigación y Formación de la República Argentina*, referencia citada en página 272.

DALLE, PABLO y EUGENIO ACTIS DI PASQUALE

- 2021 «El impacto de la doble crisis de la prepandemia y la pandemia en las tendencias ocupacionales en Argentina (2003-2020)», en *Tramas*, n.º 15, págs. 30-48, referencia citada en página 270.

ERNST, CHRISTOPH y ELVA LÓPEZ MOURELO

- 2020 *El COVID-19 y el mundo del trabajo en Argentina: impacto y respuestas de política*, Buenos Aires: OIT, referencia citada en página 270.

GRASSO, GENARO y BRUNO PÉREZ ALMANSI

- 2017 «La industria, un barco sin timón en tiempos de cambio», en *El nuevo modelo económico y sus consecuencias*, comp. por Martín Burgos, Buenos Aires: Ediciones del CCC, págs. 167-184, referencia citada en página 269.

GRET

- 2020 *Informe Sociolaboral del Partido de General Pueyrredon*, Buenos Aires: UNMdP, referencia citada en página 270.

INDEC

- 2021 «Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos. Segundo semestre de 2020», en *Informes Técnicos*, vol. 5, n.º 4, recuperado de <[https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph\\_pobreza\\_03\\_22F5E124A94B.pdf](https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_03_22F5E124A94B.pdf)>, referencia citada en página 277.

MACEIRA, VERÓNICA

- 2020 (coord.), *El Conurbano en Cuarentena. Primero y Segundo Informes*, Buenos Aires: UNGS, referencia citada en página 270.

MANZANELLI, PABLO; DANIELA CALVO y CECILIA GARRIGA

- 2020 *Informe de coyuntura*, Buenos Aires: CIFRA, vol. 54, referencia citada en página 277.

MONTES CATÓ, JUAN y LUCAS SPINOSA

- 2020 «Macrismo con barbijo: efectos de la pandemia sobre el trabajo», en *Trabajo y derechos humanos*, vol. 5, n.º 8, págs. 117-128, referencia citada en página 270.

ODE

- 2017 *Noveno Informe de la Deuda Externa. Un seguimiento de las emisiones de deuda, la fuga de capitales y el perfil de vencimientos de la deuda desde el comienzo del Gobierno de Cambiemos*, Buenos Aires: UMET, referencia citada en página 274.

PASTRANA, FEDERICO y DAVID TRAJTENBERG

- 2020 «Las políticas anticrisis argentinas frente a un contexto inédito», en *El País*, recuperado de <<https://elpaisdigital.com.ar/contenido/las-politicas-anticrisis-argentinas-frente-a-un-contexto-indito/27085>>, referencia citada en página 286.

## CAPÍTULO 12

# Los efectos de la doble crisis en el perfil de especialización del empleo formal. Un análisis regional comparado para el período 2015-2021

MARÍA ALBINA POL,<sup>\*</sup> LOURDES BELÉN PAZ<sup>\*\*</sup> y SILVINA GALETTO<sup>\*\*\*</sup>

### 12.1 Introducción

Las dificultades de la economía argentina para sostener y generar puestos de trabajo genuinos se agudizaron como consecuencia de la pandemia. La situación de deterioro previo, los desequilibrios estructurales y las políticas implementadas por el Estado nacional generaron, entre otros efectos, una menor caída de los empleos formales frente a los informales y una posterior expansión en la que el trabajo registrado mostró una menor capacidad de recuperación (L. Beccaria y Mauricio 2020; CEPAL y OIT 2020).

Ese comportamiento no fue homogéneo en todas las ramas de la economía y evidenció además un fuerte carácter espacial asociado a las disímiles estructuras productivas que se manifiestan al interior del país y al efecto que sobre ellas tuvieron las medidas de Aislamiento y Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO y DISPO) implementadas para morigerar la expansión del virus.

Desde el enfoque adoptado, las persistentes desigualdades socioeconómicas dentro de un país son el correlato de un modelo productivo desigual y heterogéneo que se imbrica con factores territoriales para generar una estructura espacialmente desequilibrada.

---

\* Investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y del Instituto de Trabajo y Producción.

\*\* Investigadora del Instituto de Trabajo y Producción. Universidad Nacional de Cuyo.

\*\*\* Investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional de San Luis.

De ahí que la localización de las actividades económicas juega un papel fundamental en la composición y acceso al mercado de trabajo y en la dinámica de la desigualdad.

Con base en lo anterior un aspecto clave en el análisis consiste en conocer el perfil de especialización del empleo formal de las regiones del país, de modo tal de identificar los principales sectores que han traccionado la creación o destrucción de ese tipo de empleo y de reconocer las disparidades regionales que las crisis recientes han producido en relación con esos patrones.

Como señalan Trombetta *et al.* (2022) en el estudio del empleo la desagregación sectorial permite analizar la importancia de la estructura productiva en la generación de empleo. Además, para analizar la ubicación geográfica y la concentración o dispersión del empleo en cada actividad resulta importante observar comparativamente la distribución del empleo en una actividad de una región respecto a la distribución nacional. La especialización relativa brinda así una aproximación a la dinámica del empleo en aquellas actividades que, aunque no sean las principales generadoras de puestos de trabajo, inciden en las posibilidades de desarrollo de cada territorio a partir aspectos tales como las capacidades tecnológicas, los diferenciales de productividad, la interdependencia con otras actividades, la contribución a la generación de bienes exportables, etcétera.

En ese marco este capítulo tiene por objetivo analizar la evolución sectorial del empleo privado formal en las regiones argentinas durante el período 2015-2021. A partir de ello se pretende responder los siguientes interrogantes: ¿cuáles son los perfiles de especialización del empleo formal a nivel regional?, y ¿cuáles son los cambios registrados en ese fenómeno en respuesta a la doble crisis prepandemia y pandemia?

Un encuadre útil para el análisis deviene del campo de los estudios regionales que incorporan la dimensión espacial en el estudio de lo económico. De esta forma contemplan las heterogeneidades territoriales en el abordaje de diversos fenómenos, entre ellos el grado y evolución de la especialización productiva regional. Los diversos enfoques contribuyen a explicar las fuerzas que condicionan la localización económica en determinados espacios geográficos. Algunas corrientes se enfocan en la acumulación de capacidades tecnológicas y productivas (Dosi *et al.* 1990; López 1996), o en la existencia de fuerzas aglomeradoras alrededor de determinados sectores predominantes (Fujita y Krugman 2004; Krugman 1998). Otros análisis proponen como principales factores explicativos la dotación de recursos tangibles (infraestructura) e intangibles (mercado de trabajo, conocimiento, instituciones) (Boschma y Capone 2015; Lawson 1999).

Los antecedentes empíricos analizados (Jaramillo *et al.* 2017; Keogan *et al.* 2020; Mazorra y A. Beccaria 2007; Niembro y Cala 2021) señalan para el caso argentino la profunda heterogeneidad que caracteriza al sistema productivo nacional tanto en términos de actividades como de competitividad. Estas disparidades han conformado un escenario que se manifiesta en la configuración de áreas centrales y áreas periféricas. Las primeras incluyen a los centros urbanos de mayor tamaño y presentan una estructura del empleo compleja y diversificada que se refleja en muchas especializaciones, principalmente vinculadas a actividades industriales y con mayor contenido tecnológico. Las áreas periféricas si bien comprenden aglomerados urbanos de menor tamaño, en general, configuran su perfil de especialización en torno a la explotación de recursos naturales o a actividades que dependen de ellos. En términos de empleo, presentan una clara orientación hacia las actividades productoras de bienes con una mayor concentración de la ocupación tanto en el sector primario como en la industria manufacturera asociada.

Al mismo tiempo estos estudios observan que la especialización productiva regional crece en períodos de crisis cuando se trata de una actividad del sector primario mientras que en las actividades industriales cae o se mantiene estable. Esto implica que el empleo de cada región, ante la existencia de *shocks* exógenos, tiende a concentrarse en las actividades tradicionales de cada espacio geográfico.

En cuanto a los efectos económicos de la pandemia, los resultados obtenidos por Niembro y Cala (2021)<sup>[1]</sup> revelan un mayor impacto de la crisis sobre las áreas económicas de la provincia de Buenos Aires, principalmente las especializadas en turismo y en varias industrias (no esenciales) que se vieron fuertemente restringidas. La afectación también fue significativa en algunas provincias de la Patagonia que poseen un perfil extractivo de recursos naturales, como petróleo y minerales, actividades que se vieron limitadas tanto por la pandemia como por la crisis sectorial en el caso de los hidrocarburos. En el otro extremo, observan que la especialización en sectores agropecuarios y de alimentos fue esencial para minimizar los efectos de la pandemia, por lo que el impacto económico inicial fue algo más reducido en algunas provincias del norte del país, Cuyo y la región Pampeana.

[1] Los autores construyen un índice de «afectación» económica territorial por COVID-19 (IAET-COVID) que tiene en cuenta: a) la estructura productiva de las diferentes AEL en términos de empleo asalariado registrado en el sector privado; b) el grado de operatividad de cada sector; c) la movilidad de los trabajadores en las diferentes AEL y, d) la posibilidad de trabajo remoto en las distintas actividades. El cálculo toma como unidad espacial de referencia la Áreas Económicas Locales (AEL) del MTEySS (Niembro y Cala 2021).

Esos antecedentes permiten formular algunas respuestas tentativas a los interrogantes que guían el presente capítulo. La hipótesis de trabajo sostiene que el modelo económico y social implantado a partir de 2015, que benefició la especulación financiera del sector externo en detrimento de las actividades productivas orientadas al mercado interno, impulsó un proceso de mayor pérdida relativa de empleos formales de los sectores no tradicionales, especialmente de la industria. Esa dinámica se manifestó en una retracción de la diversificación del empleo formal en las regiones centrales del país y en una tendencia a la reprimarización en las regiones periféricas. En la etapa posterior, a pesar de la magnitud de la crisis económico-sanitaria desatada por la pandemia, el carácter inédito que asumió el funcionamiento de las actividades económicas sumado a la implementación de medidas de sostenimiento del trabajo registrado y de protección de la industria resultaron en un proceso que incentivó la diversificación relativa del empleo formal en la mayoría de las regiones del país.

Este trabajo propone un abordaje empírico para el que se aplica una metodología de tipo descriptiva que se basa en el cálculo de indicadores de especialización relativa del empleo formal para cada una de las regiones argentinas delimitadas de acuerdo con la agrupación geográfica propuesta en el marco del proyecto PIRC-ESA.<sup>[2]</sup> La principal fuente de información son los datos de empleo asalariado registrado del sector privado que elabora el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo de la Nación.

El capítulo se organiza de acuerdo con la siguiente estructura. En el siguiente apartado se describe la evolución y composición sectorial del empleo formal en el país y las regiones en el lapso 2015-2021. En la segunda sección se presenta la metodología para la medición de la especialización regional. En el tercer apartado se describen los resultados del análisis. Finalmente, se exponen las tendencias de cambio observadas en los patrones regionales de especialización del empleo formal en el período bajo estudio.

---

[2] El criterio adoptado distingue siete regiones: 1) Gran Buenos Aires (CABA y partidos del GBA), 2) Pampeana (resto de la provincia de Buenos Aires y La Pampa), 3) Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) 4) Noroeste (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán), 5) Nordeste (Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones), 6) Cuyo (San Juan, San Luis y Mendoza) y 7) Patagonia (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego). Vale aclarar que, si bien la referencia a las grandes regiones supone un nivel de agregación muy elevado que aglutina importantes heterogeneidades, en concordancia con los objetivos del proyecto se pretende una primera aproximación a las disparidades espaciales haciendo foco en el impacto de la pandemia y la crisis previa.

## 12.2 Evolución y composición sectorial del empleo formal

En este apartado se describe, a modo de contexto, el desempeño del empleo privado registrado en el país y en cada una de las regiones durante el período 2015-2021. Interesa especialmente observar la evolución sectorial del empleo formal y sus variaciones en los subperíodos 2015-2019 y 2019-2020/21<sup>[3]</sup>

De acuerdo con los datos analizados, la distribución del empleo registrado entre las regiones del país no experimentó cambios significativos entre 2015 y 2021. Las áreas de mayor tamaño, Gran Buenos Aires, Centro y Pampeana, concentran alrededor del 75 % de los puestos de trabajo formales, el resto se distribuye en proporciones relativamente similares entre las demás regiones.

Las variaciones porcentuales en el volumen de asalariados/as formales (véase figura 12.1) a lo largo del período, evidencian que la crisis del COVID-19 profundizó la contracción iniciada en la etapa previa, tendencia que logró revertirse en 2021 con un proceso de notable recuperación, aunque insuficiente para alcanzar los niveles previos a la pandemia.

La información para cada momento muestra que entre el cuarto trimestre de 2015 e igual trimestre de 2019, si bien el empleo registrado se mantuvo en niveles similares, el número de trabajadores/as se retrajo a nivel nacional 2.9 % (-190 244 puestos). La orientación de las medidas económicas provocó que las mayores pérdidas de empleos se produjeran en el sector de la industria manufacturera que arrojó una caída total de 11.9 %, seguida por la construcción (-6 %) y los servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler (-5.7 %).

Por su parte, en 2020, aunque las políticas implementadas por el gobierno nacional hicieron que el trabajo formal sufriera un menor impacto recesivo, el número de asalariados/as privados/as registrados/as experimentó una caída anual del 4.2 % (-272 875 puestos). Si bien la mayor parte de esa retracción se produjo durante el segundo trimestre, en la segunda mitad del año el nivel de empleo privado registrado continuó en una trayectoria de leve contracción. Los sectores más afectados por la pérdida de empleos formales fueron construcción (-18.7 %), hoteles y restaurantes (-18.3 %) y servicios comunitarios, sociales y personales (-6 %). Cabe señalar que el empleo en el sector de explotación de minas y canteras cayó 8.3 % durante el

[3] Para una mejor comprensión de las condiciones macroeconómicas y estructurales del período analizado y su efecto sobre el empleo registrado se sugiere la revisión del capítulo: «El impacto de la doble crisis prepandemia y pandemia sobre el mercado laboral argentino» (Actis Di Pasquale, Gallo y Capuano).

primer año de la pandemia,<sup>[4]</sup> pero su peso en el conjunto del empleo registrado del país es de solo 1.3 %.

Finalmente, en 2021<sup>[5]</sup> la recuperación económica que tuvo lugar a lo largo del año permitió recobrar la mayor parte de los empleos registrados perdidos en la etapa más álgida de la pandemia. Según los datos analizados el empleo privado formal logró un incremento anual de 3.5 % (+213 428 puestos) para el conjunto del país. En el tercer trimestre del año<sup>[6]</sup> de los 14 sectores de actividad 11 habían experimentado variaciones interanuales positivas, los que más crecieron fueron construcción (18.6 %), servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler (5 %) e industrias manufactureras (2.7 %). En este caso el sector pesca y servicios conexos creció 8.8 % pero su incidencia en el empleo formal alcanza solo el 0.2 % del total. Los sectores que continuaron con una trayectoria de caída en el número de asalariados/as formales durante el último año fueron hotelería y restaurantes (-6.9 %), transporte, almacenamiento y comunicaciones (-1.1 %) e intermediación financiera y otros servicios financieros (-1 %).

En términos regionales el desempeño del empleo privado formal durante el período 2015-2021 evidenció algunas particularidades (véase figura 12.1). Tanto en las provincias patagónicas como en el Nordeste la retracción en el número de trabajadores/as registrados/as fue más significativa durante la primera etapa (2015-2019), con movimientos dispares en los diferentes momentos. Las provincias del sur experimentaron una importante caída en el empleo entre 2015 y 2016, producto de la destrucción de puestos de trabajo en la manufactura, la construcción y servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler.<sup>[7]</sup> A partir de allí y hasta 2019 el número de trabajadores/as formales de la región tendió a estabilizarse. En el

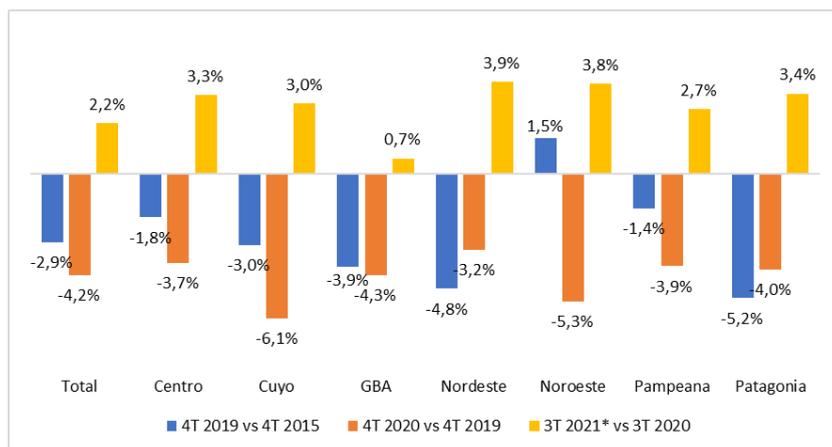
[4] Durante 2020, las actividades de petróleo y minerales se vieron limitadas tanto por la pandemia como por la crisis sectorial en el caso de los hidrocarburos.

[5] Dato provisorio del 4T 2021, solo disponible para el total nacional.

[6] Los últimos datos publicados por el OEDE-MTEySS con desagregación sectorial y regional corresponden al 3T 2021.

[7] En el sector manufacturero, la caída en el empleo formal se vio explicada principalmente por la industria electrónica de Tierra del Fuego producto de la quita de aranceles a las importaciones y la paralización del programa nacional Conectar Igualdad. La disminución en el sector de la construcción se dio en todas las provincias de la región, sobre todo en Santa Cruz y Neuquén, como resultado del freno en la obra pública y privada, y por la desaparición de planes como el Procrear, que fueron relanzados, pero no tenían como destino la construcción sino la compra de viviendas. Finalmente, la pérdida de empleos en la actividad de servicios inmobiliarios se dio en mayor medida en la provincia de Santa Cruz, y la caída en servicios jurídicos,

Nordeste el empleo registrado se contrajo en 2016 principalmente por la pérdida de puestos de trabajo en construcción y servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler y creció en 2017 esta vez impulsado por el sector de la construcción pero también por un considerable incremento en comercio y enseñanza.



**Figura 12.1.** Variaciones relativas del empleo privado registrado por regiones y total país. Períodos 4T 2019/4T 2015, 4T 2020/4T 2019 y 3T 2021/3T 2020. \* Último dato disponible al 27/06/2022. Fuente: elaboración propia en base a datos construidos por el OEDE-MTEySS a partir del SIPA.

En el año 2018, en un contexto de marcado deterioro económico, el conjunto del empleo registrado inició en todas las regiones – excepto en el Noroeste – una trayectoria descendente. En las áreas de mayor tamaño Centro, Cuyo, Gran Buenos Aires y Pampeana esa evolución estuvo explicada principalmente por la destrucción de empleos en la industria manufacturera; en el Nordeste por la caída en la construcción y en Patagonia la mayor pérdida de empleos se produjo en el comercio, aunque fue una retracción leve en comparación con el resto de las regiones. Las provincias del Noroeste también experimentaron una retracción del empleo industrial, no obstante, el incremento de puestos en agricultura, ganadería, caza y silvicultura compensó esa caída y determinó un aumento en el total del empleo de la región, tendencia que se revirtió al año siguiente.

Por su parte, en 2020 todas las regiones del país experimentaron una retracción en el empleo privado formal mostrando comportamientos disímiles de acuerdo con las dinámicas económicas propias de cada área y al efecto de las medidas implementadas a causa de

contables y otros servicios a empresas en todas las provincias de la región, menos en Neuquén.

la pandemia. En este sentido, cabe destacar que Cuyo fue la región que mostró la peor *performance*, con una caída interanual de 6.1 % en el nivel de empleo privado formal y variaciones negativas del 9.6 % y del 8.5 % en el segundo y tercer trimestre respectivamente, valores muy por encima del resto del país. Esto se debió, por un lado, a que fue la región donde más se retrajo el empleo de la construcción (principal sector afectado en todas las regiones) y, por otro lado, a la importante pérdida de empleos registrados en la agricultura. La región Noroeste fue la segunda con mayor contracción interanual al alcanzar una variación negativa de 5.3 % y el Nordeste la que menos perdió con -3.2 %. Las demás regiones (Centro, Pampeana, Patagonia y Gran Buenos Aires) tuvieron caídas cercanas al 4 %. El sector de la construcción fue el que más contribuyó en la pérdida de empleos formales en todas las regiones, luego, hotelería y restaurantes en Cuyo, Gran Buenos Aires, Nordeste y Pampeana; enseñanza en la región Centro; agricultura, ganadería, caza y silvicultura en el Noroeste y explotación de minas y canteras en la Patagonia.

Finalmente, durante el año 2021, la recuperación económica y la normalización de las actividades impulsaron el crecimiento del empleo formal en el conjunto de las regiones del país en magnitudes cercanas al 3 % interanual, a excepción de Gran Buenos Aires donde la expansión fue de apenas 0.7 %. El sector de la construcción, junto con servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler, aparecen como los principales motores de creación de puestos de trabajo registrados. Al mismo tiempo, el crecimiento del empleo industrial fue significativo en cinco de las siete regiones (en Noroeste aumentó 0.1 % y en Patagonia cayó 0.9 %). Las provincias del norte del país fueron las que experimentaron las mayores tasas de incremento del empleo registrado. Además de la construcción, explican esa tendencia la agricultura y ganadería en el caso del Noroeste, y el comercio y la industria en el Nordeste. En Patagonia, la explotación de minas y canteras y el comercio también contribuyeron considerablemente a la expansión del empleo formal de la región.

La evidencia analizada pone de manifiesto las disparidades regionales en el desempeño del empleo privado formal durante el período 2015-2020. La comparación punta a punta – cuartos trimestres – muestra una reducción del 7 % en el número total de asalariados/as formales del sector privado para el conjunto nacional (-463 119 puestos) . Si bien todas las regiones mostraron la misma tendencia, la caída fue de mayor magnitud en Patagonia y Cuyo y menos significativa en el Nordeste y el Gran Buenos Aires. Por su parte, en el 2021, hubo una recuperación del empleo en todas las regiones, siendo de mayor alcance en las provincias del norte argentino y de menor magnitud en el Gran Buenos Aires.

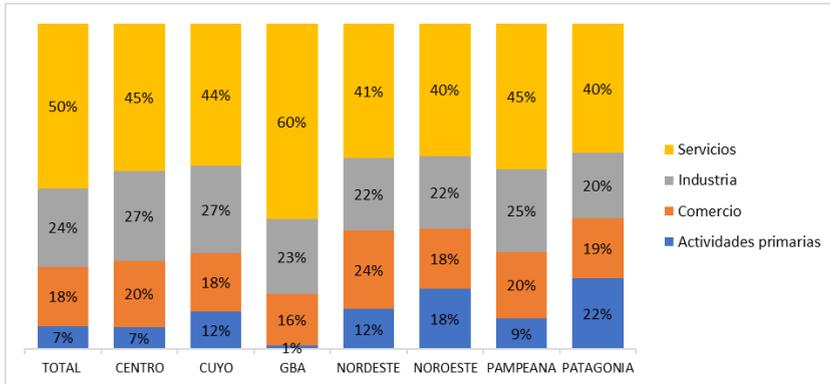
Durante los subperíodos 2015-2019 (prepandemia) y 2019-2020 (pandemia) el desempeño del empleo privado registrado fue también negativo en todas las regiones, aunque con diferencias en las magnitudes. La recuperación observada en 2021 parece, en cambio, presentar una mayor homogeneidad interregional. Ese comportamiento responde a las disparidades en los cambios del nivel de empleo registrado para cada sector en los diferentes momentos y a los patrones que asume la distribución intersectorial del empleo en cada región.

De esta manera, a partir de la dinámica reseñada y con base en los datos correspondientes al año 2020 (promedios anuales), se describe a continuación la composición sectorial del empleo privado registrado a nivel nacional y regional.

La información analizada muestra que en el conjunto del país la mitad del empleo privado formal se concentra en las actividades de servicios, sector que ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años. Le siguen en importancia la industria manufacturera, cuya participación ha manifestado una tendencia de constante caída en la etapa reciente, y el comercio. La rama con mayor peso en el empleo registrado de cada sector es respectivamente: servicios jurídicos, contables y otros, alimentos y venta al por menor.

En términos regionales (véase figura 12.2), la concentración del empleo formal en el sector servicios es significativamente mayor en Gran Buenos Aires que en el resto del país. Por su parte, Patagonia, Noroeste, Cuyo y Nordeste presentan una alta incidencia de las actividades primarias como generadoras de puestos de trabajo formales. Atributos estos ya señalados por otros/as autores/as (Keogan *et al.* 2020; Mazorra y A. Beccaria 2007) en relación con la composición del empleo en las regiones centrales y las regiones periféricas del país. Por su parte, Centro, Cuyo y la región Pampeana exhiben una importante participación de la industria manufacturera en el nivel de empleo formal.

En este punto cabe mencionar que si bien existe una relación entre la composición productiva de cada área y la distribución sectorial del empleo formal, las características de determinados sectores en términos de intensidad del uso de mano de obra y de informalidad laboral podrían implicar que existan diferencias entre las actividades que definen el perfil productivo de una región con aquellas que tienen una mayor participación en la estructura del empleo formal. Un caso que puede dar cuenta de esto es la región Centro, donde el sector agropecuario tiene un peso significativo en la estructura productiva, pero su incidencia en la distribución del empleo formal no es tan relevante debido en parte a su baja intensidad de uso de mano de obra.



**Figura 12.2.** Distribución sectorial del empleo privado registrado según regiones. Argentina, 2020. Nota: para la elaboración de este gráfico se agruparon los sectores de actividad de la siguiente manera: Actividades primarias: agricultura, ganadería, caza y silvicultura; pesca y servicios conexos; explotación de minas y canteras. Comercio: comercios al por mayor y al por menor. Industria: industrias manufactureras; construcción. Servicios: Electricidad, gas y agua; enseñanza; hotelería y restaurantes; intermediación financiera y otros servicios financieros; servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p.; Servicios de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones; servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler; servicios sociales y de salud. Fuente: elaboración propia en base a datos construidos por el OEDE-MTEySS a partir del SIPA.

Si se observa la composición de cada uno de los grandes sectores se obtiene que en servicios las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler representan entre el 8 % del empleo formal para el caso de Patagonia y el 19 % en Gran Buenos Aires. A su vez, dentro de esa categoría, la mayor proporción del empleo registrado a nivel regional se concentra en la rama servicios jurídicos, contables y otros servicios a empresas, con una menor participación en Gran Buenos Aires y la región Pampeana, donde las actividades de informática y servicios inmobiliarios adquieren un peso significativo al aglutinar cada una más del 15 % del empleo del sector.

En cuanto a la industria, que tiene una participación en el empleo formal que varía entre el 27 % (Centro y Cuyo) y el 20 % (Patagonia), la manufactura de alimentos es la principal generadora de puestos de trabajo registrados en todas las regiones. En el Noroeste y en Cuyo esa actividad representa más del 50 % de los empleos del sector, en Gran Buenos Aires, en cambio, adquiere un peso menos significativo. En el resto del sector, tal como señalan [Jaramillo et al. \(2017\)](#) y [Keogan et al. \(2020\)](#), las áreas centrales tienen distribuido el empleo en una mayor cantidad de ramas y en industrias de mayor complejidad

tecnológica, en las demás regiones el empleo se aglutina en una menor diversidad de ramas mayormente asociadas a la explotación de los recursos naturales disponibles.

De esta manera, además de la industria alimenticia, en Gran Buenos Aires y la región Pampeana el empleo manufacturero se distribuye principalmente en cuatro ramas: otros productos de metal, productos de caucho y plástico, productos químicos y productos textiles; automotores, metales comunes, otros productos de metal y productos químicos, respectivamente. En las provincias del Centro y Cuyo en tres ramas: automotores, maquinaria y equipo y otros productos de metal; y otros minerales no metálicos, otros productos de metal y productos químicos. En Patagonia en dos ramas: radio y televisión y maquinaria y equipo. Finalmente, en las regiones Noroeste y Nordeste el empleo manufacturero se aglutina en una rama: productos textiles y madera, respectivamente.

El sector comercio, por su parte, explica entre el 16 % y el 24 % del empleo formal para los casos de Gran Buenos Aires y la región Nordeste respectivamente. Dentro de ese sector la venta al por menor es la que concentra el mayor porcentaje de puestos de trabajo, con valores que oscilan entre el 50 % y el 60 % del empleo sectorial en todas las regiones, excepto en las provincias del área central, donde, dado el mayor peso de la venta al por mayor, este valor alcanza el 46 %.

Por último, las actividades primarias aportan entre el 22 % (Patagonia) y el 7 % (Centro) del empleo formal regional. El significativo peso de esas actividades en la estructura del empleo de las regiones Noroeste, Pampeana, Cuyo y Nordeste está mayormente explicado por la rama agricultura y ganadería. Solo en las provincias patagónicas la explotación de minas y canteras es uno de los principales sectores generadores de puestos de trabajo formales con un aporte del 12 % al total del empleo de la región. La rama de actividad que concentra el mayor número de asalariados/as registrados/as es, en este caso, la extracción de petróleo crudo y gas natural, con una participación del 85 % en el sector.

En líneas generales, se observa que en todas las regiones del país son prácticamente las mismas actividades las que tienen una participación significativa en el empleo formal (industria de alimentos, venta al por menor, servicios jurídicos, contables y otros) aunque se advierten especificidades propias de cada área. Para dar cuenta de esas particularidades y conocer su comportamiento se profundiza a continuación en el estudio del grado y tipo de especialización del empleo formal en cada región y su evolución a lo largo del período 2015-2021. Antes de presentar los resultados se describe la metodología aplicada para la medición.

### 12.3 Metodología

Para analizar los patrones de especialización del empleo a nivel regional se aplicó una metodología descriptiva basada en el cálculo de índices elaborados a partir de los datos de empleo asalariado registrado del sector privado. Se construyó un conjunto de coeficientes de especialización regional<sup>[8]</sup> que comparan el tamaño relativo de un sector – en términos de empleo privado formal – en cada región con el tamaño relativo del mismo sector a nivel nacional (especialización relativa o interregional). Estos indicadores expresan cuanto representa el empleo formal de una actividad determinada en una región comparada con la proporción de la misma actividad a nivel nacional y permiten identificar en qué ramas de actividad se encuentra especializado el empleo formal de una región en relación con el total país. Las ramas de especialización son aquellas en las que el coeficiente es mayor a 1. El valor del índice indica para cada región cuántas veces más empleo existe en esa rama respecto al total del país.<sup>[9]</sup>

Expresión de la fórmula de cálculo:

$$ESP_{i,r} = \frac{\frac{E_{i,r}}{E_r}}{\frac{E_{i,N}}{E_N}}$$

Donde  $ESP_{i,r}$  es el cociente entre dos participaciones relativas:  $E_{i,r}$  representa el empleo de la actividad «i» en la región «r»;  $E_r$  el total del empleo en la región «r»;  $E_{i,N}$  el empleo de la actividad «i» en el país «N» y  $E_N$  el empleo total del país «N».

Para el cálculo de los coeficientes se utilizaron los datos de empleo asalariado registrado del sector privado elaborados por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS), con una desagregación a nivel de rama de actividad (2 dígitos), y se calcularon para los años 2015, 2019 y 2021. Con el propósito de advertir los cambios en el perfil y grado de especialización del empleo registrado a nivel regional se puso especial atención en la comparación entre 2015 y 2021.

[8] Se toman como antecedentes los trabajos de [Keogan et al. \(2020\)](#) y [Rojo y Rotondo \(2006\)](#), entre otros, que utilizan la metodología de cálculo de coeficientes de especialización regional en base a datos de empleo privado registrado para el análisis de la estructura productiva al interior del país.

[9] Es importante destacar que este índice posee como limitación la posibilidad de que los cambios en la estructura del empleo de una región no se expliquen por una mayor o menor especialización, sino por variaciones en el resto de las regiones. Sin embargo, resulta una estrategia válida a partir de la disponibilidad de datos públicos y la comparabilidad que genera.

Dado que el empleo de una región puede estar especializado en numerosas actividades, a los fines de clarificar la exposición de resultados, en este análisis se toman solo las dos o cuatro especializaciones con índices de mayor valor para cada región. Además, se considera el criterio de seleccionar solo aquellas ramas productivas que sean relevantes para la región (cuyo empleo represente al menos el 1 % del empleo total). De esta manera, el empleo de una región se encuentra más diversificado cuando los puestos de trabajo se especializan en un mayor número de ramas.

## 12.4 Resultados

### 12.4.1 Evolución de los perfiles de especialización regional del empleo formal

La especialización del empleo regional se encuentra estrechamente vinculada con factores estructurales de la economía, razón por la cual es esperable que sus variaciones puedan evidenciarse en períodos de mediano y largo plazo. En este sentido, se considera necesario y relevante para los objetivos de este estudio analizar el lapso 2015-2021 a fin de identificar algunas tendencias de cambios estructurales en el empleo formal. A partir de ello en esta sección se describen las variaciones observadas en la especialización de las regiones argentinas durante esos años como resultado de la dinámica caracterizada en el primer apartado y a partir de los coeficientes construidos en base a la distribución sectorial del empleo privado formal. También, considerando las diferencias sustanciales que presentaron las crisis prepandemia y pandemia, se observan los cambios de la especialización regional durante los subperíodos 2015-2019 y 2019-2021.

Cabe destacar que el análisis se centra en la especialización relativa o interregional que compara el tamaño relativo de un sector en cada región con el tamaño relativo del mismo sector a nivel nacional. Es decir, el coeficiente indica cuántas veces más empleo formal genera una rama de actividad en la región respecto de lo que genera a nivel nacional. Por esa razón pueden no coincidir las actividades de mayor especialización relativa con aquellas que tienen una mayor participación en el total del empleo formal de la región (especialización absoluta) o con las que son más relevantes en términos de generación de valor agregado.

En esta primera parte del análisis de la especialización, lo que se hizo fue observar para cada región y año (2015-2019-2021) en cuántas ramas de actividad el coeficiente de especialización era mayor a 1 respecto de las 56 ramas consideradas en este trabajo y luego se

analizó cómo habían sido esos cambios en la primera etapa y segunda etapa.<sup>[10]</sup>

La figura 12.3 representa la intensidad de la especialización del empleo formal de las regiones para el año 2021. La escala de la especialización expresada se lee de la siguiente manera, la mayor intensidad del color significa que el empleo de la región se especializa en una menor cantidad de ramas, es decir, la concentración de la especialización es mayor. Mientras que a medida que el color es más claro, la cantidad de ramas en las que se especializa una región es mayor y, por lo tanto, presenta una estructura del empleo formal relativamente más diversificada.



**Figura 12.3.** Intensidad de la especialización del empleo formal por regiones. Argentina, 2021. Fuente: elaboración propia en base a datos construidos por el OEDE-MTEySS a partir del SIPA.

[10] Para definir si una región tiene tendencia a una mayor especialización o diversificación productiva se tomó como criterio la variación negativa o positiva en la cantidad de ramas en las que se especializa la región (coeficiente mayor a 1) durante el período analizado (véase anexo).

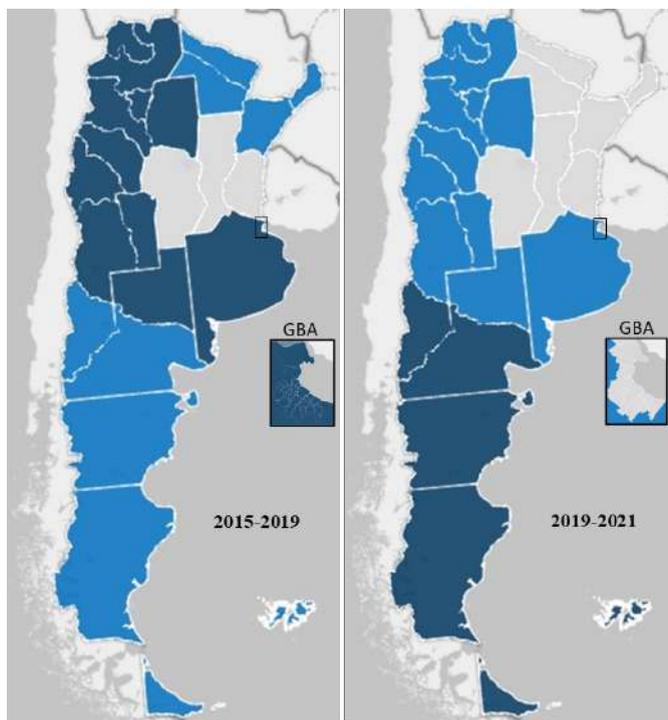
Se advierte que las regiones Gran Buenos Aires y Pampeana son las que se encuentran más diversificadas, mientras que el mayor grado de especialización se presenta en las provincias del Noroeste. De acuerdo con *Keogan et al. (2020)*, la diversificación productiva de las regiones Gran Buenos Aires y Pampeana se explica por la presencia de economías de aglomeración, asociadas a las economías de escala, los menores costos de transporte, mayor variedad de bienes y servicios, etcétera. Por otra parte, la inmovilidad de las actividades relacionadas a recursos naturales constituye un determinante de la especialización del resto de las regiones.

En la figura 12.4 se presentan dos mapas con los cambios en la intensidad de la especialización para los períodos 2015-2019 y 2019-2021. Se hace referencia a concentración de la especialización cuando la cantidad de ramas especializadas en una región disminuye y a diversificación cuando la cantidad de especializaciones aumenta. A simple vista es posible advertir que la mayoría de las regiones revierte su tendencia entre un período y otro, por lo tanto la magnitud de los cambios en cada etapa determina finalmente la concentración o diversificación regional entre 2015 y 2021 que se describe a continuación.

Si bien el análisis realizado muestra que Gran Buenos Aires es el área que presenta un mayor nivel de diversificación del empleo formal, al comparar los valores de 2015 y 2021, se observa una tendencia a la pérdida de diversificación en esa región, ya que cae la cantidad de ramas en las que se especializa. Las actividades que dejaron de tener un coeficiente mayor a 1 a lo largo del período son las industrias de confecciones, edición e impresión y automotores, y los servicios de agencias de empleo eventual y los servicios n.c.p.

Por el contrario, el Nordeste, la Patagonia y la región Pampeana experimentaron un incremento en la cantidad de ramas en las que se especializan, lo que puede indicar una tendencia a la diversificación del empleo registrado en esas regiones. Esto se da en mayor proporción para las provincias del Nordeste, donde la industria de alimentos, el comercio al por mayor y la enseñanza fueron las actividades que pasaron a tener un coeficiente de especialización mayor a 1. A su vez, en la Patagonia, fue el servicio de transporte ferroviario y automotor y por tuberías el que se incorporó al grupo de actividades en las que se especializa la región. En el caso del área Pampeana se sumaron tres actividades, los servicios de las agencias de empleo eventual y transporte ferroviario y automotor y por tuberías y la industria de otros productos de metal; y se bajaron dos, servicios de hotelería y restaurantes, y servicios culturales, deportivos y de esparcimiento.

Por su parte, en las regiones Centro, Noroeste y Cuyo se mantuvo sin cambios la cantidad de ramas especializadas. No obstante,



**Figura 12.4.** Cambios en la intensidad de la especialización del empleo formal por regiones. Argentina, 2015-2021 (años seleccionados). Azul oscuro: concentración. Azul claro: diversificación. Gris: sin cambios. Fuente: elaboración propia en base a datos construidos por el OEDE-MTEySS a partir del SIPA.

Noroeste y Cuyo han registrado una variación en la composición de ramas que conforman su especialización. Entre 2015 y 2021, en el Noroeste la actividad intermediación financiera y otros servicios financieros dejó de ser una rama en la que se especializa la región, sumándose la rama servicios de transporte ferroviario y automotor y por tuberías. Por su parte, Cuyo dejó de estar especializada en extracción de petróleo crudo y gas natural y servicios n.c.p, y sumó los servicios de hotelería y restaurantes y enseñanza.

Estos cambios que se observan en la comparación de las especializaciones 2015-2021, presentan un comportamiento dispar al desagregar los análisis en los subperíodos 2015-2019 y 2019-2021 (véase figura 12.4). En el primero, cuatro regiones presentaron una tendencia a la concentración de la especialización (Gran Buenos Aires, Pampeana, Cuyo y Noroeste), dos a la diversificación (Nordeste y Patagonia) y una se mantuvo constante (Centro). En el segundo

subperíodo, en cambio, una región tendió a la concentración de la especialización (Patagonia), tres a la diversificación (Pampeana, Cuyo y Noroeste) y tres se mantuvieron sin cambios (Gran Buenos Aires, Nordeste y Centro). Estos resultados se condicen con la hipótesis planteada, en tanto que durante los años del gobierno de la Alianza Cambiemos se da un proceso de deterioro de la diversificación de la estructura del empleo formal en la mayoría de las regiones; mientras que a partir del 2020, y a pesar de la pandemia, se registra un cambio de tendencia que en varias regiones se traduce en un proceso de diversificación.

En síntesis, las regiones con mayor diversificación del empleo formal en términos de ramas de actividad son Gran Buenos Aires y Pampeana. La primera de ellas con una tendencia a la pérdida de diversificación en el período 2015-2021, que se da principalmente en la primera etapa (prepandemia) como consecuencia de la caída del empleo sobre todo en ramas industriales con menor peso (no tradicionales). Se advierte, además, una gran participación del sector servicios en la composición del empleo regional: el 75 % de las ramas de especialización corresponden a dicho sector. En la región Pampeana, en cambio, en el empleo se distribuye más equitativamente entre industria (40 %) y servicios (33 %), por lo que la tendencia a la diversificación que se dió en la segunda etapa (2019-2021) estuvo asociada a la recuperación de la industria principalmente de actividades no tradicionales. Por otro lado, tres de las regiones con mayor especialización no tuvieron cambios en el período analizado, Noroeste, Centro y Cuyo. A su vez, la región Nordeste con una tendencia a la diversificación pasó unirse con Patagonia en una posición intermedia entre ambos extremos. La particularidad del proceso de diversificación de estas dos regiones entre los años 2015-2019 es que pudo verse explicado por la pérdida de empleos en actividades en las que ya estaban especializadas (construcción y radio y televisión, respectivamente).

En este punto se estudió la intensidad de la especialización del empleo a nivel regional a partir de observar la cantidad y tipo de actividades que la componen. Para caracterizar los patrones de especialización de cada región e identificar posibles impactos de las crisis prepandemia y pandemia en la estructura del empleo formal, se analizan a continuación los valores que alcanzan los coeficientes en las actividades identificadas y sus variaciones en el tiempo.

Cuanto mayor es el valor del coeficiente de especialización de una determinada rama mayor es el grado de especialización de esa rama en la región. Teniendo en cuenta que los cambios en los coeficientes pueden deberse a variaciones del empleo del sector en otras regiones, se consideran significativos solo aquellos que sean superiores a  $\pm 5\%$ .

**Cuadro 12.1. Coeficientes de especialización de las ramas de actividad con mayor coeficiente de especialización en 2021 según región. Argentina, 2015-2021.**

Región	Sector	Rama	2015	2019	2021
CENTRO	Industria	Maquinaria y equipo	2.04	2.06	2.17
	Industria	Automotores	1.94	1.96	1.92
CUYO	Industria	Otros minerales no metálicos	1.95	1.82	1.83
	Industria	Alimentos	1.89	1.73	1.74
	Primario	Agricultura y ganadería	1.88	1.68	1.58
GBA	Servicios	Actividades de informática	1.82	1.79	1.82
	Servicios	Servicios inmobiliarios	1.40	1.57	1.62
NORDESTE	Primario	Silvicultura, extracción de madera	13.98	15.01	14.12
	Industria	Madera	7.76	8.16	8.11
NOROESTE	Primario	Agricultura y ganadería	2.88	3.25	3.14
	Industria	Alimentos	1.53	1.50	1.51
PAMPEANA	Industria	Metales comunes	2.27	2.31	2.31
	Servicios	Electricidad, gas y agua	2.08	1.95	1.93
PATAGONIA	Primario	Extracción de petróleo crudo y gas natural	11.00	10.43	10.66
	Industria	Radio y televisión	10.61	9.75	10.65
	Primario	Pesca y actividades relacionadas con la pesca	10.04	10.13	10.51
	Primario	Extracción de minerales metálicos	7.59	8.21	8.23

Fuente: elaboración propia en base a datos construidos por el OEDE-MTEySS a partir del SIPA.

Al observar los coeficientes expuestos en el cuadro 12.1, se advierte que las regiones Patagonia y Nordeste son las que presentan un mayor grado de especialización (coeficientes más altos) en sus respectivas actividades, las cuales se encuentran principalmente asociadas a la disponibilidad de recursos naturales. Esto se condice con la concentración del empleo formal de estas actividades en dichas regiones, dado que en las provincias del sur se ubica el 72 % del total de puestos de trabajo de extracción de petróleo crudo y gas natural, el 72 % de los de industria de radio y televisión, el 71 % de pesca y actividades relacionadas con la pesca y el 55 % de extracción de minerales metálicos. En el Nordeste, por su parte, se encuentra el 66 % de los empleos formales de silvicultura y extracción de madera y el 38 % de la industria maderera.

En cuanto a las variaciones del índice de especialización, en ambas actividades de la región Nordeste se observa una variación positiva

del coeficiente en el período 2015-2019, que podría entenderse como una tendencia hacia una especialización aún mayor del empleo registrado en esas actividades. En el caso de las provincias del sur, se advierte una variación negativa para la extracción de petróleo crudo y gas natural y de la industria de radio y televisión; y un aumento en el coeficiente de extracción de minerales metalíferos. Esta dinámica estaría dando cuenta de un proceso de reprimarización, entendido como aquel en el que la especialización del empleo en las actividades primarias se incrementa frente a la caída de la especialización en actividades industriales o a un aumento relativamente menor de estas. Cabe destacar la excepción que en este caso implica la extracción de petróleo crudo y gas natural, una actividad en crisis desde hace varios años.<sup>[11]</sup> Por su parte, en el período 2019-2021, hubo cambios significativos a la baja en el coeficiente de silvicultura y extracción de madera en el Nordeste y al alta en el de radio y televisión en Patagonia, revirtiendo la tendencia del período anterior. Asimismo, vale recordar que, como se mencionó anteriormente, estas dos regiones son las que en términos de cantidad de ramas en las que se especializan han tendido a una mayor diversificación, que también se dio en ese primer período.

En el Noroeste las dos actividades con mayor especialización también tienen una estrecha relación con la disponibilidad de recursos naturales, aunque la concentración del empleo formal en estas actividades es mucho menor a lo observado en el Nordeste y la Patagonia. En la región se concentra el 24 % del total del empleo formal de agricultura y ganadería y el 12 % de la industria de alimentos. En cuanto a la variación del índice de especialización de estas actividades, en el período 2015-2019 ha sido dispar, ya que agricultura y ganadería tuvo un aumento significativo, mientras que la industria de alimentos se mantuvo relativamente estable. Esto podría interpretarse también, como una tendencia a la reprimarización del empleo formal en dicho período, que no se pudo revertir en los años siguientes, dado que en 2021 los valores de los coeficientes eran similares a los de 2019, incluso a pesar de los incentivos a la industria.

En la región Pampeana, las dos actividades con mayor coeficiente, industria de metales comunes y los servicios de electricidad, gas y agua, concentran el 33 % y 27 % del total del empleo formal de dichas actividades a nivel nacional, respectivamente. Vale recordar que el área pampeana es una de las más diversificadas, con una importante participación de servicios e industria en la estructura del empleo formal y un escaso peso de las actividades primarias

---

[11] La producción de petróleo en el 2019 se ubicó 15.7 % por debajo de los valores de 2009, por otro lado la producción de gas natural creció apenas 1.9 % en ese mismo período.

(sobre todo agropecuarias), a pesar de la importancia que reviste este sector en la estructura productiva de la región. En el período 2015-2019, el índice de especialización de la industria de metales comunes se mantuvo relativamente estable, pero los servicios de electricidad, gas y agua presentaron una caída en la especialización, explicado principalmente por la caída del empleo en esta actividad en la región (-1 %) frente a un incremento en el resto de las regiones, fundamentalmente en la Patagonia (+14 %) y en el norte (Nordeste +10 % y Noroeste +9 %). Por su parte en el período 2019-2021, no se observan cambios significativos en ninguna de las dos actividades.

En Cuyo, las tres ramas de actividad con mayor especialización, al igual que en las provincias del norte y del sur argentino, se encuentran relacionadas con la disponibilidad de recursos naturales. En esta región se encuentra el 11 % del empleo formal de la industria de otros minerales no metálicos, el 10 % de la manufactura de alimentos y el 9 % de agricultura y ganadería. Los índices de especialización del empleo de estas tres actividades presentaron una significativa caída en el período 2015-2019, que en el caso de agricultura y ganadería se vió profundizada en el período 2019-2021. Este comportamiento es consecuencia de la dinámica que ha tenido el empleo formal en la región, con una pérdida relativamente mayor que en el promedio nacional, especialmente en el caso de Mendoza que representa el 65 % del empleo privado registrado de la región. En el primer período, Cuyo tuvo una caída en el número de asalariados/as formales de la industria de alimentos cinco veces mayor que la registrada a nivel país, asimismo, en otros minerales no metálicos la contracción fue un 70 % mayor a la disminución promedio nacional; y, en el caso de agricultura y ganadería la pérdida de empleos formales se dió en un contexto en el que a nivel nacional ocurrió lo contrario, dado el aumento de estos empleos en 5 de las 7 regiones.

En la región Centro, las dos actividades con mayor especialización corresponden al sector industrial: maquinaria y equipos y automotores. En estas provincias se concentra el 39 % y el 36 % del empleo formal de esas industrias respectivamente. En el período 2015-2019 la especialización en ambas actividades se mantuvo relativamente constante, dado que la pérdida de empleos en la región fue similar (incluso levemente inferior) a la caída nacional. En el período 2019-2021, si bien la industria automotriz también mantuvo un coeficiente constante, la especialización en maquinaria y equipos sí tuvo un aumento significativo, debido a un incremento relativamente mayor en la región que en el total del país, en un contexto de recuperación notable de producción industrial.<sup>[12]</sup>

---

[12] La producción de maquinaria y equipos creció 66.2 % en septiembre respecto del mismo período de 2019, según INDEC. Explicaron ese incremento la

Finalmente, en Gran Buenos Aires, en línea con lo descrito anteriormente en relación con el significativo peso de los servicios en la estructura del empleo formal de la región, la mayor especialización se da en dos actividades de este sector: actividades de informática y servicios inmobiliarios. Esto también se condice con el hecho de que en este territorio se concentra el 76 % y 68 % del total de los empleos formales de estas ramas. En cuanto a la variación de los coeficientes, solo se observan cambios de relevancia en la especialización del empleo de servicios inmobiliarios entre los años 2015 y 2019. Este aumento se explica por la caída de menor magnitud en la región, en comparación con el resto de las regiones que como mínimo triplican la pérdida de empleos formales.

A partir de las variaciones de los coeficientes descritas se advierte que los principales cambios en los patrones de especialización del empleo formal en todas las regiones (excepto Centro) se produjeron durante el período 2015-2019. Sin embargo, en el segundo período 2019-2021 también se observaron cambios en la especialización de cuatro regiones (Centro, Cuyo, Nordeste y Patagonia). Además, aquellas regiones que tienen un perfil de especialización fuertemente vinculado a actividades primarias – Patagonia, Nordeste, Noroeste – presentaron durante esa etapa una tendencia a la concentración del empleo formal en ese tipo de actividades. Este comportamiento, entre 2019 y 2021, tiende a revertirse en el Nordeste y la Patagonia, con una caída en la especialización de la silvicultura y extracción de madera y un aumento en la industria de radio y televisión, respectivamente, mientras que, se mantuvo prácticamente sin variaciones para el Noroeste. A su vez, las actividades industriales en las que se especializa el empleo de estas regiones se encuentran mayormente asociadas a las actividades del sector primario (excepto Patagonia, que se especializa en radio y televisión).<sup>[13]</sup> La región Cuyo, por su parte, si bien comparte este perfil en tanto que se especializa en una actividad primaria y en una industria vinculada, muestra una tendencia hacia la pérdida de especialización del empleo formal en todas sus actividades, lo que se da principalmente en la prepandemia y se

---

maquinaria agropecuaria (+138.7 %), impulsado por el crédito bancario, el de aparatos de uso doméstico (+46.5 %), por el dinamismo en heladeras, *freezers* y lavarropas, en parte por el impulso de Ahora 12, y el de maquinaria de uso general (+27.4 %), traccionada por la demanda del sector petrolero (CEP 2021).

[13] El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego establecido en la ley 19.640 sancionada en 1972 exime de impuestos nacionales (IVA, Ganancias, derechos de importación y exportación, por ejemplo) a toda actividad que ocurra dentro de la Isla de Tierra del Fuego.

profundiza con la crisis de la pandemia en el caso de la agricultura y ganadería.

Por otro lado, las regiones que tienen un perfil del empleo más vinculado a la industria y a las actividades de servicios – Pampeana, Centro y Gran Buenos Aires – presentan comportamientos dispares en tanto que los cambios significativos en las regiones Gran Buenos Aires y Pampeana se dan en el primer período y en actividades del sector servicios, pero con tendencias distintas, ya que en la primera los servicios inmobiliarios aumentan su especialización, mientras que en la segunda, los servicios de electricidad, gas y agua presentan una caída. Por su parte en la región Centro el cambio significativo se da en el segundo período, con un incremento de la especialización en la industria de maquinaria y equipos.

## 12.5 Tendencias de cambio en los perfiles de especialización regional

Los análisis realizados en este capítulo evidencian las disparidades regionales en el desempeño del empleo privado formal durante el lapso 2015-2021 y el impacto que los escenarios prepandemia y pandemia generaron sobre el tipo y grado de especialización regional.

Un primer aspecto a considerar es que, a pesar del significativo y generalizado retroceso del empleo formal en todas las regiones del país durante el período 2015-2021, no se observan cambios relevantes en el tipo de actividades que conforman los perfiles de especialización regionales. Esto estaría explicado por el hecho de que el lapso no es lo suficientemente largo como para evidenciar cualquier tipo de variación estructural. En este sentido [Trombetta et al. \(2022\)](#) afirman que la relación entre los cambios en el nivel de empleo formal y las variaciones en la actividad económica es más fuerte en el largo plazo, por lo cual es esperable que los cambios estructurales producto de las crisis prepandemia y pandemia recién puedan evidenciarse en unos años. Por otro lado, la evidencia demuestra que en los períodos de crisis se refuerza la especialización de cada región por lo que los cambios en los perfiles dependerán de intervenciones del Estado que los modifiquen o los fortalezcan.

No obstante lo anterior, las medidas de especialización calculadas permiten identificar algunas tendencias de interés.

En primer lugar, los resultados del estudio a nivel de ramas indican que las regiones Gran Buenos Aires y Pampeana presentan varias especializaciones con un comportamiento hacia la pérdida de diversificación durante el primer subperíodo (2015-2019) y, para la región Pampeana una recuperación en el segundo subperíodo (2019-2021). En el caso del Gran Buenos Aires el 75 % de las ramas en las que se especializa corresponden al sector servicios. En la región

Pampeana, en cambio, el empleo se distribuye más equitativamente entre las actividades del sector industrial (40 %) y los servicios (33 %). Por su parte, las regiones Centro, Noroeste y Cuyo, que tienen un alto grado de especialización, no experimentaron variaciones.

En segundo lugar, en aquellas regiones que, en términos generales, configuran su perfil en torno a la explotación de recursos naturales, como es el caso de Patagonia, Nordeste y Noroeste, se identifica una tendencia a la reprimarización del empleo formal en la etapa 2015-2019, que tiende a revertirse en las primeras dos regiones. Esta trayectoria coincide con lo señalado por Keogan *et al.* (2020) en relación con el aumento del índice de especialización en períodos de crisis cuando se trata de actividades primarias. Ese comportamiento se deriva de las políticas implementadas por el gobierno nacional a partir 2016 (quita de restricciones a la importación, devaluación del peso, desregulación del mercado de capitales, aumentos de la tasa de interés, entre otras) que tuvieron impactos directos e inmediatos en la caída del empleo formal, principalmente en la industria y se intensifica con la crisis económica iniciada en 2018, que afectó los niveles de consumo interno y, por lo tanto, a la mayoría de las actividades que dependen de él.

Finalmente, en el período 2019-2021, a pesar de que la magnitud de la crisis originada por la irrupción de la pandemia de COVID-19 fue mayor a la de la etapa previa, los cambios en el patrón de especialización regional fueron menores y en sentido opuesto a lo ocurrido en el período 2015-2019, ya que en los primeros años se advierte una tendencia mayoritaria a la pérdida de diversificación, combinada con un proceso de reprimarización en las áreas periféricas que se especializan en actividades estrechamente vinculadas a la disponibilidad de recursos naturales; y, por el contrario, en los últimos dos años una recuperación de diversificación junto con un retroceso de la reprimarización por el avance de la actividad industrial. Ese comportamiento hacia el final del período analizado estaría asociado, por un lado, al efecto de las medidas de protección a la industria implementadas en el escenario de pandemia, que en muchos casos se tradujo en incrementos en la cantidad de empleo formal (en radio y televisión, madera, maquinaria y equipos, entre otras actividades). Por otro lado, los sectores más afectados por la dinámica recesiva y la consecuente pérdida de empleos – construcción, hotelería y restaurantes y servicios comunitarios, sociales y personales – dadas las características que asumió la crisis, no son relevantes en la definición del perfil de especialización de las regiones.

## Anexo

Coefficientes de especialización del empleo formal por rama de actividad, según región. Cuartos trimestres 2015, 2019 y tercer trimestre 2021.

REGIÓN CENTRO			
RAMA	2015	2019	2021
Maquinaria y equipo	2.04	2.06	2.17
Automotores	1.94	1.96	1.92
Alimentos	1.41	1.41	1.40
Otros productos de metal	1.31	1.36	1.40
Comercio al por mayor	1.31	1.28	1.27
Agricultura y ganadería	1.29	1.26	1.20
Venta y reparación de vehículos. Venta por menor de combustible	1.17	1.18	1.18
Enseñanza	1.13	1.11	1.09
Servicios de organizaciones empresariales	1.08	1.08	1.06
Cantidad de ramas especializadas	9	9	9

Nota: ramas de actividad con coeficiente mayor a 1 y con una participación del 1 % o más en el empleo total de la región. Fuente: elaboración propia en base a datos contruidos por el OEDE-MTEySS a partir del SIPA.

REGIÓN CUYO			
RAMA	2015	2019	2021
Otros minerales no metálicos	1.95	1.82	1.83
Alimentos	1.89	1.73	1.74
Agricultura y ganadería	1.88	1.68	1.58
Agencias de empleo eventual	1.45	0.00*	1.39
Construcción	1.38	1.37	1.24
Venta y reparación de vehículos. Venta por menor de combustible	1.09	1.09	1.13
Transporte ferroviario y automotor y por tuberías	1.06	1.11	1.12
Comercio al por menor	1.05	1.08	1.09
Servicios de hotelería y restaurantes	0.96**	1.00	1.04
Enseñanza	0.95**	0.98**	1.01
Extracción de petróleo crudo y gas natural	1.05	1.21	0.00*
Servicios n.c.p.	1.13	1.20	0.00*
Cantidad de ramas especializadas	10	9	10

\* No llega al 1 % del total del empleo. \*\* No se cuenta como rama especializada porque el coeficiente es menor a 1.

Nota: ramas de actividad con coeficiente mayor a 1 y con una participación del 1 % o más en el empleo total de la región. Fuente: elaboración propia en base a datos contruidos por el OEDE-MTEySS a partir del SIPA.

REGIÓN GRAN BUENOS AIRES			
RAMA	2015	2019	2021
Actividades de informática	1.82	1.79	1.82
Servicios inmobiliarios	1.40	1.57	1.62
Productos químicos	1.35	1.41	1.45
Productos de caucho y plástico	1.44	1.44	1.42
Seguros	1.38	1.40	1.37
Productos textiles	1.29	1.37	1.36
Intermediación financiera y otros servicios financieros	1.26	1.31	1.35
Manipulación de carga, almacenamiento y depósito	1.35	1.31	1.31
Telecomunicaciones y correos	1.30	1.28	1.31
Servicios culturales, deportivos y de esparcimiento	1.25	1.27	1.30
Servicios jurídicos, contables y otros servicios a empresas	1.25	1.27	1.25
Servicios sociales y de salud	1.17	1.15	1.16
Otros productos de metal	1.18	1.13	1.11
Servicios de hotelería y restaurantes	1.10	1.11	1.11
Enseñanza	1.06	1.07	1.07
Transporte ferroviario y automotor y por tuberías	1.02	1.01	1.01
Automotores	1.03	0.99**	0.99**
Agencias de empleo eventual	1.32	0.00*	0.00*
Confeciones	1.65	0.00*	0.00*
Edición e impresión	1.52	0.00*	0.00*
Servicios n.c.p.	1.06	0.00*	0.00*
Cantidad de ramas especializadas	21	16	16

\* No llega al 1 % del total del empleo. \*\* No se cuenta como rama especializada porque el coeficiente es menor a 1.

Nota: ramas de actividad con coeficiente mayor a 1 y con una participación del 1 % o más en el empleo total de la región. Fuente: elaboración propia en base a datos construidos por el OEDE-MTEySS a partir del SIPA.

REGIÓN NORDESTE			
RAMA	2015	2019	2021
Silvicultura, extracción de madera	13.98	15.01	14.12
Madera	7.76	8.16	8.11
Agricultura y ganadería	1.71	1.70	1.97
Comercio al por menor	1.41	1.48	1.44
Venta y reparación de vehículos. Venta por menor de combustible	1.39	1.46	1.42
Construcción	1.83	1.20	1.38
Productos textiles	1.24	1.36	1.35
Servicios de organizaciones empresariales	1.20	1.29	1.22
Alimentos	0.92**	1.06	1.07
Intermediación financiera y otros servicios financieros	1.05	1.09	1.06
Enseñanza	0.87**	1.03	1.01
Comercio al por mayor	0.98**	1.02	1.01
Cantidad de ramas especializadas	9	12	12

\* No llega al 1 % del total del empleo. \*\* No se cuenta como rama especializada porque el coeficiente es menor a 1.

Nota: ramas de actividad con coeficiente mayor a 1 y con una participación del 1 % o más en el empleo total de la región. Fuente: elaboración propia en base a datos contruidos por el OEDE-MTEySS a partir del SIPA.

REGIÓN NOROESTE			
RAMA	2015	2019	2021
Agricultura y ganadería	2.88	3.25	3.14
Alimentos	1.53	1.50	1.51
Productos textiles	1.67	1.36	1.48
Construcción	1.26	1.20	1.25
Venta y reparación de vehículos. Venta por menor de combustible	1.25	1.22	1.17
Comercio al por menor	1.18	1.12	1.10
Transporte ferroviario y automotor y por tuberías	0.95**	0.95**	1.01
Enseñanza	1.05	0.99**	1.01
Intermediación financiera y otros servicios financieros	1.01	0.93**	0.89**
Cantidad de ramas especializadas	8	6	8

\* No llega al 1 % del total del empleo. \*\* No se cuenta como rama especializada porque el coeficiente es menor a 1.

Nota: ramas de actividad con coeficiente mayor a 1 y con una participación del 1 % o más en el empleo total de la región. Fuente: elaboración propia en base a datos contruidos por el OEDE-MTEySS a partir del SIPA.

REGIÓN PAMPEANA			
RAMA	2015	2019	2021
Metales comunes	2.27	2.31	2.31
Electricidad, gas y agua	2.08	1.95	1.93
Agricultura y ganadería	1.59	1.51	1.53
Otros minerales no metálicos	1.59	0.00*	1.48
Agencias de empleo eventual	0.00*	0.00*	1.38
Automotores	1.17	1.25	1.32
Alimentos	1.24	1.23	1.22
Productos químicos	1.27	1.24	1.21
Venta y reparación de vehículos. Venta por menor de combustible	1.23	1.23	1.21
Manipulación de carga, almacenamiento y depósito	1.02	1.05	1.16
Comercio al por menor	1.11	1.11	1.14
Comercio al por mayor	1.02	1.05	1.06
Servicios de organizaciones empresariales	1.09	1.06	1.04
Transporte ferroviario y automotor y por tuberías	0.98**	0.99**	1.03
Otros productos de metal	0.92**	1.00	1.00
Construcción	0.99**	1.05	0.99**
Servicios culturales, deportivos y de esparcimiento	1.01	0.95**	0.93**
Servicios de hotelería y restaurantes	1.01	0.93**	0.89**
Cantidad de ramas especializadas	14	13	15

\* No llega al 1 % del total del empleo. \*\* No se cuenta como rama especializada porque el coeficiente es menor a 1.

Nota: ramas de actividad con coeficiente mayor a 1 y con una participación del 1 % o más en el empleo total de la región. Fuente: elaboración propia en base a datos contruidos por el OEDE-MTEySS a partir del SIPA.

REGIÓN PATAGONIA			
RAMA	2015	2019	2021
Extracción de petróleo crudo y gas natural	11.00	10.43	10.66
Radio y televisión	10.61	9.75	10.65
Pesca y actividades relacionadas con la pesca	10.04	10.13	10.51
Extracción de minerales metalíferos	7.59	8.21	8.23
Electricidad, gas y agua	1.43	1.61	1.65
Servicios de hotelería y restaurantes	1.27	1.36	1.49
Construcción	1.41	1.37	1.40
Agricultura y ganadería	1.46	1.26	1.28
Comercio al por menor	1.18	1.19	1.22
Manipulación de carga, almacenamiento y depósito	1.10	1.16	1.20
Venta y reparación de vehículos. Venta por menor de combustible	1.13	1.12	1.12
Transporte ferroviario y automotor y por tuberías	0.93**	1.02	1.01
Maquinaria y equipo	0.98**	1.06	0.00*
Cantidad de ramas especializadas	11	13	12

\* No llega al 1 % del total del empleo. \*\* No se cuenta como rama especializada porque el coeficiente es menor a 1.

Nota: ramas de actividad con coeficiente mayor a 1 y con una participación del 1 % o más en el empleo total de la región. Fuente: elaboración propia en base a datos construidos por el OEDE-MTEySS a partir del SIPA.

## Referencias

BECCARIA, LUIS y ROXANA MAURICIO

2020 «Los impactos inmediatos de la pandemia: cuando la diferencia es entre quienes continúan percibiendo ingresos y quienes lo perdieron», en *Alquimias Económicas*, referencia citada en página 295.

BOSCHMA, RON y GIANLUCA CAPONE

2015 «Institutions and diversification: Related versus unrelated diversification in a varieties of capitalism framework», en *Research Policy*, vol. 44, n.º 10, págs. 1902-1914, referencia citada en página 296.

CEP

2021 *Informe de panorama productivo*, recuperado de <[https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/09/informe\\_de\\_panorama\\_productivo\\_-\\_noviembre\\_2021.pdf](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/09/informe_de_panorama_productivo_-_noviembre_2021.pdf)>, referencia citada en página 315.

## CEPAL y OIT

- 2020 «La dinámica laboral en una crisis de características inéditas: desafíos de política», en *Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe*, n.º 23, referencia citada en página 295.

## DOSI, GIOVANNI; KEITH PAVITT y LUC SOETE

- 1990 *The Economics of Technical Change and International Trade*, Nueva York: New York University Press, referencia citada en página 296.

## FUJITA, MASAHISA y PAUL KRUGMAN

- 2004 «La nueva geografía económica: pasado, presente y futuro», en *Investigaciones Regionales*, n.º 7, referencia citada en página 296.

## JARAMILLO, DAINA; CARLA CALÁ y ANDREA BELMARTINO

- 2017 «Especialización industrial en Argentina: patrones provinciales y evolución reciente (1996-2014)», en *Revista Pymes. Innovación y Desarrollo*, vol. 4, n.º 2, págs. 3-20, referencia citada en páginas 297, 304.

## KEOGAN, LUCÍA; CARLA CALÁ y ANDREA BELMARTINO

- 2020 «Perfiles sectoriales de especialización productiva en las provincias argentinas: distribución intersectorial del empleo entre 1996 y 2014», en *Regional and Sectoral Economic Studies*, vol. 2, n.º 1, referencia citada en páginas 297, 303, 304, 306, 309, 317.

## KRUGMAN, PAUL

- 1998 «What's new about the new economic geography?», en *Oxford Review of Economic Policy*, vol. 14, n.º 2, págs. 7-17, referencia citada en página 296.

## LAWSON, CLIVE

- 1999 «Towards a competence theory of the region», en *Cambridge Journal of Economics*, vol. 23, n.º 2, págs. 151-166, referencia citada en página 296.

## LÓPEZ, ANDRÉS

- 1996 *Las ideas evolucionistas en economía: una visión de conjunto*, Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, referencia citada en página 296.

## MAZORRA, XIMENA y ALEJANDRA BECCARIA

- 2007 *Diversidad productiva en las áreas económicas locales de la región pampeana*, Buenos Aires: MTEySS, referencia citada en páginas 297, 303.

## NIEMBRO, ANDRÉS y CARLA DANIELA CALA

- 2021 «El potencial impacto económico de la pandemia por COVID-19 en las regiones argentinas y sus patrones productivos sectoriales en el período abril-junio de 2020», en *Estudios Gerenciales*, vol. 37, n.º 159, págs. 210-225, DOI: [10.18046/j.estger.2021.159.4343](https://doi.org/10.18046/j.estger.2021.159.4343), referencia citada en página 297.

ROJO, SOFÍA y SEBASTIÁN ROTONDO

- 2006 «Especialización industrial y empleo registrado en el Gran Buenos Aires. Informe de la Dirección de Estudios y Estadísticas Laborales de la SPTyEL», en *Trabajo, ocupación y empleo*, referencia citada en página 306.

TROMBETTA, MARTÍN; AZUL MENDUIÑA y AGUSTÍN DUARTE BARACAT

- 2022 «Ciclo económico, empleo formal y estructura productiva», en *Documentos de Trabajo del CEP*, vol. XXI, n.º 12, referencia citada en páginas 296, 316.

## CAPÍTULO 13

# Las brechas de género laborales en la Argentina durante la pandemia por COVID-19

PAULA BELLONI,<sup>\*</sup> BRENDA BROWN<sup>\*\*</sup>  
y MARIANA FERNÁNDEZ MASSI<sup>\*\*\*</sup>

### 13.1 Introducción

Las desigualdades de género en el mercado de trabajo históricamente se han expresado en diferentes instancias y formas: en el acceso, las condiciones de trabajo, la estructura jerárquica y los sectores o ramas de actividad. Debido a la mayor informalidad y desprotección, los empleos de mujeres y diversidades tienden a ser más inestables, y por ello suelen verse más afectados que los de los varones en contextos de crisis económica. Si bien cada crisis tiene sus particularidades, estudios previos sobre su impacto en el trabajo de las mujeres dan cuenta de tres características recurrentes: intensificación de su trabajo, recuperación más tardía del empleo y su precarización, y retrocesos en la igualdad. El objetivo de este capítulo es retomar los aportes de aquellos estudios que analizan las brechas de género en los momentos de crisis para indagar cuál ha sido el impacto de la pandemia por COVID-19 en las brechas de desigualdad laboral en la Argentina.

---

\* Docente Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP), colaboradora Laboratorio de Estudios en Sociología y Economía del Trabajo - IDIHCS.

\*\* Becaria posdoctoral de CONICET, Laboratorio de Estudios en Sociología y Economía del Trabajo - IDIHCS.

\*\*\* Investigadora asistente de CONICET, Laboratorio de Estudios en Sociología y Economía del Trabajo - IDIHCS.

El punto de partida de este estudio puede resultar contradictorio con los principales antecedentes sobre el impacto de género en contextos de crisis económicas, pues se observa que durante el gobierno de Mauricio Macri (2016-2019), de contracción extendida de la actividad, las brechas de género en términos de participación en el empleo remunerado se redujeron y esto se acentuó con la emergencia de la crisis ocasionada por la irrupción del COVID-19. Incluso, esta reducción de brechas en el momento de emergencia de la pandemia se dio en un contexto en el cual, debido a las medidas de aislamiento, las tareas de cuidado al interior del hogar se intensificaron y se profundizó su distribución desigual. Por el contrario, con la reactivación económica en 2021, las brechas se ampliaron nuevamente.

La principal hipótesis que organiza el trabajo es que la segmentación laboral horizontal por género es relevante para explicar la forma en la que impactó la crisis ocasionada por la pandemia en el mercado laboral del país. La masculinización/feminización estructural de las diferentes actividades económicas, junto con la recesión generalizada como resultado de la crisis sanitaria y las heterogéneas dinámicas de recuperación sectorial, resultan clave para comprender la evolución en las brechas de género en el mercado de trabajo. Para ello, se identifican tres grandes períodos: el contexto de recesión económica previo a la pandemia sanitaria (2016-2019), el de emergencia de la crisis por COVID-19 con mayores restricciones a la movilidad en 2020, y la etapa de la recuperación económica en 2021.

El texto ofrecerá un abordaje cuantitativo a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), así como también de la encuesta «Estructura social de Argentina y políticas públicas en tiempos del COVID-19» (ESA) realizada en el marco del Proyecto AGENCIA/PI-SAC COVID: «Programa de Investigación Regional Comparativa (PIRC): Cambios recientes en la estructura social argentina: trabajo, ingresos y desigualdad social en tiempos de pandemia y pospandemia». A su vez, se analizarán diversas políticas públicas implementadas para mitigar el impacto de la crisis de acuerdo a la perspectiva de género de las mismas.

El presente capítulo se organiza en cuatro apartados, además de esta introducción. En el primero se presentan los principales resultados de los estudios de género en relación a las brechas de desigualdad existentes en el mercado laboral, haciendo hincapié en los momentos de crisis. En el segundo se analizan las brechas de desigualdad laboral en el acceso al mercado de trabajo y al empleo en la Argentina durante los tres períodos bajo análisis. En un siguiente apartado se abordan las trayectorias del empleo en las principales ramas de actividad de acuerdo con su participación en el empleo

masculino y femenino durante la crisis por COVID-19 y la recuperación. En el cuarto y último apartado se describen distintas políticas públicas implementadas durante la pandemia en términos de sostén (o no) del empleo y de los ingresos, incorporando una perspectiva de género y sectorial, en los casos en que la información disponible así lo permitió.

### 13.2 Brechas de desigualdad laboral y crisis

Existen marcadas desigualdades de género en el mercado de trabajo. Las mujeres lesbianas, gays, travestis, trans, bisexuales, intersexuales y otras identidades no heteronormadas (de aquí en adelante LGTBI+) enfrentan mayores obstáculos para participar en el mercado laboral, en relación a los varones. A su vez, cuando acceden, lo hacen con tasas de empleo más bajas, mayor desempleo y bajo condiciones más precarias: jornadas más reducidas, malas condiciones de contratación, altos grados de informalidad y salarios más bajos (DNEIyG 2020; Espino 2012; Goren y Trajtemberg 2018; MTEySS 2018; Paucassi 2007; Rodríguez Enríquez 2019). Es por ello, que las mujeres y LGTBI+ tienen una menor autonomía económica y pertenecen a estratos de ingresos más bajos en relación a los varones.

De acuerdo con información de la EPH-INDEC, en Argentina antes de la emergencia de la pandemia por COVID-19,<sup>[1]</sup> mientras que 70 de cada 100 varones participaban del mercado laboral, solo 49 de cada 100 mujeres lo hacían. En relación al empleo, de cada 100 varones que participaban del mercado de trabajo 64 tenían empleo y de cada 100 mujeres solo 44 lo hacían (véase cuadro 13.1). Asimismo, las mujeres estaban sobrerrepresentadas en ocupaciones de menos de 35 horas semanales respecto a los varones (un 17.1 % de las ocupadas en 2019 versus un 11.8 % en los varones), mientras que entre ellos es mucho más alta la tasa de sobreocupación (del 35.3 % versus un 19.4 % en el caso de las mujeres, en 2019). En el caso de la tasa de desocupación, un 9.2 % de la población económicamente activa (PEA) masculina se encontraba sin empleo y un 10.7 % en el caso de las mujeres, en 2019.

Entre los determinantes de estas desigualdades de género en el mercado de trabajo, por un lado, se encuentra la división sexual del trabajo por la cual se asigna a las mujeres la mayor parte de los trabajos domésticos y de cuidados que se realizan al interior de los hogares, lo cual disminuye notablemente el tiempo que las mujeres pueden dedicar a otras actividades tales como participar del mercado de trabajo. En este sentido, de acuerdo con la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo (EAHU-INDEC

[1] Los datos de prepandemia refieren a 2019.

**Cuadro 13.1. Tasas básicas del mercado de trabajo por género. Población mayor a 14 años. Argentina urbana, 2015-2021.**

Año	Tasa de					
	actividad (%)		empleo (%)		desocupación (%)	
	Varón	Mujer	Varón	Mujer	Varón	Mujer
2015	70.1	46.2	65.9	42.5	6.0	8.0
2016	69.5	47.0	64.1	42.6	7.8	9.3
2017	69.8	47.2	64.6	42.1	7.5	9.5
2018	69.7	48.8	64.0	43.6	8.2	10.5
2019	70.1	49.5	63.7	44.2	9.2	10.7
2020	65.1	46.1	58.1	40.4	10.7	12.4
2021	69.8	49.7	64.3	44.8	7.9	9.8

Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC.

2014), en la Argentina las mujeres realizan el 76 % de las tareas domésticas no remuneradas y los varones un 24 %. A su vez, la última Encuesta Nacional de Usos del Tiempo (ENUT-INDEC 2022) indica que mientras el 90 % de las mujeres participan en el trabajo no remunerado, solo el 73 % de los varones lo hacen.

Por otro lado, la inserción laboral mercantil se encuentra también segmentada a partir de estereotipos de género que ubican a las mujeres preferencialmente en ramas de actividad tradicionalmente vistas como de incumbencia «femenina», vinculadas sobre todo con tareas de cuidado y tareas de reproducción, tales como servicios de cuidados y servicio doméstico, que son actividades con remuneraciones más bajas que las de otras ramas y son un reflejo de las tareas que las mujeres realizan al interior de los hogares. Por su parte, sectores como la construcción, transporte y comunicaciones, las actividades primarias y la industria manufacturera se encuentran altamente masculinizadas. Este rasgo estructural de la composición del mercado de trabajo resulta importante para pensar el impacto diferencial de las crisis sobre la estructura del empleo por género en términos sectoriales.

En este sentido, si bien en la Argentina de prepandemia las mujeres representaban el 45.4 % de las ocupaciones, tenían menores posibilidades que los varones de insertarse laboralmente de manera diversificada en los sectores/ramas de actividad, lo que implicaba para ellas una desventaja relativa. De las 14 ramas analizadas, las

mujeres estaban sobrerrepresentadas<sup>[2]</sup> solo en 3: servicio doméstico (97.3 %); enseñanza (75.2 %); y servicios sociales y de salud (67.7 %), mientras que los varones lo estaban en 7: construcción (95.3 %); transporte, almacenamiento y comunicaciones (86.5 %); actividades primarias y extractivas (86.1 %); suministro de electricidad, gas y agua (81 %); industria manufacturera (76.5 %); actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (59.1 %); y comercio (62.3 %).

A su vez, en la mayoría de las 4 ramas de mayor paridad, la diferencia estaba a favor de los varones: administración pública y defensa (55.9 %) y hoteles y restaurantes (55.5 %) y Otras actividades de servicios comunitarios (58.8 %); y, las ramas masculinizadas, tenían escasa participación femenina (las mujeres apenas superaban el 10 % dentro del sector), mientras que las ramas feminizadas tenían una participación mayor de varones (ocupaban entre el 25 y el 33 % de los puestos de trabajo en esos sectores).

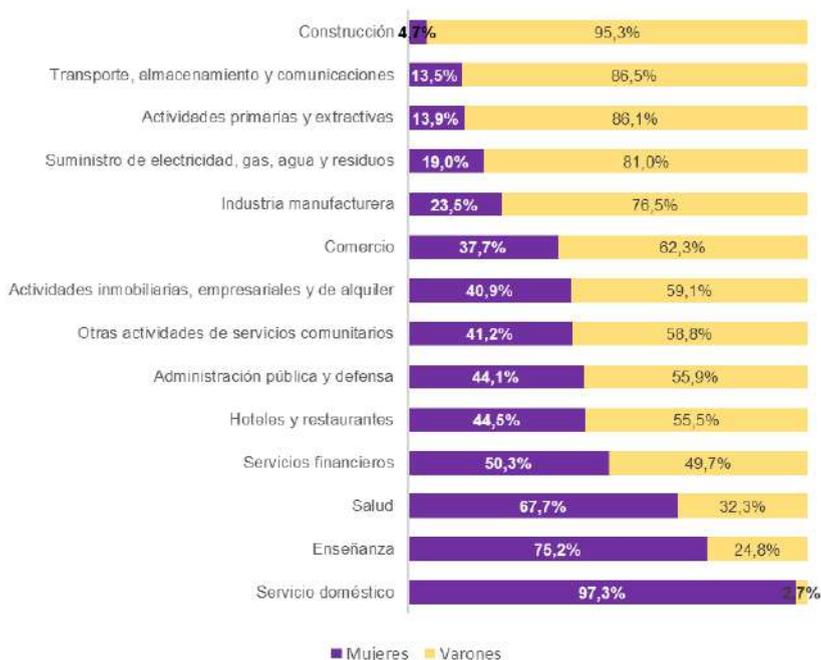
Por último, cabe remarcar que al contar con trabajos más informales, las mujeres y diversidades se encuentran en una situación más inestable, con remuneraciones más bajas e irregulares, sin protección social (tales como obra social, licencias pagas, aportes previsionales, etcétera) y con menor autonomía. Por todo ello suelen verse más afectadas que los varones en contextos de recesión y crisis económica. En Argentina, la tasa de informalidad de las mujeres era de 37.1 % en 2019, mientras que para los varones era de 33.4 %. Se destaca en este sentido el trabajo de servicio doméstico, que se encuentra altamente feminizado (véase figura 13.1), es una de las principales fuentes de trabajo de las mujeres en el país (en especial de ingresos bajos) y presenta un alto grado de informalidad (del 74.4 % en 2019).

Si bien cada crisis tiene sus particularidades, estudios previos sobre su impacto en el trabajo de las mujeres dan cuenta de tres características recurrentes: intensificación de su trabajo, recuperación más tardía del empleo y su precarización, y retrocesos en igualdad (Gálvez Muñoz y Rodríguez-Modroño 2012). Por lo que las desigualdades de género tienden a ensancharse como contracara a la caída de la actividad económica. En este sentido, Gálvez Muñoz y Rodríguez-Modroño (2012) sistematizaron diversos trabajos sobre experiencias en distintos países que dan cuenta de múltiples estrategias realizadas por las mujeres para hacer frente a las crisis. Estas dan lugar a trayectorias complementarias y/o contrapuestas, que se presentan de manera compleja en dichos contextos.

En relación a la intensificación del trabajo de las mujeres en contextos de crisis, las autoras señalan que algunos estudios dan cuenta

---

[2] Se considera sobrerrepresentación cuando la composición laboral del sector tiene una participación cercana o superior al 60 % por parte de uno de los géneros.



**Figura 13.1.** Población ocupada por rama de actividad y género. Argentina urbana, 2019. Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC. Población asalariada de 14 años y más.

del carácter procíclico del empleo femenino y de su intercambiabilidad con el trabajo doméstico no remunerado. Esto se debe a que en momentos de crecimiento económico las mujeres tienden a dejar los hogares porque tienen más posibilidades de incorporarse al mercado de trabajo, muchas veces tercerizando estas tareas a través del trabajo doméstico remunerado y contratando generalmente a otras mujeres de menores ingresos. A la inversa, en contextos de contracción de la actividad económica, al estar empleadas en sectores más volátiles (más temporales y precarios), son expulsadas del mismo, en general para pasar a ser parte de la población inactiva más que de la desempleada, dado que retornan al empleo no remunerado en los hogares. En especial, esto se da en mujeres casadas, de edad media y en hogares de ingresos bajos y medios (Sabarwal *et al.* 2011).

Esto explica por qué, en momentos de crisis, se acentúa el trabajo no remunerado que realizan las mujeres. Sin embargo, el incremento de las tareas de cuidado no ocurre solo para las mujeres desempleadas e inactivas, sino también para aquellas que conservan su empleo. Ante la escasa corresponsabilidad en las tareas domésticas y de

cuidados en los hogares, en contextos de crisis se suelen reducir las posibilidades de los hogares de tercerizar las tareas domésticas y de cuidado – incluso para aquellos que lo hacían muy parcialmente – y esta responsabilidad recae en mayor medida sobre las mujeres.

A su vez, el trabajo remunerado de las mujeres también puede incrementarse en contextos de crisis. Ello se da en situaciones críticas en las que estas suelen incorporarse al mercado de trabajo como lo que se ha llamado «mano de obra adicional» para compensar la caída de ingresos del hogar. Este fenómeno suele presentarse en las crisis con jóvenes y mujeres que se insertan en empleos generalmente de baja calidad o engrosando las filas de la desocupación (Rodríguez Enríquez 2019). Asimismo, la inserción en empleos informales o a tiempo parcial en estos contextos hacen que se profundice la precariedad del empleo femenino.

También debe tenerse en cuenta que el efecto de las crisis en el empleo de las mujeres depende en gran medida de la segmentación del mercado laboral. De acuerdo al efecto de la crisis en las distintas ramas de actividad económica, esta puede afectar en mayor medida a los varones si la misma repercute en sectores más masculinizados. No obstante, debido a la menor estabilidad de los sectores más feminizados, previamente señalada, las mujeres suelen ser expulsadas del mercado laboral en mayor medida que los varones y ocupar un lugar de reserva flexible (Gálvez Muñoz y Rodríguez-Modroño 2012).

Por último, en relación a la recuperación más lenta del empleo de las mujeres, cabe señalar que esta se asocia al mayor impacto en los indicadores laborales femeninos durante las segundas fases de crisis, al propagarse la misma en toda la economía, como así también a las políticas de ajuste y/o ciegas al género que suelen implementarse como respuesta a las crisis. Estas últimas al concentrarse en ramas de actividad masculinizadas (tales como la construcción y/o la industria) tienen un impacto positivo en el empleo masculino, al tiempo que el recorte suele darse en el sector público, especialmente, en el gasto social, lo cual afecta un sector en el que el empleo femenino es importante, a la vez que intensifica el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Por lo que, las políticas públicas de ajuste y/o ciegas al género son importantes a la hora de explicar los retrocesos de igualdad en contextos de crisis.

Por todo ello, se debe tener en cuenta que, en contextos de debacles económicas, la repercusión diferencial de género en el mercado laboral depende de su composición – dada fundamentalmente por el lugar que ocupan las mujeres y personas LGTBI+ en el patrón de acumulación (especialmente al interior de los hogares) y por los niveles de segregación laboral – de las características propias y extensión temporal de la crisis y del tipo de respuesta de la política pública. A su vez, aun cuando las mujeres se vean más perjudicadas que los

varones en dichos contextos, el impacto puede no ser igual para todas las mujeres, por lo que desde un enfoque multidimensional de las desigualdades es necesario considerar otras variables tales como la posición de las personas en la estructura social, los clivajes étnicos, el grupo etario al que pertenecen, etcétera.

### 13.3 La doble crisis y el mercado laboral desde una mirada de género

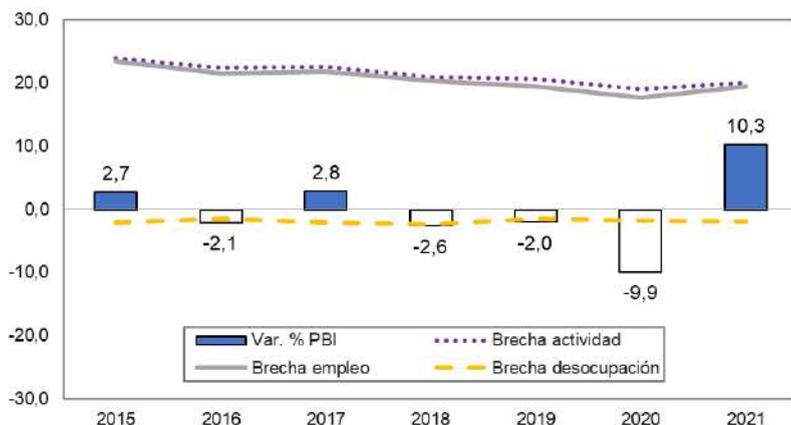
Como resultado de las políticas de corte ortodoxo implementadas bajo el gobierno de la Alianza Cambiemos, la economía se sumió en una gran crisis: el producto cayó en tres de los cuatro años de gobierno, -2.1 % en 2016, -2.6 % en 2018 y -2.1 % en 2019 y la deuda pública en moneda extranjera se duplicó dejando una pesada herencia. A su vez, la inflación promedio anual fue del 40 % y los salarios reales del sector privado registrado cayeron un 47 % entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2019. Aspectos que implicaron un fuerte deterioro en las condiciones de vida de los y las trabajadores/as (Belloni, Noguera y Pérez, 2022).<sup>[3]</sup>

Tal como deja ver en la figura 13.2, en dichos años de crisis y contracción económica, las brechas laborales entre géneros tendieron a achicarse levemente. La brecha en la tasa de actividad cayó 3.3 puntos porcentuales (pp) entre 2015 y 2019, al pasar de 23.9 pp. a 20.6 pp, al tiempo que la brecha en la tasa de empleo se achicó en 3.9 pp (era de 23.4 pp en 2015 y pasó a ser de 19.5 pp en 2019). Por su parte, la brecha en la tasa de desocupación mostró un comportamiento más oscilante, se amplió en 2016 y 2018, y se redujo en 2017 y 2019. Sin embargo, en todo el período las tasas de desocupación fueron mayores respecto a 2015 y los varones mantuvieron su ventaja estructural en relación a las mujeres.

Pero este acortamiento en las brechas no resultó de una mejora en el acceso y empleo de las mujeres, es decir no es resultado de una mejora en términos de igualdad. Sino que se explicó fundamentalmente por la conjunción de dos fenómenos simultáneos. Por un lado, por el estancamiento y la caída de las tasas de actividad y empleo masculinas, siendo los sectores más afectados por la larga contracción económica bajo el gobierno de Cambiemos los de mayor participación masculina (como el industrial y la construcción) (véase figura 13.1) (Costantino 2019).

Por otro lado, este efecto se combinó con una mayor participación femenina en el mercado laboral que, en un contexto de caída de

[3] Acerca del impacto de la doble crisis prepandemia y pandemia sobre el mercado laboral argentino consultar el capítulo de Actis Di Pasquale y Gallo; y, Benza, Dalle y Maceira, en este libro.



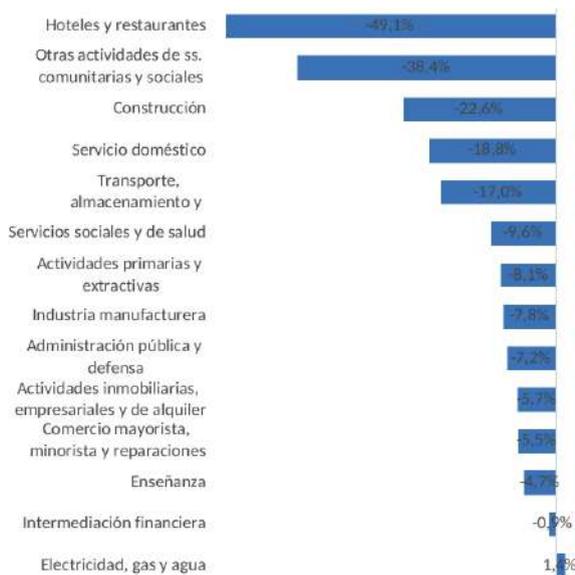
**Figura 13.2.** Evolución de las brechas laborales y variación interanual del Producto Bruto Interno (PBI), Población económicamente activa. Argentina urbana, 2015-2021 (brechas en puntos porcentuales y variación en %). Fuente: elaboración propia en base a EPH e INDEC.

ingresos reales y con alternativas de empleo precario, podría explicarse, al menos en parte, por el efecto del fenómeno de la trabajadora adicional, ante la necesidad de generar un segundo ingreso en los hogares (Rodríguez Enríquez 2019). Durante el gobierno de Cambiemos (2016-2019) esta dinámica se dio en particular en las mujeres de bajos ingresos y de todos los rangos etarios y, junto con ello, el empleo de las mujeres en el sector privado formal y en el sector público se contrajo y sus puestos de trabajo en el sector informal crecieron, en relación al período 2012-2015 (Fernández Massi y Belloni 2022).

A estos problemas por demás complejos del mercado de trabajo argentino, en marzo de 2020 se sumó la irrupción de la pandemia de COVID-19. Esta obligó a tomar medidas de confinamiento y aislamiento que impactaron retrayendo aún más la actividad económica e intensificando la crisis. En este escenario, durante 2020 el PBI se contrajo fuertemente (9.9%). Si bien las distintas ramas de actividad se vieron afectadas por las restricciones a la circulación de personas para evitar la propagación del virus, lo hicieron con distinto ritmo temporal y grado de intensidad.

Las más afectadas en 2020 fueron: Hoteles y restaurantes (-49.1%) y Otras actividades de servicios comunitarios y sociales (-38.4%). Ambas ramas se caracterizan por tener una composición bastante pareja entre géneros (véase figura 13.1) con una mayor participación a favor de los varones. Las siguientes ramas más afectadas fueron Construcción (-22.6%), Servicio doméstico (-18.8%) y Transporte,

almacenamiento y comunicaciones (-17 %); la primera y la última, ramas muy masculinizadas, y la segunda altamente feminizada.



**Figura 13.3.** Variación interanual del PBI por sectores de actividad, Total Argentina, 2020 (en %). Fuente: elaboración propia en base a INDEC.

Esta contracción económica tuvo su correlato en el mercado de trabajo. La tasa de actividad se redujo un 7.1 % interanual y se ubicó en el 55.1 %, un valor históricamente bajo. Esta dinámica se explicó fundamentalmente por la menor circulación de personas y las dificultades para buscar y encontrar empleo, que resultaron en un efecto desaliento y un incremento en la cantidad de personas inactivas. Por su parte, la tasa de empleo sufrió una contracción del 8.7 % debido a una menor proporción de personas empleadas, y fue del 48.7 %. Al tiempo que la tasa de desocupación se incrementó en un 16.4 %, y tomó un valor superior a los dos dígitos, del 11.5 %.

Al analizar la evolución del mercado laboral considerando el género, se observa que durante la emergencia sanitaria los varones continuaron manteniendo su ventaja estructural respecto de las mujeres, pero tuvieron un deterioro levemente mayor en 2020: la tasa de actividad de los varones se contrajo en 7.1 % y se ubicó en 65.1 % (versus una contracción del 6.9 % para las mujeres, para las que tomó un valor de 46.1 %). La tasa de empleo masculina tuvo una contracción de 8.8 % y la femenina del 8.6 %, al tiempo que la tasa de desocupación se incrementó en 16.3 % en los varones, superando

los dos dígitos, y un 15.9 % en las mujeres (para las que alcanzó un 12.4 % de la PEA) (véase cuadro 13.1).

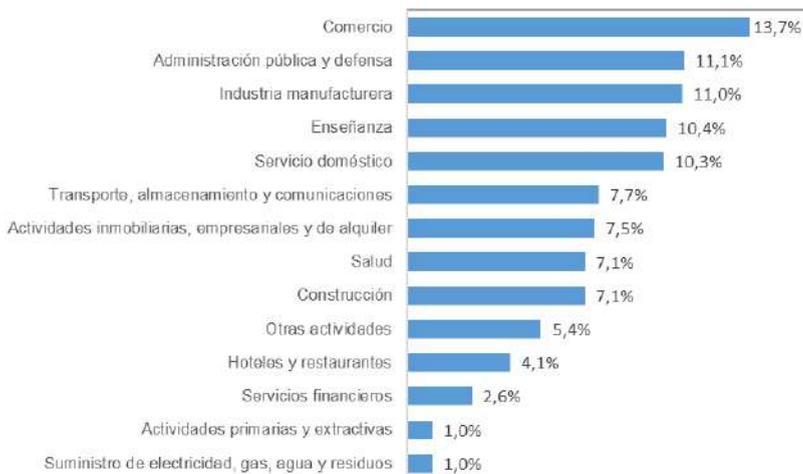
Esta trayectoria en el marco de la emergencia de la pandemia por COVID-19 puede explicarse por lo mencionado líneas arriba: las ramas y/o sectores de actividad que se vieron más afectados durante el segundo trimestre de 2020, momento en el que se dispuso de manera extendida el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), fueron aquellas que presentan mayor participación masculina. Al mismo tiempo, el menor impacto de la crisis, en términos relativos, en las tasas laborales femeninas al inicio de la pandemia también se debe a que algunas ramas que cuentan con mayor participación de mujeres continuaron habilitadas para desarrollarse bajo la modalidad de teletrabajo<sup>[4]</sup> o incluso incrementaron su actividad presencial por tratarse de sectores que fueron declarados como esenciales (tales como educación y salud) (véase figura 13.1).

En este sentido, cabe señalar que, de acuerdo con la encuesta del PIRC-ESA, realizada durante los meses de octubre y diciembre de 2020, un 27.9 % de las mujeres trabajaron bajo modalidad de teletrabajo o mixta, versus un 18.6 % de los varones (véase cuadro 13.2). Asimismo, debe considerarse que si bien los sectores de teletrabajo y esenciales no tuvieron un gran impacto en cuanto a la pérdida de cantidad de ocupaciones, se vieron afectados como resultado de la pandemia en cuanto a jornadas más largas, mayores volúmenes de trabajo, estrés y riesgos psicosociales y mayor exposición a la infección (DRIS-FCM-FTS-UNLP 2020; East y López 2020; Ottaviano 2020).

De este modo, el impacto sobre el empleo de los varones ante la emergencia sanitaria fue levemente mayor – en términos de tasas básicas del mercado de trabajo – debido a que la crisis repercutió de manera diferencial sobre los sectores más dinámicos de la economía (en relación con su peso y aporte al PBI), que son, a su vez, los de mayor peso en la estructura ocupacional (véase figura 13.4) y los que cuentan con una mayor participación masculina (véase figura 13.1). Entre ellos se encuentran: el comercio; la industria; transporte, almacenamiento y comunicaciones; actividades inmobiliarias y empresariales y construcción.

Por último, es importante señalar que si bien como se demostró hasta aquí, los varones mantuvieron su ventaja estructural, pero tuvieron un deterioro levemente mayor, en términos de tasas básicas, esto se dio en especial durante el segundo trimestre de 2020 (que coincide con la disposición del ASPO). No obstante, dicha dinámica se modificó hacia el tercer trimestre de 2020. A partir de este momento,

[4] Con relación al impacto del COVID-19 en el teletrabajo en Argentina consultar el capítulo de Boniolo y Estévez Leston en este libro.



**Figura 13.4.** Estructura de las ocupaciones según actividad económica. Población ocupada mayor a 14 años. Argentina urbana, 2019. Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC.

y a medida que se flexibilizaron las restricciones sobre las actividades y a la circulación de las personas, la actividad económica comenzó a recuperarse, en especial, en las ramas del sector de bienes (que cuenta con mayor participación laboral masculina). Acompañando dicha evolución, las tasas de actividad y empleo masculinas comenzaron a recuperarse y en el primer trimestre de 2021 ya superaban los valores prepandemia.

Para las mujeres, en cambio, la recuperación fue más lenta hasta el segundo trimestre de 2021, en especial para las jóvenes, situación que implicó una nueva ampliación en las brechas de género laborales (**DNEIyG 2021**). En este sentido, en base a la encuesta PIRC-ESA (octubre-diciembre 2020), se observa que durante la pandemia las mujeres asalariadas se vieron afectadas en mayor medida que los varones asalariados: fueron más despedidas o tuvieron que renunciar más; cuando se suspendió personal sufrieron más la falta de pago de salarios, mientras que los varones mantuvieron más sus remuneraciones incluso en caso de suspensión y reducción horaria.

Asimismo, a excepción del trabajo con salario reducido (que se mantuvo en mayor medida en varones) todos los efectos negativos de la pandemia sobre el empleo se mantuvieron en el tiempo más en el caso de las mujeres: suspensión con reducción de horas (tanto con reducción de sueldo como sin reducción de sueldo), mantenimiento

**Cuadro 13.2. Impacto al inicio de la pandemia COVID-19 en trabajadores/as asalariados/as por tipo de impacto y género. Argentina urbana, 2021.**

Durante la pandemia	Varón (%)	Mujer (%)	Total (%)
Fue despedido o tuvo que renunciar	10.1	11.0	10.6
Fue suspendido/se le redujo la cantidad de horas, sin reducción de sueldo	12.0	10.4	11.2
Fue suspendido/se le redujo la cantidad de horas, con reducción de sueldo	14.2	14.0	14.1
Fue suspendido sin pago de salario	5.8	7.0	6.4
Trabajó pero realizando otras actividades	17.7	13.8	15.7
Trabajó pero en modalidad teletrabajo o mixta	18.6	27.9	23.3
Le redujeron el salario	14.9	14.3	14.6

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

**Cuadro 13.3. Continuidad del impacto de la pandemia COVID-19 en trabajadores/as asalariados/as por tipo de impacto y género. Argentina urbana, 2021.**

Luego de la pandemia continua	Varón (%)	Mujer (%)	Total (%)
Fue suspendido/con reducción de horas, sin reducción de sueldo	6.6	12.4	7.1
Fue suspendido/con reducción de horas, con reducción de sueldo	11.2	14.4	12.8
Suspendido sin pago de salario	17.5	26.9	22.7
Trabajando pero realizando otras actividades	27.0	35.7	30.9
Trabajando pero en modalidad teletrabajo o mixta	30.6	37.0	34.5
Trabajando con el salario reducido	23.9	20.1	22.0

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 (2021).

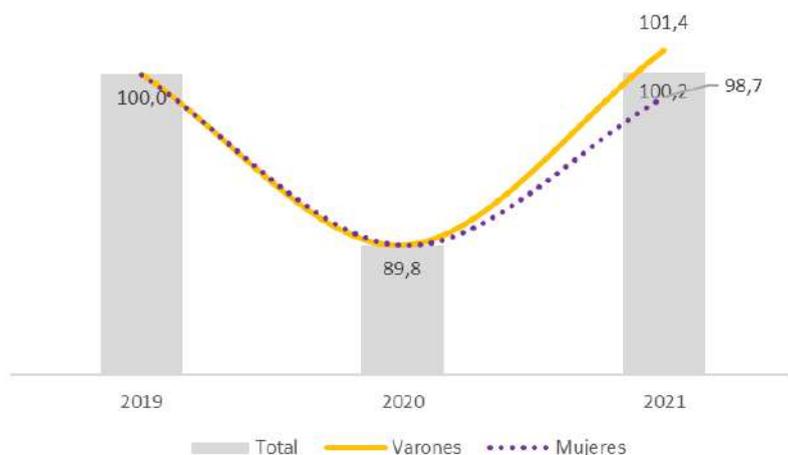
del trabajo, pero realizando otras tareas, teletrabajo o modalidad mixta y suspensión sin pago de salarios. Entre los factores que influyeron en la recuperación más lenta en las mujeres en el mercado de trabajo hasta el segundo trimestre de 2021 se destacan la intensificación del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en los hogares durante la emergencia sanitaria, la profundización de su distribución asimétrica (Bonavitta y Bard Wigdor 2020; CELAG 2020; DNEIyG 2020; INDEC 2020) y las propias limitaciones del sistema productivo para brindarles mayores oportunidades de reinserción.

Sin embargo, la dinámica de recuperación más lenta en la participación laboral y del empleo de las mujeres se modifica en el tercer y cuarto trimestres de 2021, alcanzando tasas de participación y empleo históricamente altas (DNElyG 2022). Por lo que, junto con la recuperación económica en 2021 (un crecimiento del PBI del 10.3%), se dio una mejora en las tasas básicas del mercado de trabajo, que fue levemente superior para las mujeres en cuanto a la participación (7.8% interanual versus 7.2% en los varones) y el empleo (10.9% versus 10.2% en varones) y una mayor reducción del desempleo para los varones (del 26.2% interanual versus 21% en las mujeres). No obstante, en 2021 las brechas de desigualdad laboral se incrementaron, en relación con 2020, para ubicarse en niveles similares a los de prepandemia

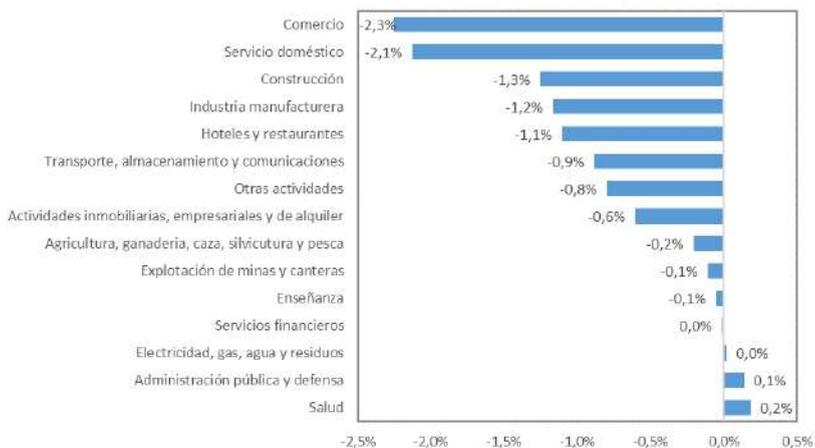
### 13.4 Las asimetrías sectoriales en el mercado de trabajo ante la crisis por COVID-19

La pandemia y las acciones para evitar la propagación del virus afectaron la cantidad de empleos en la Argentina. En 2020 las ocupaciones se contrajeron fuertemente, un 10.2%, con un impacto igual en varones y mujeres. Con el avance de la campaña de vacunación y la flexibilización de las restricciones sobre las actividades y la circulación de las personas, dicha tendencia se revirtió en 2021 y las ocupaciones se recuperaron alcanzando niveles similares a los de prepandemia. Sin embargo, en la etapa de recuperación las ocupaciones de varones crecieron por encima de los niveles de prepandemia, al tiempo que las ocupaciones de las mujeres no llegaron a recuperar lo perdido en la crisis. Esta trayectoria del empleo se vincula con la dinámica sectorial heterogénea que tuvieron los sectores de actividad durante las distintas fases epidemiológicas y con los propios mecanismos de segregación al interior del mercado de trabajo.

El sector del comercio fue el que más aportó a la contracción de las ocupaciones en 2020 (un 2.3%). Se trata de la rama de mayor incidencia en el empleo total (antes de la crisis representaba al 13.7% de los/as trabajadores/as) y se caracteriza por una mayor participación masculina, del 62.3% en 2019 (véase figura 13.1). Durante 2020 la merma en las ocupaciones en este sector fue del 16.4% y, a pesar de la mayor participación masculina, fueron las mujeres del sector las que tuvieron una contracción mayor del empleo, tanto en términos absolutos como relativos (con una variación del 22.3% la pérdida para ellas fue de 407 316 puestos de trabajo, mientras que para los varones fue de 12.9% y 390 089 ocupaciones). A pesar de la recuperación del empleo del sector, en 2021 este se encontraba en niveles levemente inferiores a los de prepandemia (97%), sin cambios en cuanto a la participación laboral por género en relación a la prepandemia.



**Figura 13.5.** Índice de la evolución de las ocupaciones totales por género. Población asalariada mayor a 14 años. Argentina urbana, 2019-2021. Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC.



**Figura 13.6.** Aporte a la contracción interanual de las ocupaciones totales por rama de actividad económica. Población asalariada mayor a 14 años. Argentina urbana, 2020. Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC.

El segundo sector de actividad que más aportó en la contracción de puestos de trabajo ante la emergencia de la pandemia por COVID-19 fue el servicio doméstico (2.1 %). En este sector participaban un 10.3 % de los/las trabajadores/as en 2019, siendo su composición casi

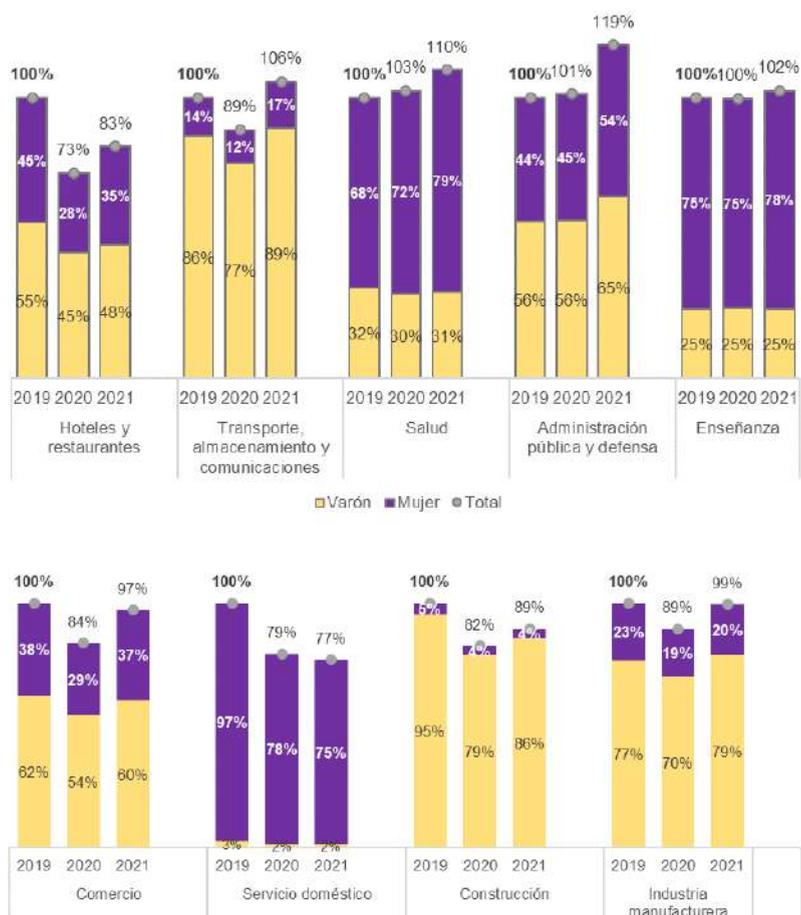
exclusivamente femenina (97.3 %) y con una alta tasa de informalidad, que lo hace más vulnerable a los despidos en tiempos de crisis. Por lo que su contracción en 2020 (del 20.8 %) afectó principalmente a las mujeres, que perdieron 710 302 puestos de trabajo. Esta rama de actividad no solo fue duramente golpeada al comienzo de la crisis, sino que su contracción siguió hasta principios de 2021, con una reversión más tardía en relación al resto de los sectores. Es por ello que en 2021 las ocupaciones se encontraban bastante por debajo de las de pandemia y prepandemia (en un 33 % menos en relación a 2019).

El tercer sector más afectado por la crisis fue la construcción, cuya contracción en 2020 fue del 17.6 % y su aporte a la caída de las ocupaciones totales del 1.3 %. Su gravitación en el empleo total era de 7.1 % en 2019 y, en contraposición a servicio doméstico, tiene una participación casi exclusivamente masculina (95.3 % en 2019), por lo que fueron los varones los más afectados por dicha evolución. La recuperación de las ocupaciones del sector fue menos dinámica que la media, pero superior a la de servicio doméstico, y en 2021 no llegó a recuperar los niveles de prepandemia (ubicándose en un 89 % de las ocupaciones de 2019).

Por su parte, la industria manufacturera fue el cuarto sector que más aportó a la caída de las ocupaciones en el marco de la pandemia sanitaria (1.2 %). En este sector se encontraban un 11 % de las ocupaciones en 2019, con una composición mayoritariamente masculina (76.5 %). La contracción de las ocupaciones en 2020 fue del 10.6 % y, si bien en términos absolutos afectó en mayor medida a varones (con una pérdida de 251 489 puestos de trabajo versus 162.124 en el caso de las mujeres), en términos relativos el impacto de la crisis fue mayor en las ocupaciones de mujeres (con una contracción del 17.8 % versus una del 8.4 % en el caso de los varones). Como resultado de esta dinámica, las mujeres perdieron participación en las ocupaciones del sector, que se volvió más masculinizado, tanto en 2020 como en 2021. A su vez, la industria manufacturera tuvo una rápida recuperación, y en 2021 se encontraba en niveles similares a los de prepandemia.

Si bien con un menor peso en las ocupaciones totales, pero aún así importante, los sectores de hoteles y restaurantes (4.1 % de las ocupaciones en 2019) y transporte, almacenamiento y comunicaciones (7.7 % de las ocupaciones en 2019) fueron de los que más sufrieron el impacto de la pandemia en cuanto a la pérdida de puestos de trabajo, con contracciones de 26.8 % y 11.5 % en 2020. Se trata de sectores con alta participación masculina (véase figura 13.1).

A pesar de ello, en hoteles y restaurantes las mujeres fueron más afectadas en 2020, con una contracción del empleo del 36.2 % en 2020 (versus una de 19.2 % en el caso de los varones) perdieron 235 412



**Figura 13.7.** Evolución de las ocupaciones por ramas de actividad seleccionadas y género. Población asalariada mayor a 14 años. Argentina urbana, 2019-2021. Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC.

puestos de trabajo (y los varones 154 952), por lo que la participación de las mujeres en el empleo del sector cayó notablemente (pasó del 45.1 % en 2019 al 38.8 % en 2020) y no se recuperó en 2021, en relación a los niveles de prepandemia, en línea con la evolución general del sector. En cambio, en transporte, almacenamiento y comunicaciones, el impacto fue mayor para varones, dada su mayor participación. Con una contracción del 11.3 % (y del 12.5 % en el caso de las mujeres), estos perdieron 265.876 puestos de trabajo en 2020 (y las mujeres lo hicieron en 45.858). En este caso, en 2021 el sector superó los niveles de ocupaciones de prepandemia, en un 6 %.

Por último, los sectores de administración pública, enseñanza y servicios sociales y de salud, de importantes participaciones en relación a los puestos de trabajo totales (del 11.1 %, 10.4 % y 7.1 %) y una importante participación de mujeres (véase figura 13.1), tuvieron una dinámica distinta al resto de los sectores. Por un lado, no fueron afectados en cuanto a la pérdida de puestos de trabajo en 2020 e incluso en 2021 las ocupaciones de estas ramas de actividad superaron los niveles de prepandemia en niveles significativos (un 19 %, un 2 % y un 10 %, respectivamente). En estos sectores, se dio un crecimiento del empleo de las mujeres, por lo que estas ganaron participación (de 1,2 pp, 0,6 pp y de 4,4 pp entre 2019 y 2021). Pero este crecimiento no logró compensar las pérdidas en otras ramas, por lo que las ocupaciones totales de las mujeres no lograron recuperarse a niveles prepandemia en 2021.

### 13.5 Las políticas públicas en tiempos de COVID. Un análisis con perspectiva sectorial y de género

Los problemas de desigualdad vinculados al género han cobrado notoriedad internacional, en especial desde la segunda década del siglo XXI, siendo Argentina un país de referencia a nivel regional en la visibilización y la lucha por lograr mayor igualdad entre mujeres, diversidades y varones. En especial, desde la convocatoria #NiUnaMenos en 2015, el paro nacional de mujeres en 2016 y, luego, del paro internacional de mujeres en 2017, la importancia y la cantidad de trabajo no remunerado que realizan las mujeres, así como las brechas dentro del trabajo remunerado y la demanda por la eliminación de las violencias contra las mujeres y diversidades comenzaron a estar más presentes en la agenda pública de nuestro país (Gago 2019).

Durante esos años, en un contexto adverso en el marco de la implementación de políticas públicas de ajuste, el crecimiento del movimiento de mujeres y los feminismos consiguieron importantes conquistas que recientemente se han plasmado en políticas públicas y avances en espacios clave del mercado laboral que, aunque aún resultan insuficientes, es preciso detallar. Con el cambio de gobierno, en diciembre de 2019, se crearon ministerios y dependencias específicas de género en diversos organismos del sector público nacional que abordan las diferentes problemáticas que vienen planteando los feminismos y hay una mayor (aunque aún escasa) participación de mujeres y diversidades en puestos políticos y de decisión. La creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad apenas asumido el gobierno de Alberto Fernández y la aprobación del primer presupuesto con perspectiva de género a fines de 2020 pueden comprenderse como hitos históricos en esta dirección.

A partir de 2020, la pandemia por COVID-19 y las medidas de aislamiento social recrudecieron desigualdades tanto fuera como dentro del hogar. Escenario que no hizo más que profundizar los consensos en relación a la necesidad de implementar políticas públicas con miras a reducir las brechas de género dentro del trabajo remunerado y reconocer la importancia de todo el trabajo no remunerado que las mujeres realizan al interior de los hogares y de las comunidades en las que habitan. En este sentido, muchos de los programas y políticas públicas que se implementaron desde el gobierno nacional comenzaron a considerarlas como sujetos específicos, definiendo cupos y priorizando su titularidad en los distintos programas por sobre la de los varones.

En especial, a partir de la articulación entre ministerios durante 2020, se pusieron en marcha diferentes políticas para amortiguar el impacto de la pandemia sobre los ingresos y el empleo de las personas en general, y de las poblaciones consideradas como más vulnerables de manera particular, entre ellas las mujeres. Entre las iniciativas se destacaron transferencias directas e indirectas de recursos monetarios y en especie a la población y/o a sectores económicos (subsidios, créditos, distribución de alimentos, etcétera) y regulaciones de las condiciones de trabajo (prohibición de despidos y suspensiones, regulaciones al teletrabajo, etcétera). En 2021, muchas de esas políticas continuaron implementándose como parte del plan de reactivación e incluso se profundizaron.

Entre las medidas implementadas, las más significativas para las mujeres fueron aquellas que utilizaron la base de receptoras de ANSES (Asignación Universal por Hijo (AUH), por hijo con discapacidad (AUHD), por Embarazo (AUE) o de las jubilaciones mínimas, en donde están sobrerrepresentadas las mujeres) para realizar y/o ampliar transferencias monetarias. Tal es el caso del pago de distintos bonos y reintegros para receptoras de AUH y AUE, la implementación de la Tarjeta Alimentar dirigida a la misma población y el pago de bonos y reintegros para personas jubiladas con el haber mínimo. Otro programa de transferencia de ingresos que priorizó población femenina fue el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

En lo que respecta a la AUH, AUHD y AUE, el impacto sobre la población de mujeres fue muy importante en tanto este programa prioriza la titularidad femenina en caso de que la tenencia del niño/a sea compartida por madre y padre. Esto redundó en que, del total de personas que cobran la prestación, 93 % son mujeres, que tienen hijos/as y pertenecen a hogares de bajos ingresos (datos de SIEMPRO 2021). Durante 2020, ANSeS pagó un bono equivalente a una prestación de AUH adicional, adelantó el descuento del 20 % mensual por cumplimiento de condicionalidades y reintegró hasta el 15 % del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

A estas transferencias de ingreso hay que sumarle la *Tarjeta Alimentar*. Si bien, en la resolución que creó el programa no se prioriza la titularidad femenina, este dispositivo se aplicó a las titulares de cobro de la AUH, por lo tanto, fue un programa prácticamente feminizado que consistió en la transferencia de ingresos a hogares con niños/as de hasta 6 años para la compra de bebidas y alimentos. En 2021 se ejecutó un bono extraordinario de 15 mil pesos para personas que cobraban la prestación y residían en localidades del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que se encontraban en fase 2, se sostuvieron los reintegros, se amplió la cobertura de la prestación al eliminar el tope del quinto hijo/a y reducir el tiempo mínimo de residencia que deben garantizar migrantes para acceder al programa y se amplió hasta 14 años la edad de la *Tarjeta Alimentar*.

En lo que respecta a las jubilaciones y pensiones, también se ejecutaron bonos para completar los ingresos de las jubilaciones mínimas, se incluyó a esta población dentro del esquema de reintegros del IVA (previamente mencionado para perceptoras de AUH, AUE y AUD). Si bien, los bonos y reintegros beneficiaron a todas las personas que cobraban la mínima, las mujeres están sobrerrepresentadas en esta categoría (el 68 % son mujeres) y de allí su importancia. A su vez, en 2021 se implementó el *Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Aporte por Tareas de Cuidado*, que amplió el acceso a la jubilación de las mujeres al reconocer de 1 a 3 años de servicios por hijo/a, a las que estén en edad jubilatoria.

Tal como se ha mencionado, otro programa importante fue el IFE, novedad de la pandemia, en tanto el resto de los programas que se utilizaron para sostener ingresos y/o trabajo se implementaban con anterioridad. El IFE fue altamente masivo – alcanzó a casi 9 millones de personas – y por primera vez, la distribución de ingresos no estuvo supeditada al cumplimiento de contraprestaciones. A través del IFE se transfirió un bono de 10 mil pesos (el 50 % del Salario Mínimo, Vital y Móvil [SMVyM] en ese momento) a personas desocupadas, que trabajaban en la informalidad, eran monotributistas de las categorías más bajas y/o cobraban la AUH, AUE y/o AUD o trabajaban en casas particulares. Este bono se pagó tres veces (abril/mayo, junio y agosto de 2020) y luego se discontinuó. Dentro de cada hogar solo una persona podía cobrarlo y se priorizó la titularidad femenina;<sup>[5]</sup> sin embargo, del total de perceptores solo el 55.7 % fueron mujeres.

Además de los programas que buscaron distribuir ingresos mediante transferencias, se pusieron en práctica otros para contener a los sectores más informalizados en la producción y el empleo. Este

[5] Según establece la resolución SSS 8/20, «El IFE se otorgará y abonará preferentemente a la solicitante mujer, cuando la prestación sea solicitada por más de un miembro del grupo familiar».

es el caso del programa *Potenciar Trabajo* que, aunque se creó meses antes de la pandemia, se utilizó durante todo 2020 y 2021 como una política de fomento a las actividades socioproductivas y se le incorporaron distintos bonos.<sup>[6]</sup> El Programa implica la transferencia de un Salario Social Complementario (equivalente al 50 % del SMVyM) para aquellas personas que realicen trabajos en el marco de proyectos socioproductivos, sociocomunitarios, sociolaborales o de terminalidad educativa.

Según datos del Ministerio de Desarrollo Social (2020) alrededor del 66 % de las personas que participan del *Potenciar Trabajo* son mujeres. Además, en el marco del Programa, a finales de 2020 se implementó la ley Ramona, que establece un bono mensual de 5 000 pesos para las personas que participan en el programa dentro de la rama de trabajos sociocomunitarios y de cuidados en comedores, merenderos y centros comunitarios. Este bono se pagó como parte del Salario Social Complementario durante diciembre de 2020 y todo 2021.

También hacia los sectores más formalizados, en abril de 2020, el Poder Ejecutivo Nacional creó el programa de *Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción* (ATP). Este estuvo destinado a empresas afectadas del sector privado – a quienes se les subsidió salarios y se les postergó o redujo hasta en un 95 % el pago de contribuciones patronales – y trabajadores/as independientes formales a quienes se le otorgó créditos a tasa cero y/o a tasa subsidiada. Con este programa se benefició a aproximadamente 230 000 empresas y a 2,3 millones de empleadas/os. Asimismo, junto con el ATP, se actualizaron los montos de las prestaciones por desempleo que perciben más de 100 000 personas y se prorrogaron los vencimientos para el cobro de esta prestación (ANSES 2020).

Entre las iniciativas sectoriales, cabe señalar que a través del ATP se dio un tratamiento diferencial a actividades del sector industrial, comercial, metalúrgico/acero, hoteles/turismo y construcción – como vimos en apartados anteriores, sectores muy afectados al inicio de la emergencia sanitaria y altamente masculinizados y/o en situación de paridad – en donde el ATP se acompañó con «acuerdos de suspensión – negociados junto a sindicatos y cámaras empresariales – reducciones en las cargas sociales de las empresas y esquemas de prohibición formal de despidos y suspensiones unilaterales» (Etchemendy et al. 2021).

---

[6] tres bonos de 3 000 pesos (en marzo, junio y julio de 2020), un bono de 9.450 pesos (en diciembre de 2020), un bono de 6 000 pesos en julio de 2021 y un último bono de 8 000 pesos en diciembre.

El ATP estuvo destinado a sectores con alta formalización, la mayoría de los cuales están masculinizados. Sin embargo, el Programa planteó un esquema de subsidios a los salarios que se propuso beneficiar más a los colectivos con salarios menores a la media. Esto implicó que se subsidiara más el salario en el caso de las mujeres en términos relativos – las personas jóvenes y las empresas de menor tamaño – justamente porque son quienes reciben menos ingresos por las labores que realizan.<sup>[7]</sup>

Si bien, en noviembre de 2020, superados los meses más álgidos de la pandemia, el ATP se convirtió al REPRO II, continuó vigente a través de líneas específicas para algunos de los sectores de actividad más damnificados. Este fue el caso de la *ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva a la Actividad Turística Nacional*, que se implementó en octubre de 2020. También se incorporó el *Bono Fiscal Vacacional*, el *Plan de Preventa* para la reactivación del turismo interno y moratorias impositivas y beneficios fiscales, con el objetivo de colaborar con la reactivación del sector que, como se mostró líneas arriba, fue muy golpeado por la pandemia en términos productivos.

Por su parte, hasta enero de 2021, el REPRO II brindó asistencia a los sectores afectados considerados «no críticos». A partir de este momento, el Programa sumó a sectores críticos y a efectores de la salud, por lo que su cobertura se expandió y aumentó su presupuesto: entre diciembre de 2020 y enero de 2021 prácticamente se triplicó la cantidad de empresas beneficiarias, de trabajadores/as vigentes y el monto ejecutado en esta medida. En lo relativo a la cobertura del Programa según el género, durante los meses de noviembre y diciembre de 2020 las mujeres representaron 2/3 del total de trabajadores/as (66 %). Esta tendencia cambió en los primeros meses de 2021, cuando se estableció una relación más paritaria entre mujeres y varones, cercana al 50 %.

En el caso de aquellas actividades que no pudieron continuar efectuándose por estar restringidas ni realizarse en forma de teletrabajo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estableció un régimen simplificado y créditos a tasa cero para pequeños contribuyentes y trabajadores/as autónomos/as que alcanzó a más de 600 000 personas. También se estableció como obligatorio el pago de los salarios completos y la prohibición de despidos y suspensiones sin justa causa. Además, se diseñaron regulaciones específicas en relación a las actividades esenciales, al teletrabajo y a las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART) en el sector de la salud.

Mientras tanto, también en 2021, se lanzó el programa *Registradas*. Un programa específico destinado al sector de las trabajadoras de

[7] En este sentido, el Estado Nacional cubrió el 65,3 % del salario de las mujeres (en promedio), cuando en los varones esa cifra fue del 58,9 % (MDS 2020).

casas particulares, que, como vimos, es altamente feminizado, tiene una alta tasa de informalidad y fue muy afectado por la crisis sanitaria y uno de los que tuvo una recuperación más lenta, quedando muy por debajo en cuanto a los puestos de trabajo en relación a la prepanemia. El *Registradas* busca fomentar el registro de las mujeres que trabajan en el sector, garantizar el acceso y permanencia al empleo registrado de las trabajadoras de casas particulares y su inclusión financiera. Para ello el Estado cubre entre el 30 % y el 50 % del salario mensual de las trabajadoras recién contratadas. Este Programa se implementó durante el período de reactivación (2021 en adelante) y continúa vigente a la hora de escribir este capítulo.

Finalmente, se otorgaron distintos bonos a trabajadoras/es del sector salud que, a diferencia de las políticas analizadas anteriormente, más que para sostener o reactivar el empleo de la actividad fueron para compensar el trabajo extraordinario que tuvieron que realizar en el marco de la pandemia. Teniendo en cuenta que es uno de los pocos sectores feminizados, esta política sirvió para mejorar los ingresos y compensar el trabajo de cuidado que, en general, realizan las mujeres también dentro del sector productivo mercantil.

Reconociendo el impacto que el confinamiento tuvo en la organización del hogar, se dispuso una licencia laboral para tutores que fueran asalariados/as formales. Su objetivo fue facilitar las tareas de cuidado ante su incremento durante el confinamiento, tanto para quienes realizaban teletrabajo y/o participaban de actividades definidas como esenciales. A su vez, esto fue importante en la etapa de flexibilización para que las familias pudieran conciliar las diferentes temporalidades que se definieron respecto a la vuelta al trabajo y la vuelta de los servicios de enseñanza y cuidados.

### 13.6 Consideraciones finales

Este capítulo estudió las brechas de desigualdad laboral vinculadas al género durante la crisis generada por COVID-19 en la Argentina. El análisis realizado nos permite afirmar que la pandemia sanitaria y las medidas para evitar la propagación del virus tuvieron un impacto diferencial en el empleo de mujeres y varones en detrimento de las primeras, quienes además se vieron más afectadas en relación al incremento de las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas que realizan al interior de sus hogares o en las comunidades a las que pertenecen.

Entre los factores que explican el impacto diferencial de la crisis sobre el empleo de las mujeres se encuentran: la profundización del trabajo doméstico y de cuidados, la segmentación laboral horizontal que presentan los distintos sectores de actividad – en relación con

su mayor/menor feminización/masculinización como un rasgo estructural del mercado de trabajo argentino – la mayor informalidad de sus empleos y el impacto sectorial heterogéneo de la crisis y de las medidas implementadas para atenuar la propagación del virus en las distintas ramas de actividad.

En relación con las trayectorias laborales sectoriales, el resultado hallado es que con la emergencia de la crisis sanitaria los varones tuvieron un deterioro laboral levemente mayor que las mujeres: sus tasas de actividad y de empleo se contrajeron un poco más la desocupación aumentó en mayor proporción. Sin embargo, estos continuaron manteniendo su ventaja estructural respecto a las mujeres y tuvieron una recuperación más rápida que les permitió crecer por encima del nivel de empleo de prepandemia en 2021. Esta evolución de los indicadores laborales masculinos se explica en gran medida porque las ramas de actividad en las que están sobrerrepresentados los varones (tales como construcción; industria manufacturera y transporte, almacenamiento y comunicaciones) se vieron más afectadas durante el ASPO pero rápidamente comenzaron un sendero de recuperación.

En contraposición, las mujeres tuvieron más pérdidas de puestos de trabajo en los sectores de servicio doméstico, comercio y hoteles y restaurantes y a medida que se flexibilizaron las restricciones (a partir del tercer trimestre de 2020), para las mujeres la recuperación fue más lenta y parcial (en 2021 se recuperaron el 98.7 % de los empleos de prepandemia) y los efectos negativos de la crisis sobre su empleo se mantuvieron más tiempo que en el caso de los varones. No obstante, ciertos sectores de actividad de gran participación femenina (servicios sociales y de salud; enseñanza; y administración pública y defensa) tendieron a adaptarse y habilitarse para continuar desarrollándose bajo la modalidad de teletrabajo o se declararon sectores esenciales. En este sentido, no se vieron afectadas en términos de pérdidas de las ocupaciones, más sí lo fueron en términos de sus condiciones de trabajo.

Por otra parte, como contrapunto a lo ocurrido en otros contextos de crisis en los cuales las políticas de ajuste suelen profundizar los impactos regresivos, la política social tuvo un rol relevante en pos de atenuar los efectos económicos adversos de la pandemia para los sectores más vulnerables. Además, las políticas públicas que se implementaron tanto durante el ASPO, el DISPO y el período de recuperación posterior estuvieron atravesadas por ciertos avances institucionales respecto a la perspectiva de género.

Resulta significativo reconocer la importancia de la creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, de áreas de género en diversos organismos del Estado y la aprobación del primer presupuesto con perspectiva de género y diversidad. Estos avances se

plasmaron, por ejemplo, en la priorización que, a diferencia de lo ocurrido en otros períodos, se dio a las mujeres en el acceso a algunos programas y el impulso por mejorar las condiciones de trabajo de aquellos sectores altamente feminizados y con alta informalidad, como ocurre en el caso del programa Registradas destinado al sector de trabajadoras de casas particulares.

Sin embargo, la crisis puso al descubierto que existen materias pendientes en cuanto a políticas públicas con perspectiva de género, en lo que respecta a

- 1) la colectivización de las tareas domésticas y de cuidado al interior de los hogares (como pueden ser la extensión de las licencias vinculadas con responsabilidades de cuidado, en especial en las licencias por paternidad, parentales y familiares) y el rol fundamental del Estado para garantizar el derecho al cuidado (donde la provisión de servicios públicos de cuidado tiene una importancia fundamental);
- 2) una mayor participación y continuidad laboral de mujeres y diversidades en más sectores de actividad y con mejores condiciones de trabajo;
- 3) problematizar la reproducción de ciertos estereotipos de género y el refuerzo de la división sexual del trabajo de algunas políticas públicas.

## Referencias

### ANSES

- 2020 «Caracterización de la población beneficiaria en la Provincia de Buenos Aires (PBA)», en *Boletín IFE PBA I-2020*, referencia citada en página 347.

### BONAVITTA, PAOLA y GABRIELA BARD WIGDOR

- 2020 *Cuidados, usos del tiempo y trabajos en cuarentena*, Cuestionario virtual realizado durante una semana en abril de 2020, referencia citada en página 339.

### CELAG

- 2020 *Encuesta Panorama político y social en Argentina. Estudios cualitativos de opinión América Latina*, referencia citada en página 339.

### COSTANTINO, AGOSTINA MARÍA

- 2019 «Entre la estructura y la coyuntura: el comportamiento de los sectores económicos durante el gobierno de Cambiemos», en *La economía política de Cambiemos. Ensayos sobre un nuevo ciclo neoliberal en Argentina*, Buenos Aires: Batalla de Ideas, referencia citada en página 334.

## DNEIYG

- 2020 *Las brechas de género en la Argentina. Estado de situación y desafíos*, Buenos Aires: Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Argentina, referencia citada en páginas 329, 339.
- 2021 *Mesa Federal de Políticas Económicas con perspectiva de género. Recuperación económica para la igualdad*, Buenos Aires: Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género. Ministerio de Economía de la República Argentina, referencia citada en página 338.
- 2022 *Protagonistas del crecimiento. Las brechas de género en la economía argentina. Cuarto trimestre 2021*, Buenos Aires: Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género. Ministerio de Economía de la República Argentina, referencia citada en página 340.

## DRIS-FCM-FTS-UNLP

- 2020 *Los trabajadores y las trabajadoras de la salud en tiempos de pandemia (COVID-19). Relevamiento de la situación en La Plata, Berisso y Ensenada*, Buenos Aires: Universidad Nacional de La Plata, referencia citada en página 337.

## EAHU-INDEC

- 2014 *Encuesta sobre Trabajo no Remunerado y Uso del tiempo. Resultados preliminares. Tercer trimestre de 2013*, Buenos Aires: INDEC. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, referencia citada en página 329.

## EAST, LAURENCE Y MOURELO LÓPEZ

- 2020 «COVID-19 y la situación de las trabajadoras de la salud en Argentina», en *Informe Técnico de la OIT, UNFPA y ONU-Mujeres*, referencia citada en página 337.

## ENUT-INDEC

- 2022 *Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2021. Resultados Preliminares*, Buenos Aires: INDEC. Ministerio de Economía, referencia citada en página 330.

## ESPINO, ALMA

- 2012 «Perspectivas teóricas sobre género, trabajo y situación del mercado laboral latinoamericano», en *La economía feminista desde América Latina: una hoja de ruta sobre los debates actuales en la región*, coord. por Valeria Esquivel, Santo Domingo: GEMLAC y ONU MUJERES, referencia citada en página 329.

## ETCHEMENDY, SEBASTIÁN; CATALINA ESPINOSA Y FEDERICO PASTRANA

- 2021 *Coordinada, liberal, asistencialista y residual. Política, economía y estrategias sociolaborales frente al COVID-19 en América Latina*, Fundar, referencia citada en página 347.

FERNÁNDEZ MASSI, MARIANA y PAULA BELLONI

- 2022 *La desigualdad del trabajo tiene género: la inserción laboral argentina en tiempos de crisis*, Instituto Tricontinental de Investigación Social, referencia citada en página 335.

GAGO, VERÓNICA

- 2019 *La potencia feminista o el deseo de cambiarlo todo*, Buenos Aires: Tinta Limón, referencia citada en página 344.

GÁLVEZ MUÑOZ, LINA y PAULA RODRÍGUEZ-MODROÑO

- 2012 «La desigualdad de género en las crisis económicas», en *Investigaciones Feministas*, n.º 2, págs. 113-132, referencia citada en páginas 331, 333.

GOREN, NORA y DAVID TRAJTEMBERG

- 2018 *Brecha salarial según género. Una mirada desde las instituciones laborales*, Buenos Aires: FES, referencia citada en página 329.

INDEC

- 2020 *Estudio sobre el impacto de la COVID-19 en los hogares del Gran Buenos Aires, Primer informe de resultados*, Buenos Aires, referencia citada en página 339.

MDS

- 2020 *Potenciar Trabajo, inclusión laboral y acceso al crédito no bancario*, Buenos Aires: Ministerio de Desarrollo Social de Argentina, referencia citada en páginas 347, 348.

MTEYSS

- 2018 *Mujeres en el mercado de trabajo argentino*, Buenos Aires: Dirección General de Estudios Macroeconómicos y Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de Argentina, referencia citada en página 329.

OTTAVIANO, JUAN MANUEL

- 2020 «Teletrabajo y cuidados», en *Cuidados y mujeres en tiempos de COVID-19. La experiencia en la Argentina*, referencia citada en página 337.

PAUTASSI, LAURA

- 2007 *¡Cuánto trabajo mujer! El género y las relaciones laborales. Claves para todos*, Buenos Aires: Capital Intelectual, referencia citada en página 329.

RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ, CORINA

- 2019 «Trabajo de cuidados y trabajo asalariado. Desarmando nudos de reproducción de desigualdad», en *Theomai*, n.º 39, págs. 78-99, referencia citada en páginas 329, 333, 335.

SABARWAL, SHWETLENA; NISTHA SINHA y MAYRA BUVINIC

- 2011 «How Do Women Weather Economic Shocks? What We Know», en *Economic Premise*, n.º 46, referencia citada en página 332.

SIEMPRO

- 2021 *Asignación Universal por Hijo/a Discapacidad y Embarazo. Reporte de Monitories Primer Trimestre 2021*, Buenos Aires: Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, referencia citada en página 345.

## CAPÍTULO 14

# Pandemia y desigualdad en el universo del empleo registrado privado en Argentina

DEBORAH NOGUERA\* y FACUNDO BARRERA INSUA\*\*

### 14.1 Introducción

La crisis económica y social provocada por la pandemia de COVID-19 ha marcado intensos cambios en el mercado de trabajo argentino, profundizando los efectos adversos de la «crisis prepandemia». Los impactos en términos de salarios y empleo han sido notables; sin embargo, esta tendencia no ha sido homogénea en las distintas regiones del país ni por ramas de actividad.

La dinámica del mercado de trabajo argentino, caracterizado por una masiva presencia de trabajadores no registrados, desprotegidos de la seguridad social, ha sido estudiada e interpretada como un factor que agudizó el impacto en términos de desigualdad. Este tipo de inserciones, sumamente significativas en los mercados laborales latinoamericanos, sufrieron la mayor caída de ingresos durante la pandemia (OIT 2020), a pesar de las políticas implementadas para el sector (Arcidiácono y Gamallo 2020; Beccaria y Mauricio 2020), exacerbando la desigualdad económica estructural. En este sentido, gran parte de los estudios desarrollados hasta el momento han puesto el ojo en esta explicación. Menos se ha indagado sobre lo que ha generado la crisis desatada por la pandemia al interior de la clase trabajadora registrada, y cómo ha repercutido en el heterogéneo y

---

\* Becaria doctoral del CONICET en el Laboratorio de Estudios en Sociología y Economía del Trabajo (LESET, IdIHCS-UNLP/CONICET).

\*\* Investigador del CONICET en el Laboratorio de Estudios en Sociología y Economía del Trabajo (LESET, IdIHCS-UNLP/CONICET).

extenso territorio nacional, caracterizado por una población concentrada en pocos grandes centros urbanos y áreas económicas locales con realidades antagónicas.

Con la intención de realizar un aporte a lo que entendemos como una vacancia, en el marco del Proyecto PISAC-COVID-19-00085 «Programa de Investigación Regional Comparativa (PIRC): Cambios recientes en la estructura social argentina: trabajo, ingresos y desigualdad social en tiempos de pandemia y pospandemia» (en adelante, Proyecto PISAC-COVID-19 085), venimos construyendo una línea investigativa<sup>[1]</sup> con las siguientes preguntas: ¿puede pensarse, *a priori*, que el movimiento general de la desigualdad de ingresos se reprodujo de la misma manera entre trabajadoras y trabajadores asalariados privados formales que se desenvuelven en distintas regiones y sectores económicos a lo largo del país? ¿Es posible encontrar que dinámicas propias de este «privilegiado» universo – tanto en condiciones laborales como en salarios de las distintas ramas de actividad – puedan cumplir un papel relevante en la explicación de la desigualdad salarial?

Al respecto, [Barrera Insua et al. \(2022\)](#) encontraron que el movimiento de la desigualdad del grupo de trabajadores/as analizado, llevó una dirección contraria al movimiento general. Como hipótesis sugieren que las suspensiones y los ajustes en salarios que se produjeron en el primer momento del parate económico – ocasionado por la pandemia y las decisiones de política pública sanitaria – se dieron en sectores de menor precariedad, salarios más altos y mayor nivel de organización sindical, mientras que los ajustes en empleo coinciden con sectores de menor organización sindical, salarios menores y mayor precariedad (uno a otro se refuerzan). Ambas situaciones propiciaron la disminución de la desigualdad salarial entre empleados registrados del sector privado.

Por tanto, en este capítulo nos proponemos profundizar las indagaciones sobre el impacto de la crisis del COVID-19 en la desigualdad salarial en el universo de trabajadores asalariados registrados del sector privado. En particular, buscamos reconocer y aportar una clave explicativa a las disparidades que aparecen entre regiones, tomando en cuenta, además, las especificidades sectoriales entre regiones. Para ello, en la segunda sección recurrimos al Índice estadístico de Theil, el cual admite una descomposición por subgrupos de trabajadores/as y, en consecuencia, permite identificar los aportes a la desigualdad de cada uno de ellos. Este indicador se construye a partir de la información proveniente de registros administrativos que refiere a los ingresos de los y las trabajadoras registradas del sector privado (Sistema Integrado Previsional Argentino [SIPA], MTEySS).

[1] Un antecedente directo es el trabajo de [Barrera Insua et al. \(2022\)](#).

Luego, en la tercera sección utilizaremos los microdatos de la encuesta elaborada en el marco del Proyecto PISAC-COVID-19 085 – la cual releva información referida a ocupaciones, ingresos, sector de actividad, sindicalización y tamaño del establecimiento, entre otras – con la intención de caracterizar las modificaciones en los ingresos y en las condiciones de trabajo de los distintos grupos definidos en la segunda sección durante el contexto de aislamiento social. Por último, en las reflexiones finales buscaremos destacar las características particulares de los impactos en el universo de trabajadores y trabajadoras estudiado como consecuencia de la pandemia.

## 14.2 Marco analítico y estrategia metodológica

La evolución de la desigualdad en los ingresos fue trabajada de manera abundante. En el segundo trimestre de 2020, donde fueron más estrictas las restricciones producto de las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), la desigualdad de ingresos se incrementó, tanto respecto del trimestre previo como de igual período de 2019. No obstante, ese resultado esperado para el conjunto de trabajadores y trabajadoras – asalariados/as, no asalariados/as, privados y públicos, formales e informales – y patrones, no necesariamente se replica al analizar un subgrupo de aquel conjunto poblacional.

En este capítulo presentamos lo sucedido entre quienes poseen un empleo formal en empresas privadas radicadas en el país, tomando en cuenta las dimensiones sectorial y regional. Esto se fundamenta centralmente en dos motivos. En primer lugar, el sector del empleo privado asalariado formal representa más del 30 % de los/as ocupados/as y es necesario comprender cómo la pandemia afectó también a quienes se encuentran en situaciones laborales más estables. Más aún, teniendo en cuenta que la dinámica de los ingresos en los diferentes sectores y regiones del país no necesariamente tiene el mismo comportamiento que el que se observa a nivel global ([Barrera In-sua 2018](#)). A su vez, con el objetivo de aminorar el impacto de la crisis en el empleo, el Estado Nacional implementó un conjunto de políticas que tuvieron a este grupo de trabajadores/as como destinatarios/as (además de las medidas dirigidas a los sectores más desprotegidos, como el Ingreso Familiar de Emergencia, el Programa Alimentar, entre otras). Entre ellas se destacan el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), reconvertido en el Programa de Recuperación Productiva 2 (REPRO 2), el salario complementario para asalariados privados (50 % a cargo del Estado), prestamos a MiPyMes y créditos a tasa 0 para autónomos y monotributistas. En este contexto, cabe esperarse que las mismas

contribuyan a generar un impacto diferencial respecto al conjunto de trabajadoras y trabajadores no registrados.

Por otro lado, dada la naturaleza de la crisis y las distintas medidas de política sanitaria tomadas por el gobierno según la región del país de que se tratase, el impacto parece haber sido diferencial en distintos puntos del país y por sector de actividad. Estas disparidades responden a un proceso de conformación territorial históricamente desigual, lo cual ha configurado mercados de trabajo dispares, asociados a la distribución espacial de la población y a las ramas y sectores de actividad que se ubican de manera heterogénea en distintos puntos del país (Noguera y Pedrazzi 2019, 2020). El empleo registrado específicamente, presenta mayor relevancia relativa en la Patagonia y en el AMBA, y menor incidencia en la región Norte del país, donde la actividad se desenvuelve con menores niveles de desarrollo tecnológico e industrial. Es en este sentido, que la distribución espacial de los sectores de actividad es un factor relevante a la hora de analizar las disparidades regionales.

#### 14.2.1 Sobre el indicador de desigualdad

Para abordar la problemática de la desigualdad al interior del sector formal se utiliza el Índice de Theil. Se trata de una medida de desigualdad basada en la distribución total del ingreso y, cuando los miembros de la población pueden ser clasificados en grupos mutuamente excluyentes y completamente exhaustivos, permite trabajar con datos agrupados. Al mismo tiempo, tiene la ventaja de admitir el análisis de datos agregados y, por lo tanto, de la información de salarios proveniente de registros administrativos,<sup>[2]</sup> en línea con la información estadística disponible para este segmento de empleo en nuestro país.<sup>[3]</sup>

Como se mencionó, el Theil ( $T$ ) puede descomponerse en dos: el componente «entre grupos» o *between* e «intra grupos» o *within*.

[2] Un registro administrativo es un conjunto de datos que se obtienen de formularios diseñados por organismos administrativos de acuerdo a una ley, regulación o norma. Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Año 2021.

[3] Formalmente, el Índice de Theil ( $T$ ) se define como:  $T = (1/n) \sum_i \omega_i (w_i/\mu) \ln(w_i/\mu)$  donde  $n$  es el número de unidades,  $i$  es el ponderador del ingreso por unidad,  $w_i$  es el ingreso de la unidad  $i$  y  $\mu$  representa el ingreso medio del conjunto de datos. El indicador toma valores entre 0 y  $[\ln(n)]^2$ , indicando perfecta igualdad en el primer caso (todas las unidades perciben el mismo ingreso) y desigualdad máxima en el segundo (es decir, solo una unidad posee todo el ingreso de la sociedad).

En este capítulo trabajaremos con el segundo componente que formalmente puede expresarse como:

$$T'_g = \sum_{i=1}^m \left\{ \left( \frac{p_i}{P} \right) * \left( \frac{y_i}{\mu} \right) * \ln \left( \frac{y_i}{\mu} \right) \right\}$$

donde  $i$  representa el  $i$ -ésimo grupo,  $p_i$  es la cantidad de miembros que lo componen,  $P$  es el total de la población,  $y_i$  es el ingreso medio del grupo y  $\mu$  es el ingreso medio de la población de referencia.

El componente  $T'_g$  representa la desigualdad entre los subgrupos de la población bajo estudio y se calcula a partir de datos de ingresos medios para cada uno de ellos, ponderados por su importancia relativa en términos de empleo; es decir, el tamaño de cada subgrupo en el universo analizado. Así, el índice permite determinar la contribución de cada elemento a la desigualdad (en nuestro caso una región o un sector de actividad), la que se puede apreciar mediante la participación en un gráfico de barras apiladas.

Por último, dado que el interés se centra en la observación de los movimientos de la desigualdad y no en su nivel, se pone atención en la variación de  $T'_g$ . En este sentido,  $T$  y  $T'_g$  están altamente correlacionados en el tiempo, por lo que los valores que reporta el componente «entre grupos» serán entendidos como el piso de la desigualdad, pudiendo a través del mismo aproximar los movimientos de  $T$  (Conceição y Galbraith 2012; Galbraith 1998).

#### 14.2.2 Sobre la información trabajada

El análisis se aborda a partir de las variables territorial y sectorial, las cuales determinan los subgrupos para la construcción y descomposición del Índice de Theil. Las regiones integrantes son Gran Buenos Aires (GBA), Región Pampeana, Patagonia, Cuyo, Nordeste Argentino (NEA) y Noroeste Argentino (NOA), tal como fueron definidas en el Proyecto PISAC-COVID-19 085. Mientras que en lo que se refiere a la dimensión sectorial se analiza a nivel de grandes sectores del PBI: A - agricultura, ganadería, caza y silvicultura; B - pesca; C - explotación de minas y canteras; D - industria manufacturera; E - electricidad, gas y agua; F - construcción; G - comercio mayorista, minorista y reparaciones; H - hoteles y restaurantes; I - transporte y comunicaciones; J - intermediación financiera; K - actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; M - enseñanza; N - servicios sociales y de salud; y O - otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales.

La información para el análisis realizado en este capítulo proviene centralmente de dos fuentes. La primera de ellas, consiste en los datos publicados por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial

(OEDE) dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y correspondientes a los registros administrativos de la seguridad social provenientes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La información corresponde al universo de 6,4 millones de trabajadores/as asalariados/as registrados/as del sector privado,<sup>[4]</sup> que se desempeñan en empresas de los sectores de industria, comercio y servicios radicadas en todo el país. Para la clasificación del empleo por provincia, se consideran las zonas donde las empresas declaran que trabajan sus empleados y, a partir de dicha información, se agrega para conformar las regiones definidas previamente.

Al mismo tiempo, se trabaja con los microdatos de la Encuesta nacional sobre la Estructura social de Argentina y Políticas públicas durante la pandemia por COVID-19 (ESAyPP/PISAC-COVID-19) relevada en la Argentina urbana entre octubre y diciembre de 2021. La encuesta abarcó un total de 5 239 hogares y personas adultas distribuidas en todo el territorio nacional y con dominio de estimación a nivel nacional, por regiones y por tamaño de los aglomerados.<sup>[5]</sup>

Además de brindar información a nivel individual, la base permite indagar más profundamente sobre las características de la población que conforma el segmento del mercado de trabajo bajo estudio, a la vez que brinda la oportunidad de trabajar con información actualizada referida a la participación tasa de sindicalización por sector de actividad. Esto implica un aporte valioso, ya que las estadísticas oficiales de Argentina contienen relevamientos esporádicos, muchas veces incomparables entre sí, y no permitían contemplar el momento de la pandemia.

Los datos procesados de la información estadística proveniente de registros administrativos son trimestrales y corresponden al período comprendido entre el 1er trimestre 2016 y el cuarto trimestre de 2021. En cuanto a la información de la encuesta, la misma se realizó durante los meses de octubre y diciembre de 2021 y recogió información de ingresos correspondientes al mes previo al relevamiento.

---

[4] Fuente: OEDE-SIPA. El valor corresponde al promedio entre el primer trimestre de 2016 y el cuarto trimestre de 2021 de la serie sin estacionalidad. El número trimestral de trabajadores/as registrados/as fluctúa en un rango de 6,7 millones (IV trimestre de 2017) y 6,1 millones (III trimestre de 2021) con una media de 6,4 millones en el período mencionado.

[5] Para poder profundizar en el diseño teórico-metodológico de la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 elaborado por los equipos de investigación de los proyectos PISAC-COVID1-9 085 y 021, véase [Dalle y Di Virgilio \(2022\)](#).

### 14.3 La desigualdad al interior del universo del trabajo en el sector privado registrado

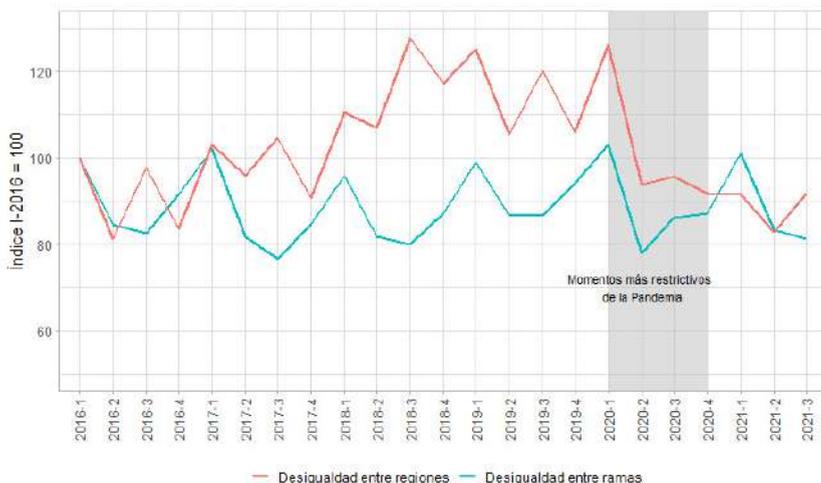
La desigualdad de ingresos en la Argentina reflejó el impacto de la pandemia COVID-19 y las medidas sanitarias relacionadas: en un sendero de constante incremento desde el año 2017, el segundo semestre de 2020 registró el valor más alto del período – 0.451 según coeficiente de Gini del ingreso *per cápita* familiar (ipf) – y la brecha de ingresos entre el promedio del decil 10 y el decil 1 del ipf pasó de 19 veces en el segundo trimestre de 2016, a 25 veces en igual semestre de 2020, momento a partir del que empezó a caer.<sup>[6]</sup> Al igual que en otros países de la región y el mundo, el fenómeno fue explicado por un impacto directo en los empleos más desprotegidos con caída de la ocupación, incremento de la desocupación, y un importante aumento de la inactividad, explicado por quienes dejaron de buscar trabajo.

Si bien dicha evolución para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras es conocida,<sup>[7]</sup> no lo es tanto lo sucedido con la desigualdad de ingresos entre trabajadoras y trabajadores registrados del sector privado, quienes se desempeñan en distintas ramas de actividad y viven en diferentes regiones del país. Tal como se observa en el gráfico 1, desde el 2016 y hasta el impacto de la pandemia, la trayectoria de la desigualdad para este universo más restrictivo y homogéneo de trabajadores, venía siendo la misma que la general, en particular la que se refiere a la desigualdad entre ramas. Sin embargo, durante el año 2020, en el contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO, decreto 297/20), la desigualdad salarial sectorial y regional cayeron. Esto se puede apreciar en la evolución del componente *between* del Índice de Theil para los subgrupos «ramas de actividad» y «regiones», donde la primera de dichas dimensiones cae 32 puntos porcentuales (pp) y la segunda 25 pp.

Con la intención de analizar las causas de dicho desacople entre curvas en los momentos más restrictivos de la pandemia, observemos en detalle lo sucedido en ambas dimensiones. En lo que respecta a las disparidades entre trabajadores y trabajadoras que viven en distintas regiones del país – aquellas que se habían mantenido relativamente estables durante la etapa previa – se observa que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (principalmente CABA), tradicionalmente favorecida en la estructura de salarios a nivel territorial, en el segundo semestre de 2020 los ingresos medios se vieron más

[6] Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC).

[7] Los ingresos relevados en la EPH provienen de fuentes laborales, ya sean de ocupados asalariados o independientes y no laborales, principalmente jubilaciones y pensiones, y subsidios (Fuente: INDEC).



**Figura 14.1.** Evolución del Índice de Theil «entre grupos» o *between*, para los subgrupos «sectores» y «regiones» (2016-2021). Argentina. Números índices, Trimestre I 2016=100. Fuente: elaboración propia en base a datos de OEDE-SIPA.

afectados en términos relativos. Específicamente, la contribución de esta región a la desigualdad cayó un 17%.<sup>[8]</sup>

Por otra parte, en lo que respecta a las zonas atrasadas salarialmente, la zona Centro explica el mayor aporte a la desigualdad y allí los salarios presentan un crecimiento superior al 10% entre el primer y segundo semestre – lo que implicó una reducción del aporte a la desigualdad del 12% –. Además, la región Pampeana fue la más importante en términos de reducción de la desigualdad: cayó un 34% en el segundo trimestre de 2020 y luego un 52% en el tercero (véase figura 14.2). Nuevamente, en un contexto de contracción del empleo y reducción salarial, en dicha región aparece una caída menor al 5% tomando ambos trimestres y los salarios medios crecen un 10%.

Por otra parte, vale la pena destacar que las temporalidades de los ajustes por región son distintas. Si bien tanto en CABA como en Patagonia, regiones tradicionalmente favorecidas en la estructura de salarios a nivel territorial, los ingresos medios se vieron más afectados en términos relativos, el impacto en la primera se ve en el segundo trimestre, mientras que en la otra se divide entre el segundo y tercero. Asimismo, idéntico proceso se pudo ver en las zonas Centro

[8] La caída relativa de los ingresos de una región o sector con salarios por encima de la media (lo mismo que el aumento relativo en regiones/sectores por debajo de la media), implican caídas en la desigualdad.



**Figura 14.2.** Contribución regional a la desigualdad salarial en Argentina. 1er Trim 2020 a 3er Trim 2021. Fuente: elaboración propia en base a datos de OEDE-SIPA.

y Pampeana, por el lado de los salarios menos favorecidos en la estructura regional.

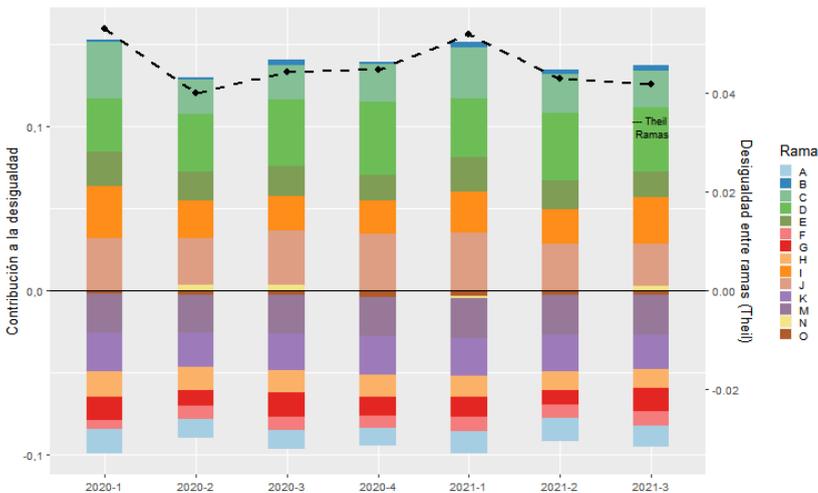
Son variadas las explicaciones que podrían esgrimirse. En primer lugar, los tiempos de la pandemia hicieron que las restricciones tomaran distinta envergadura según el ritmo de contagios en el territorio nacional. Pero además, la heterogénea configuración productiva por regiones del país, hizo que la distinción entre actividades «esenciales» y «no esenciales» repercutiese manteniendo zonas con mayor y menor actividad económica. Un primer «listado de actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, exceptuadas del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular», involucró a la industria de la alimentación, higiene personal y limpieza, equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios; biocombustibles; comercio (con delivery); centrales nucleares y servicios de emergencia sanitaria, entre las principales.<sup>[9]</sup>

En este sentido, se pueden observar en la dinámica de la desigualdad sectorial, de manera más clara, los momentos de impacto y recuperación de la pandemia sobre la actividad económica. En lo que respecta a las actividades que presentan salarios medios por encima

[9] *Boletín Oficial* n.º 34.334 (2020). Aislamiento social preventivo y obligatorio. Disponible en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verBoletin.do?id=34334>.

de la media nacional, se destacan los aportes de minas y canteras, industria, transporte, intermediación financiera y, en menor medida, electricidad, gas y agua.

En el segundo trimestre de 2020, los sectores que se vieron más afectados son el minero, transporte e intermediación financiera – con caídas en las contribuciones a la desigualdad del 39 %, 27 % y 11 %, respectivamente – producto de caídas nominales de los salarios medios en el sector Minero (-11 %) y ajustes muy menores en los restantes (en torno al 5 % de aumento). La Industria en su conjunto, sin olvidar las enormes heterogeneidades que la caracterizan, no se vio afectada sino que observó crecimiento en los salarios medios (13 %) y en la participación del empleo (3 %). Y un último punto a destacar es que durante los trimestres de mayor impacto de la crisis – el segundo y el tercero – un sector tradicionalmente relegado como es el de Servicios sociales y de salud, presentó salarios medios por encima de la media general por no exhibir contracción en empleo e incrementar el salario medio en un 20 % (véase figura 14.3).



**Figura 14.3.** Contribución sectorial a la desigualdad en Argentina. 1er Trim 2020 a 3er Trim 2021. Nota aclaratoria: A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura; B - Pesca; C - Explotación de minas y canteras; D - Industria manufacturera; E - Electricidad, gas y agua; F - Construcción; G - Comercio mayorista, minorista y reparaciones; H - Hoteles y restaurantes; I - Transporte y comunicaciones; J - Intermediación financiera; K - Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; M - Enseñanza; N - Servicios sociales y de salud; y O - Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales. Fuente: elaboración propia en base a datos de OEDE-SIPA.

Por otra parte, las actividades retrasadas en términos de salarios medios, también experimentaron cambios de magnitud. En este segundo grupo se encuentran enseñanza; actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; hoteles y restaurantes; comercio; y agricultura, ganadería, caza y silvicultura, entre las que realizan los principales aportes a la desigualdad. En dicho grupo, las actividades que mejoran posiciones son, principalmente, Comercio y Agricultura, donde la contribución a la desigualdad cae un 32 % y 22 %, respectivamente.

Lo interesante a destacar de la dimensión sectorial es que durante los siguientes 3 trimestres, junto con la recuperación de la economía, se aprecia una «vuelta a la normalidad»: los sectores desfavorecidos con el impacto de la crisis – es decir, aquellos aventajados en la estructura de ingresos laborales – comienzan a recuperar sus posiciones originales, mientras que lo mismo sucede con aquellos sectores atrasados en la escala salarial que fueron beneficiados transitoriamente. En otras palabras, aún a pesar de que el primer trimestre del año 2021 nos encontraba inmersos en la pandemia – la segunda ola comenzó a conformarse en marzo – la desigualdad en ese momento ya exhibía características semejantes a las evidenciadas antes de su comienzo.

Así, según los impactos en desigualdad quedan definidas dos trayectorias diferenciales al interior del universo de trabajadoras y trabajadores asalariados registrados del sector privado: aquellos donde el salario medio del sector se encuentra por encima (sectores aventajados en la escala salarial o grupo 1) o por debajo (sectores desfavorecidos en la escala salarial o grupo 2). Ahora bien, ¿cuáles pueden ser las características diferenciales de cada grupo que explican dichos senderos? En la siguiente sección avanzamos sobre dicha pregunta.

#### **14.4 Trayectorias diferenciales y desigualdad salarial: ¿qué hay por detrás?**

Desde el comienzo planteamos que los acuerdos a los que llegaron las cámaras empresariales y los sindicatos en torno a suspensiones y ajustes en salarios que se dieron en el primer momento del parate económico, podrían haber afectado más a sectores de salarios más altos, menor precariedad y mayor nivel de organización sindical. Mientras que los ajustes en empleo podrían haberse dado en sectores de menor organización sindical, menores salarios y mayor precariedad (uno a otro se refuerzan). Ambas situaciones habrían propiciado la disminución de la desigualdad salarial sectorial entre empleados/as registrados/as del sector privado. A su vez, la sección

anterior permitió analizar el movimiento de la desigualdad en el momento más agudo de la crisis y establecer, a través de la dimensión sectorial, dos subconjuntos de ramas de actividad según letras del PBI: el grupo 1 (G1) integrado por los sectores B, C, D, E, I, J, N; y el grupo 2 (G2) que contiene a A, F, G, H, K, M, O.

La Encuesta nacional sobre la Estructura social de Argentina y Políticas Públicas durante la pandemia por COVID-19 (ESAyPP/PISAC-COVID-19), permite conocer las características de cada uno de estos grupos. A partir de los microdatos, presentamos indicadores sobre las características del empleo, los salarios y la tasa de sindicalización en cada uno de ellos. El cuadro 14.1 permite corroborar que los trabajadores y trabajadoras del G1 se desempeñan en sectores de salarios más altos, con mayor participación de contratos estables, grandes empresas, y más sindicalizados.

**Cuadro 14.1. Caracterización de los diferentes grupos de actividades. Argentina urbana, 4to trimestre 2021.**

Indicador	Grupo 1	Grupo 2
Empleo y salarios medios		
Salario medio	179 164	85 973
Participación en el empleo (%)	37.9	62.1
Sindicalización (%)		
Tasa	47.9	40.0
Características contrato (%)		
Permanente	89.2	83.7
Con fecha de finalización (contrato a término)/temporario	10.8	16.3
Tamaño del establecimiento (%)		
Una sola, empleo o cuenta propia, sin empleados	0.4	1.2
De 2 a 5	3.9	15.1
De 6 a 10	10.9	21.1
De 11 a 50	30.9	38.7
De 51 a 200	27.6	13.3
Más de 200	26.3	10.6
Grupo 1 Ramas: B, C, D, E, I, J, N		
Grupo 2 Ramas: A, F, G, H, K, M, O		

Fuente: elaboración propia en base a datos de ESAyPP/PISAC-COVID-19 y MTEySS/SIPA.

Por lo tanto, las características presentes en cada uno de los grupos, permite reconocer que a pesar de que quienes se encuentran

en el G1 fueron las y los trabajadores que perdieron ocasionalmente con la pandemia, también son quienes estaban en mejores condiciones para recuperar el terreno perdido. La más alta sindicalización, el hecho de que trabajen en empresas de mayor tamaño donde es más probable que existan delegados sindicales, o que tengan contratos estables que favorezca encarar demandas salariales – todos indicadores que se refuerzan unos a otros – permiten esperar dicha situación.

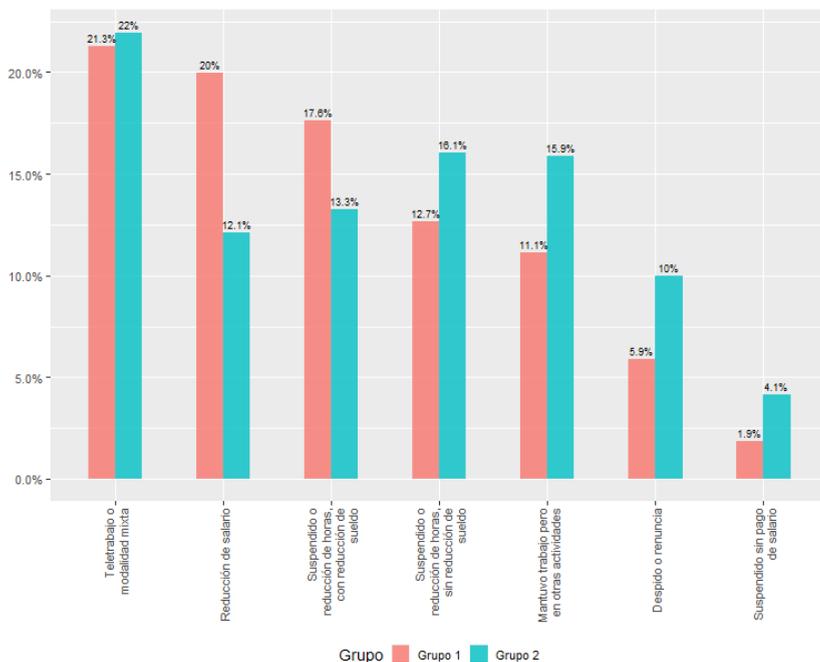
Ahora bien, una vez conocidas las características de cada grupo, es posible indagar cuáles fueron las circunstancias particulares que debieron enfrentar las trabajadoras y trabajadores que los componen. En primer lugar, en lo que se refiere a despidos o renuncia el G2 aparece más afectado, con un porcentaje más amplio (10 % de las y los trabajadores enfrentaron esta situación), algo menos del doble del G1 (5,9 %).

En segundo lugar, en lo que se refiere a suspensiones, en particular aquellas que involucraron reducciones de sueldo, el G1 aparece más afectado (17,6 %) que el G2 (13,3 %). Además, teniendo en cuenta que la pregunta permite realizar respuestas múltiples, la categoría reducción de salario donde en el G1 alcanza a un 20 % de las y los trabajadores y en el G2 a un 12,1 %, vendría a reconfirmar el escenario descrito (véase figura 14.4). Por lo tanto, las respuestas encontradas parecieran reflejar los resultados esperados.

## 14.5 Comentarios finales

La pandemia por COVID-19, junto con las decisiones sanitarias de restricción de la actividad económica que adoptó el gobierno para evitar la circulación del virus, impactó de manera notable en el mercado de trabajo argentino. Explicar la complejidad de dicho impacto requiere miradas de conjunto con foco en aspectos macroeconómicos y sociales, pero también estudiar trayectorias diferenciales, incluso de quienes son percibidos como sectores privilegiados o con mayor protección.

El texto aporta una lectura de la dinámica del universo del trabajo asalariado privado formal, y complementa los textos que, con mayor frecuencia, han aludido al impacto de la pandemia sobre la desigualdad económica con el acento en las disparidades entre trabajadoras y trabajadores registrados y no registrados, o entre sector público y privado. En este sentido, entendemos relevante estudiar un movimiento de la desigualdad salarial de este sector, contrario al comportamiento general. Mientras que la desigualdad de ingresos se incrementó en los trimestres de mayor impacto de la pandemia,



**Figura 14.4.** Situaciones que tuvieron que enfrentar en su trabajo desde que comenzó la pandemia de COVID-19. Trabajadores/as registrados/as del sector privado, por grupo de actividades seleccionadas. Fuente: elaboración propia en base a datos de ESAyPP/PISAC-COVID-19.

las disparidades salariales entre trabajadoras y trabajadores asalariados formales se redujeron. Al respecto, nos preguntamos, ¿qué fenómenos pudieron haber explicado dicha trayectoria diferencial?

Como hipótesis, entendemos que los acuerdos entre cámaras empresariales y sindicatos que involucraron suspensiones con ajustes salariales y se dieron en el primer momento del parate económico, podrían haber afectado en mayor medida a trabajadoras y trabajadores de sectores con salarios más altos, menor precariedad, y mayor nivel de organización sindical. Mientras que los ajustes en empleo podrían haberse dado en sectores de menor organización sindical, menores salarios y mayor precariedad.

Bajo dicha clave interpretativa, a lo largo del trabajo analizamos las dimensiones regional y sectorial de la desigualdad salarial, lo que nos permite reseñar algunos hallazgos. En primer lugar, se observa la caída en la desigualdad salarial en el segundo trimestre, luego el retorno a los valores anteriores es más lento y con mayores cambios de región a región. Posiblemente, los tiempos de la pandemia

hicieron que las restricciones tomaran distinta envergadura según el ritmo de contagios en el territorio nacional. Pero además, la heterogénea configuración productiva por regiones del país, pudo hacer que la distinción entre actividades «esenciales» y «no esenciales» repercutiese en la variabilidad de las contribuciones a la desigualdad.

En segundo lugar, al observar la desigualdad salarial sectorial aparece un movimiento semejante respecto a la caída en el segundo semestre de 2020 y posterior retorno a los valores previos. De todos modos, aparece un dato distintivo: la desigualdad en el primer trimestre de 2021, aparece como muy semejante al momento anterior a la crisis. La caída en la desigualdad se explica por el empeoramiento de las posiciones de las trabajadoras y trabajadores ubicados en sectores de salarios medios mayores al promedio asalariado privado formal – minería, finanzas y transporte, principalmente – y el mejoramiento de aquellos con salarios medios menores a dicho valor de referencia – salud, comercio y agricultura, en particular –.

En tercer lugar, vale la pena enfatizar que dados los rasgos diferenciales de cada uno de los grupos de asalariados, es comprensible la recuperación de los ingresos de quienes fueron más perjudicados de la pandemia. La más alta sindicalización, el trabajo en empresas de mayor tamaño – donde es factible que existan delegados sindicales – o que tengan contratos estables, todas características del G<sub>1</sub>, favorece las posibilidades de encarar demandas salariales con éxito – en el caso que hubiesen sido necesarias –. Lo contrario sucede con el G<sub>2</sub>, quienes al cierre del primer trimestre de 2021 presentaron una situación semejante a la vivida un año antes.

En cuarto y último lugar, al retomar la pregunta que nos hicimos al comenzar este estudio, pudimos observar a partir de información relevada por la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 que el G<sub>1</sub> (salarios altos) fue más afectado con suspensiones y recortes salariales vinculados, mientras que el G<sub>2</sub> (salarios bajos) por las propias características de los puestos de trabajo, estuvieron más expuestos a los despidos o, incluso, renunciadas.

Para finalizar, entendemos que el texto realiza un aporte en términos de analizar una realidad particular del mercado laboral argentino, dando cuenta que a pesar de la mayor homogeneidad en términos de condiciones de trabajo y salarios respecto del conjunto de los y las trabajadoras, aún conviven realidades económicas disímiles que nos impulsan a agudizar las miradas sobre la estructura productiva diversificada y heterogéneamente distribuida en el amplio territorio nacional.

## Referencias

ARCIDIÁCONO, PILAR y GUSTAVO GAMALLO

- 2020 *El Ingreso Familiar de Emergencia. Respuestas inmediatas y debates futuros*, Buenos Aires: Grupo Derechos Sociales y Políticas Públicas, vol. 2, referencia citada en página 355.

BARRERA INSUA, FACUNDO

- 2018 *Salarios Desiguales: entre la valorización del capital y la acción sindical*, Buenos Aires: Miño & Dávila Editores, referencia citada en página 357.

BARRERA INSUA, FACUNDO; DEBORAH NOGUERA y MARIANA BUSO

- 2022 «La pandemia y el empleo registrado privado en Argentina. Un análisis de la desigualdad salarial en clave regional y sectorial», en *Cuestiones de Sociología*, n.º 26, referencia citada en página 356.

BECCARIA, LUIS y ROXANA MAURICIO

- 2020 «Los impactos inmediatos de la pandemia: cuando la diferencia es entre quienes continúan percibiendo ingresos y quienes lo perdieron», en *Alquimias Económicas*, referencia citada en página 355.

CONCEIÇÃO, PEDRO y JAMES GALBRAITH

- 2012 «Constructing Long, Dense Time Series of Inequality Using the Theil Index», en *Inequality and Industrial Change*, págs. 263-279, DOI: [10.1017/cbo9781139175210.016](https://doi.org/10.1017/cbo9781139175210.016), referencia citada en página 359.

DALLE, PABLO y MARÍA MERCEDES DI VIRGILIO

- 2022 «Estructura social de Argentina y políticas públicas durante la pandemia de COVID-19: el diseño de una encuesta nacional comparativa interregional», en *Revista Latinoamericana de Metodología de la Ciencias Sociales*, vol. 12, n.º 2, referencia citada en página 360.

GALBRAITH, JAMES

- 1998 *The affluent society*, Houghton Mifflin Harcourt, referencia citada en página 359.

NOGUERA, DEBORAH y JULIÁN PEDRAZZI

- 2019 «Tipo de cambio real y asimetrías regionales. Evidencia de panel para Argentina (2004-2017)», en *XIV Congreso Nacional de Estudios del Trabajo*, Buenos Aires, referencia citada en página 358.
- 2020 «Tipo de cambio real, empleo y asimetrías productivas en Argentina», en *Cuadernos de Economía Crítica*, vol. 12, n.º 6, págs. 17-43, referencia citada en página 358.

OIT

2020 *El COVID-19 y el mundo del trabajo en Argentina: impacto y respuestas de política*, Buenos Aires: Organización Internacional del Trabajo, referencia citada en página 355.



## CAPÍTULO 15

# Efectos de la pandemia en lxs trabajadorxs asalariadxs del Norte Grande Argentino

ALEJANDRA MASCAREÑO,<sup>\*</sup> PABLO BARBETTI,<sup>\*\*</sup>  
MARIBEL GUDIÑO<sup>\*\*\*</sup> y JOSÉ POZZER<sup>\*\*\*\*</sup>

### 15.1 Introducción

Las provincias que componen las regiones Noroeste (NOA) y Nordeste (NEA) de la Argentina comparten algunas características comunes en sus mercados de trabajo que permiten analizarlas como una «Gran Región» que, además, las distinguen de otras del país. Entre ellas la informalidad laboral constituye uno de los rasgos estructurales más notorios (y persistentes a lo largo de muchas décadas) vinculados a la fragilidad de sus economías y a la precariedad del trabajo en estos territorios.

En este capítulo nos proponemos analizar la dinámica del mercado de trabajo en la región Norte Grande Argentino (NGA), intentando caracterizar algunos efectos de la pandemia por COVID-19 específicamente en lxs trabajadorxs asalariadxs. En el análisis consideramos fundamentalmente las características sociales y económicas de estxs trabadorxs, a partir de algunas variables tales como el género, la edad y los sectores ocupacionales.

Como es sabido, la situación argentina presenta un escenario contemporáneo de alta complejidad y desafíos profundos para la agenda pública. Dicha complejidad parte del entrecruzamiento de una recesión económica y deterioro del mercado laboral, derivadas de las medidas macroeconómicas de la alianza de gobierno Cambiemos

---

\* Becaria doctoral CONICET-CIITED/CESDE.

\*\* Investigador del Centro de Estudios Sociales (CES) de la UNNE.

\*\*\* Investigadora de la Universidad Nacional de Jujuy/CESDE.

\*\*\*\* Investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE.

(2015-2019) y el párate económico local producto de la recesión global del año 2020 fruto de la pandemia COVID-19. En este marco en este capítulo buscamos aportar evidencia empírica del impacto diferencial de la pandemia entre lxs asalariadxs registradxs y no registradxs, en una región en la que, este segundo grupo presenta proporciones más elevadas en comparación a otras del país.

En términos metodológicos realizamos un análisis cuantitativo a partir de indicadores básicos del mercado de trabajo provenientes de la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de la Argentina y de procesamientos propios de la Encuesta nacional sobre la Estructura social de Argentina y Políticas públicas durante la pandemia por COVID-19 (ESAyPP/PISAC-COVID-19). Esta última fue relevada en la Argentina urbana entre octubre y diciembre de 2021. El universo de estudio de la ESAyPP/PISAC-COVID-19 es doble: los hogares y la población adulta residente en localidades de Argentina mayores a 50 mil habitantes. El diseño muestral probabilístico, estratificado y por conglomerados permite tres dominios de estimación: a nivel nacional, por regiones y por tamaño de los aglomerados. El tamaño de la muestra relevada es de 5.239 hogares y personas adultas, combinando amplia escala y cobertura.<sup>[1]</sup>

## 15.2 Sobre el concepto de informalidad en el trabajo y el impacto de la Pandemia por COVID en el sector

En el campo de las ciencias sociales, a partir de los años ochenta se advierte la producción de una gran cantidad de conceptos orientados a describir la heterogeneidad de situaciones de trabajo y visibilizar formas particulares y específicas, menos estables y protegidas que las mismas asumen.

En esta línea, por ejemplo, la denominación de *trabajo no clásico* (De la Garza Toledo *et al.* 2008), o que algunos llaman atípicos, contribuye diferenciar el empleo del trabajo, a la vez que constituye un aporte en la revalorización de una amplia y diversa gama de actividades (diferentes a las del trabajo asalariado fabril) que siempre fueron mayoritarias en muchos países de América Latina, aunque insuficientemente estudiadas. También es posible encontrar otro grupo de conceptualizaciones que, en cambio, ponen el acento en el cumplimiento de ciertas normas laborales establecidas en cada país, tales como trabajo/empleo: precario, informal, no registrado,

[1] Para profundizar en el diseño teórico-metodológico de la encuesta ESAyPP/PISAC-COVID-19 elaborado por los equipos de investigación de los proyectos PISAC-COVID-19 085 y 021, véase Dalle y Di Virgilio (2022).

no decente, entre otros, que en ocasiones se los utiliza de manera indiferenciada.

Para **Neffa (2009)**, el concepto más amplio y abarcador es el *trabajo precario* y aparece como la contracara de los «empleos típicos», es decir, aquellos donde la relación salarial adopta las formas denominadas fordistas. Lo esencial del trabajo precario son sus atributos con respecto a la inseguridad e inestabilidad de la relación salarial. La condición de precariedad aparece no solo en los empleos informales, sino también en los formales, tanto registrados como no registrados. Este mismo autor plantea que una de las diferencias centrales es que mientras la informalidad y el no registro tienen connotaciones de ilegalidad (por el no cumplimiento de las regulaciones vigentes) la precariedad comúnmente es lícita e incluso validadas por normas (por ejemplo en las distintas modalidades de contrato) y que por este motivo se naturalizan a pesar de que suponen condiciones desfavorables para la vida de lxs trabajadorxs.

El concepto de *trabajo informal*, por su parte, en su desarrollo en América Latina es tributario de diferentes perspectivas teóricas: el enfoque de la economía dual, el estructuralista (o neomarxista) y el neoliberal (o legalista) (**Busso 2005**). Los desarrollos de la OIT<sup>[2]</sup> se enmarcan, desde sus inicios, en el primero de ellos (el dualista), asociando este fenómeno al empleo por cuenta propia de subsistencia (en oposición a la relación asalariada) que predominaba en los núcleos de pobreza urbana (**Ludmer 2019**). Actualmente, sirve para caracterizar a una amplia variedad de empleos tanto en la economía formal como en la informal (**OIT 2013**), aunque sigue resultando útil especialmente para analizar a lxs trabajadorxs informales en situaciones de autoempleo, no vinculados con empresas formales, insertos en mercados competitivos y de bajas barreras a la entrada.

Existen diferentes formas de medición de la informalidad laboral. Una de ellas es la que la aborda como el No registro de la relación laboral asalariada y lo no inscripción de los trabajadores independientes en la administración fiscal (**Bertranou y Casanova 2013**). En este trabajo para evaluar la extra-legalidad o desafiliación, seguimos a la operativización realizada por **Salvia et al. (2018)** quienes toman como indicador observable para los trabajadorxs asalariadxs si sus empleadorxs le realizaban descuentos jubilatorios y para los no asalariadxs si pagaban el monotributo o como autónomo.

Como es sabido, la informalidad puede tener serias consecuencias para lxs trabajadorxs y sus familias, las empresas y también para la sociedad en general. Dificulta el reconocimiento de derechos laborales y está asociado con la pobreza en sus diversas dimensiones. Lxs trabajadorxs informales generalmente no cuentan con la protección

[2] Organización Internacional del Trabajo

necesaria frente a algunos sucesos como pueden ser los accidentes laborales, el desempleo, la pobreza en la vejez, entre otros (Bertranou y Casanova 2013) pero, además también están más expuestos a diversos riesgos sociales, algunos de ellos poco frecuentes e inesperados como fue la pandemia global por COVID-19.

Al poco tiempo de iniciada la pandemia diversos organismos internacionales, empezaron a publicar los primeros diagnósticos (Acevedo *et al.* 2021; CEPAL 2020; OIT 2020) sobre la dinámica del mercado laboral en América Latina durante dicho período coincidiendo en el crecimiento de la proporción de población en situación de inactividad, con reducciones considerables en la informalidad, y en cambio, fluctuaciones menores en los empleos formales. En este contexto el sector formal, dada su menor flexibilidad, se convirtió en una «red de protección social» que preservó la estabilidad del empleo y de los salarios.

A su vez, en el caso de Argentina (al igual que en otros países de la región) los análisis de las variaciones en la estructura ocupacional señalan que este fenómeno no hizo más que profundizar la desigualdad social pre-existente. Si bien la crisis ocasionada por el COVID-19 afectó a toda la población, algunos grupos de trabajadorxs se vieron claramente más perjudicados. En particular lxs trabajadorxs informales y lxs trabajadorxs independientes que se encontraban sobre-representadxs en las actividades más afectadas por las medidas de aislamiento social, sin contar con mecanismos de protección social que les permitirían cobrar un ingreso durante el tiempo en que no podían trabajar. Lxs mismxs tampoco disponían de acceso a derechos laborales clave en dicho contexto, como licencia por enfermedad o cobertura por enfermedad profesional (Dalle y Actis Di Pasquale 2021; Jacovkis *et al.* 2021; OIT 2020). Al mismo tiempo, dentro de esta categoría ocupacional, los grupos especialmente afectados fueron aquellos que, antes de la pandemia, ya venían soportando peores condiciones de vida, de trabajo y de ingresos, como es el caso de lxs jóvenes y las mujeres (Pol *et al.* 2021).

### 15.3 El Norte Grande Argentino: rasgos estructurales

El NGA está conformado por 10 provincias (Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones) que, según datos de año 2006, se extendían al 27.5 % de la superficie total del país y contenían un poco más de 7 millones de habitantes (cerca del 20 % de la población total), la mayoría de ellxs en ciudades incluidas en un sistema urbano caracterizado por la alta concentración en las capitales provinciales.

Bolsi y Meichtry (2006) afirmaban que las provincias que integran el NGA constituyen las más pobres de nuestro país y a su vez las

más desiguales. Lxs autorxs reconocen el «atraso» desde la consolidación del sistema capitalista en Argentina entre fines del siglo XIX y principios del XX, dada por la inserción de la región en el modelo de acumulación primario exportador. Posteriormente, pese a los intentos realizados en materia de políticas públicas, así como empresariales, la región no logró mejorar sus condiciones económicas y sociales en comparación con el resto del país. La producción de la región no tiene un gran peso en el PBI nacional; por lo que no presenta un polo de atracción de inversiones privadas de manera que salvo por algunas empresas, el resto de las actividades económicas de las provincias están excluidas del circuito nacional. Tanto durante el desarrollo del modelo primario agroexportador en Argentina como durante el desarrollo de la industria, las políticas de promoción estuvieron enfocadas en otros territorios, y la clase política de las provincias marginadas, así como quienes dirigían los rumbos a nivel nacional, salvo por algunas políticas aisladas, no implementaron políticas tendientes a reducir estas desigualdades regionales.

En la misma línea estudios previos, algunos ya clásicos como **Ferrer (1980)** y **Rofman y Romero (1997)** ubican a todas las provincias que integran el Norte Grande como pertenecientes al Área Periférica dentro de la Argentina, distinguiéndolas también por su bajo desarrollo relativo, sus indicadores de deterioro social y una aguda dependencia del Sector Público. Dentro de estas provincias que conforman la «periferia» se observa que los procesos económicos evidencian la presencia notoria de formas no capitalistas de producción y con una importancia relevante de las llamadas «economías regionales» (**Rofman et al. 2020**).

Respecto a las características del mercado laboral urbano en los aglomerados del Norte Grande se mencionan las tasas de actividad con valores inferiores a la media nacional, altos porcentajes de la precariedad del empleo que deja al empleo público como el principal mecanismo de defensa para lxs trabajadorxs u obliga a muchxs de ellxs a pasar a condición de cuentapropistas (**Mignone 2005; Salvia et al. 2018**).

En síntesis, los diagnósticos coinciden en mostrar que las provincias del NGA aparecen con frecuencia encabezando las listas de los distintos indicadores de carencias. Atendiendo a dicha situación y en un intento de unificar esfuerzos en el diseño de políticas públicas, pero también de negociación política en términos presupuestarios en 1999, los mandatarios de estas provincias firmaron el acuerdo de creación de la región del Norte Grande Argentino según las facultades otorgadas por los artículos 124 y 125 de la Constitución Nacional, en la ciudad de Salta. Algunos años más tarde (2004) se aprueba el Estatuto para el funcionamiento del Consejo Regional del

Norte Grande, en la ciudad de Resistencia (Chaco). Posteriormente se incorporó la provincia de La Rioja.

#### 15.4 La dinámica laboral del mercado laboral del NGA

Además de las desigualdades estructurales propias del NGA, a partir del análisis de las últimas décadas, es posible observar también como algunos factores coyunturales de alcance nacional (modelo de desarrollo económico, políticas de empleo, impacto de crisis externas, etcétera) incidieron en el mercado laboral.

Así, siguiendo la periodización propuesta por [Dalle y Actis Di Pasquale \(2021\)](#),<sup>[3]</sup> podemos identificar algunas tendencias observadas en las principales tasas del mercado laboral (empleo, actividad, desempleo) y las categorías ocupacionales en la región NGA (véase cuadro 15.1).

En la región se registra una disminución de la desocupación entre los años 2003 y 2014 pasando de 12 % a un 4.6 %, para aumentar al 6.9 % en 2019 y 6.7 % en el contexto de pandemia (2020). La ocupación en todo el período oscila en valores cercanos al 55 %, con algunos momentos más elevados tales como el año 2011 y 2019 donde asciende al 56.4 y 59 % respectivamente, para luego volver a descender al 56.5 % en el 2020.

Respecto a las categorías ocupacionales, la mayoría de los ocupadxs en el NGA son asalariadxs. Entre 2003 y 2014 se observa, además, un claro proceso de asalarización (con un incremento del 61 % al 74 % de esta categoría), que se desacelera y empieza a revertirse en el año 2019 y que continúa en el 2020.

Los indicadores del trabajo asalariado permiten observar también otra de las características estructurantes del mercado regional vinculada a los altos niveles de empleo no registrado, que antes mencionamos. En el período considerado, se muestran porcentajes muy significativos (que se sostienen incluso en los años de crecimiento económico) de trabajadorxs asalariadxs no registrados siempre cercanos al 30 %.

[3] Los mismos analizando la evolución del producto bruto interno (PBI) argentino de los últimos 20 años y su impacto en el mercado de trabajo de Argentina, identifican cinco etapas: a) crecimiento significativo (2003-2007) con tasas de aumento del PBI elevadas; b) crecimiento moderado (2008-2011), en el que se registra una caída durante la crisis mundial 2008/2009 y recuperación sobre el final; c) estancamiento (2012-2015), pero con oscilaciones interanuales; d) estancamiento y recesión (2016-2019), con oscilaciones durante los primeros dos años y luego declive a partir de 2018, con lo cual la economía se posicionó en una situación de crisis prepandemia; e) crisis por la pandemia (a partir de 2020).

Las variaciones en los porcentajes de trabajadorxs asalariadxs tienen como correlato las modificaciones en los guarismos de trabajadorxs cuentapropistas. Desde 2003 hasta 2014 se produce una reducción en esta categoría, la cual empieza a mostrar un crecimiento sostenido en los siguientes años, llegando en 2019 a 22.3% y en 2020 al 24.8%. Lo cual nos lleva a suponer que la pérdida del empleo asalariado se traduce en una estrategia de supervivencia laboral que «empuja» a las personas al cuentapropismo.

**Cuadro 15.1. Dinámica del mercado de trabajo del Norte Grande (2003 a 2020) en porcentaje.**

Indicadores	2003	2007	2011	2014	2019	2020
Tasa de Desocupación	12.0	6.4	4.5	4.6	6.9	6.7
Tasa de Empleo	55.3	55.4	56.4	55.4	59.0	56.5
Tasa de Actividad	62.9	59.2	59.1	58.1	63.3	60.5
Categorías Ocupacionales						
Asalariados	61.6	71.7	73.7	74.3	71.7	69.3
Asalariados Registrados	32.2	39.9	43.7	44.2	44.1	43.3
Asalariados No Registrados	32.2	31.8	30.0	30.1	27.6	26.0
Empleadores (patrón o socio/a)	3.2	4.1	5.3	3.9	3.4	3.1
Cuenta Propia	21.4	19.5	18.2	18.6	22.3	24.8
Trabajadores Familiares	2.3	1.9	1.5	1.0	0.9	1.1
Perceptores de Planes de Empleo	11.4	2.7	1.3	2.4	1.8	1.8
Total ocupados (%)	100	100	100	100	100	100
	1.167.934	1.279.619	1.421.680	1.487.704	1.623.936	1.599.703

Fuente: elaboración propia a partir de la base de microdatos EPH. Nota: los valores corresponden al cuarto trimestre de cada año.

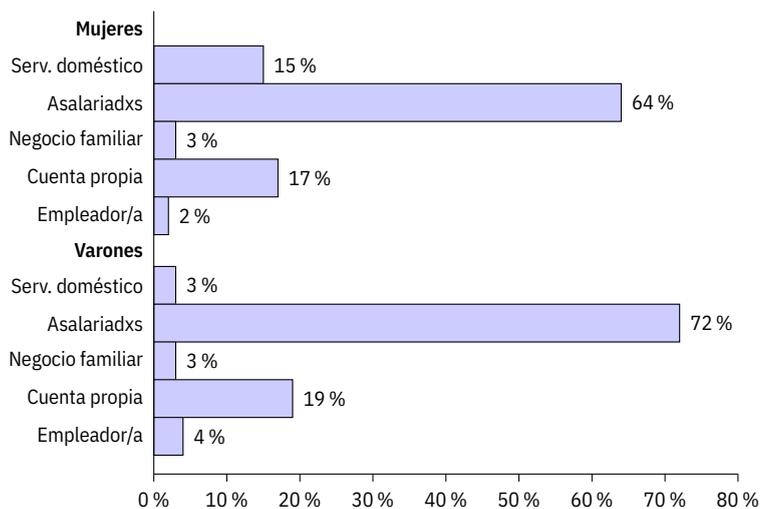
La caracterización anterior puede ser complementada con los datos obtenidos en la encuesta relevada por el proyecto que dio origen a esta publicación (ESAyPP-PISAC-COVID-19). La misma nos permite ampliar la caracterización de la situación laboral en la Región NGA en el año 2021, específicamente en el segundo semestre, en el que aún estaban presentes algunos de los efectos de la pandemia.

En relación con la estructura, la distribución de los ocupadxs en las diferentes categorías mostraban una continuidad de las tendencias antes descritas: 67.7 % eran asalariadxs, el 17.8 % cuentapropistas, el 8.8 % servicio doméstico; el 3 % trabaja para un negocio de un amigo o familiar; y el 2.7 % son patrones.

#### 15.4.1 Características de los asalariadxs registradxs y no registradxs del NGA

Particularmente dentro del grupo en el que nos interesa focalizarnos en este análisis, lxs asalariadxs, observamos las siguientes características en el año 2021:

- 1) Se registra una distribución proporcional de lxs mismxs entre los diferentes grupos de edades, con un porcentaje levemente mayor en lxs jóvenes: el 31.3 % tenía entre 18 y 30 años, el 29.3 % entre 30 y 44 años; y el 27.3 % entre 45 y 65 años.
- 2) En cambio, se registra una notoria diferencia según el género: hay mayor cantidad de varones asalariados registrados (49 % vs 35 %), muchas más mujeres no registradas (29 % vs 23 %) sumado a esto, las mujeres trabajando en el servicio doméstico superan a los varones con un 12 % de diferencia.



**Figura 15.1.** Categorías ocupacionales según sexo. Población asalariada mayor de 18 años. Norte Grande Argentino, 2021.

En consonancia con lo que señalan estudios previos, los datos reflejan también la persistencia de una desigualdad regional dentro de este grupo. Así, al realizar la comparación entre lxs asalariadxs

en Argentina y lxs del Norte Grande, observamos que mientras que la proporción de los «no registradxs» en este grupo a nivel nacional es de 34.1 % en el Norte Grande se elevaba al 38.9 %.

Esta situación de desventaja se registra en todos los grupos de edades, pero es mucho más pronunciada en la población de lxs jóvenes de entre 18 y 29 años: mientras que en el NGA lxs jóvenes asalariadxs no registradxs alcanzan al 62.3 % y en el resto del país al 57.9 % (véase cuadro 15.2).

**Cuadro 15.2. Tipo de inserción laboral por grupos de edad promedio nacional y región Norte Grande. Población asalariada mayor de 18 años. Argentina urbana, 2021.**

Grupos de edad y R/NR	Argentina		Norte Grande	
	Registradxs	No registradxs	Registradxs	No Registradxs
de 18 a 29 años	42.1	57.9	37.7	62.3
de 30 a 44 años	68.7	31.3	68.2	31.8
de 45 a 65 años	75.7	24.3	67.1	32.9
más de 66 años	83.0	17.0	82.3	17.7
Total	65.9	34.1	61.1	38.9

Fuente: elaboración propia en base a ESAyPP-PISAC-COVID-19.

Entre lxs trabajadorxs registradxs, considerando los grupos de edades y sexo, las mujeres de entre 45 y 65 años muestran mayor proporción (38.2 %) en esta categoría. En tanto, los varones de 30 a 44 son los que tienen mayores índices de registración laboral (35.7 %). Observamos también que los mayores porcentajes de registración se concentran en grupos etarios considerados como centrales en la vida productiva-laboral (más de 30 y previo a la edad jubilatoria (véase cuadro 15.3).

Al analizar quienes son lxs trabajadorxs no registradxs, identificamos que se concentran, fundamentalmente, tanto los varones (51.6 %) como las mujeres (41 %), en jóvenes de 18 a 29 años, los que estarían desarrollando sus primeras experiencias de inserción. Ello configura una tendencia de los mercados laborales juveniles a nivel mundial, vinculadas a la informalidad y precarización de sus trayectorias iniciales. Si bien los datos muestran que, la no registración se reduce en ambos grupos en otros tramos etarios posteriores, las mujeres de 45 a 65 años tienen mayores posibilidades de encontrarse en esa situación (30.4 %).

En relación con los sectores ocupacionales, la mayoría de lxs trabajadores registradxs se encuentra en el sector público (el 57.5 %), seguido por el sector privado un 41.4 %, tendencia que puede estar

**Cuadro 15.3. Grupos de edad según género controlado por tipo de inserción laboral. Población asalariada mayor de 18 años. Región Norte Grande, 2021 (en porcentaje).**

		Años				Total
		de 18 a 29	de 30 a 44	de 45 a 65	más de 66	
Registradxs	Varones	22.1	35.7	26.7	15.6	100
	Mujeres	12.0	30.8	38.2	19.0	100
No Registradxs	Varones	51.6	27.1	15.7	5.7	100
	Mujeres	41.0	22.7	30.4	5.9	100

Fuente: elaboración propia en base a ESAyPP-PISAC-COVID-19.

asociada al importante peso que tiene el empleo estatal en todas las provincias de la región. A su vez, del total de asalariadxs no registradxs el 80.6 % trabaja en el sector privado y el 16.5 % en el sector público. Estos últimos datos muestran que, al igual que en otras regiones, es el sector privado el menos propenso a cumplir con ciertas disposiciones normativas vinculadas con erogaciones económicas (como el aporte jubilatorio), los organismos del Estado como empleadores, aunque en porcentajes mucho menores, tampoco lo hacen (véase cuadro 15.4).

**Cuadro 15.4. Sector de lxs trabajadores según tipo de inserción laboral. Población asalariada mayor de 18 años. Región Norte Grande, 2021.**

Sector	Registradxs	No registradxs
Sector público	57.5	16.5
Sector privado	41.4	80.6
Cooperativa o mutual	0.3	1.1
Otra organización sin fines de lucro	0.8	2.3
Total	100.0	100.0

Fuente: elaboración propia en base a ESAyPP-PISAC-COVID-19.

Finalmente, el tipo de vínculo y/o modalidad de trabajo que declaran lxs encuestadxs asalariadxs también aporta información que nos parece relevante. En el caso de los asalariadxs registrados ocho de cada diez mencionó que tenía un contrato permanente, mientras que solo cuatro de cada diez asalariadxs no registradxs tenían este tipo de contrato. Lxs asalariadxs no registradxs restantes casi un 17 % tenía un contrato a término y casi un 30 % declaró que la actividad laboral era realizada «tipo changa» (véase cuadro 15.5).

**Cuadro 15.5. Modalidad de trabajo según tipo de inserción laboral. Población asalariada mayor de 18 años. Región Norte Grande, 2021 (en porcentaje).**

Modalidad de trabajo	Registradxs	No registradxs
Permanente	87.26	44.8
Con fecha de finalización (contrato a término)/temporario	11.24	16.9
Tipo changas	1.03	29.7
Plan de Empleo	0.40	4.1
Beca-Pasantía		4.1
Ns/Nc	0.08	0.4
Total	100.00	100.00

Fuente: elaboración propia en base a ESAyPP-PISAC-COVID-19.

## 15.5 Impactos de la pandemia en asalariadxs registradxs y no registradxs del NGA

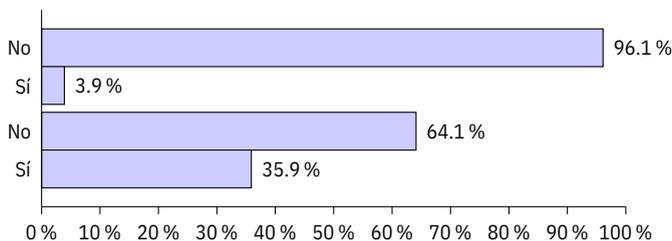
En cuanto a los impactos de la pandemia sobre la situación laboral de lxs encuestadxs observamos que, entre lxs trabajadores asalariadxs no registrados, aproximadamente 4 de cada 10 fueron despedidos (36 %). Entre lxs registradxs, en cambio, casi la totalidad mantuvo su empleo, lo cual tendría un correlato con la prohibición de despidos dispuesta por el decreto 329 del 31/03/20 del Gobierno Nacional, en el marco de las medidas de emergencia por la pandemia COVID, que incluía tanto a despidos sin causa o por causa de falta o disminución de trabajo o por fuerza mayor. Mientras que, a nivel nacional lxs asalariadxs registradxs que sufrieron despidos constituyeron un 4.83 % y lxs no registradxs un 18.9 %, guarismos mucho menores a la región bajo estudio.

El análisis por género de quienes fueron despedidxs no muestra diferencias significativas.

Sí, en cambio, hay diferencias en relación con las edades: el 54.8 % de los despidos en asalariadxs registradxs eran jóvenes entre 18 y 29 años, y de los despidos en asalariadxs no registradxs el 57.7 %.

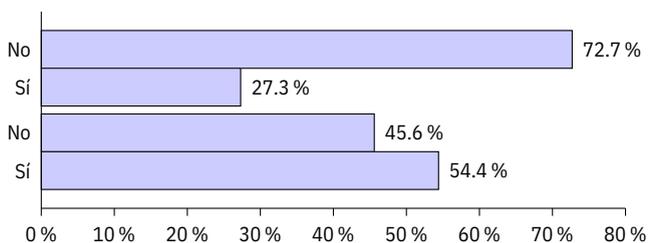
A su vez, la mayor cantidad de despidos tanto para registradxs como no registradxs fueron en el sector privado el 87 % y 88 %.

En el caso de registradxs que fueron despedidos o tuvieron que renunciar se trataba de trabajadores que lo hacían en actividades diversas tales como programación, educación tecnológica, peluquería y corte; y en el caso de no registradxs vinculados a gastronomía, cursos de confección y desarrollo musical.



**Figura 15.2.** Despidos y renuncias durante la pandemia según tipo de inserción laboral. Población asalariada mayor de 18 años. Región Norte Grande, 2021. Fuente: elaboración propia en base a ESAyPP-PISAC-COVID-19.

En relación con quienes fueron despedidxs o tuvieron que renunciar, la figura 15.3, muestra otras tendencias interesantes. Si bien este fenómeno fue mucho menor en lxs registradxs, más del 50 % de ellxs pasado un año de dicho acontecimiento declaraban encontrarse en dicha situación.



**Figura 15.3.** Continuidad en la situación de despidos/renuncias según tipo de inserción laboral. Población asalariada mayor de 18 años. Región Norte Grande, 2021. Fuente: elaboración propia en base a ESAyPP-PISAC-COVID-19.

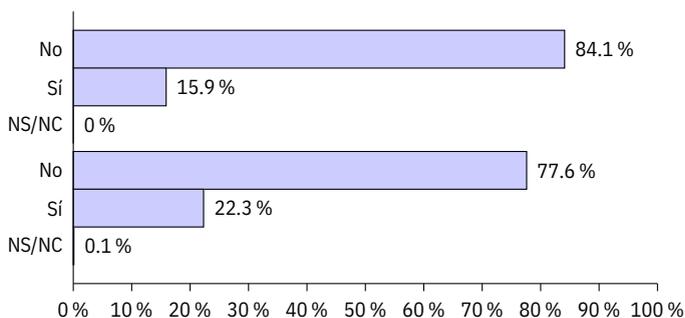
En el caso de lxs asalariadxs no registradxs, aunque fueron muchxs más quienes padecieron despidos o renuncias, solo el 27.3 % continuaba en esa situación en el momento de relevamiento. Registro que indica mayor dinamismo en este grupo en la inserción en otra ocupación, aunque probablemente en la misma condición de informalidad.

Lxs asalariadxs que lograron mantener el empleo, tanto trabajadorxs registradxs (15.9 %) como aquellxs que no lo estaban (22.3 %) igualmente atravesaron otras situaciones críticas como *suspensiones o reducción de horas sin reducción de sueldos* (véase figura 15.4).

Del total de lxs registradxs que fueron afectadxs por dichas situaciones el 54 % eran varones, la mayoría (43 %) se ubicaba en la franja

etaria entre 45 y 66 años y se encontraban trabajando tanto en el sector público como en el privado (53 % y 47 %). De este grupo de trabajadorxs, el 37.1 % continuaba en esa situación, resaltando que en su totalidad eran mujeres quienes mantienen este estado laboral.

Mientras que de ese 22.3 % de no registradxs que fue suspendido durante la pandemia, la mayoría eran varones (75 %), de distintas edades (el 76 % tenía entre 18 y 45 años) y en su mayoría (94 %) trabajaba en el sector privado. Sin embargo, solo el 6.1 % se encuentra en esa situación al momento del relevamiento.



**Figura 15.4.** Suspensión o reducción de horas sin reducción de salario durante la pandemia según tipo de inserción laboral. Población asalariada mayor de 18 años. Región Norte Grande, 2021. Fuente: elaboración propia en base a ESAyPP-PISAC-COVID-19.

Otro impacto de la pandemia en el mercado de trabajo fue la decisión, por parte de lxs empleadorxs, de suspender o reducir las horas sin el pago de salario. Dentro del grupo de lxs asalariadxs no registrados, el 10.1 % padeció esta situación, mientras que la situación fue más favorable para lxs registrados (véase figura 15.5).

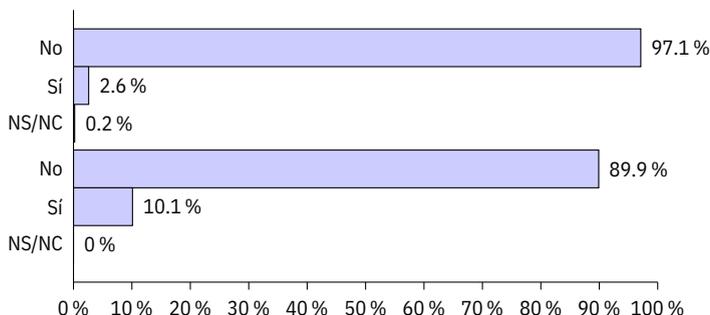
Entre lxs no registrados que atravesaron dicha situación el 57 % tenía entre 18 y 29 años y el 97 % pertenecían al sector privado.

Un dato llamativo es que un 25, 2 % de quienes fueron suspendidxs sin cobrar salario, declararon que continuaban en esa situación luego de más de un año.

Por otra parte, entre lxs asalariadxs que mantuvieron sus trabajos, lxs registradxs mostraron mayores porcentajes de haber realizado otra actividad (25.2 %) a diferencia de lxs no registradxs (15.2 %) (véase figura 15.6).

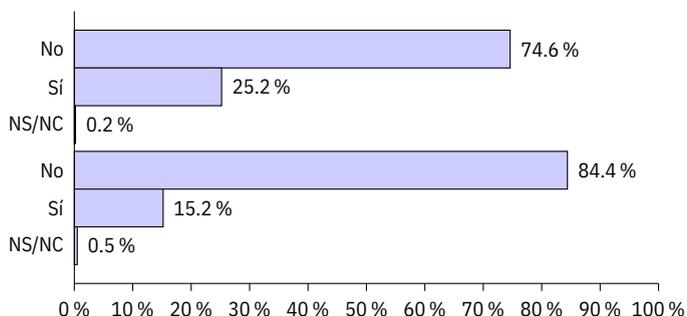
Entre lxs registradxs ese 25.2 %, el 55 % eran varones, el 44 % tenía entre 30 y 44 años y el 60 % trabajaba en el sector público.

En el caso de no registradxs (15.2 %) el 60.4 % eran varones, el 51.7 % tenía entre 18 y 29 años y el 66.4 % trabajaban en el sector privado.



**Figura 15.5.** Suspensión sin pago de salario durante la según tipo de inserción laboral. Población asalariada mayor de 18 años. Región Norte Grande, 2021. Fuente: elaboración propia en base a ESAYPP-PISAC-COVID-19.

No obstante, al momento de realizar el trabajo de campo, no se registran trabajadorxs que continúen en esa situación.

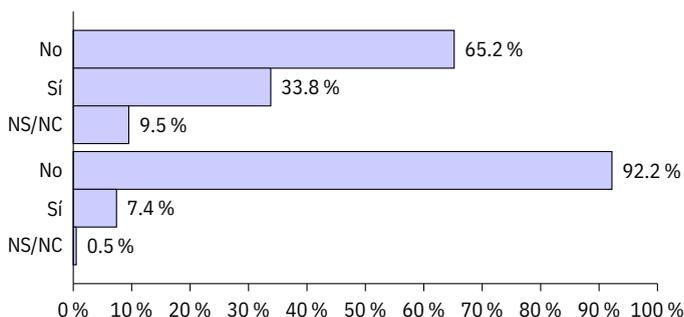


**Figura 15.6.** Cambio de actividades durante la pandemia según tipo de inserción laboral. Población asalariada mayor de 18 años. Región Norte Grande, 2021. Fuente: elaboración propia en base a ESAYPP-PISAC-COVID-19.

Por último, entre quienes mantuvieron sus empleos observamos que la posibilidad de haber continuado sus actividades laborales en una modalidad de teletrabajo o mixta (presencial-distancia) ha sido mayoritariamente registrada en situaciones de empleo registrado (33.8 %), en tanto que lxs no registradxs, la posibilidad de adaptación solo fue del 7.4 % (véase figura 15.7). Si bien entendemos que estas cifras deben ser interpretadas en función de los tipos de actividades realizadas, probablemente también la situación de registro (y el mayor grado de formalización en el vínculo laboral) pudo haber contribuido al requerimiento por parte de lxs empleadores de adaptaciones más rápidas al trabajo remoto.

De ese 33.8 % el 52.6 % eran mujeres, el 46.5 % tenía entre 30 y 44 años; y el 63 % trabaja en el sector público. Asimismo, solo el 23.8 % continuaba en esa situación, siendo en su totalidad mujeres.

Por otro lado, de lxs no registradxs (7.4 %) la mayoría eran varones (54.4 %), y no presentaban diferencias por edades, ni según sectores de actividad. A diferencia del otro grupo, no se registraban trabajadorxs que se mantuvieran en esa situación al momento del relevamiento.



**Figura 15.7.** Cambios hacia modalidades de teletrabajo o modalidades mixtas durante la pandemia según tipo de inserción laboral. Población asalariada mayor de 18 años. Región Norte Grande, 2021. Fuente: elaboración propia en base a ESAYPP-PISAC-COVID-19.

## 15.6 Reflexiones finales, a modo de síntesis

La región NGA se caracterizó, históricamente, por los elevados niveles de pobreza e indigencia y por el alto grado de informalidad y precariedad de sus mercados de trabajo.

La crisis derivada de la pandemia claramente profundizó esta situación.

El análisis de los datos de la EPH, en un período más extenso, nos permitió observar la dinámica del mercado de trabajo en esta región e identificar un escenario de prepandemia, en el que ya se evidenciaba un deterioro progresivo de los indicadores laborales. Así, mientras que entre 2003 y 2014 se registró un proceso de disminución de las tasas de desocupación y un proceso de asalarización (con un incremento del 61 % al 74 % de esta categoría), el mismo se desacelera y empieza a revertirse desde el año 2014 al 2019.

Entre el 2019 y el 2020, por su parte, se produjo un incremento de la desocupación, una disminución de la ocupación así como de la tasa de actividad. El análisis de las categorías ocupacionales refleja, además, que la disminución del empleo asalariado tuvo como contracara un incremento sustantivo del cuentapropismo (efecto que no

se inicia con la pandemia si no que refleja un crecimiento sostenido desde el año 2014).

Los datos de la encuesta ESAyPP-PISAC-COVID-19, por su parte, contribuyeron a ampliar la caracterización de lxs trabajadorxs asalariadxs de esta región en el año 2021. Los mismos indican que casi un 39 % de lxs mismxs se encontraban no registradxs, siendo particularmente afectadxs lxs más jóvenes de entre 18 y 29 años, en los que los numeros se elevaban a un 62.3 %.

A su vez, si bien la mayoría de lxs no registradxs pertenecían al sector privado, encontramos también que los organismos estatales se configuraban como espacios laborales de informalidad y de no registro (en un 16.5 %).

En consonancia con los resultados de estudios previos, el impacto de la pandemia dentro de este grupo adquirió rasgos diferenciales: quienes se encontraban formalizados fueron quienes pudieron preservar una mayor estabilidad en sus empleos.

Así, entre lxs trabajadores asalariadxs no registrados, aproximadamente 4 de cada 10 fueron despedidos (36 %) y, dentro de este grupo, casi el 58 % eran jóvenes (de entre 18 y 29 años).

Quienes lograron mantener el empleo, igualmente atravesaron otras situaciones críticas como suspensiones o reducción de horas sin reducción de sueldos y, dentro de este grupo, nuevamente lxs no registradxs fueron más afectados. La misma tendencia se observa en quienes atravesaron la misma situación pero con el agravante de no recibir su salario.

A modo de cierre parcial, podemos señalar que la pandemia en nuestro país contribuyó a visibilizar la desigualdad laboral en clave regional e indicar la importancia de volver a colocar en un lugar prioritario de la agenda de gobierno la necesidad de sostener acciones vinculadas con la formalización del trabajo y el empleo.

## Referencias

ACEVEDO, IVONNE *et al.*

- 2021 *Informalidad en los tiempos del COVID-19 en América Latina: implicaciones y opciones de amortiguamiento*, BID, referencia citada en página 376.

BERTRANOU, FABIO y LUIS CASANOVA

- 2013 *OIT Informalidad laboral en Argentina: segmentos críticos y políticas para la formalización*, Buenos Aires: Oficina de País de la OIT para la Argentina, referencia citada en páginas 375, 376.

BOLSI, ALFREDO SEGUNDO y NORMA CRISTINA MEICHTRY

- 2006 «Economía de mercado y sociedades tradicionales en la generación de la pobreza en el Norte Grande Argentino», en *Revista Estudios*, n.º 19, págs. 65-89, referencia citada en página 376.

BUSSO, MARIANA

- 2005 «El trabajo informal en Argentina: la novedad de un fenómeno histórico», en *Macroeconomía, mercado de trabajo y grupos vulnerables*, coord. por Julio Neffa y Pablo Pérez, Buenos Aires: CEIL y PIETTE, págs. 139-157, referencia citada en página 375.

CEPAL

- 2020 *Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación*, referencia citada en página 376.

DALLE, PABLO y EUGENIO ACTIS DI PASQUALE

- 2021 «El impacto de la doble crisis de la prepandemia y la pandemia en las tendencias ocupacionales en Argentina (2003-2020)», en *Tramas*, n.º 15, págs. 30-48, referencia citada en páginas 376, 378.

DALLE, PABLO y MARÍA MERCEDES DI VIRGILIO

- 2022 «Estructura social de Argentina y políticas públicas durante la pandemia de COVID-19: el diseño de una encuesta nacional comparativa interregional», en *Revista Latinoamericana de Metodología de la Ciencias Sociales*, vol. 12, n.º 2, referencia citada en página 374.

DE LA GARZA TOLEDO, ENRIQUE *et al.*

- 2008 «Hacia un concepto ampliado de trabajo, de control, de regulación y de construcción social de la ocupación: los “otros trabajos”», en *VI Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo*, Querétaro, referencia citada en página 374.

FERRER, ALDO

- 1980 *La Economía Argentina, Las Etapas de su Desarrollo y Problemas Actuales*, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, referencia citada en página 377.

JACOVKIS, PABLO *et al.*

- 2021 «La pandemia desnuda nuestros problemas más estructurales», en *Trabajo y sociedad*, vol. 21, n.º 36, págs. 9-28, referencia citada en página 376.

LUDMER, GUSTAVO

- 2019 «¿Qué hay de nuevo en el viejo debate sobre las causas de la informalidad laboral?», en *Cuadernos de Economía Crítica*, vol. 5, n.º 10, págs. 99-121, referencia citada en página 375.

MIGNONE, ANÍBAL MARCELO

- 2005 «El mercado laboral en el Norte Grande Argentino entre 1995-2004. La distribución del ingreso y los cambios en las estructuras ocupacionales», en *VIII Jornadas Argentinas de Estudios de Población*, Asociación de Estudios de Población de la Argentina, referencia citada en página 377.

NEFFA, JULIO

- 2009 «Sector informal, precariedad, trabajo no registrado», en *Noveno Congreso Nacional de Estudios del Trabajo*, Buenos Aires, referencia citada en página 375.

OIT

- 2013 *Informalidad, calidad del empleo y segmentación laboral en Argentina*, Buenos Aires: Organización Internacional del Trabajo, referencia citada en página 375.
- 2020 *El COVID-19 y el mundo del trabajo en Argentina: impacto y respuestas de política*, Buenos Aires: Organización Internacional del Trabajo, referencia citada en página 376.

POL, MARÍA ALBINA; BELÉN PAZ y VALENTINA LEDDA

- 2021 *Observatorio Laboral. Informe 2020*, UNCuyo: Instituto de Trabajo y Producción, referencia citada en página 376.

ROFMAN, ALEJANDRO *et al.*

- 2020 *Circuitos productivos regionales y estrategias de desarrollo en la Argentina del siglo XXI*, Buenos Aires: IADE, referencia citada en página 377.

ROFMAN, ALEJANDRO y LUIS ROMERO

- 1997 *Sistema socioeconómico y estructura regional en la Argentina*, Buenos Aires: Amorrortu, referencia citada en página 377.

SALVIA, AGUSTÍN; RAMIRO ROBLES y MARÍA NOEL FACHAL

- 2018 «Estructura sectorial del empleo, nivel educativo de la fuerza de trabajo y diferenciales de ingresos laborales en la Argentina (1992-2014)», en *Revista latinoamericana de estudios del trabajo*, n.º 37, págs. 55-94, referencia citada en páginas 375, 377.

## Colofón

La producción de este libro se realizó utilizando herramientas de *software* libre, el trabajo de edición y maquetación se realizó con el lenguaje LaTeX, la salida a pdf con el *driver* de LuaLaTeX.

Las familias tipográficas utilizadas dentro del libro son: IBM Plex, una superfamilia de tipografía abierta, diseñada y desarrollada conceptualmente por Mike Abbink en IBM con colaboración de Bold Monday y Linux Libertine una tipografía digital creada en 2003 por Philipp Poll en el Proyecto de Fuentes Abiertas «Libertine».



En Argentina, la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 tuvo rasgos propios porque se combinó con una crisis previa de gran magnitud. El tomo 1 del libro aborda los siguientes interrogantes: ¿qué reconfiguraciones produjo esta doble crisis combinada y acumulativa en el perfil y composición de la estructura de clases? ¿Cómo afectó la doble crisis las dinámicas del mercado de trabajo, los sectores de actividad y la distribución del ingreso? ¿Cuáles fueron los principales segmentos de clase afectados en sus condiciones materiales de vida? ¿Qué acciones colectivas desplegaron los agentes sociales según pertenencia de clase para enfrentar los efectos de la emergencia socio-sanitaria en un marco de restricciones a la movilidad y la sociabilidad cara a cara? ¿En qué medida la intervención del Estado pudo amortiguar los efectos adversos de la misma? ¿Cómo se distribuyó y qué características tuvo la intervención estatal en distintos segmentos de la estructura social del país? ¿Cuáles fueron las orientaciones y posicionamientos sobre las políticas públicas durante la pandemia y del rol del Estado en general en materia distributiva según pertenencia de clase social?

El estudio reúne investigaciones basadas en una metodología cuantitativa que utilizan dos fuentes estadísticas: la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC) y la Encuesta Nacional sobre la Estructura social de Argentina y Políticas Públicas durante la pandemia por COVID-19, de diseño muestral probabilístico que por su cobertura y tamaño permite comparaciones inter-regionales. Investigadoras e investigadores de todas las regiones del país, de distintas disciplinas de ciencias sociales complementan miradas, perspectivas teóricas y técnicas de análisis de los datos, otorgándole a la publicación un carácter federal, colaborativo y diverso.

En el recorrido de capítulos las y los lectores pueden reconstruir diagnósticos sobre los efectos de la *doble crisis* en la estructura social de Argentina y, a la vez, hallar elementos para pensar el proceso de recuperación económica y recomposición social iniciado en 2021, actualmente en *disputa* tanto por la orientación de la estrategia de desarrollo como por la distribución de los frutos del crecimiento.

